

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE DERECHO

Departamento de Derecho Internacional Público y Privado



**EL EJERCICIO CONTINUO Y PACIFICO DE FUNCIONES
DE ESTADO COMO MODO DE ADQUISICIÓN DEL TÍTULO
TERRITORIAL EN LA JURISPRUDENCIA
INTERNACIONAL : EL PROBLEMA DE SU PRUEBA**

**MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR**

Ana Gemma López Martín

Bajo la dirección del doctor

Luis Ignacio Sánchez Rodríguez

Madrid, 2009

• ISBN: 978-84-692-6019-7

Rd 134208



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE



5311688171

TE
1096

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE DERECHO

DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
Y DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

**EL EJERCICIO CONTINUO Y PACIFICO DE FUNCIONES DE
ESTADO COMO MODO DE ADQUISICION DEL TITULO
TERRITORIAL EN LA JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL:
EL PROBLEMA DE SU PRUEBA**

TESIS QUE PRESENTA LA LIC.ANA GEMMA LÓPEZ MARTÍN
PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE DOCTOR EN DERECHO,
ELABORADA BAJO LA DIRECCIÓN DEL DR.LUIS IGNACIO
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, CATEDRÁTICO DE DERECHO
INTERNACIONAL PÚBLICO DE ESTA UNIVERSIDAD.

MADRID, JUNIO DE 1995.

DONATIVO



INDICE

ABREVIATURAS MAS UTILIZADAS	1
INTRODUCCION	7
SECCION 1ª: EL OBJETO DE ANALISIS.	8
SECCION 2ª: LA METODOLOGIA CIENTIFICA.	16
SECCION 3ª: LAS FUENTES DE CONOCIMIENTO.	20
 CAPITULO I: APROXIMACION A LOS ASPECTOS GENERALES	
DE LOS CONFLICTOS DE ATRIBUCION TERRITORIAL (I): CONFLICTOS DE	
ADQUISICION Y CONFLICTOS DE DELIMITACION.	25
SECCION 1ª: ESTUDIO CONCEPTUAL DE LOS CONFLICTOS DE	
ADQUISICIÓN TERRITORIAL.	28
A) El título adquisitivo: Alcance y valor del	
título	32
B) Análisis general de los distintos modos de	
adquisición del territorio	37
1. Modos derivados de una situación de hecho	38
2. Modos derivados de un título jurídico	45
SECCION 2ª: CONFLICTOS DE DELIMITACIÓN TERRITORIAL:	
LAS FRONTERAS.	49
A) El principio del "uti possidetis iuris" como	
principio aplicable a la delimitación del	
territorio:	54
1. Valoración contextual del origen y evolución del	
principio del "uti possidetis iuris"; su naturaleza	
jurídica. El "uti possidetis de facto"	55

II

2. Sucesión de Estados. La sucesión de Estados a tratados de fronteras.	61
--	----

B) Otros criterios igualmente utilizados en este contexto: Los criterios naturales y artificiales . .	66
--	----

SECCION 3ª: INTERRELACIÓN FRONTERAS-SOBERANÍA TERRITORIAL: CONEXIÓN ENTRE CONFLICTOS DE ADQUISICIÓN Y CONFLICTOS DE DELIMITACIÓN DEL TERRITORIO.	71
--	----

CAPITULO II: APROXIMACION A LOS ASPECTOS GENERALES DE LOS CONFLICTOS DE ATRIBUCION TERRITORIAL (II): EL PROCEDIMIENTO PROBATORIO DE LA SOBERANIA EN LOS CONFLICTOS TERRITORIALES. ASPECTOS GENERALES	79
---	----

SECCION 1ª: BREVE REFERENCIA A LA TEORÍA GENERAL DE LA PRUEBA:	80
---	----

A) Objeto de la prueba	81
----------------------------------	----

B) La carga de la prueba	85
------------------------------------	----

SECCION 2ª: PRINCIPALES ASPECTOS PROCEDIMENTALES DE LA MATERIA:	91
--	----

A) Orden y tiempo de sumisión de la prueba por las Partes	92
--	----

B) Presentación de la prueba	96
--	----

C) Admisión y valoración de la prueba por el órgano jurisdiccional.	101
--	-----

**SECCION 3ª: RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS
UTILIZADOS POR LOS ESTADOS PARA PROBAR SUS
ALEGACIONES: 104**

A) Importancia de la prueba documental 105

B) El recurso a la prueba testimonial: testigos
y expertos 110

C) La figura de la llamada 'affidavit' 113

CAPITULO III: LA OCUPACION DEL TERRITORIO Y EL EJERCICIO

CONTINUO Y PACIFICO DE FUNCIONES DE ESTADO 117

**SECCION 1ª: TEORIA GENERAL DE LA OCUPACION EFECTIVA
COMO MODO DE ADQUISICION DEL TERRITORIO. 118**

A) Evolución histórica en la conceptualización
de la ocupación y sus caracteres 120

B) Condiciones esenciales para una ocupación
legítima: 126

1. El Estado como sujeto ocupante. Eficacia de
las ocupaciones por particulares 127

a) Particulares 128

b) Compañías de Comercio y Colonización 131

2. Territorio susceptible de ocupación. La 'terra
nullius' 136

a) La expresión 'terra nullius' 136

b) Supuestos de 'terra nullius' 139

C) Elementos constitutivos de la ocupación: 145

1. "Animus occupandi", elemento espiritual 146

2. Efectividad de la ocupación 148

3. El principio de relatividad de la efectividad
y las situaciones territorialmente particulares. 153

IV

SECCION 2ª: LA TEORIA DE LOS ACTOS Y SU INCIDENCIA EN LA OCUPACION EFECTIVA	156
A) Los actos de Estado, propiamente dichos, como elemento constitutivo de la ocupación efectiva. Sus manifestaciones.	160
B) Los actos de personas privadas como manifestación de las efectividades	173
C) El valor de la actividad eclesiástica en la determinación de la efectividad	179
D) Otras manifestaciones del poder estatal: las compañías colonizadoras.	183

CAPITULO IV: EL PAPEL DE LAS EFECTIVIDADES EN LA

DELIMITACION DEL TERRITORIO SEGUN EL 'UTI POSSIDETIS

IURIS'	187
-------------------------	------------

SECCION 1ª: RELACIONES DIALECTICAS ENTRE EFECTIVIDADES Y "UTI POSSIDETIS IURIS"	189
--	------------

A) La doctrina del Tribunal Internacional de Justicia al respecto:	191
1.El asunto de la delimitación fronteriza entre Burkina Faso y Mali como punto de partida en el análisis de sus interacciones.	192
2. El asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras, avance del T.I.J. en el estudio de las vinculaciones de ambas técnicas.	198
3. La práctica judicial posterior: la controversia territorial entre la Jamahiriya Arabe Libia y Chad	205
B) Análisis de la jurisprudencia arbitral en el ámbito de esta mutua interacción.	208
C) La decisión en equidad como relación dialéctica entre 'uti possidetis iuris' y efectividades	226

SECCION 2ª: PRECISION DEL 'UTI POSSIDETIS IURIS' EN AUSENCIA DE TITULO COLONIAL	234
A) Los títulos jurídicos no emanados de Potencia colonizadora como medio de precisión del 'uti possidetis iuris'	235
B) Importancia de la aquiescencia y la doctrina de los actos propios en este ámbito.	242
C) El ejercicio de funciones de Estado como medio de prueba supletorio	253
D) El valor de la cartografía en las controversias de delimitación del territorio	258

CAPITULO V: LA PRUEBA DE LAS EFECTIVIDADES EN LA JURISPRUDENCIA DEL T.IJJ.	267
---	------------

SECCION 1ª: LA PRUEBA EN LOS CONFLICTOS DE ADQUISICION DEL TERRITORIO	270
A) Actos de carácter estatal:	276
1. Ejercicio de jurisdicción penal	276
2. Ejercicio de jurisdicción civil	278
3. Actos de administración central y local	279
4. Actividad legislativa	286
5. Actos de defensa: fuerzas armadas y de policía.	287
6. Fiscalidad.	289
7. Actos registrales	289
8. Educación	290
9. Relaciones diplomáticas	290
10. Disposición administrativa sobre bienes inmuebles.	291
11. Sistema de concesiones y ejercicio de monopolios estatales	292
12. Obras públicas.	292
B) El despliegue de actividad privada.	293
1. Ejercicio de comercio	294
2. Asentamiento, propiedad privada y posesión física de inmuebles.	294
3. Celebración de contratos.	295

4. Extracción y explotación de recursos naturales.	296
5. Expediciones científicas.	297

C) Otros actos alegados: la actividad eclesiástica y de las Compañías de Comercio y Colonización.	297
---	-----

SECCION 2ª: LA PRACTICA JURISPRUDENCIAL EN LOS CONFLICTOS DE DELIMITACION 300

A) Los actos de carácter estatal:	306
1. Ejercicio de jurisdicción penal	307
2. Ejercicio de jurisdicción civil	309
3. Actos de Administración central y local	310
4. Actividad legislativa	316
5. Fuerzas armadas y de policía.	317
6. Sistema electoral	319
7. Fiscalidad.	320
8. Actos de registro	321
9. Educación pública	322
10. Disposición administrativa sobre bienes inmuebles.	323
11. Sistema de concesiones y ejercicio de monopolios estatales	325
12. Obras públicas.	325
13. Estudios cartográficos.	326

B) Actividades de carácter privado	328
--	-----

C) Otro tipo de actividad: la autoridad eclesiástica	329
--	-----

SECCION 3ª: LOS RESULTADOS DE LA PRACTICA JUDICIAL RESPECTO A LAS EFECTIVIDADES 330

A) Efectividades que han sido retenidas:	332
1. Actos de carácter estatal admitidos como prueba	333
2. Actos de particulares con valor probatorio.	340
3. Otras actividades que se tienen en consideración.	341

B) Efectividades que han sido rechazadas	342
1. Actividad estatal rechazada	343
2. Actividad privada que se desestima.	348
3. Otras pruebas presentadas que no se admiten	348

C) Reflexiones finales	349
----------------------------------	-----

CAPITULO VI: EL PROBLEMA DE LA PRUEBA DE LAS EFECTIVIDADES

EN LA JURISPRUDENCIA ARBITRAL 357

SECCION 1ª: ANALISIS DE ESTA CUESTION DESDE LOS
CONFLICTOS DE ADQUISICION DEL TERRITORIO 360

A) Actos de carácter estatal:	365
1. Actos de administración central y local	367
2. Actividad legislativa	370
3. Actos de defensa: fuerza armada y de policía. . .	371
4. Fiscalidad.	373
5. Relaciones diplomáticas	373
6. Sistema de concesiones y ejercicio de monopolios estatales	375
7. Estudios cartográficos y otras pruebas geográficas.	376
 B) Actos de derecho privado:	378
1. Asentamiento, propiedad privada y posesión física de inmuebles.	378
2. Extracción y explotación de recursos naturales. .	379
 C) Otro tipo de actos alegados: el establecimiento de las Compañías de Comercio y Colonización y la Iglesia.	380
1. Convenios con los jefes nativos	381
2. Fuerza armada y de policía.	381
3. Jurisdicción criminal	382
4. Fiscalidad.	383

SECCION 2ª: LA PRACTICA ARBITRAL EN LOS
CONFLICTOS DE DELIMITACION 384

A) El problema de la prueba del ejercicio de soberanía en la delimitación equitativa.	386
1. Actividad de carácter estatal	391
2. Actos de particulares	406
3. Otros actos también invocados	407
 B) El problema en los conflictos regulados por el Derecho internacional	410
1. Actos de tipo estatal	415
2. Actos realizados por particulares	425

SECCION 3ª: LOS RESULTADOS QUE LA PRACTICA ARBITRAL NOS DA RESPECTO DE LA VALORACIÓN DE LAS EFECTIVIDADES	427
A) Efectividades que han sido retenidas:	428
1. Actos de carácter estatal admitidos como prueba	428
2. Actividad privada con valor probatorio.	436
3. Otros actos igualmente admitidos como prueba	437
B) Efectividades que no han sido admitidas como prueba:	439
1. Actos estatales rechazados.	439
2. Actos realizados por particulares no considerados	443
3. Otros actos rechazados como prueba.	444
C) Reflexiones finales	445
 CAPITULO VII: PROYECCION EN EL TIEMPO DE LAS EFECTIVIDADES	 451

SECCION 1ª: DESPLIEGUE EN EL TIEMPO Y PROBLEMAS INHERENTES DE CONTINUIDAD: AMBITO OPERATIVO DE LA REGLA DE DERECHO INTERTEMPORAL EN LAS EFECTIVIDADES.	453
A) Delimitación del problema intertemporal: el principio de no retroactividad en los contenciosos de atribución del territorio	455
B) La aplicación de las reglas "ratione temporis" como principio rector.	469

SECCION 2ª: UN PROBLEMA PROCESAL EN LA VALORACION JURISPRUDENCIAL DE LAS EFECTIVIDADES: LA CUESTION DE LA FECHA CRITICA.	477
A) La valoración de las efectividades durante el período crítico	483
B) Importancia de las efectividades en el período inmediatamente posterior a la fecha crítica.	491
C) Incidencia de las efectividades, anteriores y posteriores a la descolonización, en el caso del "uti possidetis iuris"	501
 SECCION 3ª: VALORACION DE LAS EFECTIVIDADES EN LOS SUPUESTOS DE FIJACION DE "STATU QUO"	 509
A) Aproximación conceptual a la figura jurídica del "statu quo".	511
B) Las efectividades y el "statu quo" en los conflictos de atribución territorial	518
 CONCLUSIONES	 533
 ANEXOS:	 549
I. ANEXO DE BIBLIOGRAFIA	551
1. Obras Generales	551
2. Obras y Estudios monográficos	555
3. Artículos de revistas especializadas y trabajos en obras colectivas.	567
 II. ANEXO DE JURISPRUDENCIA	 589
1. Jurisprudencia del T.P.J.I.	589
2. Jurisprudencia del T.I.J.	590
3. Jurisprudencia arbitral	591

III. ANEXO DE TRATADOS	596
IV. ANEXO CARTOGRAFICO.	599
1. Isla de Aves.	600
2. Isla de Bulama.	601
3. Bahía de Delagoa.	602
4. Delimitación fronteriza entre Colombia y Venezuela.	603
5. Frontera de Misiones.	604
6. Fronteras de las distintas Guyanas.	605
7. Delimitación fronteriza entre Costa Rica y Panamá y Colombia y Costa Rica	606
8. Delimitación fronteriza en la zona de Oeil de la Mer	607
9. Frontera de la Cordillera de los Andes.	608
10. Frontera entre Honduras y Nicaragua	609
11. Delimitación fronteriza entre Bolivia y Perú.	610
12. Walvis Bay.	611
13. Isla de Palmas.	612
14. Isla de Clipperton.	613
15. Frontera entre Honduras y Guatemala	614
16. Groenlandia	615
17. Delimitación fronteriza del Chaco Boreal.	616
18. Islas de Minquiers y Ecrehous	617
19. Templo de Preah Vihear.	618
20. Delimitación fronteriza en el Río Encuentros.	619
21. Rann de Kutch	620
22. Sahara Occidental	621
23. Región del Canal Beagle	622
24. Delimitación fronteriza en la región del Canal Beagle	623
25. Frontera entre Burkina Faso y la República de Mali	624
26. Frontera en el área de Taba	625
27. Frontera entre Honduras y El Salvador	626
I. Sector de Tepangüisir.	627
II. Sector de Cayaguanca	628
III. Sector de Sazalapa.	629
IV. Sector de Naguaterique	630
V. Sector de Dolores.	631
VI. Sector de Goascorán.	632
VII. Islas de Meanguera, Meanguerita y el Tigre.	633
28. Frontera entre Libia y Chad (reivindicaciones de las Partes	634
29. Frontera entre Libia y Chad (sentencia)	635
30. Frontera en la región de la Laguna del Desierto	636

ABREVIATURAS MAS UTILIZADAS

A.A.D.I.	Anuario Argentino de Derecho Internacional
A.D.I.	Anuario de Derecho Internacional
A.F.D.I.	Annuaire Française de Droit International
A.H.A.A.R.	American Historical Association Annual Reports
A.J.C.L.	American Journal of Comparative Law
A.J.I.C.L.	African Journal of International and Comparative Law
A.J.I.L.	American Journal of International Law
A.M.R.I.	Anuario Mexicano de Relaciones Internacionales
A.S.D.I.	Annuaire Suisse de Droit International
A.Y.I.L.	Australian Yearbook of International Law
Anglo American L.R.	Anglo American Law Review
Annu. de Droit Marit.et Aér. . .	Annuaire de Droit Maritime et Aérien
Annuaire de l'I.D.I.	Annuaire de l'Institut de Droit International
Annuaire de la C.I.J..	Annuaire de la Cour Internationale de Justice
Anuario de la C.D.I.	Anuario de la Comisión de Derecho Internacional
Anuario I.H.L.A.D.I.	Anuario del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional
ArchVR	Archiv des Völkerrechts

Australian L.J..	Australian Law Journal
B.A.C.P.S.	Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales
B.Y.B.I.L.	British Yearbook of International Law
B.F.S.P.	British and Foreign State Papers
C.D.I.	Comisión de Derecho Internacional
C.I.L.S.A.	Comparative and International Law Journal of Southern Africa
Camb.L.J..	Cambridge Law Journal
Case W.R.J.I.L..	Case Western Reserve Journal of International Law
Chin.Yb. of Int.L. and Aff.. . .	Chinesse Yearbook of International Law and Affairs
Ga.J.I.C.L..	Georgia Journal of International and Comparative Law
G.Y.I.L.	German Yearbook of International Law
Geo.Journ.	Geographic Journal
Geo.Rev.	Geographic Review
Harvard I.L.J.	Harvard International Law Journal
I.C.L.Q.	International and Comparative Law Quarterly
I.L.M.	International Legal Materials
I.L.R.	International Law Reports
Indian J.I.L..	Indian Journal of International Law
Indian Y.I.L..	Indian Yearbook of International Law

Israel L.R..	Israel Law Review
J.D.I.	Journal du Droit International (Clunet)
K.G.Z.	Kokusaiho Gaiko Zassi
L.Q.R.	The Law Quarterly Review
Modern L.R..	Modern Law Review
N.I.L.R.	Netherlands International Law Review
N.R.G.T.	Nouveau Recueil Général des Traités
N.Y.I.L.	Netherlands Yearbook of International Law
N.U./ U.N.	Naciones Unidas
O.U.A.	Organización para la Unidad Africana
P.S.Q.	Political Science Quarterly
P.Y.I.L.	Polish Yearbook of International Law
Po.W.Aff..	Polish Western Affairs
R. des C.. . . .	Recueil des Cours de l'Academie de Droit International de La Haye
R.A.D.I.C.	Revue Africaine de Droit International and Comparative
R.B.D.I.	Revue Belge de Droit International
R.D.C.S.	Revista de Derecho y Ciencias Sociales
R.D.I.	Revue de Droit International
R.D.I.L.C.	Revue de Droit International et Legislation Comparée
R.D.I.S.D.P.	Revue de Droit International, de Sciences Diplomatiques et Politiques

R.D.P.S.P.	Revue de Droit Public et de la Science Politique
R.E.D.I.	Revista Española de Derecho Internacional
R.Egyptienne D.I..	Revue Egyptienne de Droit International
R.G.D.I.P.	Revue General de Droit International Public
R.G.L.J.	Revista General de Legislación y Jurisprudencia
R.I.A.A.	Reports of International Arbitral Awards
R.J.P.E.M.	Revue Juridique, Politique et Economique du Maroc
R.J.P.I.C.	Revue Juridique et Politique, Indépendance et Cooperation
R.M.D.E.D.	Revue Marocaine du Droit et d'Economie du Développement
R.P.I.	Revista de Política Internacional
R.S.A.	Recueil des Sentences Arbitrales
Rev.Colegio Abogados de B.A. . .	Revista del Colegio de Abogados de Buenos Aires
Rev. d'Hist. Dipl.	Revue d'Histoire Diplomatique
Riv.Dir.Int.	Rivista di Diritto Internazionale
S.A.Y.I.L.	South African Yearbook of International Law
S.D.N.	Sociedad de Naciones
S.F.D.I.	Société Française de Droit International
T.I.J./ I.C.J.	Tribunal Internacional de Justicia

T.P.J.I./ P.I.C.J.	Tribunal Permanente Justicia Internacional	de
Texas I.L.J.	Texas International Journal	Law
U.S.	United States	
Vand.J.Transnat'l.L.	Vanderbit Journal Transnational Law	of

INTRODUCCION

Nos enfrentamos en las primeras páginas de nuestro trabajo a una labor de inexcusable ejecución, cuál es la aproximación conceptual a diferentes aspectos generales previos que plantea el acometimiento de una investigación científica.

En efecto, tal y como hemos tenido ocasión de comprobar al proceder a la lectura previa de distintas tesis doctorales que nos sirvieran de orientación, la primera tarea que se impone al abordar la elaboración de un trabajo de este tipo es la de identificar con claridad el objeto científico que va a ser analizado, sus características singulares o diferenciadoras. El conocimiento de tal objeto ha de estar articulado y racionalizado a través de la elaboración de un corpus conceptual y unas hipótesis que deberán ser confirmadas a posteriori a través de la experiencia; dicho ensamblaje o estructura interna nos servirá de orientación acerca de la forma y orden de utilización de estos conceptos que resulten más útiles para ampliar y profundizar el conocimiento del objeto. Para conseguir la finalidad perseguida, ha de intentar hallarse un método, una heurística, propio o suministrado entre las diferentes opciones que ofrece la ciencia jurídica o el *conjunto de las ciencias sociales*, que contribuya a analizar, clarificar y ordenar el objeto de nuestro estudio.

Tal es, pues, el lance ante el que nos enfrentamos, el cual constituye un

auténtico desafío dado que supone afrontar aspectos hasta ahora por nosotros - confesamos- desatendidos.

SECCION 1ª: EL OBJETO DE ANALISIS

En el presente trabajo analizamos las llamadas 'efectividades', es decir, el ejercicio continuo y pacífico de funciones de Estado sobre el territorio, y más concretamente un problema fundamental que se plantea en relación a las mismas. Dicho problema no es otro que el de su prueba ante los órganos jurisdiccionales cuando éstas se alegan como modo de adquisición del título territorial.

La elección de este objeto (llevada a cabo con el consenso del Director de la tesis) fue resultado de la combinación de distintos factores que creemos deben aunarse en toda investigación científica, como son, la novedad doctrinal, actualidad en la práctica, interés real y relevancia en el conjunto del ordenamiento internacional. El tema de la adquisición del territorio es, sin duda, un clásico del ordenamiento internacional que aparece ligado a la propia existencia del Estado, tal y como lo concebimos hoy día. A nadie se le escapa el papel primordial que ha ocupado el territorio en la propia evolución de la Sociedad internacional, al ser considerado como la máxima expresión de poder, de ahí el interés de los Estados por regular expresamente su adquisición. No obstante, esa misma transformación de la Sociedad internacional que ha marcado la evolución del propio ordenamiento

internacional, no ha pasado desapercibida a la regulación del derecho territorial que ha visto trocar paulatinamente su estructura. De una incipiente regulación que basaba la adquisición del título territorial en el mero acto físico del descubrimiento, el derecho internacional en la materia ha ido evolucionando hasta relegar a los modos de adquisición tradicionales y transformar a la posesión y administración del territorio -elemento del tradicional modo de la ocupación, convertido en eje central del continuo y pacífico ejercicio de funciones estatales- en el orden de prioridad en la determinación de la adquisición de la soberanía territorial, por encima de consideraciones sociales, económicas y geográficas, que no pueden aisladamente fundar un título sobre el territorio. Por su parte, los Estados han ido acomodando sus conductas a esta realidad, poniendo así de manifiesto la plena actualidad y vigencia del tema.

En esta línea, el ámbito que mejor corrobora la importante evolución del Derecho internacional en la materia, así como la oportunidad en su tratamiento, es el de la *práctica internacional*, y más concretamente, la *práctica jurisdiccional*. La posición adoptada por los Estados enfrentados a conflictos territoriales -ya sean de adquisición, ya sean de delimitación del territorio-, a la hora de fundamentar sus alegaciones, e incluso, la propia decisión adoptada, son buena muestra del cambio operado. Desde el inicial asunto del Río St.Croix, que enfrentó en 1798 a Gran Bretaña y EE.UU., hasta el reciente de la Laguna del Desierto de 1994, entre Argentina y Chile, contamos con un torrente de decisiones arbitrales y judiciales¹

¹ Hasta un total aproximado de 66 controversias territoriales resueltas por vía jurisdiccional (53 sometidas a arbitraje y 13 a arreglo judicial), de las cuales tan sólo 9 son estrictamente de adquisición territorial, teniendo el resto como objeto específico la delimitación del territorio, aunque sin

que son un auténtico registro de la evolución producida, así como testimonio del hecho de que las controversias de adquisición y delimitación territorial no son rémoras del pasado sino conflictos de la más candente actualidad que merecen toda la consideración, tanto de árbitros, como del propio T.I.J. Buena prueba de la mencionada actualidad del tema son, igualmente, los numerosos contenciosos territoriales abiertos hoy día y en espera de una justa y pacífica solución².

Por las razones apuntadas, el estudio que ahora abordamos hace relación directa con el ejercicio continuo y pacífico de funciones de Estado pero centrado en el ámbito estrictamente jurisprudencial, entendiendo por jurisprudencia los laudos, decisiones y opiniones consultivas (quedan fuera del marco 'jurisprudencia', las opiniones individuales y disidentes de los jueces o árbitros). Análisis que conlleva a su vez el estudio de un problema inherente de índole procesal que preocupa, tanto a los propios Estados, como a los especialistas en la materia: el de su prueba. Efectivamente, teniendo en cuenta que los hechos de las controversias territoriales son generalmente confusos y que es probable que los Estados

menoscabo de referencias a la adquisición (vid. al respecto, el anexo de jurisprudencia).

² En este sentido nos remitimos a la pormenorizada obra DAY, A.J. (ed), Border and Territorial Disputes, Keesing's Reference Publications, Essex, 1982.

Se recogen en este trabajo hasta un total de setenta conflictos territoriales plenamente identificados y pendientes de solución (si bien algunos de ellos ya están zanjados, como el del Canal de Beagle, Chad y Libia o El Salvador y Honduras, y otros en espera de sentencia judicial, como es el caso del conflicto que enfrenta a Qatar y Bahrein). Esta detallada relación de casos abiertos corrobora la ya aludida actualidad de los temas referentes a la solución de conflictos territoriales, como el que ahora emprendemos en relación a la adquisición del título territorial.

Es obvio que a los conflictos reseñados en su día por Day, hay que añadir otros posteriores que mantienen igualmente su carácter de conflicto abierto y que confirman la actualidad de la materia; baste mencionar en este sentido, por su relevancia y por las importantes consecuencias internacionales que está teniendo -sobre todo de índole humanitaria-, el conflicto de la ex-Yugoslavia.

invoquen como título territorial la posesión efectiva, la cuestión concomitante que surge para éstos y sobre la que no hay reglas prefijadas es la de la demostración de dicha posesión.

El análisis que nosotros intentamos pretende, por un lado, un estudio global de todos los medios de prueba presentados por las Partes con el fin de seguir con rigor el proceso evolutivo acaecido en la materia y establecer su resultado, que deberá estar presidido por criterios flexibles y no formalistas; por otro, este análisis persigue la identificación de los principios jurídicos que los tribunales internacionales han aplicado al valorar la prueba de soberanía presentada en asuntos concernientes a la atribución territorial, a los fines de basar sus decisiones. Esperamos que ciertos principios esenciales de decisión puedan ser abstraídos de la experiencia de los órganos jurisdiccionales internacionales en dicha actuación. Estos principios de decisión deben resultar aplicables caso por caso si son representativos de una jurisprudencia internacional, de acuerdo con la cual esperamos identificar cuáles han sido los criterios de solución que los Tribunales han desarrollado y aplicado en cada supuesto. El resultado de tal desarrollo y aplicación establecerá las pautas a seguir para casos futuros. De esta forma utilizaremos la jurisprudencia, no en su función de elaboración y desarrollo de las reglas procesales en materia de arreglo de controversias, sino en la de constitución de precedentes que repetidos o sostenidos en su contenido por distintos tribunales llegan a influir en decisiones posteriores y, por ello mismo, también en la conducta

de los Estados³.

Dentro de este ámbito de delimitación y encuadre del objeto de estudio, queremos advertir, igualmente, que en este trabajo nosotros nos enfrentamos sólo con el análisis de la problemática anteriormente advertida en el marco de los conflictos de adquisición de la superficie terrestre; excluimos, pues, aquellos conflictos que hacen referencia al espacio marino, ya sean de adquisición, ya de delimitación. La razón que justifica esta exclusión no descansa en la posición sostenida por Sir L.Heald⁴, para quien "la delimitación de las aguas territoriales no tiene nada que ver con la cuestión de la soberanía sobre la tierra, pues son dos cosas completamente diferentes y es mal derecho compararlas", pues nosotros entendemos que los problemas relativos a la determinación de la soberanía o jurisdicción sobre el lecho marino, el subsuelo y ciertas partes limitadas del alta mar, así como, en algunos casos, ciertas cuestiones referidas a la delimitación de espacios marinos, suelen ser similares a los que surgen en relación a la superficie terrestre. Creemos, incluso, que los mismos principios que se aplican a la tierra, y aquí nosotros incluiríamos fundamentalmente el ejercicio continuo y pacífico de

³ Sobre esta interesante cuestión de las funciones que se le atribuyen a la jurisprudencia, que excede el marco de nuestro estudio, vid., entre otros, ORTEGA CARCELEN, M.C., "Análisis del valor creador de la jurisprudencia en el Derecho Internacional", R.E.D.I., 1988.2, pp.55-87; PASTOR RIDRUEJO, J.A., "La jurisprudencia del T.I.J.", en Estudios sobre el T.I.J., Zaragoza, 1967, pp.15-37; o las páginas que dedica al tema REMIRO BROTONS, A., en su libro Derecho Internacional público, 1.Principios fundamentales, Madrid, 1982, pp.257-275.

⁴ Vid. Asunto de Minquiers y Ecrehous, I.C.J.Pleadings, 1953, vol.II, p.286.

funciones estatales, pueden ser extendidos como criterio a retener no sólo en la adquisición de ciertos espacios marinos, sino también en su delimitación⁵. Se trataría, pues, de una cuestión de concreción del objeto de análisis, en la creencia que el tratamiento de las efectividades en los conflictos de adquisición y delimitación marítima constituye por sí mismo objeto específico de otro trabajo monográfico distinto.

Pero no sólo excluimos de nuestro trabajo -por las razones indicadas- los conflictos relativos a la adquisición y delimitación de espacios marítimos, sino que al centrarnos en el estudio del ejercicio continuo y pacífico de funciones de Estado en la jurisprudencia internacional relativa a las controversias de adquisición y delimitación del territorio, estamos relegando el análisis de otros conflictos que también suponen la plena aplicación de las efectividades, pero cuya solución no se ha llevado ni por la vía judicial ni por la arbitral. Nos estamos refiriendo a las controversias de este tipo resueltas por medios no jurisdiccionales. Por esta razón no abordaremos, entre otros, el caso de la Isla de Lobos, entre EE.UU. y Perú⁶, resuelto a través de la negociación directa entre las Partes que llevó a la renuncia de EE.UU. a sus pretensiones sobre la mencionada isla, una vez que Perú probó

⁵ Esta misma opinión aparece recogida por parte de la doctrina; tal es el caso, entre otros, de THIRLWAY, H., "The Law and Procedure of the International Court of Justice: 1960-1989", B.Y.B.I.L., 1993, pp.1-54, especialmente las páginas 30 a 34, en las que aborda directamente esta interrelación que apuntalamos.

⁶ En este caso, el Secretario de Estado Americano, M. Webster, renuncia a su pretensión sobre Lobos a través de una nota de 21 agosto 1852, en la que se expresa en los siguientes términos: "the Peruvian Government proved that... its right to the islands rested... upon substantial and unequivocal acts of jurisdiction and possession exercised over them from time immemorial", vid. MOORE, international Arbitrations, vol.I, p.266.

claramente un ejercicio largo y continuo de jurisdicción sobre Lobos; de forma análoga fue resuelto el conflicto entre EE.UU. y Haití en la Isla de Navassa⁷, en el que prevaleció esta vez la reclamación estadounidense al quedar probada la actual posesión de la isla por EE.UU. Tampoco será objeto de análisis en detalle (aunque su referencia en determinados momentos sea inevitable) la mediación del Papa León XIII en 1885, entre España y Alemania, respecto de las Islas Carolinas y Palaos, que decidió la atribución de la soberanía de dichas islas a España que ostentaba el título por descubrimiento, aunque con la obligación de ejercer una continua y pacífica posesión sobre las mismas⁸.

Igualmente, se escapan del ámbito de nuestro estudio los conflictos de atribución territorial que están pendientes de solución, aunque en ellos se haga invocación por una o ambas Partes de alegaciones fundamentadas en el ejercicio de posesión efectiva, como es el caso de las Islas Spartley, la cuestión de las islas Kuriles, el conflicto entre Qatar y Bahrein (pendiente de solución ante el T.I.J.) o el recientemente revivido conflicto fronterizo entre Ecuador y Perú⁹; lo cual no obsta para que en un momento posterior, si se llega a una solución de los mismos por vía jurisdiccional, sean objeto de nuestra atención.

⁷ En esta ocasión el Secretario de Estado Americano, M.Fish, por una nota de 31 diciembre 1872, declara que como Haití no ha podido presentar la prueba de una actual posesión y ejercicio de jurisdicción sobre la isla, su pretensión es irrefutable, pues "discovery alone is not enough to give dominion and jurisdiction to the sovereign or government of the nation to discoverer belongs; such discovery must be followed by possession", vid. ibidem, p.266.

⁸ Vid. GARCIA ARIAS, Corpus Iuris Gentium, Zaragoza, 1968, p.342.

⁹ Para un estudio de los conflictos territoriales aún pendientes, vid. DAY, A.J., (ed), op.cit.

Finalmente, para una mayor profundización y una visión más completa de nuestro trabajo entendemos que va a ser necesario abordar el análisis de ciertos temas que, si bien no constituyen explícitamente el objeto del estudio son colaterales al mismo y abundan en una mayor comprensión del mismo. Esta es la razón de nuestro primer capítulo que con un carácter puramente introductorio va a adentrarnos en las cuestiones más generales que suscitan, tanto los propios conflictos de adquisición y delimitación territorial, como la misma problemática de la prueba en el proceso internacional. Con idéntico razonamiento analizaremos en el capítulo tercero los conflictos basados en el uti possidetis iuris desde la óptica de la posible interacción que puede producirse entre este principio y las efectividades, en aquellos casos en que encontremos alegaciones basadas en una combinación de situaciones de hecho y título jurídico. Análoga razón justifica nuestro capítulo sexto, pues entendemos que no puede llevarse a cabo un completo examen de las efectividades sin tener en cuenta el elemento temporal. Este nos servirá de orientación al analizar los distintos actos de posesión efectiva alegados por los Estados, tanto para estudiar su adecuación a las exigencias de efectividad marcadas por el derecho de la época, como para comprender los límites temporales que las propias Partes se imponen en el proceso a efectos de presentación y valoración de la prueba de las efectividades alegadas.

Precisado el objeto de nuestro trabajo, queremos hacer resaltar finalmente

un dato importante a efectos de remarcar la oportunidad del mismo. Al abordar la realización de esta investigación y profundizar en las fuentes doctrinales de conocimiento que nos sirvieran de base para llevarla a cabo, hemos constatado la ausencia de un estudio que versara sobre el objeto elegido. Ciertamente es que no faltan trabajos sobre los distintos temas colaterales reseñados anteriormente, de igual forma que es muy abundante la bibliografía que analiza 'individualmente' cada uno de los asuntos en los que ha sido objeto de alegación y aplicación, en su caso, el ejercicio continuo y pacífico de funciones de Estado; aunque, extrañamente, muy pocos de estos trabajos pertenecen a la doctrina española. Sin embargo, se percibe en la literatura jurídica comparada un vacío de estudios como el que ahora abordamos, esto es, un estudio que analice globalmente y de forma pormenorizada el problema de la prueba de la efectividad en toda la jurisprudencia internacional existente sobre la materia.

SECCION 2ª: LA METODOLOGIA CIENTIFICA

Con el fin de lograr ampliar el conocimiento del objeto, es preciso abordar el mismo con un método adecuado que suponga el cumplimiento de las funciones que, como indica Schwarzenberger¹⁰, debe perseguir toda metodología científica:

¹⁰ Vid. SCHWARZENBERGER, G., The Inductive Approach to International Law, Londres, 1965, p.8. En una línea similar, Ch. de Visscher afirma que el método "es el aspecto de nuestra disciplina que se interesa en desprender, mediante una investigación paciente y con el máximo de exactitud, los datos

primero, el análisis y la sistematización del objeto estudiado; luego, su interpretación funcional; y, por último, el análisis crítico y la aportación constructiva del mismo. Pues, como bien indica el prof. Jiménez Piernas¹¹ -y lo hace siguiendo el pensamiento que en su día marcará Descartes en su Discurso del Método-, "el estudio reflexivo de una ciencia va siempre precedido de una introducción metodológica".

Creemos interesante advertir, en este sentido, que hemos asistido en los últimos años a una desmitificación del problema de la metodología científica motivada, en gran medida, por una relativa convergencia de posiciones al respecto. Esta circunstancia parece apuntar a un reconocimiento general del pluralismo metodológico, lo que nos lleva a apostar decididamente por una metodología interdisciplinaria, afirmación no identificable con el sincretismo metodológico, es decir, con la ausencia real de método¹², pues sabemos que los contenidos

históricos y sociales que forman el contenido vivo, la materia de la regla del derecho. En la base de todo método válido está la observación, la sumisión del objeto" (vid. "Méthode et système en Droit International", R. des C., n°138, 1973-I, p.73)

¹¹ Vid. JIMENEZ PIERNAS, C., "Reflexiones sobre el método del Derecho Internacional Público", en Hacia un nuevo orden internacional y europeo. Estudios en homenaje al prof. Díez de Velasco, Madrid, 1993, p.377.

¹² Mantenemos de esta forma, la tesis sustentada por L.I.SANCHEZ RODRIGUEZ (cfr. de este autor, Memoria sobre el concepto, el método y las fuentes del Derecho internacional público, Oviedo, 1978; Proyecto docente e investigador, Oviedo, 1986; y Proyecto docente e investigador, Madrid, 1990) y seguida por numerosos autores (cfr. entre otros, PINOL I RULL, J., "La categorización de la ciencia del derecho como conocimiento preteórico: consecuencias para el profesor de Derecho internacional público", en Hacia un nuevo orden internacional y europeo. Estudios en homenaje al prof. Díez de Velasco, Madrid, 1993, pp.587-603).

Frente a la línea interdisciplinaria algunos autores apuntan, en la creencia de su insuficiencia, hacia el llamado método transdisciplinar que representa que "el contacto y la cooperación entre las diversas disciplinas tiene lugar, sobre todo, cuando estas disciplinas han terminado de adoptar un mismo método de investigación" (vid. BOTTOMORE, T.B., "Introducción", en VVAA, Interdisciplinariedad y Ciencias Humanas (trad. de J.G. Pérez Martín), Madrid, 1983, p.11).

acumulados sin un método son datos brutos no articulados en un sistema y, por tanto, incomprensibles. De esta forma, creemos que no existe un método exclusivo y excluyente, sino que, por el contrario, la realización y concreción de las tareas que implica la metodología científica ha sido posible gracias a la utilización y combinación de una pluralidad de métodos que permiten obtener, de esta forma, una comprensión global y más adecuada del objeto estudiado; y también que, el Derecho internacional, por su carácter conexo con otras ciencias no jurídicas, necesita de una aproximación interdisciplinar, esto es, de un análisis estructural de las posibles relaciones entre fenómenos y procesos de consolidación o cambio en un sector del ordenamiento internacional, así como sus efectos directos o indirectos en otro u otros sectores. Lo que prueba que el ordenamiento internacional es un conjunto de sectores y campos relacionados entre sí y dotados de una cierta coherencia interna¹³.

No obstante, la utilización de los enfoques plurimetodológicos no debe hacernos perder de vista la necesidad de utilizar predominantemente métodos jurídicos, ya que el estudio lo realizamos desde la perspectiva del Derecho internacional público y el Derecho es ante todo una Ciencia jurídica por lo que toda investigación en torno a la misma ha de hacer primar sus métodos específicos, aun sin excluir otros diferentes.

¹³ Cfr. JIMENEZ PIERNAS, C., "Reflexiones sobre el método...", op.cit., p.386.

De esta forma, podemos afirmar que la definición de los medios de adquisición del conocimiento científico gira en nuestro caso, en torno a dos elementos.

El primero establece que cualquier aproximación se basa en la libre observación de la realidad internacional, al margen de cualquier concepción doctrinal previa. Se trata de la utilización del método inductivo o empírico, el cual favorece la determinación o identificación de las normas mediante la observación de su vigencia efectiva en la Sociedad Internacional, de su reconocimiento como tales por la práctica internacional. La razón fundamental de su utilización se debe a la naturaleza misma del trabajo, en el sentido de que todo él gira esencialmente en torno al análisis de la práctica de los Estados, de la práctica jurisprudencial, por lo que el método inductivo constituye un instrumento de trabajo imprescindible a los fines del estudio que pretendemos. Ello no quiere decir que se niegue utilidad a otras vías, en especial del método lógico o deductivo, que sería el segundo elemento epistemológico, con el que puede combinarse aquél y que lleva a la explicación de los caracteres del ordenamiento internacional.

Ígualmente, tampoco puede olvidarse la doble estructura que presenta el ordenamiento internacional y que se manifiesta también en nuestro trabajo. En efecto, junto a la estructura jurídico-formal, concretada en el método jurídico, existe otra socio-histórica, que no nos pasa desapercibida, ya que el derecho internacional público refleja el grupo social al que regula, las relaciones sociales básicas que determinan en un momento histórico determinado la normatividad

internacional.

SECCION 3ª: LAS FUENTES DE CONOCIMIENTO

Sin perjuicio de la exposición exhaustiva de este importante aspecto de la investigación al final de nuestro trabajo, creemos interesante hacer una previa referencia a las fuentes de conocimiento que hemos tenido que utilizar, las cuales, como consecuencia de la naturaleza misma del trabajo, tienen una procedencia diversa.

El núcleo central de las fuentes de conocimiento a las que hemos tenido que acudir viene constituido por las fuentes jurisprudenciales -corazón de la tesis-, limitadas exclusivamente a jurisprudencia internacional, si bien hemos recogido un caso de arbitraje no internacional que hemos incorporado a nuestra tesis por la importancia que para el objeto del trabajo reviste (se trata del asunto de la delimitación fronteriza entre los Emiratos de Dubai y Sharjah).

Al referirnos a jurisprudencia internacional estamos incluyendo tanto las sentencias del Tribunal Internacional de Justicia (T.I.J.) y de su predecesor el Tribunal Permanente de Justicia Internacional (T.P.J.I.), como los laudos de Tribunales y Comisiones arbitrales y de árbitros únicos. En este sentido hemos localizado un total aproximado de sesenta y seis sentencias que hacen referencia

a conflictos de adquisición y delimitación del territorio, de las cuales hemos manejado con profusión unos veintidós laudos arbitrales y nueve sentencias judiciales (sólo una del T.P.J.I.) para elaborar el núcleo central de la tesis, ya que las mismas hacen alusión, directa o indirectamente, al problema del ejercicio continuo y pacífico de funciones de Estado. Estas han sido localizadas tanto en colecciones de jurisprudencia tradicionales, como en revistas científicas especializadas, llegando a contar en algunos casos con el original mecanografiado de la sentencia.

En esta línea de jurisprudencia, y con el fin de hacer más exhaustivo nuestro análisis, hemos consultado y estudiado igualmente las memorias, contramemorias, réplicas y dúplicas -en su caso- presentadas por las Partes en cada uno de los asuntos manejados, al efecto de llevar a cabo nuestra labor de búsqueda de los distintos medios de prueba utilizados en relación a las efectividades. En relación con esta práctica conviene advertir de las dificultades con las que hemos tropezado a la hora de su localización, sobre todo en lo que se refiere a los arbitrajes. Efectivamente, mientras los documentos de la fase escrita y la fase oral ante el Tribunal Internacional de Justicia aparecen oportunamente recogidos (si bien en algunos casos tardíamente) por los Reports of Pleadings del Tribunal, en el caso de los arbitrajes dichos documentos están desperdigados y muy frecuentemente resultan de difícil acceso; de ahí la limitación con la que nos hemos visto obligados a trabajar en ese sentido.

Las fuentes convencionales son, en nuestro caso, de índole exclusivamente

bilateral y vienen referidas tanto a acuerdos o compromisos arbitrales y a tratados de paz y amistad, como a convenios o tratados de delimitación fronteriza. Presentan gran interés los primeros en cuanto marcan las pautas a seguir en el procedimiento, incluyendo cuestiones tan importantes como las relativas a la presentación y valoración de la prueba o las que determinan los principios de decisión en que debe fundamentarse el órgano jurisdiccional. También son destacables los últimos, sobre todo en aquellos casos en que aparecen invocados por alguna de las Partes en oposición a una pretensión basada en la posesión efectiva. El acceso a los mismos se ha visto facilitado por las distintas colecciones de tratados internacionales existentes a las cuales hemos tenido acceso.

En cuanto a las fuentes doctrinales, hemos consultado numerosas obras generales de la asignatura, nacionales y extranjeras, Cursos de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, monografías sobre los temas de la frontera, de la adquisición del territorio y otros temas conexos, así como innumerables artículos de revistas especializadas. De esta manera hemos podido obtener una visión más global del tema objeto de nuestro trabajo, así como establecer una toma de contacto con otras materias conexas con el mismo.

Esta tarea de recopilación doctrinal y jurisprudencial la hemos desarrollado, en nuestro país, en las Facultades de Derecho de la Universidad Complutense y de la Universidad Autónoma de Madrid, y de Alcalá de Henares, en la Biblioteca Nacional de Madrid, en la del Instituto de Cooperación Iberoamericana (I.C.I.), en

la del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.), y en la del Centro de Estudios Constitucionales. Para completar la misma, nos hemos trasladado a otras bibliotecas extranjeras, a efectos de consultar sus fondos bibliográficos y documentales. Hemos tenido así la oportunidad de consultar la Biblioteca de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, la de la Sede de Naciones Unidas en Ginebra y la del Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra.

CAPITULO I: APROXIMACION A LOS ASPECTOS GENERALES

QUE PRESENTAN LOS CONFLICTOS DE ATRIBUCION

TERRITORIAL (I): CONFLICTOS DE ADQUISICION Y CONFLICTOS

DE DELIMITACION DEL TERRITORIO.

Es una innegable realidad que los conflictos¹ territoriales constituyen, incluso hoy día, el más ingente volumen de disputas entre Estados² y son "the point of departure in settling most questions that concern international relations"³. Su frecuencia e importancia les han hecho merecedores de un tratamiento detallado en el ámbito del derecho internacional.

¹ Como precisión previa, debemos indicar que cuando nos referimos a 'conflicto' o 'controversia' (dispute, en inglés) estamos detectando la existencia de un desacuerdo, normalmente entre dos Estados (tal y como afirmó el T.P.J.I. en el asunto del Estatuto jurídico de Groenlandia Oriental, vid. C.P.I.J., serie A/B, nº53, 1933, p.46), sobre un punto de hecho o de derecho (recogiendo así la definición dada por el T.P.J.I. en el asunto de las Concesiones Mavrommatis en Palestina [vid. C.P.I.J., serie A, nº2, 19, p.11], y, posteriormente, matizada por el propio T.I.J., en asunto tales como el del dictamen sobre la interpretación de los tratados de paz con Bulgaria, Hungría y Rumania [cfr. I.C.J. Reports, 1950, p.74]; en idéntico sentido se ha manifestado igualmente la doctrina, baste citar a título ejemplificativo a BROWNLIE, I., African Boundaries. A Legal and Diplomatic Encyclopaedia, Londres, 1979, p.13). Tal desacuerdo, normalmente, se manifiesta por la presentación de una reclamación o protesta por uno de ellos, que cuenta con la oposición del otro Estado afectado.

² Sin duda alguna, la importancia esencial del territorio como elemento constitutivo del Estado (que ha sido amplia y unánimemente subrayada por la doctrina internacionalista, hasta llegar a afirmaciones como la de OPPENHEIM para quien 'a State without a territory is not possible', International Law, vol.I, Londres, 1953, p.407) justifica la frecuencia de disputas que tienen relación con él.

³ Cfr. SCHWARZENBERGER, G., "Title to territory: Response to a Challenge", International Law in the Twentieth Century, American Society of International Law, Nueva York, 1969, p.287.

Igualmente, existe una práctica unanimidad doctrinal⁴ en entender que los conflictos entre Estados relativos al territorio, están esencialmente referidos a problemas de atribución del mismo, esto es, de atribución de la soberanía territorial, entendiendo abarcados bajo esta rúbrica genérica -cuestión ésta que abordaremos en páginas posteriores-, tanto los relativos a la delimitación del territorio, como a su adquisición en sentido estricto. La importancia que sugiere este tipo de disputas se trasluce del hecho insoslayable, proclamado por Hill, de que "boundary disputes, conflicting claims to newly discovered lands, and invasions by expanding nations into territory of their weaker neighbours have been conspicuous among the causes of wars"⁵.

Por las razones apuntadas, creemos que es una obligación ineludible la de llevar a cabo un acercamiento al estudio de las cuestiones más generales que comportan ambos tipos de controversias. La aproximación al concepto de adquisición y delimitación, que se impone como una necesidad de primer orden, llevará implícita la de los mecanismos a través de los cuales operan ambas figuras jurídicas, en cuanto nos van a aportar una fuente explícita de dirección en la

⁴ No creemos necesario insistir en aportaciones explícitas al respecto, baste la referencia a un autor de la talla y el prestigio internacionalmente reconocido en la materia de LAPRADELLE (vid. La frontière. Etude de droit international, París, 1928, p.141).

⁵ Vid. HILL, N., Claims to territory in international law and relations, Londres, 1945, p.3.

Creemos importante destacar que una realidad como ésta, proclamada ya a mediados de siglo, sigue estando igualmente vigente en nuestra época; prueba de ello es el conflicto del Golfo entre Iraq y Kuwait, de 1990, e incluso el más reciente entre Ecuador y Perú, enero de 1995, cuya controversia fronteriza se remonta a comienzos del siglo XIX, y llegando a abarcar, incluso, un intento fallido de arbitraje.

resolución de tales disputas. En efecto, la determinación de las reglas que el derecho internacional recoge como posibles instrumentos de aplicación, tanto en la adquisición como en la delimitación del territorio⁶, va a situarnos ante las diferentes opciones que el órgano jurisdiccional que sea llamado para conocer de este tipo de conflictos (ya sea arbitral o judicial), encontrará como punto de referencia para su decisión final -instrumentos que, por otra parte, suelen aparecer recogidos en los correspondientes acuerdos o compromisos de solución entre las Partes-.

Por otro lado, al situarnos en el plano de solución jurisdiccional de esta clase de conflictos surge una cuestión adyacente, íntimamente conexiónada con la ya mencionada, la del proceso probatorio general que resultará de aplicación respecto de las correspondientes alegaciones de las Partes para hacer válido su título.

Refiriéndonos en concreto, dentro de los aspectos generales que presentan los conflictos de atribución territorial, a los relativos a la catalogación de conflictos de adquisición y conflictos de delimitación del territorio, creemos necesario advertir con carácter previo que el tipo de conflicto territorial con el cual los tribunales arbitrales y judiciales internacionales han estado mayormente enfrentados ha sido característicamente entre Estados ya establecidos, bien sobre la soberanía de un

⁶ A título ejemplificativo, podríamos citar la ocupación, la cesión (como modos de adquisición), el uti possidetis iuris, o los criterios naturales (como algunas de las posibles técnicas aplicables en la delimitación).

parcela de territorio, bien para precisar el curso de una frontera común; para Blum⁷, este tipo de disputas se sitúa "for long among the hotly contested problems of international law". El derecho internacional -muchas veces operando incluso por vía deductiva de la propia jurisprudencia internacional- ha regulado tradicionalmente ambas cuestiones a través de reglas específicas que, como ya hemos reseñado, constituyen las pautas de aplicación, en mayor o menor medida, por parte del órgano jurisdiccional correspondiente. Intentaremos, pues, exponer sucintamente los aspectos más destacables de tal regulación jurídica.

SECCION 1ª: ESTUDIO CONCEPTUAL DE LOS CONFLICTOS DE ADQUISICION TERRITORIAL.

Cuando nos referimos a la 'adquisición territorial' no estamos sino utilizando una forma abreviada de describir la adquisición de la soberanía sobre el territorio, entendida ésta como "the right to exercise therein, to the exclusion of any other State, the functions of a State"⁸. En este sentido, el propio Rousseau⁹, refiriéndose a la expresión 'adquisición del territorio', indica que:

⁷ Vid. BLUM, Y.Z., Historic titles in International Law, La Haya, 1965, p.1.

⁸ Cfr. AKEHURST, M., A modern Introduction to International Law, Londres, 1982, p.141.

⁹ Vid. ROUSSEAU, Ch., "Principes de droit international public", R.des C., n°93, 1958-I, p.415.

"la formule est évidemment impropre. Il ne peut en effet s'agir en l'espèce de l'acquisition du territoire comme tel, mais uniquement de l'établissement par un Etat de sa compétence sur un territoire sans maître ou sur un territoire soustrait par un acte juridique régulier à une compétence étatique antérieure".

Esta afirmación lleva a R.Y.Jennings¹⁰ a advertir, en este contexto, que al hablar de las reglas que regulan la adquisición del territorio "we use an elliptical expression which may lead us astray".

Consideramos correctas estas apreciaciones, pues, efectivamente, no debemos olvidar que de lo que se trata al hablar tanto de la adquisición como de la pérdida del territorio -tal y como indicábamos en líneas anteriores-, no es meramente del territorio en sentido físico, sino de la soberanía estatal¹¹ respecto de éste; y esta realidad constituye un dato a tener en cuenta cuando se hace alusión a los conflictos de adquisición territorial, pues al referirnos a los mismos, estamos constatando el enfrentamiento entre dos Estados respecto de la soberanía sobre un territorio¹².

El volumen de casos afectando a la adquisición de la soberanía territorial es numeroso y, de ellos, la mayoría se han referido a territorios escasamente poblados

¹⁰ Vid. JENNINGS, R.Y., The acquisition of a territory in International law, Manchester, 1963, p.2.

¹¹ Nosotros no vamos a ahondar en la problemática del concepto de soberanía, en cuanto sobrepasa los límites de nuestro trabajo; remitimos para una aproximación al tema a STEINBERGER, H., "Sovereignty", Encyclopaedia of Public International Law, vol.10, R.Bernhardt (ed.), Amsterdam, 1987, pp.397-418.

¹² Por otro lado, debemos indicar, igualmente, que al abordar la problemática de la adquisición de territorio lo hacemos refiriéndonos a Estados ya existentes; cuestión ésta que no debe ser confundida con la de la creación de nuevos Estados, ni tampoco con la de la adquisición privada de territorio por parte de individuos particulares.

siendo raros los supuestos concerniendo territorios densamente poblados. El examen de este tipo de supuestos, nos lleva a la necesidad de afirmar con carácter previo que la cuestión de la adquisición de la soberanía sobre el territorio no opera de forma mecánica, a través de parámetros fijos e inamovibles, sino que, por el contrario, debe ser examinada en atención a las circunstancias y características de cada caso. Operación ésta que conduce a la determinación de problemas particulares según la naturaleza del territorio, pues las manifestaciones de soberanía territorial asumen diferentes formas según las condiciones de tiempo y espacio. En este mismo contexto, algunos autores¹³ hacen variar la constatación del ejercicio de la soberanía en atención no sólo a los aspectos geográficos, sino también a las circunstancias demográficas, económicas, tecnológicas e, incluso, estratégicas del territorio en cuestión.

Es el caso de las regiones polares, comúnmente caracterizadas como áreas sin árboles, con hielo permanente que las hace prácticamente inaccesibles, bajas temperatura y especial duración del día y la noche¹⁴. Estas peculiares características plantean problemas especiales en relación al establecimiento de la soberanía¹⁵. Así, por ejemplo, al tratarse de regiones permanentemente cubiertas

¹³ Cfr. entre otros, PINTO, M.R., "La prescription en droit international", R. des C., nº87, 1955-I, p.406; o SHARMA, S.P., International Boundary Disputes and International Law, Bombay, 1976, p.176.

¹⁴ Cfr. BOGGS, S.W., The polar regions (geographical and historical data for consideration in a study of claims to sovereignty in the Arctic and Antarctic regions), Nueva York, 1990, pp.22-23.

¹⁵ ~~En este sentido, Ch.HYDE (International Law, Boston, 1947, p.347)~~ afirma que la adquisición del título de soberanía sobre las áreas polares es complicada por 4 razones:

por hielo no podrán ser habitadas ni ocupadas de forma continua excepto para actividades especiales, tales como el personal de una estación meteorológica o la explotación de minerales. Ante esta situación se plantea la cuestión de si el título de soberanía se establece por ocupación, ¿el standard de posesión requerido no será medible con el de las regiones con climatología más favorables?, o si, por el contrario, la dificultad de establecimiento en estas zonas inclementes, debe traducirse en la imposibilidad de adquirir la soberanía sobre tales territorios. No hay duda de que la soberanía puede adquirirse por ocupación y consolidación adquiriendo la condición de efectividad una especial definición, como lo prueba la decisión del T.P.J.I. en el asunto de Groenlandia Oriental¹⁶, si bien los avances tecnológicos de los últimos años están haciendo posibles verdaderos establecimientos humanos.

Esta situación que presentan los 'desiertos de hielo' puede considerarse, en gran medida, análoga a la que se plantea en los calientes desiertos de Africa y de Asia, en los cuales la ocupación no es considerada como esencial para el establecimiento de la soberanía sobre amplias zonas. El control de los puntos de acceso y de las rutas que los atraviesan, junto con la notificación de la jurisdicción

-
1. la circunstancia de que el área está constituida por una superficie sobre el nivel del mar que es hielo y no tierra;
 2. la aparición de reclamaciones sobre estas regiones surge en un momento en que las exigencias del derecho internacional respecto a la adquisición del territorio están perfectamente establecidas;
 3. la incapacidad del Estado reclamante, por razón de las condiciones climáticas, de llevar a cabo tal grado de control sobre la región como para perfeccionar un título de soberanía similar a una zona no polar;
 4. el hecho de que ciertas áreas polares son prolongación geográfica natural de territorios que pertenecen ya a un Estado.

¹⁶ Cfr. C.P.I.J., serie A/B, nº53, 1933.

asumida, a veces resulta suficiente para establecer una soberanía indiscutida, incluso aunque amplias áreas de dichos desiertos no estén habitadas¹⁷.

En los casos de regiones montañosas, junglas, rocas e islas surgen, igualmente, límites a la apropiación física, por lo que debemos considerarlos como supuestos particulares en el contexto de la adquisición territorial. En el último caso la práctica resulta más abundante, proporcionándonos muestras suficientes para corroborar que tratándose de pequeñas islas, deshabitadas, en las que el establecimiento continuo es casi impracticable, resulta de aplicación la ocupación - precedida, en su caso, del descubrimiento -, si bien un inicial ejercicio de soberanía resulta suficiente para mantener el título¹⁸.

A) EL TÍTULO ADQUISITIVO: ALCANCE Y VALOR DEL TÍTULO.

Ya hemos indicado cómo la expresión 'adquisición de la soberanía territorial' es preferible a la de simple 'adquisición del territorio', en cuanto refleja con mayor exactitud la realidad jurídica de que se trata. Sin embargo, si tenemos en cuenta que al hablar de soberanía, en términos generales, nos estamos refiriendo a la

¹⁷ Cfr. sobre este punto BOGGS, S.W., op.cit., pp.31-32 y 113-114.

¹⁸ Baste citar, a título ejemplificativo, los casos de la Isla de Aves, o la Isla de Clipperton, que serán analizados en detalle más adelante.

competencia, en términos jurídicos, que un Estado disfruta respecto de su territorio¹⁹, no debemos olvidar que dicha competencia no es sino la consecuencia del título. Por ello, creemos que es plenamente acertada la apreciación de Torres Bernaldez²⁰, en relación a que la expresión 'adquisición del título de soberanía territorial' resulta mucho más depurada, precisa y exacta.

A pesar de esta afirmación, que compartimos, no faltan situaciones paradójicas como la que se produce en el asunto de la Isla de Palmas²¹, al hablar el juez Huber indistintamente tanto del título de adquisición, como de la adquisición del título. Es obvio, pues, que la palabra 'título' es indiscriminadamente usada por la doctrina y la jurisprudencia, para denotar tanto los hechos jurídicamente reconocidos para conferir un derecho, como, elípticamente, el derecho en sí.

Habida cuenta de esta indeterminación, provocada por el carácter equívoco del propio término y sus variados significados, entendemos que se impone una labor ineludible, la de intentar con carácter previo una aproximación al alcance del 'título', para así lograr una mejor comprensión del contenido de la expresión 'adquisición del título de soberanía territorial'.

Etimológicamente, el origen del título se sitúa en el Derecho romano, donde el titulus era el fundamento sobre el que se sustentaba el derecho de propiedad,

¹⁹ Cfr. BROWNLIE, I., Principles of Public International Law, Oxford, 1990, p.123.

²⁰ Vid. TORRES BERNALDEZ, S., "Territory, Acquisition", Encyclopediae of Public International Law, vol.10, R.Bernhardt (ed.), Amsterdam, 1987, p.496.

²¹ Vid. R.G.D.I.P., 1935, pp.164-165, 173, 197, entre otras.

esto es, el medio a través del cual se establecía el derecho de propiedad de una persona²². De esta forma, el título vendría definido como la prueba del derecho que una persona tiene a la posesión de la propiedad y no como el mero derecho en sí mismo. Con tal concepción, el título pasa al derecho interno donde va a cubrir las razones por las que el propietario tiene la justa posesión de su propiedad: titulus est justa causa possidendi id quod nostrum est²³; esto convierte al título en un derecho de propiedad, considerada ésta, bien en relación a la manera en que ha sido adquirida, bien a su capacidad para ser efectivamente transferida.

Si nos situamos en el plano del derecho internacional, observamos que en el proceso formativo de las reglas que regulan el título al territorio, tanto la práctica como la doctrina²⁴, muestran una tendencia natural a establecer tales cauces en analogía con el derecho interno y, en particular con el derecho romano; analogía, pero no identidad, en cuanto la propia idiosincrasia de este ordenamiento impone una obligada adecuación a sus peculiares características jurídicas.

Son muchas las definiciones de título que se recogen por parte de la doctrina

²² En el derecho romano la propiedad se transmitía por mancipatio, in iure cessio, traditio (para la cual se requería justa causa traditionis, que era el título de adquisición de la propiedad), o usucapio (que aunaba el animo domini, la bona fide y la justa causa possessionis, es decir, el justo título). Sobre el origen y evolución del 'título', ver VERSFELT, W.J.B., The Miangas Arbitration, Utrecht, 1933, pp.50-53.

²³ Expresión recogida por CHAO, K.T., "Legal Nature of International Boundaries", Chinese Yearbook of International Law and Affairs, 1985, p.34, del Co.Litt, 3456.

²⁴ Cfr. sobre este punto SCHWARZENBERGER, G., "Title...", op.cit., p.288.

internacionalista, entendido éste como término jurídico²⁵. De todas ellas recogemos la que nos proporciona el Dictionnaire de la Terminologie de Droit International, que define el vocablo 'título' en los siguientes términos: "pris dans le sens de titre juridique, désigne tout fait, acte ou situation qui est la cause et le fondement d'un droit"²⁶. Si transponemos esta definición al ámbito de nuestro estudio, se deduce, según Reuter²⁷, que "el título jurídico no otorga automáticamente la soberanía, sino que crea los derechos y obligaciones conducentes a la constitución de una nueva soberanía territorial; ésta debe ser siempre ejercida de hecho".

¿Qué queremos decir, entonces, cuando hablamos de título de soberanía? La existencia o no de un título de soberanía territorial se va a hacer depender, en última instancia, de la existencia de ciertos hechos, fundamentalmente centrados - como veremos más adelante-, en el ejercicio de funciones de autoridad estatal en el territorio, en la posesión efectiva. Realmente, en el fondo, lo que se está afirmando es que el título no es sino el antecedente de facto, del cual el derecho es la consecuencia de iure.

²⁵ Para Jennings el primer significado del título es "the vestitive facts which the law recognises as creating a right" (The Acquisition op.cit., p.4). Por su parte, Shaw afirma que "the concept of title involves in essence a description of those legal and factual elements which by virtue of the norms of international law must be present before territorial sovereignty may be validly acquired or maintained. It also express the fullest extent of competences that may be exercised by a State over its territory"; y es en este sentido en el que este mismo autor afirma que el título puede ser relativo, pero siempre opera erga omnes ("Territory in International Law", N.Y.I.L., 1982, p.79).

²⁶ Vid. The Dictionnaire de la Terminologie de Droit International, París, 1960, s.v. "titre".

²⁷ Vid. REUTER, P., Derecho Internacional público, (traducción del prof. Puente Egido), Barcelona, 1962, p.111.

Sin embargo, en la práctica el concepto de título -empleado para resolver conflictos de adquisición territorial- se aproxima a la noción de mejor derecho de soberanía, idea que entra en íntima conexión con la de superioridad de la prueba aducida por una de las Partes, tal y como tendremos ocasión de contrastar más adelante al analizar la jurisprudencia arbitral y judicial correspondiente. No en vano, el propio T.I.J. en el asunto de la delimitación fronteriza entre Burkina Faso y Mali²⁸, afirmó que "the concept of title may also, and more generally, comprehend both the evidence which may establish the existence of a right, and the actual source of that right".

Retomando, pues, esa idea fundamental que indicábamos, es decir, estableciendo una marcada distinción entre las dos fases que comporta el proceso adquisitivo -por un lado, aquella por la cual una soberanía es alcanzada, y por otro, aquella por la que el estatuto jurídico es adquirido-, la siguiente operación lógica y necesaria es, como dice Torres Bernaldez²⁹, la de distinguir entre 'modo' y 'título', y de esta forma hablar correctamente de los 'modos de adquisición del título de la soberanía territorial'.

²⁸ Vid. I.C.J.Reports, 1986, p.564, pa.20.

²⁹ Vid. op.cit., p.496.

B) ANÁLISIS GENERAL DE LOS DISTINTOS MODOS DE ADQUISICIÓN DEL TERRITORIO. LA 'OCUPACIÓN' EFECTIVA COMO ÚNICO MODO SUFICIENTEMENTE VÁLIDO PARA DERIVAR TÍTULO JURÍDICO.

Una vez realizada la labor de orientación en torno al significado del título de soberanía, y partiendo de esa distinción que referíamos entre 'título' y 'modos', corresponde hacer ahora alusión a éstos últimos.

Al hablar de modo de adquisición, estamos refiriéndonos a la descripción del proceso fáctico y jurídico que el derecho internacional, como sistema objetivo de referencia, reconoce como capaz de crear un título a la soberanía territorial³⁰.

El derecho internacional, haciéndose eco de la opinión tradicional, establece varios modos de adquisición por parte de un Estado del derecho a ejercer legítimamente sus competencias territoriales sobre un territorio determinado: ocupación, accesión, cesión, conquista, prescripción, y actos internacionales, reglas que, por otra parte, han sufrido cambios con la evolución de la propia Sociedad Internacional. Diferentes combinaciones han sido propuestas para clasificarlos.

En la clasificación tradicional de los modos de adquisición del título a la soberanía territorial, se distingue entre modos originarios, en los casos en que el territorio no pertenece a nadie en el momento de su apropiación (es terra nullius) - como es el caso del descubrimiento, la ocupación y la acreción-, y modos

³⁰ Cfr. ibidem.

derivativos o derivados, aplicables en todos los demás supuestos -prescripción, cesión...-. Esta distinción ha tenido una gran importancia histórica, pero pertenece a una etapa ya superada caracterizada por la existencia de multitud de territorios sin dueño; la ausencia de este tipo de territorios ha obligado al replanteamiento de la clasificación, distinguiéndose actualmente³¹ entre adquisiciones que derivan de una situación de hecho y las que nacen de un título jurídico.

1. Modos derivados de una situación de hecho.

Al aludir a la situación de hecho no se está haciendo referencia a una noción estática, sino, por el contrario, manifestada a través de conductas, de prácticas, de acciones. Por otra parte, es necesario indicar que no toda situación de hecho es susceptible de producir plenos efectos en derecho, sino que, como muy bien indica Pinto³², debe revestir un doble carácter: efectividad y reconocimiento.

Entre los modos encasillables en este tipo suelen citarse la ocupación, la prescripción, la contigüidad y la acreción. Existen, además, otros dos modos de

³¹ Esta clasificación fue planteada por REUTER (vid. op-cit., pp.106 y ss), y ha sido acogida en nuestra doctrina por GONZALEZ CAMPOS, J.D., SANCHEZ RODRIGUEZ, L.I., y SAENZ DE SANTA MARIA, M.P., Curso de Derecho Internacional público, Madrid, 5ª ed., 1992, p.459. Con anterioridad, Johnson ("Consolidation as a Root of Title in International Law", Cambridge Law Journal, 1955, pp.215 y 217) ya había puesto de manifiesto, en relación a la clasificación tradicional, que "serves no useful purpose..., and in so far as it leads to controversy and confusion it is probably even harmful"; afirmación que hacía patente la necesidad de un replanteamiento de la cuestión.

³² vid. "La prescription..., op-cit., pp.404-427, donde analiza en detalle los efectos jurídicos de las situaciones de hecho en derecho internacional.

adquisición igualmente derivados de una situación de hecho pero que entendemos que hoy día son absolutamente obsoletos: el descubrimiento y la conquista.

El descubrimiento simplemente entraña "the sighting or finding of hitherto unknown or uncharted territory"³³; esto significa que sólo un territorio nullius puede ser descubierto y, además, que no se incluye el elemento de la intención, por lo que puede ser el resultado de una simple expedición. La era del descubrimiento fue la de los siglos XV y XVI, cuando éste, a veces acompañado de actos simbólicos como el izamiento de la bandera o el levantamiento de una cruz, válidamente constituía un título al territorio. Sin embargo, a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII se asienta la idea de que sólo la efectiva ocupación constituye el test del título jurídico, pasando a ser considerado el descubrimiento como un simple 'título incoado', que "ne crée pas un titre définitif de souveraineté, mais seulement un titre imparfait"³⁴; se trataría tan sólo de una expectativa de título que necesita ser perfeccionada por la posterior ocupación efectiva, sin la cual no hay título.

De igual manera, la evolución del derecho internacional hace inviable la conquista como título adquisitivo. Esta se fundamenta en la incautación de un territorio que pertenece a otro Estado mediante el uso de la fuerza, acompañada de los dos elementos del corpus y el animus; es decir, no se trata tan solo de la

³³ Cfr. ZAYAS, A.M. de, "Territory, Discovery", Encyclopaediae of Public International Law, vol.10, R.Bernhardt (ed.), Amsterdam, 1987, p.504; trabajo al que remitimos para un estudio en detalle del tema.

³⁴ Tal y como proclamó el juez Huber en el asunto de la Isla de Palmas (cfr.op.cit., p.173), y posteriormente ha admitido la unanimidad de la doctrina.

mera aprehensión física del territorio, sino que tiene que existir intención de anexarlo³⁵. En una época en que el uso de la fuerza estaba permitido por el derecho internacional, la conquista, acto perfectamente legal, constituía uno de los principales medios de adquisición del territorio. No obstante, la nueva reglamentación de la materia que empezó a intuirse con la Segunda Conferencia de Paz de La Haya de 1907 y, sobre todo, el Pacto Briand-Kellog de 1928, quedó plenamente consolidada en el artículo 2.4. de la Carta de Naciones Unidas que establece la prohibición del uso o amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Según este nuevo derecho, la conquista como título de soberanía territorial ha dejado de ser parte del Derecho en las relaciones internacionales³⁶, aunque sin olvidar, por supuesto, que el principio del derecho intertemporal hace irretroactivo este cambio.

■ OCUPACION: Un Estado puede adquirir un territorio sin dueño a través de una ocupación efectiva, es decir, suficiente en relación a las circunstancias fáctica de cada caso, sobre todo geográficas. En términos generales, la ocupación se asocia con el descubrimiento previo de dicho territorio -aunque no faltan

³⁵ Cfr., en este sentido, JENNINGS, R.Y. The acquisition..., op.cit., pp.52-53.

³⁶ Buena prueba de ello es la condena y reacción de la Sociedad Internacional institucionalizada de la adquisición por Israel, tras la guerra de los seis días, de la ciudad vieja de Jerusalén, Cisjordania, Franja de Gaza, Altos del Golán y Península de Sinaí (Resolución 242, 22 noviembre 1967) o del intento de anexión militar de Kuwait por parte de Irán, en 1990 (Resolución 662, 9 agosto 1990) (cfr. PASTOR RIDRUEJO, J.A., Curso de derecho internacional público y organizaciones internacionales, Madrid, 5ª ed., 1994, p.515).

excepciones como es el caso de la Isla de Palmas, descubierta por España, pero ocupada por Países Bajos-. Para poder constituir un título adquisitivo válido -tal y como tendremos ocasión de analizar in extenso en el próximo capítulo³⁷-, se exige la concurrencia en la ocupación efectiva de una condición previa y dos requisitos posteriores:

- La condición previa se centra en el hecho de que se trate de un territorio nullius, esto es, que no pertenezca a nadie o haya sido abandonado.

- La doble condición posterior se refiere, por un lado, a la intención de actuar como soberano en dicho territorio (animus ocupandi), y por otro, a la efectividad de la ocupación que se manifiesta a través del despliegue de autoridad estatal.

■ **PRESCRIPCION:** Se refiere al proceso por el que un título se adquiere y, al mismo tiempo, extingue a otro a través de la posesión adversa. De las dos variantes que contiene la prescripción, extintiva y adquisitiva, a nosotros nos interesa la segunda como 'posible' título adquisitivo -circunstancia ésta sobre la que discrepa copiosamente la doctrina³⁸-, definida en los siguientes términos:

³⁷ Por esta razón, remitimos al estudio doctrinal y jurisprudencial que se efectuará en el mismo.

³⁸ Sin duda alguna, D.H.N.JOHNSON es el más ardiente defensor de la prescripción como modo de adquisición del título (cfr. "Acquisitive Prescription in International Law", B.Y.B.I.L., 1950, pp.332-354, o "Consolidation as a root of title in International Law", Cambridge Law Journal, 1955, pp.215-225), junto con otros, como BELGRAD (cfr. The Theory and Practice of Prescriptive Acquisition in International Law, Londres, 1969), o VERYKIOS (cfr. La prescription en droit international public, Paris, 1934); frente a él, autores de la talla de PINTO (cfr. op.cit.), CAVAGLIERI (cfr. "Règles du droit de la paix", R. des C., n°26, 1929-I, p.405, entendiendo que "n'a aucun fondement en droit international"), GUGGENHEIM (cfr. Traité de droit international public, Ginebra, 1953, vol.I., p.156) o REUTER (cfr. op.cit., p.114) niegan tanto su reconocimiento por la jurisprudencia internacional como su propia existencia.

"...is the means by which under international law, legal recognition is given to the right of a State to exercise sovereignty on land or sea territory in cases where that State has, in fact, exercised its authority in a continuous, uninterrupted, and peaceful manner over the area concerned for a sufficient period of time, provided that all other interested and affected States have acquiesced in this exercised of authority"³⁹.

De esta definición se extraen las siguientes condiciones a cumplimentar para el establecimiento de un título por prescripción adquisitiva:

- La posesión debe ejercerse a título de soberano, lo cual implica que un Estado no puede adquirir título sobre un territorio si admite que la soberanía sobre el mismo pertenece a otro.

- La posesión debe ser pacífica e ininterrumpida, en el sentido de que no puede haber cambios en la misma.

- La posesión debe ser pública, pues si la prescripción se fundamenta en la aquiescencia, sin conocimiento y, por lo tanto, sin publicidad, no hay aquiescencia⁴⁰.

- La posesión debe permanecer, debe ser constante. Sin embargo, no está determinado el período de control efectivo que se exige en derecho internacional para establecer el título por prescripción. En cualquier caso, entendemos que ésta es una cuestión a determinar para cada supuesto.

■ **CONTIGÜIDAD:** La doctrina de la contigüidad -también llamada continuidad o proximidad- está basada en consideraciones geográficas. Sugiere que

³⁹ Cfr. JOHNSON, D.H.W., "Acquisitive...", op.cit., p.353.

⁴⁰ Cfr. ibidem, p.347.

un Estado puede retener un título sobre un territorio -fundamentalmente referido a islas- por el hecho de ostentar ya la soberanía sobre otro próximo a aquél. Esta noción deriva, en opinión de Reuter⁴¹, de una interpretación razonable del principio de ocupación efectiva, consistente en entender que la soberanía territorial regularmente establecida en un territorio implica igualmente soberanía sobre los elementos accesorios del territorio que son inseparables de éste. Es decir, "since the islands in the vicinity of the mainland are regarded as its appendages, the ownership and occupation of the mainland includes the adjacent islands, even though no effective control has been exercised over them"⁴².

En conexión con la contigüidad se encuentran tanto la teoría de los hinterland, por la que los Estados colonizadores reclaman la soberanía sobre todos los territorios que se prolongan indefinidamente a partir de las costas, como la teoría de los sectores, en virtud de la cual todos los Estados ribereños del Océano Ártico poseerían la soberanía de las islas situadas en un triángulo esférico cuya base está formada por este litoral, el vértice del Polo Norte, y los lados por los meridianos que, partiendo del Polo, pasaran por los límites este y oeste de tal litoral⁴³; ambas resultan difícilmente sustentables.

Desde finales del siglo XIX se produce un rechazo unánime, doctrinal y

⁴¹ Vid. op.cit., pp.108-109.

⁴² Cfr. VON DER HEYDTE, F.A.F., "Discovery, Symbolic Annexation and Virtual Effectiveness in International Law", A.J.I.L., 1935, pp.468-469. Este autor menciona además, como sustento de esta afirmación, los casos de la adquisición de las islas Marshall por Alemania, el archipiélago Louisiade por Gran Bretaña o la isla de Aves por Venezuela.

⁴³ Cfr. REUTER, P., op.cit., pp.108-109. Los Estados que se encontrarían en tal beneficiosa situación serían Canadá (primero en sustentarlo en 1907), Rusia, Noruega, Dinamarca e, incluso, EE.UU.

jurisprudencial⁴⁴, a la contigüidad y, en general, a todas las consideraciones geográficas como posible modo autónomo de adquisición del título de soberanía territorial. Únicamente juega en conjunción con una efectiva ocupación de dicho territorio.

■ **ACCESION:** Viene referida a la adquisición del título sobre un territorio como resultado de cambios geográficos resultantes de causas naturales: bien por aluvión -arrastre de sedimentos debido a la corriente que llega a formar un nuevo terreno-, bien por delta -isla triangular que se forma en la desembocadura de un río por el depósito de cieno-... En todo caso, la adición de territorio resultante de la acreción pasa a formar parte del territorio del Estado beneficiario de la misma, sin necesidad de ningún acto de consolidación⁴⁵. Lo que está operando aquí, realmente, no es sino una presunción de ocupación efectiva, por la ya existente sobre el territorio acrecido.

Si una conclusión resulta fácilmente extraíble del análisis de los modos arriba detallados, es el cambio que respecto de los mismos se ha operado en derecho internacional. Cambio que no sólo pasa por los ya apuntados (referidos

⁴⁴ Así lo afirma claramente, entre otros, C.H.M. WALDOCK ("Disputed Sovereignty in Falkland Island Dependencies", B.Y.B.I.L., 1948, p.342), habiéndose consagrado jurisprudencialmente en el asunto de la Isla de Palmas, por el juez Huber (cfr. op.cit., p.182).

⁴⁵ Cfr. MENON, P.K., "Title to territory: Traditional Modes of Acquisition by States", R.D.I., 1994, pp.25-27.

Como ejemplo de adquisición de territorio por accesión podemos citar el asunto de Chamizal, entre EE.UU. y México, en relación a los cambios naturales acaecidos sobre el Río Grande (vid. A.J.I.L., 1911, p.782).

fundamentalmente a la exigencia en todo caso de la posesión), sino que también da como resultado la tendencia actual a amalgamar las ideas de prescripción y ocupación en un único concepto, a veces llamado consolidación histórica del título⁴⁶, referido a la posesión efectiva, pacífica e ininterrumpida.

Circunstancias que se traducen en que las diversas situaciones de hecho posibles, de las que puede derivar la adquisición de la soberanía territorial se reconducen y quedan subsumidas en una sola: el ejercicio continuo, pacífico e ininterrumpido de funciones estatales.

2. Modos derivados de un título jurídico.

La adquisición puede, igualmente, fundarse no ya en determinados comportamientos o conductas, sino en actos jurídicos. En este sentido hablamos de cesión y de actos jurisdiccionales; a estos dos modos, Reuter⁴⁷ añade un tercero: las decisiones de Organizaciones Internacionales, en cuanto su acción indirecta contribuye al otorgamiento de títulos jurídicos relativos a la soberanía territorial. Nosotros incluiríamos uno más, el uti possidetis iuris, también aplicable como título adquisitivo respecto de territorios procedentes del proceso de

⁴⁶ Término empleado por primera vez a cargo de SCHWARZENBERGER (cfr. "Title...", op.cit., p.290), y que posteriormente ha sido objeto de mayor acogida.

⁴⁷ Vid. op.cit., pp.112-113. En este contexto podemos citar la adjudicación, por parte del Consejo de la Sociedad de Naciones, de las islas Aaland a Finlandia en 1920, y del Mosul a Iraq, en 1925.

descolonización, pero sobre el que no entraremos a analizar ahora puesto que nos referiremos a él en el próximo apartado⁴⁸.

■ **CESION:** Supone la transferencia de soberanía sobre un territorio de un Estado a otro. En la misma línea, en el asunto de la Comisión de Reparación v. Gobierno Alemán, se define la cesión como:

"The renunciation made by one State in favour of another of the rights and title which the former may have to the territory in question"⁴⁹.

La cesión, raramente aplicada hoy día, tiene lugar a través de un tratado en el que se contienen las condiciones bajo las cuales tiene lugar la transferencia, que puede ser por precio, por cambio o a título gratuito⁵⁰; lo cual configura a ésta como un modo de adquisición bilateral que requiere la cooperación de los dos Estados⁵¹, frente a otros, como la ocupación, que son característicamente unilaterales.

⁴⁸ En varias ocasiones de nuestro trabajo, tendremos oportunidad de referirnos a este problema, planteado y resuelto positivamente en el asunto de la isla de Aves y en la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras, por lo que no vamos a adentrarnos en el mismo.

⁴⁹ Vid. Annual Digest of International Law Cases (1923-24), caso nº199.

⁵⁰ En 1803, Francia cedió Lousiana a EE.UU. por 60 millones de francos; en 1867, Rusia cedió a EE.UU. Alaska por \$7,2 millones; en 1916, Dinamarca cedió las Islas Vírgenes, St.John y St.Croix a EE.UU. por \$25 millones. Gran Bretaña cedió, en 1890, la isla de Heligoland a Alemania a cambio de Zanzíbar. Francia, por otro lado, cedió la Lombardía a Italia en 1859, gratuitamente. Cfr. MENON, P.K., op.cit., pp.17-22, para más detalles sobre la cesión como título adquisitivo, sobre todo en relación a los problemas que se plantean respecto del principio de libre determinación.

⁵¹ Así lo ha caracterizado R.Y.JENNINGS (vid. The Acquisition..., op.cit., p.16).

Para establecer una cesión válida, que otorgue el título, es necesario que concurren dos circunstancias:

- Dado que se trata de un modo derivativo, su validez depende de que el Estado cedente ostente un título de soberanía perfecto para poder traspasar ésta al nuevo soberano⁵².

- El acuerdo de cesión debe ir acompañado, igualmente, de la actual transferencia de la posesión (traditio), tal y como ha remarcado el T.P.J.I. en el asunto de los intereses alemanes de la Alta Silesia Polaca⁵³. Lo cual se traduce en la necesidad, junto al acto jurídico mismo, de la situación fáctica de la efectividad de la posesión.

■ ACTOS JURISDICCIONALES: Este modo se refiere a la solución pacífica de una controversia de atribución territorial por la intervención de un órgano jurisdiccional. No obstante, es necesario indicar que tales decisiones jurisdiccionales son, en su mayoría, de carácter declarativo más que constitutivo, es decir, son testimonio de la realidad jurídica existente. Como muy bien pone de manifiesto Torres Bernaldez⁵⁴, "a judgment or arbitral award is not foundation of title to the territory, but rather confirmation of the existence of the title in wider sense". El papel del juez o árbitro se centra, exclusivamente, en juzgar la situación

⁵² La no concurrencia de este requisito en el título español sobre la isla de Palmas, impidió la adquisición de la isla por parte de EE.UU. que alegaba un tratado de cesión de 1898, pues, como expresó el juez Huber, nadie da lo que no tiene (vid. op.cit., p.201).

⁵³ Vid. P.C.I.J., serie A, nº7, 1926.

⁵⁴ Vid. op.cit., p.503.

conforme a derecho -a excepción de los supuestos de decisión ex aequo et bono-, y para ello aplican las reglas consuetudinarias de derecho internacional relativas a la adquisición de la soberanía territorial, tal y como han sido descritas anteriormente.

En relación a los conflictos de adquisición territorial, y en conexión con los modos detallados anteriormente, se nos plantea un interrogante añadido: ¿qué sucede cuando una de las Partes alega un título derivado de una situación de hecho, es decir, la ocupación del territorio, y la otra un título jurídico? No existen en derecho internacional reglas generales que permitan establecer qué pretensión ha de prevalecer. La práctica internacional enfrentada a esta problemática, nos muestra -como tendremos ocasión de comprobar a lo largo de nuestro estudio- cómo se concede evidentemente más valor al ejercicio efectivo de la soberanía, y ello en cuanto los títulos jurídicos sólo son capaces de establecer soberanía territorial si justifican una ocupación⁵⁵, si se sustentan por un actual ejercicio de autoridad estatal. Por otro lado, y al hilo de esta problemática surge una cuestión adyacente. Esta viene motivada por el hecho de que en ocasiones, no nos enfrentamos tan claramente a pretensiones fundamentadas exclusivamente, por un lado, en un título jurídico, y por otro, en una situación de hecho, sino que, por el contrario, puede darse, bien una combinación de ambos tipos de alegaciones por

⁵⁵ Este aspecto ha sido puesto de manifiesto claramente por P.GUGGENHEIM (vid. op.cit., pp.441-442).

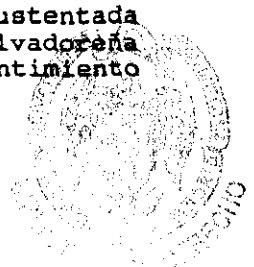
las dos Partes, bien su ausencia. Cuando se produce cualquiera de estas dos situaciones u otra similar, entra en juego un tercer elemento -decisivo- a retener por el órgano jurisdiccional, el comportamiento de los Estados en relación al objeto del litigio, a la situación litigiosa⁵⁶; es decir, la posición por ellos mantenida, que puede ser tanto de continua reivindicación, como de ausencia de protesta.

Cuál es, pues, la conclusión evidente, de este análisis: que, en el fondo, no hay más que un sólo modo de adquisición del territorio, la ocupación efectiva, pues sin ésta ningún otro modo tiene fuerza suficiente para otorgar por sí mismo un título válido de soberanía territorial.

SECCION 2ª: CONFLICTOS DE DELIMITACION TERRITORIAL: LAS FRONTERAS.

La delimitación territorial es una operación jurídica y política que tiende a fijar la extensión espacial del poder estatal, o dicho de otro modo, a determinar el

⁵⁶ Tal y como ocurrió en el asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras, donde la decisión del T.I.J. respecto de la isla Meanguera estuvo fundamentalmente sustentada por el comportamiento pasivo de Honduras respecto de la actuación salvadoreña en dicha isla litigiosa, catalogado por el Tribunal como de consentimiento tácito de la situación (vid. I.C.J. Reports, 1992, p.577, pa.364).



trazado de la frontera entre dos Estados⁵⁷. Dicha delimitación supone, por otra parte, una tarea más delicada que la de la adquisición de un territorio, sobre todo cuanto éste está deshabitado.

La determinación de las fronteras es, sin duda, una necesidad inevitable que surge inherente al propio crecimiento de la Sociedad internacional; de ahí que sea necesario un acercamiento a dicho proceso.

El término 'frontera' es definido en derecho internacional como "a line which determines the limit of the territorial sphere of jurisdiction of States or other entities having an international status"⁵⁸. La determinación completa de una frontera terrestre surge como una creación continua resultante de actos complejos. Se trata de una operación que comporta, generalmente, dos etapas⁵⁹: la delimitación y la demarcación.

- La delimitación es la operación intelectual -realizada normalmente a través de cauces diplomáticos- por la que es elegido el emplazamiento de la frontera y

⁵⁷ Cfr. ZAMBRANO VELASCO, J.A., "Examen de algunas cuestiones relacionadas con el territorio del Estado y, en particular, del criterio para la determinación de los límites territoriales de Venezuela: el uti possidetis iuris de 1810 (artículo 7 de la Constitución)", en Estudios sobre la Constitución. Libro Homenaje a Rafael Caldera, vol.I, Caracas, 1979, p.287).

⁵⁸ Cfr. BOTHE, M., "Boundaries", Encyclopaediae of Public International Law, vol.10, R.Bernhardt (ed.), Amsterdam, 1987, p.17.

⁵⁹ Estas dos fases son las que hacen incidencia directa con la determinación de una frontera, pero existen además, otras dos etapas más en relación al establecimiento definitivo de la misma: 1. una previa a la delimitación, cual es la distribución o división política inicial del territorio entre los dos Estados; 2. una última, posterior a la demarcación, que se refiere a la administración de la frontera resultante. Cfr. en relación a las fases del proceso de fijación fronteriza, entre otros, SHARMA, S.P., International Boundary..., op.cit., pp.13-23; PRESCOTT, J.R.V., Boundaries and Frontiers, Londres, 1978, pp.31-32; o CUKWURAH, A.O., The Settlement of Boundary Disputes in International Law, Manchester, 1967, pp.27-85.

precisada la extensión espacial del poder estatal, esto es, la selección de un trazado fronterizo y su definición. Delimitar consiste, pues, en definir abstractamente y sobre el papel la línea fronteriza. Operación que se contiene en un instrumento jurídico, normalmente en un acuerdo (también puede tratarse de un acto jurisdiccional), por esta razón llamado 'tratado de límites o de fronteras', al que se acompaña de ordinario un mapa que forma parte integrante del mismo.

- Los efectos de la delimitación están subordinados a una segunda operación, la *demarcación*. Se trata de una labor material y técnica de verificación y concretización. Demarcar consiste en trasladar sobre el terreno los términos de una delimitación ya establecida sobre el papel, construir la frontera en el terreno. Los métodos a través de los cuales se efectúa la demarcación, esto es, las marcas visibles, varían en relación al carácter del terreno⁶⁰: hitos, construcciones...

No es infrecuente la utilización indistinta de ambos términos como si fueran sinónimos, lo cual es absolutamente erróneo e incorrecto.

El esquema general precedentemente descrito puede verse oscurecido por la aparición de problemas los cuales conllevan al surgimiento de una controversia entre ambos Estados, de una controversia fronteriza. Prescott⁶¹ divide en dos los tipos posibles de conflictos fronterizos: Controversia fronteriza territorial, que resulta de la existencia de alguna zona imprecisa de la frontera; y controversia

⁶⁰ Para un estudio en detalle de los distintos métodos de demarcación, cfr. HOLDICH, T.H., Political Frontiers and Boundary Making, Londres, 1916, pp.219-224.

⁶¹ Vid. op.cit., p.90.

fronteriza posicional, que se refiere a la localización actual de una frontera. De esta distinción se desprende, pues, que los conflictos fronterizos que surgen en relación al establecimiento de fronteras tienen como causa directa, bien las insuficiencias respecto de la delimitación, bien en el momento de la demarcación.

Efectivamente, una controversia puede surgir respecto de la expresa delimitación de una frontera. Se asume aquí que todavía no ha sido dibujada ni reconocida ninguna frontera válida, por lo que se acude a un órgano jurisdiccional para que sea éste el que decida el trazado de toda o una parte de la frontera aún sin precisar.

Por otro lado, una disputa puede afectar a los defectos de una delimitación expresa. Una frontera puede ser perfecta sobre el papel y estar debidamente delimitada, pero pueden surgir defectos latentes en la misma a la hora de llevarla al terreno, al identificarla, en el momento de proceder a la demarcación. Se trata de controversias que surgen respecto del proceso de establecimiento de la frontera mismo. Las causas pueden ser diversas⁶²: el tratado de límites -en el caso del uti possidetis iuris, los documentos de la época colonial- puede ser ambigüo, carente de precisión, inexacto e incluso contradictorio; desconocimiento de la geografía o

⁶² La práctica jurisprudencial nos proporciona una fuente inagotable de supuestos de este tipo que atienden a las más variadas causas. A título ejemplificativo citar: La interpretación del Tratado de límites de 1881 entre Argentina y Chile (asunto la Cordillera de los Andes de 1902, y posteriores, cfr. U.N.R.I.A.A., vol.IX, pp.29 y ss); identificación del Río St.Croix, en la frontera entre EE.UU. y Gran Bretaña (laudo de 1831, cfr. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.I, p.371 y ss); desconocimiento de los aspectos geográficos del terreno en la frontera del Reino de Barotse, entre Portugal y Gran Bretaña (sentencia de 1905, U.N.R.I.A.A., vol.XI, p.69 y ss); problemas de identificación de la línea en el asunto del Templo de Preah Vihear, entre Camboya y Tailandia (cfr. I.C.J.Reports, 1962, pp.5-146). En la misma línea, el reavivado conflicto fronterizo entre Ecuador y Perú tiene como causa principal la localización de un río que sirve como frontera entre ambos Estados, que en el terreno parece ser inexistente.

datos geográficos inexactos y mal aplicados sobre los que se basan los tratados de fronteras -por ejemplo, tratándose de una frontera montañosa, donde la topografía del área es difícil no llega a identificarse la línea orográfica o la hidrográfica-; la línea se encuentre insuficientemente marcada; igualmente, pueden surgir discrepancias entre la línea descrita en el tratado y la línea que ha sido trazada en el terreno.

En este segundo caso, el órgano jurisdiccional no es requerido para fijar la frontera sino para clarificar o interpretar el contenido de algunos puntos ambiguos existentes en una frontera ya delimitada. El propósito, pues, es el de determinar dónde se encuadra una línea ya propuesta de acuerdo con los tratados, documentos y otros instrumentos jurídicos alegados por las partes.

Debemos tener presente, por otra parte, que cada situación fronteriza está claramente individualizada, es decir, dos fronteras internacionales no son nunca idénticas aunque se refieran a la misma característica geográfica, o apliquen el mismo criterio delimitador; las generalizaciones gozan de un valor dudoso. Por ello, los criterios de solución aplicados por los jueces y árbitros a los problemas indicados dependerá de la naturaleza y de las causas de cada controversia. No obstante, no faltan en derecho internacional reglas, métodos o criterios que con carácter meramente orientativo, nunca imperativo⁶³, pueden conducir a una correcta solución de los conflictos relativos a las fronteras.

⁶³ El Derecho internacional general no contiene ninguna regla imperativa que regule el establecimiento de fronteras internacionales. Así lo ha afirmado claramente BERNSTEIN (vid. Delimitation of International Boundaries, Tel Aviv, 1974, p.167),

A) EL PRINCIPIO DEL "UTI POSSIDETIS IURIS" COMO PRINCIPIO APLICABLE A LA DELIMITACIÓN DEL TERRITORIO.

A la hora de fijar sus fronteras los Estados, incardinados en un proceso de negociaciones preliminares, se enfrentan a la elección de un principio delimitador que sea el hilo conductor de dicha operación. Una doble solución se ofrece a los Estados, deseosos de determinar los límites comunes de sus respectivos territorios; por un lado, escoger un nuevo límite que se establecerá mediante la aplicación *ex novo* de diversos criterios (naturales, artificiales...); por otro, adoptar uno antiguo a través de la implantación de límites pre-establecidos, administrativos o internacionales, ya existentes. Cuando los Estados optan por esta segunda posibilidad lo hacen adoptando, normalmente, límites internos, límites administrativos; entonces hablamos de la aplicación del principio del *uti possidetis iuris* como criterio delimitador, esto es, del "principe selon lequel doivent être respectées et maintenues en l'état les frontières coloniales héritées, au moment de leur indépendance, par les nouveaux Etats"⁶⁴. La implantación de límites internacionales pre-existentes se produce, en cambio, cuando nos enfrentamos a un fenómeno de sucesión de Estados. La nota común de estas dos doctrinas descansa en la fijación de fronteras ya establecidas, como consecuencia de la

⁶⁴ Definición recogida por PINHO CAMPINOS, J. de, "L'actualité de l'*uti possidetis*", en S.F.D.I., Colloque de Poitiers, *La Frontière*, París, 1980, p.95.

continuidad en el mismo territorio, esto es, responden a la teoría de la continuidad de las fronteras.

1. Valoración contextual del origen y evolución del principio del uti possidetis iuris; su naturaleza jurídica. El uti possidetis de facto.

Actualmente ligado al fenómeno de la descolonización -que afecta a numerosos Estados del tercer mundo-, el principio del uti possidetis iuris nació en América Latina donde fue adoptado por numerosos Estados para dirimir sus cuestiones de límites.

Pasando a examinar el origen terminológico de la expresión 'uti possidetis', aquél se sitúa en el derecho romano, concretamente se toma del Interdicto del Pretor, de tipo procedimental, que reza "uti possidetis, ita possideatis" (que quiere decir, "así como poseéis, continuad poseyendo"). Por este interdicto se prohibía a las Partes alterar el estado de la posesión del inmueble existente entre ellas, siempre que la posesión no hubiera sido obtenida de la otra parte mediante violencia, clandestinamente o a título precario; se trataba de una simple prohibición de alterar el status quo, y de una solución in limine litis⁶⁵. Con sentido análogo pasó a ser adoptado en el Derecho internacional general para describir un método

⁶⁵ Sobre el origen y evolución del uti possidetis, cfr. DURAN BACHLER, S., Uti possidetis. Doctrina latinoamericana, Santiago, 1977, pp.21-88.

Tal y como aparece recogido en el Digesto (libro 43, ti.17, p.1), este Interdicto establecía "uti eas aedes, quibus de agitur, nec vi, nec clam, nec precario, alter ab altero possidetis, quo minus ita possideatis, vim fieri veto".

de determinación de los cambios territoriales acaecidos como resultado de una guerra. De esta forma, el derecho internacional dió el nombre del uti possidetis al sistema de consolidación de la situación de facto resultante de las hostilidades y enfrentamientos; a falta de estipulación en contrario, los ex-beligerantes adquirirían título sobre el territorio bajo su control⁶⁶.

A pesar de que las raíces del uti possidetis se sitúan en el derecho romano, este principio llega al continente Latinoamericano con un significado diferente. Efectivamente, éste consistía en la práctica de establecer, en la medida de lo posible, sus fronteras internacionales siguiendo las fronteras que tenían cuando eran dependencias españolas en el momento inmediatamente anterior al de su acceso a la independencia⁶⁷. Esta práctica, que se inició por razones de conveniencia, fue aceptada por los nuevos gobiernos, pasando a ser incorporada en numerosos tratados bilaterales, multilaterales, conferencias, e, incluso, en las propias Constituciones. En este sentido, Colombia fue la primera en adoptar el principio del uti possidetis iuris en su Ley Fundamental del 17 diciembre 1819⁶⁸; mientras que el Congreso de Lima de 1847 supone la consagración definitiva de

⁶⁶ Cfr. WOOLDRIDGE, F., "Uti possidetis doctrine", en Encyclopedia of Public International Law, vol.10, R.Bernhardt (ed.), Amsterdam, 1987, p.519.

⁶⁷ Precisamente, la alusión a la fecha de la independencia como punto de referencia en la determinación de los límites administrativos, es lo que lleva a hablar con habitualidad del uti possidetis de 1810 y 1821, en cuanto ambos años constituyen una referencia válida en la proclamación de independencia de las colonias españolas de América del Sur, y América Central, respectivamente.

⁶⁸ Para ver el texto de esta Constitución que supone el punto de arranque de esta doctrina, vid. VAZQUEZ CARRIZOSA, A., Colombia y los problemas del mar, Bogotá, 1971, pp.30-31.

esta doctrina en el ámbito latinoamericano⁶⁹, doctrina que, posteriormente, ha sido objeto de aplicación en numerosos laudos arbitrales como principio de solución -tal y como tendremos ocasión de constatar en el capítulo III de este trabajo-.

La transpolación de lo que se consideraba un principio del derecho regional americano a otras esferas geográficas, ha sido objeto de un amplio debate doctrinal⁷⁰ al que puso término, finalmente, el propio T.I.J. al consagrarlo como principio general del derecho internacional. Concretamente, el Tribunal fundamenta la aplicación de este principio en Africa, por un lado, en el artículo 3 de la Carta de O.U.A., y por otro, en la Resolución de El Cairo (AGH/Res.16-I) hecha en julio de 1964⁷¹.

⁶⁹ Así parecen entenderlo también, entre otros, DURAN BACHLER, S., *op.cit.*, p.40; LAPRADELLE, P. de, *op.cit.*, p.77; VAZQUEZ CARRIZOSA, A., *op.cit.*, p.29; CHECA DROUET, B., La doctrina americana del uti possidetis de 1810, Lima, 1936, p.54. Aunque no faltan voces en contra como la de AYALA, E., "El Uti-Possidetis en América", Revista de Derecho y Ciencias Sociales, 1932, pp.16-17.

⁷⁰ Entre las escasas excepciones que impugnan tal aplicabilidad podemos citar a BOURJORL-FLECHER, D., "Heurs et malheurs de l'"uti possidetis". L'intangibilité des frontières africaines", Revue juridique et politique, indépendance et coopération, 1981, pp.811-835; o BENMESSAOUD TREDANO, A., Intangibilité des frontières coloniales et espace étatique en Africa, París, 1989, pp.85-86, para este autor en Africa se ha consagrado el principio de intangibilidad de las fronteras, que es absolutamente diferenciable del uti possidetis.

Una de las principales objeciones que se han esgrimido contra la extensión del uti possidetis, es la de que se trata de un principio de delimitación, basado en mantener los límites coloniales, que surge para ser aplicado respecto de territorios sometidos a una misma, a una única Potencia colonial, España; de ahí que no sea factible su aplicación cuando los territorios a delimitar procedan de varias Potencias coloniales, como es el caso de Africa.

⁷¹ Vid. I.C.J.Reports, 1986, pp.565-566, pa.21 y 22, donde el tribunal recoge las referencias explícitas e implícitas de ambos textos legales al uti possidetis, en conexión con el principio de intangibilidad de las fronteras.

La admisión de la aplicabilidad del uti possidetis iuris en Africa, parece estar confirmada por la reciente demanda presentada por Camerún contra Nigeria (29 de marzo y 6 de junio 1994), en la que el primero aboga por la estricta aplicación de este principio en el trazado de su frontera común en el lago Tchad, así como en su frontera marítima (vid. C.I.J., Annuaire, 1993-1994, pp.214-217).

El problema de la extensión geográfica del uti possidetis iuris está en íntima conexión con el de la determinación de su NATURALEZA JURIDICA. Respecto a esta importante cuestión, las opiniones emitidas son muy variadas, existiendo una marcada divergencia -a veces, incluso, contradicción- entre un cierto sector doctrinal y la doctrina del T.I.J. proclive a su plena inserción como principio jurídico.

En un acercamiento a las distintas posiciones doctrinales sobre el tema, éstas oscilan entre la consideración de principio político o jurídico, o incluso, algunos que optan por la doble calificación política y jurídica⁷². Así, para Bardonnet⁷³ se trata de "un principe politique, de nature conservatoire"; posición que también parece desprenderse de las palabras de Jennings⁷⁴, al aludir indirectamente al mismo como "this type of essentially political argument". En este ámbito de limitación de la eficacia jurídica del uti possidetis iuris, llegamos a encontrar posturas que parecen, incluso, negarle toda vigencia a este principio al afirmar que, "in no case has the International Community recognized, as an institution of international law"⁷⁵.

Por otro lado, no faltan autores que proclaman, sin lugar a duda, el carácter

⁷² Es el caso de PINHO CAMPINOS (cfr. op.cit., pp.110-111).

⁷³ Vid. "Les frontières terrestres et la relativité de leur tracé", R. des C., nº153, 1976-V, p.56.

⁷⁴ Vid. The Acquisition..., op.cit., p.78; Jennings lo sitúa como argumento de continuidad histórica.

⁷⁵ Esta es la posición, absolutamente insostenible en nuestra opinión, mantenida por BLOOMFIELD (cfr. The British Honduras-Guatemala Dispute, Toronto, 1953, p.94).

de principio jurídico del uti possidetis, sobre todo por parte de la doctrina hispanoamericana⁷⁶; dentro de ésta encontramos posiciones matizadas, como la de Barberis⁷⁷, para quien "sólo posee valor jurídico convencional, o sea, vale como norma en la medida en que aparece incluida en un Tratado". En nuestra opinión, ésta es la postura más correcta que se desprende de una aceptación sin reservas de las afirmaciones del T.I.J. en torno al uti possidetis iuris. Como ya hemos indicado, a juicio del Tribunal se trata de "a firmly established principle of international law"⁷⁸, situado en el mismo plano y en íntima conexión con el principio de libre determinación de los pueblos y el de intangibilidad de las fronteras.

Por último, no podemos concluir esta breve referencia al principio del uti possidetis iuris sin poner de manifiesto la existencia de otras concepciones en torno a los elementos de este principio. Concretamente, nos estamos refiriendo al llamado UTI POSSIDETIS DE FACTO, que "reconoce a un Estado las tierras que la

⁷⁶ Entre otros, podemos citar a GROS ESPIELL, H., España y la solución pacífica de los conflictos limítrofes en Hispano-América, Madrid, 1984. En nuestro círculo, el prof. SANCHEZ RODRIGUEZ es el más resuelto defensor de la naturaleza jurídica del uti possidetis iuris (cfr. "Uti possidetis: la reactualización jurisprudencial de un viejo principio (a propósito a la sentencia del TIJ [Sala] en el asunto Burkina Faso/República de Mali", R.E.D.I., 1988, pp.121-151).

⁷⁷ Vid. "La regla del uti possidetis en las controversias limítrofes entre Estados hispanoamericanos", en Liber Amicorum. Colección de estudios jurídicos en homenaje al Prof.Dr.José Pérez Montero, vol.I, Oviedo, 1986, p.139.

⁷⁸ Vid. I.C.J.Reports, 1986, p.565, pa.20. Esta afirmación es, posteriormente, corroborada por el propio Tribunal en el asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras (cfr. I.C.J.Reports, 1992).

provincia o entidad sobre la cual se ha erigido ocupaba en el momento de su Independencia, hayan formado parte o no de sus límites teóricos"⁷⁹. Esta era la 'versión' del uti possidetis que sostenía Brasil referida, claramente, a la posesión pacífica e ininterrumpida, independiente de otros títulos. Según este criterio, el dominio internacional ha surgido en América de la posesión material pura y simple, en oposición al de iure, para el que la atribución territorial estaría basada exclusivamente en lo que establecieran los documentos coloniales, esto es, en títulos jurídicos y prescindiendo del dato de la posesión. De esta forma, en las controversias que afectaban a Brasil y a alguna república hispanoamericana, el punto de referencia lo constituían los tratados celebrados entre las antiguas metrópolis (Tratado de San Ildefonso de 1777, fundamentalmente), y en la medida que éstos quedaban sin efecto, los límites venían definidos por el resultado de la simple posesión de hecho. No faltan ejemplos, en este sentido, en la jurisprudencia arbitral⁸⁰.

Sin embargo, debemos destacar que esta noción de uti possidetis de facto no fue nunca incorporada a tratados, documentos de congresos internacionales ni a las constituciones de ningún Estado; se trata, pues, de una fórmula claramente acuñada por un sector doctrinal contrario a la interpretación de iure del principio del

⁷⁹ Sobre el tema de la dialéctica uti possidetis de iure y de facto, recomendamos a GANDIA, E. de, Los derechos del Paraguay sobre el Chaco Boreal y las doctrinas del "Uti possidetis" en el siglo XVI, Buenos Aires, 1935; URQUIDI, J.M., El uti possidetis iuris y el de facto, Cochabamba, 1946; o, ACCIOLY, H., "Le Brésil et la Doctrine de l'uti possidetis", R.D.I., 1935, pp.36-45.

⁸⁰ Baste citar la controversia fronteriza entre Brasil y Argentina, asunto de Misiones, resuelta por el laudo del Presidente Cleveland, 5 febrero 1895; éste basó su decisión en los Tratados de límites de 1759, 1760 y 1750 concluidos entre España y Portugal (vid. MOORE, International Arbitrations, vol.2, pp.2020-2023).

uti possidetis.

2. Sucesión de Estados: La sucesión de Estados a tratados de fronteras.

Una gran parte de la doctrina e incluso el propio T.I.J.⁸¹, han indicado claramente la vinculación existente -lo cual no debe traducirse, en nuestra opinión, en conexión permanente sino ocasional- entre el principio del uti possidetis iuris y la sucesión de Estados, en cuanto la regla general de Derecho internacional general en la materia establece que, en principio, un Estado sucede a los límites territoriales de su predecesor. Cuando se produce un fenómeno de sucesión a otro Estado, el último mantiene como fronteras los límites pre-existentes del anterior. Efectivamente, de acuerdo con el artículo 2, apartado 1.b, del Convenio de Viena sobre Sucesión de Estados en materia de tratados, de 23 agosto 1978 (que posteriormente recoge literalmente el Convenio de Viena sobre sucesión de Estados en materia de bienes, archivos y deudas de Estado, de 8 abril 1978), 'sucesión de Estados'⁸² significa "la sustitución de un Estado por otro en la responsabilidad de

⁸¹ Cfr. En el plano doctrinal, entre otros, CUKWURAH, A.O., The settlement..., op.cit., p.112, para quien el uti possidetis se relaciona e, incluso, constituye una prolongación del concepto de sucesión de Estados; en la misma línea, podemos citar a VERZJIL, International Law in Historical Perspective, vol.7, 1974, pp.171 y 303, TYRANOWSKI, J., "State Succession: Boundaries and Boundary Treaties", Polish Yearbook of International Law, 1980, pp.127-128, o KAIKOBAD, K.H., "Some observations on the doctrine of continuity and finality of boundaries", B.Y.B.I.L., 1983, pp.126-127. Por parte de la jurisprudencia, cfr. I.C.J.Reports, 1986, p.565, pa.20.

⁸² La expresión 'sucesión de Estados' ha sido objeto de críticas desde el punto de vista terminológico, tal y como lo analiza en profundidad el prof. GONZALEZ CAMPOS en su trabajo, "Algunas consideraciones sobre los problemas de la Sucesión de Estados", R.E.D.I., 1963, pp.564 y ss.

las relaciones internacionales de un territorio"; de este concepto se desprende claramente que el Estado sucesor adquiere la soberanía sobre un territorio determinado, el territorio que se encontraba bajo la soberanía del Estado predecesor en el momento de la sucesión. No es extraño, pues, encontrar afirmaciones que ligan la sucesión de Estados con el derecho de atribución territorial como "different aspects of the same problem"⁸³.

En este contexto, el aspecto más importante del problema de la sucesión de Estados que entra en juego, es el referente a la sucesión respecto a los tratados, y más concretamente, a tratados de fronteras, donde, en ningún caso, opera la regla de la tabla rasa que tiende a la no obligatoriedad para el Estado sucesor de los tratados celebrados por el Estado predecesor⁸⁴. Esta cuestión fue objeto, precisamente, de una ardua discusión doctrinal entorno a su excepcionabilidad respecto al régimen general de la sucesión en las obligaciones convencionales, que ha sido finalmente zanjada por el citado Convenio de Viena de 1978. La disposición clave que determina el régimen jurídico de la sucesión en materia de tratados de fronteras, es el artículo 11 que establece expresamente:

"Una sucesión de Estados no afectará de por sí:

- a) a una frontera establecida por un tratado; ni
- b) a las obligaciones y los derechos establecidos por un tratado y que se refieran al régimen de una frontera.

⁸³ En este sentido, cfr. JENNINGS, R.Y., "General Course of International Law", R.des C., nº121, 1967-II, p.440.

⁸⁴ Cfr. PASTOR RIDRUEJO, J.A., Curso de derecho..., op.cit., p.322. A este autor, y a la bibliografía que él mismo cita (p.319), remitimos en relación a las cuestiones específicas planteadas por la sucesión de Estados en materia de tratados, y en concreto a las diferenciaciones por razón del tipo de sucesión, que no tienen lugar en nuestro estudio.

Este artículo expresa el incuestionable principio de que la sucesión de Estados, en el caso de que existan tratados internacionales estableciendo fronteras, no afecta a las mismas; lo que se traduce, a su vez, en el hecho de que el sucesor está obligado por las fronteras internacionales existentes, así como por los derechos y obligaciones territoriales contemplados en los tratados que las fijan.

Dos principios entran en el contexto de esta específica regulación, el de *continuidad e inviolabilidad de las fronteras*. La continuidad de las fronteras del Estado, en el caso de sucesión de Estados, constituye la base para la sucesión ipso iure respecto de los tratados de fronteras; continuidad que afecta a todas las fronteras. En conexión con este principio, la inviolabilidad, en el contexto de la sucesión de Estados, significa la continuación en las fronteras a pesar del cambio de soberanía. Esto se traduce en el hecho de que sólo pueden producirse cambios en las fronteras como consecuencia del mutuo consentimiento de los Estados afectados, y no como resultado de actos unilaterales.

En relación a una correcta interpretación de este artículo 11, Tyranovski⁸⁵ afirma que ésta debe producirse "in the context of the relevant provisions of the Convention concerning succession in respect of treaties with regard to particular cases of succession of States". De esta forma, pueden individualizarse cinco situaciones de sucesión diferentes respecto de las cuales es preciso determinar la correcta aplicación de la regla de la sucesión de los tratados de fronteras:

⁸⁵ Vid. "Boundaries and Boundary Treaties in the Law of State Succession", en Thesaurus Acroasium, vol.XIV, 1985, pp.502-532, para este aspecto concreto de la interpretación del artículo 11, y todo el trabajo, en general (pp.459-540) para un estudio en detalle del problema de la sucesión de Estados en materia de tratados de fronteras.

1. Cesión: El principio básico que debe aplicarse en los casos de cesión es el de la regla del 'tratado de fronteras móvil'. Un territorio que sufre un cambio de titularidad en la soberanía, pasa del régimen del Estado predecesor al del sucesor en la soberanía; de esta forma, en el momento de la sucesión empiezan a aplicárseles los tratados del sucesor, resultando inaplicables los del predecesor.
2. Secesión: La situación es similar al caso de cesión. La secesión es seguida por la sucesión ipso iure respecto de los tratados de fronteras con aplicación del principio de separabilidad de las provisiones del tratado.
3. Disolución de un Estado: A la luz del artículo 34 del Convenio del 78, todos los tratados relativos a fronteras pasan a los Estados sucesores.
4. Fusión de Estados: En base al artículo 31 del Convenio del 78 cabe deducir que se heredan los tratados de fronteras de los predecesores sin ninguna excepción.
5. Estados de reciente acceso a la Independencia: Es quizá el supuesto donde la sucesión ipso iure adquiere un aspecto diferente, sin duda, por la especial vinculación que presenta respecto del principio del uti possidetis iuris. En estos casos, los tratados de fronteras son tan sólo la base y la prueba de una línea fronteriza.

La práctica jurisprudencial nos proporciona, igualmente, ejemplos de aplicación de la regla de sucesión. Baste citar, a nivel arbitral, la afirmación efectuada por el tribunal en el asunto de la delimitación fronteriza entre Costa Rica y Panamá:

" Costa Rica will be taken as representing not only rights enjoyed by

it in its own name, but all those concerning the matter here in dispute which possesses as the successor of a prior government, the Republic of Central America, and Panama will likewise be taken as representing for the same purposes, not only its own rights, but also those of its governmental ancestors, the Republic of Colombia, the Republic of New Granada, the United States of Colombia and the Republic of Colombia"⁸⁶.

El asunto del Templo de Preah Vihear, es la mejor muestra del enfrentamiento del T.I.J. con el problema de la sucesión de Estados y las fronteras internacionales. En este caso el Tribunal debía enfrentarse a la validez del Tratado de límites de 1904 y mapas anexos, entre Francia -a quien sucedía Camboya- y Siam -actual Tailandia-, decidiendo, finalmente a favor de la misma en base a argumentos de aquiescencia y estoppel, a los que no fue extraña la asumida sucesión de Camboya a los derechos de Francia por virtud del tratado en cuestión⁸⁷. Sin embargo, como ejemplo más reciente de sucesión en materia de tratados de fronteras, no podemos dejar de citar el asunto de la controversia fronteriza entre Libia y Chad (este caso será analizado con más detalle en el capítulo III), 3 febrero 1994, en el que el T.I.J. tuvo que establecer la correcta interpretación de una serie de textos legales de la época colonial, a los que ambos

⁸⁶ Vid. U.N.R.I.A.A., vol.II, p.528 (el subrayado es nuestro). Otro claro ejemplo de aplicación de sucesión en instancia arbitral es el laudo de 6 junio de 1904, en el asunto de la delimitación de la Guyana británica, entre Gran Bretaña -sucesora de Holanda- y Brasil -sucesora de Portugal- (cfr. R.G.D.I.P., 1904, pp.18-20); o, el posterior de la Isla de Palmas (cfr. R.G.D.I.P., 1935, pp.156-202), si bien, este último en un sentido más bien negativo.

⁸⁷ Vid. I.C.J.Reports, 1962, p.32.

Estados estaban vinculados como sucesores⁸⁸.

B) OTROS CRITERIOS IGUALMENTE UTILIZADOS EN ESTE CONTEXTO: LOS CRITERIOS NATURALES Y ARTIFICIALES.

Sin embargo, los Estados al establecer sus fronteras pueden optar por la fijación ex novo de un trazado originario, situación que es la más común. Esta operación se lleva a cabo mediante la aplicación de diversos criterios, ya sea de forma individual o conjunta, dependiendo de las circunstancias de cada frontera - criterios que, por otra parte, pueden jugar también en conjunción con límites pre-establecidos ante las insuficiencias, bien del uti possidetis iuris, bien, en términos generales, del título jurídico que las contiene-.

Varias clasificaciones se han propuesto, por parte de la doctrina, en torno a los criterios de delimitación territorial. De todas ellas⁸⁹, nosotros optamos, por

⁸⁸ Tales textos jurídicos son los Convenios franco-británicos de 1898, y su Declaración adicional de 1899, y de 1919, así como el Cambio de cartas franco-italiano de 1902; vid. I.C.J.Reports, 1994, pp.4-106.

⁸⁹ Frente a la clasificación tradicional propuesta (defendida, entre otros, por HOLDICH, Th., "Political Boundaries", Scottish Geographical Magazine, 1916, p.501, y ZAMBRANO VELASCO, J.A., op.cit., p.288), Boggs propone una clasificación más comprehensiva (International Boundaries. A Study of Boundaries Functions and Problems, Londres, 1961, p.25), que diferencia cuatro tipo de fronteras, en atención a otros tanto criterios de delimitación: físicos, geométricos, antropogeográficos y fronteras compuestas. Esta clasificación ha sido recogida por autores como CUKWURAH (cfr.op.cit., p.18) o CHAO (cfr. "Legal Nature...", op.cit., pp.80-81). Como punto intermedio, GONZÁLEZ CAMPOS, J.D., y otros, pugnan por una clasificación tripartita que distingue criterios naturales, imaginarios y artificiales, a la que cabría hacer la observación de que los llamados criterios imaginarios no son sino artificiales, por lo que cabría plenamente la simplificación (cfr. Curso de

la simplicidad y utilidad de la distinción, por la clasificación tradicional que distingue los criterios naturales (también llamados por Cukwurah⁹⁰ 'físicos') y los criterios artificiales, la aplicación de unos u otros nos llevará a hablar, respectivamente, de fronteras naturales o de fronteras artificiales.

■ **CRITERIOS NATURALES:** Los límites naturales, llamados *arsifinios*, son de varias clases y se refieren a los caracteres geomorfológicos del terreno, es decir, tienen en cuenta algún prominente aspecto físico de la superficie de la tierra, tal y como una cadena montañosa o un río. A diferencia de los criterios artificiales ofrecen la ventaja de suministrar un punto de referencia objetivo, pero, en contrapartida, a veces ese criterio es insuficiente o inestable, bien porque el aspecto natural no exista, bien porque éste sufra variaciones. Los principales criterios naturales son los siguientes:

- Límites montañosos. Para la determinación de fronteras en regiones montañosas, se han utilizado tres fórmulas (existe un cuarto criterio, el del trazado según la línea del pie de montaña o línea de base de las pendientes, tan sólo utilizado antiguamente en la región balkanodanubiana):

1. La delimitación según la línea de las crestas, de los picos más altos, es el llamado criterio orográfico (aplicado por el Consejo Federal Suizo en su laudo de

derecho ... op.cit., p.468).

⁹⁰ Para este autor el adjetivo 'natural' es muy desafortunado, siguiendo de esta forma la línea de pensamiento de BOGGS (op.cit., p.23), e implica serias dificultades, de ahí que prefiera hablar de 'fronteras físicas' (vid. op.cit., pp.17 y 19).

1900⁹¹, al determinar la frontera entre Brasil y Francia, dió preferencia a la línea de los montes Tumuc Humac sobre la de división de aguas)

2. La delimitación según la línea de la partición o divisoria de las aguas, que algunos simplemente llaman 'de las cumbres', es el criterio hidrográfico (la sentencia arbitral dictada por la Reina Isabel de Inglaterra, 9 diciembre 1966⁹², entre Argentina y Chile, hizo prevalecer la línea local de partición de aguas).

3. La línea de las cumbres más altas que dividen aguas, que aparece recogida en el Tratado de límites de 1881 entre Argentina y Chile, y que, posteriormente, ha sido objeto de aplicación en los laudos de 1902 (Cordillera de los Andes) y 1994 (Laguna del Desierto) que interpretan dicho tratado⁹³.

Es interesante destacar que en la práctica puede ocurrir que no se distingan tales procedimientos técnicos y se asocien en una delimitación común.

- Límites fluviales. Es frecuente recurrir al curso de los ríos para establecer las fronteras; en este caso hay tres métodos principales, que resultan igualmente de aplicación en el caso de límites lacustres:

1. Límite en la ribera: Es el procedimiento más antiguo y consiste en tomar por frontera una de las orillas del curso de agua, dejando el río bajo la soberanía exclusiva de uno solo de los dos Estados ribereños.

2. Límite de la línea media de las aguas: En este caso la frontera pasa por el medio

⁹¹ Vid. MARTENS, N.R.G.T., 3ª se., vol.X, pp.153-179.

⁹² Vid. U.N.R.I.A.A., vol.XVI, pp.109-182.

⁹³ Vid. U.N.R.I.A.A., vol.IX, pp.30-49, y Original mecanografiado, respectivamente.

geométrico del curso de agua, tomado en su nivel ordinario y constatado durante un período suficientemente largo, abstracción hecha de las inundaciones y sequía estacionales (ej. Bidasoa).

3. La regla del thalweg: Referida a ríos navegables, supone establecer la frontera en la línea media del principal canal navegable; pero también es considerada como el *centro de la parte más profunda del río* (ej. Miño).

En relación a la determinación de los límites fluviales se suscitan numerosas cuestiones, tales como la condición de las islas y de los puentes, la delimitación de las desembocaduras y los efectos de los cambios ocurridos en el curso de los ríos, pero sobre las cuales no vamos a entrar por entender que se exceden del marco de nuestro trabajo⁹⁴.

■ CRITERIOS ARTIFICIALES: Cuando hablamos de fronteras artificiales estamos haciendo referencia a aquellas líneas fronterizas que no dependen de aspectos naturales, sino que han sido artificialmente proyectadas haciendo caso omiso de la topografía y geografía del territorio.

- Límites astronómicos. El procedimiento de fijación de las líneas se apoya en los paralelos y los meridianos:

1. Paralelos de latitud. Este método ha sido ampliamente utilizado, tanto en la *delimitación de las posesiones coloniales* (ej. entre España e Inglaterra, *Tratado de*

⁹⁴ Para un análisis de las mismas remitimos a CUKWURAH, op.cit., pp.56 a 70.

Madrid de 1630⁹⁵ que se refería al Trópico de Cáncer y a la línea del Ecuador), como actualmente para la determinación del espacio Solar (al Norte del paralelo 66°33' de latitud Norte, y al Sur del paralelo 66°33'' de latitud Sur), delimitación de espacios marítimos...

2. Meridianos de longitud. El recurso a este procedimiento es más raro, citándose como ejemplo clásico el Tratado de Tordesillas de 1494⁹⁶, entre España y Portugal, que establecía una línea que alcanzaba los polos y pasaba a 370 millas al Oeste de Cabo Verde.

Es muy frecuente, sin embargo, la utilización simultánea de paralelos y meridianos, tal y como sucedió en el asunto del Chaco Boreal, entre Bolivia y Paraguay⁹⁷.

- Límites geométricos. Constituyen otra modalidad de límites artificiales, que pueden venir constituidos, bien por una línea recta alineando dos puntos conocidos, bien por un arco de círculo cuyo trazo se establece a partir de un punto dado. Este segundo criterio, el del arco de círculo, ha sido aplicado en el laudo de 20 octubre 1903⁹⁸, respecto a la determinación de la frontera entre EE.UU. y Canadá.

⁹⁵ Vid. FONTES HISTORIAE IURIS GENTIUM, vol.II, pp.59-61.

⁹⁶ Vid. MARTENS, Recueil de Traités, 1ªed., supl.I, p.372.

⁹⁷ Sentencia de 10 octubre 1938, vid. A.J.I.L., 1939, pp.180-183.

⁹⁸ Se trata del asunto de Alaska, que versaba sobre la interpretación del Tratado anglo-ruso de 28 febrero 1825 (vid. U.N..R.I.A.A., vol.XV, pp.481 y ss).

- Como criterios artificiales pueden incluirse también aquellos que son resultado de la acción humana, construyendo determinados artificios o instalaciones que ponen de relieve el trazado de la línea fronteriza, tales como el sistema de amojonamiento, los muros, las alambradas, los canales, las carreteras...; criterios delimitadores que, por otra parte, son igualmente el resultado lógico de un correspondiente proceso de demarcación.

SECCION 3ª: INTERRELACION FRONTERAS-SOBERANIA TERRITORIAL: CONEXION ENTRE CONFLICTOS DE ADQUISICION Y CONFLICTOS DE DELIMITACION DEL TERRITORIO.

De forma clásica, los autores distinguen entre los conflictos territoriales de delimitación y los conflictos territoriales de adquisición⁹⁹; sin embargo, esta distinción puede difuminarse fácilmente cuando se procede a aplicaciones concretas. En efecto, la íntima relación entre fronteras y soberanía, a la que ya aludíamos en páginas anteriores, está ampliamente soportada tanto por la literatura como por la jurisprudencia arbitral y judicial. El árbitro Max Huber, en el asunto de

⁹⁹ En este sentido LAPRADELLE (cfr. op.cit., pp.140-143), es el más firme defensor de tal diferenciación, entendiendo que, mientras en los conflictos de delimitación se trata de elegir una de las líneas de división posibles, en los de adquisición el problema es atribuir la soberanía de un territorio.

la Isla de Palmas¹⁰⁰, introdujo fuerza sobre este punto al advertir que

"pour qu'une partie de la terre soit reconnue comme rentrant dans un Etat déterminé, la condition juridique nécessaire est que ce territoire se trouve soumis à la souveraineté de l'Etat... La souveraineté territoriale est, en général, une situation reconnue et délimitée dans l'espace, soit par les frontières dites naturelles telles qu'elles sont reconnues par le droit international, soit par des signes extérieurs de démarcation non contestés".

Ciertamente, aunque existe una diferencia en carácter entre los conflictos de delimitación y las controversias de adquisición territorial, ésta no debe ser profundizada en extremo; no se trata de una distinción significativa, pues ambos tópicos son más o menos interdependientes. Tanto las cuestiones fronterizas como las territoriales son parte de una cuestión mayor, la de la soberanía territorial.

Tal y como indicábamos en el apartado anterior, la frontera ha venido siendo definida por la doctrina como "the line which marks the limits of the regions within the State can exercise its own sovereign right"¹⁰¹. Partiendo, pues, de esta definición resulta claro que cuando dos Estados delimitan sus fronteras internacionales lo que de hecho están procediendo a hacer es a fijar los límites de su propia soberanía; recíprocamente reconocen la soberanía en el otro lado de la línea fronteriza. En otras palabras, están delimitando el ámbito de su independencia territorial, es decir, su derecho a ejercer las funciones estatales dentro de su respectivo territorio con exclusión de terceros Estados. Por tanto, podemos afirmar

¹⁰⁰ Vid. R.G.D.I.P., 1935, p.163.

¹⁰¹ Esta definición 'clásica' es la pronunciada por ADAMI, y que recoge SHARMA, cfr. op.cit., p.2.

sin ninguna duda que la frontera es prima facie la prueba del límite de la soberanía de un Estado, y se halla naturalmente ligada al ejercicio de la soberanía territorial; como se señala en el asunto de las Pesquerías del Atlántico Norte¹⁰², "one of the essential elements of sovereignty is that it is to be exercised within territorial limits". En consecuencia, la principal función de la frontera, tal y como afirma Bardonnnet¹⁰³, es delimitar las soberanías y separar los espacios que constituyen el territorio de un Estado y están sometidos a su jurisdicción, del territorio de otro Estado.

A estas afirmaciones cabría añadirles, por otro lado, una referencia más: cuando se decide sobre la adquisición de un territorio por un Estado determinado, lo que se está haciendo realmente es fijar -delimitar- los límites dentro de los cuales ese Estado podrá ejercer su soberanía.

Tres datos resultan, finalmente, determinantes de la estrecha conexión existente entre fronteras internacionales y soberanía territorial:

- En primer lugar, la realización de las operaciones relativas al trazado de la frontera -tales como distribución, delimitación, demarcación y administración-, por sí mismas constituyen actos de soberanía;
- en segundo lugar, en la medida que la línea fronteriza representa los límites de la soberanía continuamente desplegada por los Estados adyacentes, cualquier frontera establecida puede resultar concluyente de una soberanía efectiva entre ellos;
- por último, una frontera marca los límites de extensión y ejercicio del control

¹⁰² Vid. U.N..R.I.A.A., vol.XI, p.180.

¹⁰³ Vid. "Les frontiéres...", op.cit., p.21.

administrativo y de la jurisdicción por parte de un Estado.

Resulta, pues evidente, que cuando se habla de conflictos de delimitación y conflictos de adquisición territorial, en ambos casos se está haciendo referencia a un mismo problema: la fijación del ejercicio de la soberanía sobre un territorio determinado. La jurisprudencia de los tribunales arbitrales y judiciales se presta a apoyar estas formulaciones. El asunto de la Isla de Palmas¹⁰⁴ es el caso más instructivo de todos, pues, tratándose de un claro asunto de adquisición territorial, el árbitro hizo cambiante referencia a reglas y principios pertenecientes tanto a cuestiones fonterizas como territoriales: sostiene la posibilidad de aplicar la regla del continuo y pacífico ejercicio de funciones estatales a la delimitación fronteriza; alude, igualmente, a las fronteras naturales...

Posteriormente, en el plano judicial, los asuntos de la soberanía sobre ciertas parcelas fronterizas y el del Templo de Preah Vihear¹⁰⁵ han constituido buena prueba del solapamiento de estos dos tipos de controversias -como tendremos ocasión de analizar en detalle en el capítulo IV de este trabajo-, al tratarse de problemas de delimitación fronteriza que fueron analizados por el Tribunal desde el ángulo de la atribución de la soberanía. A estos ejemplos concretos de la práctica, cabe añadir la afirmación de principio efectuada por el propio T.I.J. en el asunto de la delimitación fronteriza entre Burkina Faso y Mali¹⁰⁶, al enfrentarse

¹⁰⁴ Vid. R.G.D.I.P., 1935, pp. 156-202.

¹⁰⁵ Vid. I.C.J.Reports, 1959, pp.209-258, y 1962, pp.5-145, respectivamente.

¹⁰⁶ Vid. I.C.J.Reports, 1986, p.563.

al planteamiento por las Partes de esta dicotomía, afirmación que constituye un auténtico obiter dicta sobre la materia:

"17. In fact, however, in the great majority of cases, including this one, the distinction outlined above (conflictos de adquisición y delimitación) is not so much a difference in kind but rather a difference of degree as to way the operation in question is carried out. The effect of any delimitation, no matter how small the disputed area crossed by the line, is an apportionment of the areas of land lying on either side of the line... Moreover, the effect of any judicial decision rendered either in a dispute as to attribution of territory or in a delimitation dispute, is necessarily to establish a frontier".

Sin embargo, no faltan detractores de esta interrelación, que basan su argumentación, principalmente, en la específica diferenciación que la regulación del derecho internacional establece respecto a los distintos criterios de solución para uno u otro tipo de conflictos. Así, los aspectos más salientes del derecho internacional respecto a los conflictos de adquisición territorial están fundados en las reglas tradicionales de ocupación, prescripción, cesión o conquista; mientras que para delimitar el territorio se prevén también criterios especiales¹⁰⁷ -a unos y otros hemos hecho referencia en los apartados anteriores-.

Frente a esta argumentación, el examen de la propia jurisprudencia (como veremos en los próximos capítulos) nos ofrece una buena muestra del solapamiento de ambos tipos de principios. En efecto, tanto en el caso de cuestiones fronterizas

¹⁰⁷ Cfr. En este sentido, JENNINGS, The acquisition..., op.cit., p.14; BOGGS, International..., op.cit., p.31; o HILL, Claims..., op.cit., p.108.

El hecho de que un conflicto fronterizo pueda envolver también modos de adquisición del territorio, se justifica por estos autores porque al proponer los Estados dos líneas distintas de localización de la frontera, es lógica la existencia de territorio entre ambas líneas lo que supone una cuestión territorial.

como territoriales, el Estado demandante afirmará que ha ejercido soberanía y jurisdicción en el área disputada; que hay ciertos acuerdos válidos para probar la localización de la frontera o el control del territorio por el demandante; que hay ciertos aspectos naturales o geográficos distintivos de la frontera o del territorio *bajo posesión; que es heredero de la frontera o del territorio del Estado predecesor;* y así sucesivamente. Por su parte, el otro Estado, en respuesta, efectuará comparables réplicas para soportar su caso basadas en similares argumentos. De esta forma, los principios jurídicos básicos relativos a ambos tipos de conflictos incluyen, indistintamente, la promoción de expectativas creadas por una posesión efectiva y continua del territorio, el valor de acuerdos internacionales o títulos jurídicos relevantes, y la protección de expectativas derivadas de la tradicional visión de que las fronteras deben conformarse a distintos aspectos geográficos y naturales.

Cierto es que, en ocasiones, los conflictos de adquisición territorial surgen cuando un Estado pretende sobreponerse o eliminar a otro en relación a un territorio determinado o aislado; tales controversias no envuelven entonces el trazado de líneas entre Estados adyacentes. De ahí, que en este sentido sea correcta la afirmación¹⁰⁸ de que, mientras todas las controversias de fronteras son cuestiones de atribución territorial, no todas las controversias de adquisición territorial son problemas de fronteras.

¹⁰⁸ Debida a CUKWURAH (cfr. op.cit., p.6), y seguida por otros autores como PRESCOTT (cfr. op.cit., p.108).

En conclusión, por un lado, la distinción entre conflictos de adquisición y delimitación del territorio existe y debe ser mantenida, pero sólo a efectos didácticos y de análisis (como resultará pertinente efectuar en capítulos posteriores de este trabajo). Por otro, entendemos que es perfectamente sostenible el solapamiento de ambos tipos de conflictos, la mutua interacción de los mismos y su final reconducción al problema único y mayor de la determinación, de la atribución de la soberanía.

CAPITULO II: APROXIMACION A LOS ASPECTOS GENERALES DE LOS CONFLICTOS DE ATRIBUCION TERRITORIAL (II): EL PROCEDIMIENTO PROBATORIO DE LA SOBERANIA EN LOS CONFLICTOS TERRITORIALES.

Reconducidos los problemas de delimitación y adquisición territorial al problema general de la atribución de soberanía, el problema conexo que se les plantea a los Estados, enfrentados a este tipo de conflictos ante un órgano jurisdiccional, es el de probar sus alegaciones, esto es, el de probar su soberanía. Pues, como hemos tenido ocasión de advertir y comprobaremos a lo largo de este trabajo, la adquisición del título de soberanía va íntimamente ligada al Estado que presente la mejor prueba del mismo, más concretamente, al que consiga probar que ha ejercido de forma más efectiva -continua y pacíficamente- las funciones estatales sobre dicho territorio.

Dada, pues, la importancia que ostenta la prueba respecto a la adquisición de soberanía sobre un territorio -circunstancia que justifica el estudio que abordamos-, entendemos que es necesaria una aproximación a la Teoría general de la prueba ante las jurisdicciones internacionales, antes de proceder a analizar las pruebas específicas que los Estados utilizan y presentan para probar su posesión

efectiva sobre el territorio disputado (capítulos IV y V). Aproximación que, dado los estrechos márgenes de que disponemos y el concreto objeto que persigue este trabajo, no será en profundidad¹ -pues ello exigiría su propio tratamiento individualizado- sino una mera orientación sobre el tema. Todo ello, sin olvidar que las propias Partes en sus compromisos pueden recoger específicas provisiones en relación a la presentación o la evaluación de la prueba.

SECCION 1ª: BREVE REFERENCIA A LA TEORIA GENERAL DE LA PRUEBA.

Al igual que en el derecho interno, la prueba tiene por objeto en derecho internacional obtener una representación ante el juez o árbitro del hecho desconocido, esto, descubrir la verdad; siendo, al mismo tiempo, la acción misma de determinar esa representación. No obstante, la prueba se presenta en derecho internacional en condiciones particulares, tal y como señala Lalive², pues, por un

¹ Para un estudio en detalle remitimos a los principales trabajos en la materia, que nos va a servir igualmente de apoyo: WITENBERG, J.C., "La théorie des preuves devant les juridictions internationales", R. des C., nº56, 1936-II, pp.3-105; y "ONUS PROBANDI devant les juridictions arbitrales", R.G.D.I.P., 1951, pp.321-342; LALIVE, J.F., "Quelques remarques sur la preuve devant la Cour Permanente et la Cour International de Justice", Annuaire Suisse de Droit International, 1950, pp.77-103; CHEHG, B., "Burden of Proof before the International Court of Justice", I.C.L.Q., 1953, pp.595-596; FITZMAURICE, G., "The Law and Procedure of the International Court of Justice, 1951-54", B.Y.B.I.L., 1953, pp.1-70; EVENSEN, J., "Evidence before International Courts", Acta Scandinavica Iuris Gentium, 1955, pp.44-62; SANDIFER, D.V., Evidence Before International Tribunals, Nueva York, 1975; THIRLWAY, H.W.A., "Evidence before International Courts and Tribunals", en Encyclopaediae of Public International Law, vol.1, R.Bernhardt (ed.), Amsterdam, 1981, pp.59-60.

² Vid. LALIVE, J.F., "Quelques remarques...", op.cit., p.77.

lado, la evolución descentralizada de este derecho no ha permitido a los sistemas jurídicos nacionales ejercer una influencia directa en esta materia, a diferencia de otras; por otro, el ritmo espasmódico y discontinuo de los arbitrajes internacionales no ha favorecido la creación de un conjunto de reglas precisas y coherentes.

El planteamiento de la prueba hace surgir, inmediatamente, una serie de problemas conexos con la misma: ¿qué debe o qué tiene que ser probado?, ¿qué lugar ocupa la prueba en el procedimiento?, ¿a quién le incumbe probar?, ¿cuáles son los medios de que dispone? A estas cuatro cuestiones de qué, quién, cómo y con qué se desarrolla la prueba en los procedimientos internacionales intentaremos dar respuesta.

A) EL OBJETO DE LA PRUEBA.

Según una concepción, que el derecho internacional ha tomado prestada del derecho interno, la prueba debe referirse a un punto de hecho. Es necesario que se trate de un hecho controvertido, pertinente -es decir, relativo a la demanda-, y concluyente -de naturaleza tal que ejerza una influencia seria sobre la demanda-.

En conexión con esta afirmación³, podemos afirmar con Witenberg⁴ la

³ Recogida por LALIVE, vid. op.cit., p.81.

⁴ Vid. "La théorie des...", op.cit., pp.23-39.

existencia de dos límites que restringen el derecho de prueba: uno objetivo, ligado a la naturaleza de los hechos a probar, y otro subjetivo, que va a depender de la existencia de acuerdos entre los Estados litigantes.

El límite objetivo procede de la teoría de la pertinencia -llamada en el derecho anglosajón de la 'relevancy'- y se basa en la idea de que no se pueden probar hechos que no supongan interés jurídico para el litigio, es decir, que no van ejercer influencia alguna para la solución de éste; a sensu contrario, la irrelevancia o impertinencia del hecho probado constituye una causa de inadmisibilidad. Esto motivará que sea necesario analizar en cada caso si los hechos a probar presentan o no interés, si la decisión a otorgar es susceptible o no de ser influenciada por la prueba aportada en relación a los mismos. Tarea que viene condicionada por la existencia, en derecho positivo, de tres causas esenciales de no-pertinencia⁵: la prescripción extintiva, la cosa juzgada y la transacción, en cuanto una reclamación prescrita, una reclamación anteriormente juzgada y una transigida, son inadmisibles.

Por otro lado, la prueba presenta límites subjetivos que no resultan de reglas objetivas o impersonales, sino de acuerdos celebrados entre las Partes; aquélla puede, entonces, ser descartada porque el Estado que la ofrece lo ha hecho sin tener en cuenta un tratado que ha firmado. Es posible, sobre todo en el caso de tratados de arbitraje, que éstos contengan estipulaciones precisando elementos de

⁵ Cfr. ibidem.

hecho que debe comportar el litigio, por los cuales está condicionada la prueba, no pudiendo probar en contra de un compromiso existente. Pero no sólo puede tratarse de un acuerdo explícito, sino que puede ser implícito, esto es, resultante de una cierta actitud adoptada por las Partes en relación al litigio. Aquí entra en juego la doctrina del 'estoppel' o de los actos propios, por la que un Estado no puede ir contra sus propios actos⁶. Aplicada esta doctrina al ámbito de la prueba se traduce en que, habiéndose efectuado una concreta representación de los hechos por una de las Partes, en respuesta a la cual la otra Parte actúa condicionada por la creencia en dichos hechos, la primera no puede posteriormente probar que los hechos son distintos a los que ya antes había representado.

Hasta ahora hemos intentado dar respuesta al interrogante de lo que puede ser probado, sin embargo, otra cuestión surge al hilo de la primera⁷: dado que toda acción en justicia reposa sobre un conjunto de elementos de hecho o de derecho, ¿todos esos elementos deben quedar sometidos al procedimiento de la prueba? El problema de lo que debe realmente ser probado se halla regido por dos principios:

- 1. Obligación de probar todo hecho pertinente alegado en apoyo o en contra de una reclamación. La razón de ser de este principio radica en el desconocimiento por parte del juez o árbitro de las circunstancias que han motivado el conflicto; tan sólo por la vía de la prueba de los hechos aquél podrá conseguir la representación de la

⁶ El tema de la aquiescencia y de los actos propios lo abordaremos en el capítulo III, sección 2ª.B, por lo que remitimos a lo que entonces se exponga, así como a la bibliografía que se cite.

⁷ Tal y como nos la plantea WITENBERG, cfr. "La théorie des..., op.cit., p.29.

coyuntura que dio nacimiento a la controversia.

No obstante, hay hechos que son o pueden ser conocidos por el juez o árbitro, bien a título personal, bien por ser de dominio público. Por esta razón, aquél puede dispensarlos de ser probados, es decir, se exime la obligación de la prueba respecto de los mismos debido a su notoriedad⁸.

- 2. La obligación de probar se limita a los elementos de hecho, esto es, queda descartada para todo elemento jurídico de la reclamación. Este segundo principio de determinación del objeto de la prueba es fácil de justificar teóricamente: El derecho se supone conocido por el órgano jurisdiccional. Se trata de una ficción jurídica basada en la propia competencia del árbitro o el juez.

Sin embargo este principio sufre dos excepciones. La primera es la relativa a la aplicación eventual del derecho interno; la obligación de probar se exime respecto del derecho internacional, pero no respecto del derecho nacional que deberá ser probado, pues éste no se presume conocido por el juez o árbitro. No se puede extender la ficción jurídica del conocimiento a un derecho que escapa del ámbito competencial del órgano jurisdiccional, porque "elle n'est pas obligée de connaître également les lois nationales des différents pays... elle pourrait être éventuellement obligée de se procurer la connaissance du droit interne soit à l'aide

⁸ Esto ocurrió en el asunto de la Isla de Palmas, en el que el juez Huber consideró que el texto del Tratado de Utrecht, de 17 junio 1714, no debía ser probado por Países Bajos, que lo invocaba en su contra-memoria, porque era de 'notoriété publique et accessible aux parties' (vid. R.G.D.I.P., 1935, p.167). Creemos necesario recalcar, sin miedo a caer en la exageración, que este asunto, al igual que ocurre en otros ámbitos de nuestro trabajo, constituye la máxima autoridad en materia de teoría general de la prueba.

des preuves que lui fournissent les parties"⁹.

Una segunda excepción viene constituida por el derecho consuetudinario, pero no para las costumbres generales -como sostiene, creemos de forma desafortunada, Witenberg-, sino fundamentalmente para las costumbres particulares, tal y como la afirmó el propio T.I.J, en el asunto relativo al derecho de asilo¹⁰, pues las generales también se presumen conocidas por el árbitro o juez.

B) LA CARGA DE LA PRUEBA.

La prueba no es sólo un derecho, es también una carga; pues, determinar ante un órgano jurisdiccional la representación de un hecho que ignora, lograr la convicción de la realidad de un hecho, no es siempre posible y, además, no es siempre tarea fácil. ¿A quién corresponde soportar esa carga?

⁹ Tal afirmación la sostuvo el T.P.J.I. en el asunto del pago en oro de los empréstitos federales brasileños emitidos en Francia (vid. P.C.I.J., serie A, n°20-21, 1929, p.124).

¹⁰ En efecto, WITENBERG (vid. op.cit., pp.37-39) entiende que toda costumbre, al estar basada en hechos, tiene necesariamente que ser probada, incluso tratándose de costumbres generales. Nosotros rechazamos esta concepción, pues entendemos que al tratarse de una práctica que ha obtenido la aceptación de la Comunidad Internacional en su conjunto no necesita ser probada, idea que viene apoyada, como hemos visto por el propio Tribunal; vid. I.C.J.Reports, 1950, p.276; esta afirmación ha sido corroborada en la jurisprudencia posterior (caso de los derechos de los súbditos norteamericanos en Marruecos, I.C.J.Reports, 1952, p.200), así como por la unanimidad de la doctrina.

La respuesta a este interrogante se resume bajo la afirmación de que la obligación de probar incumbe a la Parte que alega un hecho; lo cual ha llevado a afirmar¹¹ que hay un principio general de derecho internacional por el cual la carga de la prueba recae exclusivamente sobre el Estado demandante. Creemos que tal afirmación debe ser, cuanto menos, si no rechazada, sí matizada, pues, si tenemos en cuenta que ambas Partes alegan hechos, recaerá sobre ambas la carga de probar los hechos que alegan (circunstancia que se da en el tipo de conflictos objeto de nuestro trabajo). Por tanto, podemos afirmar el principio de 'reparto de la carga de la prueba'. Este es, sin duda, el principio más lógico -aunque no único-, pues si la carga incumbiera tan sólo a uno de los Estados en litigio y éste no la pudiera administrar, la consecuencia sería la pérdida de su pretensión, lo cual supondría una situación de clara injusticia; lo mismo sucedería en el caso de que se dieran pruebas contradictorias, esto es, que ciertas pruebas militaran en favor del hecho que se intenta reproducir y otras, por el contrario, tendiesen a rebatir la existencia misma del hecho.

Por ello, sostenemos la conveniencia de la división de la prueba entre las Partes. Pero, sin embargo, el derecho internacional convencional guarda silencio al respecto; ni los Convenios de La Haya, ni los Estatutos respectivos del T.P.J.I. y del T.I.J. hacen alusión alguna a este reparto. ¿Debe esto interpretarse como un rechazo a este principio?, ésta es la pregunta que se nos plantea y que expuso

¹¹ Tal afirmación, extraída del derecho interno, es sustentada por SIMPSON, J.L. y FOX, H., International Arbitration. Law and Practice, Londres, 1959, p.194.

claramente la Comisión Mixta que conoció del asunto W.A.Parker v. México¹² en 1923:

"L'absence de règles internationales relatives à une répartition du fardeau de la preuve entre les parties est particulièrement évidente dans les arbitrages internationaux entre gouvernements exerçant leurs propres droits, -procédures dans lesquelles la distinction entre demandeur et défendeur est souvent inconnue et où les parties ont souvent l'obligation de fournir leurs actes en même temps. Ni la Convention de La Haye de 1907, ni le Statut ou les règles de la C.P.J.I. ne contiennent de règles répartissant entre les parties le fardeau de la preuve".

Esta decisión resume las razones que, generalmente, han venido invocándose para revocar la existencia de un principio de repartición de la carga de la prueba: imposibilidad de distinción entre demandante y demandado, inexistencia de tal distinción por ser de mutuo acuerdo el sometimiento al arreglo jurisdiccional, simultaneidad de presentación y silencio de los textos legales. Estos motivos, sin embargo, y siguiendo la opinión de Witenberg¹³ -que revoca cada uno de ellos-, no son decisivos. Por ello, podemos seguir manteniendo la existencia de este principio de reparto, ahora bien, habida cuenta del señalado silencio de los textos convencionales, deberemos plantearnos su existencia como principio consuetudinario de origen jurisprudencial.

En esta línea, la sentencia del juez Huber en el asunto de la Isla de Palmas, constituye, sin duda, el precedente más importante de esta proposición, que ha sido plenamente recogida por la jurisprudencia posterior -precedente que, por otro

¹² Vid. A.J.I.L., 1927, p.174.

¹³ Vid. "Onus probandi...", op.cit., pp.326-327.

lado, se produce en el marco de un conflicto territorial de atribución, lo que nos lleva a poder afirmar que en este tipo de conflictos se manifiesta como en ningún otro la obligación recíproca que incumbe a ambas Parte de probar sus títulos-. Efectivamente, se afirma en la isla de Palmas, que "le conflit ayant été soumis à l'arbitrage par un compromis, chaque partie doit établir les arguments sur lesquels elle base le droit de souveraineté qu'elle réclame sur l'objet en litigie"¹⁴.

En conexión con la carga de la prueba, el derecho internacional conoce y aplica dos principios esenciales¹⁵:

I. Deber de las Partes de colaborar en la prueba. Se trata de un principio de origen anglosajón que ha pasado al derecho internacional, comportando varias consecuencias importantes. Por un lado, la obligación de los Estados litigantes de suministrar al órgano jurisdiccional todos los documentos, notas, etc., que puedan poseer en relación a los hechos disputados y a las reclamaciones en causa; tal producción puede hacerse tanto de oficio como a instancia de Parte. La segunda consecuencia práctica se centra en la fuerza probatoria que se deberá atribuir a la no-producción por una de las Partes de los medios de prueba que está en su mano proporcionar; de esta forma, el juez o árbitro podrá formarse su representación del hecho basándose únicamente sobre el inicio de la prueba si el Estado demandado no colabora en el proceso de prueba. Como última consecuencia, se produce la

¹⁴ Vid. R.C.D.I.P., 1935, pp.161-162.

¹⁵ Cfr. sobre este punto, WITENBERG, J.C., "La théorie des...", op.cit., pp.47-55.

inversión de la carga de la prueba operada por la prueba prima facie, es decir, el comienzo de la prueba aportada por el Estado demandante hará revertir al Estado demandado la carga de la prueba contraria.

II. Deber impuesto al juez o árbitro de concurrir a la búsqueda de la verdad. Es la regla inversa a la de la neutralidad del juez que domina las legislaciones nacionales. El juez o árbitro internacional tendrá no sólo la facultad, sino también el deber, de trabajar personalmente en la reconstrucción de los hechos, de formarse él mismo la representación de las circunstancias, en una palabra, de jugar un papel activo en la búsqueda de la verdad¹⁶.

A este deber de investigación personal y de oficio, se corresponde la atribución al árbitro de amplias vías y medios de investigación prevista por las Partes en los correspondientes compromisos arbitrales. Tales son, en primer lugar, la potestad de requerir informaciones o esclarecimientos complementarios sobre uno o varios puntos dados, seguida del poder para proceder, sea cual sea el estado de la causa, a todas las investigaciones pertinentes. A estas vías de instrucción se añaden otros medios de información como son, los sumarios, los expertos, o el traslado al lugar en disputa, que van a facilitar al órgano jurisdiccional la reconstrucción del hecho litigioso¹⁷.

¹⁶ A este deber responde la afirmación contenida en el artículo 74 del Convenio de La Haya de 1907, de que "el juez internacional podrá y deberá proceder él mismo a todas las formalidades que comporta la administración de la prueba"; contenido seguido por el artículo 54 del Reglamento del T.P.J.I.

¹⁷ Por citar un ejemplo, mencionaremos el artículo 3 del compromiso arbitral de 23 enero 1925, entre EE.UU. y Países Bajos, respecto del conflicto sobre la Isla de Palmas (cfr. R.G.D.I.P., 1935, p.157).

Este principio puede, no obstante, sufrir una excepción, la de la voluntad expresa de las Partes en ese sentido. En efecto, frente a compromisos arbitrales que dotan al árbitro de potestades excepcionales en la administración de la prueba, no faltan otros acuerdos que vinculan al árbitro a formar su representación de los hechos sobre la única base de los elementos de prueba presentados por las Partes¹⁸.

Una última cuestión surge en relación a la carga de la prueba, se trata del problema de las presunciones, tomado del derecho interno pero sobre el cual no hay reglas generales establecidas en derecho internacional. No obstante, los tribunales internacionales pueden reconocer, y así lo han hecho, la existencia de ciertas presunciones legales que afecten a la principal carga de la prueba, que supondrían una exención de ésta. A título ejemplificativo, podemos citar el asunto del Estatuto jurídico de Groenlandia Oriental, en el cual se alegó la presunción en favor del sentido ordinario del término geográfico 'Groenlandia'. A este respecto, el Tribunal afirmó que,

"the geographical meaning of the word 'Greenland'..., must be regarded as the ordinary meaning of the word. If it is alleged by one of the parties that some unusual or exceptional meaning is to be attributed to it, it lies on that party to establish its contention"¹⁹.

¹⁸ Este principio ha sido formulado en un viejo tratado de 1896, entre Gran Bretaña y Colombia, que dice expresamente: "In case of non compliance with such requests (las estipuladas en el artículo VIII del tratado) the tribunal shall limit its action in the matter to drawing its own inference or conclusions from such non compliance" (vid. LAFONTAINE, Pasicrisie Internationale, p.545).

¹⁹ Vid. P.C.I.J., serie A/B, n°53, 1933, p.49.

Aquí, el Tribunal se manifiesta, claramente, a favor de la excepción de la carga de la prueba cuando se trata de presunciones, lo cual se traduce, a su vez, en la inversión de la carga de la prueba contraria a dicha presunción.

SECCION 2ª: PRINCIPALES ASPECTOS PROCEDIMENTALES DE LA MATERIA.

Una vez determinado, tanto el objeto sobre el cual recae la prueba, como la persona a quien le incumbe dicha tarea, se nos plantea ineludiblemente la labor de establecer el procedimiento que el derecho internacional tiene previsto para que ésta se lleve a cabo, esto es, cómo y cuando se practica la prueba.

El procedimiento ante los tribunales internacionales se desarrolla en dos fases: escrita (consagrada a la formulación literal de las pretensiones y defensas respectivas de las Partes) y oral (ocupada por el desarrollo oral de argumentaciones divergentes)²⁰; la administración de la prueba tiene lugar tanto en el transcurso de la una, como en el de la otra. La regla principal a este respecto, consecuencia del principio de igualdad procesal de las Partes, es la de la comunicación de las pruebas. Es necesario, no sólo que una Parte pueda examinar la prueba de la otra,

²⁰ Así lo establece el artículo 43 del Estatuto del T.I.J, siguiendo el procedimiento arbitral un desarrollo similar que suele venir especificado en los correspondientes compromisos arbitrales (por ej. art.VIII del Compromiso arbitral entre Argentina y Chile de 1991, cfr.Original mecanografiado, pp.11-12).

sino que pueda igualmente explicarse sobre la materia y tener tiempo suficiente para procurar la prueba contraria.

Partiendo, pues, de esta idea preliminar corresponde ahora examinar cuál es el proceso básico que se sigue en la administración de la prueba ante tribunales internacionales. En este sentido podemos sintetizar en tres, los pasos esenciales que se siguen en tal procedimiento: orden y tiempo de sumisión de la prueba por las Partes, formación de la prueba, y admisión de la misma por el órgano jurisdiccional competente.

A) ORDEN Y TIEMPO DE SUMISIÓN DE LA PRUEBA POR LAS PARTES.

El problema del ORDEN que se sigue en la sumisión de la prueba, viene condicionado por el tipo de prueba que se practica; en este sentido, habrá que diferenciar los distintos instrumentos probatorios de que disponen las Partes (los cuales serán objeto de tratamiento separado en un próximo apartado). De esta forma podemos afirmar que, en los procedimientos internacionales, la prueba escrita o documental es casi siempre presentada sin excepción al tribunal antes de la fase oral. Efectivamente, el procedimiento queda abierto con los argumentos escritos que vienen acompañados por la prueba que los sustenta. En relación a la prueba testifical, es práctica general someter tal prueba antes que el consejero se haya dirigido al tribunal. Por su parte, los argumentos orales, por regla general,

cierran el procedimiento. El tribunal tiene el derecho, en muchos casos, de requerir la sumisión de más prueba o de hacer comentarios a la prueba ya sometida; tal facultad le fue reconocida al tribunal arbitral que conoció de la delimitación fronteriza entre Guatemala y Honduras, a través del artículo XIII del Compromiso arbitral de 1930²¹.

Por otro lado, en lo que se refiere al TIEMPO de sumisión habrá que distinguir la fase del procedimiento escrito y la del procedimiento oral:

■ Procedimiento escrito. Es una exigencia general de las reglas del procedimiento, que los distintos instrumentos de las alegaciones escritas deben ir acompañados por todos los documentos que las sustentan y por los argumentos contenidas en ellas. En este sentido, el artículo 43.2 del Estatuto del T.I.J. prevé que "el procedimiento escrito comprenderá la comunicación a la Corte y a las Partes, de memorias, contra-memorias y, si necesario fuere, de réplicas, así como de toda pieza o documento en apoyo de las mismas"²². Nada impide, sin embargo, que en algunos compromisos arbitrales se limite la prueba sometida, a la respuesta o refutación de los argumentos presentados por ambas Partes.

Toda prueba que no haya sido presentada dentro de los límites prescritos para el archivo de las alegaciones, con excepción de la prueba oral para examinar

²¹ Dice expresamente dicho artículo XIII: "The High Contracting Parties authorise the Tribunal to appoint commissions of enquiry, to employ the services of experts and to use any other means to information it may deem necessary to elucidate the facts" (vid. U.N.R.I.A.A., vol.II, p.1315).

Para un análisis más detallado del problema del orden y tiempo de sumisión de la prueba, vid. SANDIFER, *op.cit.*, pp.46-94.

²² Sigue literalmente el contenido del artículo 63 del Convenio de La Haya de 1907.

a los testigos, no podrá ser presentada más tarde a no ser que medie el consentimiento de la parte contraria; así lo recogen, tanto el Convenio de La Haya, como el Estatuto del T.I.J. En este sentido, aunque nada hay especificado en las reglas de procedimiento, parece obvio que cada una de las Partes tiene el derecho de someter la prueba necesaria en refutación de cualquier prueba sometida por la otra Parte después de la conclusión formal de la fase escrita o durante el transcurso del procedimiento oral. Igualmente, es costumbre asegurar el derecho de cada Parte a someter la prueba correspondiente para responder a cualquier prueba sometida por la otra en apoyo de los instrumentos formales de las alegaciones escritas. De esta forma, y en conexión con la regla anteriormente señalada, es también regla procesal ante los tribunales internacionales, que la prueba no debe ser considerada si ha sido presentada en un tiempo tal que prive a la Parte contraria de la oportunidad de comentarla o de ofrecer la prueba de refutación. Esta cuestión fue ampliamente debatida en el asunto de la Isla de Palmas por parte de EE.UU. y Países Bajos²³; aunque, el árbitro estimó, finalmente, que debía considerar la totalidad de las alegaciones y pruebas presentadas ante él por ambas Partes, decidiendo cuáles deben ser consideradas como suficientemente sustanciales²⁴.

■ Procedimiento oral. El testimonio de los testigos, que se produce en la fase oral, debe ser producido ante el tribunal en el tiempo expresamente establecido.

²³ Sobre este punto, ver el amplio análisis que dedica SANDIFER en su trabajo, cfr. op.cit., pp.60-68.

²⁴ Vid. R.G.D.I.P., 1935, p.167.

Ahora bien, aquí realmente la cuestión que cabe plantearse es la extensión de la prueba al procedimiento oral o después del procedimiento escrito, más concretamente, la extensión a esta segunda fase de la prueba documental. Se trata, según hemos visto en las líneas precedentes, de una cuestión absolutamente excepcional. Incluso podríamos afirmar, que tal sumisión durante el procedimiento oral es esencialmente un privilegio más que un derecho que depende, bien del expreso consentimiento de las Partes, bien de la absoluta discrecionalidad del tribunal competente. Si tal hecho se produjera, estaría sujeta dicha prueba a las mismas reglas de sumisión que afectan a la fase oral.

Una última cuestión surge en relación al tiempo de sumisión de la prueba, ¿puede ésta presentarse después de cerrados los procedimientos, esto es, una vez concluida la fase oral? La respuesta parece ser afirmativa, ahora bien, siempre dependiente de la discrecionalidad del tribunal y con el consentimiento de las partes. Entendemos que tal posibilidad, absolutamente excepcional, está limitada a los casos en que es manifiestamente imposible alcanzar una solución justa en relación a los hechos controvertidos. Sin embargo, a pesar de estar abierta la puerta, no se ha hecho aún uso de ella.

Una consecuencia puede extraerse claramente de lo anteriormente expuesto en relación al tiempo: que tanto la prueba oral como la escrita pueden ser sometidas después de los límites temporales especificados para tal sumisión. Pero esto sólo ocurre como una medida excepcional que debe contar con el apoyo de

las propias Partes o con el del tribunal. Así parecen entenderlo los Estados y tal conclusión puede, igualmente, extraerse de la propia jurisprudencia internacional²⁵. El único límite existente, si interpretamos este principio a sensu contrario -y para el caso de los arbitrajes- es el de los correspondientes compromisos arbitrales que expresamente establezcan que los límites temporales de sometimiento de la prueba no deben ser excedidos.

B) PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA.

En relación con el problema de la presentación de la prueba por las Partes, se plantea la existencia de una serie de derechos y obligaciones que afectan a éstas²⁶:

■ Es un axioma del derecho procesal internacional que todos los alegatos y pruebas, presentadas por cada Parte en el transcurso de un procedimiento, deben

²⁵ Baste citar el caso del Estatuto jurídico de Groenlandia Oriental en el que, ante la invocación por parte de Noruega de nuevos documentos en el curso de la fase oral, Dinamarca rechazaba la posibilidad de su aceptación por el Tribunal alegando los artículos 48 y 52 de su Estatuto (cfr. P.C.I.J., serie C, n°66, pp.2594, 2614-27 y 2916-17, y serie C, n°67, pp.3294, 3568 y 3674-75). El Tribunal, resolvió declarando:

"that, insofar as the terms of Article 52 of the Statute are applicable to the evidence produced by one of the Parties to the case, the consent of the other Party, which is required under that Article, may be regarded as having been obtained" (vid. P.C.I.J., serie A/B, n°53, 1933, p.23).

²⁶ Cfr. SANDIFER, op.cit., pp.95-175.

ser comunicadas tanto al tribunal como a la otra Parte. Por tanto, un primer derecho que tiene atribuido cada Parte es el de recibir 'comunicación' de la prueba presentada por la contraria. Ahora bien, en conexión con esta cuestión surgen una serie de interrogantes: la determinación de la respectiva responsabilidad y el método para establecer tal comunicación. Por un lado, la responsabilidad de la comunicación de los alegatos recae sobre ambas Partes y debe hacerse simultáneamente al tribunal y a la otra Parte. Por otro, el problema del método variará según el tipo de proceso, pues tratándose de un arbitraje, normalmente, se acordará en el compromiso arbitral la forma de llevar a cabo el depósito de las copias necesarias. En cambio, para los procesos judiciales, está previsto expresamente por el artículo 43.3 del Estatuto del T.I.J., la entrega al Secretario de todas las copias certificadas de cada documento para que sean comunicadas por éste (art.43.4), posteriormente, a la otra Parte.

■ El derecho de las Partes a tener copias de todos los documentos presentados, mediante la correspondiente comunicación, tiene como corolario otro derecho: si los documentos que se citan por una de las Partes no son presentados, la otra tiene el derecho de *'inspeccionar o descubrir'* tales documentos. El derecho de inspección se extiende al requerimiento para que se reproduzca el original o una copia certificada, e incluso, para incluir los originales de los documentos o pruebas que una Parte desea presentar en apoyo de sus alegaciones y que están en los archivos u oficinas públicas del otro Gobierno y no han sido convenientemente retiradas.

■ Otra cuestión controvertida que puede plantearse al presentar la prueba, es la de que hayan sido presentados fragmentos o extractos de documentos sin hacer disponible el texto íntegro. Obviamente no hay objeción cuando se trata de extractos que por sí solos representan el hecho que se quiere probar. El problema surge respecto de aquellos que son realmente indisociables del documento. Por sí misma, dicha prueba no es rechazable; deberá demostrarse que tal omisión o incorrección ha sido introducida intencionadamente en los documentos con el propósito de engañar al tribunal. Este podrá considerar a tales documentos como viciados por sus inexactitudes u omisiones. En cualquier caso, la parte que presenta tal extracto deberá estar en disposición de facilitar el documento completo si así es requerido por el tribunal o por la otra Parte.

■ También puede plantearse si es válido como prueba, citar la prueba ya presentada ante el mismo tribunal en un caso distinto, sin someter dicha prueba al procedimiento regular previsto para el nuevo caso. Está claro que son razones de economía, tanto de tiempo como de dinero, o de dificultad en la reproducción, las que justifican esta regla y las que motivan que se establezca. Pero, en todo caso, tal posibilidad sólo podrá darse cuando conste específicamente la voluntad de las Partes en ese sentido, normalmente, en los correspondientes compromisos arbitrales.

■ Teniendo en cuenta que los tribunales internacionales para dilucidar la cuestión controvertida dependen, en gran medida, de la integridad y diligencia de

las Partes al proceder ante ellos, se ha establecido una obligación para éstas - obligación a la que ya aludíamos en el apartado anterior como deber que comporta la propia carga de la prueba-. Efectivamente, junto a los derechos mencionados, las Partes tienen asumida implícitamente la obligación ineludible de 'cooperar' con el órgano jurisdiccional en la presentación de la prueba; lo cual se traduce en la obligación de revelar todos los hechos que están en su posesión. En aras de este deber de cooperación, los Estados pueden conceder al órgano jurisdiccional la facultad de requerirles cualquier tipo de pieza probatoria adicional, como la acordada por Guinea y Guinea Bissau en su Compromiso de arbitraje de 1983²⁷.

En conexión con esta obligación surge para las Partes incardinadas en un proceso internacional, por un lado, la obligación anterior de 'notificar' con antelación la prueba que cada una va a intentar presentar, por otro, la de asumir la particular responsabilidad que pueda derivarse de las consecuencias de su propia conducta al presentar la prueba.

■ Por último, en relación a esta fase de presentación de la prueba, se plantea otra cuestión igualmente conexa con la de la carga de la prueba -tal y como vimos en su momento oportuno, por lo que a lo dicho entonces nos remitimos-: 'la facultad del tribunal' para intervenir en la presentación de la prueba, potestad que tiene un carácter estrictamente secundario y que, excepcionalmente, podría

²⁷ Concretamente, el artículo 6 (vid. R.G.D.I.P., 1986, p.489). Potestad similar se le reconoció al Tribunal arbitral que conoció, en este caso, de delimitación de la frontera marítima entre Guinea Bissau y Senegal a través del artículo 6 del Compromiso de arbitraje de 1985 (vid. R.G.D.I.P., 1990, pp.207-208).

extenderse a eliminar del Registro de los procedimientos una prueba que ya ha sido practicada. En todo caso, esta facultad ha de venir expresamente recogida en los compromisos arbitrales²⁸.

Numerosos ejemplos nos ofrece la práctica, judicial y arbitral, de este poder de intervención del órgano jurisdiccional. Así, el tribunal arbitral que conoció del asunto de L'Oeil de la Mer, declaró claramente que él tenía poder para exigir prueba suplementaria e informes, para visitar el lugar objeto de controversia y para oír a expertos y testigos; de hecho nombró un experto para efectuar un informe sobre la geografía de la región²⁹. Los casos de la Fábrica de Chorzow y del Estrecho de Corfú³⁰, son igualmente testimonio de la asunción de esta facultad, tanto por parte del T.P.J.I., como por el T.I.J., rechazada, por otra parte, en la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras. Más recientemente, en el asunto de La Laguna del Desierto³¹, los árbitros que componían el tribunal se trasladaron al sector fronterizo objeto del conflicto para examinarlo en detalle y reconocer en el lugar los trazados pretendidos por cada una

²⁸ Baste citar el Acuerdo arbitral de 1965, entre India y Pakistán, respecto del asunto del Rann de Kutch, que concede al Tribunal la potestad de acordar reglas de procedimiento suplementarias (vid. I.L.M., vol.VII, 1968, p.6). En sentido análogo, el artículo XI del Compromiso arbitral entre Argentina y Chile de 1991, dota al órgano jurisdiccional de la más amplia discrecionalidad en todo lo concerniente al procedimiento -lo cual, claramente, afecta a la administración de la prueba-, al expresarse en los siguientes términos:

"El Tribunal tendrá facultades para interpretar el compromiso, pronunciarse sobre su propia competencia y fijar las normas de procedimiento que no hayan sido pactadas por las Partes" (vid. Original mecanografiado, p.13).

²⁹ Vid. R.D.I.L.C., 1906, p.162 y 166.

³⁰ Cfr. P.C.I.J., serie A, n°17, 1928, p.99-103, y I.C.J.Reports, 1949, p.32, respectivamente.

³¹ Vid. Original mecanografiado, p.19, pa.11.

de las Partes.

C) ADMISION Y VALORACION DE LA PRUEBA POR EL ORGANO JURISDICCIONAL.

Una vez presentada la prueba por las Partes, corresponde al juez o árbitro examinarla en orden a su admisión. En este sentido, la regla procesal general es la de la 'completa libertad del tribunal' en la admisión y evaluación de la prueba producida ante él³². Aunque el principio de libertad en la valoración de la prueba no está expresamente recogido en ningún texto legal, parece que puede intuirse claramente de la estructura del Convenio de La Haya de 1907³³. A este dato debemos unir el hecho de que tanto el T.I.J., como su predecesor, el T.P.J.I. han reconocido en la práctica el sistema de libertad que vincula a todo el procedimiento de la prueba, tanto respecto a la presentación como a la evaluación. La cuestión fue debatida por primera vez en el asunto Mavrommatis, entre Grecia y Gran Bretaña, durante las alegaciones orales. La primera era partidaria del sistema de libertad de prueba al que se oponía rotundamente Gran Bretaña bajo el argumento

³² Cfr. EVENSEN, J., op.cit., p.46.

³³ El artículo 63 establece claramente que un tribunal arbitral no está obligado por ningún sistema de prueba; además el artículo 74 atribuye competencia al tribunal para utilizar sus propias reglas de procedimiento para hacer frente a la prueba.

de la incertidumbre a que conduciría el mismo³⁴. El Tribunal hizo uso de las pruebas presentadas por las Partes, no reconociendo reglas restrictivas que atañesen a la admisión y evaluación de la prueba³⁵. La jurisprudencia posterior se ha encargado de consolidar como principio general del procedimiento internacional, el de la libertad de valoración de la prueba³⁶. Inherente a este principio es el hecho de que ningún tipo de prueba tenga prioridad ante los tribunales internacionales; tanto la prueba documental, como los expertos y testigos tienen que ser valorados por el órgano jurisdiccional como prueba, y ésa ha sido, precisamente, la línea de actuación seguida por los tribunales como lo corrobora el reciente asunto de la Laguna del Desierto³⁷.

No obstante, existen una serie de reglas generales que regulan esta materia. Así, en el procedimiento internacional la prueba es siempre admitida cuando ha sido debidamente presentada de acuerdo con los límites temporales previamente fijados por el tribunal; aquélla sólo podrá ser excluida cuando se produce una conducta por una de las Partes cambiándolo respecto de un ámbito en el que es exigida. Precisamente, esta regla de exclusión de una materia cuando se produce un cambio

³⁴ Cfr. P.C.I.J., serie C, nº7, pp.46 y ss. -respecto de las alegaciones de Grecia-, y pp.95 y ss -para las de Gran Bretaña-.

³⁵ Cfr. P.C.I.J., serie A, nº5, p.29.

³⁶ Baste citar el asunto de ciertos intereses alemanes en la Alta Silesia Polaca, donde el T.P.J.I. afirmó expresamente que "is entirely free to estimate the value of statements made by the Parties" (vid. P.C.I.J., serie A, nº7, 1926, p.73), o el posterior de las Zonas francas de Alta Saboya y el Distrito de Gex (cfr. P.C.I.J., serie A/B, nº46, 1932, pp.156-157).

³⁷ En efecto, el tribunal arbitral en este caso examinó con el mismo criterio de valoración, tanto la prueba documental como la intervención de un perito geógrafo (vid. Original mecanografiado, pp.75-108).

en el derecho de admisión de la prueba fue adoptada por el juez Huber en la Isla de Palmas. Se sostenía que, en virtud del artículo 3 del Acuerdo Especial de 1925, las aclaraciones escritas que podía solicitar el árbitro estaban limitadas a argumentos dilucidando cuestiones previamente planteadas que no incluían la prueba documental; frente a tal alegación de las Partes, el árbitro entendió que la limitación a las explicaciones escritas excluía sólo el procedimiento oral, pero no debía entenderse como excluyendo prueba documental de ninguna clase³⁸.

Otro principio que rige la materia es el de que los miembros de un tribunal, siendo juristas capacitados para examinar la prueba, son competentes para apreciar ésta de acuerdo con su valor, tanto intrínseco como relativo.

Si bien afirmamos la vigencia del principio de libertad en esta materia, debemos tener presente que éste puede venir marcado por un único límite, respecto de los arbitrajes: las específicas disposiciones que pudieran contener los compromisos arbitrales que mediaten la actuación del árbitro respecto de la valoración de la prueba. Es, sobre todo, frecuente que los acuerdos de arbitraje establezcan la obligación del tribunal a recibir y considerar toda la prueba a él sometida por las Partes en el procedimiento. Baste citar, en el sentido reseñado, el Tratado de arbitraje de 1897 entre Gran Bretaña y Venezuela³⁹, cuyo artículo IV detalla explícitamente las reglas procedimentales a las que tiene que someterse el árbitro en la valoración y decisión de la controversia que enfrentaba a ambos

³⁸ Vid. R.G.D.I.P., 1935, p.167.

³⁹ Vid. MARTENS, N.R.G.T., 2ª ser., XXIX, pp.583-584.

Estados.

La formulación de esta regla procesal, así como del principio que rige, en general, esta fase de valoración de la prueba ha sido claramente consagrada por Max Huber, en la Isla de Palmas⁴⁰:

"A défaut de stipulation expresse, un tribunal arbitral doit avoir une entière liberté pour apprécier la valeur des assertions produites par les parties... La valeur et le poids de chaque assertion ne peuvent être appréciés qu'à la lumière de toutes les preuves et de toutes les assertions produites l'autre côte, et des faits qui sont notoires pour le tribunal".

SECCION 3ª: RELACION DE LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS UTILIZADOS POR LOS ESTADOS PARA PROBAR SUS ALEGACIONES.

Resueltas las cuestiones anteriores queda aún sin resolver un problema que entra en conexión directa con lo visto hasta ahora: ¿cómo prueba lo que hay probar, la persona obligada a ello, según el mecanismo ya expuesto? Es decir, cuáles son los medios de prueba. Es obvio que el buen funcionamiento de la justicia va a depender, en gran medida, de la riqueza y agilidad de los mecanismos probatorios; de ahí, que nos planteamos la determinación de los instrumentos de prueba de los que las Partes pueden disponer.

Si bien es cierto que no hay jerarquía entre los diversos instrumentos de

⁴⁰ Vid. R.G.D.I.P., 1935, p.167.

prueba, también lo es que la prueba documental es mucho más frecuentemente utilizada que la testimonial, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito interno, sobre todo en el sistema anglosajón, en el que la preeminencia probatoria viene ocupada por el testimonio. Esta circunstancia está, sin duda, justificada por razones de eficacia probatoria en la representación de los hechos, unido al dato de que los asuntos sometidos a jurisdicciones internacionales, por su propia naturaleza, se prestan mal a la prueba testimonial. Independientemente de este planteamiento, se impone un acercamiento a ambos tipos de prueba, la escrita y la oral.

A) IMPORTANCIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL.

Cuando hablamos de prueba escrita, estamos haciendo referencia a aquella que resulta de piezas o documentos de tal naturaleza que tienden a establecer el hecho alegado⁴¹.

El propio carácter de los tribunales internacionales, así como las cuestiones a ellos sometidas, hacen de la prueba documental el tipo de prueba más frecuentemente utilizado en las controversias internacionales, y los conflictos de atribución territorial no se escapan a esa realidad. Esta es, probablemente, una de las características más destacadas del procedimiento internacional. De esta forma, podemos afirmar que la prueba escrita es la regla, mientras la prueba oral directa

⁴¹ Definición dada por WITENBERG, "The théorie des...", op.cit., p.59.

es la excepción.

Son varios los escritos que pueden incluirse dentro de los límites de la prueba escrita o documental:

- En primer lugar hablamos del tratado. Se trata de un instrumento cuya primaria finalidad es la de probar la existencia de una obligación internacional, pero que puede, igualmente, constituir prueba de un hecho que él mismo constata. Tal es el caso de los tratados de arbitraje, en relación a los actos encomendados al árbitro; en la medida que tal relación no es meramente enunciativa, comporta la prueba del acto.

Este tipo de instrumento jurídico, concretamente los tratados de límites, han sido ampliamente utilizados como prueba en los conflictos de atribución territorial, fundamentalmente en los relativos al trazado de fronteras como evidencia de un determinado límite que se alega como frontera, e incluso, en los de adquisición como prueba de la concesión de la soberanía. En este ámbito, también constituyen una prueba documental importante los tratados de cesión.

- Junto al tratado, se pueden colocar los actos diplomáticos y los documentos de Estado. Se trata de notas, protocolos, correspondencia diplomática..., que tienen un lugar importante en la jurisprudencia internacional. En los conflictos territoriales suelen ser alegados como prueba del reconocimiento de la soberanía sobre un territorio por terceros Estados.

- De alguna forma, las disposiciones normativas nacionales retienen también la atención de los tribunales internacionales. Concretamente, las leyes y decretos

u ordenanzas de autoridades internas, que, incluso pueden constituir el objeto mismo del litigio. Efectivamente, cuando se trata acerca de la licitud o ilicitud, justicia o injusticia de leyes internas, es obvio que el juez internacional puede encontrar en la ley interna la prueba escrita de la actuación del Estado.

Pero, el tipo de conflicto en que este instrumento de prueba encuentra su auténtica razón de ser, es el de los regidos por el principio del uti possidetis iuris, pues, los documentos, leyes o tratados de la época colonial son la mejor prueba de aquél. También las medidas legislativas internas sobre un territorio determinado son una buena prueba del ejercicio de autoridad sobre el mismo, y en ese sentido suelen ser presentadas.

Igualmente, los juicios, sentencias y, en general, las decisiones de autoridades judiciales nacionales pueden constituir el objeto mismo de una controversia internacional, o bien, ser prueba del ejercicio de soberanía sobre un territorio disputado. De esta manera, la sentencia, la propia decisión judicial interna, constituirán la prueba escrita.

Otros actos internos que pueden retener, frecuentemente, la atención de los tribunales internacionales son, por ejemplo, en materia de medidas marítimas, el reclutamiento o la licencia; en materia de nacionalidad, los actos de naturalización y los certificados consulares de nacionalidad. Y, referidos al ámbito de la soberanía -en los litigios que versan sobre la atribución de ésta-, son prueba fundamental, que retiene la máxima atención del tribunal, los documentos relativos a actas de registro, tanto de inmuebles como de estado civil, nombramientos de funcionarios y autoridades, levantamientos de censos, otorgamiento de todo tipo de

concesiones y autorizaciones, o los informes acerca de distintos aspectos relacionados con el territorio, por citar los más importantes.

■ Una última referencia obligada, como prueba documental, es la que se refiere a los mapas. Estos pueden jugar un papel probatorio fundamental en los conflictos de soberanía, sobre todo en los relativos a la delimitación del territorio, como tendremos ocasión de constatar; si bien, nada obsta a que dicho papel sea nulo atendiendo a las circunstancias concretas del caso, como ocurrió en el asunto de la Laguna del Desierto⁴².

La producción de la prueba documental se halla regida por diversas reglas generales que conviene mencionar. Dos de ellas ya han sido abordadas: la regla de la comunicación previa y la de la reciprocidad en cuanto a la obligación de presentación. Existe, además, una tercera que sigue a éstas, el principio de la presentación de la prueba, bien en original, bien autenticada. Normalmente, el documento que se facilita al juez debe ser remitido en original (aunque no hay ninguna regla específica al respecto en los Estatutos de los tribunales internacionales), pues, sólo el examen del original va a permitir un control minucioso de la regularidad de la forma y de la autenticidad de la pieza presentada. Por tanto, la presentación del original es el principio que rige esta materia.

Sin embargo, si bien la producción en original es la regla, ésta no siempre es posible, ya sea porque el Estado que alega el documento no lo posea, ya sea

⁴² Cfr. Original mecanografiado, pp.110-111, pa.197 y 169, aunque, como veremos en su momento, no es el único caso en que los mapas han carecido de valor probatorio.

porque ésta se haya destruido o perdido. Entonces, en caso de imposibilidad de presentar el original, será admitida la copia del documento que deberá estar convenientemente certificada y autenticada por el oficial encargado de la misma para que sean consideradas como copias válidas y correctas⁴³.

En relación, precisamente, a la presentación de originales y copias de documentos, así como a la cuestión de si ostentan mayor valor probatorio los originales respecto de las copias, se ha planteado la existencia o no en derecho internacional de la llamada regla anglosajona de la 'mejor prueba'⁴⁴. En atención a dicha regla, los documentos originales serían la mejor prueba; de esta manera, presentándose éstos ante el juez, las copias carecerían de valor. Esta regla es utilizada para designar porqué un documento o un testimonio de un testigo es preferido a otro. En nuestra opinión, en vez de hablar de regla de la mejor prueba, habría que distinguir la existencia, en los procedimientos internacionales, de pruebas primarias y pruebas secundarias -según sea más o menos fehaciente su representación del hecho ante el juez o árbitro-. Tal distinción se traduce en el hecho de que una prueba secundaria sólo se tendrá en consideración de forma satisfactoria y aislada, ante la insuficiencia o inexactitud de una prueba primaria. Esto no significa que la prueba secundaria deba ser necesariamente excluida porque se admita la primaria, sino que debe atribuírsele un menor peso específico.

⁴³ Para un análisis en profundidad respecto del procedimiento de autenticación de originales, vid. SANDIFER, op.cit., pp.264-287.

⁴⁴ La posición negativa es mantenida por EVENSEN (cfr. op.cit., p.52), mientras la positiva es defendida por SANDIFER (cfr. op.cit., pp.202-239).

En cualquier caso, el valor que haya que otorgarle a una determinada prueba, presentada por una de las Partes, estará en relación directa con el tipo de prueba que haya presentado la otra.

B) RECURSO A LA PRUEBA TESTIMONIAL: TESTIGOS Y EXPERTOS.

Ya ha sido observado cómo este tipo de prueba es parcamente utilizado ante los tribunales internacionales; la razón de ser de esta realidad hay que situarla en razones puramente prácticas, más que en reglas técnicas que limiten el valor intrínseco o la admisión de la prueba testimonial por sí misma. Efectivamente, no se trata de que la prueba oral sea considerada como una prueba secundaria respecto de la escrita, sino que el examen de expertos y testigos envuelve serias dificultades prácticas en el procedimiento internacional.

Mientras en el derecho interno, las legislaciones expresamente prohíben el derecho de presentar los testimonios o declaraciones de ciertas personas, cuya imparcialidad es más que dudosa y, en particular, la de los familiares de las partes en el proceso o de personas a su servicio, en la práctica internacional se admite la audición en testimonio de cualquier persona. Así, por ejemplo, pueden ser testigos tanto funcionarios del Estado litigante, como particulares interesados en las reclamaciones en causa, o expertos sobre la materia a decidir.

En relación a los expertos, el ámbito donde se produce con mayor frecuencia el recurso al testimonio de éstos es el de los conflictos de delimitación territorial. Los cartógrafos y geógrafos suelen ser llamados para testificar oralmente (también para realizar informes⁴⁵) en base a un estudio general de la situación o a una específica investigación de la región en disputa, o acerca de mapas que previamente han sido presentados como prueba documental. El valor de tal testimonio variará según las circunstancias de cada caso, así como en relación a la cualificación particular del testigo.

En lo que hace referencia a las reglas relativas al examen de los testigos y expertos, están específicamente detalladas en el Estatuto y Reglamento del T.I.J., siendo básicamente de análoga aplicación en los procedimientos arbitrales -salvo que conste otra regulación, expresamente, en los compromisos arbitrales-. La regla principal es la recogida en el artículo 53 del Reglamento, en el sentido de que los testigos y expertos, una vez que han prestado declaración o hecho juramento sobre su honor y conciencia, deben ser examinados por los agentes, consejeros o abogados de las Partes durante la fase de alegaciones orales. También el Presidente de la Corte tiene competencia para poder interrogarle. El Tribunal puede por propia iniciativa, según el artículo 44 del Estatuto y los artículos 54 y 55 del Reglamento, requerir a las Partes para que llamen a más testigos o expertos. por otra parte, para que puedan ser corregidos posibles errores de transcripción de los testimonios, el

⁴⁵ Como el efectuado por el perito geógrafo nombrado por el Trivunal arbitral en el asunto de la Laguna del Desierto, para identificar el recorrido de la línea divisoria de aguas entre el hito 62 y el monte Fitz Roy (vid. Original mecanografiado, pp.103-105, pa.151).

artículo 60 del Reglamento, prevé la revisión de ésta por los testigos o expertos.

El examen de testigos y expertos ante el Tribunal ha ocurrido en contadas ocasiones. La primera vez que tuvo que enfrentarse el Tribunal a este tipo de prueba, fue en el caso de ciertos intereses alemanes sobre la Alta Silesia Polaca⁴⁶, donde varios testigos fueron examinados por el Tribunal, a iniciativa de éste. Posteriormente, en el asunto de la Fábrica de Chorzow⁴⁷, el T.P.J.I. confió a varios expertos la fijación del pago que había que darse por los daños ocasionados. También tuvo ocasión el T.I.J. de desarrollar su procedimiento en relación al tratamiento de testigos en el asunto del Estrecho de Corfú⁴⁸, en el que siete testigos fueron presentados por Reino Unido y tres por Albania, que también llamó a dos expertos. Más recientemente, en el asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras, se ha presentado un nuevo caso aislado de prueba oral ante el T.I.J., por parte de El Salvador; concretamente, el testimonio de un ciudadano salvadoreño acerca de la soberanía salvadoreña sobre la isla de Meanguera⁴⁹.

Pero, sin duda, el ejemplo más paradigmático y más confirmatorio de la influencia de los avances tecnológicos en el derecho procesal internacional, nos lo

⁴⁶ Vid. P.C.I.J., serie A, nº 17, pp.99 y ss.

⁴⁷ Vid. P.C.I.J., serie A, nº19, pp.14-15.

⁴⁸ Vid. I.C.J.Pleadings, 1948, p.250, e, I.C.J.Reports, 1959, pp.4 y 21. También el asunto del Sudoeste Africano es ejemplo de la confrontación del T.I.J. con la audición de testigos y expertos, que duraron cerca de dos meses (vid. I.C.J. Pleadings, 1966, p.123).

⁴⁹ Vid. Intervención oral de 29 mayo 1991, C4/CR 91/34, pp.10-52.

proporciona la práctica arbitral, y más concretamente el asunto de la Laguna del Desierto. En este caso, el tribunal arbitral, siguiendo la línea marcada por el T.I.J. en el citado asunto que enfrentó a El Salvador y Honduras, admitió el testimonio de un ciudadano chileno en relación a la adscripción del territorio de la Boquilla a Chile⁵⁰; pero dicho testimonio fue prestado de una manera singular. En efecto, no se presentó el testigo ante el tribunal -tal y como había ocurrido en el caso de El Salvador y en otros anteriores-, sino que el testimonio fue reproducido ante el tribunal a través de video, instrumento probatorio absolutamente novedoso e insólito que sorprendentemente fue aceptado sin reserva por el tribunal como prueba⁵¹.

C) LA FIGURA DE LA LLAMADA 'AFFIDAVIT'.

Un aspecto interesante del proceso internacional es la utilización que se ha hecho de la institución anglosajona de la 'affidavit'. Se trata de una afirmación

⁵⁰ Vid. Memoria de la República de Chile, vol.2, 31 agosto 1992, Anexos documentales nº 115 a 123 (citado en la Contramemoria argentina, 1993, capítulo 7, pp.254-295), y Ultima sesión de las exposiciones orales, Acta de 13 abril 1994.

⁵¹ Más sorprendente aún si tenemos presente que en dicho video, junto al testimonio citado, aparece recogida también una amplia cartografía que se alterna con las correspondientes imágenes del territorio por donde, supuestamente, discurriría el trazado de dichos mapas -corroborando así la línea divisoria de aguas propuesta por Chile-, y no debemos olvidar que el tribunal había utilizado la inspección ocular del terreno como medio probatorio (cfr. original mecanografiado, p.18, pa.9), circunstancia que hace por sí misma rechazable por innecesaria cualquier otra representación plástica del terreno.

escrita, de una declaración prestada bajo juramento ante un magistrado por el interesado o por un testigo y a instancia de parte, a los fines de certificar la realidad de ciertos hechos o la autenticidad de ciertos documentos⁵². Es así un mecanismo probatorio que se encuentra a medio camino entre la prueba documental y la prueba testimonial.

Participa de la prueba escrita en cuanto se redacta como un documento, una escritura, que va a servir de prueba; toma, pues, de la prueba documental su forma.

Por el contrario, participa de la prueba testimonial en el sentido de que el contenido de la escritura procede de la simple declaración hecha bajo juramento por el interesado o por un testimonio.

El papel del magistrado -normalmente se trata de un juez de paz o de un notario público-, es puramente formal; consiste en registrar el juramento y no comporta ningún examen sobre el fondo de la cuestión. Tal y como señala Lalive⁵³, el procedimiento de la 'affidavit' ofrece muchas menos garantías que la investigación por testimonios hecha ante el tribunal de fondo o la de la comisión rogatoria.

Frente a las incipientes objeciones que se plantearon en relación al uso de

⁵² Cfr. WITENBERG, "La théorie des..., op.cit., p.81.

⁵³ Vid. op.cit., p.89.

la 'affidavit' ante los tribunales internacionales⁵⁴, tanto la jurisprudencia arbitral como la judicial ha reconocido claramente a esta figura como un medio de prueba admisible ante las jurisdicciones internacionales, a veces, incluso, por necesidad. El protagonismo progresivo que ha adquirido este medio de prueba, ha llevado a algunos a afirmar que se trata de una regla de derecho internacional general⁵⁵. La sanción jurisprudencial de este instrumento probatorio se explica, no sólo por el liberalismo de los tribunales en materia de recepción de pruebas, sino fundamentalmente por consideraciones prácticas. La dificultad frecuente de obtener prueba oral, o los problemas de ejecución práctica del proceso de la comisión rogatoria, son tan sólo algunas de las razones que han impulsado el recurso a la 'affidavit', que en ocasiones, ha constituido el único medio de prueba posible.

Ejemplo de la introducción de la 'affidavit' en el ámbito arbitral es el asunto Montijo, entre Colombia y EE.UU.⁵⁶; aunque donde, sin duda, ha tenido mayor acogida ha sido ante la Comisión mexicano-americana de 1868. Más recientemente, India y Pakistán expresamente la previeron como mecanismo probatorio en su Acuerdo arbitral de 1965⁵⁷, en relación al Rann de Kutch; pero,

⁵⁴ Tal ocurrió en el caso Salem, en el que el recurso a tal mecanismo probatorio fue objetado por Egipto (vid. U.N.R.I.A.A., vol.II, p.1707).

⁵⁵ Es el caso de WITENBERG (cfr. op.cit., p.82); tal afirmación es matizada por otros (cfr. EVENSEN, J., op.cit., p.53, nota 34), como una consecuencia del principio de libertad que rige todo el derecho de la prueba.

⁵⁶ Vid. MOORE, International Arbitrations, vol.II, p.1345. Otros ejemplos arbitrales son, la sentencia Solís, o el asunto Cameron (cfr. A.J.I.L., 1931, p.765 y 757, respectivamente).

⁵⁷ Vid. I.L.M., vol.VII, 1968, p.639.

aunque finalmente no llegó a hacerse uso de la misma, este dato pone de manifiesto su plena introducción en el ámbito procesal internacional.

También, a nivel judicial, tanto el T.P.J.I. como su sucesor el T.I.J. han admitido la producción de 'affidavits' como prueba de una alegación: En 1927, en el asunto de las concesiones Mavrommatis, y en 1948, en el caso del estrecho de Corfú⁵⁸. En ambos casos una de las Partes reconoció esta prueba; concretamente, en el segundo asunto, el Reino Unido utilizó frecuentemente este medio de prueba, aunque el Tribunal atribuyó pleno valor probatorio a la 'affidavit' tan sólo en un punto secundario⁵⁹.

Creemos necesario remarcar que la 'affidavit' juega, claramente, un papel mucho más importante en el procedimiento arbitral que en el judicial, lo cual resulta tanto de la naturaleza de los asuntos sometidos a la Corte, como del hecho constatable de que muchos de los litigios a ésta sometidos oponen a países desconocedores de este tipo de prueba.

⁵⁸ Vid. C.P.I.J., serie C, nº13, vol.III, pp.488-491, y, I.C.J.Reports, 1949, p.132, respectivamente.

⁵⁹ Vid. ibidem, p.19.

CAPITULO III: LA OCUPACION DEL TERRITORIO Y EL EJERCICIO CONTINUO Y PACIFICO DE FUNCIONES DE ESTADO.

Siguiendo la afirmación que hiciera el juez Max Huber, en el asunto de la isla de Palmas, al establecer:

"Dans le droit international actuel, les titres d'acquisition de la souveraineté territoriale sont basés sur un acte de prise de possession effective, tel que l'occupation..."¹,

y habiendo observado el fundamental papel que juega el principio de efectividad, un sector mayoritario de la doctrina² ha sugerido (tal y como ya enunciábamos en el capítulo anterior) que todos los medios de adquisición de título de territorio, que ya hemos mencionado, se reducen a uno sólo: la ocupación efectiva. Hoy día no puede sostenerse la afirmación de que se aplique a la ocupación los principios de la soberanía³, como si fuera una ocupación de derecho privado, sino que ésta se halla regida por el principio mismo de la efectividad que impera en todas las relaciones del derecho internacional, esto es, por el ejercicio pacífico y continuo de funciones de Estado que puede describirse, en términos generales, como la extensión de la Administración pública del Estado ocupante sobre el territorio

¹ R.C.D.I.P., 1935, p.164.

² En este sentido, Reuter afirma que "en el fondo no hay más que un sólo modo de adquisición de la soberanía territorial: la ocupación efectiva... los títulos jurídicos justifican, pues, una ocupación y, en este sentido, y solamente en éste, son capaces de establecer la soberanía territorial" (Derecho internacional público, París, 1962, p.114).

³ Esta es la postura que parece mantener R.AGO en su libro, Il requisito dell'effettività dell'occupazione in diritto internazionale, Roma, 1934.

ocupado, por medio del ejercicio de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial sobre dicho territorio.

Resultaría perfectamente sostenible, en este punto, la opinión de Brierly⁴ de que no es fácil ni necesario dibujar una línea precisa entre un antiguo título derivado de una 'ocupación' original y uno fundado simplemente en la larga y pacífica posesión. Afirmo este mismo autor, que el pacífico despliegue de autoridad estatal es por sí mismo un título válido de soberanía, y esto prueba que cualquier acto de ocupación es importante para confirmar dicha posesión. Contemporáneamente lo que resulta importante, pues, es la competente actividad estatal, y especialmente, los actos de administración, y al decidir la cuestión del título, el tribunal correspondiente aplicará el test del control efectivo asociado con la ocupación efectiva⁵.

SECCION 1ª: TEORIA GENERAL DE LA OCUPACION EFECTIVA COMO MODO DE ADQUISICION DEL TERRITORIO.

Definida la ocupación, por el TIJ en el dictamen consultivo del Sahara

⁴ Cfr. BRIERLY, J.L., The Law of Nations, Oxford, 1963, p.168.

⁵ Cfr. BROWNLEE, I., Principles of Public International Law, 4ª ed., Oxford, 1990, p.156.

Occidental⁶, como un modo originario de adquirir pacíficamente la soberanía sobre un territorio nullius, es decir, que no está bajo la soberanía de otro Estado, no resulta extraño encontrar opiniones en la doctrina⁷ que afirman que la ocupación es un modo 'obsoleto' de adquisición del territorio, que ante la ausencia, en el momento presente, de terra nullius, ve limitado su campo de operación a regiones polares. Pero, aunque ciertamente, futuros títulos por ocupación no sean frecuentes, el derecho en la materia es importante porque muchas controversias modernas sobre territorio tienen sus raíces en siglos anteriores, cuando el territorio era adquirido por ocupación, de ahí la justificación de nuestro estudio⁸.

⁶ I.C.J., Reports, 1975, p.39. Corroborando nuestras palabras anteriores, el T.I.J., al referirse a la ocupación, establece que ésta "was used in a non-technical sense denoting simply acquisition of sovereignty" (p.39).

⁷ Resulta, especialmente interesante la apreciación que hace sobre este punto R.Y. JENNINGS, The acquisition of territory in International Law, Manchester, 1963, pp.20-21. A título ejemplificativo, puede mencionarse también la opinión de M. AKEHURST, A Modern Introduction to International Law, Londres, 1982, p.142; J.P.A. FRANÇOIS, "Réflexions sur l'occupation", en Recueil d'études de droit international, Hommage à Paul Guggenheim, Ginebra, 1968, p.795.

⁸ No es extraño, pues, que encontremos opiniones como la de Verzijl, quien justifica su estudio en detalle de lo que califica como modos 'obsoletos' de adquisición del territorio, en base a que "there are many cases in which obsolete institutions may still make their influence felt on the evolution of present-day unsolved territorial problems" (VERZIJL, J.H.W., International Law in Historical Perspective, vol.III, Leyden, 1970, p.298).

A) EVOLUCION HISTORICA EN LA CONCEPTUALIZACION DE LA OCUPACION Y SUS CARACTERES.

Los principios de ocupación efectiva, tal y como los concebimos hoy día, fueron establecidos definitivamente por el Rey Víctor Manuel, en la disputa de Guyana británica y Brasil, en los siguientes términos:

"... que, pour acquérir la souveraineté d'une région ne se trouvent dans le domaine d'aucun Etat, il est indispensable d'en effectuer l'occupation au nom de l'Etat qui se propose d'en acquérir la domination; que l'occupation ne peut pas être regardée comme accomplie si non à la suite d'une prise de possession effective, non interrompue et permanente, au nom de l'Etat, et que la simple affirmation des droits de souveraineté, ou l'intention manifestée de vouloir rendre effective l'occupation, ne saurait suffire; que la prise de possession effective d'une partie d'une région, bien que pouvant être estimée comme efficace pour acquérir la souveraineté de la région toute entière, lorsque celle-ci constitue un organisme unique, ne peut pas être estimée efficace pour l'acquisition de la souveraineté sur toute une région, lorsque à cause de son extension, ou de sa configuration physique, elle ne peut pas être considérée comme une unité organique de facto".⁹

Sin embargo, la institución de la ocupación ha sufrido una importante evolución, cuyos antecedentes históricos se remontan, incluso, al Antiguo Testamento¹⁰, aunque su auténtico origen hay que situarlo en el modelo de

⁹ RGDIP, 1904, pp.18-19.

¹⁰ Así lo indica TARTARIN en su libro, Traité de la occupation suivant le droit naturel, le droit civil et le droit international, París, 1873, pp.6 y ss. Este autor cita expresamente como primera referencia el Génesis, cap.I, versículos 28 y 29.

ocupación del derecho privado romano¹¹. La occupatio romana era un modo de adquisición de la propiedad que resultaba de la aprehensión de un objeto cualquiera, susceptible de propiedad y no apropiado por una persona capaz de ser propietario. En base a esta concepción se individualizan tres requisitos fundamentales de la ocupación: el carácter de 'res nullius' de la cosa, la intención de adquirirla (animus rem sibi habendi) y la toma de posesión material; este último requisito, la posesión, es la base y el verdadero punto de partida de la ocupación, y va a erigirse como teoría dominante del derecho internacional, atravesando toda la elaboración sucesiva postclásica. Esta última, apoyada fundamentalmente en la compilación justiniana, se halla sustentada, por contra, en una mayor autonomía del animus possidendi, que hace prevalecer a este elemento en la doctrina de la posesión frente a la clásica que la configuraba como una mera señoría de facto¹².

No vamos a entretenernos en la cuestión de saber cuál era el derecho de la ocupación en los sistemas germánico y franco, aunque, según Genêt¹³, no

¹¹ El problema de la evolución histórica de la ocupación ha sido analizado, pormenorizadamente, por numerosos autores a los cuales nos remitimos para un estudio en profundidad del tema. De entre todos ellos destacamos algunos específicos como más importantes: SALOMON, Ch., L'occupation des territoires sans maitre. Etude de droit international, París, 1889; JEZE, G., Etude théorique et pratique sur l'occupation comme mode d'acquérir les territoires en droit international, París, 1896; DEHERPE, L., Essai sur le développement de l'occupation en droit international, París, 1903; AGO, R., Il requisito dell'effettività dell'occupazione in diritto internazionale, Roma, 1934; DESPAGNET, F., "Les occupations des territoires et le procédé de l'hinterland", RGDIP, 1884, pp.103-126; NYS, E., "L'acquisition de territoires", RDILC, 1899, pp.180-190; GENET, R., "Notes sur l'acquisition par occupation et le droit des gens traditionnel", RDILC, 1934, pp.285-324.

¹² Cfr. AGO, R., op.cit., p.44.

¹³ Se apoya, a su vez, este autor en la obra de V.PARDESSUS, Lex Salica, VIII; este último, analizando la ocupación llevada a cabo por los germanos y los francos en los siglos VI y VII, afirma que los hechos demuestran la utilización de ésta como modo de adquisición de propiedad. (Cfr. GENET, R., op.cit., p.300)

parece, 'a priori', que la construcción bárbara en esta materia contradiga la tradición jurídica latina.

La traspolación del principio de la teoría de la posesión romana a la doctrina de la ocupación debe ubicarse en las escuelas internacionalistas del siglo XVI. Hasta ese momento la idea comúnmente aceptada era la de que toda propiedad, como toda soberanía, procedía del Papa; éste disponía de sus tierras y las otorgaba a través de Bulas¹⁴. Las ideas que dominaban la ocupación, en esa época, podrían sintetizarse en las siguientes: el descubrimiento y la realización de formalidades otorgan derecho para solicitar una bula, pero no soberanía; la ocupación es atributivo de propiedad; la ocupación de tierras habitadas es perfectamente legítima si los habitantes no son cristianos sino infieles; la atribución de territorios es decidida por la más alta Autoridad, el Papa¹⁵. La noción de efectividad es completamente extraña en este período.

Tomando como punto de arranque estos antecedentes, podemos dividir la historia de la ocupación en dos grandes períodos desiguales: una primera etapa que se desarrollaría hasta la Conferencia de Berlín de 1885, y otra segunda, que de este

¹⁴ Entre las Bulas que otorgan soberanía sobre territorios ya descubiertos podemos citar la de Martín V, Nicolás V ó Sixto IV; otorgan soberanía sobre territorio por descubrir las de Eugenio IV, y Julio II. Pero, sin duda alguna, la Bula más importante, en este ámbito es la 'Inter Caetera', concedida por Alejandro VI en 1493 y que supone que, a partir de esa fecha, sólo a España pertenece el derecho a ocupar y descubrir. Para un estudio en profundidad sobre el particular, *vid.* SALOMON, Ch., *op.cit.*, pp.35 y ss, y DEHERPE, L., *op.cit.*, pp.10 y ss.

¹⁵ Cfr. GENET, R., *op.cit.*, p.304.

Congreso llegaría hasta nuestros días.

Esa primera etapa, que podríamos denominar del 'descubrimiento y de la ocupación ficticia'¹⁶, abarca los siglos XVI a XVIII; parte de una negación absoluta de valor a las bulas papales, que no serán consideradas nunca más como título válido de soberanía. Los principios jurídicos que prevalecen durante este período, en materia de ocupación del territorio, básicamente, son éstos:

- El Rey reemplaza al Papa en su papel, pero a diferencia de éste, el Rey acuerda el derecho de descubrir y de adquirir derechos de soberanía y de propiedad sobre ciertos territorios, por medio de actos concretos, y no la soberanía y la propiedad misma de aquéllos. Para ello otorga 'cartas' o 'patentes', cuyo titular puede ser un simple particular o una Compañía, como veremos más adelante.
- En términos generales, no se respetan los derechos de soberanía y propiedad de los indígenas, por lo que los territorios por ellos habitados son susceptibles de ocupación.
- Los actos, signos exteriores de la ocupación, admiten una gran variedad: despliegue de estandartes, inscripciones grabadas en rocas, erección de una cruz. Constituyen actos puramente simbólicos, no encuadrables en el concepto de efectividad.
- El rey adquiere por sus mandatarios, debidamente comisionados al efecto, la soberanía plena y entera de los países que éstos ocupan.

¹⁶ Así lo hace Ch.SALOMON, op.cit., p.58 y ss.

La Conferencia de Berlín¹⁷ marca el comienzo de un nuevo período en la historia de la ocupación. Los publicistas han reconocido ya que el hecho del descubrimiento no funda más que un título imperfecto e incompleto, que la ocupación, para fundar un derecho de soberanía que las otras potencias estén obligadas a respetar, deberá ser, no una ocupación nominal, sino real y efectiva. Estos principios básicos quedan consagrados en los artículos 34 y 35, capítulo VII, del Acta de Berlín de 1885¹⁸, cuyas exigencias se resumen en tres puntos: *notificación de la ocupación, efectividad de la misma y publicidad*. Estos artículos pueden considerarse como una declaración relativa a las condiciones esenciales a cumplir para que las nuevas ocupaciones sobre las costas del continente africano se consideren efectivas¹⁹.

Las condiciones impuestas en los artículos 34 y 35, aunque se establece que son 'esenciales', y no son necesariamente exhaustivas, son la expresión mínima del derecho internacional teórico de la ocupación en la época contemporánea, y su

¹⁷ 14 potencias se reúnen, el 15 de noviembre de 1884, en Berlín con la finalidad de estudiar la admisión del Congo en la Comunidad internacional, de establecer los principio de la navegación del Níger y del Congo, y poner las bases de la futura ocupación de Africa. Los trabajos de la Conferencia llevaron a la confección de un Acta General, de 26 de febrero de 1885. (Cfr. GENET, R., op.cit., pp.312-313)

¹⁸ El texto de estos artículos es el siguiente:
Art.34.- La Puissance qui, dorénavant, prendra possession d'un territoire sur les côtes du continent africain situé en dehors de ses possessions actuelles, ou qui, n'un ayant pas eu jusque là, viendrait à en acquérir, et de même la Puissance qui y assumerait un protectorat, accompagnera l'acte respectif d'une notification adressée aux autres Puissances signataires du présent Acte, afin de les mettre à même de faire valoir, s'il y a lieu, leurs réclamations.
Art.35.- Les Puissances signataires du présent Acte reconnaissent l'obligation d'assurer, dans les territoires occupés par elles, sur les côtes du continent africain, l'existence d'une autorité suffisante pour fire respecter les droits acquis et le cas échéant, la liberté du commerce et du transit dans les conditions où elle serait stipulée. (DE MARTENS, Recueil général des traités, 2^a serie, t.X, p.414)

¹⁹ GENET, R.: op.cit., p.314.

aplicación queda restringida a tres puntos de vista:

1. Quedan sólo afectadas las potencias signatarias y las que se hayan adherido.
2. Estos artículos se refieren a las tomas de posesión a efectuar en el futuro, no retroactivamente a las ya realizadas²⁰.
3. Se aplica sólo a ocupación en las costas africanas, se excluyen, las regiones del interior de Africa y las islas dependientes del continente africano, pero no situadas en aguas territoriales, y las ocupaciones efectuadas en otros continentes.

La posterior Convención de St.Germain, 10 de septiembre de 1919²¹, que para los Estados signatarios sustituyó al Acta de Berlín, renueva la exigencia de la efectividad extendiéndola, sin limitación, a otras regiones de Africa²². Más explícitamente que el Acta, impone a los países colonizadores, en su artículo 10, la obligación de mantener, en las regiones sometidas a su autoridad, la existencia de un poder y de los medios de policía suficientes para asegurar la protección de las personas y de los bienes, y, en su caso, la libertad de comercio y de tránsito.

Las insuficiencias del Acta de Berlín, fueron puestas de manifiesto por el Instituto de Derecho Internacional, decidido a 'passer au crible', según expresión de Genêt²³, las preocupaciones doctrinales al respecto. Tomando como base los

²⁰ Así lo demuestra la mediación del Papa Leon XIII en 1885, en el asunto de las islas Carolinas y Palaos, que exige a España, a quien otorga el título en base al descubrimiento y una ocupación casi simbólica, una ocupación efectiva para el futuro. (GARCIA ARIAS, "Corpus Iuris Gentium", p.342)

²¹ Societé des Nations, Recueil des traités, t.VIII, 1922, pp.26-38.

²² A este respecto, HYDE entiende que este Convenio no tiene el propósito de ser limitado en su acción a particulares áreas de Africa. (HYDE, Ch., International Law, Boston, 1947, p.342)

²³ GENET, R., op.cit., p.314.

proyectos de M. de Martitz, presentado en la sesión de Heidelberg, y de M. Engelhardt, el Instituto adopta , en su sesión de Lausana, la Resolución de 4 de septiembre de 1888²⁴, que pese a sus grandes aspiraciones presenta algunas imperfecciones; concretamente, problemas tales como la definición de terra nullius o la capacidad exigida para ocupar, que el Instituto no ha querido resolver en su texto o, por lo menos, no lo ha previsto.

A pesar de todas las imperfecciones y deficiencias, lo cierto es que nos hallamos ante una nueva teoría de la ocupación, que caracteriza a ésta como la voluntad de apropiarse, de una manera permanente, de los territorios sin dueño; la voluntad de apropiación debe ser seguida de una toma de posesión efectiva, y *constatada por medios dirigidos a establecer una dominación permanente, siendo necesario que la potencia ocupante asegure la existencia de una autoridad suficiente.*

B) CONDICIONES ESENCIALES PARA UNA OCUPACION LEGITIMA:

Una vez que hemos conceptualizado claramente a la ocupación como un modo originario de adquisición del territorio, es necesario determinar con exactitud las

²⁴ Annuaire de l'Institut de Droit International, 1928, vol.II, p.702 y ss.

condiciones básicas que deben darse para catalogar una ocupación como válida en derecho internacional; concretamente, se trata de determinar dos cuestiones precisas: la primera, sería la de establecer quién puede ocupar, es decir, quién es el sujeto de la ocupación; y, en segundo lugar, determinar el objeto de ésta, lo que se puede ocupar.

1. El Estado como sujeto ocupante. Eficacia de las ocupaciones de particulares.

Ha sido comúnmente afirmado por la doctrina que, sólo los Estados, sujetos de derecho internacional, los cuales ejercen ya sobre su propio suelo derechos de soberanía, pueden ser sujetos de una ocupación, ostentar la pretensión de alcanzar el título de soberanía; aunque no faltan autores que disienten de esta postura²⁵. Una lectura más atenta de este principio nos lleva a plantearnos dos interrogantes: ¿todos los Estados pueden ocupar?, y más importante aún, ¿sólo los Estados pueden, realmente, ocupar?. Estas cuestiones merecen una consideración separada.

Planteándose esa primera cuestión, Lindley²⁶ sostenía que el hecho de que

²⁵ En esta línea podemos citar a G.SMEDAL, que en su libro, Acquisition of sovereignty over polar areas, Oslo, 1931, niega a personas privadas y compañías colonizadoras la posibilidad de ejercer soberanía.

²⁶ LINDLEY, M.F., The acquisition and government of backward territory in international law, Londres, 1926, p.122; cita como ejemplo al Sultán de Zanzibar, protectorado británico desde 1890. La misma postura es mantenida, también, por GALTIER, O, Ch., L'Occupation des territoires, Toulouse, 1901, p.128, quien añade que carecerán de tal capacidad si el tratado de

un Estado esté bajo la protección de otro Estado no es en sí mismo suficiente para privar al Estado protegido de la capacidad de adquirir. Teniendo presente esta postura, parece posible afirmar con Salomon²⁷ que, igual que todo individuo tiene el derecho a adquirir por ocupación la propiedad de tierras sin dueño, de la misma forma, todo Estado tiene el derecho a adquirir por ocupación la soberanía de todo territorio que ha escapado, hasta ese momento, a la acción de una soberanía.

Mayor importancia, no sólo teórica sino, sobre todo, práctica, reviste la cuestión de establecer si la capacidad de ejercer ocupación es monopolio del Estado; concretamente, el problema se centra en determinar si los particulares, o las compañías, pueden adquirir provechosamente soberanía territorial a través de la ocupación. Ni la Conferencia de Berlín de 1885, ni posteriormente el Instituto de Derecho Internacional, en su sesión de Lausana de 1888, han dado una respuesta a este problema, pese a su inicial planteamiento.

A) PARTICULARES.

Los autores están divididos, a la hora de dar una respuesta, pero podemos identificar dos líneas de opinión:

1ª. Los particulares pueden, sea por ocupación pura y simple, sea por cesión,

protectorado la excluye expresamente.

²⁷ SALOMON, Ch., op.cit., p.121.

adquirir y ejercer derechos de soberanía sobre un territorio²⁸. Sostienen, los partidarios de esta primera teoría, que las empresas privadas pueden adquirir, no sólo derechos de propiedad, sino derechos equivalentes a los de soberanía, y que estos derechos han sido generalmente reconocidos²⁹. Como consecuencia, una potencia no puede pretender ocupar un territorio ocupado por individuos porque no es ya terra nullius desde el punto de vista del Derecho internacional.

2ª. Sólo los Estados pueden ejercer derechos de soberanía, por tanto, la ocupación no puede proceder de un particular³⁰. Esta parece ser la opinión mayormente aceptada por la doctrina, los actos de individuos, sin el expreso mandato del Estado autorizando su acción, son incapaces de conferir soberanía al Estado, pues sólo un Estado puede actuar 'à titre de souverain'³¹.

²⁸ A título ejemplificativo, entre los partidarios de esta doctrina, podemos citar, cfr.: LAVELEYE, M.M. de, "La neutralité du Congo", R.D.I., 1883, p.257 y ss.; TRAVERS TWISS, "La libre navigation du Congo", R.D.I., 1883, p.550 y ss.; WAUTERS, "Lettre du 27 mai 1883", Revue de Géographie, 1883, p.59 y ss.

²⁹ Entre los ejemplos que enumeran, como apoyo de su tesis, está el caso del Estado de Rhode-Island, fundado por dos colonos, Roger Williams y Anne Hutchinson, a cuyo alrededor se agrupan otros individuos; este establecimiento constituye, posteriormente, un cuerpo político. También el de la adquisición de los sultanatos de Brunei y Sala, por el inglés M.Dent, y el austríaco Overbeck (JEZE, G., op.cit., p.185-186).

³⁰ Esta es, sin duda, la postura mayoritaria dentro de la doctrina, cfr.: HALL, W.R., International Law, Oxford, 1880, p.90; ROLIN-JAEQUEMYS, R.D.I., 1889, p.169; SALOMON, Ch., op.cit., p.132; JEZE, G., op.cit., p.177; GALTIER, O. Ch., op.cit., p.126; DEHERPE, L., op.cit., p.38; LINDLEY, M.F., op.cit., p.122... También podemos citar autores modernos encuadrables en esta línea: BROWNLIE, I., op.cit., p.144; BLUM, Y., Historic titles in international law, La Haya, 1965, p.129; OPPENHEIM: International Law, Lauterpacht, 1953, p.496; ROCHE, A.G., The Minquiers and Ecrehoux Case, Ginebra, 1959, pp.119-120; McNAIR, A., "Aspects of state sovereignty", B.Y.B.I.L., 1949, p.40; SCHWARZENBERGER, G., "Title to territory: response to a challenge", International Law in the 20 th. century, American Society of International Law, Nueva York, 1969, p.295.

³¹ M.F.LINDLEY, afirmaba que, aunque el derecho internacional no reconoce a los individuos el derecho de adquirir soberanía para su beneficio personal, de tal forma que si un individuo independiente, que no está subordinado a ningún Estado, adquiere la soberanía sobre territorio 'nullius', por ocupación, éste se encuentra en la misma situación que si de un jefe

Parece clara la conclusión: los actos de individuos, por ellos mismos, no son sustitutivos de ejercicio de autoridad estatal, a menos que estén autorizados antes o sean, posteriormente ratificados, es decir, que los individuos actúen en calidad de agentes o mandatarios del Estado pertinente. Esta es la postura mantenida por el juez McNair, en su opinión disidente en el asunto de Pesquerías, donde afirmó:

"Another rule of law appears to me to be relevant to the question of historic title is that some proof is usually required of the exercise of state jurisdiction, and that the independent activity of private individuals is of little value unless it can be shown that they have acted in pursuance of a licence or some other authority received from their Governments or that in some other way their Governments have asserted jurisdiction through them"³².

Pero, aunque los actos de individuos privados no pueden ser base de derechos de soberanía, pueden constituirse en prueba de una soberanía; encontramos numerosos ejemplos en la práctica internacional que corroboran esta afirmación, aunque no falten supuestos, escasos, como el asunto de la Isla de Aves³³, en que se hayan rechazado tales actos. En el caso de la frontera del Alpe de Cravairola, 23 septiembre 1874³⁴, la Comisión arbitral determinó la prevalencia del título italiano frente al de Suiza basándose en la adquisición de la propiedad del

nativo se tratase, a pesar de esta afirmación, si un número de personas se establecen en un territorio y configuran un gobierno estable y eficaz, pueden fundar una sociedad política, y el territorio ya no es 'nullius'. (op.cit., pp.84-84). En un sentido similar se manifiesta J.H.W. VERZJIL (op.cit., p.349).

³² I.C.J. Reports, 1951, p.184.

³³ Controversia sobre la adquisición de la soberanía de la Isla de Aves, entre Países Bajos y Venezuela, resuelta por un árbitro único, la Reina de España Isabel II, en contra de Holanda que alegaba su ocupación a través de la actividad de pesca de tortuga y recogida de huevos que realizaban, en temporada, pescadores holandeses. (LAPRADELLE, Recueil des arbitrages internationaux, vol.II, p.414)

³⁴ LA PRADELLE, Recueil des arbitrages internationaux, vol.III, pp.500-505.

suelo por una comuna italiana y los actos de posesión efectuados por los individuos que la componían; en la misma línea, el Tribunal Permanente de Arbitraje que conoció del asunto de Grisbådarna, en su laudo de 23 octubre 1909, ha retenido los actos de particulares tales como el ejercicio de pesca, el establecimiento de balizas y el estacionamiento de barcos faros, que estima susceptibles de establecer la soberanía de Suecia³⁵. Lo mismo ha ocurrido en conflictos solucionados por vía judicial; en el caso de Groenlandia Oriental³⁶, el TPJI prestó atención a los actos de explotación llevados a cabo por instituciones danesas no gubernamentales, que no estaban mandadas actuar en nombre del Estado; en el asunto de las islas Minquiers y Ecrehous³⁷, el juez Carneiro afirma que, "in certain cases, and in certain circumstances, the presence of private persons who are nationals of a given State may signify or entail occupation by that State"³⁸, y en ese sentido el TIJ acogió como prueba del ejercicio de soberanía de Gran Bretaña, las actividades de pescadores de Jersey.

B) COMPAÑÍAS DE COMERCIO Y COLONIZACION.

A la hora de examinar la cuestión de si las compañías de colonización pueden, como los Estados, ejercer derechos de soberanía por vía de ocupación,

³⁵ R.G.D.I.P., 1910, pp.186-187.

³⁶ Sentencia de 5 abril 1933, en el conflicto entre Dinamarca y Noruega. P.I.C.J., serie A/B, nº 53, 1933, pp.62-63.

³⁷ Sentencia de 17 noviembre 1953, Reino Unido v. Francia. I.C.J., Reports, 1953, p.64.

³⁸ Opinión individual. I.C.J. Reports, 1953, p.104.

vemos que la doctrina está dividida en dos tendencias, como en el caso de los particulares³⁹:

1ª. Las Compañías ejercen por su propia cuenta verdaderos derechos de soberanía. Fundados en los precedentes históricos, sostienen que, las antiguas compañías de comercio y colonización han ejercido, no sólo derechos de propiedad, sino una verdadera soberanía sobre los territorios, para apoyar su teoría mencionan algunos ejemplos. Los caballeros de la Orden Teutónica que se establecieron en Prusia después de las Cruzadas, transformándolo en Ducado. Los caballeros de Rhodas o de Malta, que después de transformarse en orden militar tras la toma de Jerusalem, se establecen en 1310 en Rhodas, y en 1798 en Malta, con el consentimiento de Carlos V, aunque por poco tiempo⁴⁰. El modo de adquisición de soberanía fue el obsoleto y hoy rechazado de la conquista.

2ª. Las compañías no son soberanos independientes y cuando adquieren o ejercen derechos de soberanía, en todo caso, derechos externos de soberanía, están actuando como 'agentes' para el Estado bajo cuya concesión actúan⁴¹.

³⁹ La postura de los autores respecto a las compañías de colonización es la misma que la vista respecto a los particulares, por lo que nos remitimos a las notas 28 y 30 ('supra') que citan a los autores que defienden una u otra tendencia.

⁴⁰ GALTIER, O.Ch., op.cit., p..131-132.

⁴¹ Es necesario referirse, de forma separada, al caso más singular, dentro de las compañías de colonización, la 'Asociación internacional del Congo'. Sociedad privada constituida con fines, puramente, de estudio geográfico, pero que adquirió enseguida inmensos territorios en Africa, transformándose en la 'Asociación internacional del Congo'. Como tal asociación concluyó tratados con todos los Estados europeos y con EE.UU. Tras la declaración del gobierno belga de su constitución en Estado libre e independiente, fue ratificado por la Conferencia de Berlín el 23 de febrero de 1885. Aunque en un primer momento actuó de forma privada bajo el respaldo de Bélgica, posteriormente, ejerce auténticos derechos de soberanía, una vez convertida en una auténtica Potencia, con personalidad jurídica internacional. Se trata de un supuesto, no tanto de ocupación, como de creación de un nuevo Estado. También puede citarse el caso de Liberia, que debe su existencia a la

Examinando la actuación de las compañías de colonización modernas⁴², se corrobora esta afirmación, pues en sus 'cartas', otorgadas por los Estados pertinentes, se hace constar expresamente que actúan en nombre de dicho Estado. Es el caso de la carta otorgada, el 5 septiembre 1888, a la 'British North Borneo Society' que actúa bajo el mandato de Inglaterra⁴³; la 'carta de protección' de 27 febrero 1885, otorgada a la Compañía alemana 'Karl-Peters Félix'⁴⁴; o la 'carta' imperial, que el 17 mayo 1885 recibió la Compañía de 'Nueva-Guinea'⁴⁵. Al conceder una 'carta de protección', el Estado deviene responsable ante otros Estados de todos los actos de la Compañía, de esa forma, es el Estado quien ocupa por intermediación de una Compañía que le representa.

Es posible, además, encontrar en la jurisprudencia internacional casos que demuestren cómo la actividad de compañías y corporaciones que gozan de 'cartas',

'Sociedad de colonización americana para el establecimiento de hombres de color libres de los EE.UU.', fundada el 31 diciembre 1816, que en 1822 funda la ciudad de Monrovia. (SALOMON, Ch., op.cit., pp.141-144)

⁴² Son numerosas las compañías de colonización que han surgido a lo largo de la historia. En Italia, la Societé Rubattino; en Portugal, la Compagnie portugaise de l'Africa orientale, Sofala, Tété, Zumbo; en España, la Asociación de Africanistas y Colonizadores y la Societé des pêcheries canario-africaines; en Holanda, la Compañía de las Indias Orientales; en Inglaterra, la North african Company, l'African Lakes Company, la National african Society (después Royal Niger Company), la British North Borneo Society, la British South African Society, la British East Society; en Alemania, la société allemande de colonisation pour le Sud-Ouest de l'Afrique, la Compagnie de la Nouvelle Guinée, la "société allemande pour l'Afrique orientale, Karl Peters et C^e", la "société allemande de Witu", la compagnie allemande de l'Afrique occidentale, la compagnie kanséatique agricole, minière et commercial de l'Afrique allemande su Sud-Ouest, la Compagnie de l'hinterland du Cameroun, la Compagnie l'Astrolaba, la Compagnie de Juluit.

⁴³ GALTIER, O.Ch., op.cit., p.144.

⁴⁴ En este caso, se trata de la ratificación por el Estado alemán de las posesiones de territorios llevadas a cabo por esta compañía. Esta 'carta' considera a la sociedad como alemana, y los territorios por ella ocupados como del Estado alemán. (Ver texto de la 'carta' en DEHERPE, L., op.cit., pp.54 y 55).

⁴⁵ Ver texto de la 'carta' en, SALOMON, Ch., op.cit., pp.155-157.

por las que el estado les delega poderes de adquisición y gobierno, es considerada como actividad estatal. En el asunto de la Isla de Palmas, el juez Max Huber consideró como mejor título el de Países Bajos que alegaba la ocupación del territorio en base a los actos de soberanía llevados a cabo por la Compañía de las Indias Orientales en nombre de Holanda⁴⁶.

La conclusión nos parece clara, la soberanía sólo puede ser ejercida por un Estado o, excepcionalmente, por una entidad, bien persona individual, bien compañía de colonización y comercio, especialmente mandada por un Estado para ese propósito. Llegados a este punto, parece obligada una última referencia a la figura del MANDATARIO.

El corpus o acto físico de ocupación, la toma de posesión es, en la práctica, llevada a cabo por un agente que actúa en nombre del Estado de quien recibe el mandato; en este sentido se pueden distinguir dos tipos de mandatos:

1º. Mandato especial. El representante del Estado es encargado de una misión especial, operar la ocupación de un territorio determinado en su nombre. El Estado adquiere la soberanía desde el momento en que se ejecutan sus órdenes.

2º. Mandato general. Las instrucciones que recibe el agente del Estado no son concretas, sino que se trata de una orden general de ocupar todos los territorios que

⁴⁶ Asunto entre EE.UU. y Países Bajos, resuelto por el laudo de 4 abril 1928. (R.G.D.I.P., 1935, pp.172 y ss.)

encuentren en su camino. Aquí no concurren animus y corpus en el momento de la adquisición, como sucede en el caso de un mandato especial, sino que la soberanía no se adquiere hasta el momento en que el Estado tiene conocimiento de la situación operada, pues el animus para ser efectivo debe estar dirigido a un área definitiva⁴⁷.

Podría encuadrarse en una tercera categoría, que denominaríamos como de mandato tácito, aquellos supuestos, frecuentes en la práctica, de particulares que actúan sin mandato del Estado, ocupando territorios. Aquí la soberanía se adquiere desde el momento en que el Estado ratifique tales actos de ocupación, y no desde la toma de posesión, pues en ese momento sólo hay corpus, y falta el animus. Es necesario un acto de ratificación posterior del Estado, por el que haga suyos esos actos, es decir, por el que exprese el animus.

La adquisición de soberanía en nombre del Estado, según Salomon⁴⁸, puede realizarse también por lo que él denomina 'gestion d'affaires'. Dicha adquisición tiene lugar de forma indirecta, a través del hecho de un tercero. Esta hipótesis se asemeja a la del mandato tácito, pero se diferencia de éste porque en el caso de negotiorum gestio, el Estado ignora completamente el acto de gestión realizado en su provecho. Para que tenga lugar la adquisición de soberanía, el Estado deberá ratificar los actos del gerente, ratificación que equivale a una declaración del

⁴⁷ LINDLEY, M.F., op.cit., p.290.

⁴⁸ SALOMON, Ch., op.cit., pp.113-115.

animus que falta en el momento de la toma de posesión del territorio por el gestor.

2. Territorio susceptible de ocupación. La 'terra nullius'.

El Estado tiene el derecho a ocupar, lo cual, como hemos visto, se lleva a cabo generalmente a través de agentes o mandatarios designados al efecto; resuelto, pues, el problema del sujeto de la ocupación, nos queda aún por determinar otra condición esencial para que una ocupación sea válida, el objeto sobre el que ésta puede recaer. Al hablar del objeto de la ocupación no nos referimos a la naturaleza del derecho adquirido, derecho de soberanía territorial, sino, como bien dice Salomon⁴⁹, a la cosa misma sobre la que se actúa.

A) LA EXPRESION 'TERRA NULLIUS'.

Si hemos definido la ocupación como la adquisición, por un Estado, de un territorio nullius, la labor de determinación del objeto se centrará en establecer lo que se entiende por terra nullius, que los franceses denominan 'territoire sans maître', los ingleses 'territory belonging no one', y nosotros 'territorio sin dueño'; expresiones que nos dan idea de la connotación negativa que lleva la expresión latina.

La importancia de establecer el carácter de nullius de un territorio, la

⁴⁹ SALOMON, Ch., op.cit., p.190.

encuentra Torres Bernáldez⁵⁰, en la obstaculización que supondría no hacerlo para la categorización jurídica de los actos de posesión de los cuales puede ser objeto; precisamente, en el dictamen consultivo del Sahara Occidental, el TIJ ha puesto el acento en el aspecto funcional de la noción, en los siguientes términos: "the expresion terra nullius was a legal term of art employed in connection with occupation as one of the accepted legal methods of acquiring sovereignty over territory"⁵¹. Aunque no debemos olvidar que ante la casi total ausencia de territorios nullius en el presente, el término ha perdido gran parte del significado que tenía en el pasado.

La expresión terra nullius concuerda perfectamente con las diferentes etapas de la evolución de la sociedad internacional⁵²: en la antigüedad romana, se consideraba nullius todo territorio que no era romano; la época de los grandes descubrimientos (siglos XVI y XVII) fue un período en el que todo territorio que no perteneciera a ningún soberano cristiano era nullius; después, en el siglo XIX, se asimila la idea de nullius a todo territorio que no pertenece a ningún Estado civilizado.

Junto a esta vinculación histórica, e interrelacionada con ella, podemos apreciar otra de mayor trascendencia, la que existe con la soberanía, en cuanto el

⁵⁰ TORRES BERNALDEZ, S., "Acquisition of territory", Encyclopedia of Public International Law, vol.10., Berhardt (ed), Amsterdam, 1987, p.497.

⁵¹ I.C.J., Reports, 1975, p.39.

⁵² Así lo ha afirmado claramente J.F. PRÉVOST, en su artículo, "Observations sur l'avis consultatif de CIJ relatif au Sahara occidental ('terra nullius' et 'autodetermination')", S.D.I., Clunet, 1976, p.834.

territorio 'sin dueño' se define por referencia a la noción de soberanía estatal. En efecto, el territorium nullius no es sino, como claramente expresa Jézé, "la chose susceptible de souveraineté et non actuellement appropriée"⁵³. De esta definición se extraen dos condiciones que, necesariamente, deben darse para que una toma de posesión efectuada por un Estado, tenga por consecuencia la adquisición de su soberanía:

1ª. Cosa susceptible de soberanía. Para que una cosa sea susceptible de soberanía, es necesario que sea posible para un Estado tenerla en su poder, en su posesión continua y permanente. Por ello, tradicionalmente se ha venido excluyendo como objeto de ocupación el mar, el aire y el espacio ultraterrestre. Galtier⁵⁴ añade también los bienes que sean 'patrimonio común de la humanidad'. Al hablar de mar debemos entender el mar abierto o alta mar y el ZIFMO, pues tanto el mar territorial, la zona económica exclusiva en su caso, y el fondo de mar correspondiente (plataforma continental), son susceptibles de 'posesión' por el Estado ribereño pertinente⁵⁵.

2ª. No esté actualmente apropiada, es decir, que no esté sometida a ninguna soberanía. Mientras no hay duda en afirmar, respecto de ciertos tipos de territorios,

⁵³ JEZE, G., op.cit., p.59.

⁵⁴ GALTIER, O. Ch., op.cit., p.45.

⁵⁵ Debemos recordar que el Tribunal Permanente de La Haya, en el asunto de Grisbådarna (mencionado supra), concedió valor, a la hora de otorgar el título a Suecia, a la realización de actos llevados a cabo en el mar adyacente, tales como, explotación de pesquerías de langosta, investigación marítima, instalación de faros y fijación de balizas. El hecho de que tales actos sean constitutivos de ocupación, y se excluya esta vinculación a los mismos actos realizados en zonas de mar abierto, se justifica en el consenso de los Estados en ese sentido, ya sea dado por vía convencional, ya sea consuetudinariamente.

que no se encuentran bajo soberanía alguna, como ocurre con los desiertos, los deshabitados o los abandonados, mayor problema, y aquí la doctrina se escinde, plantean las situaciones donde el territorio está habitado por ciertas 'entidades'. Parece obligado examinar cada uno de estas hipótesis.

B) SUPUESTOS DE TERRA NULLIUS.

Prescindiendo de la catalogación romana, sin menoscabo de su indudable influencia, que consideraba como 'no actualmente apropiadas': las cosas que nunca han pertenecido a nadie, las abandonadas por su dueño con la intención de dejar de ser propietario, y los bienes del enemigo; en el Derecho internacional contemporáneo pueden situarse bajo el término de terra nullius, todos aquellos territorios incluibles en alguno de estos tres posibles supuestos: 1. territorio deshabitado; 2. territorio abandonado; 3. territorios habitados por individuos que carecen de organización social y política. Vamos a examinar cada uno de estos casos, teniendo presente que, mientras los dos primeros no son discutidos por la doctrina, no existe unanimidad en la tercera categoría.

1º. Tierras deshabitadas.

Sin ninguna duda, la ocupación será legítima si se opera sobre un territorio desprovisto de habitantes, tal es el caso de los islotes que surgen del fondo del mar, de los aluviones que aparecen, poco a poco, en la superficie del agua, o las erupciones volcánicas, y, en general, cualquier territorio desierto. La isla de Aves, era una isla deshabitada cuando la descubrieron los españoles y tomaron posesión

de ella, además, temporalmente cubierta por agua; en el asunto del Chamizal, México y EE.UU., se disputan la soberanía de un aluvión surgido en el Río Grande que delimita su frontera⁵⁶; más claramente, Groenlandia Oriental estaba totalmente desierto, circunstancia común a todos los territorios polares, cuando Noruega se estableció, por primera vez en 1721, a través de la fundación, por Hans Egede en 1721, de colonias⁵⁷.

2º. Territorio abandonado o derelictum.

La expresión latina derelictio, puede interpretarse como el deliberado abandono del territorio, y constituye un modo de pérdida del título de soberanía; es, simplemente, la contrapartida negativa de la ocupación efectiva⁵⁸. Para que podamos hablar de abandono será necesario un prerequisite: que el Estado, en cuestión, sea titular de la soberanía sobre ese territorio, independientemente de cual haya sido el modo de adquisición. Además, deben concurrir, como dice Lindley⁵⁹ dos condiciones indispensables: así como la ocupación para ser efectiva requiere (y a ello dedicaremos el próximo apartado), primero, el acto físico por el que se toma posesión del territorio, o corpus, y segundo, la intención de retener el dominio así adquirido, o animus, de igual forma la derelictio envuelve dos elementos, el abandono físico de la posesión y la intención de dejar el dominio. Si

⁵⁶ Laudo de 15 junio 1911. U.N. R.I.A.A., vol.XI, pp.309-347.

⁵⁷ P.I.C.J., serie A/B, n°53, 1933, pp.50-51.

⁵⁸ BROWNLEE, I., op.cit., p.145.

⁵⁹ LINDLEY, M.F., op.cit., pp.48-49.

un Estado abandona su ejercicio de jurisdicción territorial sobre un territorio, implícito el animus de abandono, cualquier otro Estado es libre para establecer allí su propia jurisdicción. Mientras el acto físico, que puede ser efectuado tanto de forma voluntaria como por coacción, es fácil probarlo, mayores dificultades surgen para probar la pérdida del animus possidendi; en ausencia de una evidencia directa a este respecto, puede presumirse transcurrido un razonable lapso de tiempo sin ejercer la necesaria jurisdicción. Tal ocurrió en la controversia franco-inglesa de la isla de St. Lucía, ocupada por Inglaterra en 1639; tras la eliminación de todos los colonos por los caribeños, no hubo ningún intento inglés posterior de re-establecimiento, y en 1650 tomaron posesión los franceses, quienes expulsaron a los nativos. Por el Tratado de Utrecht, St.Lucía fue asignada a Francia al entender que Inglaterra había tenido tanto animus como facto, de abandono⁶⁰.

Puede ocurrir, en algunos casos, que las circunstancias sean tales que no pueda presumirse una intención de abandono, e, incluso, que no haya una completa renuncia de posesión, de tal forma que no pueda considerarse el territorio abierto a una nueva ocupación. Esta parece ser la ratio decidendi, entre otros, en el asunto de la Bahía de Delagoa⁶¹, en el que el Arbitro entendió que el abandono de posesión de Portugal fue meramente temporal, y que en ningún momento hubo evidencia suficiente para determinar su derelictio. Lo mismo ocurrió en el caso de la Isla de Clipperton, entre Francia y México; expresamente el Rey de Italia afirmó

⁶⁰ Cfr. LINDLEY, M.F.: op.cit., pp.48-49.

⁶¹ Controversia de adquisición de soberanía entre Gran Bretaña y Portugal sobre la Bahía de Delagoa, decidido por el Presidente de la República francesa, Mc. Mahon, el 24 julio 1875. (LAPRADELLE, Recueil des arbitrages internationaux, vol.III, pp.596-650.

que "there is no reason to suppose that France has subsequently lost her right by derelictio, since she never had the animus of abandoning the island"⁶².

En suma, para que un territorio que ha sido ocupado alguna vez llegue a ser nullius, debe ser abandonado, esto es, el Estado ocupante debe haber renunciado a la posesión del mismo, tanto de facto como de animus; o puede considerarse abandonado, por no haber sido ocupado efectivamente.

3º. Tierras habitadas por grupos de individuos que carecen de organización política.

La cuestión de saber si las tribus indígenas ejercen soberanía sobre sus territorios, a los efectos de catalogarlas o no como terra nullius, ha preocupado seriamente a la doctrina logrando graves escisiones al respecto. De hecho, el problema quedó en suspenso en la Conferencia de Berlín y no fue regulado por el Acta de 1885; posteriormente, se volvió a plantear en el Instituto de Derecho Internacional, en sus sesiones de Heildeberg (1887) y Lausana (1888), pero fue finalmente eliminada de su Resolución de 1888, pese a que el artículo 1 del Proyecto de M. de Martitz, que le sirvió de base, lo regulaba expresamente en los siguientes términos: se considera como terra nullius toda región que no se encuentre efectivamente bajo la soberanía o el protectorado de ninguno de los Estados que forman la comunidad de derecho de gentes, poco importa que esta región esté habitada o deshabitada⁶³.

⁶² A.J.I.L. 1932, p.394.

⁶³ Cfr. Annuaire...op.cit., p.707.

Podemos identificar tres teorías respecto los derechos de las tribus indígenas⁶⁴:

1. Negación absoluta. Los indígenas no tienen ningún derecho de propiedad ni de soberanía. Esta posición es la mantenida en los siglos XV a XVIII, en que los Papas, primero, y los Reyes después, eran los soberanos absolutos de todos los territorios. No faltan defensores de la misma en la época contemporánea; autores como Hegel, Víctor Cousin, Darwin, Martens-Ferrao, Martitz, Oppenheim o Jennings, que consideran una exageración hablar de una soberanía de los pueblos salvajes o semi bárbaros.

2. Derechos relativos. Las tribus indígenas no pueden ejercer mas que una soberanía limitada por los derechos de la civilización, de tal forma que sólo debe reconocérseles soberanía donde tales pueblos tengan una vida establecida y el territorio sea totalmente productivo. Puede decirse que, para los partidarios de esta teoría, entre los que están Vattel, M. de Martens, MM. Pinheiro-Ferreira y Blünstchli⁶⁵, los indígenas tienen derecho de propiedad pero no de soberanía.

3. Reconocimiento absoluto. El Derecho internacional, el derecho de gentes no admite distinción entre bárbaros y pretendidos civilizados, deben ser puestos en pie de igualdad; de la misma forma que los individuos son iguales, los Estados son iguales, esta es la regla absoluta. Estas ideas, manifestadas por Vitoria en el siglo

⁶⁴ Para un examen en detalle respecto de estas teorías, vid., entre otros, SALOMON, Ch., op.cit., pp.201-254; JEZE, G., op.cit., pp.87-165; GALTIER, O.Ch., op.cit., pp.59-113; LINDLEY, M.F., op.cit., pp.10-47; MARTITZ, M. de, "Occupation.. op.cit.", p.374 y ss..

⁶⁵ En la obra de O.Ch. GALTIER, encontramos un resumen concreto de la tesis sustentada por cada uno de estos autores citados (cfr.op.cit., pp.62 a 65).

XVI, han sido retomadas por autores más modernos como Kant, Pradier-Fodéré, Salomon, Galtier o Jézé⁶⁶, y se traducen en una afirmación de derechos absolutos e intangibles de propiedad y soberanía por parte de los indígenas. Cuatro siglos más tarde, la escuela vitoriana recibe el respaldo del T.I.J., y más profusamente del juez Ammoun, quien en su opinión individual en el dictamen del Sahara Occidental, hace el siguiente comentario:

"It is a condemnation of the modern concept, as defined by Pasquale Fiore, which regards as 'terra nullius' territories inhabited by populations whose civilization, in the sense of public law of Europe, is backward, and whose political organization is not conceived according to Western norms... It is well known that in the sixteenth century Francisco de Vitoria protested against the application to the American Indians, in order to deprive them of their lands, of the concept of 'res nullius'... It is the concept which should be adopted today"⁶⁷.

Hoy día, y esta parece ser la opinión mayoritaria, para que un área no se considere terra nullius, es necesario que esté habitada por una sociedad política. El test tradicional, propuesto por Lindley⁶⁸, para calificar a un pueblo como organización política, propone tres requisitos:

1. La mayoría de ellos debe tener el hábito de obediencia a un cierto superior común.
2. La sociedad debe poseer algún grado de permanencia.
3. Debe estar constituida por un considerable número de personas.

⁶⁶ Cfr. igualmente, GALTIER, O.Ch., op.cit., pp.65 a 73.

⁶⁷ Vid. Dictamen consultivo del Sahara Occidental, 16 octubre 1975. I.C.J., Reports, 1975, p.86, el juez Ammoun desarrolla de esta forma la afirmación del propio T.I.J. de que "territories inhabited by tribes or peoples having a social and political organization were not regarded as *terrae nullius*" (ibidem, p.39, pa.80).

⁶⁸ LINDLEY, M.F., op.cit., p.23.

De ello se sigue⁶⁹, que si una región está habitada sólo por individuos aislados que no están unidos por acción política, de tal forma que no se ejerce soberanía allí, tal área debe considerarse territorium nullius; aplicando criterios similares, el T.I.J. en su dictamen consultivo del Sahara Occidental llegó a considerar que los nómadas de Moslem que transitaban la zona litigosa constitúan una tribu con su propia organización política y social, y, en consecuencia, el territorio les pertenecía por lo que no podía catalogarse como terra nullius⁷⁰.

C) ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA OCUPACION.

Para que se produzca la adquisición de soberanía, es necesario que se establezca un cierta relación entre el sujeto y el objeto, que el primero actúe, eficazmente, sobre el segundo; de ello se extrae la consecuencia de que la ocupación comporta, en términos técnico-jurídicos, la existencia, además, de dos elementos perfectamente identificables: el animus occupandi, o, si se prefiere, la intención y la voluntad de ejercer la soberanía territorial, y, de otra parte, la efectividad de la ocupación. Ambos elementos, que examinaremos a continuación, han quedado suficientemente ratificados por la jurisprudencia internacional, tanto

⁶⁹ Otra consecuencia es, que allí donde una tribu indígena se califique como sociedad política ya no hablaremos de ocupación, sino que el modo de adquisición de la soberanía sobre esos territorio serán los tratados de cesión con los correspondientes jefes de esas tribus.

⁷⁰ I.C.J.Reports, 1975, pp.39 y 40.



arbitral, por ejemplo, en el caso de la Isla de Clipperton: "By inmemorial usage having the force of law, besides the 'animus occupandi', the actual, and not nominal, taking of possession is a necessary condition of occupation"⁷¹, como judicial, en el asunto del Estatuto Jurídico de Groenlandia Oriental: "the two elements necessary to establish a valid title to sovereignty, namely: the intention and will to exercise such sovereignty and the manifestation of State activity"⁷².

1. 'Animus occupandi', elemento espiritual.

En primer lugar, es necesario que el ocupante declare, claramente, su voluntad de convertirse en soberano del territorio sobre el que ejerce posesión. Eso es lo que se denomina, indistintamente, animus possidendi, animus domini o animus sibi habendi, y que podemos definir, en términos generales, como la firme intención de establecer en el territorio en cuestión la autoridad suprema, es decir, lo que se entiende por establecer un ejercicio constante y regular de todos los derechos que pertenecen a un soberano⁷³.

La exigencia de una intención de actuar como soberano es insistida en la doctrina que analiza el tema (a la que ya nos hemos venido

⁷¹ A.J.I.L., 1932, p.390.

⁷² P.C.I.J., serie A/B, nº 53, 1933, p.63. La misma afirmación se hace por el Tribunal en las páginas 45 y 48, y en la opinión disidente del juez Anzilotti, p.83.

⁷³ Definición dada por GALTIER, O.Ch., op.cit., p.124.

refiriendo en repetidas ocasiones). Como bien expresa Brownlie⁷⁴, este criterio subjetivo envuelve la imputación de un estado mental, que supone una valoración y 'juicio' legal a éstos ordenando varias actividades estatales, y esta operación se desarrolla en tres niveles:

- La actividad debe ser '*à titre de souverain*', en el sentido que la acción debe ser del estado y no de personas naturales o jurídicas no autorizadas.
- El concepto tiene una connotación negativa: si la actividad es por consentimiento de otro Estado, o éste es de otro modo reconocido como soberano legal, entonces, ningún tipo de actividad estatal es capaz de madurar en soberanía.
- La naturaleza dominante de la actividad adoptada como un todo, debe ser aplicable sólo sobre la base de que se asume la existencia de soberanía.

Una consecuencia parece clara, la intención y voluntad de actuar como soberano debe ser suficientemente manifestada por aquella rama del gobierno estatal que es competente, bajo la constitución propia del Estado, de aceptar la responsabilidad de añadir territorio al Estado⁷⁵.

Pero, sin duda, la mayor dificultad que plantea la cuestión del animus occupandi es, como en el caso de la derelictio, la prueba del mismo. Ante la falta de una declaración expresa en ese sentido, debemos presumir implícito el animus

⁷⁴ BROWNLIE, I., op.cit., pp. 140-141.

⁷⁵ Cfr. LINDLEY, M.F., op.cit., p.284.

en la realización de una efectiva y constante toma de posesión⁷⁶; la intención de comportarse como soberano, debe ser, pues, manifestada claramente por actos físicos, la toma de posesión se convierte en la prueba cierta de que un Estado quiere adquirir. Esto se traduce en que la manifestación objetiva de autoridad y de soberanía estatal tendrá valor probatorio, no sólo del factum, sino también del animus; a esa manifestación nos vamos a referir a continuación.

2. Efectividad de la ocupación.

La mera ocupación fáctica de un territorio no constituye, en sí misma, un título jurídico suficiente, completo y definitivo, sino que supone un 'inchoate title' que debe quedar perfeccionado mediante el ulterior ejercicio pacífico y continuo de las funciones estatales sobre el territorio en cuestión. De esta forma, la efectividad de la posesión permite que un título inicial cristalice en un título definitivo y

⁷⁶ De forma simétrica a lo que sucede con los dos elementos de la costumbre: la existencia del elemento subjetivo, la 'opinio iuris', se halla implícita en una práctica suficientemente amplia y convincente. Esta afirmación, sostenida por la mayor parte de la doctrina (cfr., entre otros, GONZALEZ CAMPOS, J.D., SANCHEZ RODRIGUEZ, L.I. y ANDRES SAENZ DE SANTAMARIA, M.P., Curso de Derecho internacional público, 5ª ed., Madrid, 1992, pp.118 y ss; MORO MILLA, L., La 'opinio iuris' en el derecho internacional contemporáneo, Madrid, 1990; HUESA VINAIXA, R., El nuevo alcance de la 'opinio iuris' en el derecho internacional contemporáneo, Valencia, 1991), ha sido suficientemente respaldada por la práctica del TIJ. Fue en el asunto de la delimitación de la frontera marítima en la región del Golfo de Maine (Canadá . EE.UU.), cuando, por primera vez y de forma explícita, el TIJ afirmó que "the 'opinio iuris' of states can be tested by induction based on the analysis of a sufficiently extensive and convincing practice, and not by deduction from preconceived ideas" (I.C.J., Reports, 1984, p.299); idea que ha sido, posteriormente ratificada en el asunto de la Plataforma Continental (Jamahiriyah Árabe Libia c. Malta) (I.C.J., Reports, 1985, p.29), y en el asunto de las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra ésta (Nicaragua c. EE.UU.) fondo (I.C.J., Reports, 1986, p.109).

completo. Sería posible afirmar, que mientras la invocación de una reclamación territorial es la parte formal de ésta, el efectivo ejercicio del derecho que se pretende constituye el aspecto material de tal reclamación⁷⁷. Es indiscutible que el desarrollo del derecho de gentes ha tendido, como hemos visto, a exigir una efectividad más rigurosa en materia de adquisición territorial por vía de ocupación, sobre todo en los siglos XVIII y XIX, y ello en cuanto es la efectividad la que funda la oponibilidad de las competencias territoriales frente a terceros Estados y, por tanto, su validez.

Existen diversas maneras de concebir el requisito de la efectividad:

- como requisito sólo de la aprehensión, del elemento material de la ocupación. Esta parece ser la postura mantenida por R.Ago, para quien la efectividad es sólo característica de un particular modo de adquisición, la ocupación, en cuanto deriva, no del concepto de soberanía sino del concepto romano de occupatio. Es una condición para la validez pero no para el mantenimiento del título⁷⁸. El único soporte de esta tesis podría hallarse en el asunto de la Isla de Clipperton, donde el árbitro establece que no había prueba del animus derelinquendi por parte de Francia.
- como requisito de existencia de la soberanía territorial. La efectividad es el sine quae non de la soberanía. Esta es la tesis del juez Huber, en el caso de la Isla de

⁷⁷ Cfr. BOUCHEZ, L.J., "The concept of effectiveness...", op.cit., p.156.

⁷⁸ AGO, R., op.cit., p.25 y ss.

Palmas, para quien la efectividad no es sólo requisito esencial de la ocupación, sino elemento necesario de todo modo de adquisición de la soberanía territorial, y además del mantenimiento de la soberanía, cualquiera que sea el título de que derive⁷⁹. La doctrina posterior⁸⁰ y la jurisprudencia (como veremos en los próximos capítulos), parecen apoyar claramente esta posición.

Sin embargo, el problema surge al concretar cuándo un Estado ocupa efectivamente un territorio. La determinación del significado y alcance exacto del requisito de la efectividad de la ocupación, es el punto en que hay una mayor dificultad e incertidumbre, tanto más cuanto que dicha determinación constituye el momento fundamental en la construcción jurídica de la ocupación⁸¹. El Instituto de Derecho Internacional, en su Resolución de 1888, desarrolla en los siguientes términos la exigencia de efectividad:

"Art.1.- L'occupation d'un territoire à titre de souveraineté ne pourra être reconnue comme effective que si elle réunit les conditions suivantes:

1^a. La prise de possession d'un territoire enfermé dans certains limites, faite au nom du gouvernement;

2^a. La notification officielle de la prise de possession.

La prise de possession s'accomplit par l'établissement d'un pouvoir local responsable, pourvu de moyens suffisants pour maintenir l'ordre et pour assurer l'exercice régulier de son autorité dans les

⁷⁹ Cfr. R.G.D.I.P., 1935, pp.164-165.

⁸⁰ Claramente muestran su apoyo a la postura de Huber, entre otros, SCHWAZENBERGER, op.cit., p.34; ROCHE, A.G., op.cit., pp.24-25.

⁸¹ Así lo afirma R.AGO, en su monografía "Il requisito dell'effettività dell'occupazione in diritto internazionale", Roma, 1934, p.10; nos remitimos a la misma para un estudio en profundidad de este requisito.

limites du territoire occupé"⁸².

Si añadimos a estas consideraciones la definición, en términos generales, de la efectividad que se concreta en los siguientes términos: "la efectividad es, en esencia, la expresión de la relación entre los hechos y lo que se considera como derecho en un cierto momento"⁸³; todo ello supone, aplicada ésta a la teoría de la ocupación, que ha de valorarse a la luz de las formas en que históricamente se manifestaron las correspondientes actividades estatales, que no tienen por qué coincidir con las actuales.

Y ésta ha de ser la labor fundamental del árbitro o del juez, determinar en cada caso concreto de controversia de atribución territorial entre Estados⁸⁴, en atención a las circunstancias especiales, si las manifestaciones de soberanía que cada parte alega como prueba de la efectividad de su posesión, son prueba

⁸² Annuaire..., op.cit., p.710 y ss. El requisito de la notificación que recoge el Instituto, haciéndose eco del artículo 34 del Acta de Berlín de 1885, tuvo su utilidad en ese contexto pero, posteriormente, no ha tenido acogida entre los juristas como elemento jurídico racional (vid., entre otros, LINDLEY, M.F., op.cit., p.302; DESPAGNET, op.cit., pp.105-106; TOUSCOZ, J., op.cit., p.148). Por ello, y ateniéndonos a los resultados de una práctica negativa en su utilización, podemos afirmar que no es condición necesaria de la ocupación, de ahí la ausencia en nuestro estudio.

⁸³ Definición dada por Ch. de VISSCHER, "Observations sur l'effectivité en droit international public", R.G.D.I.P., 1958, p.601; BOUCHEZ, L.J., "The concept of effectiveness as applied to territorial sovereignty over sea-areas, air space and outer space", N.I.L.R., 1962, p.151; y TOUSCOZ, J., Le principe d'effectivité dans l'ordre international, París, 1964, p.2.

⁸⁴ El ejercicio efectivo de soberanía y jurisdicción en determinados territorios tiene importancia, no sólo en conflictos de adquisición territorial, sino para la determinación de las fronteras entre Estados en los casos en que éstas sean confusas, imprecisas o inexistentes, como ha ocurrido y ocurre respecto a las fronteras de los estados americanos, en relación al uti possidetis iuris, y como tendremos ocasión de comprobar extensamente en el capítulo siguiente.

suficiente de autoridad estatal para constituir título sobre el territorio. Así lo hizo, en una de las primeras sentencias arbitrales en la materia, el Presidente de EE.UU., en el asunto de la Isla de Bulama⁸⁵, que enfrentó a Gran Bretaña y Portugal, basándose en la efectiva posesión portuguesa; con el mismo resultado y las mismas partes, *decidió el Presidente de la República francesa en el caso de la Bahía de Delagoa*. En su decisión de 6 junio 1904, el Rey de Italia estableció la condición de la ocupación efectiva como regla para determinar la frontera entre la Guyana británica y Venezuela. La jurisprudencia moderna posterior, de la que los casos de Isla de Palmas (1928), Isla de Clipperton (1931), Groenlandia Oriental (1933), Minquiers y Ecrehous (1953), Templo de Preah Vihear (1962), la delimitación fronteriza entre Honduras-El Salvador (1992)... son tan sólo un ejemplo, ha consolidado esta práctica inicial, desarrollando la teoría de la efectividad de la ocupación hasta sus últimas consecuencias. Pero tendremos oportunidad en varios capítulos posteriores, de ver cómo se ha ido realizando esa labor de análisis de la prueba a cargo del 'juzgador', en cada uno de los conflictos que hasta ahora se han planteado.

⁸⁵ Laudo de 21 abril 1870. (LAPRADELLE, Recueil des arbitrages internationaux, vol.II, p.613).

3. El principio de relatividad de la efectividad y las situaciones territorialmente particulares.

La efectividad, ya sabemos, significa actual ejercicio de derechos de soberanía, esto es, mantenimiento de un cierto orden correspondiente al standard internacional, lo cual, por supuesto, es diferente en territorios escasamente poblados y escasamente frecuentados⁸⁶. Esta afirmación nos conduce al principio *de relatividad de la efectividad*, principio complementario al de la efectividad, tal y como la hemos visto. Esto quiere decir que el control efectivo es un concepto relativo, varía según la naturaleza del territorio afectado. Esta relatividad puede entenderse en dos sentidos:

1. Es más fácil establecer control efectivo en un territorio deshabitado que en otro habitado por tribus salvajes;
2. El grado exacto de efectividad exigida puede variar según el carácter del territorio en cuestión⁸⁷. La diferencia vendrá determinada según sea o no susceptible de habitación permanente, región climáticamente desfavorable, inhóspita o remota, pues en estos casos se requiere muy poco en la prueba del ejercicio de soberanía. Este es el sentido a que nos referimos.

El TPJI, en el asunto de Groenlandia Oriental, consagró este principio de

⁸⁶ VON DER HEYDTE, F.A.F., "Discovery, symbolic annexation and virtual effectiveness in International Law", A.J.I.L., 1935, p.463.

⁸⁷ AKEHURST, M., A Modern Introduction to International Law, Londres, 1982, p.143.

relatividad de la efectividad, que ya expusiera Max Huber, tiempo antes, en la Isla de Palmas:

"It is imposible to read the records of the decisions in cases as to territorial sovereignty without observing that in many cases the tribunal has been satisfied with very little in the way of the actual exercise of sovereign rights, provided that the other State could not make out a superior claim. This is particularly true in the case of claims to sovereignty over areas in thinly populated or unsettled countries"⁸⁸.

Al hablar de regiones climáticamente desfavorables, inhóspitas, regiones remotas, deshabitadas o escasamente pobladas, como territorios donde resulta de aplicación el principio de relatividad de la efectividad, podemos identificar, claramente estas regiones en zonas polares, desiertos, áreas montañosas o de difícil acceso e islas; se trata de situaciones 'territorialmente particulares', en las que, como consecuencia de la aplicación de este principio, un pequeño y decisivo acto de soberanía será suficiente para crear un título válido por ocupación.

La jurisprudencia nos ofrece varios ejemplos, en los que los jueces o árbitros, enfrentados a situaciones particulares, han hecho aplicación de este principio de relatividad:

- En el asunto de la Isla de Aves, sometida a inmersiones temporales, el árbitro afirma la imposibilidad de habitación permanente debido a esta circunstancia⁸⁹,

⁸⁸ P.C.I.J., serie A/B, nº 53, 1933, p.46.

⁸⁹ LAPRADELLE, op.cit., p.415.

por lo que pocos actos de posesión de Venezuela le otorgan el título.

- El juez Max Huber, en la Isla de Palmas, sostuvo, claramente, que "indépendamment de la considération que l'un ne peut pas s'attendre à ce que des manifestations de souveraineté sur une île exigüe et éloignée, peuplée seulement d'indigènes, soient fréquentes, il n'est pas nécessaire que l'exercice de la souveraineté remonte à une époque très reculée"⁹⁰.

- Como hemos indicado, el T.P.J.I. reitera el principio ya formulado, en el asunto de Groenlandia Oriental, donde pocos actos de autoridad, llevados a cabo por Dinamarca, fueron suficientes para otorgarle el título de soberanía en base a que se trataba de una zona ártica, poco poblada, de difícil acceso y con frecuentes tormentas, es decir, una región de difícil establecimiento, como ocurre con todas las zonas polares, caracterizadas por la inaccesabilidad, las bajas temperaturas y la duración del día y la noche.

- En el caso del Rann de Kutch, el tribunal arbitral, tuvo en cuenta que se trataba de un territorio que permanecía la mayor parte del tiempo sumergido bajo las aguas acumuladas durante la época de lluvias, por lo que era imposible una ocupación permanente, y "the requirement of possession cannot play the same important role in determining sovereign rights therein as it would have done otherwise"⁹¹.

⁹⁰ R.G.D.I.P., 1935, pp.197-198.

⁹¹ I.L.M., 1968, p.679.

- Finalmente, en el dictamen consultivo del Sahara Occidental, el TIJ se enfrentó al problema de determinar la existencia o ejercicio de funciones estatales en un territorio desértico y con escasa densidad de población, cuyos habitantes eran mayormente nómadas, lo cual supuso la relativización de las modalidades 'normales' de manifestación de soberanía⁹².

En conclusión, en los casos de territorios de características especiales, escasamente poblados y poco susceptibles de habitación permanente, los tribunales correspondientes relativizan la intensidad de las pruebas de ocupación aportadas por las partes, y valoran éstas en función de las características especiales de tales territorios, individualizando cada caso concreto.

SECCION 2ª: LA TEORIA DE LOS ACTOS Y SU INCIDENCIA EN LA OCUPACION EFECTIVA.

Como hemos indicado, los títulos de atribución territorial, en el presente, están basados sustancialmente en un acto de aprehensión efectiva; tanto la práctica como la doctrina internacional, reconocen que el continuo y pacífico

⁹² I.C.J., Reports, 1975, pp.42, 59 y 60.

ejercicio de soberanía territorial es un buen título⁹³. De esta forma, la existencia de la soberanía territorial aparece ligada a las manifestaciones de su ejercicio, erigiéndose éste como elemento constitutivo por el cual la soberanía se adquiere y se mantiene. Por eso, en Derecho internacional lo que realmente interesa, a efectos de atribución de soberanía, son los actos a través de los cuales se ejerce ésta en un territorio, y, por consiguiente, quién los ejecuta; planteamiento que nos conecta directamente con la dialéctica de 'actos' y 'hechos' jurídicos⁹⁴.

Si una manifestación de voluntad expresa puede dar lugar al nacimiento de un acto jurídico, también se admite que el comportamiento de los Estados, partes en un litigio, llegue a producir efectos de derecho en ciertos casos, aunque sin identificarse con aquél, de ahí que el juez o árbitro no pueda dejar de tomarlos en consideración⁹⁵.

⁹³ Por mencionar algún ejemplo, podemos aludir al asunto de la Isla de Palmas, en el que se reitera que "l'exercice continue et pacifique de la souveraineté territoriale (pacifique para rapport aux autres états) vaut titre" (vid. R.G.D.I.P., 1935, p.164); a nivel doctrinal podemos citar, entre otros, a Brownlie, para quien 'los actos concretos de apropiación, o una manifestación de actividad estatal consonante con la soberanía son los constituyentes vitales del título (vid. op.cit., p.142).

⁹⁴ Disquisición tradicional entre los juristas es la centrada en la diferencia entre 'actos' y 'hechos' jurídicos, pues mientras ambos son productores de efectos jurídicos, únicamente los primeros llegan a la categoría de norma. Para un estudio en profundidad sobre la teoría del acto, recomendamos, las monografías de JACQUE, J.P., Eléments pour une théorie de l'acte juridique en droit international public, París, 1972 (especialmente pp.187 a 226), y SUY, E., Les actes juridiques unilatéraux en Droit international public, París, 1962; así como la abundante bibliografía que en ellos se cita.

⁹⁵ Además del comportamiento activo, que es al que aquí nos referimos al hablar de actos materiales, también se derivan efectos jurídicos del comportamiento pasivo de los Estados; la ausencia de protesta de un Estado ante una pretensión notoria que emana de otro Estado y que, presumiblemente, puede lesionar los derechos del primero, equivale a una aquiescencia cuyo alcance vendrá determinado por el juez, en atención a las circunstancias.

Más concretamente, en los supuestos en que un Estado estime que otro

En el orden jurídico internacional, esta última categoría de actos stricto sensu -que es a la que nosotros nos referimos- está constituida, como dice Venturini, por actividades materiales, pero cualificadas por la voluntad o, todo lo menos, por la consciencia de su realización⁹⁶. Consistentes, pues, en actos físicos concretos, y no en manifestaciones de voluntad, deben caracterizar de una manera inequívoca la actividad del Estado. Transpolada esta teoría al ámbito territorial, el comportamiento de los Estados es llamado a jugar un papel considerable⁹⁷, comprendiendo todos aquellos actos materiales que tengan por finalidad atender la soberanía estatal, ya sean manifestación del poder legislativo, ejecutivo o judicial; en cualquier caso, serán comportamientos centrados en el ejercicio efectivo del derecho mismo, y que podrán, no sólo confirmar y precisar un título existente, que pueda ser dudoso, sino también modificar e, incluso, crear el propio derecho en la medida en que no lesione los derechos de otro Estado; no en vano ha afirmado JACQUE, tras señalar que los casos en que un Estado puede adquirir

lesiona con sus actos, de alguna forma, sus derechos, este comportamiento activo no bastará por sí solo para crear derechos en favor del Estado que los realiza, será necesario, como indica Cahier, el reconocimiento del otro Estado afectado que vendrá dado por su silencio, esto es, por su comportamiento pasivo frente a dicho comportamiento activo (vid. op.cit., p.250).

⁹⁶ Vid. VENTURINI, G., "La portée et les effets juridiques des attitudes et des actes unilatéraux des États", R. des C., n°112, 1964.II, p.436.

⁹⁷ Aunque, a primera vista, resulte difícil admitir que los Estados pueden adquirir derechos frente a otros Estados, a través de su comportamiento, en cuanto ello suponga una contradicción del principio de igualdad e independencia de los mismos, en el ámbito territorial, según afirma Cahier, no hay duda de la importancia fundamental que tal comportamiento reviste. Este autor, al referirse a la adquisición de soberanía sobre un territorio, llega, incluso, a relegar la importancia de la voluntad estatal, frente a un mayor protagonismo de la realización de actos efectivos de soberanía, esto es, del comportamiento (cfr. CAHIER, Ph., "Le comportement des Etats comme source de droits et d'obligations", en Recueil d'études de droit international en hommage à Paul Guggenheim, Ginebra, 1968, pp.244-245). En este sentido, ya nos hemos referido en la sección anterior a cómo entendemos implícito el elemento psicológico de la ocupación en los actos materiales.

derechos a través de su comportamiento son extremadamente raros, que "c'est le cas, par exemple, de l'acquisition de la souveraineté territoriale: lorsqu'un Etat accomplit des actes d'administration sur un territoire sans maître qu'il occupe, il exerce effectivement la souveraineté territoriale"⁹⁸.

Dado que la capacidad para adquirir válidamente soberanía territorial constituye una característica exclusiva de los Estados, únicamente los actos emanados válidamente de éstos tendrán la categoría de 'acto' a efectos de cursar título territorial, en cuanto sólo ellos pueden actuar 'à titre de souverain'. Pero, en determinados casos, simples individuos, sociedades o cualquier otro tipo de entidad privada, pueden llevar a cabo actividades materiales de las que se deriven ciertos efectos jurídicos⁹⁹, como veremos con detenimiento, siempre y cuando resulten en última instancia imputables a un Estado, aquél por cuya cuenta actúan; en cualquier caso estaremos finalmente hablando, al otorgar eficacia jurídica, del acto de un Estado.

⁹⁸ Vid. JACQUE, J.P., *op.cit.*, p.214. En el mismo sentido, cfr. CAHIER, Ph., "Le comportement des Etats ...", *op.cit.*, p.261.

⁹⁹ Analizando la problemática de la prueba de un título territorial, G.Fitzmaurice, distingue tres tipos de actos, a los que relaciona distinto valor probatorio. Así habla de actos de Estado a 'titre de souverain', actos de estado no realizados a 'titre de souverain' y actos no de estado (vid. "The law and the procedure of the International Court of Justice, 1951-4: points of substantive law. Part II", *B.Y.B.I.L.*, 1955-56, pp.52-58).

A) LOS ACTOS DE ESTADO, PROPIAMENTE DICHOS, COMO ELEMENTO CONSTITUTIVO DE LA POSESION EFECTIVA. SUS MANIFESTACIONES.

Admitida la capacidad de actuación del Estado, sujeto de derecho internacional plenamente sui iuris, éste se ve impelido a acogerse a la técnica de la representación internacional. Las actividades materiales que suponen una manifestación del ejercicio efectivo de soberanía estatal, a diferencia de los actos jurídicos, no son llevados a cabo únicamente por los órganos tradicionalmente considerados como competentes para intervenir en las relaciones internacionales, o por personas debidamente autorizadas por éstos¹⁰⁰. Es perfectamente factible, en algunos casos, que los actos tomados en consideración hayan sido ejecutados por cualquier otro órgano del Estado que despliega habitualmente una actividad distinta a la mencionada¹⁰¹, sin que ello suponga un conflicto de competencias 'vis-à-vis', entre los distintos órganos; de esta forma, los comportamientos de los

¹⁰⁰ En el ámbito de los actos jurídicos unilaterales, se establece el paralelismo con el artículo 7 del Convenio de Viena sobre derecho de los tratados, considerando como autoridades competentes los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministro de AA.EE., por cuanto en virtud de sus funciones, se considera que representan al Estado (cfr. GONZALEZ CAMPOS, J.D., SANCHEZ RODRIGUEZ, L.I. y SAENZ DE SANTA MARIA, M.P., op.cit., pp.72-73). Esta misma presunción aparece recogida en el Informe de la C.D.I. a la Asamblea General sobre el derecho de los tratados de 1966 (vid. doc. A/6309/Rev.1).

¹⁰¹ La jurisprudencia internacional nos muestra cómo, en términos generales (sin referirnos expresamente al ámbito territorial), los derechos y obligaciones pueden tener su origen en actos consumados por órganos internos, que no son los órganos de las relaciones exteriores, y en ausencia de plenos poderes. Así, en el asunto de Pesquerías, el T.I.J. tomó en consideración el método adoptado por Noruega para delimitar las aguas territoriales, basado en toda una serie de decretos adoptados por órganos internos (cfr. I.C.J. Reports, 1951, pp.116 y ss.); mientras en la sentencia arbitral relativa a la interpretación del acuerdo franco-americano, el tribunal ha retenido como concluyentes los actos emanados del Secretario general francés de la aviación civil (cfr. R.G.D.I.P., 1965, pp.189 y ss), respecto del cual es más que dudoso mantener su carácter de órgano del Estado.

funcionarios nacionales, que no hayan recibido poderes al efecto de vincular al Estado internacionalmente, son igualmente imputables a éste como actos suyos susceptibles de derivar consecuencias jurídicas; podríamos explicar esta conclusión en palabras de Chailley, que considera 'qu'il existait une délégation tacite de l'Exécutif à ses agents pour agir dans les domaines qui relèvent de sa compétence'¹⁰². En cualquier caso, el fundamento de esta afirmación radica, según la doctrina, en la necesidad de afianzar la seguridad de las relaciones internacionales¹⁰³, pues los Estados deben tener confianza en sus comportamientos recíprocos; en estas condiciones, un acto que emane, ya sea de un órgano cualificado para representar al Estado o de otro funcionario nacional, puede ser imputado a un sujeto de derecho internacional por lo cual hablaremos, entonces, de un acto jurídico¹⁰⁴. En este sentido la propia jurisprudencia internacional nos muestra, como tendremos ocasión de comprobar con detenimiento en próximos capítulos, que los actos estatales pueden emanar de autoridades 'subalternas' y ser suficientes para establecer la soberanía del Estado.

Se trata de determinar ahora cuáles, de entre esos 'actos estatales' a los que venimos refiriéndonos, son susceptibles de responder a una relación entre el 'hecho' y el 'derecho' en los contenciosos de adquisición y delimitación territorial.

¹⁰² Vid. CHAILLEY, M., La nature juridique des traités internationaux, París, 1932, pp.212-213.

¹⁰³ Cfr. JACQUE, J.P., op.cit., pp.225-226; en el mismo sentido se manifiesta CAHIER, P., op.cit., p.264.

¹⁰⁴ Cfr. JACQUE, J.P., op.cit., p.226.

Por tanto, nuestra tarea ahora es la de enumerar¹⁰⁵, o cuanto menos intuir, aquéllos de entre los comportamientos de un Estado que de alguna forma pueden, en mayor o menor grado, derivar consecuencias jurídicas incardinadas en un proceso de atribución territorial¹⁰⁶; y entendemos englobados en ellos de una manera general, como hace Roche¹⁰⁷, tanto los realizados en el ejercicio de soberanía como los que no se efectúan a 'titre de souverain', si bien estos últimos, en términos generales, para que pueden tener alguna 'significación' deben ser de una naturaleza particularmente convincente en la situación dada e, incluso, ir acompañados por auténticos actos de soberanía.

■ Ejercicio de jurisdicción penal .

Procedimientos criminales llevados a cabo por los tribunales de un país, que conllevan la punición de delitos penales; e, incluso, actos previos como los de arresto de presuntos culpables para su juicio e interrogatorio, efectuados en

¹⁰⁵ Hemos de indicar de antemano, que al abordar esta fase de nuestra investigación hemos adoptado como punto de referencia, el importante trabajo que en este sentido supone el 'Anexo IX', de la Replique du Gouvernement de la Republique du Honduras, 12 enero 1990, en el asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras, centrado en la prueba de la presencia humana y de las autoridades hondureñas en las zonas en litigio de la frontera terrestre con El Salvador; dicho anexo efectúa una acertada esquematización de distintos grupos de actividades estatales, realizadas sobre un territorio, en cuanto puedan ser susceptibles de crear o corroborar un derecho de soberanía sobre el mismo (pp.481-903).

¹⁰⁶ Al aludir a 'consecuencias jurídicas' no debemos olvidar que éstas no sólo vienen referidas al derecho de adquisición de soberanía territorial, sino también, y así lo ha afirmado el juez Huber en el asunto de la Isla de Palmas, y como corolario, a un deber, la obligación de proteger los derechos de otros Estados (vid. R.G.D.I.P., 1935, pp.164-165).

¹⁰⁷ Vid, ROCHE, A.G., The Minquiers and Ecrehous Case, Ginebra, 1959, p.119-120.

territorio dado, son manifestación de ejercicio de autoridad estatal¹⁰⁸.

■ Ejercicio de jurisdicción civil.

En un sentido similar a la jurisdicción criminal, también pueden tener lugar, en un territorio litigioso, procedimientos para juzgar sobre la presunta realización de actos ilegales en violación de normativa civil: propiedad, sucesiones...¹⁰⁹. Al mencionar la jurisdicción, ya sea penal o civil, debemos aludir igualmente, por tratarse de un comportamiento estatal, al nombramiento de los jueces y tribunales encargados de su impartición, más concretamente, la creación de los juzgados de paz por parte de los tribunales superiores¹¹⁰, que tengan atribuida competencia territorial sobre un determinado espacio físico controvertido..

■ Actos de administración: central y local.

Al referirnos a la Administración Central, hablamos del poder ejecutivo en

¹⁰⁸ Varios procedimientos criminales tuvieron lugar, por ejemplo, en Jersey, respecto de delitos cometidos en la isla de Ecrehous, instituidos ante 'Royal Court' de Jersey, en 1692, 1811, 1817, 1881... por entenderse realizadas tales acciones en su jurisdicción (cfr. asunto de Minquiers y Ecrehous, I.C.J.Reports, 1953, pp.64 y 65); igualmente se recogen como manifestación de jurisdicción penal la actuación de tribunales en Dhan Banni, en el asunto del Rann de Kutch (cfr. I.L.M., 1968, p.676), o diversos procesos verbales ante el juez de paz de Meanguera del Golfo, admitidos por el T.I.J. en el asunto de la controversia fronteriza entre El Salvador y Honduras (cfr. I.C.J.Reports, 1992, p.572, pa.359).

¹⁰⁹ El T.I.J. aceptó como ejercicio de soberanía, la jurisdicción ejercida por el 'Tribunal Feudal del Feudo de Noirmont' en Jersey en 1615, 1616 y 1617, para determinar la propiedad de objetos naufragados en Minquiers (cfr. I.C.J.Reports, 1953, pp.67-68).

¹¹⁰ Varios nombramientos de jueces de paz para la municipalidad de Meanguera fueron efectuados por el Tribunal Supremo de El Salvador, los cuales, al igual que algunos de primera instancia, tuvieron a su cargo la decisión de varios procedimientos civiles (cfr. I.C.J.Reports, 1992, pp.572-573, pa.359).

términos generales, podemos aludir a un amplio elenco de actividades de diversa naturaleza, algunas de las cuales aunque incluibles en este apartado, hemos preferido darlas un tratamiento separado. El pago de salarios y remuneraciones a los empleados y funcionarios públicos¹¹¹; los controles aduaneros ejercidos a través de puestos de aduana, construidos por un Estado y dependientes de la autoridad de un país determinado¹¹²; la constitución de servicios postales, dependiente de la Dirección General Postal de un Estado, y el desarrollo continuado de los mismos a lo largo de un territorio; o la instauración de los servicios de Sanidad Pública, a través no sólo de proyectos sanitarios, sino de una eficaz red de asistencia médica¹¹³ que incluye la adopción de todas las medidas sanitarias necesarias en los casos de epidemias¹¹⁴, son tan sólo un ejemplo de los variados actos a desarrollar por autoridades estatales encargadas de la Administración.

Actos ordinarios ejecutados por funcionarios de la administración local o municipal en el ejercicio de sus funciones, como los referentes a la realización de informes hidrográficos, construcción de edificaciones para fines públicos,

¹¹¹ Cfr. el argumento alegado por Honduras, aunque no fue admitido por el Tribunal como prueba suficiente para establecer la delimitación, Réplique du gouvernement de la République de Honduras, 12 enero 1990, Anexo IX, p.489; o el pago de subsidios al propietario de un bote al servicio de Comité de Puertos y Muelles de Jersey, por su actuación en una operación de salvamento de un naufragio en Minquiers, en 1779 (cfr. I.C.J.Reports, 1953, pp.68-69).

¹¹² Como lo son, tanto el instalado en Minquiers por las autoridades aduaneras de Jersey (I.C.J.Reports, 1953, p.66), como el puesto aduanero del sector de Dhara Banni dependiente de autoridades británicas y pakistaníes (I.L.M., 1968, p.676).

¹¹³ Cfr. en este sentido, los actos ejecutados en la isla Meanguera alegados por El Salvador (I.C.J.Reports, 1992, pp.572-573, pa.359).

¹¹⁴ Es el caso del Acta de 1754, que supuso la adopción de un eficaz mecanismo sanitario ante una epidemia de peste en Ecrehous (cfr. I.C.J.Reports, 1953, p.64).

levantamiento de fortificaciones para proteger la zona, conclusión de contratos de diversa índole y su registro, elaboración del censo de población de un municipio y de informes sobre cadáveres¹¹⁵, e, incluso, el nombramiento de alcades suplentes¹¹⁶, constituyen un efectivo ejercicio de autoridad, si bien sobre un área restringida, la de su localidad o municipio.

■ Actividad legislativa.

Las emanaciones del poder legislativo, a través de la promulgación de leyes, decretos, convenios o cualquier otra medida legislativa afectando a cualquier parte de un territorio¹¹⁷, incluso a su delimitación marítima¹¹⁸, son sin duda una de las más claras pruebas de ejercicio de poder soberano, aunque en opinión de algunos autores¹¹⁹ este tipo de actos no son suficientes para establecer un

¹¹⁵ Cfr. los múltiples actos de esta clase alegados, tanto por Francia como por Reino Unido en el asunto de *Minquiers y Ecrehous* (op.cit., pp.64 a 70); también puede citarse el ejercicio de administración local por autoridades provinciales camboyanas en el Templo de Preah Vihear (cfr. I.C.J.Reports, 1962, p.30).

¹¹⁶ Son numerosos los ejemplos de nombramientos de alcaldes auxiliares citados por Honduras en cuanto testimonio de su presencia en la zona, en su controversia fronteriza con El Salvador (cfr. *Réplique...* op.cit., pp.641 y ss.).

¹¹⁷ Como el Acta sanitaria de 1754, o la 'British Treasury Warrant' de 1875, por la que Jersey se constituyó en Puerto de las Islas del Canal (cfr. I.C.J.Reports, 1953, p.64 y 66); igualmente, toda la legislación reguladora del monopolio comercial en Groenlandia Oriental (cfr. P.C.I.J., *serie A/B*, n° 53, 1933, p.48).

¹¹⁸ Para el T.I.J., es una clara manifestación del ejercicio de autoridad estatal, la delimitación efectuada por Honduras con Nicaragua respecto de su frontera marítima, en el tratado de 1900 (cfr. I.C.J.Reports, 1992, p.569, pa.354), siguiendo el precedente marcado por el T.P.J.I., en el asunto de Groenlandia Oriental, respecto de la delimitación de las aguas territoriales realizada por Dinamarca en una ley de 1905 (cfr. P.C.I.J., *serie A/B*, n°53, 1933, p.53).

¹¹⁹ Es el caso de A.G. Roche, en su obra *The Minquiers...op.cit.*, p.125.

control efectivo sobre el territorio para el que se dictan.

■ Fuerzas armadas y de policía.

La presencia de fuerzas de policía al servicio de un Estado, encargadas del mantenimiento de la seguridad y el orden público en un área determinada¹²⁰; así como la existencia de destacamentos militares a los fines de protección y defensa armada de un territorio frente a posibles ataques de otros Estados¹²¹, lo cual conlleva, a su vez, la construcción de fortificaciones y cuarteles para su asentamiento y despliegue¹²²; constituyen un válido mecanismo de control y una evidente manifestación de autoridad sobre un territorio, por parte del Estado que los establece y que será, igualmente, responsable de los nombramientos e instrucciones militares efectuadas por las autoridades militares competentes en el mismo¹²³.

¹²⁰ Como es el caso de las patrullas costeras holandesas en la Isla de Palmas (cfr. R.G.D.I.P., 1935, p.196); las fuerzas policiales implantadas por las autoridades de Sind en el área del Rann de Kutch (cfr. I.L.M. 1968, p.676); o las ocasionales patrullas de policía de Dubai en la zona fronteriza en litigio (cfr. Asunto de la delimitación fronteriza entre los Emiratos de Dubai y Sharjah, original mecanografiado, p.151).

¹²¹ En 1732 contra los holandeses, y en 1781 contra los austríacos, los portugueses desplegaron su fuerza armada para defender la Isla de Bulama (cfr. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.II, p.637); en esta misma línea, el gobierno venezolano estableció por primera vez un destacamento armado en la Isla de Aves, confirmando su dominio en la isla (cfr. LA PARDELLE et POLITIS, op.cit., p.415).

¹²² Tal es el caso de las fortificaciones establecidas por EE.UU. en 'Rouse Point' en el convencimiento de que tal terreno era parte de su territorio (cfr. Asunto de la frontera del Noreste, LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.I, p.377); y de los cuarteles militares de Awa, implantados por Holanda (cfr. Delimitación de la Guyana, MARTENS, N.R.G. 2^{as.}, vol.XVIII, p.101).

¹²³ Cfr. Los nombramientos de oficiales militares efectuados por El Salvador en el período de 1918-1990, para la municipalidad de Meanguera del Golfo (I.C.J.Reports, 1992, p.572, pa.359).

■ Sistema electoral.

Comportamiento estatal indudablemente probatorio de la presencia de un Estado en una región y despliegue de su autoridad, lo conforma la organización de un proceso electoral para la misma; tanto el acto de celebración de elecciones, como el previo de elaboración de censos, bien sean nacionales o regionales, pueden enmarcarse en este contexto¹²⁴, en cuanto actos de administración. No es extraño, pues, encontrar afirmaciones en este sentido, como la realizada por Honduras

en su Alegato de la controversia de límites que le enfrentaba a Guatemala, al sostener que "la celebración de elecciones es un acto de soberanía de muy alto orden"¹²⁵.

■ Fiscalidad.

Al referirnos a los actos concernientes al ejercicio de la fiscalidad, lo hacemos a la percepción de tasas e impuestos, por diversos conceptos, cuya naturaleza y origen pueden ser diversos: locales, aduaneros, de actividad liberal,

¹²⁴ En 1939, 1952 y 1984 tuvieron lugar sendas elecciones organizadas por El Salvador en la municipalidad de Meanguera; asimismo, entre 1930 y 1971 la Oficina de Estadísticas Generales y Censos de El Salvador, llevó a cabo varios censos poblacionales de la isla de Meanguera (cfr. I.C.J. Reports, 1992, p.572, pa.359); en el contexto colonial también han de retenerse las elecciones celebradas por la Potencia colonizadora, y en las que participan las dependencias administrativas, como es el caso de las elecciones a Diputado de las Cortes Españolas, 5 noviembre 1820, por la provincia de Comayagua (cfr. Laudo arbitral del Rey de España, Honduras-Nicaragua, GROS ESPIELL, H., España y la solución pacífica de los conflictos limítrofes en Hispano-América, Madrid, 1984, pp.140-141).

¹²⁵ Concretamente, Honduras refería el hecho de que el 28 de mayo de 1821, las Cortes españolas dispusieron que la Intendencia de Honduras tuviera una legislatura provincial, con el territorio que para entonces constituía la Intendencia (vid. Alegato de la República de Honduras, Washington, 1932, pp.29 y 30).

tasas para la utilización de pastos para la alimentación del ganado¹²⁶..., pero que, en todo caso, afectan a los habitantes de un territorio concreto, y son recaudadas por las autoridades fiscales en favor de un Estado. Esta actividad recaudatoria lleva aparejada la de fijación de los tipos o baremos impositivos, que van a ser de aplicación a los habitantes de un territorio determinado¹²⁷, en función de factores diversos, todo ello en cuanto el Estado en ejercicio de su soberanía es fundamentalmente impositor, por necesidades de su propia existencia.

■ Actos registrales.

Hablar de actividad registral implica aludir a una multiplicidad de actos de muy diverso carácter y cuya procedencia, en cuanto a la persona que efectúa el registro, es variada, pero que son manifestación de la autoridad de un Estado respecto de las mismas. Así, podemos citar, entre otros, los actos de registro del estado civil, registros de la propiedad -para bienes inmobiliarios-, registros portuarios para barcos y licencias de pesca¹²⁸, y los registros de nacimientos y

¹²⁶ Antes de 1945, las autoridades del Kutch llevaron a efecto el cobro de las cuotas de pasto como un ejercicio de funciones de Gobierno, que también realizaron actividades aduaneras (cfr. I.L.M., 1968, pp.676-678); igualmente se recogen ejemplos de imposición de tasas en el asunto de la isla de Palmas, por las autoridades holandesas (cfr. op.cit., p.195) y en el de Minquiers y Ecrehous, por las autoridades de Jersey (cfr. op.cit., p.65).

¹²⁷ Cfr. Un decreto de 19 noviembre 1919, publicado el 10 diciembre 1919 en el Boletín Oficial de El Salvador, fija el baremo de los impuestos aplicables al municipio de Meanguera del Golfo (I.C.J.Reports, 1992, p.572, pa.359).

¹²⁸ Cfr. El registro que se llevaba a cabo en el puerto de Jersey en 1872 (Asunto de Minquiers y Ecrehous, op.cit., p.65).

fallecimientos¹²⁹.

■ Educación.

En el sector de la educación pública se pueden desarrollar actividades tales como, la creación de escuelas, el nombramiento de directores para ellas o del profesorado encargado de impartir la enseñanza; u otros, de carácter más administrativo y burocrático, como son las subvenciones percibidas por las escuelas o los registros académicos¹³⁰.

■ Relaciones diplomáticas.

A través del desarrollo de las relaciones internacionales con otros países, por parte de las personas facultadas para ello -a las que ya nos hemos referido-, es posible obtener el reconocimiento de la soberanía territorial de un Estado sobre un territorio determinado por Estados terceros, bien a través de declaraciones, bien de convenios¹³¹. Igualmente resulta relevante la correspondencia diplomática entre

¹²⁹ Cfr. Los registros del Departamento de La Unión sobre un número de nacimientos y fallecimientos ocurridos en Meanguera en 1890, 1891, 1917, 1943 y 1960 (I.C.J.Reports, 1992, p.573, pa.359).

¹³⁰ Cfr. Asunto de El Salvador y Honduras, op.cit., p.239, pa.574; y Replique du Gouvernement de la Republique de Honduras, 12 enero 1990, Anexo IX, pp.655 y ss.

¹³¹ Es el caso del reconocimiento de la soberanía danesa en Groenlandia Oriental, tanto por declaraciones expresas de terceros Estados, como EE.UU., Francia, Italia, Japón o Reino Unido, como por parte de Noruega a través, entre otros actos, del Convenio de 1 septiembre 1819 (cfr. op.cit., pp.59 a 63 y p.68); también la declaración británica de reconocimiento del Rann como territorio del Kutch (cfr. I.L.M., 1968, p.682).

Estados, por la que uno de ellos reconoce un territorio bajo la jurisdicción del otro¹³², y el valor implícito que pueden tener las visitas oficiales periódicas de autoridades nacionales a una zona litigiosa¹³³.

■ Celebración de tratados con la población autóctona.

Además de los tratados internacionales que puede celebrar un Estado con otros Estados como mecanismo de reconocimiento, expreso o implícito, de su soberanía sobre un territorio concreto por parte de éstos, tal y como hemos advertido en el párrafo anterior, existen toda otra serie de 'tratados', e incluso de 'contratos' que un Estado concluye no ya con otros sujetos de Derecho internacional, sino con 'reyezuelos' o príncipes de tribus que habitan los territorios que tal Estado pretende conseguir. La finalidad de esos actos dispositivos no es obviamente el reconocimiento sino la propia adquisición de una región concreta, gobernada por tales jefes¹³⁴; actos que, al celebrarse con sujetos no reconocidos como miembros de la Comunidad internacional no pueden equiparse auténticos tratados o acuerdos internacionales, capaces de crear derechos y obligaciones en

¹³² A través de una serie de canjes diplomáticos, Portugal obtuvo el reconocimiento de su soberanía sobre la Bahía de Delagoa, por parte de Austria (cfr. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.III, p.637); diversos documentos diplomáticos evidencian el reconocimiento mutuo de Honduras y Nicaragua sobre sus límites (cfr. GROS ESPIELL, H., España... op.cit., p.139).

¹³³ Por ejemplo, desde 1888 autoridades de Jersey efectuaron visitas oficiales periódicas a Minquiers, lo que demuestra que ejercían su ordinaria administración (cfr. I.C.J.Reports, 1953, p.69).

¹³⁴ El título adquisitivo sustentado por Gran Bretaña en sus disputas territoriales con Portugal, tanto respecto de la Isla de Bulama como de la Bahía de Delagoa, se fundamentaban en sendos tratados de cesión (que fueron insuficientes) firmados con los correspondientes jefes de las tribus que habitaban esas áreas (vid. LA PRADALLE et POLITIS, R.S.A., vol.II, p.613 y vol.III, p. 638).

derecho internacional. Esta realidad no les excluye de la posibilidad de generar ciertos efectos indirectos, fundamentalmente como prueba subsidiaria de la intención de actuar como soberanos, siendo particularmente interesantes en este sentido los tratados de cesión del territorio en cuestión, que sin constituir verdadero título adquisitivo según el derecho internacional, sería un título imperfecto, paso previo para una auténtica y efectiva posesión del mismo¹³⁵.

■ Disposición de bienes inmuebles.

Actos administrativos de disposición de tierras, como son los actos del catastro, se refieren tanto a los contratos de venta, como al propio acto de la venta¹³⁶, contratos de arrendamiento, y, en general, todos los registros sobre bienes inmuebles. Asimismo, es un claro ejemplo de actividad estatal la promulgación de legislación reguladora de la materia de arrendamientos de inmuebles, sean rústicos o urbanos¹³⁷.

En efecto, sobre todo en las controversias de límites entre Estados, no es

¹³⁵ El interesante tema del valor de los tratados y acuerdos celebrados con jefes indígenas ha sido objeto de una ardua polémica doctrinal (cfr. LINDLEY, M.I., *op.cit.*, pp.169-177); particularmente nos inclinamos por el mantenimiento del título imperfecto que tales actos constituyen, necesitando, como en el caso del descubrimiento, de la perfección a través de la efectiva posesión.

¹³⁶ En 1853 fue anunciada la venta pública de la comuna de Baerle-Duc, situada en el territorio litigioso, por parte del Estado de Holanda (cfr. *I.C.J.Reports*, 1959, p.229); en 1854, Honduras decidió la venta de una parte de la costa y de las islas del Golfo, a potencias extranjeras, como acto de disposición administrativa (cfr. *I.C.J.Reports*, 1992, p.568, pa.352).

¹³⁷ Así, las parcelas sobre las que se discutía la soberanía entre Bélgica y Países Bajos, fueron inscritas en el catastro belga desde 1847 a 1852; y también antes de 1906 fueron registradas en la Oficina de Bassle-Nassau varias transferencias de tierras situadas en tal zona litigiosa, respecto de la cual, Holanda había dictado una ley reguladora de las rentas para las casas en ella construídas (cfr. *I.C.J.Reports*, 1959, pp.227-228 y 229).

extraño que la línea de posesión se determine por medio de títulos de tierras, lo cual resulta inevitable si se tiene presente la idea¹³⁸ de que no hay mayor atributo de soberanía que la concesión de títulos de propiedad en tierras del dominio público.

■ Sistema de concesiones.

Despliegue de la autoridad estatal lo constituyen, sin duda, aquellos actos por los que un Estado otorga a personas o entidades privadas la concesión para realizar algún tipo de actividad en el marco geográfico de una zona determinada con exclusión de otros, que el Estado garantiza por su poder soberano; puede tratarse de concesiones acordadas a particulares con fines comerciales, esto es, de monopolio del comercio, de concesiones para la explotación minera, para el ejercicio de la pesca o la caza, para la instalación de líneas telegráficas¹³⁹, e, incluso, concesiones ferroviarias¹⁴⁰.

■ Obras públicas.

Como última referencia, sin que por ello estemos excluyendo otras posibles,

¹³⁸ Tal y como hizo Honduras en su disputa fronteriza con Guatemala (cfr. Alegato de Honduras..., op.cit., p.34).

¹³⁹ Son varias las concesiones que, en 1863, Dinamarca otorgó a un particular, Tayler, para el ejercicio exclusivo del comercio, la caza y la minería en la costa este de la región de Groenlandia; en esta misma línea otorgó, en 1905, concesiones para la implantación de las líneas telegráficas (cfr. P.I.C.J. serie A/B, nº 53, 1933, pp.52 y 53).

¹⁴⁰ Como la concesión, otorgada por Países Bajos, para la construcción de un ferrocarril que en una pequeña parte cruzaba la zona que disputaba con Bélgica (cfr. I.C.J.Reports, 1959, p.229).

a una actividad que pueda derivar consecuencias jurídicas a efectos de suponer la atribución de un territorio determinado, mencionaremos la realización en el mismo de trabajos y obras públicas, como puede ser la construcción de balizaje, de gradas y boyas de amarre, la instalación de faros o cualquier otro sistema de ayuda a la navegación¹⁴¹; fuera del ámbito marítimo, pueden llevarse a cabo también diversas obras públicas, como el caso de la puesta en marcha de una red de energía eléctrica¹⁴², o de la construcción tanto de edificios, como de caminos o carreteras a la largo de un territorio¹⁴³.

B) LOS ACTOS DE PERSONAS PRIVADAS COMO MANIFESTACION DE LAS EFECTIVIDADES ESTATALES.

La regla general de derecho internacional que establece que 'los derechos del Estado sólo pueden ser adquiridos a través de actos de personas al servicio del Estado, o bien autorizadas para actuar en nombre del Estado', ha sido

¹⁴¹ Cfr. El balizaje y colocación de faros efectuado por Suecia en los parajes de Grisbådarna, como manifestación no tan sólo de un derecho sino de un deber (R.G.D.I.P., vol.XVII, 1910, pp.186-187); la construcción de gradas y de boyas de amarre, por parte de autoridades de Jersey, tanto en Minquiers como en Ecrehous (*op.cit.*, p.66 y 69).

¹⁴² Según consta por varios documentos, El Salvador instaló en 1966 toda una red de electricidad en la Isla Meanguera, además de construir diversas escuelas públicas (cfr. I.C.J.*Reports*, 1992, p.573, pa.359).

¹⁴³ La realización de obras públicas, en opinión del T.I.J., son un elemento significativo de 'efectividades' que prueban la soberanía de la Potencia colonizadora (cfr. I.C.J.*Reports*, 1986, p.620, pa.124).

suficientemente afirmada por la jurisprudencia y la doctrina, como hemos visto¹⁴⁴. Aplicada esta regla a los actos de personas privadas, la conclusión parece clara, "individuals, by undertaking enterprises on their own initiative, for their own benefit and without any delegation of authority by their Government, cannot confer sovereignty on the State"¹⁴⁵, a menos que su actividad, excepcionalmente, sea subsiguientemente ratificada y adoptada por el propio Estado.

Esta cuestión es especialmente importante, como afirma Fitzmaurice¹⁴⁶, en el ámbito de nuestro estudio, esto es, en el de la atribución de soberanía territorial. Más concretamente, este autor plantea, como nosotros, una duda esencial: si es posible o no la adquisición de un territorio por un país, a través de los actos de sus nacionales; la resuelve en los siguientes términos:

"It has long been well settled that the hunting, whaling, guano collecting, exploring, and other similar activities of private individuals acting on their own, however numerous and extensive, do not 'per se' confer on their State a title to sovereignty over the areas concerned"¹⁴⁷.

¹⁴⁴ Vid. *supra*, pp.12 a 15.

¹⁴⁵ Vid. opinión individual del juez Hsu Mo, en el asunto de Pesquerías (I.C.J. Reports, 1951, p.157).

¹⁴⁶ Vid. FITZMAURICE, G. sir, "The Law and Procedure of the International Court of Justice, 1951-54: General Principles and Sources of Law", B.Y.B.I.L., 1953, p.48.

¹⁴⁷ Vid. op.cit., p.48. Analizando estas actividades, Fitzmaurice se centra en la figura del explorador o descubridor de un territorio, que toma posesión del mismo, para concluir que si éste es un comisionado oficial de un Estado, un agente acreditado o ha recibido una licencia o autoridad para actuar de esta forma, adquiere un título aunque 'incoado'; si no entra en ninguna de las categorías mencionadas sus actos son en sí mismos inefectivos para conferir título.

Por tanto, únicamente cuando un particular esté actuando sobre un territorio como agente acreditado, comisionado o haya recibido, de cualquier forma, una autorización para actuar en nombre del Estado, los actos que lleve a cabo en el mismo serán imputables a dicho Estado que quedará vinculado por los efectos jurídicos que puedan derivarse de dicha actuación.

Pero, aunque los actos de individuos actuando por su propia cuenta, y no por la del Estado del que son nacionales, no puedan contemplar per se el efecto jurídico de atribución de soberanía territorial, tales actividades desplegadas sobre un territorio pueden constituir, sin embargo, prueba de una soberanía ya existente, esto es, sirven para corroborar la adquisición territorial dimanada de actos estatales. En este sentido, resulta especialmente ilustrativo recordar aquí el supuesto citado por el juez Carneiro, en su opinión individual en el asunto de las islas Minquiers y Ecrehous, para corroborar su afirmación de que 'en ciertos casos y circunstancias la presencia de personas privadas, nacionales de un Estado, puede significar la ocupación por éste'; ponía para ello como ejemplo la creación brasileña de la línea del uti possidetis¹⁴⁸, que excede de los límites establecidos en el Tratado de Tordesillas por personas, nacionales de Brasil, que buscan oro y esmeraldas, y que, como consecuencia de ello, han incrementado el territorio de este país¹⁴⁹.

¹⁴⁸ Como hemos visto en el capítulo I, y reincidiremos en el próximo, el uti possidetis que supone el mantenimiento de los límites administrativos heredados de la época colonial, tiene una variante el uti possidetis de facto, creación brasileña que se apoya, no ya en el título jurídico, sino en la posesión de hecho.

¹⁴⁹ Vid. I.C.J. Reports, 1953, pp.104-105.

De la misma manera que hicimos en el apartado anterior, abordamos ahora el cometido de establecer una enumeración, claramente no exhaustiva, de aquellos actos de personas privadas, bien actuando como agentes en nombre del Estado, bien por su propia cuenta, que de alguna manera incidieran en la atribución territorial, ya sea para crear, ya para confirmar un derecho de soberanía a favor del Estado, como veremos más adelante.

■ Comercio exclusivo.

Los nacionales de un Estado reciben, por parte de éste, el monopolio para ejercer de forma exclusiva el comercio dentro de un territorio; esta concesión puede, incluso, estar garantizada por el propio Estado, tanto por su legislación¹⁵⁰ como por su fuerza armada¹⁵¹.

■ Propiedad privada y posesión física de inmuebles.

La presencia estatal puede corroborarse a través de registros que certifiquen que, en un territorio concreto, nacionales de ese Estado poseían y tenían a su nombre distintas propiedades, ya sean casas, barcos¹⁵²..., o, fundamentalmente,

¹⁵⁰ Por ejemplo, las Ordenanzas de 1740-1751 recogen la concesión del monopolio del comercio en Groenlandia, por parte de Dinamarca, a un particular, Jacob Severin (P.I.C.J., serie A/B, n^o53, 1933, p.48).

¹⁵¹ Una Ordenanza de 1755, otorga a los nacionales portugueses el derecho a ejercer el comercio en la Bahía de Delagoa, y el propio Estado, con su fuerza armada protege el derecho exclusivo del comercio frente a posibles ataques de holandeses y austríacos, en 1781 (cfr. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.III, p.637).

¹⁵² Así, un registro de barcos de pesca del Puerto de Jersey, muestra cómo pertenecía a un pescador jersiano que vivía en Ecrehous, un barco de pesca registrado en 1872; desde 1820, hay constancia de la construcción de edificios en esa isla, por ciudadanos de Jersey (cfr. I.C.J.Reports, 1953,

tierras sobre las que se asentaban¹⁵³.

■ Celebración de contratos.

Igualmente, como consecuencia de tener propiedades en un territorio, dichos propietarios privados pueden efectuar contratos sobre ellas; contratos de cualquier tipo, bien de venta, de arrendamiento...¹⁵⁴, lo que importa es el acto de disposición efectuado en un territorio concreto.

■ Exploración del territorio.

La exploración del territorio que se pretende adquirir constituye un claro ejercicio de función estatal que no siempre las circunstancias, sobre todo económicas, permiten que se lleve a cabo por expediciones oficiales de diverso tipo o sustentadas por autorización gubernamental, sino que en numerosas ocasiones tales expediciones, que pueden perseguir fines científicos, etnográficos, oceanográficos, cartográficos, arqueológicos, antropológicos, lingüísticos o, incluso, de mera observación meteorológica, son impulsadas por instituciones no-

p.65).

¹⁵³ El título de soberanía de Italia sobre el Alpe de Cravaiola se basa, fundamentalmente, en el usufructo, primero, y la propiedad, adquirida después, de la comuna del Valle de Ossola, acompañada por diversos actos oficiales realizados por autoridades italianas (cfr. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.III, p.500).

¹⁵⁴ Como ocurrió en la isla de Ecrehous, con los propietarios antes mencionados, pues consta en los registros efectuados por las autoridades competentes de Jersey, que hubo varios contratos de venta en los años 1863, 1881, 1884 y más tarde (ibidem, p.65).

oficiales¹⁵⁵ especializadas y creadas con tal finalidad.

■ Extracción y explotación de recursos naturales.

En el caso de islas o zonas con mar adyacente, sobre todo tratándose de regiones inhóspitas, de difícil habitación, y como actividad derivada de la anteriormente reseñada, resulta especialmente interesante la realización continuada de ciertas actividades en la zona por particulares; concretamente, la extracción de recursos naturales como el fuco o el guano¹⁵⁶, y, más importante aún, el ejercicio de la pesca, cualquiera que sea la especie marina: ballenas, bogavantes, cangrejos...¹⁵⁷, lo cual implica una mayor explotación del territorio por parte del Estado de la nacionalidad de dichas personas.

■ Visita de pescadores.

Como comportamiento íntimamente asociado al citado anteriormente, debemos mencionar el hecho de que tal actividad pesquera conlleva el asentamiento, aunque temporal, de los particulares que llevan a cabo la pesca y la

¹⁵⁵ Así ocurrió en Groenlandia Oriental, donde la mayoría de las expediciones científicas provenían de particulares, tanto daneses como noruegos. Al respecto el Tribunal indicó que aunque las instituciones no-oficiales que organizaban estas expediciones no actuaran por cuenta del Estado, igualmente podría derivarse su consideración de actividad de Estado (vid. P.I.C.J., serie A/B, n°53, 1933, p.63).

¹⁵⁶ Desde que el 8 abril 1858, el Emperador francés le otorgara la concesión del guano para la isla de Clipperton, Mr. Lockart explotó este recurso hasta 1887 (cfr. A.J.I.L., 1932, pp.391-392).

¹⁵⁷ En el asunto de Grisbådarna, resultó esencial como prueba del ejercicio de autoridad en el banco en cuestión el ejercicio de la pesca en el mismo, por pescadores suecos (cfr. R.G.D.I.P., vol.XVII, 1910, p.186); aunque no faltan supuestos en que se rechaza el valor probatorio de tales actos para establecer la soberanía del Estado del que los pescadores son nacionales, como en el caso de la isla de Aves.

recolecta de todo tipo de recursos naturales en las zonas marítimas pertenecientes al territorio en cuestión¹⁵⁸; establecimiento esporádico de nacionales que puede suponer la ocupación estatal a falta de un mejor título por la otra parte.

C) EL VALOR DE LA ACTIVIDAD ECLESIASTICA EN LA DETERMINACION DE LA EFECTIVIDAD.

Al referirnos a la actividad eclesiástica, en relación a su posible incidencia en la ocupación de territorios, entendemos que ésta puede ser apreciada desde dos puntos de vista relacionados entre sí.

Por un lado, en cuanto las expediciones que llevaron a los primeros descubrimientos de tierras y, consiguientemente, su toma de posesión, fueron patrocinadas por naciones cristianas muy estrechamente vinculadas en la época por su religión; lo cual supuso la participación en las mismas de misioneros, fundamentalmente jesuitas y franciscanos, encargados de predicar la fe cristiana y que, como consecuencia, realizaron importantes asentamientos en las nuevas tierras en nombre no sólo de Dios, sino del Rey que los enviaba, es decir, se

¹⁵⁸ Tal parece ser que ocurría con los pescadores de Jersey, que visitaban temporalmente la isla de Ecrehous, en la temporada de pesca (*ibidem*, p.64).

trataba realmente de agentes del Estado y ministros de fe¹⁵⁹.

Por otro lado, como resultado de la actividad indicada, en los territorios americanos bajo dominación española regía la regla de derecho público contenida en la Ordenanza Real IV^a de 1571, por la cual 'en las circunscripciones administrativas coloniales españolas el Gobierno temporal debía coincidir con el espiritual'¹⁶⁰; de esta forma, al decidir la delimitación territorial los nuevos Estados hispanoamericanos sobre la base del principio del uti possidetis iuris, habría de tomarse en consideración la jurisdicción correspondiente tanto a Virreinos, Capitanías Generales y Audiencias como a Obispos, y cuando sus títulos no fueran precisos, los actos de autoridad, civil o eclesiástica, en ellos ejercitados en cuanto de ellos puede derivarse la determinación de los derechos de soberanía.

Es interesante, pues, reseñar algunos de esos actos que, realizados por eclesiásticos, misioneros o altas autoridades de la Iglesia en un territorio

¹⁵⁹ Concretamente, en el caso de España una Pragmática de Felipe II, dada en San Lorenzo el 3 julio 1573, que establece las reglas que han de aplicarse en América, equipara las autoridades eclesiásticas a autoridades administrativas estatales: "Don Felipe... a los Virreyes, Presidentes, Auditores, Gobernadores, Arzobispos y Prelados de las iglesias seculares y de religión y a todas justicias y personas eclesiásticas a quienes lo de yuso escripto toca y puede tocar en cualquier manera, salud y gracia; sabed que entre otras cosas que hemos mandado ordenar para la buena gobernación del Estado de las Indias y de cada cosa y parte de él..." (cfr. PEREZ SARMIENTO, J.M., "Acción tutelar de España en las cuestiones de límites de la América española", Boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores, vol.1, pp.738-739).

¹⁶⁰ Cfr. La tesis mantenida por Honduras en el asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima, Counter Memorial of the Republic of El Salvador, 10 febrero 1989, p.147.

determinado¹⁶¹, pueden suponer consecuencias jurídicas para un Estado en cuanto a su atribución, bien por su vinculación como mandatarios o funcionarios del Estado, bien por la coincidencia de jurisdicciones lo que hace más atractivo al análisis de los actos de autoridad eclesiástica que son, en todo caso, actos públicos.

■ Actos ordinarios de administración.

Las autoridades eclesiásticas tienen asignados una serie de actos correspondientes a su cargo, cuyo ejercicio es manifestación de su jurisdicción sobre el territorio en que se desarrollan. La tramitación de expedientes matrimoniales y de reclamaciones de eclesiásticos, nombramiento de párracos y de curatos, emisión de certificados, y la celebración de todo tipo de ceremonias religiosas tales como bautismos, matrimonios o entierros¹⁶², son tan sólo una muestra de ellos.

■ Actos registrales.

Los registros parroquiales constituyen un esencial elemento probatorio de la actividad eclesiástica; en ellos se anotan todos los actos que lleva a cabo una parroquia, recaudación de tasas, bautismos, matrimonios, nacimientos, defunciones..., manifestación evidente de su despliegue de autoridad en esa

¹⁶¹ Ese territorio es, en escala inferior, el de la Parroquia o, a un nivel superior, el del Obispado, sobre el que las autoridades eclesiásticas ejercen su jurisdicción de la misma manera que el Estado lo hace sobre su territorio, su nación.

¹⁶² Ya antes de 1791, el Obispado de Comayagua, que se corresponde con la provincia de Honduras, había realizado actos de jurisdicción de este tipo de forma indubitada (cfr. Laudo arbitral del Rey de España, GROS ESPIELL, H., España y la... op.cit., pp.141-142).

circunscripción eclesiástica¹⁶³.

■ Recaudación de impuestos.

Es también posible que las parroquias o los obispados realicen funciones impositivas sobre sus feligreses por diversos conceptos¹⁶⁴, recaudación que contribuye a su sostenimiento y que puede, incluso, considerarse como una especie de impuesto local.

■ Actos de venta.

Nos referimos a la venta de los títulos de propiedades pertenecientes a un Obispado, por parte de las iglesias y los clérigos dependientes de la Diócesis¹⁶⁵.

■ Visitas oficiales.

Al igual que las autoridades civiles, las eclesiásticas en ejercicio de su autoridad pueden realizar visitas dentro de su jurisdicción a sus diócesis y parroquias¹⁶⁶, con el fin de observar e interesarse por la situación de los

¹⁶³ La parroquia de Saint Martin de Jersey, hizo constar en su registro la construcción de varios edificios en su jurisdicción (cfr. I.C.J. Reports, 1953, p.65).

¹⁶⁴ El Obispado de Comayagua dispuso sobre la recaudación de diezmos en su jurisdicción (ibidem, p.141); de igual manera, la parroquia de Saint Martin de Jersey registró la recaudación de tasas parroquiales, que tuvieron la consideración de tasas locales (ibidem, p.65).

¹⁶⁵ Es el caso de las ventas de los títulos de Parishes de Chiquimula de la Sierra, Jocotán, Esquipulas y Valle de Copán, realizadas por autoridades eclesiásticas de Guatemala (cfr. asunto de Guatemala-Honduras, U.N. R.I.A.A., vol.II, p.1342-1343).

¹⁶⁶ El Arzobispo de Guatemala efectuó la visita de su diócesis del Valle de Copán, en 1769, interesándose por la parroquia de Jocotán (cfr. ibidem, p.1343).

ciudadanos vinculados a su Obispado.

■ Fundación de pueblos.

Aunque no se trate estrictamente de un acto de jurisdicción eclesiástica, la creación de pueblos en tierras desoladas por parte de misioneros, sobre los cuales desarrollarán su función de apostolado y conversión al cristianismo, puede, sin duda, ser un indicador importante del establecimiento en un territorio¹⁶⁷.

D) OTRAS MANIFESTACIONES DEL PODER ESTATAL: LAS COMPAÑÍAS COLONIZADORAS.

Como venimos reiterando a través de estas páginas, únicamente los actos de Estado realizados sobre un territorio pueden derivar consecuencias jurídicas a los fines de atribución de su soberanía; tratándose de particulares o entidades privadas su eficacia depende de su vinculación previa con un Estado, o bien su ratificación a posteriori.

Las compañías de comercio y de colonización están igualmente sometidas

¹⁶⁷ A mediados del siglo XVII, el misionero español D.Manuel Subirana emprendió sus trabajos apostólicos entre las tribus selváticas de Honduras, llegando a fundar varios pueblos en el departamento de Yoro y de Olancho, y a convertir al cristianismo a miles de indios, todo lo cual lo hizo para el Obispado de Comayagua (Límites entre Honduras y Nicaragua, Alegato de Honduras, Madrid, 1905, pp.91 y 92).

a esa afirmación; tales corporaciones no son soberanas independientes, y cuando adquieren o ejercen derechos de soberanía, y en todo caso, derechos externos de soberanía lo hacen por delegación, es decir, actúan como agentes del Estado que les otorga una 'carta' de protección para desplegar su actividad en un territorio dado, como hemos visto ampliamente en la sección 1ª donde también se analizan las clases de mandatos que tales compañías pueden recibir de un Estado: especial, general o tácito¹⁶⁸; es decir, ejercerá los poderes soberanos que el Estado le confiera.

Nos enfrentamos a una situación similar a la analizada en el supuesto de la actividad de particulares; su eficacia quedará vinculada a la consideración final de actos estatales, por su caracterización de órgano del Estado. Afirmación esta última que queda ligada a la realidad práctica de que, desde finales del s.XVI hasta el s.XIX, tales compañías, formadas por individuos y con finalidad económica fueron investidas de poderes públicos por parte del Estado a quien estaban sometidas, siendo la Compañía de las Indias Orientales una de las más conocidas; la actividad desplegada por ésta, en cuanto era reconocida por el derecho internacional, fue siempre imputada al Estado holandés por virtud del artículo V del Tratado de Utrecht.

¹⁶⁸ Efectivamente, en las páginas 131 a 135 hemos analizado las diversas teorías acerca de la 'capacidad soberana' de las compañías de comercio y colonización, para concluir, como acabamos de hacer, que no se trata sino de mandatarios del Estado, por lo que nos remitimos a lo allí expuesto.

■ Celebración de tratados y conclusión de contratos.

Al asentarse en un territorio, las compañías de colonización pueden celebrar tratados de carácter político con los jefes indígenas establecidos en dicha región, así como concluir contratos con ellos¹⁶⁹; dichos contratos o tratados aunque no lo son en el sentido del derecho internacional, no están desprovisto, como afirma el juez Huber, de efectos jurídicos indirectos en situaciones regidas por el derecho internacional, y deben ser tenidos en cuenta en ciertos casos¹⁷⁰. En efecto, no nos enfrentamos a acuerdos entre iguales, sino más bien a una forma de organización interna de un territorio colonial, sobre la base de la autonomía de la población autóctona, que exige ser completada a través del establecimiento de poderes que aseguren el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en relación al territorio.

■ Monopolio del comercio.

A través de esos contratos con indígenas, las compañías de comercio y colonización pueden obtener la concesión del ejercicio exclusivo del comercio en esa región. Tanto el despliegue de la actividad comercial, como, y este es el rasgo fundamental, la propia forma de desarrollarlo, es decir, en exclusividad, constituyen un acto característico de jurisdicción y de dominio sobre la zona en que se

¹⁶⁹ La Compañía holandesa de las Indias Orientales, actuando como agente de Holanda, concluyó varios tratados y contratos que después renovó con los príncipes, rajás o reyes de Tabukan, Taruna y Kandahar-Taruna, en 1677, 1697, 1720, 1758, 1828, 1885 y 1889 (cfr. Asunto de la Isla de Palmas, R.G.D.I.P., 1935, pp.183-184).

¹⁷⁰ Vid. ibidem, pp.186-187.

ejercita¹⁷¹.

■ Exacción de impuestos.

Como agentes de un Estado, estas compañías pueden, en cumplimiento de su mandato, establecer la recaudación de impuestos sobre la población indígena con la que se relacionan a favor de dicho Estado que extiende su jurisdicción, con la misma repercusión ejecutiva que tendría si se tratara de propios agentes fiscales estatales¹⁷².

Este breve examen de los distintos actos, que tienen además un sustento jurisprudencial, nos muestra que los órganos capaces de vincular al Estado por su comportamiento y, por tanto, dimanar de él consecuencias jurídicas, son muy diversos; no se trata ya, exclusivamente, de aquéllos que lo representan según el derecho internacional, sino que es posible, incluso, que un comportamiento privado tenga esa misma operatividad, ahora bien, siempre que sea factible su imputación, en última instancia, a un Estado.

¹⁷¹ A través de los contratos de 1676 y 1697 con Tabukan, la Compañía holandesa de las Indias, fue investida de un derecho de ejercicio exclusivo del comercio con ese Estado, que el juez Huber consideró como acto de jurisdicción (cfr. ibidem, p.193).

¹⁷² Varios documentos prueban el hecho de que la población de Miangas estaba sujeta a impuestos por parte de los holandeses (cfr. ibidem, p.195).

CAPITULO IV: EL PAPEL DE LAS EFECTIVIDADES EN LA DELIMITACION DEL TERRITORIO SEGUN EL 'UTI POSSIDETIS IURIS'.

En las controversias relativas al trazado de fronteras entre Estados, el ejercicio pacífico y continuo de funciones estatales "forme encore l'un des éléments le plus importants à considérer pour l'établissement des frontières entre les Etats"¹. Sin menoscabo de la veracidad de esta afirmación hecha por el juez Max Huber, es obligado referir que las efectividades en el ámbito de la delimitación territorial no llegan a ocupar la importancia que las consideraciones de este tipo tienen en los contenciosos de adquisición de territorio, pues se concibe que difícilmente, y únicamente en condiciones muy estrictas, pueden prevalecer sobre el título convencional que constituye un tratado de límites²; si bien, entendemos con el prof. SANCHEZ RODRIGUEZ, que "la dernière phrase de Charles de Visscher pourrait mentionner plutôt que le traité de limites, un autre titre juridique, celui de l'uti possidetis"³.

Nos parece inevitable esta matización desde el momento en que la Sala del T.I.J. -como vimos en el capítulo I-, lejos de considerar al principio delimitador del

¹ Asunto de la Isla de Palmas, R.G.D.I.P., 1935, p.164.

² Cfr. VISSCHER, Ch. de, Les effectivités du droit international public, París, 1967, pp.111 y 112.

³ Plaidoirie de 28 mayo 1991, C 4/CR 91/31, p.12, en el asunto sobre la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima entre el Salvador y Honduras, de 11 septiembre 1992.

uti possidetis como una mera pervivencia regionalista o particularista americana⁴, le ha atribuido valor jurídico general en los siguientes términos:

"...the principle of uti possidetis is not a special rule which pertains solely to one specific system of international law. It is a general principle..."⁵.

De esta forma, parece haber puesto fin a los interrogantes y debates que habían florecido a lo largo de los años respecto a la naturaleza y alcance del principio, consagrándolo como principio general aplicable a todo conflicto de delimitación entre Estados surgidos de la descolonización⁶.

⁴ Cfr. SANCHEZ RODRIGUEZ, L.I., "Problemas de fronteras en America: las fronteras terrestres entre países iberoamericanos", en su libro Problemas actuales de Derecho Internacional, Madrid, 1993, p.177.

⁵ I.C.J. Reports, 1986, p.565, pa.20; refiriéndose a este mismo principio, lo califica también como "rule of general scope", y "principle of a general kind", para situarlo, posteriormente, "among the most important legal principles" (I.C.J. Reports, 1986, pp.565, pa.21, p.566, pa.23; y p.567, pa.26, respectivamente).

La misma posición había sido sostenida tiempo antes por el juez AGO, para quien "el uti possidetis no es un principio de derecho latino-americano sino un principio de derecho internacional general" (Anuario de la C.D.I., 1968, vol.I, p.131).

⁶ Tal y como advertíamos en el capítulo I, el principio del uti possidetis no sólo es de aplicación en los conflictos de delimitación, sino que resulta también ser un principio jurídico para resolver controversias de atribución, en particular, las relativas a las islas. La jurisprudencia nos ofrece ejemplos en este sentido, como es el caso de la Isla de Aves (que veremos más adelante), en 1865, y más recientemente, la Sala del T.I.J., respecto de las islas Meanguera y Meanguerita, en el asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima, entre el Salvador y Honduras, ha afirmado que "the Chamber has no doubt that the starting point for the determination of sovereignty over the islands must be the uti possidetis iuris of 1821" (I.C.J. Reports, 1992, p.558, pa.333).

Refiriéndose, precisamente, al fenómeno de ampliación que ha sufrido el uti possidetis, el prof. BARDONNET observa que "sa sphère d'application s'est cependant peu à peu généralisée sur le plan géographique ..., et sur le plan matériel, le principe étant invoqué dans des affaires mettant en cause non seulement des territoires continentaux mais aussi des territoires insulaires" ("Frontières terrestres et frontières maritimes", A.F.D.I., 1989, p.60).

El uti possidetis iuris no puede ser definido⁷ sino en relación a la posesión legal, es decir, al derecho de posesión, que no se confunde con el hecho de la posesión; su fundamento descansa, no sobre la ocupación material, que por definición se excluye, sino sobre el título. Sin embargo, la misma deficiencia que presentan, en numerosas ocasiones, los títulos en que se funda la posesión de derecho hace que ellos, por sí solos, no basten para la determinación de la línea jurídica de fronteras haciendo necesario completarlos con otros medios de investigación que concurran a confirmarlos, esclarecerlos o precisarlos en el terreno. Es entonces cuando entran en juego las efectividades.

SECCION 1ª: RELACIONES DIALECTICAS ENTRE EFECTIVIDADES Y 'UTI POSSIDETIS IURIS'.

Como ya hemos indicado, mientras en las disputas de adquisición territorial las soluciones están basadas en consideraciones relativas al ejercicio de soberanía, en controversias típicas de fronteras o de delimitación se atribuye un efecto decisivo a los títulos legales, que prevalecen sobre los actos de posesión. De esta forma, se entiende que por medio de un cuidadoso estudio de decretos coloniales, órdenes reales, cédulas, ordenanzas de Intendencia o actos diplomáticos relativos

⁷ El tema de la conceptualización del uti possidetis iuris, en cuanto principio general de delimitación, y la problemática que encierra, ha sido abordado ya en el capítulo I, por lo cual no vamos a entrar aquí en el mismo, remitiéndonos, pues, a todo lo allí expuesto.

a delimitaciones de fronteras administrativas o provinciales, es posible trazar una línea definitiva de división entre antiguas circunscripciones administrativas coloniales. Pero esta plausible doctrina, en la práctica, resulta ser ilusoria y llena de serias limitaciones⁸. En muchos casos, no hay claras indicaciones de la línea del uti possidetis iuris, en parte por las contradicciones y ambigüedades que contienen muchos materiales presentados por las partes, en parte debido al hecho de que, al tiempo de la Independencia, algunas de las unidades provinciales ocupaban territorios que excedían de los límites previamente decretados por la Potencia colonial. En cuanto estos títulos no basten para definir el límite señalado a las diversas secciones del territorio colonial y precisar la situación existente en el momento de su segregación del dominio colonial, habrá que tomar en consideración los actos jurisdiccionales de las respectivas autoridades y funcionarios del régimen colonizador, así como los demás antecedentes y documentos de carácter histórico, político, geográfico o administrativo que permitan reconstruir ese límite; de igual forma, se podrán tener en cuenta los de la época posterior a dicho régimen que concurran a aclarar, confirmar o completar los títulos que constituyen la base de la posesión jurídica con arreglo al principio del uti possidetis iuris; podríamos hablar, entonces, de una posible interacción entre efectividades y uti possidetis⁹.

⁸ Cfr. CUKWURAH, A.O., The Settlement of Boundaries Disputes in International Law, Manchester, 1967, p.190.

⁹ Ante la dialéctica uti possidetis / efectividades, como teorías contrapuestas, algún autor ha propugnado que "una teoría intermedia, mixta, podría ser útilmente elaborada, que tendría en cuenta, a la vez, el hecho esencial de la posesión y los títulos coloniales, en la medida en que existiesen. El uti possidetis sería el derecho de soberanía resultante de la posesión efectiva, fundado sobre títulos coloniales, o en su ausencia o

A) LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE JUSTICIA AL RESPECTO.

El estudio del principio del uti possidetis, ha estado durante años relegado, exclusivamente, a los arcanos de la literatura jurídica hispanoamericana; su aplicación se limitaba a decisiones arbitrales que conocían de los conflictos de delimitación de fronteras entre Estados de América del Centro y del Sur. La presencia del mismo, en el ámbito jurisprudencial del T.I.J., ha estado limitada al muy discreto lugar de las declaraciones y opiniones, tanto individuales como disidentes, de ciertos jueces¹⁰, que han invocado o comentado su existencia¹¹, sin que el Tribunal llegara a acogerlo expresamente en sus decisiones hasta 1986. En efecto, la primera vez que se pronuncia el T.I.J., en esta ocasión una sala especial, sobre el principio del uti possidetis como derecho aplicable para resolver un conflicto de límites, es en el asunto de Burkina Faso/Mali¹², y lo hace con una

silencio, sobre la condición bona fide de la posesión" (vid., en este sentido, AYALA, E., "Le principe de l'uti possidetis et le règlement des questions territoriales en Amérique", R.D.I., 1931, p.446)

¹⁰ Cfr. SANCHEZ RODRIGUEZ, L.I., "Uti possidetis: la reactualización jurisprudencial de un viejo principio (a propósito de la sentencia del TIJ (Sala) en el asunto Burkina Faso/República de Mali)", R.E.D.I., 1988, p.122.

¹¹ Es el caso del juez Carneiro, en el asunto de Minquiers y Ecrehous (I.C.J. Reports, 1953, pp.104-105); de los jueces Ugon y Moreno Quintana en el asunto relativo a la Soberanía sobre ciertas parcelas fronterizas (I.C.J. Reports, 1959, p.240 y p.255, respectivamente); de los jueces Moreno Quintana y Urrutia Holguin, en el asunto sobre la validez del laudo del Rey de España (I.C.J. Reports, 1960, pp.217-218 y pp.226-227, respectivamente); y los jueces Ago y Jiménez de Aréchaga, en el asunto de la Plataforma continental entre Jamahiriya árabe libia y Túnez (I.C.J. Reports, 1982, pp.97-98 y p.131, respectivamente).

¹² Sentencia de 22 diciembre 1986 (I.C.J. Reports, 1986, pp.554-663).

fuerte convicción en el mismo; posteriormente, en 1992, tendrá ocasión de enfrentarse nuevamente con la aplicación de dicho principio a la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras, estableciendo nuevos e importantes desarrollos en este ámbito, y posteriormente, en la controversia territorial entre Libia y Chad, si bien este último asunto no es de especial relevancia, en lo que a nuestro estudio se refiere, al rechazar la operatividad de las efectividades en el caso.

1. El asunto de la controversia fronteriza entre Burkina Faso y la República de Mali como punto de partida en el análisis de sus interacciones.

Es ésta la primera vez que el T.I.J regula un conflicto terrestre que opone a dos Estados africanos. A través del Compromiso de 16 septiembre 1983¹³, la República de Alto-Volta y la República de Mali, deciden someter a una Sala del T.I.J la cuestión de determinar el trazado de su frontera en la zona comprendida entre el sector de Koro (Mali) Djibo (Alto Volta), incluida la región de Béli, a la fecha de 1959-1960 de acceso a la independencia. La reclamación de Burkina Faso se fundamenta en el establecimiento de la delimitación de la administración colonial francesa, así como el reconocimiento en este sentido del uti possidetis; por su parte, Mali se basa en el hecho de la pertenencia geográfica e histórica de la región disputada al Sudán francés, lo cual debía probarse a través de documentos legales

¹³ Para ver el texto del compromiso, consultar I.C.J. Reporte, 1986, pp.557-558.

y no de mapas, así como en argumentos de carácter étnico¹⁴, sobre lo cual incidirían, al mismo tiempo, los actos emanados de la autoridad colonial, esto es, el ejercicio efectivo por las autoridades administrativas de competencias territoriales¹⁵.

Como una primera cuestión previa, que merece atención en la presente controversia, la Sala se refiere a la distinción clásica que suele hacerse en el plano doctrinal entre 'conflictos fronterizos' o 'conflictos de delimitación' y 'conflictos de atribución territorial', relativizándola al observar que no parece percibirse un contraste de género sino más bien una mera diferencia de grado¹⁶; tras lo cual, concluye que "one the effects of this distinction is to contrast 'legal titles' and 'effectivités'¹⁷.

¹⁴ Cfr. NALDI, G.J., "The case concerning the frontier dispute (Burkina Faso/Republic of Mali): Uti possidetis in an African perspective", I.C.L.Q., 1987, p.896.

¹⁵ Memoire du government de la Republique de Mali, vol.II, p.250. El representante de Mali especificaba que el comportamiento de la autoridad colonial era revelador en un doble fin: confirmar la coincidencia del comportamiento y el acto, y colmar en caso de dificultad de interpretación del acto, la laguna de este último. Posteriormente Mali replicaba que "si... le principe de l'uti possidetis iuris reste applicable dans le droit positif, il ne reste pas moins que, dans les circonstances où le colonisateur n'a pas laissé de titres écrits suffisamment explicites, il est tout à fait légitime de faire à des considérations d'effectivités antérieures à l'indépendance, lesquelles ne sont en réalité que le seconde face de la même norme de l'uti possidetis" (Contra-memoire du government de la Republique du Mali, p.13)

¹⁶ Al analizar este fragmento de la sentencia, el prof. SANCHEZ RODRIGUEZ califica a ésta como "desmitificadora de una distinción bien establecida desde el punto de vista teórico" ("Uti possidetis: la reactualización jurisprudencial...", op.cit., p.122).

¹⁷ Ibidem, p.563, pa.17 y p.564, pa.18. Entiende el Tribunal que el término 'título jurídico' parece referirse exclusivamente a prueba documental, pero no es ésta su única acepción pues puede referirse, igualmente, a "any evidence which may establish the existence of a right, and the actual source of that right" (Ibidem, p.564, pa.18).

Sin embargo, el interés principal de este asunto radica en la construcción que lleva a cabo el Tribunal acerca del uti possidetis, y más aún, en el significativo pronunciamiento sobre la relación legal que existe entre los títulos en los que se basa la implantación del principio, y lo que es llamado por el texto francés 'effectivités', término que, como bien señala JIMENEZ DE ARECHAGA, implica la conducta de las autoridades administrativas como prueba del efectivo ejercicio de jurisdicción territorial en la región durante el período colonial¹⁸.

Tomando como dato de referencia que los Estados en litigio derivan del proceso de descolonización, así como la consagración que las partes hacen en el preámbulo de su compromiso del principio de 'intangibilidad de las fronteras heredadas de la colonización', la Sala infiere que el derecho a aplicar al objeto de determinación de la frontera disputada no es sino el principio del uti possidetis¹⁹, cuya aplicación supone el respeto de las fronteras heredadas. Como hemos visto, el Tribunal ha consagrado esta doctrina como principio general²⁰, y entiende que está compuesto, en cuanto a su contenido y efectos, por dos elementos principales:

"The first aspect, emphasized by the Latin genitive iuris, is found in the pre-eminence accorded to legal title over effective possession as

¹⁸ Vid. JIMENEZ DE ARECHAGA, E., "The Work and the Jurisprudence of the International Court of Justice, 1947-1986", B.Y.B.I.L., 1987, p.26. Definición que recoge el autor parafraseando la pronunciada por el propio T.I.J (cfr. I.C.J. Reports, 1986, p.586, pa.63), y que después ha sido ampliamente difundida.

¹⁹ Ibidem, p.564, pa.19 y p.565, pa.20. Asimismo, la Sala ha considerado que, de hecho, los Estados al concluir el compromiso han estado inspirados en la Resolución adoptada por la Conferencia de Jefes de Estado en el Cairo, OUA, en 1964, que consagra para Africa el principio del statu quo fronterizo.

²⁰ Vid. las observaciones hechas al respecto en, supra, nota 5.

a basis of sovereignty... However, there is more to the principle of uti possidetis than the this particular aspect. The essence of the principle lies in its primary aim of securing respect for the territorial boundaries at the moment when independence is achieved... In that case, the application of the principle of uti possidetis resulted in administrative boundaries being transformed into international frontiers in the full sense of the term"²¹.

Así concebido el uti possidetis constituye la antítesis de las efectividades como regla que permite la atribución a un Estado determinado de un territorio litigioso, ya que el título colonial 'congela' el título territorial²².

Por lo que hace al objeto de nuestro estudio, consideramos de mayor trascendencia el análisis que el Tribunal dedica a la cuestión de la relevancia que pueda o no tener el comportamiento de la administración local en las circunscripciones coloniales, en cuanto a la aplicación del uti possidetis iuris en la delimitación terrestre, una vez enfrentado a las 'efectividades coloniales' que cada Parte le presenta en apoyo de su reclamación y al distinto alcance probatorio que cada una les otorga²³. La propia complejidad del tema motiva, según afirma el

²¹ Ibidem, p.566, pa.23.

²² Cfr. SANCHEZ RODRIGUEZ, L.I., "Problemas de fronteras...", op.cit., p.179. En este mismo sentido, G.NESSI sostiene que el principio del uti possidetis, supone una derogación a la norma o principio fundamental, de naturaleza instrumental, de la efectividad de la ocupación como condición para la adquisición de la soberanía territorial ("Uti possidetis iuris e delimitazioni marittime", Rivista di diritto internazionale, 1991, p.535).

²³ Para Burkina Faso, las "effectivités can support an existing title, whether written or catographical, but when their probative value has to be assessed they must be systematically compared with title in question; in no circumstances can they be substituted for the title". Por su parte, Mali admite que en principio las efectividades "cannot be brought into operation where they are contrary to the text of a treaty", pero sostiene que "in a situation where there is no boundary described in conventional or legislative form, it is necessary to ascertain the boundary by other methods, and an investigation of the effectivités the becomes essential" (C.I.J. Reports, 1986, p.586, pa.63).

Tribunal, que no sea posible su generalización haciendo inevitable la distinción según las circunstancias. A este fin, configura las siguientes hipótesis de interacción²⁴:

1. El acto no se corresponde exactamente con el derecho, pero la administración efectiva es adicional al uti possidetis iuris: las 'efectividades' sólo pueden *confirmar* el ejercicio de un derecho nacido de un título jurídico. FUNCION CONFIRMATIVA.

2. El acto no se corresponde con el derecho y, además, el territorio objeto de la controversia es efectivamente administrado por un Estado distinto del que posee el título jurídico: *prevalece* el título. NINGUN VALOR DE LAS EFECTIVIDADES.

3. No hay título ninguno: se toman en consideración las efectividades. FUNCION SUSTITUTORIA.

4. El título es insuficiente para determinar de forma precisa la delimitación territorial: las efectividades interpretan en la práctica al título. FUNCION INTERPRETATIVA O INTEGRADORA.

Esta construcción elaborada por el Tribunal, reconoce preeminencia al título jurídico sobre la posesión efectiva como base de soberanía; la relevancia de la conducta de las autoridades administrativas tendrá un distinto grado, mayor en ausencia o insuficiencia de título, menor en caso de coincidencia, y nulo si nos hallamos ante una contradicción. Tratándose de efectividades 'post-coloniales', la propia noción de statu quo territorial, consagrado por el uti possidetis y reconocido

²⁴ Cfr. Ibidem, pp.586-587, pa.63.

para el caso por el Tribunal, parece excluirlas en principio²⁵.

Finalmente, la Sala ha resuelto, en aplicación del principio del uti possidetis iuris, sobre la base de documentos y tratados coloniales, tales como la Orden de 31 diciembre 1922, Orden de 31 agosto 1927 del Gobernador-General de la French West Africa o la de 5 octubre de ese mismo año, entre otras, en las cuales se contenía la especificación de los límites de las colonias. Pero si la búsqueda del uti possidetis presupone la existencia de un trazado incontestable, es evidente que el juez debe adaptarse a una situación donde las lagunas y las contradicciones de los documentos imponen un cierto número de estancamientos jurídicos²⁶. Al afirmar con fuerza este principio, la Sala ha estado inducida, en permanente ajuste práctico, a entremezclar las 'efectividades' del derecho colonial y de la equidad infra legem con los títulos jurídicos, todo ello motivado por una razón objetiva: la circunstancia de la imprecisión y la incoherencia de los textos, documentos y mapas presentados por las partes²⁷. Como resultado, el trazado fronterizo efectuado realiza ciertas modificaciones, por similitud, a las fronteras heredadas por

²⁵ Cfr. DECAUX, E., "L'arrêt de la Chambre de C.I.J. dans l'affaire du différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali)", A.F.D.I., 1986, p.221.

²⁶ Cfr. DECAUX, E., "L'arrêt de la Chambre ...", op.cit., p.238.

²⁷ Por ejemplo, mientras la Sala rechaza como prueba suficiente una serie de cartas del Servicio Geográfico de la French West Africa, de 11 julio 1935 (Ibidem, p.585, pa.60) por no resultar de valor; admite como consistentes y, por tanto, probatorios, tanto el mapa de la IGN, como la carta 191 CM, presentados por Burkina Faso (Ibidem, pp.622, pa.128; p.634, pa.151; y p.641, pa.163). Igualmente, podemos citar como efectividad reconocida, el hecho de la construcción de caminos, pues la Sala "has observed above track-making works has a certain evidentiary value... are a significant element of the 'effectivités' which may prove the intentions of the colonial administrators" (Ibidem, pp.618, pa.120 y p.620, pa.124).

los dos Estados en el momento de su independencia, de ahí que algún autor, como es el caso de BENMESSAOUD TREDANO²⁸, haya afirmado que la delimitación concluida por la Sala no consagra de ningún modo la intangibilidad de las fronteras.

No sería exagerado decir, en relación a esta sentencia, que es asimilable a un juicio 'salomónico'.

2. El asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras, avance del T.I.J. en el estudio de las vinculaciones de ambas técnicas.

La controversia que enfrentó a Honduras y El Salvador puede ser considerada como ejemplo tipo de litigio territorial y marítimo latinoamericano: complejo y complicado, en el que hay un claro riesgo de no satisfacer a una de las partes o a ninguna de las dos.

Tras varios fracasados intentos por resolver sus ancestrales disputas territoriales, que se remontan a 1861, Honduras y El Salvador firmaron en Lima, el 30 octubre 1980, el Tratado General de Paz fruto de la excelente labor de mediación de D.José Luis Bustamante y Rivero²⁹. El artículo 34 de este Tratado

²⁸ Vid. Intangibilité des frontières coloniales et espace étatique en Africa, París, 1989, p.187.

²⁹ Tras el fracaso de las negociaciones directas, El Salvador y Honduras se pusieron de acuerdo, a través del Convenio de Washington de 6 octubre 1976, para confiar a alguna personalidad la conducción de una gestión de mediación, al objeto de superar la diferencia existente entre ambos. Tal responsabilidad recayó en el ilustre jurista peruano Bustamante y Rivero, quien llevó a cabo su gestión dentro del marco normativo del Tratado Americano de Soluciones

hace mención expresa al compromiso de las partes a someter sus divergencias a una Sala especial del T.I.J. En cumplimiento de las disposiciones del Tratado General de Paz, suscribieron el correspondiente Acuerdo Compromisorio de 24 mayo 1986 por virtud del cual, sometieron al T.I.J. la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima existente entre los dos Estados³⁰.

Si decíamos que el asunto de Burkina Faso/Mali, ya referido, constituía el precedente jurisprudencial en la consideración, por parte del T.I.J., del principio del uti possidetis iuris como derecho aplicable, éste va a tener ocasión de enfrentarse nuevamente a la problemática que supone la aplicación de dicho principio a una controversia fronteriza. Efectivamente, El Salvador y Honduras convienen expresamente que la regla a aplicar³¹, tanto para la determinación de la frontera terrestre como la marítima, e incluso para la cuestión de las islas, es el principio del uti possidetis iuris.

Sin embargo, no es ajeno este conflicto ni a las imprecisiones de los títulos coloniales ni a interpretaciones encontradas respecto del alcance del principio. En este sentido, la principal divergencia de las Partes reside en la correcta determinación del alcance del artículo 26 del Tratado General de Paz³², que no es

Pacíficas, Pacto de Bogotá (PEIRANO BASSO, J., Buenos Oficios y Mediación, Montevideo, 1983, pp.54-55).

³⁰ La sentencia de la Sala del T.I.J. es de 11 septiembre 1992 (cfr. I.C.J. Reports, 1992, pp.351-761).

³¹ Artículo 5 del compromiso de 1986, que remite a las normas del derecho internacional aplicables entre las partes según el Tratado General de Paz, el cual alude expresamente al uti possidetis iuris (cfr. ibidem, p.10).

³² Artículo 26: "For the delimitation of the boundary line in the disputed area, the Joint Boundary Commission shall take as its basis the documents issued by the Spanish Crown or by any other Spanish authority, civil or ecclesiastical, during the colonial period which indicate the jurisdictions

una cláusula sobre derecho aplicable sino una disposición que indica los elementos de prueba³³. Pues, mientras para Honduras únicamente cabe aplicar el uti possidetis iuris, en sentido estricto; El Salvador entiende, apoyándose en el tenor literal de este artículo, que caben también como prueba de esta línea 'argumentos de orden humano'. Nuevamente el Tribunal se enfrenta al problema de las relaciones dialécticas entre uti possidetis y efectividades en cada una de las tres partes de la controversia.

En lo que afecta a la frontera terrestre, la Sala divide la zona litigiosa en seis sectores, respecto de los cuales, en general, llega a una conclusión importante: en ninguno de ellos son acogidas las efectividades alegadas por las partes como prueba suficiente para alterar su decisión³⁴; si bien, hay que tener en cuenta en este punto que, la mencionada reflexión del Tribunal está precedida por la interesante construcción que hace respecto a la interacción entre título y efectividad, que le lleva a equiparar a los denominados 'títulos oficiales de tierras comunes' ('título ejidales') a las 'efectividades coloniales', en la medida que se trata de actos de administración efectiva por parte de la autoridad colonial y no actos de particulares, y no son exactamente los títulos en los que se apoya la

or boundaries of territories or towns. Account shall equally be taken of other means of proof and arguments and reasons of a juridical, historical, or human nature or of any other kind which may be adduced by the parties and which are admissible under International Law" (cfr. Memorial of the Republic of El Salvador, vol.I, 3.3).

³³ Cfr. Ibidem, p.391, pa.48.

³⁴ Cfr. Ibidem, pp.422-423, pa.102; pp.435-436, pa.123; p.470, pa.177 y 178, pp.470-471, pa.179 y pp.471-472, pa.180; pp.515-516, pa.264 y p.516, pa.265; p.542, pa.304; y pp.551-552, pa.319, respectivamente para cada sector.

aplicación del uti possidetis iuris³⁵, aunque, como veremos, sean utilizados como prueba para identificar dicha línea.

Esto no significa que el trazado vaya a discurrir exclusivamente sobre la base de los títulos jurídicos, por el contrario, el Tribunal en ciertas zonas se ve impelido a argüir sobre otras categorías jurídicas, circunstancia que nos lleva a afirmar que el método seguido por éste para delimitar la frontera no es unívoco. La aportación más importante, en este sentido, la localizamos en la construcción llevada a cabo por la Sala respecto al valor probatorio que supone la conducta de las partes. Así, en la decisión relativa al primer sector, el argumento de la conducta posterior de las partes, en este caso de Honduras, juega un papel de prueba de primer orden. Por un lado, en lo que se refiere al primer sub-sector, supone la vinculación de Honduras por su propia conducta, lo que le impide que pueda ejercer válidamente una reclamación sobre este sector ('estoppel'), y la exclusión de aplicación del uti possidetis iuris en los siguientes términos:

"... the Chamber does not consider that the effect of the application of the principle of the uti possidetis iuris in Spanish America was to freeze for all time the provincial boundaries which, with the advent of independence, became the frontiers between the new States. It was obviously open to those States to vary the boundary between them...The situation was susceptible of modification by acquiescence in the lengthy intervening period; and the Chamber finds that the conduct of Honduras from 1881 until 1972 may be regarded as amounting to such acquiescence in a boundary..."³⁶.

Por otro, aunque en el segundo sub-sector no hubo transferencia de soberanía por aquiescencia, la conducta posterior de Honduras al firmar un tratado 'ad

³⁵ Cfr. ibidem, pp.398-399, pa.62.

³⁶ Vid. Ibidem, p.408, pa.80.

referendum' en 1935, con una pretensión distinta a la expuesta en 1972, vincula a ese tratado que constituye el único título válido para fijar la línea de 1821³⁷. Conclusión parecida, la encontramos en el primer sub-sector del cuarto sector, en donde la prueba estuvo constituida por el 'reconocimiento' de las partes, hecho en un tratado no ratificado de 1861, a una línea que, en opinión del Tribunal va a determinar el uti possidetis iuris a posteriori³⁸. Asimismo, el Tribunal acepta como pieza probatoria una nota del Ministro de Relaciones Exteriores salvadoreño, de 14 mayo 1861, significativa en cuanto supone el reconocimiento de fronteras establecidas a través de un acto jurídico unilateral³⁹.

Semejante criterio jurídico siguió la Sala en el último sector, en lo que a la conducta se refiere. Inversamente, aquí fue la posterior conducta de El Salvador hasta 1972, en cuanto aquiescencia al cauce del río que en las negociaciones de 1880 habían fijado las partes, la que retuvo el Tribunal⁴⁰, no para excluir la línea del uti possidetis, sino para corroborarla.

Para sufragar las ambigüedades, imprecisiones e, incluso, insuficiencias de los títulos jurídicos presentados por ambos Estados en apoyo de sus reclamaciones, el Tribunal se ve impelido a apoyarse en principios equitativos en varias partes del

³⁷ Cfr. Ibidem, p.422, pa.101.

³⁸ Cfr. Ibidem, p.489, pa.208.

³⁹ Cfr. Ibidem, p.485, pa.204 y 205.

⁴⁰ Cfr. Ibidem, pp.547-548, pa.312 y p.551, pa.317.

trazado, en base a una equidad 'infra legem' que las partes le reconocen⁴¹.

En el resto del trazado hay una clara aplicación del principio del uti possidetis iuris, en base a los títulos presentados, ya sean coloniales o, en su defecto, republicanos.

Es importante resaltar la especial construcción elaborada por la Sala respecto al valor jurídico que puede resultar de la conducta posterior de las partes -ya adopte la forma de aquiescencia, estoppel, reconocimiento o cualquier otro acto jurídico unilateral- a efectos, no sólo de completar o ratificar lo establecido en base al principio del uti possidetis iuris, sino, y esta es la novedad esencial, para excluirlo, modificando una situación anterior cual era el statu quo colonial.

Importancia decisiva tuvieron las efectividades en lo que se refiere a la controversia insular, pues, pese a la inicial intención de someter el contencioso a los cánones del uti possidetis iuris, el Tribunal advirtió, por un lado, la confusión y contrariedades de los documentos históricos de la época colonial, y, por otro, la ausencia de actos de soberanía inmediatos a la adhesión a la Independencia. El conjunto de estas circunstancias obliga a considerar como único título posible para probar el uti possidetis, el ejercicio continuo y pacífico de autoridad realizado en el

⁴¹ Podría quizá entenderse, por las reiteradas alusiones de la Sala a la dificultad de interpretar debida a sus acusadas ambigüedades, tanto los títulos coloniales como los republicanos presentados en el tercer sector, que ha acudido a principios equitativos al establecer la delimitación (cfr. ibidem, p.456, pa.155); igualmente podría enmarcarse en este contexto, la presunción delimitadora establecida en el tercer sub-sector de sector cuarto (cfr. ibidem, p.478-479, pa.189). Donde no hay duda alguna del recurso del Tribunal a la equidad 'infra legem' es en el quinto sub-sector del cuarto sector del trazado, invocada ante la imposibilidad de aludir al uti possidetis a falta de prueba suficiente (cfr. ibidem, p.514, pa.262).

período posterior a la época colonial⁴²; el Tribunal al iniciar el planteamiento de su decisión, ya había excluido 'a priori' las efectividades coloniales como elemento de prueba documental del período colonial, aceptando únicamente, según el caso, las posteriores a la independencia⁴³. Estas pueden actuar cuando una parte lo alega, sin constancia de protesta por la parte contraria, de lo cual se sigue, como dice el juez TORRES BERNALDEZ, "on the basis of the evidence contained in the case-file as a whole, that the Honduran past conduct, at the relevant period, together with the development of the state effectivities of the El Salvador in Meanguera, modified at a certain moment the legal situation in favour of El Salvador"⁴⁴. Pese a que un principio pudiera pensarse, que la utilización de la categoría jurídica de las efectividades 'post-coloniales' se halla en contradicción intrínseca con el principio de statu quo y de 'intangibilidad de las fronteras' que consagra el uti possidetis, tal afirmación sería correcta en el supuesto de título jurídico cierto con el que éstas entraran en conflicto; pero, cuando nos enfrentamos a la ausencia de título, no sólo no se excluyen sino que su recurso es casi un imperativo, como lo demuestra esta sentencia del T.I.J, cuando concurren con aquiescencia, buena fe y tiempo razonable.

⁴² Cfr. Ibidem, p.566, pa.347.

⁴³ Cfr. ibidem, pp.398-399, pa.62.

⁴⁴ Vid, opinión individual, ibidem, pp.708-709, pa.168. La decisión de la Sala sobre la adjudicación de esta isla a El Salvador, cfr. ibidem, p.577, pa.364.

3. La práctica judicial posterior: la controversia territorial entre la Jamahiriya Árabe Libia y Chad.

Enfrentado a un problema de delimitación territorial, nuevamente entre dos Estados africanos surgidos del proceso descolonizador, el T.I.J (esta vez en Pleno y no en Sala) tiene que decidir sobre la validez de un tratado, más exactamente, si el artículo 3 del Tratado de amistad y buena vecindad de 10 agosto 1955, entre Francia y Libia contiene el trazado de la frontera entre ésta y Chad (antigua colonia francesa). A diferencia de los asuntos precedentes, no encontramos aquí un sometimiento expreso y claro al uti possidetis iuris como principio delimitador lo cual no es óbice para encuadrarlo, así lo creemos, en este contexto pese al silencio del propio T.I.J.⁴⁵

Son varias las circunstancias que apuntalan esta aseveración, por un lado, la propia afirmación libia de que el Tratado de 1955 es conforme al uti possidetis iuris⁴⁶, por otro, las Partes determinan someter la solución del conflicto al T.I.J., "in accordance with the principles and rules of international law applicable in the matter"⁴⁷, teniendo presente que se trata de dos Estados surgidos del proceso descolonizador, en cumplimiento de la Declaración de El Cairo de 1964⁴⁸ y

⁴⁵ La posición del Tribunal, en este sentido, parece haber sido la de no hacer aplicación expresa de dicho principio al existir un tratado que lograba los mismos efectos; de ahí que esta misma idea nos sirva para corroborar nuestra postura de identidad entre dicho tratado y el uti possidetis iuris.

⁴⁶ Cfr. CR 93/27, p.57.

⁴⁷ Vid. I.C.J. Reports, 1994, p.14, pa.18.

⁴⁸ Frente a una posible argumentación contraria basada en que la Declaración de la O.U.A. es trece años posterior a la independencia de Libia (1951) y cuatro a la del Chad (1960), por lo que no estaría vinculados por ella, podemos argüir que en la misma situación estaban tanto Burkina Faso como Mali y el T.I.J, en su sentencia de 1986 sostuvo que "it is clear that the

siguiendo la doctrina marcada en este punto por el asunto de Burkina Faso y Mali, el principio que resulta de aplicación inevitablemente es el del uti possidetis iuris; además, no debemos olvidar que nos hallamos ante un supuesto de sucesión de Estados a un tratado de fronteras, principio éste en íntima conexión con el del uti possidetis⁴⁹. Así parece haberlo interpretado también el juez AJIBOLA, al expresarse en su opinión individual en los siguientes términos:

"the 1955 Treaty accords with the principle of uti possidetis and the Parties to this dispute are bound by it"⁵⁰.

Se trata, pues, de una controversia sobre título jurídico y aquí el título viene claramente determinado por los 'actos internacionales' que se citan en el anexo I del Tratado (que no son sino documentos de la época colonial), constituyendo así prueba suficiente de dicho título, sobre los cuales el Tribunal, en su sentencia de 3 febrero 1994, establece el trazado definitivo de la frontera⁵¹.

Sin embargo, creemos necesario reseñar, a efectos de crítica, respecto de

applicability of uti possidetis in the present case cannot be challenged merely because in 1960, the year when Mali and Burkina Faso achieved independence, the OUA which was to proclaim this principle did not yet exist, and the above-mentioned resolution calling for respect for the pre-existing frontiers dates only from 1964" (I.C.J. Reports, 1986, p.567, pa.26).

⁴⁹ No es el primer caso que encontramos en la jurisprudencia internacional de sucesión de Estados a tratados de fronteras. En el laudo arbitral de 31 julio 1989, sobre la frontera marítima entre Guinea-Bissau y Senegal, el Tribunal aplicó el Convenio de 12 mayo 1886 entre Portugal y Francia, a quienes había sucedido aquéllos respectivamente, como un supuesto de sucesión de Estados en materia de límites en conexión con el principio del uti possidetis iuris (vid. R.G.D.I.P., 1990, pp.204-277).

⁵⁰ Vid. ibidem, pp.91-92, pa.134.

⁵¹ De los seis textos que se mencionan en dicho anexo (que vienen referidos en la p.21, pa.40 de la sentencia) como base de la delimitación, el Tribunal se funda en los Convenios franco-británicos de 14 junio 1898, con su Declaración adicional de 21 marzo 1899, y de 8 septiembre 1919 y el Cambio de Cartas franco-italiano de 1 noviembre 1902 (vid. ibidem, p.38, pa.74).

esta sentencia, un dato importante en lo que se refiere a nuestro estudio. Ambas Partes sometieron al Tribunal la prueba de ejercicio de funciones estatales sobre el territorio en conflicto; Libia se basaba en la ocupación indígena y posteriormente, por sucesión, del Imperio Otomano e Italia (a quien sucedió), por su parte, Chad alegaba importantes efectividades coloniales llevadas a cabo por Francia hasta 1973⁵². Frente a tal aportación, el Tribunal, lejos de seguir la corriente iniciada en 1986 y corroborada en 1992, 'deshecha' su pertinencia sobre la base de no ser "matters for determination in this case"⁵³. Ciertamente es que el Tribunal contaba con prueba suficiente de título jurídico para determinar la frontera sin necesidad de recurrir a 'métodos' supletorios como son las efectividades que le presentan las Partes; pese a la exactitud de esta afirmación no podemos dejar de censurar esta actitud apática que supone un freno a la evolución de la interacción entre 'título jurídico' y 'efectividades', y cuya justificación parece desconocer la jurisprudencia anterior, más concretamente el precedente sentado por el asunto de Burkina Faso-Mali, al que es perfectamente asimilable, tanto por su contexto geográfico como jurídico. Sin ninguna duda, las efectividades en este asunto tenían su papel, no como título autónomo sino para confirmar y corroborar el título jurídico establecido; hubiera sido, sin duda, gratificante un análisis de las pruebas alegadas por las Partes en este sentido, como ya hiciera en 1986, en el mencionado caso de Burkina Faso-Mali, y 1992, en el asunto de El Salvador- Honduras.

⁵² Los datos respecto de tales efectividades, al no tener posibilidad de consultar el correspondiente procedimiento escrito, los hemos extraído del propio texto de la sentencia, de la opinión individual de Ajibola (p.89, pa.128) y disidente de Sette-Camara (p.99).

⁵³ Vid. ibidem, p.38, pa.76.

B) ANALISIS DE LA JURISPRUDENCIA ARBITRAL EN EL AMBITO DE ESTA MUTUA INTERACCION.

Durante años, la aplicación del uti possidetis iuris como principio de delimitación ha estado restringida, no sólo a los confines de la jurisprudencia arbitral, sino para mayor abundamiento, a los arbitrajes que conocían de conflictos fronterizos entre Estados iberoamericanos⁵⁴, lo que ha conducido inevitablemente a la afirmación doctrinal y jurisprudencial de que el uti possidetis es un principio hondamente enraizado en la práctica iberoamericana⁵⁵. Este último aparece en la

⁵⁴ Resulta interesante mencionar el compromiso arbitral de 12 julio 1903, entre Portugal y Gran Bretaña, por el que se somete al arbitraje del Rey de Italia la cuestión de delimitación del límite fronterizo del Reino de Barotse, en Africa central. Las partes estipularon en el compromiso arbitral que la expresión "territory of the Kingdom of Barotse", contenida en un tratado, significaba "the territory over which the King of Barotse was paramount ruler on the 11th june 1891" (U.N.R.I.A.A., vol.XI, p.67) lo cual no es sino un reenvío al uti possidetis de 1891.

⁵⁵ Durante los siglos XIX y XX se han iniciado más de 30 procedimientos arbitrales relacionados con problemas territoriales o de límites en el continente americano, respecto de los cuales, por lo menos una de sus partes ha sido un Estado americano; de ellos, ocho no llegaron a concluirse, mientras en el resto se dictó un laudo:

- tres conciernen a Estados no latinoamericanos, por lo que no hacen relación al tema de estudio.
- cinco conciernen a Estado latinoamericano y no latinoamericano. En ninguno de ellos se consideró la doctrina del uti possidetis; aunque Venezuela adujo argumentos basados en títulos españoles en su disputa contra Gran Bretaña, éstos no se tuvieron en consideración.
- los restantes conciernen a Estados latinoamericanos exclusivamente; pero no todos ellos dicen relación con la doctrina del uti possidetis. Así, por ejemplo, en el caso de Argentina-Paraguay (1878), no se especificó fundamento alguno para la decisión, favorable a Paraguay; Costa Rica-Nicaragua (1888), versó sobre la validez de un tratado; Argentina-Brasil (1895), aunque la primera negó, en un principio, la aplicabilidad del uti possidetis entre estados que no habían dependido de un soberano común, posteriormente propugnó su aplicabilidad que favorecía sus argumentos, pero la decisión favoreció finalmente la ocupación brasileña; Argentina-Chile (1902 y 1966), interpretó el tratado de límites de 1881, estableciendo un trazado de límites equitativo -posteriormente, el laudo de 1902 y el consiguiente tratado de límites de 1881

jurisprudencia como norma aplicable, primeramente porque existe un tratado que así lo prevé, ya sea convenio de límites o compromiso arbitral; en segundo lugar, el uti possidetis puede ser aplicado porque la Constitución o la legislación interna de uno o ambos Estados en litigio así lo determinen⁵⁶.

De acuerdo con un análisis jurisprudencial, resulta que la utilización del uti possidetis como 'ratio decidendi', en las controversias territoriales, ha sido determinada en aquellos casos en que existe un convenio internacional o una norma de derecho interno que reenvía a las antiguas divisiones administrativas indianas; si bien su aplicación individual no siempre ha esclarecido la controversia fronteriza planteada. Entre los obstáculos que aparejaba el establecimiento del uti possidetis iuris en los nuevos Estados, podríamos identificar la dificultad de ubicación de los archivos, la distancia con la Metrópoli, el desconocimiento del derecho indiano..., motivos suficientes de reflexión sobre la dificultad de esta labor, y a los que se suman, además, el desconocimiento geográfico, en la mayoría de las veces, del territorio a delimitar lo que origina la natural desconfianza, ante las reales

han sido objeto de interpretación por el laudo de 1994 sobre la Laguna del Desierto-; o Chile-Perú (1925), laudo que se refiere a problemas surgidos de los cambios de soberanía, sobre determinados territorios, ocurridos a raíz de una guerra entre las partes, y, por lo tanto, no se refiere a la doctrina del uti possidetis. (Cfr. DURAN BACHLER, S., Uti possidetis. Doctrina Latinoamericana, Santiago de Chile, 1977, pp.80.87).

Junto a estas controversias, ya resueltas, habría que añadir otras aún pendientes, baste citar a título ejemplificativo, la reivindicación boliviana respecto del río Lauca frente a Chile, o la que enfrenta a Nicaragua contra Colombia.

⁵⁶ En efecto, si un Estado prescribe en su derecho interno que su territorio está formado por lo que era una antigua Provincia, Capitanía General o Virreinato, resulta lógico acudir a los antecedentes coloniales para precisar el sentido de las disposiciones (cfr. BARBERIS, J.A., "La regla del uti possidetis en las controversias limítrofes entre Estados hispanoamericanos", en Liber Amicorum. Colección de estudios jurídicos en homenaje al Prof. Dr. José Pérez Montero, vol. I, Oviedo, 1986, p.136).

cédulas, de que hubieran sido redactadas sin los indispensables conocimientos locales.

Esta imprecisión funcional y jurídica, así como las divergencias que oponen a los diversos Estados latinoamericanos en cuanto al verdadero significado del principio, ha conducido a estos últimos, en varios casos, a no hacer del mismo el único fundamento de sus pretensiones territoriales, de ahí que tiendan a asociarlo u oponerlo a otras técnicas de solución, más concretamente, a la efectiva ocupación. Se impone, pues, pasar revista a las diversas decisiones arbitrales en las que, de alguna forma, el árbitro ha debido enfrentarse ante la dialéctica uti possidetis iuris / efectividades, en cuanto, por un lado, ambas técnicas jurídicas contienen elementos de incompatibilidad, y por otro, las segundas pueden resultar útiles para interpretar el primero o para decidir cuando no hubiere límite colonial preciso o fuere imposible conocerlo⁵⁷.

■ Aun sin hacer mención expresa del principio, se ha considerado tradicionalmente que la 'ratio decidendi' del asunto de la Isla de Aves⁵⁸ da por supuesta la aplicación del uti possidetis iuris, al establecer la soberanía venezolana en cuanto sucesora de España que había descubierto la isla, corroborada, más tarde, por su ocupación efectiva de la misma a través de destacamentos armados.

⁵⁷ Cfr. SANCHEZ RODRIGUEZ, L.I., "Problemas de fronteras...", op.cit., p.199.

⁵⁸ Conflicto que enfrentó a Países Bajos y Venezuela acerca de la soberanía sobre la isla (vid. texto de la sentencia en LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.II, pp.412-415); el laudo emitido por la Reina de España, Isabel II, supone el primer precedente en la aplicación jurisprudencial del uti possidetis.

Podríamos identificar en este caso una equiparación del principio del uti possidetis iuris con el de la sucesión de Estados sobre el territorio; lo que nos lleva a afirmar que, aunque no se trate de unimismar ambos principios, es innegable la estrecha vinculación existente entre ambos⁵⁹.

Por otra parte, el laudo suscita en uno de sus pasajes, la contradicción en el plano de los principios entre la ocupación efectiva, pacífica y continua, como base de la adquisición de soberanía territorial, y el uti possidetis:

"Considérant qu'à son tour le Venezuela fonde principalement son droit sur celui qu'avait l'Espagne avant la constitution de cette République comme État indépendant et que, s'il résulte bien que l'Espagne n'a pas matériellement occupé le territoire de l'île d'Aves, il est indubitable qu'il lui appartenait comme faisant partie des Indes Occidentales qui étaient sous la domination (dominio) des Rois d'Espagne, conformément à la loi 1, titre V, livre I, de la Recopilación des Indes;

Considérant qu'île d'Aves a dû faire partie du territoire compris dans le resort du tribunal de Caracas... il put considérer l'île d'Aves comme partie de la province espagnole de Venezuela;

... la résidence temporaire de quelques indigènes de Saba et de Saint-Eustache n'est qu'une occupation précaire qui ne vaut pas possession; et bien que à raison des immersions auxquelles elle est exposé, l'île ne soit pas susceptible d'une habitation permanente...

Considérant enfin que le gouvernement des Pays-Bas n'a fait qu'utiliser la pêche dans la dite île par l'intermédiaire de ses colons, tandis que le gouvernement vénézuélien a été le premier à y tenir une force armée et à y faire des actes de souveraineté, confirmant ainsi la domination (dominio) qu'il avait acquises en vertu d'un titre général dérivant de l'Espagne;"⁶⁰.

Una lectura en profundidad del citado fragmento, nos lleva a la conclusión

⁵⁹ En este mismo sentido se ha manifestado el prof. BARDONNET, quien afirma además que, por razones históricas, tanto el uti possidetis como la sucesión de Estados se aplican, no sólo a las fronteras terrestres, sino también a las marítimas (vid. "Frontières terrestres et frontières maritimes", A.F.D.I., 1989, pp.59 a 62).

⁶⁰ Vid. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.II, pp.414-415.

de que en un intento por conciliar ambos principios, el árbitro ha primado el título jurídico actuando las efectividades en su función confirmatoria⁶¹; conclusión que resulta especialmente destacable teniendo en cuenta que una de las partes era país europeo y, por tanto, no sometido al uti possidetis, lo que nos hace pensar que en otro contencioso de idénticas características (Estado latinoamericano/Estado no latinoamericano) la solución no sería la misma⁶², pues no tratándose de Estados surgidos de la descolonización el uti possidetis no es argumento principal, sino supletorio.

■ A través del tratado de 14 septiembre 1881, Colombia y Venezuela, sometieron al arbitraje 'de iure' del Rey de España la solución de su problema fronterizo, sobre la base del uti possidetis iuris de 1810. El laudo correspondiente, 16 marzo 1891⁶³, aunque es el primer fallo arbitral internacional en que encontramos una aplicación expresa de esta doctrina, constituye un claro ejemplo de la imposibilidad casi absoluta de tomarlo en consideración de forma aislada. En

⁶¹ Consideramos interesante el comentario, al respecto, del prof. SANCHEZ RODRIGUEZ para quien "el caso ilustra adecuadamente sobre las dificultades de separar en los contenciosos de atribución de soberanía territorial sobre islas, los argumentos de ocupación y los derivados del uti possidetis, ya que ambas líneas argumentales pueden aparecer confundidas en las posiciones de al menos una parte, lo que generalmente obligará al árbitro a tenerlas en cuenta" ("Uti possidetis: la reactualización...", op.cit., p.137).

⁶² Para confirmar esta opinión podemos citar la controversia fronteriza entre G.B. y Venezuela (3 octubre 1899), donde ésta alegó la aplicación del uti possidetis iuris en cuanto principio de derecho internacional enmarcable en la regla b) del artículo IV del Tratado de Arbitraje de 2 febrero 1897, pero el tribunal arbitral que conoció del asunto no atendió este argumento (Cfr. MARTENS, N.R.G., 2s, XXIX, pp.581-587).

⁶³ Laudo de la Reina Regente de España M^a Cristina; vid. texto en GROSS ESPIELL, H., España y la solución pacífica de los conflictos limítrofes en Hispano-América, Madrid, 1984, pp.131-134.

efecto, el árbitro decide la división de la zona en disputa en seis secciones, respecto de las cuales se establece la siguiente conclusión:

- dos de ellas, la segunda y la cuarta, se delimitan por acuerdo de las partes reconocido por el laudo;
- otras dos, primera y tercera, y una subsección de la sexta, se resuelven fácilmente por los documentos presentados y, por tanto, mediante la aplicación exclusiva del uti possidetis;
- refiriéndose a la quinta sección, la cédula real que debiera servir de base, "Real Cédula de creación de la Comandancia de Barinas de 15 febrero 1786", da lugar a dudas por lo que la excluye y recurre a la facultad extraordinaria, que le reconoce el Compromiso complementario de 15 febrero 1886, para poder fijar la línea del modo que crea más 'aproximado'⁶⁴, es decir, se delimita de forma equitativa.
- sin embargo, en la segunda subsección del sector sexto, después de referirse a la incertidumbre de la cédula real que le sirve de base, "Real Cédula de 5 mayo 1768", en cuanto no tiene el mismo significado para las partes y sus términos no son ni claros ni precisos como para fundar una decisión legal, toma en consideración que "los Estados Unidos de Venezuela poseen de buena fe territorios al Occidente del Orinoco, Casiquiare y Río Negro, ríos que forman los límites asignados por este lado en la mencionada Real Cédula de 1786 a la Provincia de la Guayana"⁶⁵.

Nos encontramos, pues, en un contencioso en que la delimitación fronteriza

⁶⁴ Cfr. GROS ESPIELL, H., España y la solución... op.cit., p.132.

⁶⁵ Vid. GROSS ESPIELL, H., España y la solución... op.cit., p.133.

sobre la base del uti possidetis iuris se ha visto completada por el recurso a la equidad, de un lado, y de otro, por la función integradora o interpretativa de las efectividades, motivada por las insuficiencias del título colonial.

Esta sentencia fue objeto, a su vez, de otra posterior emitida por el Consejo Federal Suizo, 24 marzo 1922⁶⁶, para decidir acerca de la ejecutabilidad de la primera en fases, como sostenía Colombia y como determinó el laudo, o en unidad, como afirmaba Venezuela. El interés que pudiera revestir, para nuestro estudio, la sentencia radicaría en la elaborada introducción histórica acerca de la doctrina del uti possidetis, la cual proporciona un valor añadido a la decisión, pero dado que no entra en disquisiciones sobre las posibles interacciones que puede tener la misma con la técnica de las efectividades, no vamos a profundizar en su análisis.

■ El laudo Loubet que intentó poner fin a la controversia de límites que enfrentaba a Colombia y Costa Rica⁶⁷, aparece como una decisión en la que el uti possidetis ha tenido gran importancia; pese a que no puede inferirse de su texto, por la ausencia de considerandos, el razonamiento jurídico seguido para dictar sentencia, las numerosas citas del derecho de Indias y algunas afirmaciones del árbitro permiten deducir que este principio tuvo influencia decisiva en la

⁶⁶ Vid. texto de la sentencia en U.N. R.I.A.A., vol.I, pp.223-298.

⁶⁷ La controversia se centraba en realidad sobre la relevancia, a efectos de delimitación, de una cédula real emanada del soberano español el 30 noviembre 1803, según la cual la Costa de los Mosquitos pertenecía al Virreinato de Nueva Granada. Sentencia de 11 septiembre 1900 (cfr. MARTENS, N.R.G., 2 s., XXXII, pp.411-413).

decisión⁶⁸.

Al independizarse Panamá de Colombia el 3 noviembre 1903, le sucedió en sus problemas de límites con Costa Rica, centrados en ese momento en la validez del laudo de 1900. Acordaron ambos países, a través del Convenio de 17 marzo 1910⁶⁹, someter al Chief of Justice de EE.UU., la cuestión de la validez del laudo Loubet y, si procedía, el trazado de límites conforme a los cánones marcados para la primera decisión, o sea, aplicación del uti possidetis. El laudo de 1914 declaró inexistente una sección de la línea descrita por la sentencia de 1900 y procedió a fijarla, siguiendo los términos del compromiso, teniendo en cuenta, fundamentalmente, la ocupación y otras manifestaciones de dominio sobre parte del territorio controvertido:

"... the proof here is adequate and comprehensive that the western bank of a river so flowing was occupied and settled under the jurisdiction of Costa Rica, and that as far as settlement were made by Colombia (Panamá) the eastern bank was taken as the line of its jurisdiction of that country.

... was shown by official action in many forms by the exercise of dominion by the respective countries and was demonstrated by the settlements which manifested the practical conception which prevailed concerning the real situation as the boundary "⁷⁰.

Se trata, pues, de un nuevo supuesto en que las efectividades han tenido una cierta aplicación, esta vez de forma integradora y claramente interpretativa de

⁶⁸ Tenemos que tener en cuenta, asimismo, el compromiso de 5 marzo 1825, que confiaba al árbitro el decidir la cuestión de límites conforme a los títulos emanados del Soberano español (cfr. ANDERSON, L., El laudo Loubet. Contribución al estudio de la cuestión de límites entre Costa Rica y Panamá, San José, 1911, p.67).

⁶⁹ Vid. U.N.R.I.A.A., vol.XI, pp.525-527.

⁷⁰ Vid. U.N.R.I.A.A., vol.XI, p.533 y p.534. Texto del laudo, cfr. ibidem, pp.528-547.

un trazado inspirado en límites coloniales.

■ Los límites entre Nicaragua y Honduras eran inciertos, pues la zona fronteriza se situaba en una región poco poblada, de acceso difícil y, de hecho, poco conocida; a todas estas dificultades fácticas se enfrentó el Rey de España, Alfonso XIII, al abordar la tarea arbitral en la delimitación de la frontera común de ambos países⁷¹. Arbitraje que estaba vinculado a la prelación de pruebas estipulada en el artículo II del Tratado Gámez-Bonilla, 7 octubre 1894⁷², según la siguiente graduación:

- 1ª. Líneas en que ambas partes estuviesen de acuerdo, o que ninguna disputase.
- 2ª. Líneas de demarcación a través de documentos públicos, no contradichos por documentos, igualmente públicos de mayor fuerza.
- 3ª. Territorios que pertenecían a la fecha de la independencia a las respectivas provincias de Honduras y Nicaragua.
- 4ª. Sólo se atenderá al dominio del territorio plenamente probado, y no se reconocerá valor jurídico a la posesión de hecho que alguna de las partes alegara.
- 5ª. A falta de prueba de dominio se consultarán los mapas de ambas Repúblicas o los documentos geográficos de cualquier otra naturaleza, públicos o privados, que puedan dar alguna luz, y serán límites los que equitativamente se fijen según tal estudio.

⁷¹ Laudo del Rey de España, 23 diciembre 1906 (texto, cfr. GROS ESPIELL, H., España y la solución...op.cit., pp.136-146).

⁷² Cfr. Límites entre Honduras y Nicaragua. Alegato de la República de Honduras, Madrid, 1905, pp.17-22.

Aun cuando las reglas establecidas no utilizan la expresión uti possidetis, debemos entenderla implícita en la referencia a 'las respectivas unidades coloniales'. Igualmente, estas reglas suponen la exclusión 'a priori', para el caso, de las efectividades al negar valor jurídico a la 'posesión de facto'. Sin embargo, a los fines de interpretar y precisar el uti possidetis, el árbitro valoró aspectos tales como el 'reconocimiento por terceros Estados', la 'jurisdicción eclesiástica', las 'elecciones a Cortes', la 'cartografía', las 'opiniones y descripciones de geógrafos' o la 'documentación diplomática'⁷³, junto a las diversas Cédulas Reales presentadas por las partes, pero sin llegar a ostentar efecto autónomo como título probatorio.

Al igual que ocurría con los dos contenciosos anteriormente referidos, el laudo del Rey de España fue objeto, posteriormente, de un recurso de nulidad, esta vez, la instancia requerida fue el T.I.J., quien, a través de su sentencia de 18 noviembre 1960⁷⁴, determinó la plena validez del laudo en los siguientes términos, "this complaint is without foundation inasmuch as the decision of the arbitrator is based on historical and legal considerations (derecho histórico) in accordance with paragraphs 3 and 4 of art.2"⁷⁵. El principal interés de esta decisión radica, quizá, por un lado, en la aversión del tribunal a examinar cuestiones generales como el principio del uti possidetis, tratado únicamente a nivel de declaración por el juez Moreno Quintana y de opinión disidente por el juez

⁷³ Cfr. GROS ESPIELL, H., España y la solución... op.cit., p.139, pp.140 y 145, pp.140 y 141, pp.144 y 145, y p.143, respectivamente.

⁷⁴ Vid. el texto en I.C.J. Reports, 1960, pp.192-239.

⁷⁵ Ibidem, p.215.

Urrutia Holguin, quienes no sólo pusieron de manifiesto esta carencia, sino que estimaron que tal doctrina tendría que haber sido el eje central de la decisión⁷⁶; en su concentración en los actos de las partes mismos y especialmente su práctica subsiguiente como prueba de sus intenciones originales; y, en el mayor desarrollo del principio conocido como 'aquiescencia' o 'estoppel'⁷⁷, que veremos en su momento.

■ Dificultad análoga a la que se encontró el Rey de España cuando afrontó el encargo de reconstruir, en base al uti possidetis iuris, los límites coloniales entre Honduras y Nicaragua, se le planteó al Presidente de Argentina, J.Figueroa Alcorta, a la hora de emitir su laudo resolviendo la controversia limítrofe entre Bolivia y Perú⁷⁸.

El tratado de arbitraje de 30 diciembre 1902⁷⁹, después de haber establecido, en su artículo III, la obligación de resolver sobre la base de los antiguos límites coloniales de conformidad con toda una serie de documentos que se enumeran (Recopilación de Leyes de Indias, Cédulas y Ordenes Reales), ha precisado que "the rights over a territory exercised by one of the High Contracting Parties shall not be a bar to or prevail against titles or royal dispositions

⁷⁶ Vid. I.C.J. Reports, 1960, pp.217-218 y pp.226 y 227, respectivamente.

⁷⁷ Cfr. JOHNSON, D.H.N., "Case concerning the Arbitral Award made by the King of Spain on December 23, 1906", I.C.L.Q., 1961, p.336.

⁷⁸ Cfr. texto del laudo en U.N.R.I.A.A., vol.XI, pp.133-146.

⁷⁹ Ibidem, pp.139-140.

establishing the contrary”⁸⁰. Claramente se está proclamando la primacía del uti possidetis iuris sobre la efectividad, en tanto que no se debería tener en cuenta la posesión si ésta fuere contraria al título colonial; pero esto no supone excluir de valor a los actos de ocupación, sino que constituyen prueba complementaria, prueba de apoyo, que podrá ser invocada, siempre que no contradiga las afirmaciones de los documentos oficiales, para suplir sus insuficiencias y completar lagunas, e igualmente, entendemos, que el árbitro podrá tenerla en consideración si estima que no existen títulos o disposiciones reales, como prueba supletoria. Para el supuesto, ciertamente posible, en que los actos y disposiciones legales previstas en el artículo III no resuelvan en claridad la cuestión de límites, el artículo IV permite al árbitro resolver en equidad, pero vinculado por tales documentos⁸¹.

Al referirse a los fundamentos del fallo, el árbitro declara que, habiendo estudiado con mucha atención los títulos coloniales presentados por las partes, pero sin librar ni análisis ni discusión sobre ellos, no encuentra razón suficiente para considerarlos como límite en 1810⁸². Ante la falta de precisión de los títulos, alegada por el árbitro, es lógico pensar que el siguiente paso es hacer uso del medio supletorio que supone la posesión del territorio por las partes. El Gobierno de Bolivia lo hace valer, apoyando sus reivindicaciones en el hecho de que una gran parte de la región litigiosa había sido en todo tiempo ocupada, cultivada y explotada por ciudadanos bolivianos, así como, defendida por tropas bolivianas

⁸⁰ Artículo V del tratado de 1902 (vid. ibidem, p.140).

⁸¹ Cfr. ibidem, p.139.

⁸² Cfr. ibidem, p.145.

contra los filibusteros⁸³. Sin embargo, el árbitro no ha tenido en cuenta para nada estas circunstancias, pues, no solamente no ha establecido su posible improcedencia por entrar en contradicción con actos oficiales (como correspondería según los términos del artículo V), sino que ni siquiera los menciona; se limita a recurrir a la competencia extraordinaria prevista en el artículo IV y decide equitativamente, pero sin atenerse a las reglas de derecho ni explicar la delimitación que reproduce.

■ La sentencia que podemos presentar como 'modelo' que mejor expresa la interacción entre uti possidetis iuris y efectividades, es el asunto de Guatemala y Honduras⁸⁴; en ella se acentúa como en ninguna otra el valor de la efectividad de los actos de jurisdicción. Las bases de solución se presentan en los mismos términos que el caso Bolivia-Perú. El compromiso de arbitraje, firmado el 16 julio 1930, dispone en su artículo V que la línea jurídica que puede ser establecida entre las partes debe ser la del uti possidetis de 1821, pero autoriza al árbitro a desviarse y acordar compensaciones equitativas si se demuestra que éstas habían adquirido intereses que deben tenerse en cuenta al establecer la frontera definitiva⁸⁵. Sin embargo, dicho principio encuentra difícil aplicación en el caso en cuanto las partes están en completo desacuerdo, no sólo sobre su alcance, sino sobre su naturaleza

⁸³ Cfr. WEISS, A., "L'Arbitrage de 1909 entre la Bolivie et le Pérou", R.G.D.I.P., 1910, p.133.

⁸⁴ Laudo de 23 enero 1933 (cfr. U.N.R.I.A.A., vol.II, pp.1308-1366).

⁸⁵ Ibidem, p.1322.

misma⁸⁶.

En su fallo, el tribunal trató, en primer lugar, de determinar el significado de la expresión uti possidetis, sobre la que divergían las partes, concluyendo que la utilización de dicha expresión en la solución de controversias de límites en Latinoamérica y las opiniones de los juristas al respecto, no revelaban un consenso que permitiera establecer un criterio definido. Ante esta imprecisión establece su propio concepto identificando el uti possidetis con la posesión en el momento de terminación del régimen colonial, de tal forma que la aplicación de este criterio debía probarse a través del control administrativo ejercido antes de la independencia, de acuerdo con la voluntad de la Corona española'. La prueba del control administrativo, no sólo radica en 'las leyes y decretos de la Corona española', sino, en su defecto, en 'la conducta que indique el consentimiento del Rey al ejercicio de autoridad administrativa'⁸⁷. Claramente el tribunal está estableciendo el criterio de la posesión actual como supletorio del título jurídico.

Partiendo de esta identificación del uti possidetis con el 'control

⁸⁶ Para Honduras se trata del uti possidetis iuris, de tal forma que la frontera debiera fijarse sobre la base de las divisiones administrativas españolas tal y como existían en 1821; esta interpretación permitía a Honduras presentar reivindicaciones extremas y sostener, en particular, que tenía 'título legal a la frontera hasta la Honduras Británica' (cfr. ARBITRAJE DE LIMITES ENTRE HONDURAS Y GUATEMALA, Alegato de la República de Honduras, sometido al Honorable Tribunal especial de límites, de conformidad con lo prescrito en el artículo IV del Tratado de 16 de julio de 1930, Washington, 1932, especialmente, pp.84-102). Por el contrario, Guatemala lo identificaba con el llamado uti possidetis de facto, de tal forma que la línea fronteriza debiera ser establecida en función de la división que existía en 1821, sobre la base de la ocupación efectiva y posesión en dicha fecha (cfr. ARBITRAJE DE LIMITES ENTRE GUATEMALA Y HONDURAS, Alegato presentado por Guatemala ante el Tribunal de arbitraje integrado por el honorable Charles Evans Hughes, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU. de América; Honorable Luis Castro Ureña, de Costa Rica; y Honorable, Emilio Bello Codesido, de Chile, bajo las estipulaciones del Tratado de 16 de julio de 1930, Washington, 1932).

⁸⁷ Ibidem, p.1324.

administrativo', el tribunal procede, en una primera parte, a examinar en qué medida dicho principio permite establecer la línea fronteriza; en base a una analítica consideración de las 'concesiones de tierras' (land grants) de los períodos coloniales y post-coloniales, el tribunal es capaz de trazar, con algunas lagunas, la línea del uti possidetis de 1821 desde un punto a ocho millas de la frontera salvadoreña hasta Cerro Barbasco⁸⁸. En cuanto al resto de la zona en disputa nos hallamos, nuevamente, enfrentados a las insuficiencias en la aplicación de este principio, pues la prueba no proporciona base suficiente para establecer la línea del uti possidetis de 1821. Encara así el tribunal, en una segunda parte, la labor del trazado definitivo, vinculado como estaba por el compromiso de arbitraje a regular definitivamente el conflicto, haciendo uso de los poderes discrecionales que posee por virtud de dicho compromiso. Al llevar a efecto dicha delimitación, pone todo el énfasis en los actos físicos de ocupación, sosteniendo que deben ser considerados al fijar la frontera:

"1) the facts of factual possession; 2) the question whether possession by one Party has been acquired in good faith, and without invading the right of the other Party; 3) the relation of territory actually occupied to that which is as yet unoccupied"⁸⁹.

Como consecuencia, el laudo tuvo en cuenta diversos actos de ejercicio de autoridad, el control administrativo provincial, el ejercicio tanto de la función

⁸⁸ Lo cual supone menos de la mitad de la zona en litigio, cfr. Ibidem, p.1351. Para el trazado de dicha línea, el tribunal tomó en consideración el control administrativo, la continua y no contestada manifestación de autoridad por parte de Guatemala (cfr. ibidem, pp,1328-1329-1331).

⁸⁹ Cfr. Ibidem, p.1352.

judicial como de la jurisdicción civil, y el régimen público de concesiones⁹⁰; lo cual supone, sin lugar a dudas, una acusada referencia a las efectividades, aunque, en este caso, por la vía de la equidad que trataremos más adelante.

■ No podemos acabar este apartado sin hacer una breve alusión a un conflicto entre dos Estados, cuyas divergencias fronterizas parecen ser eternas, Argentina y Chile. Sobre la base del uti possidetis iuris, estos dos países han reivindicado simultáneamente la soberanía sobre todo el continente americano, al sur del Río Negro y al este de los Andes; ante la imposibilidad de satisfacer sus pretensiones territoriales concurrentes, igualmente fundadas sobre este principio, Argentina y Chile decidieron 'congelar' sus reivindicaciones respectivas introduciendo en un Tratado de paz, amistad, comercio y navegación, Santiago 20 agosto 1855, una cláusula territorial, a través de su artículo 39⁹¹, que fijaba sus fronteras y que tuvo un posterior desarrollo con el Tratado de Límites de 1881. La descripción fronteriza que contiene este último ha dado lugar a divergencias entre las partes, lo que ha motivado, a su vez, que se hayan emitido cuatro laudos arbitrales con el objeto de interpretarlo. Uno de los últimos, el del asunto del Canal de Beagle⁹², supone la exclusión definitiva del uti possidetis iuris

⁹⁰ Cfr. Ibidem, pp.1328-1329 y 1330; pp.1344-1347 y 1349; y pp.1345-1349 y 1350, respectivamente.

⁹¹ Cfr. DUTHEIL DE LA ROCHÈRE, J., "L'Affaire du Canal de Beagle (sentence rendue par le Reine d'Angleterre le 22 avril 1977)", A.F.D.I., 1977, p.415.

⁹² Sentencia de 18 febrero 1977, cfr. I.L.M., 1978, vol.XVII, pp.632-679. Las dos sentencias anteriores son la de 20 noviembre 1902, dictada por el Rey de Inglaterra Eduardo VII (cfr. U.N.R.I.A.A., vol.IX, p.29 y ss.) y 9 diciembre 1966, emitida por la Reina de Inglaterra Isabel II (cfr. R.G.D.I.P., 1967, pp.257-261); la última es de 21 octubre 1994, decidida por un tribunal

en la delimitación de las fronteras entre ambos países, por el Tratado de 1881, debido en parte, según GRIEG, a la complejidad de la prueba relativa a los límites de las unidades administrativas españolas en la parte más al sur del continente⁹³.

El tribunal descarta, incluso, la pretensión argentina de la aplicación complementaria del uti possidetis al declarar que esta doctrina "does not have the status of a sort of 'ius cogens' of the whole Treaty"⁹⁴. Obligado a resolver exclusivamente en derecho, el tribunal afronta su labor de esclarecer las incertidumbres del Tratado de 1881, invocando los cánones tradicionales de interpretación de los tratados precisados en los artículos 31 y 32 del Convenio de Viena sobre derecho de los tratados, en base a la 'buena fe', al 'sentido natural y ordinario de los términos', y a la luz 'del objeto y fin del tratado'⁹⁵. Sin embargo, el interés que para nosotros guarda esta sentencia radica en el análisis que hace, en la segunda parte, a los 'materiales confirmatorios' -constitutivo de un auténtico obiter dicta-, y dentro de éstos, más concretamente, la referencia que hace a los 'actos de jurisdicción'.

En el litigio, que es un conflicto de fronteras, el tribunal ha querido considerar los actos de jurisdicción no como creadores de derechos de soberanía, sino, únicamente, como un aspecto de la práctica ulterior que puede corroborar la

arbitral compuesto en su totalidad por árbitros latinoamericanos (cfr. original mecanografiado).

⁹³ Vid. GREIG, D.W., "The Beagle Channel Arbitration", Australian Yearbook of International Law, 1976/77, p.374.

⁹⁴ Vid. I.L.M., 1978, vol.XVII, p.649.

⁹⁵ Cfr. Ibidem, p.646.

interpretación dada al tratado en la primera parte de la decisión. En este sentido, Chile sostuvo que sus actos de este tipo, relativos al grupo PNL, comenzaron en 1892 y acompañaron el incentivo de la colonización, el establecimiento de un sistema de arriendo de tierras y la provisión de varios servicios, tanto postal como otros públicos, así como el ejercicio general de jurisdicción civil y criminal. Efectivamente, los actos de jurisdicción alegados por Chile son aceptados por el tribunal en cuanto soportan ampliamente su interpretación⁹⁶; es decir, se han utilizado las 'efectividades' en cuanto técnica confirmatoria en la delimitación fronteriza y carente de toda autonomía.

La conclusión que se puede extraer de este rápido análisis de la jurisprudencia arbitral nos parece clara, y viene a predecir lo que años después consagraría el T.I.J. en el asunto de Burkina Faso/Mali: las efectividades no han constituido en realidad un título autónomo o separado para decidir sobre la delimitación territorial, sino, en general, para interpretar, aclarar, concretar o completar el uti possidetis iuris, a excepción del asunto de Guatemala y Honduras que reconduce este principio a los actos de posesión; lo cual no menoscaba, ni mucho menos su valor probatorio, sino que por el contrario, lo enfatiza.

⁹⁶ Cfr. Laudo, p.101, pa.166(b), en I.L.R., n°52, p.221.

C) LA DECISION EN EQUIDAD COMO RELACION DIALECTICA ENTRE 'UTI POSSIDETIS IURIS' Y EFECTIVIDADES.

La tradicional percepción del concepto de equidad en derecho internacional, íntimamente ligada a la idea de justicia, tiene su raíz en el pensamiento aristotélico, en el que la equidad es definida como el 'correctivo del derecho'⁹⁷. En este sentido, la regla de la equidad ha sido importante tanto en las instancias judiciales como en las más numerosas arbitrales relativas a la delimitación de fronteras; recurso que vendría justificado por la propia naturaleza de los conflictos fronterizos. Las principales funciones que puede cumplir en este campo, según el prof. BARDONNET, vienen referidas a la modificación de una frontera establecida por vía convencional, corregir las injusticias resultantes de la aplicación del principio del uti possidetis, y fundar el trazado de la línea divisoria en una región con un estatuto indeterminado⁹⁸.

Efectivamente, toda la historia del arbitraje en materia de fronteras

⁹⁷ Cfr. JANIS, M.W., "Equity in International Law", Encyclopedia of Public International Law, vol.7, R.Berhardt (ed), Amsterdam, 1984, p.74.

En el exhaustivo análisis que el prof. JUSTE RUIZ realiza sobre la equidad, éste advierte que "para examinar el alcance concreto de los procesos de aplicación equitativa de las reglas de derecho internacional, la doctrina suele recurrir a la tradicional distinción entre equidad 'infra legem', 'prater legem' y 'contra legem'. Esta distinción posee un valor sistemático pero carece en realidad de todo criterio de objetivación, por ello, en la práctica, es extremadamente difícil distinguir materialmente los diversos supuestos en que la equidad es calificada con arreglo a categorías formalistas, sobre todo en los casos en que dicha noción despliega una eficacia modificativa, correctiva o creativa en la delimitación de las fronteras terrestres" ("La equidad en derecho internacional público", Anuario del ILHADI, vol.9, p.99).

⁹⁸ Vid. BARDONNET, D., "Equité et frontières terrestres", en Mélanges offerts à Paul Reuter, Le droit international: unité et diversité, París, 1981, p.47.

terrestres afectando zonas donde la aplicación del principio del uti possidetis es incierta y llena de lagunas, como consecuencia de la ambigüedad de los textos coloniales, está en favor de la concesión al árbitro de poderes especiales que le permiten una cierta libertad en la elección de los criterios de delimitación. En particular, esta situación se presenta en algunos compromisos arbitrales en los que se ha pactado la aplicación del uti possidetis, y se prevé la hipótesis frecuente, como hemos visto en el apartado anterior, de que el árbitro no pueda precisar el límite según las disposiciones del antiguo derecho colonial. En este sentido se puede mencionar el compromiso arbitral de 15 febrero 1886, entre Colombia y Venezuela, que establece que el árbitro podrá fijar la línea del modo que crea más aproximado a los derechos existentes, cuando respecto de algún punto de ella los documentos presentados no arrojen toda la claridad deseada⁹⁹; el de 7 octubre 1894, entre Honduras y Nicaragua, que autoriza a fijar el límite 'equitativamente', a falta de pruebas al respecto¹⁰⁰; el tratado de 30 diciembre 1902, Perú y Bolivia, estipula que si el límite no está definido de manera clara el árbitro resolverá la cuestión equitativamente¹⁰¹; o, el artículo V del compromiso arbitral entre Honduras y Guatemala, 16 julio 1930, que autoriza al tribunal a modificar como le parezca conveniente la línea del uti possidetis de 1821, si hubiese intereses de una parte establecidos más allá de la frontera y que deban ser tenidos en

⁹⁹ Cfr. MARTENS, N.R.G., 2ª, XXIV, p.111.

¹⁰⁰ Cfr. Alegato de la República de Honduras, op.cit., pp.17-22.

¹⁰¹ Cfr. U.N.R.I.A.A., vol.XI, pp.139-140.

cuenta¹⁰². Todos ellos constituyen base suficiente para rechazar la afirmación que hace el juez Urrutia Holguin, en su opinión disidente en el asunto sobre la validez del Laudo del Rey de España, que "the arbitrations agreed to on the basis of uti possidetis iuris could only be on a strict basis of law and excluded decisions in equity"¹⁰³.

Un fallo basado en los principios de equidad deberá conformarse, esencialmente, al espíritu del derecho y buscar una fórmula legal como fundamento de justicia. En consecuencia, es la posesión de buena fe, derivada de los actos de ocupación en el territorio controvertido, la que procura un fundamento de justicia, conforme al espíritu del derecho, al decidir dentro de la equidad sobre los intereses establecidos por las partes más allá de la línea del uti possidetis¹⁰⁴. Se erigen así, en numerosos casos, las efectividades como el báculo en que se apoya el juez para decidir equitativamente las insuficiencias del uti possidetis, cuando éstas tienen valor probatorio suficiente. Podemos referirnos a los siguientes:

En el asunto entre Colombia y Venezuela, el árbitro atendió a la bona fide possessio de Venezuela, junto a referencias a una frontera natural, para delimitar un sector de la frontera en el que los títulos coloniales resultaban imprecisos, en clara alusión al poder especial que las partes le habían conferido¹⁰⁵.

¹⁰² Cfr. U.N.R.I.A.A., vol.II, p.1322.

¹⁰³ Vid. I.C.J. Reports, 1960, p.226.

¹⁰⁴ Cfr. BELLO CODESIDO, E., El arbitraje y la equidad, Santiago de Chile, 1939, p.44.

¹⁰⁵ Cfr. MARTENS, N.R.G., 2s, p.111.

Por el contrario, el Rey de España, que también tenía conferida esa facultad en el contencioso entre Nicaragua y Honduras, recurrió a ella para trazar sobre la base de mapas y demás documentación geográfica una frontera natural bien marcada, la del río Coco, al constatar que la regla del uti possidetis no podía ser aplicada¹⁰⁶. De igual manera, no se produjo referencia a los actos de jurisdicción como base de la decisión en equidad, en el contencioso de Bolivia y Perú. En el transcurso del procedimiento se hizo evidente la dificultad de aplicar el principio del uti possidetis que las partes habían determinado como derecho aplicable, lo que unido al hecho de que la zona se encontraba completamente inexplorada, llevó al árbitro a fundar su laudo totalmente sobre la equidad, trazando una línea nueva distinta a las presentadas por las partes, que divide por mitad la zona litigiosa¹⁰⁷. Esta sentencia ha sido criticada por numerosos juristas, tomando como eje central el hecho de haber recurrido a la equidad sin haber previamente utilizado las reglas de derecho aplicables según los términos del compromiso; y, más concretamente, no respetar la posesión de hecho alegada por Bolivia que, en ausencia de títulos ciertos que sirvan de base para fijar los derechos territoriales respectivos, se erige en título válido¹⁰⁸. No es extraño encontrar comentarios, como el de Weiss, afirmando que la equidad en que se inspira la sentencia es 'la equidad del

¹⁰⁶ Cfr. GROS ESPIELL, H., España y la solución... op.cit., pp.142-144.

¹⁰⁷ Cfr. U.N.R.I.A.A., vol.XI, pp.145-146.

¹⁰⁸ Cfr., entre otros, FIORE, P., "La sentence arbitrale du Président de la République argentine dans le conflit de limites entre la Bolivie et le Pérou", R.G.D.I.P., 1910, p.253; DIEZ DE MEDINA, E., El laudo argentino en el litigio peru-boliviano, La Paz, 1909, p.41; RENAULT, L., "Le différend entre la Bolivie et le Pérou et l'arbitrage international", R.G.D.I.P., 1909, p.370.

presidente Alcorta'¹⁰⁹.

Se tiene generalmente por capital, para delimitar la función de la equidad en su relación con el uti possidetis y las efectividades, la sentencia arbitral de 1933 en la controversia entre Guatemala y Honduras. Este asunto es el que mejor nos muestra toda la dificultad que hay para fijar una frontera entre dos Estados, y las insuficiencias de la base de determinación prevista. Como hemos visto en el apartado anterior, ante las discrepancias de las partes acerca de la aplicación del principio del uti possidetis, el árbitro se vió abocado a interpretar extensivamente el compromiso recurriendo así a la equidad para establecer una gran parte de la frontera, tomando en cuenta los intereses que las partes hubieran establecido más allá de la línea de dicho principio. De esta forma, al ajustar su fallo a la equidad, el tribunal toma en cuenta: 1) los hechos de posesión efectiva; 2) la cuestión de la posesión de buena fe de una parte, sin lesionar los derechos de la otra; y 3) la relación del derecho ocupado con el que aún no lo está; es decir, se basa en las efectividades, y lo hace de la siguiente manera dividiendo el área litigiosa en cuatro secciones:

1ª. Toma en consideración el ejercicio de autoridad administrativa por parte de Guatemala y la ausencia de oposición hondureña¹¹⁰.

2ª. El tribunal no considera suficientemente probada la manifestación de actividad estatal por ninguna de las partes; ante la ausencia de delimitación real recurre a

¹⁰⁹ Vid. WEISS, A., "L'Arbitrage de 1909...", op.cit., p.134.

¹¹⁰ Cfr. U.N.R.I.A.A., vol.II, pp.1325-1330 y pp.1350-1353.

bases de equidad y justicia, tomando en cuenta los desarrollos posteriores¹¹¹.

3º. Para esta región, el tribunal ha establecido que los dos Estados poseían ciertas porciones de territorio que, según la línea del uti possidetis, pertenecen al territorio de la otra parte. A falta de base suficiente para rectificar la frontera, ha aceptado en equidad la línea de posesión actual, teniendo en cuenta la prioridad de la ocupación¹¹².

4º. En cuanto al último sector, establece el trazado en atención al régimen de concesiones públicas, así como a los diversos actos de administración judicial y jurisdicción civil¹¹³.

El recurso a la equidad ha llevado al tribunal a una acusada referencia a las efectividades, motivada por la aceptación 'a priori' del criterio de la posesión de hecho sobre concepciones idealistas.

Hay ejemplos en que el tribunal arbitral ha sido autorizado, expresamente, para actuar ex aequo et bono al delimitar la frontera. Así lo ilustra el caso del Chaco, entre Bolivia y Paraguay. El Tratado de paz, amistad y fronteras de 21 julio 1938, determina en su artículo 2 que los árbitros actuarán en equidad, ex aequo et bono, y lo hace estableciendo una serie de cláusulas que suponen límites

¹¹¹ Concretamente los actos alegados por las partes que el tribunal rechaza, se refieren a fortificaciones, construcción de carreteras y ejercicio de jurisdicción eclesiástica (cfr. ibidem, pp.1330-1337 y pp.1355-1357).

¹¹² Cfr. Ibidem, pp.1337-1341 y pp.1358-1359.

¹¹³ Cfr. Ibidem, pp.1341-1351 y pp.1360-1364.

geográficos a la libertad arbitral¹¹⁴. El tribunal tuvo en cuenta los antecedentes acumulados por la Conferencia de Paz previa, así como las necesidades de las partes en relación a la seguridad mutua y a exigencias geográficas y económicas; apoyándose en estos datos, los árbitros rechazaron las alegaciones respectivas de cada parte basadas tanto en la aplicación del principio del uti possidetis iuris, por parte de Bolivia, como en la posesión de hecho, invocada por Paraguay¹¹⁵, determinando el trazado 'equitativo' de la frontera. Esta sentencia puede erigirse en claro ejemplo de cómo en conflictos de fronteras es particularmente difícil distinguir la aplicación del principio de equidad y las decisiones ex aequo et bono; según BERNSTEIN, en tales casos la distinción es meramente formal¹¹⁶.

Por último, en lo que se refiere al T.I.J., en el asunto de Burkina Faso/Mali, rechaza la posibilidad de decisión ex aequo et bono reconociendo como únicamente factible la equidad infra legem. Si bien adopta una postura cautelosa al respecto, en cuanto ha afirmado que en su virtud no puede, en modo alguno, derogarse la eficacia vinculante de otras reglas jurídicas existentes en materia de establecimiento de fronteras terrestres. En consecuencia, la equidad no puede contradecir las exigencias del principio del uti possidetis, considerado como una regla aplicable de derecho positivo, pero sí permite recurrir a la aplicación de criterios equitativos para determinar el trazado de la frontera litigiosa en los lugares

¹¹⁴ Texto del laudo y del tratado, cfr. A.J.I.L. 33.1939, pp.180-182.

¹¹⁵ Cfr. Derecho boliviano sobre el Chaco Boreal, Barcelona, 1927, p.13.

¹¹⁶ Vid. BERNSTEIN, I., Delimitation of International Boundaries, Tel Aviv, 1974, p.187.

en que la línea del mismo no pudiera ser establecida con claridad¹¹⁷. Esta misma postura ha sido mantenida nuevamente por el T.I.J. en el asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras, reconociendo y haciendo uso de la posibilidad de recurrir a la equidad infra legem en una remisión expresa al asunto de Burkina Faso/Mali¹¹⁸.

De los casos expuestos pueden derivarse dos conclusiones respecto a la equidad en este ámbito. Por un lado, su aplicación está vinculada a la autorización expresa de las partes, a través de los correspondientes compromisos. Y por otro, la experiencia muestra que la equidad ha cumplido en los distintos casos de delimitación fronteriza una función interpretativa, sustitutoria o derogatoria en razón de la eventual imprecisión, insuficiencia o injusticia que la aplicación del título jurídico supone. El recurso a la equidad, como dice el prof. JUSTE RUIZ, se ha legitimado en la práctica en virtud de su propia necesidad, de su carácter razonable y conveniente¹¹⁹; nos hallamos ante una operación subsidiaria que lleva aparejada, a su vez, la aplicación mayoritaria de las efectividades.

¹¹⁷ Cfr. I.C.J. Reports, 1986, p.633, pa.149.

¹¹⁸ Cfr. I.C.J. Reports, 1992, p.514, pa.262. Además del recurso implícito, en otras áreas, a principios equitativos para sufragar las imprecisiones de los títulos jurídicos, que hemos visto en un apartado anterior (vid. supra, nota.37).

¹¹⁹ Vid. JUSTE RUIZ, J., "La equidad en el ...", op.cit., p.112.

SECCION 2ª: PRECISION DEL 'UTI POSSIDETIS IURIS' EN AUSENCIA DE TITULO COLONIAL.

Siendo el uti possidetis iuris un principio delimitador basado en el establecimiento del statu quo colonial, de tal manera que un Estado tiene derecho a todas las tierras sobre las cuales se extendía la jurisdicción teórica de la provincia o entidad cuyos límites ha heredado, haya ocupado o no las tierras incluidas dentro de su distrito, su precisión vendrá determinada por el recurso a los títulos jurídicos; dentro de éstos, lugar probatorio de primer orden ocupan los títulos coloniales, es decir aquéllos derivados directamente de la Potencia colonizadora, como las cédulas reales, órdenes de Intendencia..., en cuanto constituyen 'fuente directa' en la descripción de los límites de las antiguas circunscripciones administrativas. Sin embargo, como hemos venido señalando, éstos no son siempre lo suficientemente precisos como para constituir título autónomo, e incluso, en ocasiones, es imposible su invocación; se plantea la necesidad de acudir a otros medios probatorios supletorios, como los títulos indirectos, repúblicanos, ejidales o eclesiásticos, o bien otras técnicas de prueba como la propia conducta de las partes o la cartografía, que pueden llegar a considerarse como auténtico título.

A) LOS TÍTULOS JURIDICOS NO EMANADOS DE LA POTENCIA COLONIZADORA
COMO MEDIO DE PRECISION DEL 'UTI POSSIDETIS IURIS'.

El término título, tomado en el sentido de título jurídico, designa todo hecho, acto o situación que es la causa y fundamento de un derecho¹²⁰. Es obvio que hablar de título -tal y como se desprende del análisis realizado en el capítulo I de este trabajo- denota tanto un derecho como el hecho jurídico en el que se basa el derecho; de ahí que concluyéramos que, el título es el antecedente de facto, del cual, el derecho es la consecuencia de iure¹²¹. Como hemos visto en un momento anterior, el T.I.J., se expresó en términos similares al referirse a la noción de título en el asunto de Burkina Faso/Mali: "The concept of title may also, and more generally, comprehend both any evidence which may establish the existence of a right, and the actual source of that right"¹²².

Hablar de título, en el contexto de controversias territoriales en las que está previsto que opere el uti possidetis iuris, supone el reenvío a cualquier medio de prueba susceptible de establecer la existencia, tanto del derecho como de su origen. A este respecto, el T.I.J. ha distinguido tres connotaciones de la palabra 'título'. En un primer sentido, el origen del derecho vendría dado por aplicación de la sucesión de Estados; en segundo lugar, en cuanto los Estados son herederos del

¹²⁰ Cfr. SHAW, M.N., "Territory in International Law", N.Y.B.I.L., 13.1982, p.61.

¹²¹ Vid. supra, pp.32-36, donde se ha analizado en detalle el concepto de título de soberanía territorial.

¹²² Cfr. I.C.J.Reports, 1986, p.564, pa.18.

territorio correspondiente a una determinada circunscripción administrativa, un 'título' vendrá facilitado, por ejemplo, por un decreto real que atribuya ciertas zonas a cada una de las subdivisiones; en un tercer sentido, relevante en derecho interno, los 'títulos' son la prueba de los derechos de los titulares a la propiedad de la tierra que ellos describen; en este último ámbito se deben incluir los 'títulos oficiales de terrenos comunes', que comportan la atribución de tierras a particulares o comunidades indígenas, los cuales, a juicio del T.I.J., son comparables a las 'efectividades coloniales'¹²³, según ya hemos referido anteriormente.

Para determinar la línea del uti possidetis iuris, el concepto de título que mejor se ajusta a la prueba es el que se corresponde con la segunda de las definiciones, esto es, todo instrumento legal que contenga una descripción de límites de las antiguas colonias. Sin embargo, no todos los títulos tienen la misma fuerza en cuanto la autoridad de la que emanan no es la misma; en este sentido es posible afirmar que existe una especie de jerarquía entre los títulos jurídicos llamados a establecer el uti possidetis iuris, cuyo criterio de graduación vendría dado por su origen. Esto supondría considerar, ante todo, los títulos coloniales - directos- que son aquellos documentos expedidos por el poder soberano, o por sus delegados legítimos, en los que se consigna, en la forma legal, el derecho de propiedad sobre un determinado inmueble¹²⁴, esto es, deslindan la jurisdicción a que quedan sometidos los inmuebles, e incluso, puede tratarse de un

¹²³ Cfr. I.C.J. Reports, 1992, pp.388-389, pa.45.

¹²⁴ Cfr. OROZCO, W.L., Legislación sobre terrenos baldíos, Tomo II, México, 1895, p.760.

nombramiento de una autoridad civil en el que se fijan los límites de su jurisdicción.

Pero la determinación del uti possidetis no excluye tomar en consideración otras fuentes, aunque sean de menor entidad, para suplir las deficiencias de los anteriores; en este sentido se pueden citar los 'título eclesiásticos', documentos que fijan jurisdicciones a un Obispado, Arzobispado, parroquia, convento... de la Iglesia Católica, y que debían o podían coincidir con los límites jurisdiccionales civiles¹²⁵. Igualmente pueden apreciarse otros títulos, que por contraposición denominamos 'indirectos', a través de los cuales una autoridad adjudica el dominio de tierras, ya sea a comunidades de indígenas, 'ejidos', ya a particulares, 'privados', pues, como dice el Tribunal

"In the absence of legislative instruments formally defining provincial boundaries, not only the grants to Indian communities but also land grants to private individuals afford some evidence which might indicate where the boundaries were thought to be or ought to be"¹²⁶.

Además, también pueden detentar la cualidad de prueba de la línea de 1821, junto a estas 'concesiones', los llamados 'títulos republicanos', es decir, las atribuciones de tierra posteriores a la independencia, período de la República Federal de América Central (1821-1839)¹²⁷, y particularmente las de los años inmediatamente posteriores en tanto que evidencian una situación establecida.

¹²⁵ Este aspecto que indicamos no sólo ha sido afirmado por la doctrina latinoamericana, a la que nos hemos referido en el capítulo I al abordar el uti possidetis como principio de delimitación de territorios, sino también la doctrina europea; vid. en este sentido, entre otros, BARDONNET, D., "Les frontières terrestres et la relativité de leur tracé", R. des C., n°153, 1976.V, p.55.

¹²⁶ Vid. I.C.J.Reports, 1992, p.394, pa.54.

¹²⁷ Cfr. ibidem, pp.54-55. pa.56.

Un breve repaso a la jurisprudencia nos pone en contacto con supuestos en los que el árbitro o juez ha paliado las insuficiencias de los títulos coloniales, invocados en primera instancia para verificar la línea del uti possidetis iuris, con el exhorto a esos otros títulos 'subsidiarios' que hemos mencionado.

El laudo del Rey de España, por ejemplo, tomó en consideración la jurisdicción eclesiástica del Obispado de Comayagua que se correspondía con la Gobernación de Honduras¹²⁸, como soporte en la delimitación fronteriza en la zona del Cabo de Gracias a Dios.

Las imprecisiones del uti possidetis con que se enfrentó el tribunal arbitral, en el asunto de Guatemala y Honduras, fueron subsanadas por el recurso tanto a la equidad, como - y a través de ésta- a las efectividades; entendiendo incluidas dentro de esta categoría (como haría posteriormente el T.I.J en el asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras) 'las concesiones de dominio público', pues a juicio de dicho tribunal, "considering the land grants made prior to independence as evidencing the extent of the recognized provincial jurisdiction, it appears that the line of 'uti possidetis' of 1821 may be deemed to be established", a lo que añade que dichas concesiones mencionadas "showing of judicial administration by the Honduran authorities in the Valley of Copan"¹²⁹.

Donde el problema de las interacciones entre las diversas categorías de títulos jurídicos cobra mayor auge es, sin duda, en el referido asunto de la

¹²⁸ Cfr. GROS ESPIELL, H., España y la solución... *op.cit.*, p.140.

¹²⁹ Vid. U.N.R.I.A.A., vol.II, pp.1349 y 1350.

controversia fronteriza terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras; en este caso, el Tribunal se vió enfrentado con un lluvia de títulos ejidales, republicanos, eclesiásticos e, incluso, privados que ambas partes presentaban en apoyo de sus respectivas reclamaciones sobre la base del uti possidetis iuris. A efectos de determinar el alcance probatorio de cada uno de ellos, el Tribunal profirió las significativas reflexiones que hemos detallado en páginas anteriores, junto a otras, también interesantes, como la que hace referencia a la distinción entre 'ejidos de reducción', otorgados a las comunidades indígenas nómadas para su establecimiento definitivo, y 'ejidos de composición', por los que éstas pagaban una suma de dinero, que planteaba El Salvador basándose en el artículo 26 del Tratado General de Paz¹³⁰, y que a juicio del Tribunal carece de interés práctico por lo que no la adopta¹³¹. Tomando como punto de referencia este enfoque previo, procede la Sala al estudio de estos títulos para cada uno de los sectores de la frontera terrestre, que no se toman en consideración ni en el primero ni en el último sector donde el Tribunal, como ya hemos visto, se apoyó en la conducta posterior de las partes como fundamento de su trazado, y también sabemos que en la controversia insular no dan suficiente juego.

En el primer sub-sector del sector segundo, la decisión de los jueces implicaba la valoración crítica del Título de Júpula de 1742, presentado por

¹³⁰ Cfr., en este sentido, la construcción que hace El Salvador sobre los ejidos, principal título probatorio de sus reclamaciones, en Memorial of the Republic of El Salvador, 1 junio 1988, capítulo 4; y la respuesta de Honduras, en Contre-memoire du Gouvernement de la Republique du Honduras, 10 febrero 1989, vol.I, pp.102-114. Resulta igualmente de interés, el importante estudio que sobre los 'ejidos' realiza el prof. NIETO, experto español en la materia, en su Pleading de 16 abril 1991 (C 4/CR 91/2), pp.38 y ss.

¹³¹ Cfr. I.C.J.Reports, 1992, pp.393-394, pa.52 y 53.

Honduras, y el de Las Palmas de 1829, alegado por El Salvador, y se inclinó a favor del título republicano en los siguientes términos:

"...the title of Dulce Nombre de la Palma is a piece of evidence which the Chamber is entitled to take into account, because the 1742 Jupula title is not capable of showing exactly the territorial expanse of the mountain of Cayaguanca...thus the title of Dulce Nombre de la Palma is of significance, in that it shows how the uti possidetis iuris position was understood at the time".¹³²

Aunque para el segundo sub-sector, prima un título colonial ejidal pues entiende que "it appertains to Honduras, having formed part of the 'mountain of Cayaguanca' attributed to the community of Ocotepeque in 1742"¹³³.

Pasando al tercer sector, en el primer sub-sector ante la imprecisión del título ejidal de Arcatao de 1724 que alegaba El Salvador, los jueces construyeron la línea del uti possidetis sobre la base de los títulos privados presentados por Honduras, San Juan El Chapulin de 1776, San Pablo de 1719, Concepción de Cuevas de 1719 y Hacienda Sazalapa de 1746¹³⁴. Sin embargo, en la restante zona que compone este sector no hay una inclinación clara del tribunal por unos títulos u otros, debido a las dificultades que ellos mismos conllevan para lograr la conciliación de sus descripciones; por ello, el Tribunal reconstruyó la línea del uti possidetis iuris, así lo afirma el juez ad hoc TORRES BERNALDEZ¹³⁵, partiendo en general de los títulos, tanto coloniales como republicanos, presentados por

¹³² Vid. ibidem, p.429, pa.112.

¹³³ Vid. ibidem, p.437, pa.125.

¹³⁴ cfr. p.445, pa.139 a 141.

¹³⁵ Vid. Opinión individual, ibidem, p.654, pa.48.

ambas partes¹³⁶.

Para su estudio, análisis y decisión, el sector de Naguaterique se dividió en cinco sub-sectores; de éstos, el trazado del primero se basó en el reconocimiento de las partes a un límite y en el último actuó la equidad 'infra legem'. Para el segundo, el Tribunal se apoyó, por un lado, en el Título de Torola de 1743 y en el de 1844 que contenía un certificado, extendido por un Juez de Gracias a Dios de 1804, de deslinde de tierras, presentados por El Salvador¹³⁷, por otro, estableció una presunción. Claramente se basó la decisión del Tribunal en el Título hondureño de Santa Ana de 1653, frente a la pretensión salvadoreña basada en la no ratificada Convención Cruz-Letona de 1884, en la tercera parte¹³⁸. Por último, el cuarto sub-sector se determinó sobre los Títulos ejidales de Arambala y Perquín de 1769 en que se basaba El Salvador¹³⁹, desechando de esta manera la tesis de Honduras.

En dos sub-sectores fue dividido el sector quinto; el primero de éstos se definió según los Títulos republicanos hondureños de Matasano de 1856 y de Dolores de 1879¹⁴⁰, mientras la otra parte del sector siguió fielmente el Título ejidal, salvadoreño, de Polorós de 1760¹⁴¹, lo que significó la desestimación para

¹³⁶ Cfr. ibidem, p.456, pa.155; p.469, pa.175.

¹³⁷ Cfr. ibidem, p.503, pa.242.

¹³⁸ Cfr. ibidem, pp.506-507, pa.249.

¹³⁹ Cfr. ibidem, p.510, pa.257.

¹⁴⁰ Cfr. ibidem, p.526, pa.282.

¹⁴¹ Cfr. ibidem, p.540, pa.301.

Honduras de sus títulos, tanto de Dolores como de San Antonio de Padua.

De este rápido y sucinto cotejo por sectores de la frontera terrestre, del complejo asunto de El Salvador-Honduras, se infiere una evidente conclusión, que resulta particularmente reseñable en cuanto punto de inflexión en la trayectoria de contenciosos delimitadores basados en el principio del uti possidetis iuris resueltos hasta la fecha: toda su fundamentación y alegación por las partes descansa en los llamados títulos 'indirectos', ya se trate de títulos ejidales o privados, ya sean títulos republicanos, pero, en cualquier caso, no derivados directamente del Soberano¹⁴²; lo cual nos lleva a replantear la efectividad de los títulos coloniales para resolver estas disputas.

B) IMPORTANCIA DE LA AQUIESCENCIA Y LA DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS EN ESTE AMBITO.

Ante una situación concreta de hecho o de derecho, respecto de la cual existen pretensiones concurrentes y contradictorias por parte de dos Estados distintos, el comportamiento de uno de ellos nunca es irrelevante para el otro, especialmente cuando el actuar de un estado impone al otro la obligación de obrar

¹⁴² Este dato ya había sido puesto de manifiesto previamente por JIMENEZ DE ARECHAGA, en cuanto 'sistema' a aplicar para conseguir una adecuada aplicación del uti possidetis iuris al caso; vid, Plaidoire de 19 abril 1991, p.33.

en consecuencia, si estima que afecta a un derecho propio.

El recurso al comportamiento de los Estados, en los contenciosos territoriales regidos por el uti possidetis iuris, implica determinar la existencia de una situación concreta de cierta complejidad, respecto de la cual debe apreciarse la conducta recíproca de los Estados involucrados respecto de los derechos y obligaciones que rigen dicha situación ¹⁴³. El elemento esencial aquí es la determinación de los efectos jurídicos que una conducta de hacer o no hacer produce sobre los derechos y obligaciones derivados del uti possidetis, y que van a traducirse, normalmente, en el nacimiento o pérdida de un derecho, debido a la exigencia de buena fe que rige las relaciones internacionales¹⁴⁴.

Es necesaria la concurrencia de varios factores para poder hablar de modificación de la situación jurídica existente, a saber¹⁴⁵:

- conocimiento de la conducta observada por un Estado, que puede producirse por diferentes medios - como la protesta, la notificación o el silencio a la modificación

¹⁴³ Cfr. GONZALEZ CAMPOS, J.D., SANCHEZ RODRIGUEZ, L.I., y ANDRES SAENZ DE SANTA MARIA, M.P., Curso de derecho internacional público, 5ª ed., Madrid, 1992, p.75.

¹⁴⁴ El prof. M.KOHEN, al analizar las relaciones entre la aquiescencia y el uti possidetis, se plantea si el primero puede modificar la situación resultante de la aplicación del segundo, concluye que "l'acquiescement à une situation de fait contraire à l'uti possidetis n'est simplement pas possible, du moment que la quintessence du principe est précisément l'impossibilité d'invoquer une situation de fait contraire au droit... accepter le contraire serait dénaturer le principe" ("L'uti possidetis revisite: l'arret du 11 septembre 1992 dans l'affaire El Salvador/Honduras", RGDIP, 1993, p.967). Sin embargo, pese a lo cierto de esta afirmación, se hace necesario precisar que habida cuenta de las deficiencias prácticas del uti possidetis iuris, son las partes quienes voluntariamente recurren a la aplicación de otras categorías jurídicas, tales como la aquiescencia o el estoppel, en detrimento de aquél, y de ello la jurisprudencia -como veremos- nos da buena muestra.

¹⁴⁵ Para un mayor desarrollo en el tema de la modificación y extinción de derechos por obra del comportamiento de los Estados, cfr. GONZALEZ CAMPOS, J.D y otros, Curso de... op.cit., pp.75-83.

del estado de cosas existente-; además, la doctrina ha sostenido la necesidad de que tanto las declaraciones como los actos imputados al Estado tengan un sentido claro e inequívoco, esto es, la conducta debe ser concluyente; y en ese aspecto no ha sido menos rigurosa la jurisprudencia internacional¹⁴⁶;

- la bona fide en el comportamiento de los Estados, esto es, la cesión de derechos territoriales obtenidos por el uti possidetis, como consecuencia del comportamiento recíproco de los Estados, se impone por una exigencia de buena fe a actos inequívocos de éstos;

- transcurso de un plazo razonable, atendidas las circunstancias de tal situación, como ha señalado el T.I.J. en el asunto del Templo de Preah Vihear¹⁴⁷, sin producirse la consiguiente reacción por una parte a los actos inequívocos de la otra, lo que origina la mencionada transferencia.

En este contexto la experiencia jurisprudencial nos enseña, que las situaciones territoriales escasamente definidas, e incluso ignoradas, en las circunscripciones y límites administrativos de las antiguas potencias coloniales ofrecen, como dice el prof. SANCHEZ RODRIGUEZ¹⁴⁸, un cauce para la utilización complementaria y subsidiaria del estoppel, en función de las

¹⁴⁶ Cfr., en cuanto a la doctrina, REY CARO E.J., "Las reservas de la República Argentina a la convención sobre derecho de los tratados. El 'estoppel' y la cláusula rebus sic stantibus", A.F.D.I., 1975, p.238; en lo que afecta a la jurisprudencia internacional, cfr., caso de los empréstitos serbios, C.P.I.J., serie A, nº 20-21, pp.38-39; asunto de las Pesquerías, I.C.J. Reports, 1951, p.27.

¹⁴⁷ Cfr. I.C.J. Reports, 1962, p.23.

¹⁴⁸ Vid. SANCHEZ RODRIGUEZ, L.I., "Uti possidetis: la ...", op.cit., p.147.

circunstancias especiales de cada caso concreto. Figura jurídica a la que debemos añadir otras que también sobresalen en este ámbito y con las que guarda estrecha relación, la aquiescencia y la doctrina de los actos propios, pues no en vano afirmó el T.I.J, en el asunto de Burkina Faso-Mali, al analizar los medios de prueba de la línea del uti possidetis iuris, que

"both the Parties have however resorted in other connections to arguments bearing upon acquiescence, estoppel or the conduct of the Parties"¹⁴⁹.

Aunque la aquiescencia, en el sentido aceptado por el diccionario de tácito acuerdo o consentimiento, se aplica a toda clase de reclamaciones, su centro de gravedad gira entorno a las disputas territoriales¹⁵⁰. Es esencialmente un concepto negativo que se usa para describir la inacción de un Estado que se enfrenta con una situación constitutiva de una amenaza o una infracción de sus derechos, y que adopta la forma de silencio o ausencia de protesta en circunstancias que exigen una reacción positiva significando una objeción¹⁵¹.

El argumento que Colombia presentó ante el Consejo Federal Suizo, árbitro en su contencioso de delimitación de fronteras en base al uti possidetis con Venezuela, descansa en la ausencia de protesta por parte de esta última ante dos hechos respecto de los cuales se esperaba su reacción por entender que quedaban

¹⁴⁹ Vid. I.C.J. Reports, 1986, p.576, pa.43.

¹⁵⁰ Aunque nosotros hagamos mención de los supuestos en que la aquiescencia es aceptada y produce un efecto modificativo o extintivo de derechos, se pueden citar igualmente casos en que las partes argumentan esta figura y el juez lo rechaza como prueba. Vid. entre otros, en asunto de Burkina Faso-Mali (cfr. I.C.J. Reports, 1986, p.597, pa.80.).

¹⁵¹ Cfr. MAC GIBBON, M.A., "The scope of acquiescence in International Law", B.Y.B.I.L., 1954, p.143.

afectados sus derechos; concretamente, la cesión por parte de Colombia a Brasil, en 1907, de parte del territorio litigioso, y la ocupación por Colombia, en 1900, de la cuenca del Amazonas y del Orinoco. Tales argumentos fueron apreciados por el tribunal arbitral en los siguientes términos, "l'absence de protestation est, en droit international, une des formes de l'acceptation ou de la reconnaissance de certains faits"¹⁵².

Particularmente interesante resulta el caso de Guatemala y Honduras, como ilustrativo de una ocasión en la que una protesta podría haber sido útilmente realizada, y ejemplificativo del resultado de ausencia de tal protesta¹⁵³. Efectivamente, como vimos en su momento, el tribunal arbitral enfrentado a una delimitación fronteriza en base al uti possidetis, establece su propio concepto de este principio fundamentado en la idea de 'control administrativo', ante la divergencia al respecto de las partes. El tribunal sostuvo, que en la búsqueda de la prueba de control administrativo en el período crucial, tenía libertad para investigar la voluntad real, en ausencia de leyes precisas, en la conducta que indicaba 'aquiescencia' real en las manifestaciones de autoridad administrativa¹⁵⁴. En esta situación, observó el tribunal que, efectivamente, "the continued and unopposed assertion of administrative authority by either of the colonial entities, under claim of right, which is not shown to be an act of usurpation because of conflict with a clear and definite expression of the royal will,

¹⁵² Cfr. U.N.R.I.A.A., vol.I, p.250-251.

¹⁵³ Cfr. MAC GIBBON, M.A., "The scope of acquiescence...", op.cit., pp.157-158.

¹⁵⁴ Cfr. U.N.R.I.A.A., vol.II, p.1324.

is entitled to weight"¹⁵⁵. De esta forma, como hemos visto en un apartado anterior, obtuvieron valor probatorio en ciertas zonas, los actos de autoridad ejercitados por Guatemala frente a los que era esperable la protesta y oposición por parte de Honduras, en cuanto afectaban sus derechos, pero "does not appear that such protest was made or that opposing action was taken by Honduras"¹⁵⁶; esa aquiescencia confirmó el título derivado de las efectividades guatemaltecas.

Pero donde, sin duda alguna, ha tenido mayor peso y trascendencia el argumento de la aquiescencia afectando derechos derivados del principio del uti possidetis iuris, ha sido en el asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras¹⁵⁷, donde el reconocimiento explícito y, sobre todo, la aquiescencia de una de las Partes a las tesis o comportamiento del otro aparecen como determinantes, tanto para el trazado de una parte de la frontera, como para el establecimiento de la soberanía sobre las islas. Efectivamente, el argumento de la aquiescencia, por un lado, deroga el título inicial del uti possidetis, en el primer sub-sector del sector primero, en cuanto "this situation was susceptible of modification by acquiescence", entendiendo la Sala que la conducta de Honduras de 1881 a 1972 "may be regarded as amounting to such acquiescence in a boundary corresponding..."¹⁵⁸; este aspecto de la

¹⁵⁵ Vid. Ibidem, p.1324.

¹⁵⁶ Cfr. Ibidem, p.1328.

¹⁵⁷ De hecho, la posibilidad de modificar la situación derivada del principio del uti possidetis iuris, a través del comportamiento tácito de los Estados, fue ya indicada por el prof. GONZALEZ CAMPOS en su pleading de 14 mayo 1991 (C 4/CR 91/23, p.52) emitido en el proceso verbal de este asunto.

¹⁵⁸ Vid. I.C.J. Reports, 1992, p.408, pa.80.

sentencia es especialmente interesante si tenemos en cuenta que Honduras había alegado importantes efectividades en este sector, que la Sala considera desprovistas de valor frente a su clara actitud de aquiescencia a la posición jurídica de la otra parte, lo cual nos lleva a afirmar el efecto decisivo de ésta en detrimento del comportamiento efectivo sobre el terreno. Por otro, confirma dicho título en el último sector, en el que no se había producido ninguna reivindicación salvadoreña al límite fijado por ambas partes en las negociaciones que celebraron en 1880, y que Honduras alegaba como prueba del límite de 1821; en opinión del Tribunal "corroborative weight may be attached to the conduct of the Parties in negotiations in the 19th century"¹⁵⁹.

Asimismo, esta sentencia resulta ilustrativa, como en el caso anterior, del efecto que conlleva la ausencia de protesta frente a actos de jurisdicción efectiva realizados por la otra parte, cuando dichos actos se constituyen como título probatorio en ausencia de título colonial. Efectivamente, en la isla de Meanguera, de la que la Meanguerita es una dependencia, el Tribunal consideró "the conduct of Honduras vis-à-vis earlier effectivities reveals an admission, recognition, acquiescence or other form of tacit consent to the situation"¹⁶⁰, y como consecuencia "El Salvador made be regarded as sovereign over the island, if there remained any doubt, its position in respect of Meanguera is made definitive by the acquiescence of Honduras in its exercise of sovereignty in the island"¹⁶¹.

¹⁵⁹ Cfr. Ibidem, p.550, pa.317, respecto de la conducta de Honduras que se especifica en la p.548, pa.312.

¹⁶⁰ Vid. Ibidem, p.577, pa.364.

¹⁶¹ Vid. Ibidem, p.579, pa.367.

Frente a tales concluyentes ejemplos de la práctica, en relación al valor decisivo que puede ostentar la aquiescencia de una de las Partes frente a la actividad de la contraria, no faltan supuestos en los que tal ausencia de protesta no ha jugado ningún papel; el asunto de la Laguna del Desierto¹⁶² es buena muestra de ello.

La doctrina de los actos propios constituye un aforismo que significa que nadie puede ir válidamente contra sus propios actos¹⁶³, venire contra factum proprium que decían los romanos; la aplicación de esta regla presupone siempre una situación procesal. En el derecho inglés una idea semejante ha encontrado consagración en una institución de perfiles muy acusados y de gran interés, la llamada doctrina del estoppel; esta regla opera para impedir a una parte negar ante un tribunal la verdad de una declaración de hecho realizada previamente a otra parte, por medio de la cual esta otra ha actuado en su detrimento o la parte que

¹⁶² En este caso, Chile alegaba como apoyo a su pretensión la falta de protesta de Argentina ante los actos de autoridad que alegaba haber desplegado sobre el territorio en disputa. Frente a tal argumento, el Tribunal arbitral entendió que,

"en vista de esas características de los actos que Chile afirma habría cumplido en el sector, no es razonable extraer consecuencias determinantes de la falta de protesta del Gobierno argentino" (vid. Original mecanografiado, p.110, pa.169).

¹⁶³ Cfr. DIEZ-PICAZO PONCE DE LEON, L., La doctrina de los propios actos, Barcelona, 1963, p.223. Según este autor, los precedentes se sientan en el derecho romano, y la primera aplicación, en nuestro ordenamiento, la encontramos en la sentencia del T.S. de 28 mayo 1864; la idea de 'inadmisibilidad de venir contra los propios actos' ha sido sucesivamente cualificada por el T.S. desde 'doctrina', 'doctrina legal'..., hasta establecerla como 'principio general del derecho' en la sentencia de 14 abril 1921 (cfr. ibidem, pp.103-108).

hace la declaración se ha asegurado algún beneficio¹⁶⁴. Ambas instituciones han sufrido evoluciones independientes amoldándose cada una a la idiosincrasia del país y a la realidad social en que han sido aplicadas, de tal forma que aunque existan divergencias, pueden ser un útil complemento¹⁶⁵. Su aplicación presupone el siguiente silogismo:

- una situación creada por una actitud de una parte (actitud primaria);
- una conducta seguida por la otra parte y basada directamente en aquella primera actitud (actitud secundaria);
- una imposibilidad por parte del que adoptó aquella actitud primaria de alegar contra la misma o manifestarse en sentido contrario¹⁶⁶.

La exigencia de coherencia del comportamiento es una derivación del principio general de buena fe, y del postulado de la fuerza vinculatoria de ciertos actos unilaterales. Su característica más importante, tanto en la expresión del venire contra factum como en la versión anglosajona del 'estoppel', se centra en constituir una traba de orden procesal como es, según dice el prof. DIEZ-PICAZO, "la imposibilidad de hacer valer, como factor decisivo de un litigio, una alegación, bien sea de carácter sustantivo -formular una acción o una excepción- o bien de carácter procesal -recurrir habiendo consentido la sentencia...-"¹⁶⁷.

¹⁶⁴ Cfr. BOWETT, M.A., "Estoppel before International Tribunals and its relation to acquiescence", B.Y.B.I.L., 1957, P.176.

¹⁶⁵ Cfr. DIEZ-PICAZO PONCE DE LEON, L. La doctrina... *op.cit.*, pp.60-64.

¹⁶⁶ Cfr. PECOURT GARCIA, E., "El principio del 'estoppel' en derecho internacional público", R.E.D.I., 1962, p.103.

¹⁶⁷ Vid. DIEZ-PICAZO PONCE DE LEON, L., La doctrina de ... *op.cit.*, p.223.

El reconocimiento jurisprudencial, en el ordenamiento internacional, de la figura del 'estoppel' se produjo a través del asunto de la delimitación marítima en el Golfo de Maine¹⁶⁸, aunque su precedente debemos localizarlo en el asunto sobre el laudo del Rey de España de 1906, entre Honduras y Nicaragua. En este último, el T.I.J., sin pronunciarse sobre el argumento del Honduras fundado sobre el estoppel, consideró que a Nicaragua no le era admisible, en razón de su comportamiento, formular objeciones de nulidad contra la sentencia arbitral basada en la aplicación del principio del uti possidetis¹⁶⁹. Se puede considerar, con ciertos autores¹⁷⁰ que esta decisión constituye un ejemplo de 'forclusión', aunque el Tribunal no haya utilizado el término, resultante para un Estado de sus actos repetidos de reconocimiento y de sus comportamientos.

Igualmente hizo alusión a esta cuestión la sentencia del T.I.J., en el asunto del Templo de Preah Vihear, si bien lo hace a título subsidiario, declarando que 'en todo estado de causa Tailandia no podrá pretender que no había aceptado el mapa, en razón precisamente de los comportamientos que llevan a pensar que lo había aceptado'¹⁷¹.

Aunque el Tribunal no ha invocado expresis verbis el 'estoppel', en el asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima entre El Salvador y

¹⁶⁸ Cfr. I.C.J. Reports, 1984, p.305, pa.130.

¹⁶⁹ Cfr. I.C.J. Reports, 1960, p.209.

¹⁷⁰ Cfr. entre otros, MARTIN, A., L'estoppel en droit international, París, 1979, p.119; DOMINICÉ, Ch., "A propos du principe de l'estoppel en droit des gens", en Recueil d'études de droit international en Hommage a Paul Guggenheim, Ginebra, 1968, p.333.

¹⁷¹ Cfr. I.C.J. Reports, 1962, p.32.

Honduras, podemos entender implícita su aplicación en los sectores de Tepangüisir y Goascarán. En efecto, en cuanto al primer sector, la aquiescencia de Honduras a la demarcación realizada por ambos Estados en 1881, que hemos visto en páginas anteriores, lleva al Tribunal a reconocer como válido dicho trazado¹⁷², impidiendo a aquélla cualquier tipo de reclamación posterior -como pretendía en 1972- al quedar vinculada por su conducta anterior. Conclusión similar se extrajo en el último sector, siendo aquí la conducta de El Salvador, posterior a las negociaciones de 1880, la que indujo a la Sala a considerar la aquiescencia de éste al límite fijado¹⁷³, haciendo inviable la posibilidad de reclamación posterior salvadoreña a un trazado distinto. Nos encontraríamos ante un supuesto de 'estoppel por aquiescencia', motivado por el silencio de una de las partes que le vincula para no poder afirmar posteriormente su derecho frente a la otra que actúa de buena fe. Cabe concluir de lo expuesto que, en esta decisión, el comportamiento de las partes incluye tanto la figura de la aquiescencia como la del 'estoppel'.

Como acabamos de ver, la experiencia jurisprudencial nos enseña que la ecuación 'comportamiento, aquiescencia y estoppel', resulta relevante y operativa a los efectos de una delimitación sustentada sobre el principio del uti possidetis iuris, en circunscripciones y límites administrativos de antiguas potencias coloniales escasamente definidos.

¹⁷² Cfr. I.C.J. Reports, 1992, p.408, pa.80.

¹⁷³ Cfr. ibidem, p.551, pa.317.

C) LAS EFECTIVIDADES COMO MEDIO DE PRUEBA SUPLETORIO.

Afrontabamos al comienzo de este capítulo, el problema de la determinación del papel de las 'efectividades' en la delimitación del territorio en los supuestos de aplicación del uti possidetis iuris, relativizando la afirmación del juez Max Huber en el sentido de que, aunque importantes, no son fuente probatoria autónoma en este ámbito y no pueden prevalecer sobre aquél. Sin embargo, hemos venido insistiendo acerca de las dificultades que conlleva una delimitación fronteriza basada en este principio, como consecuencia de la imprecisión, los silencios o los errores de la legislación de la época colonial sobre la que se fundamenta la determinación del mismo; circunstancia que avoca al recurso complementario a otras categorías jurídicas. Hemos visto el papel jugado por la equidad para subsanar las insuficiencias en este ámbito, la aplicación de otros títulos jurídicos en defecto de los coloniales y la influencia decisiva que puede operar el comportamiento de los Estados involucrados; todo ello sin olvidar, la operatividad del ejercicio de jurisdicción por las partes, en los territorios en conflicto.

El hilo conductor de esta parte de nuestro estudio ha venido marcado, precisamente, por demostrar cómo las deficiencias que de hecho presenta la aplicación del uti possidetis iuris han sido paliadas a través, principalmente y en primera instancia, por las efectividades. Hemos tenido ocasión de comprobar, a través del correspondiente análisis jurisprudencial, la fidelidad con que se repite su función tanto confirmativa como interpretativa e integradora del título jurídico, de

que hablaba el T.I.J., que procede, la primera en consonancia con éste, la segunda cuando es insuficiente o incierto¹⁷⁴; baste recordar, en este sentido, los asuntos de la Isla de Aves, Colombia-Venezuela, Honduras-Nicaragua, Costa Rica-Panamá, o el propio Burkina Faso-Mali del T.I.J.¹⁷⁵.

A todo ello debemos añadir ahora, que las efectividades han actuado igualmente en su faceta sustitutoria; la cual resulta procedente "in the event that they does not co-exist with any legal title, it must invariably be taken into consideration"¹⁷⁶. Si bien, esta circunstancia, menos frecuente que la anterior, ha tenido lugar en contadas ocasiones.

Es posible entender que las efectividades han constituido un título autónomo en el asunto de Guatemala-Honduras, por los importantes poderes que las partes otorgaron al tribunal arbitral en el compromiso¹⁷⁷. Esta decisión, a la que nos hemos referido en distintos momentos resaltando su importancia, en lo que al estudio de las relaciones dialécticas entre uti possidetis iuris y efectividades se refiere, contempla una acusada referencia a los actos de jurisdicción ejercitados por las partes. El tribunal, no sólo llega a la identificación del uti possidetis con el control administrativo, sino que, excepto en una pequeña sección -ocho millas desde la frontera salvadoreña hasta Cerro Barbasco- en que hay una

¹⁷⁴ Cfr. I.C.J. Reports, 1986, pp.586-587, pa.63.

¹⁷⁵ Dado que estos casos han sido profusamente abordados en la sección primera de este capítulo, estimamos innecesaria su reiteración, remitiéndonos a las observaciones en su momento expresadas.

¹⁷⁶ Vid. I.C.J. Reports, 1986, p.587, pa.63.

¹⁷⁷ Cfr. SANCHEZ RODRIGUEZ, L.I., "Problemas de fronteras...", op.cit., p.200.

complementación entre título jurídico y efectividad, el resto del trazado fronterizo se fundamenta en el hecho de la posesión. Concretamente, en tres de las cuatro secciones en que divide el tribunal la zona litigiosa, la línea de delimitación transcurre en base: por un lado, al ejercicio de autoridad de Guatemala unido a la aquiescencia de Honduras, por otro, a la posesión actual de cada una de las partes, y, en la última sección, en atención a efectividades concretas como el régimen de concesiones públicas, los actos de administración judicial y el ejercicio de jurisdicción civil guatemaltecas¹⁷⁸.

La decisión que mejor testimonia el alcance autónomo que pueden representar las efectividades en defecto de título colonial, al ejercer su función supletoria, es, sin duda, el asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras; si bien, únicamente en la parte relativa a la controversia insular, pues en los diferentes sectores de la frontera terrestre (como ya hemos indicado), en los que la Sala se enfrenta igualmente a la alegación de efectividades por ambas Partes, ésta llega sistemáticamente a la conclusión de que no están suficientemente probadas como para poder modificar el trazado de la frontera derivada del título jurídico¹⁷⁹. Efectivamente, vinculado el Tribunal por el principio del uti possidetis iuris en cuanto derecho aplicable en todo el

¹⁷⁸ Remitimos, igualmente, al análisis pormenorizado de esta decisión, tanto en el apartado B) -jurisprudencia arbitral-, como en el apartado C) -equidad-, de la primera sección de este capítulo. La referencia de las distintas manifestaciones de soberanía, retenidas como título por el tribunal, que hemos mencionado se encuentra en U.N.R.I.A.A., vol.II, pp.1328-1329 y 1330; pp.1344-1347 y 1349; y pp.1345-1349 y 1350, respectivamente.

¹⁷⁹ Cfr. supra, nota.34.

contencioso -terrestre, insular y marítimo- acordado por las partes¹⁸⁰, estimó su inviabilidad en este ámbito por las ambigüedades, lagunas y contradicciones de los títulos presentados como prueba por las partes, y la necesaria consideración, en su defecto, de los actos de autoridad llevados a cabo no sólo en la época colonial, sino que también resultaban pertinentes las efectividades post-coloniales, si a ellas se unía la correspondiente aquiescencia de la otra parte¹⁸¹. Teniendo en cuenta la exclusión de la categoría de terra nullius para tales territorios¹⁸², no eran, pues, susceptibles de ocupación; por ello el Tribunal establece el paralelismo con el asunto de Minquiers y Ecrehous, para, siguiendo el precedente sentado por esta decisión, determinar la prueba de la posesión en cuanto efectividad reveladora del título jurídico¹⁸³.

En lo que afecta a la isla de El Tigre, Honduras ha ejercido la posesión y el control efectivo de la misma durante más de cien años, como lo prueban diferentes hechos presentados al Tribunal, tales como su cesión y venta a Estados Unidos, o delimitaciones precedentes, en las que participó El Salvador, que establecían como punto de partida esta isla de la 'costa hondureña'. El conjunto de estos eventos, y la no contradicción con título colonial alguno, lleva a concluir a la Sala

¹⁸⁰ Cfr. supra, nota 31.

¹⁸¹ Cfr. ibidem, p.563, pa.341; p.566, pa.347.

¹⁸² Una de las consecuencias más importantes que lleva aparejada la doctrina del uti possidetis, es la exclusión de la categoría de 'terra nullius' para los territorios regidos por dicho principio. Este aforismo fue preconizado por la 'doctrina Monroe', y proclamado jurisprudencialmente por el Consejo Federal Suizo, en su laudo de 1922, resolviendo el conflicto limítrofe entre Colombia y Venezuela (vid. U.N.R.I.A.A., vol.I, pp.228-229).

¹⁸³ Cfr. ibidem, pp.564-566, pa.343, 344 y 347.

el título hondureño sobre la citada isla corroborado por la propia conducta, paralela a esta posesión, de El Salvador¹⁸⁴.

No difiere mucho la conclusión del Tribunal respecto a la isla de Meanguera, de la que Meanguerita es una dependencia. La presencia de El Salvador en dichas islas está suficientemente probada, a juicio de la Sala, desde 1854, intensificándose en años posteriores a través de sucesivos actos de administración, como son, el nombramiento de jueces de paz, órdenes y nombramientos militares, liberación de licencias, celebración de elecciones, fiscalidad, censos y registros de nacimientos y defunciones, procedimientos civiles y penales, catastro y diversos actos de disposición de bienes inmuebles, realización de obras públicas, y organización de servicio postal, servicio de sanidad pública y educación. La aquiescencia de Honduras a este continuo y efectivo ejercicio de funciones estatales, es reveladora del tácito consentimiento a la soberanía salvadoreña; la suma de ambas circunstancias ha creado un derecho territorial en favor de El Salvador¹⁸⁵.

Aun con riesgo de caer en una crítica desmesurada, creemos que el Tribunal ha escamoteado, 'lisa y llanamente', la aplicación del uti possidetis iuris a la controversia insular, sin tener en cuenta realmente las pruebas y argumentos que de forma abundante le presentaron ambas Partes¹⁸⁶. En este sentido

¹⁸⁴ Cfr. ibidem, pp.568, 569 y 570, pa.351, 352 y 355.

¹⁸⁵ Cfr. ibidem, pp.571, pa.357; pp.572 a 574, pa.359; y pp.576-577, pa.363.

¹⁸⁶ Cfr. a título ejemplificativo, los pleadings tanto del prof.SANCHEZ RODRIGUEZ, por Honduras (28 mayo 1991, C 4/CR 91/32), como del prof.LIMA, por parte de El Salvador (C 4/CR 91/33).

compartimos el sentimiento disconforme y profundamente crítico del juez 'ad hoc' TORRES BERNALDEZ, en su opinión individual, al afirmar, refiriéndose en general a esta parte de la controversia, que "its concrete application of the principle to the islands is particularly poor, notwithstanding the evidence submitted on colonial effectivités"¹⁸⁷; y más concretamente, respecto de la atribución de la soberanía de Meanguera y Meanguerita en favor de El Salvador, sostiene que "in this second island in dispute, there are neither 'State effectivités' of El Salvador nor any evidence of acquiescence or consent by conduct on the part of Honduras", de tal manera que el único derecho aplicable era el del uti possidetis iuris¹⁸⁸, principio que, precisamente, ha cedido en esta controversia insular en favor del ejercicio efectivo de jurisdicción, que se constituye así como título probatorio autónomo del mismo, en ausencia de título jurídico.

D) VALOR DE LA CARTOGRAFIA EN LAS CONTROVERSIAS DE DELIMITACIÓN DEL TERRITORIO BASADAS EN EL TITULO JURIDICO.

Los mapas tienen, por su naturaleza, un especial significado en conflictos fronterizos, distinto de otras formas de prueba documental, en cuanto constituyen

¹⁸⁷ Vid. ibidem, p.676, pa.95.

¹⁸⁸ Vid. ibidem, p.709, pa.169. Según el juez Torres Bernaldez, la aplicación estricta del uti possidetis iuris en las islas, hubiera determinado su adjudicación a Honduras.

una aproximación gráfica de la alineación territorial en un área determinada. Sin embargo, es preciso indicar aquí que el uso de los mapas como prueba en la resolución de disputas fronterizas ha sido siempre justamente restringida, ocupando, en opinión de SANDIFER, una parte colateral mas que principal en la regla de la mejor prueba¹⁸⁹. Esta afirmación viene avalada por la propia jurisprudencia internacional, en los siguientes términos:

"Whether in frontier delimitations or in international territorial conflicts, maps merely constitute information which varies in accuracy from case to case; of themselves, and by virtue solely of their existence, they cannot constitute a territorial title, that is, a document endowed by international law with intrinsic legal force for the purpose of establishing territorial rights. Of course, in some cases maps acquire such legal force, but where this is so the legal force does not arise solely from their intrinsic merits: it is because such maps fall into the category of physical expressions of the will of the State or States concerned...

... maps can still have no greater legal value than that of corroborative evidence endorsing a conclusion at which a court has arrived by other means unconnected with the maps... The only value they possess is as evidence of an auxiliary or confirmatory kind, and this also means that they cannot given the character of a rebuttable or 'iuris tantum' presumption such as to effect a reversal of the onus of proof".¹⁹⁰

No es posible, según se deduce de la doctrina del T.I.J., elevar la cartografía a la categoría de título autónomo, pero nada obsta a su utilización complementaria

¹⁸⁹ Vid. SANDIFER, D.V., Evidence before International Tribunals, Nueva York, 1975, p.234. Además de la obra de Sandifer, existen otros trabajos que abordan con detalle el valor probatorio de los mapas en los conflictos territoriales, vid., entre otros, HYDE, Ch.Ch., "Maps as evidence in International Disputes", A.J.I.L., 1933, pp.311-316; PEPIN, E., "Valeur des cartes géographiques comme preuve du tracé des frontières", Affaires étrangères, 1938, pp.216-221; MURTY, T.S., "Boundaries and Maps", Indian Journal of International Law, 1964, pp.367-388; WEISSBERG, G., "Maps as evidence in International Boundary Disputes: a reappraisal", A.J.I.L., 1963, pp.781-803.

¹⁹⁰ Asunto de Burkina Faso-Mali, vid. I.C.J. Reports, 1986, p.582, pa.53 y p.583, pa.56.

para iluminar los documentos y establecer la información allí donde éstos son deficientes. Ahora bien, el valor probatorio de los mapas es directamente proporcional a sus cualidades técnicas y exactitud topográfica, e inversamente a la autoridad legítima de que emane. En este sentido, es obligada la referencia al asunto del Canal de Beagle en cuanto el tribunal arbitral sentó una serie de principios aplicables de evaluación, que constituyen una clásica declaración respecto del valor probatorio de los mapas en toda clase de cuestiones fronterizas¹⁹¹:

- Donde un Estado realiza un mapa mostrando cierto territorio como perteneciente a otro Estado, éste tiene mayor valor probatorio que si el mapa emana de este último.
- Una consistente o generalizada emisión de mapas por parte de un Estado fundamentando su demanda, demostraría creer en la validez de la reclamación, mientras la otra parte mostrara duda o ausencia de seria convicción.
- Los mapas independientes producidos en terceros Estados pueden ser significativos para manifestar la existencia o ausencia de un entendimiento general respecto la naturaleza de la solución territorial particular.

Junto a la exposición detallada de estas reglas, el tribunal toma en consideración dos factores que pueden ser relevantes a la hora de apreciar los mapas. Por un lado, relativiza la distinción, en base a su fuente de producción, entre mapas de producción privada y mapas oficiales o cuasi-oficiales, afirmando que podrían usarse de la misma manera tanto mapas oficialmente acordados como

¹⁹¹ Cfr. Laudo, pp.85 y 86, pa.142, en I.L.R., n°52, pp.205-206.

cartografía privada para revelar las creencias de las partes involucradas en tiempo relevante, o como manifestación de una creencia general; si bien, estimamos imperioso notar que esta aseveración del tribunal arbitral debe ser matizada en cuanto, como veremos más adelante, la jurisprudencia ha conferido realmente mayor entidad a los mapas de publicación oficial, por su origen estatal. Por otra parte, el tribunal enfatiza el factor cronológico, en cuanto que el principio que denota la importancia relativa atribuida a un mapa actúa, en gran medida, dependiendo de la fecha de su publicación y tomando en consideración las circunstancias del tiempo; esto significa que los mapas producidos antes de la aparición de la controversia deberán tener mayor peso probatorio que los que aparezcan después.

Desde que en 1798, la Comisión arbitral establecida bajo el artículo V del Tratado Jay de 1794 para resolver el asunto de la identidad del Río St.Croix, entre Gran Bretaña y EE.UU., adoptara el trazado descrito en el mapa de Mitchell de 1755¹⁹², se han ido sucediendo diversas decisiones internacionales que han tenido que afrontar la valoración probatoria de mapas de fronteras presentados por las partes, experimentando un considerable cambio en este sentido.

En lo que afecta a la jurisprudencia arbitral, su análisis demuestra cómo los mapas sirven frecuentemente como prueba tanto de un viejo título colonial - resultando que allí donde la doctrina del uti possidetis prevalece los mapas originarios de las primeras autoridades coloniales pueden decidir el caso-, como de

¹⁹² Cfr. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.I, p.12.

la posesión de un territorio¹⁹³.

El asunto de Colombia y Venezuela fue decidido satisfactoriamente sobre la base del uti possidetis iuris, probado a través de documentos coloniales cuya delimitación corroboraban una serie de mapas tanto oficiales -el del Gobernador de Cumará de 1749-, como de carácter privado -los de D.José Antonio Pereyó, D.Luis Surville, D.Antonio de la Torre y D.Francisco Requena de 1796, y los más modernos de Codazzi y Ponce de León¹⁹⁴. El arbitraje del Rey de España, en la disputa fronteriza entre Honduras y Nicaragua, trajo también a colación en base al artículo V del Tratado Gámez-Bonilla¹⁹⁵ no sólo la prueba de la cartografía -compuesta por mapas españoles y extrajeros-, sino que valoró igualmente la opinión de ciertos geógrafos de reconocido prestigio, por su gran conformidad con la línea jurídica del uti possidetis¹⁹⁶. El conflicto fronterizo entre Costa Rica y Panamá fue resuelto con un trazado que tomaba en consideración los actos de

¹⁹³ Aunque en este apartado vayamos a referirnos a los arbitrajes que hacen relación con el principio del uti possidetis, no debemos olvidar la importancia adquirida por la cartografía en otros arbitrajes de delimitación, como es el caso del Canal de Beagle, ya mencionado, que acepta como material confirmatorio de su decisión la prueba cartográfica presentada por Chile; el arbitraje de 1966, también entre Argentina y Chile, donde la prueba de un mapa fue apreciada como material relevante para ser analizado a la luz de otros factores tales como los actos de soberanía (cfr. U.N.R.I.A.A., vol.XVI, p.10); o el asunto del Rann de Kutch, en que el tribunal sostuvo que los mapas referidos para constituir actos de autoridad, podían ser considerados como una renuncia a potenciales derechos de soberanía (cfr. I.L.M., 1968, pp.671,672 y 684). Tampoco podemos ignorar que en algunos arbitrajes de delimitación de fronteras la cartografía ha sido rechazada por el tribunal al considerarla irrelevante; tal ocurrió en el asunto de la Laguna del Desierto de 1994 en el que el tribunal arbitral no admitió como prueba los mapas presentados tanto por Argentina como por Chile (cfr. Original mecanografiado, p.110, pa.167).

¹⁹⁴ Cfr. GROS ESPIELL, H., España y la solución... op.cit., pp.132-133.

¹⁹⁵ Cfr. Alegato de Honduras...op.cit., p.21.

¹⁹⁶ Cfr. GROS ESPIELL, H., España y la solución... op.cit., pp.142-143 y 144.

ocupación y el ejercicio de autoridad en su descripción, y que se correspondía con la línea descrita en el mapa elaborado por la Comisión de Ingenieros, por lo que éste fue totalmente adoptado por el árbitro como prueba para su decisión¹⁹⁷.

Es interesante hacer notar que en relación a latentes discrepancias en mapas y otros documentos probatorios, algunos Estados han adoptado la práctica de dar poderes especiales al árbitro para ordenar informes cartográficos adicionales si las imprecisiones y ambigüedades lo hicieran necesario. Tal es el caso del artículo VII del Tratado de 1901 entre Bolivia y Perú¹⁹⁸, que impone al árbitro la obligación de consultar a la Sociedad Real de Geografía de Londres o al Instituto Geodésico Internacional de Berlín para solventar las cuestiones técnicas, pero ignorado por el Presidente Alcorta en su laudo. Más ilustrativo de este supuesto resulta el asunto de Guatemala y Honduras; la abundante documentación remitida por las partes respecto de la línea del uti possidetis de 1821, comprendía numerosos mapas que presentaban discrepancias y deficiencias a juicio del tribunal¹⁹⁹, por lo que, ejerciendo la autoridad conferida en el artículo XIII del Tratado de 1930²⁰⁰, ordenó proceder a la fotografía y cartografía del territorio litigioso a una Comisión de ingenieros. El resultado del informe aéreo efectuado, mapas y fotografías aéreas, consta como apéndice a la opinión del tribunal como representación gráfica de su trazado.

¹⁹⁷ Cfr. U.N.R.I.A.A., vol.XI, p.546.

¹⁹⁸ Para ver el contenido de este artículo, cfr. FIORE, P., "La sentence...", op.cit., p.244.

¹⁹⁹ Cfr. U.N.R.I.A.A., vol.I, p.1353.

²⁰⁰ Contenido del artículo, cfr. ibidem, p.1312.

También en instancia judicial se ha abordado la tarea de examinar mapas referentes a fronteras y estimar su valor. La primera ocasión tuvo lugar en el asunto de Jaworzina, donde el T.P.J.I. expresó la relatividad de su valor al indicar que "the maps and their tables of explanatory signs cannot be regarded as conclusive proof independently of the text of the treaties and decisions"²⁰¹; rechazándolos como prueba, posteriormente, a propósito de la delimitación de la frontera serbo-albanesa en la región del Monasterio de Saint-Naoum, por su carácter inconclusivo al carecer de firma²⁰². Es interesante reseñar la evolución que el T.I.J. ha experimentado en este ámbito; así, el asunto de Soberanía sobre ciertas parcelas fronterizas es ilustrativo de una situación en la que un mapa de una Comisión de Delimitación, incorporado por referencia en un tratado, prevalece sobre el artículo escrito²⁰³; y en el Templo de Preah Vihear, un mapa sin firmar, en derogación de una provisión de un tratado, reemplaza al texto como instrumento de interpretación del tratado²⁰⁴.

No tan concluyente ha sido el valor otorgado a la cartografía por el T.I.J., en los conflictos de delimitación regidos por el principio del uti possidetis iuris. Ya aludíamos, al principio de este apartado, al asunto de Burkina Faso y Malí en cuanto la Sala abordaba, de manera genérica, la relación entre mapas y títulos jurídicos a favor de éstos, y otorgando un mero valor auxiliar y confirmatorio a

²⁰¹ Vid. C.P.I.J., serie B, nº 8, 1923, p.33.

²⁰² Cfr. C.P.I.J., serie B, nº 9, 1924, p.21.

²⁰³ Cfr. I.C.J. Reports, 1959, p.209.

²⁰⁴ Cfr. I.C.J. Reports, 1962, p.21.

aquéllos. Sin embargo, al encarar el examen de los numerosos mapas invocados por las partes como prueba de sus respectivas reivindicaciones, el Tribunal observa que "the cartographic documentation has assumed unaccustomed proportions in this case, to the point of creating a dual paradox. On the one hand, the Chamber is faced with a considerable body of maps, sketches and drawings for a region which is nevertheless described as being partly unknown; and, on the other hand, no indisputable frontier line is discernible from this abundance of cartographic materials"²⁰⁵. Lo que le lleva a excluir toda la prueba cartográfica por carecer de autoridad en sí misma, a excepción de un mapa compilado en 1958-1960 por el IGN -organismo neutral en este contencioso-, respecto del cual, la Sala considera que, únicamente, en defecto o ausencia de otro tipo de prueba, 'su valor probatorio será decisivo'²⁰⁶.

Tomando como referencia la construcción elaborada en el asunto de Burkina Faso-Mali respecto al valor legal de la prueba cartográfica, posteriormente, el T.I.J. en el asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras, reincide en el carácter exclusivamente 'corroborativo' que los mapas pueden tener. Únicamente en el último sector del trazado fronterizo, procede la Sala a calibrar la prueba que pueden aportar los mapas presentados, omitiendo toda referencia a los mismos en el resto de la controversia tanto terrestre como insular, aunque ello hubiera supuesto un reforzamiento de su decisión, e "it

²⁰⁵ Vid. I.C.J. Reports, 1986, p.584, pa.58.

²⁰⁶ Cfr. ibidem, p.586, pa.62.

attaches only the value of corroborative evidence to a number of maps of the 19th century, to which Honduras in particular has drawn attention, showing the political limits of the two States, including the present disputed sector of the land boundary”²⁰⁷. Actúan tales mapas ‘post-coloniales’, a efectos de confirmar la delimitación fronteriza que, como hemos visto en apartados anteriores, el tribunal fija en atención a la conducta posterior de las partes, la de las negociaciones de 1880, que corrobora la línea del uti possidetis iuris, pero sin ostentar el carácter de prueba concluyente.

Puede concluirse, que el examen de la práctica jurisprudencial apoya la afirmación que hacíamos al principio de que la cartografía constituye un aspecto colateral del procedimiento decisorio en la delimitación de fronteras, en cuanto actúa siempre como prueba confirmatoria de un título superior y nunca dotada de autonomía.

El hecho sustancial que de esta exposición efectuada se infiere, se podría expresar en términos escuetos: la invocación del uti possidetis iuris no siempre determina la solución de las demandas conflictuales, toda vez que hay diferencias entre las fronteras establecidas ‘en papel’, de aquéllas que la ocupación y la autoridad jurisdiccional han constituido.

²⁰⁷ Vid. I.C.J. Reports, 1992, p.550, pa.316

CAPITULO V: LA PRUEBA DE LAS EFECTIVIDADES EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE JUSTICIA.

Enfrentados a una controversia territorial entre dos Estados, ya sea de atribución o de delimitación (pues, como hemos visto en el capítulo I, tanto las cuestiones de fronteras como las de adquisición son partes de la cuestión mayor de soberanía territorial¹), la pregunta que se constituye en piedra angular podría esbozarse en términos similares a los que se planteara Sir L.Heald, en su intervención oral en el asunto de Minquiers y Ecrehous:

¿qué hace un Estado cuando es llamado a probar o hacer bueno el título sobre el que sustenta una reclamación de soberanía sobre un territorio determinado? El propio Asesor del Reino Unido parece apuntar la respuesta,

"you bring forward positive evidence of your sovereignty, by showing how, and in what way, you have exercised it, and still do exercise it. You may show how your title originated... You would show that you not only had a title, but that you exercised it -and were exercising it now- at very moment. That is how the existence of sovereignty is proved"².

Podemos extraer de esta afirmación una clara conclusión, el ejercicio de actos de soberanía juega la doble regla de ser, al mismo tiempo, constitutivo de un título y prueba del mismo.

¹ Este tema ha sido ampliamente abordado en las secciones 1ª y 2ª del capítulo I, por eso no vamos a entrar en más detalle remitiéndonos a lo allí expuesto.

² Vid. Intervención oral de Sir L.Heald, 17 septiembre 1953, Asunto de Minquiers y Ecrehous, I.C.J.Pleadings, vol.II, p.33.

La razón de ser justificativa de nuestro planteamiento es obvia y completamente asentada en el moderno procedimiento judicial: las sentencias sólo pueden estar basadas sobre alegaciones totalmente probadas a través de prueba satisfactoria producida ante los tribunales y admitida por las partes³. Transpolado a la práctica, esto se traduce en la necesidad que tiene todo Estado que sustenta una reclamación territorial de apoyar ésta sobre una prueba suficiente para hacer prevalecer su título frente a una demanda adversa, pues el juez internacional no puede retener un hecho que no esté debidamente establecido; lo cual supone la necesidad esencial que incumbe a los dos Estados litigantes de soportar la carga de la prueba de sus respectivos títulos, pues no existe a priori ninguna circunstancia que excluya la obligación para una parte de probar los hechos que alega, sobre la cual el juez decidirá finalmente cual considera más 'consolidado'. De ahí la importancia decisiva que para éstos reviste el hecho de aportar una prueba profusamente acreditada.

Si nos situamos, como es nuestro objetivo, en el plano de las efectividades en cuanto constituyen (como hemos tenido ocasión de afirmar en reiteradas ocasiones) el principal título de soberanía territorial, corresponderá ahora examinar, no sólo cuáles han sido los instrumentos probatorios de que han hecho uso los Estados para probar los 'hechos' que ellos mismos alegan en sus controversias territoriales -teniendo presente, a priori, que el tipo de prueba que es utilizado casi

³ Este principio procesal viene recogido en SANDIFER, D.V., Evidence before International Tribunals, Nueva York, 1975, p.105.

Todas las cuestiones referentes a la teoría general de la prueba han sido ya abordadas en el capítulo I, sección 2ª, por tanto no vamos a abordarlo de nuevo.

de forma exclusiva por las Partes (salvo un caso excepcional al que nos referiremos) es la documental o escrita; sino que deberemos abordar también, cómo han sido éstos valorados por el juez internacional, es decir, analizar el peso específico otorgado por éste a cada una de las pruebas de ejercicio de autoridad estatal. Y ello, aún a riesgo de pecar en ser demasiado *descriptivos*, pues se trata fundamentalmente de una labor de investigación y exposición de todos los *elementos probatorios* presentados por los Estados y de sus resultados, tal y como los ha decidido el juez. Ese último cometido apuntado es, quizá, la cuestión más interesante en cuanto no es posible formular una regla general que dé en todos los casos superioridad a uno u otro; las circunstancias de hecho son tan variadas que los jueces o árbitros se abstienen de adoptar siempre una posición rígida. Además, las pruebas que presentan los Estados en numerosas ocasiones gozan de inconsistencia, suponiendo auténticas alegaciones sin fundamento; pues, ciertamente, la cantidad no siempre va unida a la calidad, de ahí que no todas las pruebas logran crear en el juez la convicción jurídica alegada.

Esta labor la vamos a abordar partiendo de una doble división. Por un lado, analizaremos separadamente los supuestos de la práctica judicial y arbitral, *afrontando primeramente la jurisprudencia judicial*, objeto específico de este capítulo, para pasar en el siguiente, con solución de continuidad en cuanto el objeto es análogo, tratándose, pues, de una distinción meramente formal, al análisis de los arbitrajes internacionales existentes en la materia. Por otro, veremos diferenciada la problemática de la prueba en los conflictos de adquisición y en los de delimitación territorial, siguiendo en este sentido la apreciación que hace el prof.

BARDONNET, "à la place respective qui doit revenir, sur le terrain de la preuve, aux titres juridiques et à l'exercice effectif de la souveraineté dans chaque catégorie de conflits"⁴; de esta manera, entendemos que en este contexto la separación resulta adecuada por las importantes consecuencias que pueden derivar para nuestro estudio.

SECCION 1ª: LA PRUEBA EN LOS CONFLICTOS DE ADQUISICION DEL TERRITORIO.

En las controversias relativas a la adquisición de un territorio es, sin duda, donde el ejercicio continuo y pacífico de funciones estatales obtiene su pleno significado, en cuanto en ellas la soberanía tiene esencialmente un aspecto positivo y para fundarse necesita ser afirmada activamente mediante 'usos' positivos⁵. Por este motivo, es en estos contenciosos donde la importancia decisiva radica en las pruebas relacionadas directamente con la posesión efectiva del territorio, si bien condicionadas por las circunstancias particulares de cada territorio y cada caso.

Observando los asuntos que se han presentado tanto al T.P.J.I., como a su sucesor, el T.I.J., parece ciertamente que son varios aquellos en los que el Tribunal

⁴ Vid. BARDONNET, D., "Les frontières terrestres et la relativité de leur tracé", R. des C., nº153, 1976-V, p.49.

⁵ Siguiendo la expresión utilizada por el prof. REUTER, en su intervención oral de 26 marzo 1962, en el asunto del Templo de Preah Vihear: "utilités" (vid. I.C.J. Pleadings, vol.II, p.545).

ha sido llamado a pronunciarse sobre la atribución de soberanía territorial entre dos reclamaciones concurrentes, teniendo que decidir cuál de las dos es la más sólida en base a la prueba presentada:

■ El asunto del Estatuto jurídico de Groenlandia Oriental, en el que Dinamarca y Noruega presentaban reclamaciones de soberanía sobre parte del territorio de Groenlandia (entre los paralelos 71°30' - 75°40' N) que Noruega había ocupado, publicando la anexión de dicho territorio en un decreto de 10 julio 1931⁶. Dinamarca mantenía que la ocupación noruega carecía de validez y alegaba para ello, que en julio de 1931 ella poseía un título válido de soberanía sobre dicho territorio, no en base a un acto específico de ocupación, sino a su continuo y pacífico ejercicio de autoridad estatal junto a toda una serie de actos jurídicos relevantes. En su decisión de 5 abril 1933, analiza las pruebas alegadas por ambas partes en apoyo de sus respectivas posiciones, relativizándolas en consideración al carácter inaccesible del territorio por su condición polar, y concluyendo que Dinamarca satisface los dos requisitos para la creación de un derecho de soberanía -intención y acción- derivado de la continua manifestación de autoridad estatal⁷.

⁶ Posteriormente, el 12 julio 1932, mientras se desarrollaba el procedimiento citado ante el TPJI, Noruega publica un segundo decreto anexionando otro sector de la costa oriental de Groenlandia (entre los paralelos 63°40' - 60°30' N); como consecuencia se introduce una segunda instancia, calificada de Estatuto jurídico de Groenlandia Sud-Oriental, que descansa sobre los mismos factores jurídicos que la anterior. Una vez emitida la sentencia en el primer asunto, Noruega anuló este decreto y abandonó las reivindicaciones fundadas en él, por lo que no se llegó a ninguna sentencia del Tribunal. Para un análisis de este segundo asunto, vid. BECKETT, W.E., "Les questions de intérêts général au point de vue juridique dans la jurisprudence de C.I.J. (juillet 1932-juillet 1934)", R. des C., n°50, 1934-IV, p.231 y ss).

⁷ Cfr. C.P.I.J., serie A/B, n°53, 1933, pp.22-123.

■ En el asunto de los Minquiers y Ecrehous, el T.I.J. fue requerido para determinar la soberanía sobre las islas y rocas que componían estos dos grupos del Canal de La Mancha. Tanto Inglaterra como Francia (partes de la controversia) basaron sus alegaciones en un título antiguo y original, confirmado por la efectiva posesión y el continuo ejercicio de soberanía en la medida que el carácter de dichas islas y rocas se prestaba a tal ejercicio, coincidencia de alegaciones que resulta ser un dato curioso. Claramente se trata de un asunto en que el Tribunal se enfrenta a dos pretensiones con igual fundamento, por lo que, este caso confirma mejor que ningún otro la importancia decisiva que ocupa la prueba, pues aquél que alegue los actos más convincentes en apoyo de sus títulos, vinculados al ejercicio de soberanía será considerado soberano de los grupos de islotes, y éste fue, según la opinión del Tribunal⁸, el Reino Unido.

■ Reino Unido, Argentina y Chile solaparon sus reclamaciones sobre ciertas tierras e islas de la Antártida⁹, basándose, Argentina en aspectos geológicos, geográficos y climatológicos; Chile en un decreto presidencial de noviembre de 1940 que declara dichas tierras como suyas; y el Reino Unido en el descubrimiento acompañado del continuo y pacífico ejercicio de soberanía. Sin embargo, pese a las respectivas demandas presentadas ante el T.I.J., unilateralmente el 4 mayo 1955

⁸ Sentencia de 17 noviembre 1953, I.C.J.Reports, 1953, pp.47-109.

⁹ La cuestión de las reclamaciones territoriales sobre la Antártida puede consultarse, entre otros, en ARCHDALE, H.E., "Claims to the Antarctic", Yearbook of World Affairs, 1958, pp.242-263; BERG, A., "Antarctic cases (U.K. v. Argentina; U.K. v. Chile)", en BERNHARDT, R (ed), Encyclopaedia of Public International Law, vol.2, Amsterdam, 1981, pp.17-18.

por este último contra Argentina y Chile, el Tribunal desestimó el asunto por falta de competencia para conocer del mismo pues su jurisdicción no había sido aceptada por estos últimos¹⁰.

■ Un asunto en el que no se aborda de forma exclusiva -sino de forma incidental- la cuestión de la atribución de soberanía, es el asunto de Derecho de paso por territorio indio. En su sentencia de 12 abril 1960, el Tribunal reconoció que la soberanía sobre los enclaves podría resultar del ejercicio efectivo de la plena y exclusiva autoridad administrativa sobre los territorios en cuestión; respecto de tales territorios, Portugal sólo tenía en principio un título de alcance limitado derivado del Tratado de Poona de 1779, por el que había recibido, no la transferencia de la soberanía sobre los enclaves, sino una competencia territorial limitada¹¹. Lo más relevante de esta sentencia es que el Tribunal ha admitido la transformación de una limitada competencia territorial en auténtica soberanía, a través del ejercicio de efectivos actos de autoridad administrativa, unidos a la aquiescencia de Gran Bretaña, lo cual supone el asentimiento a la consolidación por títulos históricos por aplicación del principio quieta non movere.

■ El dictamen consultivo del Sahara Occidental, de 16 octubre 1975, en opinión del propio T.I.J., "do not relate to a territorial dispute, in the proper sense

¹⁰ Vid. Ordenes de 16 marzo 1956, I.C.J.Reports, 1956, pp.12-14 y pp.15-17, respectivamente para Argentina y Chile.

¹¹ Vid. I.C.J.Reports, 1960, pp.5-144, y en particular, pp.37-39.

of the term, between the interested States"¹²; no estamos, sin embargo, totalmente de acuerdo con esta afirmación sintiéndonos más próximos a la posición adoptada en este sentido por el Gobierno español, posición que precisamente el Tribunal en el párrafo citado rechazó.

La formulación dada a las cuestiones sobre las cuales se solicita el dictamen consultivo, teniendo en cuenta cuál es su objeto, son cuestiones relativas a la atribución de la soberanía territorial sobre el Sahara Occidental, existiendo, según el Gobierno español, una estrecha analogía entre aquéllas y las que tradicionalmente se someten a jueces y árbitros internacionales en controversias relativas a adquisición territorial; analogía que deriva en auténtica identidad, más patente si se compara este asunto con los precedentes del Estatuto jurídico de Groenlandia Oriental y de Minquiers y Ecrehous¹³. Efectivamente, si tenemos presente el contenido exacto de las cuestiones planteadas al Tribunal (1ª. Si el Sahara occidental era terra nullius al tiempo de la colonización española; 2ª. Determinar cuáles eran los 'vínculos' ('links') jurídicos entre este territorio y Marruecos, por un lado, y Mauritania, por otro, su respuesta entraña realmente la solución de un problema territorial de atribución de soberanía sobre el Sahara Occidental, tal y como había sido suscitado ante la Asamblea General por estos dos

¹² Vid. I.C.J.Reports, 1975, p.28, pa.43.

¹³ Vid. Dictamen consultivo del Sahara Occidental, I.C.J.Pleadings, vol.I, p.179, pa.285 y 287. A pesar de establecer esta analogía, el Gobierno español estructura las diferencias de este asunto con los litigios territoriales (número de partes, territorio no autónomo, multiplicidad de cuestiones, situación cronológica...) para concluir que la vía del dictamen consultivo no es la adecuada para decidir una cuestión de soberanía territorial, postura firmemente mantenida por España en todo el procedimiento (vid.ibidem, pp.182-186, pa.292 a pa.300).

Estados; pues establecer que existían vínculos de soberanía, como alegaban ambos Estados en base a las pruebas de ejercicio continuo y pacífico de autoridad estatal, en favor de uno u otro, hubiera supuesto su reconocimiento como soberano de dicho territorio, es decir, la atribución de su soberanía territorial. Además, todo el proceso de cotejo de las pruebas presentadas por parte del T.I.J. gira en torno a la determinación de si éstas establecen o no vínculos de soberanía, por lo que implícitamente está resolviendo una cuestión de reclamación territorial; si bien, el resultado final de este examen fue la inconsistencia de ambas pretensiones¹⁴.

En todos los casos mencionados, como hemos tenido ocasión de ver, una o ambas partes han alegado como título en que fundamentan su reclamación el ejercicio continuo y pacífico de funciones estatales, presentando la correspondiente prueba de dichas efectividades en apoyo de su pretensión, variando el volumen de la mismas según las circunstancias de cada caso. De esta manera, corresponde ahora sin mayor dilación examinar precisamente en qué ha consistido la prueba de las efectividades alegadas en esos asuntos, pues aunque no todos ellos sean *estrictamente conflictos de adquisición sí tienen esa referencia, de ahí que sea obligado su análisis para hacer de éste un estudio más completo. Para ello vamos a tomar como punto de referencia la estructuración que hicieramos en la sección 2ª, del capítulo III, al analizar los diversos actos que hacen incidencia en la posesión efectiva del territorio y que van a ser probados.*

¹⁴ La prueba presentada, si bien no es suficientemente indicativa de soberanía, según el Tribunal, si lo es de la existencia de otros lazos legales respecto de los cuales, sin embargo, no especifica en qué consisten (vid. ibidem, p.68, pa.162).

A) ACTOS DE CARACTER ESTATAL.

Cuando nos referimos a actos de carácter estatal¹⁵ lo hacemos entendiendo por tales los que son realizados por órganos del Estado cualquiera que sea su categoría o condición, siempre y cuando actúen en nombre y por cuenta de aquél. De tal manera que cualquier actividad llevada a cabo por un 'agente estatal' en el ejercicio de sus funciones se entenderá como acto del Estado del que dicho funcionario es nacional, derivándose así las consecuencias jurídicas que le sean pertinentes para aquél.

Es así como parecen haberlo entendido los Estados que han planteado reclamaciones sobre la base de este tipo de actos que, por otra parte, jerárquicamente, constituyen una prueba de primer orden; y han alegado, de entre las muchas que realizan estos órganos habitualmente, las siguientes actuaciones que constituyen el contenido material de la prueba de su posesión efectiva.

1. Ejercicio de jurisdicción penal.

Entre los hechos que son citados como manifestaciones del ejercicio de la función judicial relativa a delitos y crímenes penales, los Estados han alegado:

¹⁵ El examen de la teoría general de los actos de Estado como elemento constitutivo de la posesión efectiva fue ampliamente abordado en el apartado A), de la sección 2ª, del capítulo III; todas las observaciones allí expuestas las entendemos aplicadas en este capítulo.

■ Procesamiento de un tal George Romeril, en 1826, ante la Corte Real de Jersey. Este ciudadano de Jersey había atentado, en la isla de Ecrehous, con una pistola u otra arma de fuego similar contra la vida de un cierto John McGrass, por lo que, arrestado por el Condestable de St.Martin fue juzgado por el mencionado tribunal¹⁶. Lo que se cita como prueba la competencia jurisdiccional de los tribunales de Jersey (Reino Unido) respecto de los crímenes cometidos en la isla de Ecrehous.

■ Varios documentos indican el derecho exclusivo de Portugal a reprimir crímenes en el interior de la Pragana de Nagar-Aveli, regido militarmente por éste, de la misma manera que ostenta, en consecuencia, el derecho de otorgar perdones y amnistías a los habitantes de ese territorio:

- Un 'bando' del Gobernador de Damão (José María de Castro e Almeida) al Vicerrey, 28 noviembre 1814, que obliga a los 'patels', los 'naiques' y los colonos a entregar al gobierno de Damão a aquellos individuos que se supiera eran ladrones. Este procedimiento fue aprobado por el Vicerrey, en una carta donde establece además las medidas necesarias a adoptar en relación al ajusticiamiento de esos ladrones.

- Una carta del Vicerrey (Francisco Antonio da Veiga Cabral) al Gobernador de Damão, 10 enero 1807, versa sobre la posibilidad de perdonar a un 'patel' que había sido condenado.

- Una carta del Gobernador de Damão (Cetano Gomes da Costa) al Vicerrey,

¹⁶ Vid. Memoria de Reino Unido, 3 marzo 1952, Asunto de Minquiers y Ecrehous, I.C.J.Pleadings, vol.I, p.79; estos procedimientos ante la Corte Real de Jersey se reiteraron, posteriormente, en 1881, 1883, 1891, 1913 y 1921.

3 mayo 1806, se refiere a la concesión de perdones en los casos de crímenes de desertión¹⁷.

2. Ejercicio de jurisdicción civil.

De forma similar a la anterior actividad se despliega la prueba referente a la jurisdicción en este caso civil, citando estos hechos:

■ Reino Unido presenta varias referencias en este sentido: - El Registro de Sesiones Judiciales de 1309, que registra los procedimientos judiciales de las sesiones de los Jueces Ingleses de Jersey, recoge cómo en ese año el Abad de Val-Richer (cuya Abadía había recibido en 1203 la concesión de las islas de Ecrehous) fue citado ante dichos Jueces por el procedimiento de Quo Warranto para responder de la concesión de una 'advowson' o 'advocatio' (derechos de propiedad que conceden un título al propietario para presentar un oficio eclesiástico) y de ciertas donaciones de su Priorato en esa isla, en cuanto se consideraba jurisdicción inglesa¹⁸. Posteriormente, en 1323 y 1331, fue llamado nuevamente para otros tres procedimientos similares.

- Varios registros de procedimientos del s.XVII recogen cómo el Tribunal Feudal de Noirmont, en Jersey, resolvió los alegatos presentados en relación a los derechos sobre los naufragios acaecidos en las costas de la isla de Minquiers.

¹⁷ Vid. Réplica de Portugal, julio 1958, Asunto del derecho de paso por territorio indio, I.C.J.Pleadings, vol.II, p.457.

¹⁸ Vid. Memoria de Reino Unido, ..., op.cit., p.76.

Concretamente se mencionan tres entradas en el Registro de los años 1615, 1616 y 1617, cada una de las cuales refiere la pérdida de tales derechos feudales por parte de los señores de los feudos en favor de la Corona¹⁹.

- La competencia para conocer de este tipo de asuntos fue transferida, a finales del siglo XVII, a la Corte Real de Jersey quien el 6 agosto 1692 conoció del asunto que enfrentaba a Deborah Dumaresq como tutora de su hijo, el Señor del Condado de Samarès, por un lado, y el Fiscal-General de su Majestad y el Síndico de Tributos de su Majestad, por otro, a causa de los derechos a los naufragios en Minquiers; decidiendo la Corte en favor de la Corona. Esta sentencia fue sometida a apelación ante el Consejo Privado del Rey de Inglaterra, que la desestimó el 6 noviembre de ese mismo año²⁰. Esta doble demanda, presentada ante tribunales ingleses prueba la jurisdicción de los mismos sobre las cuestiones de orden civil que tuvieran lugar, en este caso, en la isla de Minquiers.

3. Actos de administración central y local.

La amplitud del propio término 'administración,' con la multiplicidad de labores que su ejercicio entraña, motiva que incluyamos en este apartado la prueba de aquellas actividades directamente relacionados con el propio cargo, que son parte del quehacer habitual de su funcionamiento, excluyendo conscientemente

¹⁹ Vid. ibidem, p.88.

²⁰ Vid. ibidem, pp.44.45 y 89. Estos hechos aparecen citados en la correspondiente Acta de la Corte Real de Jersey y la Orden que decidió la apelación, recogidos en los anexos A 21 y A 22.

otras que si bien son actos de administración, su idiosincrasia las hace valederas de un examen aparte. Esa generalidad que remarcábamos deriva en un abundamiento de pruebas de actividades de este tipo:

■ Como primer acercamiento a un territorio se plantea la fundación de colonias a cargo del Gobierno en el mismo, como las que tuvieron lugar en Groenlandia por orden de Christian IV en 1605 y 1606, bajo el mando de los daneses Lindenov y Richardsen, y las de 1652 a 1654 del danés Müller, según recogen varios documentos de la época. Como desarrollo de este asentamiento se fundan diversas estaciones, concretamente a partir de 1774 se da un nuevo impulso a este establecimiento, pasando de doce estaciones a cincuenta y cinco en 1800, repartidas por toda Groenlandia oriental y meridional, sin dejar de aumentar posteriormente, como es el caso de la Estación de misión y comercio, fundada en 1894, cerca de Angmagssalik²¹.

■ Como actividad administrativa habitual en un territorio es el nombramiento, y en su caso sistema de sustitución, de las personas u órganos encargados de la administración de dicho territorio:

- La Instrucción danesa de 19 abril 1782 y la Ordenanza de 3 junio 1791, regulan el mecanismo a seguir para el nombramiento y sucesión de administradores públicos en Groenlandia²².

²¹ Vid. Memoria de Dinamarca, 31 octubre 1931, P.I.C.J., serie C, nº62, p.18 y pp.30-33.

²² Vid. ibidem, p.28.

- Creación el 23 diciembre 1739 de un gabinete especial, dentro de la Administración central de Dinamarca, para tratar de todos los asuntos concernientes a Groenlandia; dicho gabinete estaba compuesto por dos miembros del Colegio eclesiástico y dos del Colegio comercial. Posteriormente, un Reglamento Real de 2 julio 1781 establece las reglas que deben regir la administración de asuntos en Groenlandia y crea una Dirección en Copenhague dotada de un gabinete especial para la contabilidad y correspondencia relativa a empresas groenlandesas²³.

- Varios documentos reflejan el régimen de transmisión hereditaria entre los jefes locales, 'patels', en los territorios cedidos a Portugal; se hace referencia a la destitución de jefes locales y a nuevos nombramientos, como el de Lala Morim, 'patel' de Noroli. Los 'patels', en cuanto agentes de la Administración portuguesa ejercutan las órdenes del Gobierno portugués²⁴.

- El Gobierno de Marruecos presenta documentos oficiales relativos al nombramiento de los responsables locales en el Sahara Occidental, dahires y caïdes, por parte de los Sultanes de Marruecos, Moulay Abdelaziz y Moulay Hafid: en 1890 se nombró a Mahamed Ben Lahbid Tidrari caïd de Tidrarin; en 1896 se nombró a Mohamed el Amin y a Brahim Ben Bahrek Chtouki; y en 1906, a Slimane el Aroussi caïd de la colectividad de El Gourrah²⁵.

²³ Vid. ibidem, p.22 y p.27.

²⁴ Vid. Réplica de Portugal..., op.cit., p.456.

²⁵ Vid. Exposición escrita de Marruecos, Dictamen consultivo del Sahara Occidental, I.C.J.Pleadings, vol.III, p.184.



■ En varias leyes y decretos se regula la organización de la administración local en Groenlandia desde la administración central de Dinamarca:

- Se crean Consejos municipales (Forstanderskaber), en 1857-1858 precisándose, posteriormente, su organización en 1862. Tales consejos se componen, en parte de funcionarios daneses, en parte por población autóctona, llegando a gozar de auténtica autonomía comunal tras la ley de 1908 y las ordenanzas de 1910, si bien subordinados al Ministro del Interior danés. Estos Consejos establecieron: sufragio universal para los groenlandeses, el ejercicio ordinario de la justicia entre los habitantes de Groenlandia era confiado a estos consejos.

- La ley de 18 abril 1925 reorganiza la administración en Groenlandia, dividiéndola en tres provincias: meridional, septentrional y oriental. La administración en las dos primeras se organiza a través de Consejos Comunales, Consejos de Distrito y Consejos Coloniales. Sin embargo, la parte oriental, se administra directamente por los ministros daneses competentes, por la poca densidad de población²⁶.

■ Regulación de los días festivos en Groenlandia, a través de una Instrucción de Frederick IV, 7 mayo 1728, haciéndolos coincidir con los existentes en Dinamarca²⁷.

²⁶ Vid. Memoria de Dinamarca, op.cit., pp.55-56.

²⁷ Vid. ibidem, p.20.

■ **Regulación de la entrada al territorio, a través de la solicitud de autorización** que no es sino resultado del ejercicio de hecho de la soberanía sobre el territorio para el que se exige. Desde 1921, y conforme al decreto de 10 mayo, el gobierno danés impuso, como regla general, la obligación de una autorización de entrada a Groenlandia, excepto en caso de exención prevista por una ley o acuerdo general; ésta ha sido acordada en varias ocasiones; por ejemplo en 1925, a un policía canadiense para descargar aprovisionamiento y a H.R.E.Krüger, ciudadano alemán para visitar el cabo de York... Posteriormente, una circular de 7 agosto 1930 fija las reglas detalladas sobre las condiciones exigidas para otorgarse la autorización para visitar Groenlandia, así como las normas a observar por las personas que reciban dicha autorización²⁸.

■ Una orden de 1779 del Comité de Puertos y Muelles de Jersey, recoge la orden de pago de salario al propietario de un bote por sus servicios en operaciones de salvamento a personas que habían naufragado en las costas de Minquiers, así como por la utilización de su bote en tales operaciones, como si se tratase de uno de sus funcionarios²⁹.

■ Tanto en Ecrehous como en Minquiers se llevaron a cabo las pertinentes

²⁸ Igualmente se autorizó en 1926, al Comandante Byrd, americano, para aterrizar en cabo Morris; una expedición llevada a cabo por el Museo Americano de Historia Natural; 1928, a Mis.L.A.Boyd, americana, para cazar; 1930, capitán Barlett, americano, para expediciones arqueológicas (vid. *ibidem*, p.57 y pp.65-66).

²⁹ Vid. Memoria de Reino Unido..., *op.cit.*, p.99.

investigaciones tendentes a determinar la causa y circunstancia de la muerte de los cadáveres encontrados en tales islas, en cumplimiento de lo que disponían las Leyes de Jersey en este sentido. Estas eran llevadas a cabo por el 'Vizconde' de su Majestad, se pueden citar: - El veredicto de 21 diciembre 1917, respecto de un cuerpo encontrado el 11 de noviembre en Ecrehous, determinó que debido a la descomposición y falta de pruebas era imposible establecer la identidad y la causa de la muerte; - El informe de la muerte de Mrs.I.Riley el 19 julio 1948, estableció que se ahogó accidentalmente cerca de Ecrehous el 5 julio cuando una batea que la llevaba a su yate se hundió;

- El informe forense de 30 marzo 1948 determinó que la causa de la muerte de F.C.Hansford cuando estaba pescando en Minquiers, fue paro cardíaco³⁰.

■ La actividad Aduanera sobre Minquiers y Ecrehous ha sido ejercida durante casi un siglo por autoridades inglesas:

- En 1884, la Asamblea del Gobernador, Alguacil y Jurado, como Autoridad Aduanera de Jersey, adquiere por contrato formal una casa en Marmotière, isla de Ecrehous, instalando allí un Puesto de Aduanas. De igual forma, el 19 junio 1909 esta autoridad adquirió otra casa en la isla de Maîtresse, perteneciente al grupo Minquiers y dependencia de Jersey, convirtiéndola también en Puesto de Aduanas.

- Entre 1850 y 1895, el Oficial de Aduanas de su Majestad en Jersey

³⁰ Vid. ibidem, p.80 y p.91; igualmente se recogen otros ejemplos de investigaciones en 1859, 1938...

efectuó varias visitas a Ecrehous para controlar la evolución de esta actividad³¹.

■ Son varias las visitas realizadas, tanto a Minquiers como a Ecrehous, por parte de autoridades de Jersey con la finalidad de elaborar el Censo incluyendo también a estas islas: - En 1901, cuando Ecrehous era dependencia de Rozal Vingtaine, fue visitada por un escrutinador oficial; - En 1921, el Condestable de la Parroquia de Grouville envió un escrutinador oficial a Minquiers para tomar nota de su censo e incluirlo en el que se estaba llevando a cabo en las islas británicas³².

■ La regulación de la Sanidad pública desde la administración central de Jersey, se ejemplifica por un Acta de 1754 que supuso la adopción de un eficaz mecanismo sanitario ante una epidemia de peste en Ecrehous³³.

- Para regular la sanidad en Groenlandia, Dinamarca la dividió en siete distritos médicos, cada uno a cargo de un médico de distrito nombrado por el Rey³⁴.

■ El primer informe hidrográfico efectuado por autoridades públicas sobre el grupo de Minquiers, fue efectuado por el francés Beautemps-Beaupré en 1831. En este mismo sentido, fue una misión francesa la encargada de efectuar el trazado

³¹ Vid. ibidem, p.81 y pp.91-92.

³² Vid. ibidem, p.81 y p.92.

³³ Vid. I.C.J.Reports, 1953, p.64.

³⁴ Vid. Memoria de Dinamarca..., op.cit., p.61.

hidrográfico de estas islas en 1888, e incluso, llevaron a cabo las primeras obras para su puesta en práctica³⁵.

4. Actividad legislativa.

Teniendo presente que los actos legislativos son considerados como una forma particularmente significativa del ejercicio de soberanía, no es extraño encontrar numerosas alegaciones basadas en disposiciones legislativas variadas, cuya procedencia no siempre es reflejo de una auténtica autoridad, y que en numerosas ocasiones sirven, a su vez, de prueba de otras actividades estatales - como hemos tenido ocasión de comprobar- al recogerse en ellas la imposición de medidas propias de otros órganos dependientes del Estado.

■ Son numerosos los actos legislativos aportados por Dinamarca en el asunto de Groenlandia Oriental, constituyendo la parte más importante de la prueba de su ejercicio de autoridad, a título ejemplificativo podemos citar: - Ordenanza de 18 marzo 1776 que prohíbe el comercio fuera de la intervención de las autoridades públicas danesas; reiterado, posteriormente, por el decreto de 10 octubre 1894; - Reglamento real danés de 2 julio 1781 que establece las reglas sobre administración de asunto en Groenlandia; - Decreto de 27 julio 1905 que establece el límite de pesca de tres millas a lo largo de la costa de Groenlandia, de

³⁵ Vid. Contra-memoria de Francia, 26 junio 1952, Asunto de Minquiers y Ecrehous, I.C.J.Pleadings, vol.I, p.401.

conformidad con las disposiciones relativas a las islas Feroe e Islandia³⁶.

■ El Acta de 1754 fue promulgada por el Gobierno central de Jersey para adoptar medidas sanitarias que aplacasen la epidemia de peste que asoló Ecrehous. La 'British Treasury Warrant' de 1875, constituyó a Jersey como puerto de las Islas del Canal³⁷.

5. Actos de defensa: fuerzas armadas y de policía,

La conciencia de ser soberano de un territorio conlleva, como primera actuación la de defenderlo frente a posible ataques extranjeros, y la subsiguiente de mantener esa misma diligencia en el interior del propio territorio. Varios actos han sido alegados en este sentido:

■ Los navieros de guerra daneses ejercían la defensa en Groenlandia, en cumplimiento de la instrucción de 15 marzo 1737 al comandante de la fragata 'Blaa Heyre', y la de 21 febrero 1738. De igual manera, en junio de 1931, fueron

³⁶ Podemos, igualmente aludir a: Instrucción de 19 abril 1916, del ministro danés del Interior, sobre la conservación de monumentos históricos y arqueológicos en toda Groenlandia; decreto nº 304, 10 mayo 1921, por el que el conjunto de Groenlandia fue colocado bajo la autoridad de la Dirección comercial de Groenlandia en Copenhague; el 1 abril 1925, fue promulgada una ley general sobre la caza y la pesca en los parajes de Groenlandia, reservándola a los indígenas y daneses; ley de 18 abril 1925 conteniendo las reglas relativas a la administración de Groenlandia, y concretamente su artículo 45 sobre Groenlandia Oriental; el decreto de 10 mayo 1921 y la circular de 7 agosto 1930, regulan el sistema de concesión de autorización para entrar o visitar Groenlandia; la ley de 18 abril 1925, regula la organización eclesiástica y escolar de Groenlandia a través del Ministro danés de Culto. Esta misma ley otorga la autoridad plena y entera de administración en Groenlandia al ministro competente de Copenhague. Todas estas disposiciones de carácter legislativo y otras a las que nos hemos referido en apartados anteriores, se hallan reflejadas en la memoria de Dinamarca... op.cit., pp. 18, 20, 22, 27, 28, 33, 34, 35, 50, 51, 55, 56 y 57, recogidas en los correspondientes anexos.

³⁷ Vid. I.C.J.Reports, 1953, pp.64 y 66.

enviados dos barcos de la Dirección de Groenlandia, Godthabb y Gustav Holm, al norte de Scoresbysund para establecer allí una estación, recibiendo a través de un telegrama del ministro competente, de 11 julio 1931, competencias de policía ejercidas por el Lugarteniente Johansen y el adjunto Stenör³⁸.

■ Las autoridades de Jersey detuvieron e interrogaron en 1706, a un hombre que llegó a Ecrehous huyendo de la policía que lo perseguía desde Francia³⁹.

■ La facultad de reclutar hombres para el servicio militar y emplearlos para la defensa de sus propios territorios no es, evidentemente, compatible sino con un derecho de plena soberanía. Así es reseñable un hecho acaecido en noviembre de 1814, cuando los capitanes mahrattes de Umbargão entraron en Nagar-Aveli a la cabeza de un destacamento militar refugiándose allí; el Gobernador de Damão envió al Capitán João Cordeiro con un destacamento quien consiguió armar una milicia reclutada por los 'patels' de la Pragana, repeliendo a los intrusos⁴⁰.

■ La correspondencia oficial presentada por Marruecos prueba la política permanente de defensa de la integridad territorial del Reino, especialmente en la región del Sahara Occidental. Esta correspondencia la forman cartas del Sultán a sus representantes locales, dándoles órdenes de defender el territorio frente a las injerencias extranjeras, con fecha de 1877, 1886, 1887, 1901, 1909 y 1910⁴¹.

³⁸ Vid. Memoria de Dinamarca..., op.cit., p.21 y p.65.

³⁹ Vid. I.C.J.Reports, 1953, p.64.

⁴⁰ Vid. Réplica de Portugal..., op.cit., pp.456-457.

⁴¹ Vid. Exposición escrita de Marruecos..., op.cit., pp.184-185.

6. Fiscalidad.

Pretendemos recoger aquellas pruebas referidas fundamentalmente al sistema de tasación y recaudación de todo tipo de impuestos y gravámenes:

- La administración portuguesa se encargaba de recaudar tributos en las tierras que le habían sido cedidas; concretamente se trata del 'Rammagar Zakat', los derechos de 'Gambirgodo' y del 'Chauri de Fatepor'⁴².

- Ali Chandora apoyado por el Sultán de Marruecos, en 1703 instauró un tributo anual a los Tekna, que sus sucesores mantuvieron incluso hasta 1933⁴³.

7. Actos registrales.

Sin especificar, referiremos todos aquellos actos que supongan un registro, sea éste de la naturaleza que sea:

- La transferencia de las villas por Mahrattes a Portugal obligó a hacer constar en los informes, en las cuentas, una 'relación' cuyo registro se transmite de año en año para servir de garantía a los colonos, a los 'Suderdars' y a sus súbditos⁴⁴.

⁴² Vid. Réplica de Portugal..., op.cit., pp.450-454.

⁴³ Vid. Exposición escrita de Marruecos..., op.cit., p.181.

⁴⁴ Vid. Réplica de Portugal..., op.cit., p.456.

8. Educación.

Encontramos un único supuesto referido a la estructuración de la educación en un territorio como alegación de su soberanía:

■ La organización eclesiástica y escolar de Groenlandia, después de haber sido sucesivamente otorgada por el Rescripto real de 8 febrero 1737, al Colegio de Misiones de Copenhague, y por la Resolución de 17 junio 1859 al Ministerio de Culto e Instrucción Pública, se hizo depender, finalmente, del Ministro de Culto por la ley de 18 abril 1925. Esta organización se incardina en torno a un prior danés, un vice-prior indígena, seis pastores daneses y trece pastores indígenas⁴⁵.

9. Relaciones diplomáticas.

Bajo este término abarcamos todas las actividades que suponen el ejercicio de la política exterior de un Estado, tendente a lograr el reconocimiento de terceros estados:

■ Una larga serie de **tratados internacionales**, tanto bilaterales como multilaterales, celebrados en el s.XIX y principios del XX por Dinamarca con terceros países, mencionan y tratan siempre a Groenlandia como territorio danés: Alemania, Austria, Bélgica, Bolivia, Colombia, España, EE.UU....

■ Igualmente, de estos países se han obtenido **declaraciones de reconocimiento de la soberanía danesa sobre Groenlandia**: EE.UU, 4 agosto 1916; de Noruega en 1919; en 1920, Francia, Japón, Italia, Gran Bretaña y Suecia, en

⁴⁵ Vid. Memoria de Dinamarca...., op.cit., p.61.

1921⁴⁶.

■ La práctica de varias autoridades de la administración central, como son las de Jersey, relacionadas con Aduanas, Puertos, Pesca, Comité de Finanzas, Comité de los Estados....., de efectuar **visitas oficiales** a las Ecrehous con frecuencia desde 1885, demuestra que ejercían su ordinaria administración⁴⁷.

10. Disposición administrativa sobre bienes inmuebles.

Se trata de actos de disposición llevados a cabo por autoridades públicas sobre propiedades inmuebles:

■ Claro ejercicio de soberanía es el contrato de arrendamiento de la isla Maîtresse en 1923, por un período de 25 años a Sir J.Boot, Barón de Trent, por parte de Reino Unido.

■ Además de este tipo de contratos se efectuaron otros, generalmente de venta, entre residentes y autoridades públicas de Jersey, afectando propiedades de la Corona en Ecrehous, tal y como aparecen en el Registro Público de Escrituras de la Isla, en 1863, 1881 y en 1884, cuando las autoridades de Jersey adquieren un edificio para convertirlo en Puesto de Aduanas. Esta práctica fue igualmente seguida respecto de inmuebles situados en Minquiers: en 1896, 1909, 1926, 1932, 1936, 1937 y 1946, años en los que se efectuaron las correspondientes

⁴⁶ Vid. ibidem, pp.35-37 y pp.40-48.

⁴⁷ Vid. Memoria de Reino Unido..., op.cit., p.83.

compras de edificios con la finalidad de destinarlos a usos públicos⁴⁸.

11. Sistema de concesiones y ejercicio de monopolios estatales.

Íntimamente ligada con las concesiones de todo tipo de servicios, que es competencia estatal, se sitúa la actividad monopolística que un estado ejerce en un territorio.

■ Es el caso del monopolio del comercio en Groenlandia, que conlleva también el ejercicio de la navegación regular con destino a Groenlandia (tal actividad se realizó hasta 1930), fue asumido por Dinamarca en 1774, con la consiguiente prohibición de comercio, excepto los supuestos de concesiones: 7 junio 1863, se otorga una concesión al mineralogista inglés J.W.Taylor para crear, sobre la costa de Groenlandia, establecimientos de comercio, caza, pesca, explotación minera. En esta misma línea se sitúan las concesiones para el levantamiento de postes telegráficos en Groenlandia, acordadas en 1905⁴⁹.

12. Obras públicas.

■ El levantamiento de todo tipo de construcciones oficiales ha sido especialmente argumentado por Reino Unido, actividad que ha realizado

⁴⁸ Vid. ibidem, p.82 y p.92.

⁴⁹ Vid. Memoria de Dinamarca..., op.cit., p.27 y pp.31-32; Réplica de Dinamarca, P.C.I.J., serie C, nº 63, p.685.

profusamente tanto en las islas de Ecrehous como de Minquiers:

- Las autoridades de Jersey han establecido postes telegráficos y varias facilidades en beneficio de sus pescadores:

- En 1893 se colocó un asta de bandera en Marmotière de la que ondeaba la bandera británica, el cual fue reemplazado en 1909; similar actuación tuvo lugar en 1907 en la isla Maître, todo ello en Ecrehous. El Acta de 1889 recoge las instrucciones para el levantamiento de un asta de bandera en la isla Maîtresse de Minquiers.

- Como obras públicas de ayuda a la navegación se citan, la construcción de una grada en Marmotière para facilitar el acceso de los pescadores a la isla en 1895 y, nuevamente en 1939; con igual finalidad se levantó otra grada en 1907 en Maîtresse, posteriormente ampliada en 1933 y 1950; se instaló un torno en 1933 para facilitar el desembarco de mercancías; la colocación de faros y boyas fue actividad frecuente en 1913, 1931, 1934, 1937 y 1950, como medidas de seguridad para la navegación⁵⁰.

B) EL DESPLIEGUE DE ACTIVIDAD PRIVADA.

Igualmente hemos analizado en el capítulo III cómo es posible atribuir, en ciertas circunstancias, efectos jurídicos a los actos que realizan personas privadas,

⁵⁰ Vid. Memoria de Reino Unido..., op.cit., p.83 y pp.94-95.

siempre y cuando sean imputables, en última instancia, al Estado de su nacionalidad. Por ello no es extraño, incluso es frecuente, que los Estados aleguen como soporte de su pretensión de posesión efectiva las actividades que ciertos individuos, nacionales suyos, han desplegado sobre el territorio que reclaman; y ello, no como prueba autónoma, pues su peso específico es mínimo, aisladamente considerado, sino como complemento de una actividad estatal.

1. Ejercicio del comercio.

Como consecuencia implícita al otorgamiento de una concesión de comercio por parte del Estado, encontramos el ejercicio de ese monopolio por el particular beneficiado:

■ Christian VI otorga una Carta de privilegio al súbdito danés Jacob Severin, el 15 marzo 1734, renovada posteriormente el 4 marzo 1740; por ella, se le concede el monopolio del comercio, que lo ejerce hasta 1758, prohibiendo a todos y cada uno, tanto súbditos como extranjeros, navegar y comerciar en Groenlandia en contra del privilegio de Severin⁵¹.

2. Asentamiento, propiedad privada y posesión física de inmuebles.

Para soportar su reclamación sobre Minquiers y Ecrehous, Reino Unido se funda también en la propiedad y ocupación de las islas por ciudadanos de Jersey:

⁵¹ Vid. Memoria de Dinamarca..., op.cit., p.21.

■ En 1748 llegó a la isla de Maîtresse Jean Hamon, único superviviente del pasaje de St.Malo. En la última década del s.XVIII, fueron enviados a esta isla numerosos trabajadores de Jersey para picar piedra destinada a construir la Fortaleza del Regente en la Parroquia de St.Helier; explotación que continuó a lo largo del s.XIX. Varias cabañas y edificios fueron construídos en esta época en dicha isla, como lo demuestran varios documentos, tales como dos pases firmados por el Lugarteniente-general Sir G.Don el 25 febrero 1812.

- Igualmente hay prueba de que vivían pescadores en La Rocque, parroquia de Grouville, Jersey, que se establecieron en Minquiers en 1850, y a pesar de las dificultades que suponían las rocas llegaron a construir casas, como es el caso de Phillippe Pinel, que vivió allí entre 1850 y 1895⁵².

3. Celebración de contratos.

Además de los contratos que los particulare celebran con autoridades públicas, a los que ya nos hemos referido en el apartado anterior, encontramos prueba de celebración de contratos de residentes de un territorio entre sí:

■ Según se recoge en el Registro Público de Escrituras de la isla de Ecrehous, en 1863, C.Gallichan vendió una casa y sus tierras a J.Le Bailly, y en 1881, L.Godfray vendió un edificio a H.C.Bertram; actividad similar se desarrolló en Minquiers⁵³.

⁵² Vid. Memoria de Reino Unido..., op.cit., pp.84-86, pp.96-98 y p.99.

⁵³ Vid. ibidem, p.82 y p.92.

4. Extracción y explotación de recursos naturales.

Según las peculiaridades del territorio en cuestión, estas actividades serán de un tipo u otro, siendo las más habituales las de caza y las de pesca:

■ En el territorio que abarca la ocupación noruega, los daneses se han dedicado durante años a la caza y han instalado numerosas estaciones de caza permanentes⁵⁴.

- En el mismo sentido se expresa Noruega, relatando numerosos ejemplos (hasta un total de 125) en los que se ha llevado a cabo el ejercicio de la caza por parte de particulares noruegos en la zona de Groenlandia Oriental, así como la pesca en sus aguas, fundamentalmente de tiburón, salmón, bacalao, ballena y foca, siendo de gran importancia económica las industrias de pesca y caza noruegas⁵⁵.

- Los pescadores de Jersey estuvieron pescando y recolectando 'vraic' en Ecrehous desde el s.XVII de forma habitual, excepto en el período de ocupación alemana que fue prohibido; esta misma actividad se efectuaba en Minquiers, estando provistos, estos pescadores, de casas y almacenes⁵⁶.

⁵⁴ Vid. Memoria de Dinamarca..., op.cit., p.82.

⁵⁵ Vid. Contra-memoria de Noruega, 15 marzo 1932, C.P.I.J., serie C, n°62, pp.211.218.

⁵⁶ Vid. Memoria de Reino Unido..., op.cit., pp.85-86 y pp.98-99.

5. Expediciones científicas.

En este caso la mayoría de estas expediciones se hacían bajo mandato del Estado, sin que por ello no faltaran algunas de iniciativa privada:

■ En 1878 se creó en Dinamarca la 'Comisión para la dirección de Investigaciones geológicas y geográficas en groenlandia, aunque ya antes de 1800 hubo expediciones de exploración; se citan hasta un total de 20 expediciones⁵⁷.

- Varios barcos noruegos fueron fletados para realizar expediciones científicas en Groenlandia oriental: expedición noruega antes de 1814; expedición de Nansen en 1888; expedición etnográfica de Soeren Richter en 1929-1931; expedición de Hoeygaard y Mehren⁵⁸.

C) OTROS ACTOS ALEGADOS.

No es extraño encontrar, entre las pruebas alegadas por los Estados como sustento de sus posesión efectiva, actos vinculados con otros estratos sociales como es el caso de las Instituciones eclesiásticas. La razón que justifica estas alegaciones debemos situarla en la propia configuración estatal, es decir, en el peso social y político que esta 'organización' entraña, pues en numerosas ocasiones, y ésta es la base alegada, las autoridades eclesiásticas actúan como auténticos

⁵⁷ Vid. Memoria de Dinamarca..., op.cit., p.39.

⁵⁸ Todas estas expediciones son contadas in extenso en la Contra-memoria de Noruega..., op.cit., pp.244-265, por lo que nos remitimos, para el detalle, a lo allí expuesto.

funcionarios, estando revestidas de autoridad estatal y llevando a cabo actividades propias de éstos, de ahí la vinculación jurídica que se crea.

Es el caso de las Parroquias de St.Martin y de Grouville que, según la alegación de Reino Unido, actuaban como auténtica autoridad administrativa, abarcando en su jurisdicción las islas de Ecrehous y de Minquiers, respectivamente, como lo prueban los siguientes datos aportados:

■ **Actividad policial:** El Condestable de St.Martin actuaba en calidad de Jefe de Policía de la Parroquia, y como tal detuvo a G.Romeril, en 1826, que había atentado contra la vida de un hombre en Ecrehous, pues esta isla caía bajo su jurisdicción, informó del caso al Fiscal de Jersey y procedió con las investigaciones pertinentes; además, si una persona moría en Ecrehous en circunstancias anormales, la investigación se llevaba a cabo por éste. De forma similar actuaba el Policía honorario de la Parroquia de Grouville⁵⁹.

■ **Actos registrales:** Las Parroquias de St.Martin y de Grouville, recogían en sus Registros Parroquiales las casas existentes en Ecrehous y Minquiers, respectivamente, a efectos impositivos⁶⁰.

■ **Actos impositivos:** La Parroquia de St.Martin, a la que estaba adscrita el grupo Ecrehous, tenía a su cargo la tasación de las casas existentes en esas islas a efectos de recaudación de impuestos parroquiales; así, en 1889 fueron tasados tres propietarios respecto de cuatro casas, es el caso de la cédula que valoró las propiedades de Rev.W.Lemprière residente de la parroquia; y en 1950, seis

⁵⁹ Vid. Memoria de Reino Unido..., op.cit., p.79 y p.90.

⁶⁰ Vid. supra.

propietarios lo fueron de otras seis, como ocurrió con J.C.Becquet. En el mismo sentido actuó la Parroquia de Grouville respecto de Minquiers: en 1939, registrando la tasación de dos cabañas propiedad de O.P.Hamon; otra cédula de 1939 tasa una cabaña de madera perteneciente a W.S.Le Masurier; en el mismo sentido encontramos las tasaciones de 1950 al Vice-Almirante E.de Faye Renouf⁶¹.

Igualmente vinculada con la actividad estatal, aunque sin la fuerza probatoria de ésta, los Estados alegan la actividad de otras entidades que, aunque privadas, en ciertas circunstancias (cuando ostentan 'cartas' o 'patentes') actúan con categoría de agentes del Estado; son las **Compañías de comercio y colonización**:

■ Hans Egede llegó a Bergen en 1721, creando la Compañía de Groenlandia que funda una colonia en este territorio, desplegando una importante actividad comercial. El 5 febrero 1723, el Rey de Dinamarca concede a la Compañía de Bergen un **privilegio** que se extiende a toda Groenlandia, reiterándolo a todos sus agentes el 7 junio 1723. Esta compañía funda varias estaciones en Groenlandia: en 1721, Haabets; 1724, Nípisat... hasta la finalización de su administración en 1731.

- Privilegios de comercio similares se otorgan a la Compañía Danesa de Comercio, por parte de Frederick VI, Rey de Dinamarca, a través de la Ordenanza de 26 marzo 1751, que los concede para toda Groenlandia. De igual manera esta compañía fundó gran número de estaciones durante el período que duró su

⁶¹ vid. supra.

concesión⁶².

SECCION 2ª: LA PRACTICA JURISPRUDENCIAL EN LOS CONFLICTOS DE DELIMITACION.

Ya hemos tenido ocasión de aludir al papel que juegan las efectividades en las controversias de delimitación del territorio⁶³, si bien, en aquella ocasión limitándonos a los conflictos basados en el uti possidetis iuris. Sin menoscabo de las apreciaciones entonces manifestadas, sino, por el contrario, ahondando en las mismas, reincidimos nuevamente en el tema pero ya generalizándolo a todos los conflictos de delimitación y orientándolo a la problemática que nos ocupa, la de la prueba. Nos referíamos entonces a cómo las efectividades no llegan a alcanzar la relevancia que vemos tienen en las controversias de adquisición teritorial, en cuanto, a priori, hay una presunción favorable a la prevalencia del título jurídico sobre aquéllas, es decir, en términos generales éste tiene más peso que los actos de ejercicio de soberanía; éstos últimos no pueden prevalecer más que difícilmente, y en condiciones muy estrictas, sobre los títulos legales, tratados de fronteras o

⁶² Vid. Memoria de Dinamarca..., op.cit., pp.19-20 y p.25.

⁶³ Vid. capítulo III, en general, y más concretamente, sección 1ª, apartados A y B, y sección 2ª, apartado C.

uti possidetis iuris. Unicamente donde no haya específicos instrumentos legales que regulen la delimitación de fronteras, o bien, nos encontremos con lagunas en el establecimiento de éstas, entonces, el ejercicio de actos de Estado dentro del área en cuestión es de la mayor importancia en cuanto viene llamado a completar o subsanar las deficiencias del título. En estas circunstancias la cuestión de fronteras adquiere, en opinión de Sharma, el carácter de disputa territorial⁶⁴. Por todas estas razones no es extraño encontrar, examinando la práctica judicial relativa a delimitación territorial, prueba de reclamaciones basadas en la posesión efectiva del territorio, no tanto por ambas Partes (excepto en los casos de uti possidetis donde ésta constituye casi siempre una prueba supletoria, alegada por los dos Estados como complemento a los 'documentos' coloniales), sino fundamentalmente por una de ellas, la que hace del ejercicio de autoridad su título principal en oposición a la otra Parte que ostenta el título jurídico, el cual suele estar unido también a la posesión.

Seis asuntos planteados ante el T.I.J. han abordado el trazado de una frontera. Su predecesor, el T.P.J.I., había igualmente conocido de tales controversias en los dictámenes consultivos de la cuestión de la Jawarzina, 6 diciembre 1923⁶⁵, referente a la delimitación de la frontera Checo-Polaca; en el asunto del Monasterio de St.Naum, 4 septiembre 1924⁶⁶, envolviendo la

⁶⁴ Vid, SHARMA, S.P., International Boundary Disputes and International Law, Bombay, 1976, p.164.

⁶⁵ Vid. P.C.I.J., serie B, nº8, 1923.

⁶⁶ Vid. P.C.I.J., serie B, nº9, 1924.

frontera Albano-Yugoslava; y el del artículo 3 del Tratado de Lausanne, 21 diciembre 1925⁶⁷, que decidía la frontera ente Turquía e Iraq. Sin embargo, en ninguno de estos tres casos se hace la mínima alusión al tema de las efectividades⁶⁸ por lo que no resultan de interés a nuestro estudio. Pero el T.I.J. sí ha tenido que abordar la problemática de la interacción entre efectividades y título jurídico, en el sentido expresado en las líneas precedentes, en las siguientes controversias de delimitación fronteriza, ninguna de la cuales puede catalogarse de delimitación ex aequo et bono, pues el T.I.J. no ha sido revestido de tal poder por las Partes, únicamente ha podido decidir sobre la equidad infra legem⁶⁹:

■ El asunto de la Soberanía sobre ciertas parcelas fronterizas, entre Bélgica y Países Bajos, es un claro ejemplo de la interrelación fronteras-soberanía territorial que mantenemos; en efecto, lo que comienza como una disputa por la soberanía de unos enclaves termina por resolverse como si se tratara de una auténtica controversia fronteriza. La alternativa se estructuraba así: Bélgica argumentaba su soberanía sobre la base de un convenio fronterizo de 8 agosto 1843, que establecía que las parcelas 91 y 92, origen del conflicto, le pertenecían; por su

⁶⁷ Vid. P.C.I.J., serie B, n°12, 1925.

⁶⁸ En las controversias paralelas sobre la Jawarzina y el Monasterio de St.Naoum, la solución versó sobre el carácter res iudicata de ciertas decisiones de la Conferencia de Embajadores de 1920 y 1922; por su parte, en el dictamen de 1925, el Tribunal estableció los poderes y condiciones del Consejo de la Liga de Naciones, encargado de solucionar la controversia.

⁶⁹ Esto ha ocurrido en los asuntos de Burkina Faso-Mali y de El Salvador-Honduras, en los cuales, como vimos en el capítulo anterior (sección 1ª, apartado C), la Sala especial hizo uso de la equidad infra legem en algunos tramos de la línea fronteriza (vid. supra, pp.226-234).

parte, Países Bajos mantenía que los actos de soberanía ejercidos por él desde 1843 sobre dichas parcelas, habían desplazado el título legal de Bélgica, estableciendo la soberanía de Países Bajos. El T.I.J., en su sentencia de 20 junio 1959, decidió el caso en favor de Bélgica sosteniendo que la soberanía belga quedó firmemente establecida en 1843 y no se había extinguido⁷⁰, es decir, ha descartado el valor de las efectividades en favor de la letra explícita de un convenio.

■ En el asunto sobre la validez del laudo del Rey de España, el Tribunal estaba sobre todo interesado por el problema de la validez de una sentencia arbitral, pero en el fondo subsiste implícita la cuestión de una frontera siempre controvertida. Respecto de esta frontera, el título alegado por Honduras era el título jurídico que suponía el propio laudo de 1906, mientras que Nicaragua, que planteaba la nulidad del mismo en base a varias causas, sostenía, además, que nunca había aceptado dicho laudo; y como prueba de su rechazo invocaba su ejercicio continuo y pacífico de soberanía sobre la zona de Gracias a Dios que, según el laudo, correspondería a Honduras. Esas efectividades que se presentan como prueba de la no-aceptación del laudo, son, al mismo tiempo el título de su posesión de hecho sobre el que reclamar el territorio. Finalmente, en este asunto, el título escrito reconocido por los Estados afectados y que fijaba la frontera, ha recibido la sanción del T.I.J.⁷¹

⁷⁰ Vid. I.C.J.Reports, 1959, pp.209-258.

⁷¹ Sentencia de 18 noviembre 1960, I.C.J.Reports, 1960, pp.192-239.

■ La controversia que enfrentó a Camboya y Tailandia implicaba, principalmente, reclamaciones de soberanía sobre una pequeña área de territorio fronterizo que contenía las ruinas de un antiguo santuario, el Templo de Preah Vihear, sin embargo, para decidir esta cuestión el T.I.J., de forma similar al asunto de la soberanía sobre ciertas parcelas fronterizas, decidió el caso fijando la línea fronteriza entre los dos Estados⁷². En este litigio, Camboya invocaba en apoyo de su pretensión, principalmente un título jurídico fundado sobre los trabajos de la Comisión de Delimitación, fundamentalmente un mapa de 1908-1909 elaborado en aplicación de las disposiciones del Convenio de límites de 13 febrero 1904, entre Francia (de quien es sucesora) y Siam; y, de forma subsidiaria, el ejercicio de competencias territoriales en dicha región desde 1904. Tailandia, por su parte, ha hecho valer, por un lado la imperfección y error del título jurídico -mapa-, y por otra, su ocupación del territorio en cuestión a través del ejercicio continuado de actos de soberanía posteriores a la conclusión del tratado, que son no sólo prueba de su soberanía, sino de su no aceptación a la frontera contenida en dicho mapa (aquí las efectividades juegan un papel similar al pretendido por Nicaragua en el asunto anteriormente indicado y con un resultado también análogo). El Tribunal en su decisión atribuye, no obstante, importancia decisiva al título jurídico que constituye dicho mapa, en ausencia de reacción por parte del Estado interesado⁷³.

⁷² Sentencia de 15 junio 1962, I.C.J.Reports, 1962, pp.5-146.

⁷³ Efectivamente, el Tribunal interpreta la conducta recíproca de las Partes, posterior a 1909, y entiende que existe aquiescencia por parte de Tailandia a la delimitación contenida en el mapa del anexo I; por lo tanto estaría vinculada por 'estoppel', aunque éste principio no es invocado expresamente por el T.I.J. (vid. ibidem, pp.22-23 y 32).

■ Posteriores en el tiempo, aunque no en trascendencia, son tres asuntos que presentan relación con el principio del uti possidetis iuris, unos de forma directa, como la controversia fronteriza entre Burkina Faso-Mali y la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras⁷⁴, otros, de un modo más soslayado, la controversia territorial entre Libia y Chad⁷⁵. En todos ellos, las Partes en conflicto fundamentan igualmente su reclamación en el título jurídico como título principal, si bien, consideraron de utilidad hacer afirmaciones adicionales en base a los actos de autoridad estatal efectuados por cada uno de ellos en el territorio controvertido. De esta manera, las efectividades se constituyen en título supletorio que actuará en defecto o como confirmación del título jurídico; en uno u otro caso, reviste importancia fundamental la prueba de la posesión efectiva aportada por cada Parte.

Antes de pasar a examinar en la siguiente sección el resultado de la actividad analítica del juez, corresponde ahora estructurar, de forma análoga a la sección precedente (pues todos los conflictos han sido regulados por el derecho), las

⁷⁴ Este asunto viene configurado por tres partes distintas pero interrelacionadas: frontera terrestre, islas y frontera marítima. A efectos de nuestro estudio, lo incluimos en conjunto en los conflictos de delimitación, aunque la parte referente a la controversia insular esté más próxima a los conflictos de adquisición territorial (esta es la postura mantenida por El Salvador, vid. Memoria de El Salvador, 1 junio 1988, ptos.10.3 a 10.11), y ello, no sólo por no romper la homogeneidad del caso, sino porque para todo el asunto (incluidas las islas) el derecho aplicable es el uti possidetis iuris, es decir, un título jurídico; y la cuestión se centra en determinar, en base a éste y no a la posesión actual, quién sucede a España en la soberanía de las islas.

⁷⁵ Ya hemos tenido ocasión de analizar con profusión el contenido de estas tres sentencias en el capítulo III, sobre todo en el apartado A de la sección 1ª, por ello nos remitimos a los datos allí reseñados, limitándonos en este capítulo al aspecto importantísimo de la prueba de las efectividades que cada Estado invoca en apoyo de su pretensión.

pruebas presentadas por los Estados que hacen relación directa a las efectividades, ya sea a título principal, ya lo sea supletorio, resaltando como dato previo interesante que el mayor volumen de prueba, no sólo en este tipo de contenciosos sino de todos (incluso abarcando los arbitrajes), lo aportan Honduras y, en menor medida, El Salvador, en su controversia terrestre e insular.

A) LOS ACTOS DE CARACTER ESTATAL.

Tal y como advertíamos en la sección anterior, incluímos en este apartado aquellos hechos directamente imputables al Estado en cuanto son realizados por alguno de sus órganos, y que, como tales, son invocados por los Estados como *principal prueba de su posesión efectiva*.

En este tipo de conflictos, dada la fuerza que tienen por sí mismos los títulos *jurídicos*, las *alegaciones contrarias basadas en el ejercicio de autoridad*, deben estar sólidamente fundamentadas y, por ello, su prueba debe configurarse básicamente en torno a aquellos actos puramente estatales en cuanto son los únicos que pueden crear una firme presunción de su soberanía capaz de rebatir el título legal. Resulta, pues, del mayor interés exponer los actos de este tipo presentados como prueba por los distintos Estados:

1. Ejercicio de jurisdicción penal.

Unicamente en el asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima, que enfrentó a El Salvador y Honduras, se cita por ambas Partes como prueba del ejercicio de funciones de Estado esta actividad, aludiendo para ello a una multiplicidad de procedimientos criminales que han tenido lugar ante jueces hondureños y salvadoreños, respecto de delitos cometidos, tanto en los diversos sectores de la frontera terrestre como en las islas⁷⁶, respectivamente:

■ Honduras presenta una voluminosa prueba de procesos penales incoados respecto de delitos, fundamentalmente homicidios, delitos de daños y de lesiones, así como de usurpación de tierras, cometidos en los territorios disputados de los cuales han conocido los correspondientes Jueces de Letras o de Paz hondureños por hallarse bajo su jurisdicción:

- A título ejemplificativo mencionamos los Archivos del Juez de Letras de Ocotepeque, según los cuales éste ha tenido ocasión de pronunciarse en 1863 y 1888 por sendos delitos de contrabando cometidos, el primero por C.Serrano y el otro por M.Portillo; y en 1876 y 1900 por los correspondientes delitos de lesiones cometidos por G.Dubon y S.Molina. Igualmente, el Juez de Paz de Mercedes conoció en 1868, de las investigaciones relativas a las lesiones causadas por J.Ramiro, I.Maldonado y F.Erazo contra E.Mancia. Todos estos delitos tuvieron

⁷⁶ Es interesante resaltar respecto de la controversia insular, concretamente, Meanguera y Meanguerita, que ambas Partes las han considerado como una sola unidad insular sin tratarlas por separado. Esta posición es seguida en su discurso por el Tribunal, entendiéndose que Meanguerita es "a 'dependency' of Meanguera, in the sense that the Minquiers group was claimed to be a 'dependency' of the Channel Islands'" (vid. I.C.J.Reports, 1992, p.570, pa.356); circunstancia que supone un análisis de la prueba de soberanía, por parte de la Sala, referido exclusivamente a la isla de Meanguera que conlleva la correspondiente a Meanguerita.

lugar dentro del sector de Tepangüisir⁷⁷. En sentido similar Honduras presenta la prueba

relativa al resto de los sectores de la frontera terrestre⁷⁸.

■ El Salvador también ha presentado prueba de ejercicio de jurisdicción criminal, pero referida a las islas Meanguera y Meanguerita; concretamente una selección de extractos de procesos verbales relativos a cinco procesos penales que han tenido lugar en 1930, 1931, 1945, 1955 y 1977 ante el Juez de Paz de Meanguera del Golfo⁷⁹.

- Respecto de estas islas, también Honduras invoca ejercicio de jurisdicción criminal y civil, a través de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa. Concretamente cita el proceso, contenido en un documento de 20 diciembre 1678, contra F.Félix por

⁷⁷ Vid. Réplica de Honduras, 12 enero 1990, Anexo IX, pp.483-484. Ese mismo archivo recoge los procedimientos tramitados en 1861 respecto de los delitos de lesiones ocasionados a varias personas en el Cerro de Cayaguanca (*ibidem*, p.503).

⁷⁸ Por lo que se refiere a delitos cometidos en el sector de Sazalapa-La Virtud, el Archivo del Juez de Letras de Lempira recoge hasta un total de 18 demandas relativas a varios delitos de homicidio, daños y lesiones, presentadas entre los años 1947 y 1973, conocidas por el Juez de Paz de San Juan de Guarita. Igualmente los Archivos del Juez de Paz de La Virtud, registran los procesos mantenidos ante dicha jurisdicción por delitos de usurpación de tierra, homicidio, lesiones y daños en los años 1940 a 1968. El Archivo del Juez de Paz de San Juan Guarita alude a seis procesos relativos a delitos de homicidio y lesiones, entre 1935 y 1968 y el de Guarita a otros catorce en el mismo sentido. Delitos de usurpación de tierras, homicidios y lesiones cometidos en el sector de Naguaterique han sido conocidos por los Jueces de Paz de Santa Elena, Cabanas, Marcala y Yarula. Los Archivos del Juez de Paz de Colomoncagua registran siete procedimientos criminales abiertos en ese sector. En el sector de Dolores, los procedimientos se llevan a cabo por el Juez de Paz de Opatoro y Marcala; y en Goascorán, el Tribunal del Municipio de Alianza conoció de 88 procesos por delitos de homicidio, secuestro y violación, concubinaje, amenazas, lesiones...(vid. *ibidem*, pp.513-524, 635-639, 733-734, 799-803 y 829-837, respectivamente para cada sector).

⁷⁹ El contenido material de esta efectividad y de todas las referidas respecto a las Islas, se recogen en un Anexo presentado por El Salvador después de la fase oral, según establece el propio Tribunal (vid. I.C.J.Reports, 1992, p.572, pa.359, y concretamente, p.573, sección X, para los procesos penales referidos)

haber raptado a una mujer en la isla de Meanguera⁸⁰.

2. Ejercicio de jurisdicción civil.

Por lo que se refiere a la celebración de procedimientos civiles, la situación es similar a la referida anteriormente, encontrando las siguientes referencias:

■ Honduras alega, igualmente, diversos procesos verbales y decisiones referentes a conflictos entre particulares residentes de las zonas disputadas según se recogen los correspondientes archivos de Jueces de Paz: así, el Archivo del Juez de Letras de Ocotepeque registra el proceso verbal emprendido ante él por L.Jerónimo, alcalde auxiliar de la Comuna de Ocotepeque, en 1860 contra C.Hernández por haberse de apropiado de varias tierras en Cayagua que pertenecían a su comuna⁸¹.

■ Son tres las referencias que hace El Salvador a procesos que han tenido lugar en 1930 y 1943 ante el Juez de Paz de Meanguera del Golfo, además del incoado ante el Tribunal de Primera Instancia de La Unión, en 1969, a propósito de tierras situadas en la Isla de Meanguera⁸².

En estrecha conexión con el ejercicio de la justicia situamos el nombramiento

⁸⁰ Vid. Memoria de Honduras, 1 junio 1988, pp.544-545.

⁸¹ Vid. Réplica de Honduras..., *op.cit.*, p.511. La decisión que emitió el juez de paz fue sometida posteriormente a apelación. Asimismo, hay referencias a procesos verbales de este tipo, que han tenido lugar desde 1890 hasta 1985, en los Municipios de Santa Elena, Marcala, Yarula, Colomoncagua y Opatoro (vid. *ibidem*, pp.706-713, 793-798 y 822-827).

⁸² Vid. I.C.J.Reports, 1992, p.573, pa.359.

de los jueces que serán encargados de impartirla, sea cual sea la instancia a la que están adscritos:

- Nicaragua, presenta como prueba de su jurisdicción un Decreto de 26 septiembre 1910, por el que se nombra al Dr. S. Delgado como Juez de Distrito de Cabo Gracias a Dios⁸³.

- Una carta dirigida por Su Majestad el Rey de España, junio 1667, al Juez Reformador de la Cultura de la provincia de San Miguel establece que el nombramiento del Juez de la cultura no debe entenderse englobando las islas de 'Conchagua, Teca y Miangola'. Este documento prueba que el Rey de España prohíbe a estos jueces de San Miguel ejercer su jurisdicción sobre las islas, y que éstas dependen de Choluteca⁸⁴.

- Un certificado de la Corte Suprema de El Salvador, refiere la creación en 1922 de la Oficina del Juez de Paz del Municipio de Meanguera; y otros tres certificados posteriores del mismo órgano, establecen el nombramiento de jueces de paz de este mismo municipio en 1941, 1961 y 1990⁸⁵.

3. Actos de Administración central y local.

Siguiendo las observaciones generales que apuntábamos respecto este tipo de actividad en el apartado correspondiente de los conflictos de adquisición,

⁸³ Vid. Contra memoria de Nicaragua, 5 mayo 1959, Anexo 30, Asunto de la validez del laudo del Rey de España, I.C.J. Pleadings, vol. I, p.301.

⁸⁴ Vid. Memoria de Honduras..., op.cit., p.543.

⁸⁵ Vid. I.C.J. Reports, 1992, p.572, pa.359.

entendemos que constituyen prueba de una actividad, tanto por parte de la Administración central, como de la local, las siguientes:

■ El Decreto de 27 enero 1912, del Poder Ejecutivo de Nicaragua aprueba las medidas de orden administrativo adoptadas por el Inspector General del Distrito de Cabo Gracias a Dios, respecto de ciertos pueblos englobados en su Distrito, lo que prueba el ejercicio de autoridad por la administración central sobre dicha zona⁸⁶.

■ Como despliegue de la administración sobre un territorio se cita la implantación de ciertos servicios públicos en el mismo:

- Nicaragua recoge extractos de dos contratos concluidos por su Gobierno con particulares, el 6 mayo 1908 con A.H.Codd y el 29 julio 1908 con M.A.Low, para establecer los correspondientes servicios de transporte fluvial de mercancías y pasajeros, con barcos, entre el Puerto de Cabo Gracias a Dios y los puertos del Río Coco y sus afluentes. Estos contratos fueron aprobados por sendos Decretos del Ejecutivo de la misma fecha⁸⁷.

- El establecimiento del servicio postal, a través de la creación de una Oficina Postal en la ciudad de Meanguera del Golfo, por parte de la Dirección General Postal del Gobierno de El Salvador, el 15 octubre 1952, se contiene en un certificado y en el correspondiente número del Boletín Oficial⁸⁸.

⁸⁶ Vid. Contra-memoria de Nicaragua.... op.cit., p.302.

⁸⁷ Vid. ibidem, pp.296-297 y pp.298-299, respectivamente.

⁸⁸ Vid. I.C.J.Reports, 1992, p.573, pa.359.

- Más importante es la instauración de una red de servicios de sanidad pública como la establecida por El Salvador a través de un 'Proyecto Sanitario', el cual se puso en práctica en Meanguera en 1964, y que fue completado por un 'Proyecto de Asistencia Médica' del mismo año, junto con otras actividades similares⁸⁹.

- Varias inspecciones y visitas médicas fueron efectuadas en la zona del Templo de Preah Vihear por funcionarios tailandeses, para promocionar medidas para la protección de la salud de los habitantes de esa región⁹⁰.

■ Es competencia de la Administración el nombramiento de los cargos públicos. En este sentido Honduras alude al acto de nombramiento de Alcaldes Auxiliares en varios lugares, concretamente en El Amatillo, La Vecina, La Haciendita, El Limón, La Cuesta, Gualcimaca y El Morral, según consta en los Archivos del Municipio de La Virtud desde 1916 hasta 1969; en Sazalapa y Los Horcones del Municipio de San Juan Guarita, entre 1955 y 1969; y en San Pablo y Los Limones, recogidos en el Archivo del Municipio de Guarita, desde 1927 hasta 1971; todos estos respecto del sector La Sazalapa-La Virtud⁹¹. Esta misma actividad fue desarrollada en el sector de Naguaterique, en el que los Archivos del Municipio de Yarula y el de Santa Elena, recogen los procesos de nombramiento de alcalde para varios pueblos de su jurisdicción desde 1903 hasta 1973;

⁸⁹ Vid. ibidem, p.574, pa.359.

⁹⁰ Vid. Contra-memoria de Tailandia, Asunto del Templo de Preah Vihear, I.C.J. Pleadings, vol.I, p.189.

⁹¹ Vid. Réplica de Honduras..., op.cit., pp.525-536

igualmente en Colomoncagua, entre 1882 y 1971; y en Goascorán en 1982, 1984 y 1986, según recoge el Archivo del Municipio de Alianza⁹².

■ El pago de salarios a empleados y de remuneraciones a funcionarios, es igualmente referido por Honduras en los diversos sectores de la frontera terrestre. La orden de pago a maestros de escuelas rurales públicas que imparten la enseñanza en distintas localidades de los territorios en disputa, práctica efectuada entre 1959 y 1973, se recoge tanto en los Archivos de las correspondientes Municipalidades, como en los del propio Ministerio de Educación Pública de Honduras⁹³.

■ La elaboración de censos sobre los territorios, a efectos de incluir la población existente en el mismo dentro de la estadística nacional ha sido también practicada:

- Un Informe de 19 octubre 1914, del Segundo oficial de distrito tailandés fue presentado con motivo de una inspección realizada en la zona del Templo de Preah Vihear para establecer el censo de las casas y habitantes existentes allí⁹⁴.

- La Oficina de Estadísticas Generales y del Censo de El Salvador, presenta un certificado referente a los sucesivos censos de población llevados a cabo por

⁹² Vid. ibidem, pp.641-647, 734-739 y 838-839, respectivamente.

⁹³ Vid. ibidem, p.489, p.505 y pp.543-545, en las que se especifican las diversas órdenes de pago a maestros en los sectores de Tepangüisir, Cayaguanca y Sazalapa-La Virtud.

⁹⁴ Vid. Contra-memoria de Tailandia..., op.cit., p.189.

El Salvador, especialmente los efectuados en Meanguera entre 1930 y 1971⁹⁵.

■ En el asunto del Templo de Preah Vihear ambas Partes alegaron el mismo tipo de actividad, realizada por autoridades locales en la región donde se hallaba el templo, **visitas oficiales** para inspeccionar la zona y el normal funcionamiento de la administración en ella:

- En 1930 el residente de Francia en la provincia de Kompung Thom, acompañado por el Jefe del Servicio Arqueológico de Camboya y el Sub-Jefe del Gabinete de Servicio Civiles, visitaron el templo acompañados del príncipe de Damrong, miembro de la familia real de Siam; desde 1948 a 1953, el gobernador de Kompong Thom visitó en numerosas ocasiones el Templo⁹⁶.

- Varios informes se refieren a las características del área de Preah Vihear; uno de ellos recoge una inspección efectuada en 1926, estableciendo materias políticas y administrativas relativas al templo. Una carta de 26 enero 1930, del Tercer Gran Canciller, P.P.Korachak, presenta unas fotografías al Rey de Siam y un plan de edificación de la zona, tomadas durante una visita efectuada como Gobernador de Khukhan. En 1925, el Sub-Secretario de Estado del Interior visita Preah Vihear en un viaje de inspección. Igualmente cita Tailandia el viaje del Príncipe Damrong, pero en sentido inverso al de Camboya, es decir, no como

⁹⁵ Vid. I.C.J.Reports, 1992, p.572, pa.359.

⁹⁶ Este último instaló varias estatuas de Buda en el templo, vid. Memoria de Camboya, Asunto del Templo de Preah Vihear, I.C.J. Pleadings, vol.I, p.11.

autoridad extranjera sino como órgano estatal⁹⁷.

■ Teniendo presente las características de la región en cuestión, una actividad a efectuar por las autoridades locales es el mantenimiento, conservación y explotación del terreno:

- El Templo de Preah Vihear, zona de ruínas históricas, desde 1907 es mencionado entre los monumentos históricos de Camboya por los servicios de conservación y arqueología: aparece recogido en el inventario descriptivo de los Monumentos de Camboya, obra del Comandante Lunet de la Jonquière; la decisión de 16 mayo 1925, clasifica con el número 624 al Templo de Preah Vihear en la 'Lista de los Monumentos históricos de Camboya'; se halla sometido a la jurisdicción del organismo público 'Servicios Arqueológicos de Camboya, Escuela Francesa de Extremo Oriente', quien se encarga de los trabajos de limpieza, mantenimiento, y restauración⁹⁸.

- Varios documentos y declaraciones de oficiales forestales tailandeses se presentan como prueba de las inspecciones realizadas en la región de Preah Vihear en 1929, 1930, 1932, 1933, 1937 y 1943 en relación con la sivicultura y la protección forestal. Igualmente, una carta de enero 1926 del Gobernador de la provincia de Khukhan, al oficial del distrito de Nam Om se refiere a una orden exigiendo regulaciones para el cuidado y preservación de objetos arqueológicos⁹⁹.

⁹⁷ Vid. Contra-memoria de Tailandia..., op.cit., pp.189 y 191.

⁹⁸ Vid. Memoria de Camboya..., op.cit., p.12.

⁹⁹ Vid. Contra-memoria de Tailandia..., op.cit., p.190 y p.192.

- Honduras recoge un extracto de un 'Proyecto de desarrollo agrícola' para la Costa de Amates, elaborado por el ingeniero J.A.Martínez, funcionario de la Oficina Regional del Instituto Nacional Agrario en Choluteca en 1989, que pretende una mejor utilización de los recursos naturales de la zona¹⁰⁰.

4. Actividad legislativa.

Reincidimos en la idea de que las disposiciones legislativas, más exactamente su contenido, son el mejor instrumento para probar el ejercicio de autoridad por el acto de disposición que suponen, siempre que no hayan sido objeto de protesta por la otra parte. Sin embargo, el propio acto de promulgación es, en sí mismo, una prueba de actividad estatal, por ello todos los actos legislativos a que nos hemos referido, leyes, decretos..., pueden igualmente mencionarse como prueba de la actividad legislativa del Estado que los aporta. En este sentido, por lo que se refiere a los conflictos de delimitación territorial, Nicaragua ha presentado una prueba de su ejercicio de soberanía fundamentada exclusivamente en un gran número de decretos regulando diversas materias: policía, fiscalidad...¹⁰¹

Aparte de esta remisión a los actos legislativos presentados como prueba de otra actividad, como manifestación legislativa resulta interesante, por un lado, la legislación de arrendamientos holandesa, que según Países Bajos se aplica a las

¹⁰⁰ Vid. Réplica de Honduras..., op.cit., p.903.

¹⁰¹ Vid. Contra memoria de Nicaragua..., op.cit., pp.296-303.

casas construídas en las parcelas disputadas¹⁰²; y, por otro, la delimitación marítima, como la invocada por Honduras, que había establecido en 1900 fijando el trazado a través de la línea media equidistante con Nicaragua¹⁰³.

5. Fuerzas armadas y de policía.

Sin duda alguna, una de las actividades que es alegada con mayor frecuencia por los Estados como prueba del ejercicio de su soberanía es la realizada por fuerzas militares y de policía, para lograr, no sólo la seguridad ad intra sino también ad extra:

■ El Decreto nicaragüense de 13 febrero 1909 regula el establecimiento de puestos de policía en Awastara, con jurisdicción en los caseríos de Dacon y Pájara, distrito de Cabo de Gracias a Dios. Como manifestación de esta misma autoridad, varios decretos de 1908 y 1909 establecen el nombramiento de varios agentes de policía para ese distrito y para Mosquitos¹⁰⁴.

■ Varios informes y cartas de oficiales de Siam, 1935-1938, se refieren a hostilidades en la región fronteriza de Preah Vihear, a los que ha hecho frente el Tercer Ejército Monzón, así como a las visitas de autoridades militares a la zona. Varias declaraciones se refieren al nombramiento de guardianes para el Monte de

¹⁰² Vid. I.C.J.Reports, 1959, p.229.

¹⁰³ Vid. I.C.J.Reports, 1992, p.569, pa.354.

¹⁰⁴ Vid. Contra memoria de Nicaragua..., op.cit., pp.296-303.

Preah Vihear, empleados por autoridades tailandesas¹⁰⁵.

■ Honduras recoge, igualmente, las referencias contenidas en los Archivos del Municipio de Santa Elena en relación a cinco actuaciones de las autoridades de policía en distintas localidades adscritas al mismo, en 1958 y 1959, para controlar desórdenes internos con la consiguiente imposición de multas. En este mismo sector en controversia de Naguaterique, el Archivo del Municipio de Yarula registra un telegrama de 1951 del sub-comandante local al sub-comandante de Tierra Colorada para comunicarle que ha recibido órdenes de los superiores para establecer controles en la frontera con El Salvador¹⁰⁶.

- Asimismo, respecto de la isla Meanguera, Honduras ha ejercido actividad de defensa de los indígenas que allí habitan a través del Alcalde de Tegucigalpa, frente a las incursiones de piratas en 1684 y 1685, como reflejan varios documentos¹⁰⁷.

■ En relación a esta misma isla, El Salvador alega también este tipo de actividad, pero en la época post-colonial; durante el período de 1918-1980, las autoridades militares competentes de El Salvador procedieron a varios nombramientos y órdenes militares afectando al Municipio de Meanguera del Golfo¹⁰⁸.

El ejercicio de jurisdicción militar se alega también por El Salvador respecto

¹⁰⁵ Vid. Contra-memoria de Tailandia..., op.cit., pp.190-191 y 192.

¹⁰⁶ Vid. Réplica de Honduras..., op.cit., pp.639-640.

¹⁰⁷ Vid. Memoria de Honduras..., op.cit., pp.545-549.

¹⁰⁸ Vid. I.C.J.Reports, 1992, p.572, pa.359.

del tercer sector de la frontera terrestre, en base al establecimiento de Puestos Rurales Militares, en el período de 1922-1964, en los que se han apostado comandantes, corporaciones y soldados para formar patrullas militares¹⁰⁹.

■ La prueba del ejercicio de autoridad invocada por Chad, en su controversia con Libia, se fundamenta principalmente en la actividad llevada a cabo en la zona por tropas francesas: éstas ocuparon militarmente el BET, Zouar y Bardai en 1913, instalando patrullas de reconocimiento; posteriormente, en 1938 y 1955, tuvieron la ocasión de sofocar sendos incidentes ocurridos en la región: el primero provocado por trabajadores mineros italianos, el segundo por civiles libios que fueron obligados a retirarse¹¹⁰.

6. Sistema electoral.

En los conflictos de delimitación sí encontramos alguna referencia a actividades relacionadas con la organización de elecciones en los territorios fronterizos en litigio por parte de alguno de los Estados que los reclaman, a diferencia de los de adquisición en los que no hallamos prueba alguna al respecto:

■ El Decreto del Ejecutivo de 1 noviembre 1910 establece la división de la Costa Atlántica de Nicaragua en distritos electorales, a efectos de las elecciones a diputados de la Asamblea Constituyente; el artículo 13 de ese decreto recoge

¹⁰⁹ Vid. Contra-memoria de El Salvador, 10 febrero 1989, parágrafo 4.19.

¹¹⁰ Vid. Opinión disidente de Sette-Camara, I.C.J.Reports, 1994, p.99.

como uno de esos distritos electorales al Cabo de Gracias a Dios¹¹¹.

■ Un extracto del censo de votantes del Municipio de Santa Elena, del período de 1951-1960, es presentado por Honduras como prueba de la actividad electoral organizada por autoridades hondureñas en el sector de Naguaterique¹¹².

■ El Salvador presenta varios documentos referentes a las elecciones celebradas en el Municipio de Meanguera del Golfo en los años 1939, 1941, 1952 y 1984, organizadas por él¹¹³.

7. Fiscalidad.

Varias pruebas podemos recoger en relación la actividad impositiva y tributaria alegada por los Estados:

■ Países Bajos aporta como prueba de su soberanía el hecho de ha recaudado impuestos en las dos parcelas disputadas¹¹⁴.

■ El Decreto nicaragüense de 10 diciembre 1908, aprueba una ordenanza municipal del Consejo para el Desarrollo del Distrito de Cabo de Gracias a Dios que regula su sistema impositivo¹¹⁵.

■ Tailandia recoge declaraciones de varios oficiales del distrito de Nam Om,

¹¹¹ Vid. Contra-memoria de Nicaragua...., op.cit, pp.301-302.

¹¹² Vid. Réplica de Honduras...., op.cit, pp.714-720.

¹¹³ Vid. I.C.J.Reports, 1992, p.572, pa.359.

¹¹⁴ Vid. I.C.J.Reports, 1959, p.228.

¹¹⁵ Vid. Contra-memoria de Nicaragua...., op.cit, pp.299-300.

en las que afirman haber llevado a cabo entre los años 1921 y 1928 la recaudación de impuestos a los habitantes locales del área de Preah Vihear¹¹⁶.

■ Honduras presenta para el sector de Naguaterique y el de Dolores reseñas de varios habitantes de Santa Elena y Opatoro que han pagado contribuciones para llevar a cabo el pastoreo¹¹⁷.

■ El Diario Oficial de El Salvador de 10 diciembre 1919 publica un decreto de 19 noviembre sobre el baremo de los impuestos aplicable en el Municipio de Meanguera del Golfo¹¹⁸.

8. Actos de registro.

Fundamentalmente éstos viene referidos a registros del estado civil, por un lado, y los relativos a la propiedad inmobiliaria, por otro:

■ El volumen más importante de la prueba aportada por Países Bajos se centra en distintas inscripciones recogidas en su Registro Oficial y relacionadas con las parcelas en litigio: inscripción de transmisión de tierras en 1906, registros de nacimientos, muertes y matrimonios de sus habitantes...¹¹⁹.

- Bélgica, por su parte, se refiere a la inscripción en el catastro de las

¹¹⁶ Vid. Contra-memoria de Tailandia..., op.cit., p.189.

¹¹⁷ Vid. Réplica de Honduras..., op.cit., pp.640-641 y pp.804-806.

¹¹⁸ Vid. I.C.J.Reports, 1992, p.572, pa.359.

¹¹⁹ Vid. I.C.J.Reports, 1959, pp.227-228.

parcelas desde 1847 a 1852, y después en 1890¹²⁰.

■ Son numerosos los extractos tanto de nacimiento como de defunción de habitantes de los distintos sectores de la frontera terrestre en conflicto con El Salvador ocurridos en 1878-1988, que presenta Honduras, recogidos todos ellos de su Registro nacional de personas. Igualmente recoge extractos del Registro de la propiedad inmobiliaria y comercial, referentes a contratos de venta, desde 1901-1975, de tierras situadas en las zonas fronterizas de Tepangüisir, Cayaguanca y Sazalapa-La Virtud¹²¹.

■ En el mismo sentido, pero respecto de la Isla de Meanguera, El Salvador ofrece sumarios de actos inscritos en el Registro del Departamento de La Unión relativos a nacimientos y muertes ocurridas en dicha isla en los años 1890-1991; así como una selección de registros de contratos de venta de terrenos situados en Meanguera, en el período 1948-1989¹²².

9. Educación pública.

La organización de la enseñanza desde la Administración de un Estado conlleva, además del pago a los funcionarios que la imparten, acto al que ya nos hemos referido, otros posibles:

¹²⁰ Vid. ibidem, p.227.

¹²¹ Vid. Réplica de Honduras..., op.cit., pp.492-497, 507-508, 552-630, 659-705, 752-782, 816-821, y 861-882, respectivamente para sector; pp.490-491, 506-507, y 546-551, en cuanto al registro de inmuebles.

¹²² Vid. I.C.J.Reports, 1992, p.573, pa.359.

■ A través de varias decisiones administrativas de 1939-1977, registradas en los Archivos de los Municipios de Ocotepeque, Sinuapa, Mercedes, La Virtud, Guarita, San Juan Guarita, Santa Elena, Cabanas, Marcala y Colomoncagua así como otros de la Dirección General de Educación Primaria de Honduras y la de la Comuna de El Conchal, Honduras prueba su actividad en el sector de la educación pública, en toda la frontera terrestre, mediante la adjudicación de importantes subvenciones a escuelas rurales, pago del alquiler de los locales que ocupan las escuelas, el nombramiento público de profesores e institutrices, así como el de directores de distintas escuelas públicas¹²³.

■ Esta actividad ha sido desplegada por El Salvador en la isla Meanguera, mediante la construcción de escuelas y el nombramiento de maestros en los años 1893, 1966 y 1967, así como por la elaboración de Registros Académicos en 1963 y 1988¹²⁴.

10. Disposición administrativa sobre bienes inmuebles.

Además de los actos registrales sobre los propios inmuebles, como son los catastros que se elaboran en cada Municipio para controlar los inmuebles que caen bajo su jurisdicción, a los cuales ya nos hemos referido como actos registrales, encontramos pruebas de otros actos de disposición sobre inmuebles situados en

¹²³ Vid. Réplica de Honduras..., op.cit., pp.484-489, 503-505, 535-543, 653-657, 740-748, 807-810 y 840-842, respectivamente para cada sector.

¹²⁴ Vid. I.C.J.Reports, 1992, p.574, pa.359.

el territorio en litigio por parte autoridades estatales:

■ El Príncipe Frederick de Países Bajos, puso en venta pública, el 19 septiembre 1853, unos lotes de terrenos del Estado cuya venta había sido suspendida en 1845, entre éstos se encontraba una de las parcelas, la número 91, que constitúan el objeto de la controversia¹²⁵.

■ Mediante el correspondiente proceso-verbal mantenido ante las autoridades municipales competentes, éstas deciden acerca de la concesión de tierras situadas en su término municipal; en este sentido son citados por Honduras los procesos verbales que han tenido lugar desde 1886 a 1975, y que se recogen en los Archivos de los Municipios de Santa Elena, Yarula, Colomoncagua y Opatoro, así como en los Archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores respecto de las concesiones otorgadas en Goascorán¹²⁶.

También conforma un acto de disposición administrativo la venta decidida por Honduras en 1854, de una parte de la costa y de las islas del Golfo, a potencias extranjeras¹²⁷.

■ El Salvador recoge extractos de los pertinentes procedimientos mantenidos entre 1966 y 1989 ante el Consejo municipal de Meanguera del Golfo, relativos a concesiones de inmuebles situados en dicho municipio¹²⁸.

¹²⁵ Vid. Contra memoria de Países Bajos, 30 junio 1958, Asunto de la soberanía sobre ciertas parcelas fronterizas, I.C.J. Pleadings, p.74.

¹²⁶ Vid. Réplica de Honduras..., op.cit., pp.657-658, 749-751, 811-812 y 843-860, respecto de los últimos sectores en que se recoge esta actividad.

¹²⁷ Vid. Memoria de Honduras..., op.cit., pp.575-576.

¹²⁸ Vid. I.C.J. Reports, 1992, p.573, pa.359.

11. Sistema de concesiones y ejercicio de monopolios estatales.

Dentro de su poder de disposición sobre el territorio, como prueban las concesiones de terrenos públicos que acabamos de ver, los Estados adjudican como concesión la explotación de ciertos recursos o servicios:

- Los Países Bajos otorgaron una concesión a una empresa privada para construir la línea de ferrocarril entre Turnhout y Tilburg que, entre otros territorios holandeses, cruzaba las dos parcelas en disputa, en una pequeña parte¹²⁹.

- El Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras, recoge las concesiones otorgadas por la Asociación hondureña del Desarrollo Forestal a ciertos particulares, para la explotación de los bosques de la zona sur de la jurisdicción de Amapala y Alianza en Goascorán¹³⁰.

12. Obras públicas.

Prueba de actividades de mejora de la infraestructura de una región, desplegadas por organismos públicos, pueden ser:

- La orden tailandesa de mayo de 1940 que establece el mandato de reparación de varias carreteras, incluye las que atraviesan Preah Vihear¹³¹.

- Mali alude a los trabajos de construcción de caminos en la zona fronteriza

¹²⁹ Vid. I.C.J. Reports, 1959, p.229.

¹³⁰ Vid. Réplica de Honduras..., op.cit., pp.897-902.

¹³¹ Vid. Contra memoria de Tailandia..., op.cit., p.189.

con Burkina Faso, realizados por las autoridades coloniales como prueba de la intención de éstos¹³².

■ Varios documentos se refieren a la inauguración en 1966 de una red de electricidad en la isla de Meanguera, la construcción de un puerto y del edificio del Ayuntamiento en 1967, así como cinco escuelas públicas, por parte del Gobierno salvadoreño¹³³.

13. Estudios cartográficos.

Además del recurso a mapas y otros estudios cartográficos de variado tipo como técnica sumamente utilizada por los Estados a efectos de fundamentar sus reclamaciones a una determinada línea fronteriza¹³⁴, es igualmente posible que éstos sean presentados, no ya como un título legal anexo a un tratado y circunscrito a la prueba de un concreto trazado de frontera, sino como prueba de ejercicio de soberanía. En este sentido, es soporte fundamental del valor de este medio probatorio el rigor de su elaboración, avalado éste por la fuente de que procede.

Aunque no encontramos manifestación en este sentido en los conflictos de adquisición territorial -lo cual no excluye su oportunidad-, sí hay una invocación de

¹³² Vid. I.C.J.Reports, 1986, p.618, pa.120.

¹³³ Vid. I.C.J.Reports, 1992, p.573, pa.359.

¹³⁴ El tema de la cartografía como prueba supletoria en los conflictos de delimitación ya ha sido abordado en el capítulo precedente, en términos generales y particularizándolo a las controversias regidas por el uti possidetis; allí hemos tenido ocasión de constatar la precaución con que debe ser tratado este medio probatorio (vid. supra, pp.258-266).

mapas como prueba en el sentido anteriormente reseñado:

■ Mapa del Estado Mayor Belga, que muestra a las dos parcelas litigiosas como territorio de Bélgica¹³⁵.

Dos observaciones finales referentes a la prueba de la posesión efectiva a través de actos puramente estatales en los conflictos de delimitación:

- La primera, es el dato relevante de que El Salvador, a modo de apéndice de toda su prueba de soberanía y haciendo uso de la posibilidad que prevé el artículo 63 del Estatuto del T.I.J., presenta en la fase oral un testigo natural, el Sr. Avilés Domínguez, ciudadano salvadoreño que vive en Meanguera, que ha declarado acerca de las realidades de vida en la isla, testificando sobre la organización de la administración por este Estado¹³⁶. Se trata de una prueba testimonial¹³⁷ usada muy esporádicamente en el procedimiento internacional -a diferencia de lo que ocurre a nivel interno de los Estados- y que constituye un hito, en lo que a conflictos territoriales se refiere, como manifestación de soberanía estatal. Precisamente esa novedad la ha hecho merecedora de nuestra consideración aparte, si bien, independientemente del valor que le adjudique el Tribunal, no creemos en la oportunidad jurídica de un método probatorio tan 'modelable' como

¹³⁵ Vid. I.C.J.Reports, 1959, p.227.

¹³⁶ Vid. Intervención oral de 29 mayo 1991, C4/CR 91/34, pp.10-52.

¹³⁷ La prueba testimonial se define como "afirmaciones judiciales hechas por personas extrañas a la controversia" (vid. LESSONA, Teoría general de la prueba en derecho civil, 1942, citado en SANDIFER, D.V., op.cit., p.288), y su utilización se regula por los artículos 44 del Estatuto del T.I.J., y 63 de las Reglas de este tribunal, aunque nunca hasta ahora se había recurrido a ella en conflictos territoriales.

es el de los testigos.

- Por último, como resultado de un análisis comparativo de esta prueba con la misma referida a la adquisición, se deja notar una ausencia, importante si tenemos en cuenta que hablamos de territorios fronterizos: no hay alusión alguna a actividad aduanera, que hubiera sido destacable como punto de referencia para la fijación de la frontera. En el mismo sentido, aunque no tan relevante, ninguna prueba se refiere al reconocimiento de una frontera por terceros Estados. Por lo demás, como hemos hecho notar, el volumen de prueba es bastante abultado, ya veremos más adelante si también es consistente.

B) ACTIVIDADES DE CARACTER PRIVADO.

En este sentido, es necesario advertir cómo las pruebas de efectividad en la posesión basadas en este tipo de actos son no sólo escasas, sino casi inapreciables; sin duda, los Estados son plenamente conscientes, con razón, de que una actividad de esta clase carece de valor para enfrentarse a un título jurídico, incluso aunque lo sea simplemente a modo confirmatorio, de ahí que todo el peso de la prueba recaiga en los actos que llevan a cabo auténticos órganos estatales, pues es donde el título legal puede encontrar su Talón de Aquiles. Sin embargo, alguna hay:

- Una declaración de un comerciante de madera tailandés, describe su propio trabajo en los bosques y cazando elefantes, en la década de los veinte, en

la región de Preah Vihear¹³⁸.

■ El Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras contiene extractos referente a declaraciones de posesión de bienes inmuebles situados en el Municipio de Alianza, en Goascorán, efectuadas en 1977-1983 por ciudadanos hondureños. Igualmente, el Archivo y la Oficina Regional del Instituto Nacional Agrario de Choluteca registra desde 1898-1988 a hondureños como propietarios de terrenos en este sector¹³⁹.

C) OTRO TIPO DE ACTIVIDAD.

Por razones análogas a las apuntadas anteriormente, los Estados partes en un conflicto de delimitación tampoco se detienen en la actividad de otras 'entidades' privadas que, de alguna manera, pudiera serles imputable. En efecto, no encontramos ninguna referencia a la actuación de las **Compañías de comercio y colonización** en esos territorio, posiblemente porque las efectividades en las controversias de delimitación se valoran en un momento temporal concreto, período crítico, que suele ser coetáneo a la aparición del título jurídico con el que se comparan, y que, en términos generales es posterior a la actuación de estas entidades.

Por otra parte, en lo que afecta a la actividad eclesiástica, únicamente

¹³⁸ Vid. Contra-memoria de Tailandia..., op.cit., p.190.

¹³⁹ Vid. Réplica de Honduras..., op.cit., pp.883-902.

Honduras recoge pruebas de este tipo de actividad, y lo hace como corolario de la identidad genérica de la jurisdicción estatal y la eclesiástica que existía en la América española:

■ Fundamentalmente, se refiere a **actos de registro** : en este sentido, para todos los sectores en que se ha dividido la frontera terrestre disputada con El Salvador, Honduras presenta extractos de los Archivos Parroquiales de San José de Ocotepeque, San Miguel de Marcala, Santa Rosa de Copán, Goascarán referidos al bautismo de personas que han nacido dentro de los límites de cada sector en el período de 1803-1982¹⁴⁰.

■ Como acto de autoridad eclesiástica, también se detalla la expedición de **certificados de matrimonios** celebrados en la Diócesis de Santa Rosa de Copán, entre 1945-1980¹⁴¹.

SECCION 3ª: LOS RESULTADOS DE LA PRACTICA.

Una vez que hemos precisado en los párrafos anteriores de qué manera han procedido los Estados, partes de una controversia territorial, a probar sus

¹⁴⁰ vid. Réplica de Honduras..., op.cit., pp.509-510, 721-729, 783-791 y 894-895, para cada parroquia mencionada.

¹⁴¹ vid. ibidem, p.792.

alegatos basados en el ejercicio continuo y pacífico de funciones de Estado, es momento ahora de determinar la valoración que de tales pruebas ha hecho la instancia judicial ante la cual han sido presentadas, teniendo presente que esta operación está presidida por el principio de libre apreciación en favor del juez¹⁴².

El peso que debe otorgarse a aquellos actos que sustentan una reclamación de soberanía depende, en palabras del propio T.I.J., "on the complexity of the case and the difficulties of the administration"¹⁴³. Efectivamente, no podemos hablar de la valoración de la prueba como de una cuestión absoluta, pues deben tenerse en cuenta toda una serie de factores que hacen necesaria la individualización del problema caso por caso, y que nos llevan a constatar una diferencia en el peso probatorio de los distintos actos invocados. Estas circunstancias vienen referidas especialmente a la naturaleza física del territorio¹⁴⁴, al hecho de que exista una reivindicación contraria a la misma soberanía, así como al carácter e intensidad de esa demanda. Por ello mismo, es imposible discernir qué técnica de valoración

¹⁴² Efectivamente, las primeras decisiones del T.P.J.I. ya afirmaban claramente, la libertad de que éste disponía para apreciar las pruebas y alegaciones de las partes (vid. entre otras, el asunto de los intereses alemanes en la Alta Silesia, serie A, n.º 7, pp. 72-73, y el asunto de la Fábrica de Chorzow, serie A, n.º 9, p. 19); esta regla, que no aparece recogida ni en el Estatuto ni en las Reglas del Tribunal, según gran parte de la doctrina, constituye un principio general del derecho (vid. LALIVE, J.F., "Quelques remarques sur la preuve devant la Cour Permanente et la Cour International de Justice", Annuaire Suisse de Droit International, 1950, p. 79).

¹⁴³ Vid. Asunto de la soberanía sobre ciertas parcelas fronterizas, I.C.J. Reports, 1959, p. 229.

¹⁴⁴ En el capítulo III (sección 1.ª, apartado C.3) analizamos con detalle las peculiaridades que planteaban las situaciones territorialmente particulares, respecto del requisito de la efectividad de la ocupación; esas mismas observaciones que hablaban de relatividad de la efectividad, tienen cabida en el ámbito de la prueba haciendo clara distinción en el peso probatorio de los actos de efectividad invocados según el territorio sea remoto e inhóspito o perfectamente susceptible de habitación.

emplean los tribunales internacionales¹⁴⁵, pues en la mayoría de las sentencias internacionales emitidas en conflictos territoriales los términos de referencia empleados por éstos son, en general, extremadamente amplios e incluso ambiguos (lo mismo ocurre con los laudos arbitrales), resultando difícil, a veces, encontrar la línea del razonamiento utilizado.

Ante la imposibilidad de establecer, de forma absoluta, un principio rector de valoración que nos permita fijar el peso específico probatorio que lleva atribuido cada acto de Estado alegado, respecto a si es o no manifestación de soberanía sobre un territorio específico (puesto que depende de las circunstancias específicas), corresponde, entonces, el examen concreto de la decisión del juez respecto de cada uno de esos actos que hemos referido en las páginas precedentes.

A) EFECTIVIDADES QUE HAN SIDO RETENIDAS.

Tomando ahora globalmente los distintos actos de autoridad aportados como prueba de ejercicio de soberanía, tanto en los conflictos de adquisición como en los delimitación territorial, el T.I.J y, en su caso, el T.P.J.I., han considerado que

¹⁴⁵ Tal y como expuso Sir L.HEALD, en su intervención oral de 18 septiembre 1953, en el asunto de Minguiers y Ecrehoug, un tribunal que es llamado a decidir sobre dos reclamaciones de soberanía, tiene dos posibles métodos para valorar la fuerza de los títulos invocados: "período por período" (utilizado en el caso de Groenlandia Oriental) o bien, considerar los títulos como un todo, sin hacer una evaluación comparativa de su fuerza en ninguna otra época más que en una fecha determinada -suele ser la de la fecha crítica- (vid. op.cit., pp.46-60).

consiguen crear esa vinculación entre el hecho y el derecho los siguientes:

1. Actos de carácter estatal admitidos como prueba.

Empezando por aquellos hechos que, como hemos indicado en reiteradas ocasiones, constituyen a priori la prueba fundamental del ejercicio de soberanía sobre un territorio, la práctica judicial nos enseña que no todos llegan a determinar la convicción jurídica necesaria en el juez sino sólo aquellos cuya evidencia es más fuerte. A saber:

■ El ejercicio de jurisdicción penal ha quedado claramente demostrado en todos los actos invocados por Reino Unido respecto de la Isla de Ecrehous, así como de Minquiers. De igual manera, aunque sin aludir directamente a las pruebas presentadas, el T.I.J. ha reconocido como ejercicio de soberanía la actividad judicial desplegada por Portugal en sus enclaves. Por último, el tercer volumen de prueba admitido en relación a este tipo de jurisdicción es el correspondiente a los procesos verbales referidos por El Salvador en la Isla de Meanguera¹⁴⁶.

■ Igualmente, la prueba relativa a ejercicio de jurisdicción civil que ha sido admitida en ese sentido es la presentada por Reino Unido en relación a Minquiers

¹⁴⁶ Cfr. Asunto de Minquiers y Ecrehous, I.C.J.Reports, 1953, p.65; Asunto de derecho de paso por territorio indio, I.C.J.Reports, 1960, p.39; y, el asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras, I.C.J.Reports, 1992, p.579, pá.368, respectivamente para cada uno de los supuestos a que nos hemos referido en que se admiten los actos alegados como prueba de ejercicio de jurisdicción penal.

y a Ecrehous, y por El Salvador respecto a Meanguera, tanto en lo referente a la celebración de procesos como al propio nombramiento de jueces¹⁴⁷.

■ Los actos de administración central y local que han constituido prueba de ejercicio de soberanía son:

- Los que Dinamarca ejerció, en términos generales sobre Groenlandia, esto es: fundación tanto de colonias como de estaciones, creación de órganos específicos de administración local y central, la regulación de la entrada al territorio mediante previa autorización y el establecimiento de un específico servicio de sanidad¹⁴⁸.

- El ejercicio de administración local por parte de las autoridades de Jersey, tanto sobre Ecrehous como respecto de Minquiers, como son los relativos a investigaciones sobre cadáveres aparecidos en dichas islas, despliegue de actividad aduanera, elaboración del censo de la población que las habita, regulación de los servicios de Sanidad pública y las visitas de control por parte de dichas autoridades¹⁴⁹.

- Igualmente el nombramiento de autoridades locales efectuado por Portugal respecto de sus enclaves, es considerado como prueba de su soberanía sobre los

¹⁴⁷ Cfr. ibidem, p.63, en el caso del Reino Unido, y p.579, pa.368, para El Salvador.

¹⁴⁸ Cfr. Asunto del Estatuto jurídico de Groenlandia Oriental, P.C.I.J., serie A/B, nº53, 1933, pp.48-55.

¹⁴⁹ Cfr. Asunto de Minquiers y Ecrehous..., op.cit., pp.64-69.

mismos¹⁵⁰.

- La actividad desplegada sobre la región del Templo de Preah Vihear por autoridades francesas y camboyanas: visitas oficiales de inspección de la zona y trabajos de limpieza, mantenimiento y restauración de la misma, es considerada por el T.I.J., como actos rutinarios de administración¹⁵¹.

- Como última referencia a actos de administración que tienen la consideración de prueba de soberanía sobre un territorio, encontramos la actividad desplegada en este sentido por El Salvador sobre la Isla de Meanguera: instauración de servicios postales, establecimiento de una completa red sanitaria y elaboración del censo de población de la isla¹⁵².

■ Por lo que se refiere a la actividad legislativa, todas las pruebas que han sido admitidas en relación a alguna forma de actividad estatal y cuyo documento de referencia era un acto legislativo son, al mismo tiempo, prueba de actividad legislativa. Pero, aparte de esta realidad que ya habíamos constatado anteriormente, la legislación en sentido estricto ha tenido una consideración particular en el asunto de Groenlandia Oriental, donde el T.P.J.I., ante la amplia actividad legislativa manifestada por Dinamarca, ha sentenciado que ésta es "one

¹⁵⁰ Cfr. Asunto de derecho de paso..., op.cit., p.39.

¹⁵¹ Cfr. Asunto del Templo de Preah Vihear, I.C.J.Reports, 1962, p.29-30.

¹⁵² Cfr. Asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima..., op.cit., p.579, pa.368.

of the most obvious forms of the exercise of sovereign power"¹⁵³; y, posteriormente, en el asunto de Minquiers y Ecrehous, al establecer el T.I.J., que "attaches, in particular, probative value to the acts which relate to... legislation"¹⁵⁴, donde se incluyen los presentados por Reino Unido.

En sentido análogo se toma en consideración, tanto la delimitación marítima efectuada por Honduras respecto de la Isla del Tigre, como el decreto salvadoreño de 1919 regulando la actividad fiscal en la Isla de Meanguera¹⁵⁵.

■ Los actos relativos al ejercicio de la defensa armada de un territorio y de seguridad que han sido admitidos son los realizados por Dinamarca en las costas de Groenlandia; por el Reino Unido, a través de las autoridades de Jersey, en Ecrehous; por las fuerzas armadas de Portugal en sus enclaves; y los alegados por El Salvador en la Isla de Meanguera, relativos a varios nombramientos militares¹⁵⁶.

¹⁵³ Concretamente, el Tribunal se refiere a la legislación que regula el monopolio del comercio en favor de Dinamarca, la caza y la pesca, y a la ley de 1905 de delimitación de las aguas territoriales (cfr. Asunto del estatuto jurídico de Groenlandia..., op.cit., p.48 y pp.53-54). También ha tenido consideración positiva la delimitación marítima efectuada por Honduras en la zona de la Isla de Tigre (cfr. Asunto de la controversia fronteriza, insular..., op.cit., p.569, pa.354).

¹⁵⁴ Cfr. Asunto de Minquiers..., op.cit., p.65.

¹⁵⁵ Cfr. Asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima..., op.cit., p.569, pa.354, y p.579, pa.368, respectivamente.

¹⁵⁶ Aunque el Tribunal no se refiere expresamente a la defensa ejercida en Groenlandia por navieros de guerra daneses, tal y como es alegada por Dinamarca en su Memoria (op.cit., pp. 21 y 65), entendemos que es admitida implícitamente por su decisión de que ésta ha desplegado su autoridad sobre ese territorio (cfr. Asunto de Groenlandia..., op.cit., p.51). En cuanto a la admisión de este tipo de prueba en otros asuntos, cfr. Asunto de Minquiers y Ecrehous..., op.cit., p.64; Asunto del derecho de paso..., op.cit., p.39 y Asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima..., op.cit., p.579, pa.368, respectivamente para cada uno según los hemos mencionado.

■ La organización de un sistema electoral únicamente se ha considerado suficientemente probada en el caso de la isla de Meanguera, a través de las elecciones celebradas allí por las administración salvadoreña¹⁵⁷.

■ La actividad fiscal se entiende claramente como prueba de soberanía, en el asunto del derecho de paso por territorio indio, en consideración a los actos alegados en este sentido por Portugal, y en la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima, tal y como se alega ejercida por El Salvador¹⁵⁸.

■ Como prueba de actividad registral, se han retenido, igualmente, tanto las referencias registrales de Portugal respecto a las villas de Maharattes, como los extractos de registro de nacimientos y muertes acaecidas en Meanguera presentados por El Salvador, además de las inscripciones en el catastro de las parcelas litigiosas aportadas por Bélgica¹⁵⁹.

■ La organización de la educación pública como prueba de la soberanía sobre el territorio sobre el que se estructura, lo constituye la establecida por Dinamarca sobre Groenlandia a través de varios decretos, y por El Salvador sobre Meanguera,

¹⁵⁷ Cfr. ~~ibidem~~, p.579, pa.368.

¹⁵⁸ Cfr. ~~op.cit.~~, p.39, y ~~op.cit.~~, p.579, pa.368, respectivamente.

¹⁵⁹ Cfr. ~~Asunto del derecho de paso...~~, ~~op.cit.~~, p.39; ~~Asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular...~~, ~~op.cit.~~, p.579, pa.368; y ~~Asunto de la soberanía sobre ciertas parcelas fronterizas~~, I.C.J.Reports, 1959, p.227.

mediante la creación de escuelas y nombramiento de profesores¹⁶⁰.

■ Como actos que prueban la soberanía de un Estado sobre un territorio el Tribunal ha considerado tanto los tratados internacionales concluidos por Dinamarca con terceros países, como las declaraciones de reconocimiento de su soberanía emitidas por esos terceros Estados¹⁶¹. Igualmente, como fruto de las relaciones diplomáticas, se consideran positivamente las visitas oficiales referidas por Reino Unido respecto de Ecrehous¹⁶².

■ Varios actos de disposición sobre inmuebles han sido admitidos en cuanto constitutivos de manifestación de la soberanía: los contratos de compraventa y arrendamiento concluidos por autoridades inglesas sobre inmuebles situados tanto en Ecrehous como en Minquiers, la venta pública de una parte de las Islas del Golfo realizada por Honduras, y las concesiones de inmuebles situados en el Municipio de Meanguera por autoridades salvadoreñas¹⁶³.

■ En cuanto a las concesiones otorgadas a particulares para fines comerciales o de servicios públicos, únicamente son admitidas las del primer tipo

¹⁶⁰ Cfr., respectivamente, Asunto de Groenlandia..., op.cit., p.51, y Asunto de la controversia fronteriza terrestre..., op.cit., p.579, pa.368.

¹⁶¹ Cfr. Asunto de Groenlandia..., op.cit., pp.55-60.

¹⁶² Cfr. Asunto de Minquiers y Ecrehous..., op.cit., p.65.

¹⁶³ Cfr. Asunto de Minquiers y Ecrehous..., op.cit., p.65 y 69; y Asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular..., op.cit., p.567, pa.352 y p.579, pa.368, respectivamente.

invocadas por Dinamarca partiendo de su monopolio comercial, constituyendo además un pilar fundamental de la prueba de su soberanía sobre Groenlandia¹⁶⁴.

■ Del mismo modo, varias obras públicas erigidas por los Estados en los distintos territorios sí se retienen como manifestación de las efectividades: las autoridades dependientes de Reino Unido han levantado importantes construcciones con fines públicos en Ecrehous y Minquiers, tales como postes telegráficos, astas, gradas, tornos, faros, boyas y otras medidas de seguridad para la navegación; El Salvador se refiere a la implantación de una importante red de electricidad en Meanguera; y Mali a la construcción de caminos por autoridades coloniales en la zona fronteriza, actividad que en opinión del Tribunal es "a significant element of the 'effectivités' which may prove the intentions of the colonial administrators"¹⁶⁵.

■ Finalmente, se ha retenido también la prueba cartográfica presentada por Bélgica en cuanto constituye una corroboración tanto de su título jurídico, como de no haber abandonado su autoridad soberana sobre las parcelas en conflicto¹⁶⁶.

¹⁶⁴ Cfr. Asunto de Groenlandia..., op.cit., pp.48 y 52-53, que se refieren a concesiones de comercio, caza, pesca y explotación minera.

¹⁶⁵ Cfr. Asunto de Minquiers y Ecrehous..., op.cit., p.66 y p.69; Asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular..., op.cit., p.579, pa.368; y Asunto del conflicto fronterizo entre Burkina Faso y Mali, I.C.J.Reports, 1986, p.620, pa.124, respectivamente para cada supuesto de admisión citado.

¹⁶⁶ Cfr. I.C.J.Reports, 1959, p.227.

2. Actos de particulares con valor probatorio.

La actividad privada, que como ya hemos reseñado no es prueba directa de las efectividades estatales, puede, sin embargo, tener cierta incidencia en el proceso probatorio de éstas. Así lo ha considerado el Tribunal, pero únicamente en los conflictos de adquisición y respecto de los siguientes actos:

- El desarrollo de actividad comercial en Groenlandia por el particular beneficiario de la pertinente concesión danesa¹⁶⁷.

- El asentamiento físico sobre las Islas Ecrehous y Minquiers por ciudadanos ingleses, que construyeron edificios¹⁶⁸.

- Celebración de contratos entre particulares que habitaban las mencionadas islas, inscritos en los registros municipales, cuyo objeto era la transmisión de inmuebles en ellas situados¹⁶⁹.

- Explotación de recursos naturales, concretamente el ejercicio de la caza por daneses en Groenlandia, y de la pesca por ciudadanos ingleses tanto en Ecrehous como en Minquiers¹⁷⁰.

- La financiación y ejecución de expediciones científicas a Groenlandia por parte de particulares e Instituciones no-oficiales danesas, a veces bajo los auspicios

¹⁶⁷ Cfr. Asunto de Groenlandia..., op.cit., pp.52-53.

¹⁶⁸ Cfr. Asunto de Minquiers y Ecrehous..., op.cit., p.65.

¹⁶⁹ Prueba admitida en favor de Reino Unido, cfr. ibidem, p.65 y p.69.

¹⁷⁰ Cfr. Asunto de Groenlandia..., op.cit., pp.62-63 y Asunto de Minquiers y Ecrehous..., op.cit., p.64 y p.69.

del Gobierno danés, son también manifestación de la actividad estatal¹⁷¹.

3. Otras actividades que se tienen en consideración.

Nos referíamos en los apartados correspondientes, tanto a los actos que realizan las Compañías de Comercio y Colonización, como, por otro lado, a la propia autoridad que representan las Instituciones Eclesiásticas, en cuanto, uno y otro pueden de alguna manera establecer una vinculación con el Estado, que derive en la imputación final de sus actos como si se tratara de órganos estatales; esta conexión ha sido factible en relación a los siguientes supuestos:

- La fundación de colonias y estaciones por parte de la Compañía danesa de Groenlandia y por la Compañía Bergen; ambas compañías fueron titulares de privilegios de comercio en Groenlandia, otorgados por Dinamarca¹⁷².

- Una importante actividad administrativa fue desarrollada en las islas de Ecrehous y Minquiers por las autoridades eclesiásticas correspondientes de las Parroquias de St.Martin y Grouville, respectivamente, siendo considerada por el T.I.J. como prueba del ejercicio de jurisdicción y administración local sobre esas islas por parte del Reino Unido: actos de policía, como detención de delincuentes e investigaciones de delitos por parte del Condestable de la Parroquia; amplia actividad registral de todas las casas existentes en las islas, que se inscribían en los Registros parroquiales a efectos tanto de tasación como de posterior

¹⁷¹ Cfr. ibidem, pp.62-62.

¹⁷² Cfr. Asunto de Groenlandia..., op.cit., p.48.

recaudación de impuestos parroquiales¹⁷³.

B) EFECTIVIDADES QUE HAN SIDO RECHAZADAS.

Como contrapartida a los actos probatorios referidos anteriormente en cuanto han obtenido el beneplácito del Tribunal Internacional, hay toda otra serie de hechos de similares características (descritos en las secciones precedentes) que han sido rechazados por éste, bien por su menor fuerza demostratoria al entrar en contraposición con otros de mayor solidez -en el caso de controversias de adquisición territorial¹⁷⁴-, bien por no ser suficientes para desplazar al título jurídico al que se enfrentan -como sucede, en términos generales, en todos los conflictos de delimitación-¹⁷⁵.

¹⁷³ Cfr. Asunto de Minquiers y Ecrehous..., op.cit., p.65 y p.69.

¹⁷⁴ Tal es el caso de la prueba presentada por Noruega, que cede en favor de la mayor solidez de la posesión danesa sobre Groenlandia Oriental (cfr. P.I.C.J. serie A/B, nº53, 1933, p.75). Igualmente, respecto de la prueba presentada por Francia relativa a su ejercicio de soberanía sobre Minquiers y Ecrehous, "the Court does not find that the facts invoked by the french Government, are sufficient to show that France has a valid title" (vid. I.C.J.Reports, 1953, p.66 y 70).

¹⁷⁵ Así, por ejemplo, en el caso de la soberanía sobre ciertas parcelas fronterizas, los actos presentados por Países Bajos como prueba de su soberanía, "they are insufficient to displace Belgian sovereignty established by the Convention" (vid. I.C.J.Reports, 1959, p.229).

De forma similar se manifiesta en el asunto del Templo de Preah Vihear: "the Court finds it difficult to regard such local acts as overriding and negating the consistent and undeviating attitude of the central siamese authorities to the frontier line as mapped" (vid. I.C.J.Reports, 1962, p.30).

O en el asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras, donde el rechazo, por parte del Tribunal, a los actos estatales alegados por las partes se justifica con varias fórmulas que se repiten a lo largo del texto de la sentencia: "they are insufficient to constitute an effectivité relevant to the delimitation of the frontier", "neither the circumstances nor the material presented appear to the chamber to rank as an effectivité capable of affecting the decision", "these

1. Actividad estatal rechazada.

A pesar de la presunción probatoria que juega en favor de este tipo de actos, las circunstancias del caso que actúan como factor modificativo, han conducido al Tribunal a desestimar como manifestación de soberanía los siguientes:

■ Los procedimientos criminales alegados por Honduras como ejercicio de *jurisdicción penal en los distintos sectores de la frontera terrestre y en la isla de Meanguera*; lo mismo sucede con los procesos verbales que implican ejercicio de *jurisdicción civil en esos mismos territorios*¹⁷⁶.

Tampoco se acepta como prueba de jurisdicción el nombramiento de Juez de Distrito aprobado por Nicaragua para Cabo de Gracias a Dios, ni la referencia de Honduras en este mismo sentido, respecto de las Islas¹⁷⁷.

■ En cuanto a los actos ordinarios de administración presentados por las Partes, no son prueba suficiente de ejercicio de autoridad los relativos a las siguientes actividades:

are insufficient to support a claim to 'long-term exercise of effective jurisdiction'" (vid. I.C.J. Reports, 1992, p.419, pa.96; p.436, pa.123; p.470, pa.177).

¹⁷⁶ Cfr. ibidem, p.422, pa.102; pp.471-472, pa.180; p.516, pa.265; p.542, pa.304; respecto del último sector que también se presenta prueba de esta actividad, el Tribunal no hace referencia alguna, rechazando globalmente las efectividades; operación que repite respecto de la controversia insular.

¹⁷⁷ Tanto en un caso como en otro la desestimación de las pruebas deriva de la ausencia de referencia a las mismas en favor de la pretensión contraria. Concretamente en lo que se refiere a Nicaragua, en el Asunto sobre la validez del laudo arbitral del Rey de España no hay mención alguna por parte del T.I.J. a las efectividades invocadas por Nicaragua, que se recogen en su contra-memoria, por ello las alusiones que hagamos a la recusación de su prueba no tendrán cita de referencia, remitiéndonos a la general de aceptación de la pretensión contraria (cfr. I.C.J. Reports, 1960, p.217).

- Nombramiento de cargos públicos, tal y como es invocado por Marruecos respecto de dahires y caïdes en el Sahara Occidental, y también por Honduras, al nombrar Alcaldes Auxiliares para distintas localidades de la zona fronteriza¹⁷⁸.

- Pago de salarios y remuneraciones a funcionarios, como el efectuado en tal concepto por el Comité de Puertos de Jersey al propietario de un bote por sus servicios de salvamento en Minquiers, acto que "hardly can be considered as a measure by which authority was exercised" ¹⁷⁹; o el efectuado a maestros de escuelas rurales situadas en localidades de la zona fronteriza, llevado a cabo por Honduras¹⁸⁰.

- La instauración de un servicio público de transporte fluvial de pasajeros y mercancías para el puerto de Cabo de Gracias a Dios, por parte de Nicaragua.

- La realización de informes y trazados hidrográficos sobre el grupo de Minquiers, así como de proyectos hidro-eléctricos por parte de funcionarios franceses, con las consiguientes visitas oficiales a la zona por autoridades de Francia¹⁸¹.

- Los diversos actos alegados por Tailandia como manifestación de autoridad local sobre la región del Templo de Preah Vihear, tales como, inspecciones

¹⁷⁸ De la misma manera que el Tribunal no acepta ninguna de las pruebas de efectividades presentadas por Honduras para los sectores de la frontera terrestre, tampoco admite las alegadas por Marruecos respecto del Sahara; respecto de la actividad mencionada, cfr. ibidem, pp.471-472, pa.180 y p.510, pa.265; y Dictamen consultivo del Sahara Occidental, I.C.J.Reports, 1975, p.45 y pp.47-48.

¹⁷⁹ Cfr. Asunto de Minquiers y Ecrehous..., op.cit., pp.68-69.

¹⁸⁰ Cfr. ibidem, p.516, pa.265 y p.542, pa.304.

¹⁸¹ Cfr. Asunto de Minquiers y Ecrehous..., op.cit., pp.70-71.

médicas, elaboración del censo de la población, visitas oficiales a efectos de control político y administrativo, y protección forestal de la zona¹⁸².

■ La legislación holandesa de arrendamientos, aplicada a las parcelas litigiosas, no es tampoco manifestación de soberanía¹⁸³.

■ Las pruebas relativas a actividad de defensa y policía, puede decirse que han sido más rechazadas que admitidas, pues no se ha tenido en consideración el establecimiento de puestos de policía por parte de Nicaragua en el distrito de Cabo de Gracias a Dios; ni la protección de la región fronteriza de Preah Vihear por el Ejército de Siam, así como las visitas de autoridades militares y los nombramientos de guardianes para la zona; tampoco han sido suficientes las alegaciones marroquíes de política de defensa de la integridad territorial del Sahara; ni la actividad policial de Honduras en distintas localidades de la zona fronteriza, así como de defensa de la isla de Meanguera; igualmente se ha desestimado la alegación salvadoreña de jurisdicción militar respecto del tercer sector de la frontera terrestre, y la actividad de tropas y patrullas francesas en la zona fronteriza entre Chad y Libia¹⁸⁴.

¹⁸² Nuevamente, el T.I.J. rechaza globalmente las efectividades invocadas, en este caso por Tailandia, al resultar insuficientes para desplazar la pretensión contraria pero sin especificar cada uno ni establecer mayor razonamiento (cfr. Asunto del Templo de Preah Vihear..., op.cit., p.30).

¹⁸³ Cfr. Asunto de la soberanía sobre..., op.cit., p.229.

¹⁸⁴ Cfr. Asunto del Templo de Preah Vihear..., op.cit., p.30; Dictamen consultivo del Sahara..., op.cit., pp.45, 47.48; Asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular..., op.cit., pp.471-472, pa.180 y pp.470-471, pa.179; y Asunto de la controversia territorial entre Libia y Chad,

■ Los actos relacionados con la organización de elecciones, como la división de la Costa Atlántica de Nicaragua, incluido el Cabo de Gracias a Dios, en distritos electorales, o el censo de votantes elaborado por Honduras en Naguaterique, no constituyen suficiente prueba de efectividades¹⁸⁵.

■ Varias referencias relativas a recaudación de impuestos han sido totalmente rechazadas; esta actividad fue alegada por Países Bajos respecto de las dos parcelas litigiosas, Nicaragua que la ejercía en el Distrito de Cabo de Gracias a Dios, Tailandia en el área de Preah Vihear, Marruecos respecto de tribus instaladas habitualmente en el Sahara occidental, y también, por Honduras respecto de la frontera terrestre¹⁸⁶.

■ Las referencias a actos de registro de estado civil, nacimientos y muertes, así como de registro de la propiedad, presentadas por Países Bajos, por un lado, y por Honduras, por otro, en sus respectivas zonas en conflicto, son desestimadas¹⁸⁷.

I.C.J.Reports, 1994, p.39, pa.76, respectivamente.

¹⁸⁵ Cfr. Asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular..., op.cit., p.516, pa.265.

¹⁸⁶ Cfr. Asunto de la soberanía sobre..., op.cit., p.228; Asunto del Templo de Preah Vihear..., op.cit., p.30; Dictamen consultivo del Sahara..., op.cit., p.45 y 47-48; Asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular..., op.cit., p.542, pa.304; para cada una de las actividades fiscales referidas que han sido desestimadas.

¹⁸⁷ Cfr. Asunto de la soberanía sobre..., op.cit., pp.227-228, y Asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular..., op.cit., pp.422-423, pa.102, pp.435-436, pa.123, pp.471-472, pa.180, pp.515-516, pa.264 y p.502, pa.304, respectivamente para cada sector en que se invocan actos registrales.

■ Tampoco se ha admitido la actuación de Honduras en relación a la organización de la educación pública en los Municipios situados en los distintos sectores de la frontera¹⁸⁸.

■ Diversos actos de disposición de bienes inmuebles han sido desestimados, como la venta pública por Países Bajos de una de las parcelas litigiosas, o la concesión de tierras adscritas a distintos municipios de la zona fronteriza por autoridades hondureñas¹⁸⁹.

■ En el mismo sentido, se manifiesta el Tribunal respecto del otorgamiento de concesiones por parte de Países Bajos, una línea de ferrocarril, y de Honduras, de explotación forestal¹⁹⁰.

■ Por último, una actividad de obras públicas, como es la construcción y mejora de carreteras -que obtuvo una valoración positiva en Burkina Faso-Mali-, es rechazada por el T.I.J. respecto de la alegación similar presentada por Tailandia¹⁹¹.

¹⁸⁸ Cfr. supra.

¹⁸⁹ Cfr. Asunto de la soberanía sobre..., op.cit., p.229, y Asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular..., op.cit., pp.435-436, pa.123, pp.471-472, pa.180 y p.516, pa.265.

¹⁹⁰ Cfr. supra.

¹⁹¹ Cfr. Asunto del Templo de Preah Vihear..., op.cit., p.30.

2. Actividad privada que se desestima.

Menos sorprendente resulta que el Tribunal rechace pruebas de soberanía basadas en los actos que realizan particulares sobre el territorio, por su escaso alcance en este ámbito:

- El ejercicio de la caza y de la pesca por parte de particulares noruegos, carece de valor frente al mayor rigor de las pruebas de Dinamarca; lo mismo sucede con las expediciones científicas noruegas de carácter privado¹⁹².

- El T.I.J. ni siquiera alude al comercio de madera y la caza practicada por un comerciante tailandés en la región de Preah Vihear, que invocaba Tailandia, lo cual implica claramente su rechazo.

- La posesión física de inmuebles situados en la zona fronteriza de Goascorán por personas privadas, tal y como ha sido presentada por Honduras ha sido rechazada por el tribunal en el conjunto de todas las efectividades alegadas en ese sector¹⁹³.

3. Otras pruebas presentadas que no se admiten.

La escasez de pruebas relativas a otras 'entidades' que no son puramente estatales, motiva que únicamente podamos referirnos a una actividad concreta que

¹⁹² El sostenimiento de la pretensión danesa supone el rechazo implícito a todas las alegaciones noruegas, por ello entendemos rehusada ésta, aunque el tribunal no la mencione lo cual ya implica su desestimación.

¹⁹³ Como ya hemos indicado, en este sector no hay especificación del contenido material de las efectividades por parte de la Sala, cfr. Asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular..., op.cit., p.552.

no ha sido retenida por el Tribunal:

- La actividad eclesiástica referida tanto a actos de registro de bautismo de personas nacidas en los territorios en conflicto, como a la expedición de certificados de matrimonios celebrados en dichas zonas, alegada por Honduras como prueba de ejercicio de jurisdicción sobre tales territorios¹⁹⁴.

C) REFLEXIONES FINALES.

Tras esta exposición detallada de las pruebas aportadas y la valoración que de las mismas ha hecho el Tribunal Internacional, exposición que reconocemos esencialmente descriptiva -lo cual resulta inevitable si pretendemos ser fieles y consecuentes con la realidad que nos presenta la práctica-, no podemos finalizar este apartado sin exponer algunas consideraciones que las líneas precedentes nos sugieren.

Sin duda, la primera observación que resulta inevitable de este estudio es la nula incidencia que la prueba de las efectividades ha jugado en los conflictos de delimitación del territorio, circunstancia que creemos lamentable. En efecto, tomando como referencia el precedente sentado por el asunto de la soberanía sobre

¹⁹⁴ Cfr. Asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular..., op.cit., pp.422-423, pa.102, pp.435-436, pa.123, pp.471-472, pa.180, p.516, pa.265 y p.542, pa.304, respectivamente para cada sector invocado.

ciertas parcelas fronterizas, y consagrado posteriormente por el asunto del Templo de Preah Vihear, ambos casos demuestran que en el caso de que exista un título sobre el territorio establecido a través de un acuerdo explícito entre las Partes, las alegaciones basadas en el ejercicio de actos de soberanía buscando superponerse a las expectativas establecidas en el tratado carecerán de valor, serán en vano. Afirmación que lleva implícita, como demuestra la propia jurisprudencia, que si la frontera viene delimitada por un tratado, la prueba de los actos posteriores de soberanía requeridos en apoyo del título jurídico no necesita ser más que modesta, sobre todo si va acompañada de la aquiescencia de la otra Parte a tal actividad. En este sentido, el T.I.J., en el asunto de la soberanía sobre ciertas parcelas fronterizas, descartó una efectividad real, como era la invocada por Países Bajos, en favor de la letra explícita de un convenio seguida de unos pocos actos belgas de soberanía -actos que a nuestro juicio no eran prueba suficiente de una autoridad efectiva sobre el territorio-. En la misma línea, el posterior asunto del Templo de Preah Vihear confirma ampliamente la jurisprudencia anterior otorgando una importancia al título jurídico que creemos extrema, rehusando, incluso, tomar en consideración otros elementos como las efectividades tailandesas, o la propia imperfección de dicho título, sin ningún tipo de motivación: "the Parties have also relied on other arguments of a physical, historical, religious and archaeological character, but the Court is unable to regard them as legally decisive"¹⁹⁵. Defensor a ultranza del principio de estabilidad de las fronteras como se desprende,

¹⁹⁵ Vid. I.C.J.Reports, 1962, p.15; respecto del argumento de error en la transcripción del mapa sostenido por Tailandia, el Tribunal "thinks that there were other circumstances relating to the Annex I map which make the plea of error difficult to receive" (*ibidem*, p.26).

claramente, de este fragmento:

" In general, when two countries establish a frontier between them, one of the primary objects is to achieve stability and finality. This is impossible if the line so established can, at any moment, and on the basis of a continuously available process, be called in question, and its rectification claimed, whenever any accuracy by reference to a clause in the parent treaty is discovered"¹⁹⁶,

el Tribunal se aferra nuevamente al título legal, sin dar paso a unas pruebas de ejercicio de soberanía que hubieran tenido pleno vigor, pudiendo incluso haber desplazado al título de haberse confirmado la imperfección y el vicio que parecía realmente aquejar a éste, que además, carecía del apoyo de auténticos actos de autoridad. En ambos casos, la incidencia decisiva la proporcionó la existencia de aquiescencia al título jurídico y posteriores actos de soberanía que aportaban Bélgica y Camboya, tanto por parte de Países Bajos, como de Tailandia, respectivamente¹⁹⁷.

Por lo que se refiere a los conflictos regidos por el uti possidetis iuris, pese a los buenos propósitos sentenciados por el Tribunal en el asunto de Burkina Faso-Mali¹⁹⁸, parece quedar todo en un juego de palabras que no llega a hacerse

¹⁹⁶ Vid. ibidem, p.34; esta defensa del principio de estabilidad de las fronteras fue la que motivó, igualmente, la decisión del Tribunal en el anterior asunto de la soberanía sobre ciertas parcelas fronterizas: "The Court reaches the conclusion that the Boundary Convention was intended to determine, and did determine, as between to two States, to wich State the various plots in each commune belonged" (vid. I.C.J.Reports, 1959, p.222).

¹⁹⁷ Lo cual, aunque no dice nada al respecto el T.I.J., produce además otra consecuencia jurídica, el estoppel (ya analizado en páginas anteriores), por el que no se pueden validar sus reclamaciones a algo que con su silencio habían consentido.

¹⁹⁸ Nos estamos refiriendo al interesante juego de interacciones entre uti possidetis iuris y efectividades que tan brillantemente expuso la Sala en este asunto, y al que ya hemos aludido en el apartado correspondiente del capítulo IV (cfr. supra, pp.192-198).

realidad; pues, aparte de la indiferencia absoluta mostrada a las efectividades en el asunto de la controversia territorial entre Libia y Chad, donde el T.I.J. ignora su existencia por entender que "are not matters for determination in this case"¹⁹⁹, en el asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras, campo perfecto para poner en funcionamiento el juego de interacciones entre efectividades y uti possidetis (habida cuenta de la profusión de las pruebas presentadas en relación al ejercicio de soberanía), ha hecho primar a éste sobre aquéllas en los distintos sectores de la frontera terrestre, llegando en cada uno de ellos sistemáticamente a la conclusión de que las efectividades no están suficientemente probadas para poder modificar el trazado derivado del uti possidetis iuris:

"...All in all, as in sectors previously examined, the Chamber does not in any event see here sufficient evidence of 'effectivités' in an area clearly shown... to justify the Chamber in doubting the validity of that boundary as representing the uti possidetis line"²⁰⁰.

Posición ésta que olvida que las efectividades no sólo se alegan para desplazar a éste sino para probarlo y confirmarlo. Sin embargo, y sin entrar en la cuestión de si tal afirmación es o no correcta, creemos que la conclusión del Tribunal no habría variado si las pruebas relativas a las efectividades hubieran sido suficientes. Ciertamente que en la controversia insular la efectividad acompañada de la aquiescencia ha ocupado un papel preponderante, pero no por desplazamiento del título jurídico sino

¹⁹⁹ Vid. I.C.J.Reports, 1994, p.38, pa.76.

²⁰⁰ Vid. I.C.J.Reports, 1992, p.516, pa.266, entre otras.

como prueba y expresión del mismo²⁰¹, lo cual pone de manifiesto cómo en este tipo de supuestos en los que no hay una definida pretensión basada claramente sólo en título jurídico, sólo en situación de hecho, el comportamiento de las Partes actúa como tercer factor determinante de la decisión -tal y como apuntábamos en el primer capítulo de nuestro trabajo-.

Aparte del juicio que nos sugiere esta postura tan extrema del T.I.J. de rechazo sistemático de la prueba de las efectividades en los conflictos de delimitación, sin una clara y convincente justificación, pensamiento análogo parece revertirse de la decisión adoptada por éste en el dictamen consultivo del Sahara Occidental, donde cotejando las pruebas referentes a manifestación de soberanía, sobre todo las de Marruecos cuyo volumen parece ser más importante, el Tribunal niega la existencia de vínculos de soberanía territorial, aunque reconoce la existencia de lazos de alianza personal y otros jurídicos. Esta apreciación del Tribunal, pudiera parecer contradictoria en cuanto, en el contexto local y social de la época que se juzga, los vínculos de alianza implican relaciones de soberanía; precisamente esa despreocupación por la estructura social y política particular que rige el funcionamiento de los pueblos que habitan esos territorios a la hora de

²⁰¹ Efectivamente, aquí los actos de soberanía se constituyen en expresión del uti possidetis iuris, determinando únicamente qué Estado es el sucesor de España, y no como título propio de adquisición, eludiendo claramente el Tribunal la cuestión de si éstos pueden o no desplazar al título (cfr. ibidem, p.566 pa.347). Se pretende así dar satisfacción a dos posturas encontradas: la que afirma la posibilidad de este desplazamiento por la situación de hecho post-colonial, y la que considera que ésta sólo pueda entrar en consideración en caso de insuficiencia del título jurídico, posición ésta mucho más acorde con la propia doctrina del T.I.J. y con la práctica internacional en general.

valorar la prueba aportada, ha conducido a su rechazo por el Tribunal²⁰².

No es posible concluir este capítulo sin observar, analizando las distintas decisiones judiciales a las que hemos hecho referencia, que en algunos casos el Tribunal no ha exigido numerosas manifestaciones del ejercicio de derechos soberanos para entender probado el título, como en los citados asuntos de soberanía sobre ciertas parcelas fronterizas y del Templo de Preah Vihear; en este último caso, el Tribunal reconoce claramente que "France, and subsequently Cambodia, in view of her title founded on the Treaty of 1904, performed only a ver few routine acts of administration in this small area"²⁰³, manteniendo claramente la línea iniciada en 1959. Estas referencias son, sin duda, corroborativas de que no está pre-establecido el número exacto, ni siquiera el número mínimo de actos de soberanía que un Estado debe realizar para poder optar al título territorial. Esta circunstancia reseñada está relacionada con el hecho de que el otro Estado litigante no ha podido hacer valer una pretensión superior, como ha ocurrido en el asunto de Minquiers y Ecrehous, donde las pruebas de soberanía francesas eran muy débiles contrapuestas a las de Reino Unido.

Pero, además, donde esta afirmación es particularmente cierta es en el caso de reivindicaciones de soberanía relativas a territorios remotos, inhóspitos y de difícil

²⁰² Esta además parece ser la opinión de varios jueces, que consideran que teniendo en cuenta esos elementos la conclusión hubiera sido la contraria, es decir, la existencia de lazos de soberanía entre Marruecos y el Sahara: el juez Amoun, el juez Foster y el juez Boni (cfr. I.C.J.Reports, 1975, p.83, p.103 y p.175, respectivamente).

²⁰³ Vid. I.C.J.Reports, 1962, p.29 (el subrayado es nuestro).

habitabilidad; el asunto del Estatuto jurídico de Groenlandia Oriental es especialmente revelador de que la prueba de una posesión debe ser apreciada diferentemente según la naturaleza del territorio en cuestión. En este caso los distintos actos presentados por Dinamarca fueron suficientes para probar su soberanía sobre todo el conjunto de Groenlandia aunque sus establecimientos fueran esporádicos, a lo que se une el dato importante de la ausencia de reclamación contraria durante todo el período de su posesión efectiva; las palabras del Tribunal fueron rotundas en este sentido:

"It is impossible to read the records of the decisions in cases as to territorial sovereignty without observing that in many cases the tribunal has been satisfied with ver little in the way of the actual exercise of sovereign rights, provided that the other State could not make out a superior claim. This is particularly true in the case of claims to sovereignty over areas in thinly populated or unsettled countries"²⁰⁴.

Sin embargo, esta peculiaridad del proceso probatorio de las efectividades no ha sido retenida en el dictamen consultivo del Sahara Occidental cuando realmente las características del territorio parecían hacerlo idóneo para la relatividad. Pero el T.I.J., expresamente, no ha aceptado la similitud con Groenlandia Oriental²⁰⁵, lo cual, no sólo afecta claramente a la valoración de la prueba del ejercicio de soberanía, sino que resulta sorprendente si tenemos presente la dificultad de habitación y de acceso que supone un territorio desértico como el Sahara.

²⁰⁴ Vid. P.C.I.J., serie A/B, nº53, 1933, p.46.

²⁰⁵ Vid. ibidem, p.43, pa.92.

Si tuviéramos que decidir cuál de todos los posibles actos de autoridad estatal prueba mejor el ejercicio de soberanía ante una instancia judicial, sería imposible determinar uno sólo, es el conjunto de una actividad constante y continua de funciones de Estado la mejor prueba.

ABRIR CAPÍTULO VI





ABRIR CAPÍTULO V

CAPITULO VI: EL PROBLEMA DE LA PRUEBA DE LAS EFECTIVIDADES EN LA JURISPRUDENCIA ARBITRAL.

Es una realidad plenamente reconocida en la Sociedad internacional que el arbitraje es el medio más profusamente utilizado para resolver disputas de atribución territorial; y ello, sin duda, por los enormes atractivos que ofrece este mecanismo jurisdiccional de solución de controversias a los Estados litigantes, radicados, fundamentalmente, en el alto grado de control sobre el procedimiento que éstos pueden ejercer. Efectivamente, la elección tanto de la persona del árbitro/s, junto con la determinación de los poderes que se le confieren, así como de los principios y criterios a aplicar por éste¹, constituyen el mejor reclamo del arbitraje, de tal manera que al establecerse los tribunales arbitrales únicamente para un caso específico -dejando de existir una vez que el juicio es pronunciado-, la práctica desarrollada por éstos resulta ser tan variable como lo son sus propias reglas.

Sin embargo, esta peculiaridad no exime a las Partes del sometimiento a principios procedimentales generalmente reconocidos; en este sentido, y revirtiendo al ámbito propio de nuestro estudio, los Estados litigantes en un arbitraje están igualmente vinculados por la obligación de la prueba de sus alegaciones, como si de un arreglo judicial se tratara. Así lo ha venido afirmando la propia práctica

¹ Insistiendo en nuestra postura, podemos afirmar que la conducta de las partes a través de actos de soberanía ha sido recogida en distintos acuerdos arbitrales, constituyendo la mejor base de solución de conflictos de atribución territorial.

arbitral internacional, siendo el más contundente el juez Huber quien, en su arbitraje de la Isla de Palmas, al observar las dificultades que enfrentaba EE.UU. para obtener prueba satisfactoria del ejercicio de jurisdicción por parte de España², declaró que

"l'arbitre... ne peut baser sa sentence que sur les faits allégués et prouvés par les parties, et il est obligé d'examiner tous les faits prouvés qui, à son avis, sont pertinents"³.

Esta afirmación del juez Huber se ha constituido en una consolidada regla procesal internacional, plenamente reconocida no sólo en la práctica judicial, como hemos tenido ocasión de advertir en el capítulo anterior, sino también y como precedente de ésta, en la jurisprudencia arbitral; pues las simples afirmaciones de control sobre un territorio no demuestran por sí mismas el efectivo ejercicio de soberanía. De esta manera, en un arbitraje deben tenerse en cuenta todos los hechos, circunstancias y consideraciones suficientemente probadas por ambas partes⁴ que pudieran influir en el caso; es así como, tras el examen de estos elementos, se puede llegar a una decisión justa que responda a la buena fe que motivó a dos Estados a poner en manos de un árbitro su querella de soberanía territorial.

² Enfrentado a tal dificultad, EE.UU., en su Contra-memoria (p.2), intentó resolverla mediante la admisión de meras afirmaciones con valor probatorio en los siguientes términos:

"if any assertion is made in the Memorandum of either Government which is unsupported by evidence, such assertion must of course fall and be without effect, except in so far as the use of it raises a presumption as to its character in view of the non-production of evidence to support it" (el subrayado es nuestro).

³ Vid. R.G.D.I.P., 1935, p.179.

⁴ Pues aquí, como en el ámbito judicial examinado, cada una de las partes es llamada a probar el título sobre el que fundamenta su reclamación de soberanía; afirmación ésta que también ha sido retenida por el juez Huber (vid. supra).

Es necesario advertir que la prueba presentada en un arbitraje sobre un conflicto de atribución territorial, necesariamente depende de la naturaleza del caso concreto. Si bien, centrándonos en las alegaciones fundadas sobre la posesión efectiva, es posible determinar que los demandantes suelen someter al árbitro documentos e informes de toda clase que muestren que el poder soberano ha sido efectivamente ejercido por ellos sobre un territorio concreto, acompañados éstos con instrumentos probatorios secundarios, como son los trabajos históricos o los cartográficos. La labor arbitral será la de comparar ambos títulos para establecer el más fuerte, la nuestra la de intentar establecer cuales son los medios de que se valen los Estados para probar ante un árbitro el continuo y pacífico ejercicio de autoridad estatal⁵.

Corresponde, pues, llevar a cabo un estudio parejo, y con solución de continuidad, al efectuado en páginas anteriores, en relación a la peculiaridad probatoria de los actos de jurisdicción como título de atribución en los conflictos territoriales conocidos por una instancia judicial; pero referido, en este caso, a las pruebas de efectividades sometidas ante una instancia arbitral, y distinguiendo, como hacíamos y a efectos puramente analíticos, los conflictos de adquisición territorial, de los correspondientes de delimitación. Y como observación previa debemos hacer notar que, si bien los casos de arbitraje conociendo de

⁵ Es momento éste de indicar la dificultad práctica encontrada para recopilar las distintas memorias presentadas por los Estados en el procedimiento arbitral; razón ésta que nos ha obligado a adoptar, en numerosas ocasiones, como único punto de referencia, en este sentido, los propios laudos arbitrales, los cuales no siempre resultan ser la mejor fuente que hubieramos deseado (pues en su mayoría se presentan no motivados y carentes de referencia a las alegaciones de las Partes).

controversias de atribución territorial superan escandalosamente a los correspondientes judiciales⁶, el volumen de prueba presentado por los Estados en apoyo de sus alegaciones de ejercicio efectivo de soberanía es, no sólo cuantitativa, sino cualitativamente superior en los primeros, no faltando casos en que el título de posesión viene sustentado por meras afirmaciones carentes del pertinente fundamento documental.

SECCION 1ª: ANALISIS DE ESTA CUESTION DESDE LOS CONFLICTOS DE ADQUISICION TERRITORIAL.

A diferencia de lo que ocurría en la jurisprudencia judicial, donde los casos de adquisición territorial examinados versaban casi exclusivamente en alegaciones de posesión efectiva por ambas Partes, en los conflictos similares resueltos por vía arbitral encontramos una interesante bifurcación de títulos que, en cierta medida, nos recuerda lo que sucede en las controversias de delimitación fronteriza: oposición entre título jurídico y posesión de hecho. De ahí que no sea extraño encontrar junto a elementos probatorios que se refieren al control sobre el territorio, pruebas contrarias centradas en el propio título legal (aunque con un aporte secundario de posesión), cuya finalidad es la de prevalecer sobre el título exclusivamente posesorio.

⁶ Frente a los diez casos estudiados en el capítulo anterior que hacían referencia a cuestiones tanto de adquisición como de delimitación territorial, podemos referir hasta un total aproximado de 46 conflictos similares, resueltos por vía arbitral.

Las decisiones arbitrales relativas únicamente a la adquisición de territorio son escasas, y todas ellas decididas en estricta aplicación del derecho⁷, salvo alguna leve referencia a la equidad, que, incluso, sólo se entrevé a través de un criterio concreto que en la época fue tenido por pertinente, y que hoy día no tiene lugar: la contigüidad.

■ Entre las islas de barlovento del Mar de las Antillas (15°40' latitud boreal y 63°35' longitud occidental) se halla situada la isla de Aves, cuya soberanía fue objeto de disputa entre Venezuela y Países Bajos. Venezuela hacía valer no sólo su condición de sucesor de España, a quien pertenecía la isla según la ley 1ª, título V, libro I de la Recopilación de Indias, sino que a este título jurídico, que no es sino una derivación del principio del uti possidetis iuris⁸, unía la ocupación militar de la isla. Frente a esta alegación, Países Bajos afirmaba la ocupación de la misma por particulares holandeses. El laudo de 1865⁹ hace derivar la soberanía venezolana, no de la ocupación efectiva que actúa a título confirmatorio posterior, sino del

⁷ A pesar de tratarse de decisiones reguladas por el Derecho, en dos de los casos enmarcados en este contexto se dió potestad al árbitro para decidir ex aequo et bono, en el asunto de la isla de Bulama, y el de la bahía de Delagoa, siempre y cuando no fueran suficientes los títulos presentados, circunstancia ésta que no se produjo.

⁸ Recordamos que esta sentencia ha sido precisamente analizada en el capítulo IV, en cuanto entendemos que se aplica el principio del uti possidetis iuris al establecer la sucesión venezolana al territorio de Aves en los términos mencionados, a los que añade que "il put considérer l'île d'Aves comme partie de la province espagnole de Vénézuéla" (LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.II, p.414). Igualmente resulta reseñable este laudo, como indicamos en su momento, por la interesante interacción que plantea entre el uti possidetis iuris y la posesión efectiva (vid. supra, pp.210-212).

⁹ El laudo de la Reina de España, Isabel II, es de fecha 30 junio 1865 (vid. ibidem, pp.412-415), y nos muestra claramente la particularidad que suponen los contenciosos de islas en la relaciones entre uti possidetis iuris y posesión, tal y como advertíamos en el capítulo correspondiente (vid. supra, p.210).

título legal que es la sucesión; interesante construcción, sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de una controversia de adquisición respecto de las cuales la primacía suele ocuparla la posesión.

■ Gran Bretaña y Portugal tuvieron ocasión de enfrentar sus títulos posesorios, respecto de la soberanía de sendos territorios africanos, en dos ocasiones:

- La isla de Bulama, situada en la costa occidental de Africa y habitada por varias tribus indígenas, separa la desembocadura del Jeba con la del Río Grande, fue descubierta por los portugueses a mediados del s.XV, aunque no llegaron a establecerse hasta el s.XVIII; establecimientos temporales, que unidos a la ocupación solemne a partir de 1829 y al dato geográfico de la contigüidad, constituyen el argumento con el que hacen frente a la reclamación británica centrada en el tratado de cesión concluido con los jefes indígenas en 1792¹⁰.

- Similares argumentos fueron planteados en el caso de la Bahía de Delagoa. Este territorio, situado en el actual Mozambique, fue también descubierto y ocupado por Portugal en el s.XVI, que lo reivindica sobre la base de la continua y pacífica ocupación. La controversia con Gran Bretaña surge en un momento de debilitación de esa posesión, en el que ésta firma, en 1823, un tratado de cesión del territorio en disputa con varios jefes nativos, título jurídico que sostiene la reclamación de soberanía británica¹¹.

¹⁰ Cfr. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.II, pp.604-611.

¹¹ Cfr. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.III, pp.606-636.

Ambos asuntos se aproximan estrechamente, pues, por un lado, los dos suponen una cuestión de ocupación de territorios frente a un título legal, y por otro, se utilizan los mismos procedimientos para establecer y justificar los derechos respectivos; circunstancias a las que hay que unir el dato de que, en ambos casos el árbitro, aún tratándose de dos personalidades diferentes¹², ha llegado a la misma solución -que difiere, sustancialmente, de la dictada en el anterior asunto-: primacía de la ocupación.

■ El 4 de abril de 1928 la controversia que había ido progresando entre EE.UU. y Países Bajos desde hacía unos veinte años, relativa a las diferencias respecto de la soberanía sobre la isla de Miangas, llegó a su fin. En esa fecha el Dr. M. Huber, actuando como árbitro único, decidió¹³, de conformidad con el artículo 1 del Acuerdo Especial de 23 enero 1925, en favor del título holandés, basado en el continuo y pacífico ejercicio de actividades estatales llevado a cabo, sobre todo, por parte de la Compañía de las Indias Orientales, en detrimento de la tesis de EE.UU. centrada en el derecho que surge del descubrimiento español y confirmado por un posterior tratado de cesión.

Nos estamos refiriendo al conocido asunto de la isla de Palmas, supuesto clásico que se ha ganado un lugar en la historia del Derecho internacional si

¹² Concretamente, se trata del Presidente de EE.UU., U.S. Grant, en el caso de la isla de Bulama (laudo de 21 abril 1870, texto en LAPRADELLE et POLITIS, op.cit., pp.612-614), y del Presidente de la República francesa, Mac Mahon (laudo de 24 julio 1875, texto recogido en LAPRADELLE et POLITIS, op.cit., pp.637-638).

¹³ Vid. el texto del laudo en R.G.D.I.P., 1935, pp.156-202.

tenemos en cuenta las numerosas ocasiones en las que la opinión del juez Huber ha sido invocada; a lo que debemos añadir el hecho de que se trata del caso en el que con mayor nitidez aparece sostenida la doctrina de la efectividad, constituyendo una importante contribución al desarrollo del derecho internacional en la materia de soberanía territorial.

■ El caso, sin duda, más controvertido lo constituye el de la Isla de Clipperton, descubierta por España en el s.XV. En este asunto, a diferencia de los hasta ahora expuestos, las alegaciones de ambas Partes se apoyan en un pretendido ejercicio de soberanía. Por un lado, Méjico hace valer su derecho como sucesor de España, confirmado, posteriormente por su ocupación formal de la isla en 1897; el título de soberanía presentado por Francia se basa en la posesión solemne de la misma en 1858. La cuestión que tuvo que resolver el árbitro, el Rey de Italia Victor Manuel, fue la de determinar si en 1897 había una auténtica soberanía francesa que excluyera toda posibilidad de ocupación mejicana. El laudo de 1931¹⁴, consideró que la Isla de Clipperton había sido legítimamente adquirida por Francia en esa fecha y no había razón para suponer que hubiera perdido su derecho por derelictio. Se trata de una sentencia meramente declarativa, que presume realmente un derecho nominal de soberanía, en cuanto esa ocupación no había sido seguida por un ejercicio positivo de autoridad (por lo que se asemeja al título español), lo que es absolutamente contrario a la doctrina sentada por el juez Huber, para quien el derecho de soberanía territorial no puede reducirse a un

¹⁴ Vid. el texto de la sentencia en A.J.I.L., 1932, pp.390-395.

derecho abstracto sin manifestaciones concretas.

Estamos, pues, afrontando reclamaciones diversas de soberanía, la mayoría de las cuales tienen como título principal el ejercicio continuo y pacífico de funciones estatales por, al menos, una de las Partes. Ello nos enfrenta con una prueba referida, por un lado, a las efectividades, por otro, a un título legal (en los casos que procede). Con este planteamiento, centrados en el objeto de nuestro estudio, corresponde exponer en este apartado el volumen probatorio concerniente al primer tipo de alegaciones, siguiendo para ello el hilo conductor marcado en la sección correspondiente del capítulo anterior, y obviando la referencia expresa a cualquier prueba relativa a otro tipo de título adquisitivo.

A) ACTOS DE CARACTER ESTATAL.

Igualmente encontramos en los procedimientos arbitrales alegaciones de ejercicio de soberanía invocadas por las Partes; éstas vienen sustentadas, fundamentalmente, en toda una serie de documentos que intentan probar la existencia de actividad estatal en el territorio disputado. Se trata de una prueba escrita muy reducida y escasa, que se refiere a los diversos actos llevados a cabo por autoridades y agentes que actúan en dicho territorio en nombre y por cuenta del Estado del que son dependientes; auténticos actos de Estado que, como hemos

venido insistiendo, son, a priori, la mejor prueba del ejercicio de la soberanía.

Es dato reseñable, y creemos importante de destacar al respecto, que en los litigios mencionados el **volumen de prueba de actos estatales es sumamente exiguo**; circunstancia, sin duda, sorprendente si tenemos en cuenta que nos estamos refiriendo a conflictos de adquisición, es decir, a alegaciones que tienen como base principal la posesión efectiva, lo cual, reclamaría, en principio, un importante cuerpo probatorio de actos de este tipo.

Teniendo presente esta realidad, no es extraño encontrar lagunas tan destacables como las relativas al ejercicio de jurisdicción, tanto criminal como civil, una de las más claras muestras de soberanía (no hay ningún documento que refleje la celebración de juicios por delitos cometidos en el territorio correspondiente, ni el nombramiento de jueces al efecto), o incluso, las referidas a la disposición sobre bienes inmuebles situados en el territorio que se reclama; son tan sólo un leve reflejo de las carencias que encontramos en este tipo de arbitrajes. Más aún, las escasas referencias que descubrimos como prueba de soberanía en un territorio presentadas por un Estado, resultan ser, casi siempre, meras afirmaciones de hecho, abstractas y sin base documental. En cualquier caso, dado que esta situación es consecuencia de la actividad probatoria ofrecida por ambas Partes, la labor final del árbitro radica en decidir cuál de las dos alegaciones resulta más sólida en última instancia.

La única justificación que encontramos para esta tesitura es el ámbito temporal en que se localizan los conflictos: siglos XVIII-XIX, pues se trata de una época en la que los parámetros de efectividad eran inferiores a las exigencias de

ese mismo tipo que han sido exigidas posteriormente, tanto por la doctrina como por la propia práctica internacional, ya sea judicial o arbitral; marcando, quizá, el asunto de la isla de Palmas el punto de inflexión. Ese nuevo contexto histórico es, precisamente, el que ha envuelto toda la actuación del T.I.J., tal y como hemos analizado en el capítulo precedente. Esta circunstancia justificaría, entonces, la diferencia que observamos en relación a la prueba de efectividades que se ha presentado en los distintos conflictos de adquisición territorial, según se tratara de instancia judicial o arbitral.

Efectuadas estas observaciones, podemos referir a continuación aquellos actos puramente estatales que han sido invocados.

1. Actos de administración central y local.

Ya sabemos, porque así los hemos venido indicando, que al referirnos a actos de administración entendemos incluídos una variedad de actividades propias del poder ejecutivo de un Estado. Igualmente, las pruebas de esta categoría son también reducidas y se refieren a las siguientes:

■ Como primer acto administrativo realizado en un territorio, sin que por ello lo entendamos el más importante en valor probatorio de soberanía, citamos la **fundación de establecimientos invocada por parte de Portugal**:

- Sobre las dos orillas del río Grande, en la Isla de Bulama. Concretamente, había en 1609, en Guinala, un establecimiento portugués que en 1778 era una gran villa

habitada únicamente por portugueses; un nuevo establecimiento tiene lugar en 1830, de más de 700 personas¹⁵.

- En la Bahía de Delagoa, mediante la instalación de varias factorías, en 1589, situadas al centro, al sur y al norte del río de Santo Espírito: unas seis factorías existentes en l'Inhaca, en la Isla de Chefine, y un pequeño establecimiento de doce leguas más allá de la desembocadura del río Mapouto¹⁶.

■ Más importancia podría tener el nombramiento y destitución de cargos públicos para el territorio en cuestión: en 1889, C. Menggasa, hasta entonces jefe de la isla de Miangas, fue destituido de su cargo y reemplazado por otro jefe nombrado directamente por el Residente civil (gobernador) de Manao, dependiente del Gobierno central de Países Bajos. De la misma manera, el Residente de Manao nombró, el 15 septiembre 1889, al jefe de la población de Timpala para la función de 'capitán laoet'¹⁷.

■ La concesión de ayudas a un territorio, a cargo de fondos públicos, es un acto de disposición administrativa sobre aquél que ha sido alegado por Países Bajos: la noche del 29-30 octubre 1904, un tifón destruyó gran parte de los

¹⁵ Vid. Memoria de Portugal, recogida en LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.II, p.608 y 613.

¹⁶ Vid. Memoria de Portugal, en LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.III, p.608.

¹⁷ Vid. Memoria de Países Bajos, 1925, p.18.

establecimientos y plantaciones de Miangas; el Residente de Manao, inmediatamente, prestó auxilio, distribuyó comida y otras cosas de primera necesidad, y proveyó a la población con nuevo material de plantación¹⁸.

■ Dentro de las competencias propias de un ejecutivo está la de efectuar **visitas oficiales** por las autoridades centrales a aquellos territorios que se entienden bajo su soberanía. Son numerosas, en ese sentido, las que se citan en la memoria de los Países Bajos y que tienen lugar en Palmas:

- El 12 y 20 noviembre 1700, por Jan de Hooft acompañado de tres barcos, en misión oficial por orden del Gobernador de las Molucas.

- En 1895, el Residente de Manao, Jellesma, visitó la isla acompañado del oficial civil de Taroena, y otras visitas similares se repitieron en 1896, 1898 y 1900.

- En noviembre de 1906, el Residente-auxiliar visitó la isla, inspeccionando la escuela, cuyo tejado había sido reparado para la ocasión. A partir de esa fecha, las visitas a la isla por autoridades holandesas tuvieron carácter regular¹⁹.

- Por su parte, EE.UU. cita también este tipo de actos como prueba de su soberanía sobre Palmas, concretamente recoge el texto de la declaración de Mr.Frank Carpenter, 10 marzo 1926, en la que menciona una visita del general Leonard H.Wood a la isla en 1903²⁰.

¹⁸ vid. ibidem, p.20.

¹⁹ vid. ibidem, pp.12, 19 y 20.

²⁰ vid. Contra-memoria de EE.UU., p.113.

■ Como constitutivo de un acto de administración local se menciona la realización de informes hidrográficos relativos al territorio: con motivo de las visitas del Residente de Manao a Miangas, se efectuaron varios informes hidrográficos de la zona, en 1895 y 1898²¹.

2. Actividad legislativa.

El despliegue de actividad legislativa sobre los cinco territorios objetos de arbitraje para resolver su adquisición, a la luz de las pruebas presentadas parece ser casi nulo. Tan sólo en un caso, la bahía de Delagoa, encontramos recogidos tres textos legislativos que se han presentado como prueba de soberanía, y referidos a una parcela de actividad estatal muy 'particular'; son los siguientes:

- Ordenanza del gobierno portugués, 10 junio 1755, liberalizando el comercio en la Bahía de Delagoa para sus nacionales, a excepción del vidrio; - Ordenanza de 7 mayo 1761 que liberaliza el comercio del vidrio en esa zona; - Decreto de 17 octubre 1853, que declara abierto el comercio en general, en la región de Delagoa, a los extranjeros²².

Dato especialmente revelador, si tenemos en cuenta que en los correspondientes conflictos resueltos por vía judicial, los distintos actos legislativos presentados por los Estados no sólo eran prueba de una concreta actividad legislativa sobre un territorio, sino que por su contenido lo eran, igualmente, de

²¹ Vid. ibidem, p.19.

²² Vid. Memoria de Portugal..., op.cit., p.610.

toda la actividad estatal desplegada sobre el mismo; sin olvidar la afirmación del propio T.P.J.I., ya aludida, de que es una de las más claras pruebas de ejercicio de poder soberano²³. Así pues, entendemos que ésta laguna resulta doblemente censurable.

3. Actos de defensa: fuerza armada y de policía.

Si tuviéramos que determinar, en algún momento, cuál es el acto de soberanía más profusamente invocado -sobre todo en los que a procedimientos arbitrales se refiere-, sin duda alguna señalaríamos la actividad de defensa. En efecto, el asentamiento de tropas en un territorio, así como la construcción de fortificaciones y cuarteles militares, y sobre todo la puesta en funcionamiento de todo ese mecanismo, son los actos estatales alegados por las Partes como la prueba más fehaciente de su posesión efectiva del territorio sobre el que se despliegan:

■ El 12 diciembre 1854, el Coronel Domingo Díaz llegó con 27 soldados a la isla de Aves, enviado por Venezuela, instalándose allí con toda su artillería, confirmando así la soberanía venezolana sobre la isla²⁴.

■ A partir de 1829, fecha de la ocupación solemne de la Isla de Bulama por Portugal, ésta construye varios cuarteles militares en la isla²⁵.

²³ Vid. P.I.C.J., serie A/B, nº53, 1933, p.53.

²⁴ Vid. Memoria de Venezuela, en LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.II, p.415.

²⁵ Vid. Memoria de Portugal..., op.cit., p.608.

■ Para defender sus derechos de primer ocupante, en la primera mitad del s.XVIII, Portugal establece varias fortificaciones en la región de Delagoa: al sur de l'Inhaca, al norte de Manhiça, en la Isla Benguelene, en la Isla Chefine y al centro del río del Santo Espírito. Como consecuencia de este eficaz establecimiento defensivo, Portugal cita:

- La expedición militar organizada el 15 mayo 1779, para expulsar a unos británicos que pretendían instalarse en la bahía.
- Expulsión a boca de cañón de un naviero inglés que se había introducido en la bahía en 1815 con intención de organizar una red de contrabando.
- Igualmente se llevaban a cabo represiones internas por parte de oficiales portugueses respecto de los indígenas: en 1552, por haber incendiado un pueblo y dado muerte a su jefe en la región de Tembe; expedición punitiva dirigida contra una tribu, en 1824, en la región de Mapouto; solicitud de protección por los reyezuelos al gobierno portugués, en calidad de vasallos, frente a la revuelta de las tribus Cafres (1793-1819); en 1688-1735, los indígenas solicitan a los portugueses que expulsen a los holandeses²⁶.

■ Un oficial de guerra holandés patrulló durante el curso de la guerra entre España y EE.UU., varios meses de 1898, las aguas que rodean Miangas para proteger la neutralidad de Países Bajos; el buque 'Edi', encargado de esos servicios de patrullaje, visitó entre otras la isla de Miangas²⁷.

■ Igualmente, EE.UU. presenta prueba del ejercicio de defensa sobre la isla

²⁶ Vid. Memoria de Portugal..., op.cit., pp.608 y 610.

²⁷ Vid. Memoria de Países Bajos..., op.cit., p.19.

de Palmas. Un informe de M.C.Alvarez, 19 junio 1919, se refiere al envío de un cañonero por el gobierno español a la isla, retornando esclavos, recapturados a los moros; el cañonero continuó visitando la isla dos veces al año²⁸.

■ Tras la toma de posesión solemne de la isla de Clipperton en 1858, por un oficial de la marina francesa, Le Coat de Kervéguen, una División Naval de Francia se establece en las aguas adyacentes a la isla de forma permanente²⁹.

4. Fiscalidad.

Encontramos una única referencia al establecimiento de un sistema impositivo sobre el territorio reclamado, como prueba del ejercicio de funciones de Estado: EE.UU. alega, en calidad de sucesor, el nombramiento por autoridades españolas de un agente para recaudar el impuesto de cédula en la Isla de Palmas³⁰.

5. Relaciones diplomáticas.

En este epígrafe pretendemos incluir todos aquellos actos realizados por un Estado que tienen por finalidad obtener de terceros el reconocimiento de su soberanía sobre el territorio disputado, y que éstos presentan como medio de

²⁸ Vid. Memoria de EE.UU., 1925, p.97.

²⁹ Vid. Memoria de Francia, 1912, p.245.

³⁰ Vid. Contra-memoria de EE.UU., p.110.

prueba de su posesión efectiva. Al hablar de terceros nos referimos tanto a otros Estados, como a la propia población autóctona, en los casos en que ésta tiene la suficiente entidad -organización social y política- como para que sus actos tenga cierta relevancia en el plano internacional³¹.

■ La declaración efectuada en 1828 por los jefes de las tribus Bissagos y Biafres, que habitan la isla de Bulama, reconociendo la soberanía portuguesa de la isla y, al mismo tiempo, rechazando la de Gran Bretaña, es presentada por Portugal como una prueba más de su soberanía³².

■ Un tipo de prueba similar es presentado por Portugal respecto de la bahía de Delagoa: la cesión efectuada por el Rey de Monomotapa, cuyos dominios se extendían más allá de esta bahía y del cabo de Buena Esperanza, era expresamente reconocida por los reyezuelos de la bahía que se consideraban vasallos de la Corona portuguesa y lo afirmaban mediante un reconocimiento escrito³³.

- El derecho de Portugal era igualmente reconocido desde el s.XVI, tácita y expresamente, por las obras de geógrafos, escribanos y por los propios Gobiernos de Europa: Austria se pronuncia en este sentido, en 1782, tras la expulsión de la zona de uno de sus oficiales y sus tropas; incluso la misma Inglaterra, en el tratado de 1817, relativo a la trata de esclavos, por el que se considera la bahía como línea

³¹ El tema de las tribus indígenas como posibles sujetos de derecho internacional ya ha sido abordado en el capítulo III, al analizar el problema de la terra nullius, así como la eficacia de los tratados de cesión de territorio que éstas concluyen con Estados (vid. supra, pp.142-145).

³² Vid. Memoria de Portugal..., op.cit., p.608.

³³ Vid. Memoria de Portugal..., op.cit., p.610.

de las posesiones portuguesas en Africa oriental³⁴.

6. Sistema de concesiones y ejercicio de monopolios estatales.

Entendemos que existe una íntima relación entre la gestión por parte de un Estado de una actividad monopolística suya respecto de un territorio concreto, y la concesión a particulares para la explotación de actividades que, de no ser concedidas, serían competencia estatal. En ambos casos se ven afectados sectores propios del Estado, por lo que las alegaciones referidas, tanto al funcionamiento del monopolio, como al acto mismo de la cesión de éste a particulares, se presentan como prueba de actividad estatal en el territorio sobre el que se despliegan.

■ En diciembre de 1854, el Gobierno de Caracas otorgó una concesión para la extracción de guano en la Isla de Aves, de una duración de 15 años, a un ciudadano norteamericano, J.D.Wallace. Posteriormente, un decreto presidencial abre la exportación del guano al comercio extranjero³⁵.

■ La soberanía sobre la bahía de Delagoa ha sido ejercida por Portugal, en un primer momento, mediante el monopolio de la navegación, y del comercio en la zona, situación que se mantiene hasta 1755, época en que liberaliza, por una ordenanza de 10 junio, este último para los nacionales a excepción del vidrio; éste se declara libre por otra ordenanza de 7 mayo 1761, y finalmente se abre a los

³⁴ Vid. ibidem, p.610.

³⁵ Vid. La referencia a esta alegación venezolana en IRELAND, G., Boundaries, Conflicts and Possession in Central and North America and the Caribbean, Harvard University Press, 1941, p.247, que recoge varias partes de la memoria de Venezuela en el conflicto de la isla de Aves.

extranjeros por decreto de 1853³⁶.

■ Francia alega, de forma subsidiaria a su ocupación solemne de la Isla de Clipperton en noviembre de 1858, el hecho de que ésta había estado precedida por la concesión, en abril de ese mismo año, a un armador de Havre, M.Lockhardt, de la explotación del guano que pudiera encontrar en la isla³⁷.

7. Estudios cartográficos y otras pruebas geográficas.

Tanto los mapas, en cuanto constituyen prueba de soberanía y no en su carácter habitual de anexos a un tratado, como ciertas alegaciones puramente geográficas, son presentadas por las Partes para mostrar su soberanía sobre un territorio determinado, si bien conscientes de su carácter secundario. A los primeros ya nos referimos en el capítulo anterior, respecto de los segundos el principio de la contigüidad³⁸ es, sin duda, el dato geográfico más invocado en el sentido reseñado por Jennings: "no more than evidence raising some sort of presumption of effective occupation; a presumption that may be rebutted by better evidence of sovereign possession by a rival claimant; if this were not so, a State might be able to argue that it had legal title over a 'contiguous' territory over which

³⁶ Vid. Memoria de Portugal..., op.cit., pp.608 y 610.

³⁷ Vid. Memoria de Francia, op.cit., p.245.

³⁸ Según opinión mayoritaria que compartimos, el título de contigüidad, entendido como base de soberanía territorial no tiene fundamento en derecho internacional (cfr., entre otros, VERSFELT, W.J.B, The Miankas Arbitration, Utrecht, 1933, p.149).

another State already enjoys a title coupled with possession"³⁹.

■ Países Bajos basa su soberanía sobre la isla de Aves, no sólo en el dato geográfico de la **dependencia natural**, sino en la opinión de varios geógrafos que la han considerado como territorio holandés: cita un total de dieciocho geógrafos conocidos, de los siglos XVIII y XIX, holandeses, franceses, alemanes e incluso, españoles y venezolanos, como A.de Alcedo, Codazzi y Montenegro de Colón. Así como mapas antiguos, en los que figura unida a la isla de Saba, constituyendo un territorio único, del que no figura ni fecha ni autor⁴⁰.

■ La doctrina de la contigüidad es invocada por Venezuela, respecto de la isla de Aves, al estar próxima a las costas venezolanas lo que le da un derecho de preferencia⁴¹.

■ Postura similar es la sustentada por Portugal en la isla de Bulama, alegando la contigüidad de la misma al ser adyacente al continente, concretamente al territorio de Bissao que también le pertenece⁴².

■ Según EE.UU., la isla de Palmas no es sino una parte integrante del grupo de las Filipinas; todo él bajo soberanía española⁴³.

■ Francia alega también, como prueba de su soberanía sobre la isla de

³⁹ Vid. JENNINGS, R.Y., The Acquisition of Territory in International Law, Manchester, 1963, p.75.

⁴⁰ Vid. Memoria de Países Bajos, en LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.II, pp.410-412.

⁴¹ Vid. Memoria de Venezuela..., op.cit., p.411.

⁴² Vid. Memoria de Portugal..., op.cit., p.613.

⁴³ Se trata, pues, de una nueva alegación del principio de contigüidad. Vid. Memoria de EE.UU., op.cit., p.111.

Clipperton, el apoyo de los estudios cartográficos; concretamente una obra francesa, el Atlas de geografia moderna de Schrader, en el que la isla se encuentra atribuida a Francia, forma parte del programa de enseñanza secundaria de México⁴⁴.

B) ACTOS DE DERECHO PRIVADO.

Igualmente resulta reducida, en las controversias de adquisición analizadas, la prueba de efectividades a través de la actividad desplegada en el territorio disputado por parte de particulares, especialmente por nacionales del Estado que lo reclama. Si bien, este mecanismo probatorio ha constituido en un caso concreto (la Isla de Aves) el título principal de una de las Partes, debemos tener en cuenta que la actividad privada en un territorio conforma una prueba secundaria y no autónoma del ejercicio de soberanía sobre éste, al estar supeditada su eficacia jurídica en este aspecto, a un mínimo de presencia estatal que lo avale (por lo que cabe augurar, a priori, su menor fuerza).

1. Asentamiento, propiedad privada y posesión física de inmuebles.

La habitación y posesión privada del territorio litigioso por nacionales de un

⁴⁴ Vid. Memoria de Francia, op.cit., p.71.

Estado es alegada por éste como prueba de su propia posesión en los siguientes casos:

- Países Bajos hace valer, como prueba de su soberanía, la residencia temporal en la Isla de Aves por parte de nacionales holandeses, establecidos en Saba y San Eustaquio, a partir de mediados del siglo XVIII; estos particulares, pescadores, residían en la isla tres o cuatro meses al año⁴⁵.

- Los numerosos establecimientos que Portugal fundó en la Isla de Bulama eran habitados, durante largo tiempo, únicamente por ciudadanos portugueses, posesión que se transmitía de padres a hijos⁴⁶.

2. Extracción y explotación de recursos naturales.

La utilización económica del territorio, a través de la extracción privada de los recursos que en ella se encuentran también ha sido invocada como prueba de soberanía:

- Desde tiempos inmemoriales, los habitantes de las islas holandesas de Saba y San Eustaquio, ejercen la pesca de la tortuga y la recolecta de huevos de ave. Esta actividad es presentada por Países Bajos como auténtica prueba de posesión, por tratarse de los únicos usos posibles de dicha isla⁴⁷.

- La isla de Bulama era utilizada por los portugueses para la tala de madera

⁴⁵ Vid. Memoria de Países Bajos...., op.cit., p.415.

⁴⁶ Vid. Memoria de Portugal...., op.cit., p.613.

⁴⁷ Vid. Memoria de Países Bajos...., op.cit., p.410.

de los bosques existentes en la misma, con la finalidad de construir fortificaciones en Bissao⁴⁸.

C) OTRO TIPO DE ACTOS ALEGADOS.

Resta por efectuar una última referencia a otra clase de actividad que ha sido igualmente utilizada, aunque tan sólo en un caso, como prueba del ejercicio continuo y pacífico de funciones de Estado, constituyendo, además, el argumento principal del título posesorio de la Parte que lo invoca. Nos estamos refiriendo, en concreto, al asunto de la isla de Palmas en el que, como hemos tenido oportunidad de advertir, el título de soberanía presentado por Países Bajos descansaba, fundamentalmente, en la actividad llevada a cabo por una **Compañía de colonización**, la Compañía de las Indias Orientales, actuando bajo su mandato⁴⁹; de hecho, el árbitro que resolvió la controversia, no tuvo ninguna duda en asimilar tal actuación al obrar del propio Estado holandés.

El volumen probatorio correspondiente viene conformado por los siguientes actos:

⁴⁸ Vid. Memoria de Portugal..., op.cit., p.608.

⁴⁹ Una 'carta' del Gobierno de Países Bajos autoriza a esta Compañía a actuar por cuenta y en nombre de él, e incluso, a concluir tratados en nombre de Países Bajos (artículo 35). Posteriormente, bajo la Constitución de la República de Batavian de 1795 (hoy Reino de Países Bajos), esta República sucedió en todas las posesiones a la Compañía de las Indias Orientales (cfr. al respecto, Memoria de Países Bajos, op.cit., p.11).

1. Convenios con los jefes nativos.

Aunque sin el carácter de auténticos tratados internacionales, se concluyen toda una serie de acuerdos de variada índole entre dicha Compañía y los jefes de las tribus, que se presentan como prueba de la supeditación de éstos:

- En 1677 el rey de Tawoekan, cuyo territorio comprende Miangas, firmó un convenio con el Gobernador holandés de Ternate, R.Padtbrugge (nombrado por la Compañía de las Indias Orientales), al cual se adhirió el príncipe de Taroena; el artículo 13 de este convenio muestra que ya en 1670 existían relaciones políticas entre la Compañía y Tawoekan.
- El 20 y 30 julio 1697 siguieron otros convenios similares, tanto con Taroena como con el pequeño Estado de Sangihe; lo mismo sucedió en 1720 y fechas posteriores⁵⁰.

2. Fuerza armada y de policía.

La organización de la Compañía estableció, bajo su mandato, un eficaz sistema defensivo y de orden público en la zona, con auténtico carácter estatal:

- En 1681, Padtbrugge sofocó un movimiento insurreccional en las islas Sangihe, restaurando el orden de Tawoekan y Taroena.
- La policía allí instituida extendió y confirmó la influencia holandesa en esa parte del archipiélago, a través de un nuevo convenio con Tawoekan, 16 noviembre

⁵⁰ Vid. Memoria de Países Bajos, op.cit., p.11.

1720, 10 febrero 1726, y 18 mayo 1758. Con otros seis príncipes se firmaron dos convenios de 27 mayo 1771, dirigidos a contrarrestar los ataques de los piratas y la venta de cristianos a éstos.

- El 12 noviembre 1779 fue firmado otro convenio entre seis príncipes de las islas Sangihe y Talaud y un comisionado especial de la Compañía, estableciendo reglas en relación a los barcos y fuerzas con las que combatir a los piratas de Magindanao⁵¹.

3. Jurisdicción criminal.

El ejercicio de autoridad por parte de la Compañía de las Indias Orientales sobre Palmas, se extiende incluso a la regulación de los procedimientos criminales en la misma, lo cual es prueba, al mismo tiempo de una **actividad legislativa**. En este sentido Países Bajos refiere que, con ocasión de la visita de los comisionados de la Compañía a la isla de Miangas en 1701, establecieron una regulación relativa al procedimiento a seguir en casos de asesinato y homicidio involuntario; la finalidad perseguida era la de frenar el trato extremadamente cruel y duro que se impartía, por parte de los nativos, a los que cometían crímenes de esa naturaleza⁵².

⁵¹ Vid. ibidem, pp.11, 15 y 16.

⁵² Vid. ibidem, p.13.

4. Fiscalidad.

Igualmente, la Compañía estableció un sistema tributario sobre la población autóctona bajo su jurisdicción: desde 1895 se pagaban impuestos sobre la base del convenio de 1885, que así lo había fijado. Antes de esa fecha, desde tiempo inmemorial, los habitantes de Miangas pagaban un tributo a los príncipes de Tawoekan en la forma de 'tikars'⁵³.

Además de la importante prueba de soberanía sobre la isla de Palmas que supone la actividad desarrollada en ella por la Compañía de las Indias Orientales, Países Bajos completa ésta con una referencia a ciertos actos realizados en la misma por otra entidad social, la Iglesia, en cierta medida vinculada al propio Estado, y, por consiguiente, prueba de apoyo de su soberanía. Se trata de una actividad que, si bien no es indicativa de un control eclesiástico efectivo, comporta la manifestación de su presencia en el territorio:

■ **Construcción de iglesias:** en 1898 fue levantada una iglesia protestante en la isla.

■ **Impartición de la educación:** igualmente, en 1898, se construyó una escuela misionera protestante encargada de impartir enseñanza en la isla. A estos efectos, desde noviembre de 1905 había un 'goeroe', maestro nativo religioso, que también era el director de la escuela⁵⁴.

⁵³ vid. ibidem, p.19.

⁵⁴ vid. ibidem, p.20.

SECCION 2ª: LA PRACTICA ARBITRAL EN LOS CONFLICTOS DE DELIMITACION.

Como tuvimo ocasión de constatar en la sección correspondiente del capítulo anterior, en las disputas de delimitación conocidas por un arbitro o tribunal arbitral - al igual que ocurría con las resueltas por una instancia judicial-, también encontramos reclamaciones a un determinado trazado basadas en el ejercicio de funciones de estado sobre el territorio por el que se pretende que la frontera discurra, normalmente enfrentadas a una reclamación opuesta centrada en un título jurídico, o bien, como complemento a éste⁵⁵. En este sentido, varias de las sentencias arbitrales que tendremos oportunidad de analizar tienen por objeto principal la interpretación de un tratado fronterizo, de un título jurídico. En estos casos, gran parte de la prueba presentada por las Partes en apoyo de sus pretensiones mutuas, se centra en la práctica posterior a la conclusión del tratado; en particular, el desarrollo de prácticas administrativas o la posesión de áreas previamente despobladas pueden ser decisivas en la interpretación de términos ambiguos de un título legal.

Cuando esto ocurre, es decir, cuando una frontera internacional está basada en la prueba de actos de soberanía, el peso que debe atribuirse a tales actos

⁵⁵ No queremos pecar de repetitivos, por ello, teniendo presente que la problemática general relativa a la interacción entre título jurídico-uti possidetis iuris (en su caso) y efectividades, ha sido oportunamente abordada en los dos capítulos precedentes, entendemos aplicable respecto de los arbitrajes todo lo allí expuesto.

depende de las particulares circunstancias de cada caso. Será necesario considerar las peculiaridades físicas del terreno donde esos actos se realizan o están siendo realizados y, por supuesto, la naturaleza de los mismos. El examen del árbitro tanto de la prueba relativa a esos actos de autoridad como, posteriormente, el análisis comparativo de ésta con la correspondiente al título al que se oponen determinará el valor jurídico que los mismos poseen.

No obstante el elevado número de arbitrajes que resuelven delimitaciones de fronteras, no todos ellos contienen alegaciones basadas en el ejercicio de soberanía⁵⁶, por lo que prescindimos de los mismos y pasamos a analizar aquéllos en los que las efectividades han jugado algún papel. Respecto de estos últimos es interesante hacer notar que, en varios casos, la prueba relativa a posesión efectiva presentada por alguna o ambas Partes es ostensiblemente superior a la reseñada respecto de los conflictos de adquisición; aunque, ciertamente, nos situamos en una época posterior en la que, como hemos tenido ocasión de advertir, se agudiza el requisito de la efectividad.

⁵⁶ Hemos llegado a identificar un total aproximado de cuarenta y un conflictos de delimitación territorial resueltos por vía arbitral (árbitro, comisión o tribunal arbitral), siendo el arbitraje del Río St.Croix, 1798, el primero (además de ser el primer ejemplo moderno de sentencia internacional), y el asunto de la Laguna del Desierto entre Chile y Argentina, 21 octubre 1994, el último de ellos. De éstos, únicamente podemos localizar veinte que hagan referencia al papel de las efectividades en tales controversias. De los veintiuno restantes, centrados fundamentalmente en criterios geográficos y naturales, es interesante reseñar que dieciséis son relativos a problemas de delimitación de fronteras entre Estados latinoamericanos, para cuyo estudio recomendamos la obra del prof.SANCHEZ RODRIGUEZ, "Problemas de fronteras en America: las fronteras terrestres entre países iberoamericanos", en Derecho internacional público: problemas actuales, Madrid, 1993, pp.183-227.

A) EL PROBLEMA DE LA PRUEBA DEL EJERCICIO DE SOBERANIA EN LA DELIMITACION EQUITATIVA.

Ya tuvimos ocasión de comprobar en el capítulo IV, la importancia que la equidad juega en los conflictos de delimitación territorial, referida, en aquella ocasión, a la interacción que dicha regla plantea con el uti possidetis iuris⁵⁷. Pero sin limitarnos a un tipo concreto de conflictos, es posible subrayar, la importancia general que la equidad ha supuesto en las numerosas instancias arbitrales relativas a la delimitación de las fronteras. Esta circunstancia es explicada por DE VISSCHER⁵⁸, teniendo en cuenta, de un lado, las insuficiencias de las bases jurídicas de decisión adoptadas por las partes en los compromisos arbitrales, y de otro, por el objeto mismo del litigio que se presta a compensaciones, cambios y retrocesiones del territorio.

Pese a la exactitud de la afirmación que hiciera el T.I.J., en el asunto de la Plataforma continental del Mar del Norte, de que el trazado de una frontera debe ser equitativo⁵⁹, para que un árbitro resuelva en equidad es necesario el acuerdo previo de los Estados en ese sentido, para no incurrir en exceso de poder -lo que podría motivar un recurso de nulidad del laudo-; situación que se ha producido en varias ocasiones, en las que se ha autorizado al árbitro a basar su decisión en

⁵⁷ Vid. supra, pp.189-225.

⁵⁸ Cfr. De l'équité dans le règlement arbitral ou judiciaire des litiges de droit international public, París, 1972, p.102; obra a la que remitimos para un estudio en profundidad de la problemática general de la equidad en los litigios de delimitación de fronteras.

⁵⁹ Vid. I.C.J.Reports, 1969, p.50.

equidad siempre que los títulos invocados por las Partes resultaran insuficientes⁶⁰. Esto supone que, antes de recurrir a esta regla, el árbitro debe proceder al examen de la prueba de las alegaciones presentadas por cada Parte, algunas de las cuales se centran, precisamente, en el ejercicio de funciones estatales. Lo que cabría plantearse es si existe alguna 'peculiaridad' en el entramado probatorio de una posesión efectiva presentado por los Estados en un arbitraje, cuando aquéllos son conscientes de que el árbitro no está inevitablemente obligado a elegir el mejor título de los dos alegados, sino que tiene la posibilidad, en caso de insuficiencia de éstos, de decidir otro trazado distinto que se ajuste a equidad.

■ El primer supuesto en que descubrimos una alusión a la equidad, conteniendo alegaciones basadas en actos de soberanía, es el conflicto entre Colombia y Venezuela, quienes sometieron al Rey de España la delimitación de sus territorios respectivos sobre la base del uti possidetis iuris. El laudo que siguió en general la línea invocada por Colombia, se acogió a la equidad al tomar en consideración la bona fide possessio de Venezuela para algunas zonas del trazado⁶¹.

⁶⁰ Podemos mencionar los casos de Colombia-Venezuela (protocolo de 1881), Gran Bretaña-Portugal (compromiso de 1895), Austria-Hungría (ley de 1897), Brasil-Gran Bretaña (tratado de 1901), Honduras-Nicaragua (tratado de 1894), Bolivia-Perú (tratado de 1902), Guatemala-Honduras (compromiso de 1930), o el de India-Pakistán (acuerdo de 1965); a los que cabría añadir el supuesto único de Bolivia-Paraguay, cuyo Tratado de paz y amistad de 1938 autoriza a actuar a los árbitros ex aequo et bono. Además de estos casos de reconocimiento expreso de la competencia para recurrir a la equidad, en el asunto de la delimitación fronteriza en la zona de los Andes, 1902, entre Argentina y Chile, el árbitro decidió una tercera línea equitativa aún sin tener esa potestad.

⁶¹ Laudo de 16 marzo 1891, cfr. GROS ESPIELL, H., España y la solución pacífica de los conflictos limítrofes en Hispano-América, Madrid, 1984, p.131.

En la misma línea, se sitúan los casos de Honduras-Nicaragua y Guatemala-Honduras; ambos son ejemplos ya referidos de arbitrajes en que hay sometimiento expreso a un título jurídico, el uti possidetis iuris, pero con apoyo secundario en la posesión de hecho. En efecto, en uno y otro asunto, el árbitro-s ha tenido que enfrentarse a alegaciones formuladas por las dos Partes, no sólo basadas en el trazado contenido en documentos de la época colonial, sino completadas, subsidiariamente, tanto con el ejercicio continuo y pacífico de soberanía por parte de las autoridades coloniales españolas en los territorios reivindicados, como con efectividades post-coloniales. Los laudos correspondientes, de 1906 y 1933⁶², han puesto en funcionamiento, de forma muy loable, el mecanismo de las interacciones: uti possidetis - efectividades - equidad.

■ En la llamada cuestión Moeraque, que enfrentaba a Austria y Hungría en la delimitación de la zona fronteriza conocida como "l'Oeil de la Mer", el tribunal arbitral, ante la insuficiencia de las alegaciones de actos de soberanía presentadas por ambas partes, determinó una frontera natural en equidad, por entender que no estaba probada la existencia de una frontera histórica mutuamente aceptada⁶³.

■ En el caso de delimitación de la Guyana británica, tanto Brasil como Gran Bretaña presentaron pruebas de su soberanía sobre los territorios disputados. El

⁶² El laudo que resuelve la controversia entre Honduras y Nicaragua es de 23 diciembre 1906 (cfr. GROS ESPIELL, H., op.cit., pp.136-146), y el de Guatemala-Honduras es de fecha 23 enero 1933 (cfr. U.N.R.I.A.A., vol.II, pp.1309-1366).

⁶³ Laudo de 13 septiembre 1902, cfr. R.G.D.I.P., 1903, pp.434-435.

Rey Víctor Manuel, entendió que el título más fuerte era el británico, con un criterio decisorio no exento de crítica, por lo que no fue necesario el recurso a una decisión en equidad⁶⁴.

■ La disputa entre India y Pakistán afectaba a la frontera entre la parte oeste de Pakistán y Gujarat, conocida como Rann de Kutch. El arbitraje fue requerido por un acuerdo de 30 junio 1965, que sin hacer explícita provisión del derecho aplicable, salvo la referencia a las pruebas presentadas por las partes, reconoce la aplicabilidad del principio de equidad (en el sentido anglosajón del término). El laudo de 19 febrero 1968⁶⁵, sin conformarse enteramente a las reclamaciones de ninguna de las Partes, es un ejemplo de compromiso⁶⁶ resultante del reconocimiento a los actos de autoridad presentados por ambas partes, en dos sectores de la frontera; mientras, en el tercero, el más oriental atribuido a Pakistán, se apoya en principios de equidad, aunque según Bardonnnet⁶⁷, habría que hablar más precisamente de consideraciones de buen orden internacional y de estabilidad de las relaciones entre los dos Estados.

⁶⁴ El árbitro marcó unos criterios muy rígidos al examinar la prueba posesoria de Brasil, mientras que los flexibilizó con Gran Bretaña cuya prueba no resultaba ser más concluyente, como tendremos ocasión de constatar. La sentencia es de 6 junio 1904, cfr. R.G.D.I.P., 1904, pp.18-20.

⁶⁵ Vid. texto en I.L.M., 1968, pp.633-705.

⁶⁶ Según la expresión utilizada por MUNKMAN, A.L.W., que acojemos plenamente (vid. "Adjudication and Adjustment-International Judicial Decision and the Settlement of Territorial Disputes", B.Y.B.I.L., 1972-73, p.80).

⁶⁷ Vid. "Equité et frontières terrestres" en Mélanges offerts à Paul Reuter, Le droit international: unité et diversité, París, 1981, p.72.

■ Por último, debemos citar un supuesto en el ha habido aplicación de la regla de la equidad por parte del árbitro, sin que ésta tuviera reconocida esa potestad. Nos estamos refiriendo al caso de la delimitación de la Cordillera de Los Andes, entre Argentina y Chile, cuyo objeto se centraba en la interpretación del Tratado de límites de 1881; para ello, cada Estado proponía una línea de trazado, estando obligado el árbitro a elegir una de las dos. El laudo de 1902⁶⁸ resulta doblemente criticable, pues, por un lado, recoge equitativamente una tercera línea, resultante de la combinación de los criterios orográfico (Argentina) e hidrográfico (Chile) propuestos y, por otro, toma en consideración las alegaciones de posesión efectiva, posterior a la fecha del acuerdo que fijaba el statu quo, presentadas por Argentina para la cuenca del lago Lacar⁶⁹. Pese a estas graves violaciones del derecho internacional, la sentencia fue plenamente acogida por ambas Partes, aceptación que le da la validez que la estricta aplicación del derecho pudiera quitarle.

En todos los casos referidos hemos podido observar la existencia de alegaciones sustentadas en la posesión efectiva, corresponde ahora examinar cuál ha sido el volumen de prueba presentada en apoyo de dicho título.

⁶⁸ El texto del laudo de 20 noviembre 1902, está recogido en U.N.R.I.A.A., vol.IX, pp.33-49.

⁶⁹ La problemática de la fijación de statu quo convencional, en relación a las alegaciones de posesión efectiva posterior, en conflictos de atribución territorial, será examinada en profundidad en el capítulo siguiente.

1. Actividad de carácter estatal.

Ya indicábamos en el apartado correspondiente del capítulo anterior, la importancia de presentar una prueba de soberanía basada fundamentalmente en actos de carácter estatal; pues, al oponer una reclamación de posesión efectiva a un título jurídico, tratándose de un conflicto de delimitación -en los que priman los últimos-, la fuerza de la posesión debe ser del mayor grado posible y ello se logra a través del desarrollo de las más esenciales actividades de funcionamiento interno del Estado.

A) JURISDICCION PENAL.

■ Como supuestos de ejercicio de la jurisdicción penal sobre el territorio en conflicto que vienen a confirmar la línea fronteriza que establecen los títulos de tierras, Honduras recoge dos referencias de juicios celebrados por el Tribunal hondureño de Senseti:

- Presenta los Autos de un juicio criminal celebrado ante el Tribunal de primera instancia en 1793, por un delito cometido en el valle de Sesecapa;
- Juicio criminal acusando de un robo a un tal Lugo, residente de la Hacienda de Estanzuela en el Valle de Copán⁷⁰.

■ Por su parte, Guatemala presenta igualmente prueba de este tipo de actos sobre dicho territorio, constituyendo este tipo de actos la parte más saliente de la prueba de posesión efectiva. En este sentido, recoge numerosos extractos de

⁷⁰ Vid. Alegato de la República de Honduras, Washington, 1932, pp.56, 57 y 63.

sentencias conociendo de causas penales:

- Respecto del Valle de Motagua y los territorios del Norte, se relacionan once casos en los que tribunales guatemaltecos conocen de delitos cometidos en dichos territorios entre los años 1825 y 1891. A título de ejemplo podemos mencionar el auto de inicio de proceso, decretado por el Comandante del Castillo del Golfo en 1825, para determinar la autoría de los que asaltaron a J.Almorza cuando navegaba por el río Golfete; o las diligencias judiciales seguidas en 1875 contra P.López por comisión de delito de estrupo, en El Cinchado⁷¹.

- En relación a los territorios al Oriente del Río Motagua, se recogen doce casos de juicios que han tenido lugar desde 1841 hasta 1904. Como el proceso seguido, en 1841, por el Juzgado del Pozo contra J.Tobar, por comisión de un delito de homicidio, que concluyó con la sentencia de pena de muerte; las diligencias judiciales seguidas, en 1848, contra C.Rodríguez y Z.Escobar por práctica prohibida del juego, en Platanares; o, en 1904, la orden de apresamiento dictada por el Juzgado Municipal de Quebradas, de un tal P.Canana, por presunta comisión de homicidio⁷².

■ Pakistán refiere algunos ejemplos de delitos cometidos en el área del Rann, que son conocidos por los tribunales de Sind. Recoge varios extractos del Registro

⁷¹ Juicios similares se desarrollaron por delitos cometidos en Platanares, El Rompido, Manga Vieja, Peñitas, La Barra del Motagua y El Cinchado (vid. Alegato de Guatemala, Washington, 1932, pp.478-488).

⁷² El resto de procedimientos se refieren a delitos cometidos en El Machete, Lavaderos, El Cinchado, Chapulco, Tepemachines, Chinamitas, Chapulco y Playitas, lo que prueba la jurisdicción de Guatemala sobre dichos territorios (vid. ibidem, p.532-548).

de Policía de Diplo, en el cual aparecen referencias a juicios desarrollados por el Tribunal de primera instancia de Diplo: en 1945 sentenció a dos años de cárcel a dos personas que habían cometido un delito; a seis ciudadanos del Kutch les condenó igualmente; también conoció este tribunal del asalto a un oficial de policía, en Biar Bet, por parte de ciudadanos de Kutch. Igualmente, alude Pakistán a otros delitos cometidos ya en la época de post-independencia por residentes del Kutch, igualmente presentados ante tribunales pakistaníes⁷³.

■ En idéntico sentido, India presenta prueba de causas penales desarrolladas ante sus tribunales: veintidós incidentes acaecidos entre 1952-1964, por presuntas entradas ilegales en el territorio del Kutch que violaban la Ley india de Pasaportes⁷⁴.

B) JURISDICCION CIVIL.

Únicamente en el asunto de la controversia fronteriza entre Guatemala y Honduras, encontramos referencias a la celebración de juicios seguidos por causas civiles que prueben el ejercicio de soberanía.

■ Honduras refiere, en este sentido, también dos ejemplos conocidos por tribunales hondureños: - En 1799, el juez de Senseti adopta providencias judiciales para el cobro de una capellanía que grava las Haciendas de Estanzuela, Estancia y Gila en el valle de Copán; - En un juicio de testamentaría sobre la Hacienda de Llano Grande, en la región de Copán, entablado en 1803 ante el

⁷³ Vid. U.N.R.I.A.A., vol.XVII, pp.381-383.

⁷⁴ Vid. ibidem, pp.383-383.

Tribunal de Chiquimula, éste revirtió la competencia al de Senseti⁷⁵.

■ Respecto a juicios de carácter civil, Guatemala recoge la referencia del llevado ante el Juez Preventivo de Sto. Tomás, en 1877, respecto de la subasta de propiedades de un tal Horns, ciudadano del Cinchado, para resarcir sus deudas⁷⁶.

C) EJERCICIO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y LOCAL.

Los actos relacionados con la administración normal del territorio son más frecuentemente invocados como prueba de la posesión efectiva del mismo.

■ Hemos venido indicado en páginas anteriores, que el primer acto ejecutivo sobre un territorio es el esencial de fundar poblaciones. En este sentido, Argentina hace valer la fundación de una villa, llamada San Martín de los Andes, como prueba de su soberanía sobre la zona⁷⁷.

- Por la Real Orden de 23 enero 1787, se dispuso formar cuatro poblaciones españolas en Río Tinto, Cabo de Gracias a Dios, Blewfields y Embocadura del Río San Juan, con familias enviadas de la península, que fueron recibidas por el Gobernador de la provincia de Comayagua (actual Honduras) al estar situadas las mismas bajo su jurisdicción⁷⁸.

⁷⁵ Vid. Alegato de Honduras...., op.cit., pp.62-63.

⁷⁶ Vid. Alegato de Guatemala...., op.cit., pp.442-443.

⁷⁷ Vid. Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina, 1892, p.668.

⁷⁸ Vid. Alegato presentado por los representantes de la República de Honduras, Madrid, 1905, pp.62-63 (disputa con Nicaragua).

■ Como acto de administración se menciona el nombramiento de funcionarios y cargos públicos, que ejercerán en ese territorio:

- Honduras recoge extractos de distintas órdenes de nombramiento, para la zona fronteriza con Nicaragua: título de Teniente de Ministro de Real Hacienda de Río Tinto, a favor de J.Estachería (1787); título de Interventor de Trujillo, para T.Villa; nombramiento de J.Ariza como Teniente de Ministro de Real Hacienda de Cabo de Gracias a Dios (1791)⁷⁹.

- El Alcalde Auxiliar de la Aldea de Chachagualiya, Departamento de Izabal, era nombrado por las autoridades de Guatemala, según consta en varias notas oficiales del Teniente Corregidor de Santo Tomás⁸⁰.

■ Como competencia de la administración local figura la de establecer un concreto sistema de aduanas, que controle la entrada y salida al territorio y, que suponga, al mismo tiempo, la fijación del límite fronterizo; este acto entendemos que especialmente importante en estos conflictos de delimitación territorial:

- Son varias las alusiones que hace Guatemala en su Alegato, al establecimiento de Aduanas por autoridades guatemaltecas en los territorios fronterizos con Honduras: hay constancia de que en 1841 se instaló la Aduana en Izabal, dirigida por un administrador y dotada de un servicio de Vista para aforar las mercancías; se recogen varias prescripciones de la ley XIV, nº850 de 1845, que

⁷⁹ Vid. ibidem, p.73.

⁸⁰ Vid. Alegato de Guatemala...., op.cit., p.427.

aluden al funcionamiento de esta aduana⁸¹.

- Pakistán, refiere varias actividades llevadas a cabo por oficiales y patrullas aduaneras en la frontera del Kutch: a través de declaraciones del Inspector de Aduanas (1930-1934), así como de diarios y facturas de viaje que demuestran que los oficiales británicos patrullaban el Rann en los años 1945-1946⁸².

■ Las visitas oficiales por parte de autoridades tanto locales como de la Administración central, son invocadas también como prueba de soberanía:

- Una expedición oficial, organizada bajo las órdenes de MM.Simon, Van Sirtema y Dr.Hancock, visitó determinadas regiones de la Guyana habitadas por tribus sometidas a la autoridad británica⁸³.

- El Gobernador Intendente de la provincia de Honduras, D.R. de Anguiano, en cumplimiento de lo prevenido en la ley 15, título II, libro V de la Recopilación de Indias, visitó en 1804 los términos de su provincia, lo que incluyó, según su informe, la costa este hasta Cabo de Gracias a Dios⁸⁴.

- Guatemala se refiere a la visita que el Jefe Político y Comandante Militar del Departamento de Izabal hizo en 1874 a los pueblos de su jurisdicción como medida de control de la zona⁸⁵.

⁸¹ Vid. Alegato de Guatemala..., op.cit., pp.493-494 y 498.

⁸² Vid. U.N.R.I.A.A., vol.XVII, pp.384-386.

⁸³ Vid. Memoria de Gran Bretaña, pp.44-45.

⁸⁴ Vid. Alegato presentado por los representantes..., op.cit., pp.76-77. La ley que se menciona es, en sí misma, prueba del uti possidetis iuris.

⁸⁵ Vid. Alegato de Guatemala..., op.cit., p.446.

■ La elaboración del **censo** de la población existente sobre los territorios que se reclaman, se presenta igualmente como prueba del ejercicio de la administración sobre el mismo, esta vez, por parte de Guatemala: en cumplimiento de una ley guatemalteca de 1878, el Juez de Santo Tomás procedió a empadronar a los vecinos de los diferentes pueblos sujetos a su jurisdicción, lo que incluía algunos de la zona en conflicto⁸⁶.

■ La elaboración de **informes sobre los territorios**, a efectos, fundamentalmente, de control y explotación, es competencia de la administración local:

- Austria apoya su reivindicación sobre la región de l'Oeil de la Mer, no sólo sobre una larga posesión, sino en las operaciones oficiales de agrimensura efectuadas en dicho territorio de 1785 a 1789, para el establecimiento del catastro y conocidas como 'medidas josefinas'⁸⁷.

- India, presenta extractos de varios documentos, 1843-1844 y 1852, relativos a la elaboración de un proyecto para la construcción de canales y sistemas de riego, para aprovechar las importantes cuencas fluviales existentes en la zona del Rann⁸⁸.

⁸⁶ Entre esas listas está la que corresponde a El Cinchado, Jaloa y Barra de Motagua, territorios en disputa (vid. ibidem, p.456).

⁸⁷ Vid. R.G.D.I.P., 1903, p.432.

⁸⁸ Vid. U.N.R.I.A.A., vol.XVII, pp.367-374.

D) ACTIVIDAD LEGISLATIVA.

Independientemente de los actos legislativos presentados como conteniendo prueba de distinta actividad estatal, podemos individualizar dos referencias a una concreta actividad legisladora:

- Con motivo de la fundación de las poblaciones ya reseñadas, se les otorgó una nueva reglamentación que organizaba los establecimientos de Río Tinto y Cabo de Gracias a Dios, en la provincia de Honduras⁸⁹.

- El decreto guatemalteco de 21 marzo 1878, que obliga a los habitantes de ciertas profesiones, a prestar su servicio personal en los caminos durante tres días al año, se aplica a ciertas localidades fronterizas en disputa⁹⁰.

E) ACTIVIDAD DE DEFENSA: FUERZAS ARMADAS Y DE POLICIA.

Encontramos varios actos referidos en este sentido:

- El título argentino para el valle del lago Lacar, se centra en su ocupación militar a partir de 1883, fecha en que expulsa a los indios de ciertas regiones, y funda tres fuertes y trece fortines; posteriormente, 1889, ocupa definitivamente esa zona estableciendo en ella una guarnición militar⁹¹.

- Como sucesor de Portugal, Brasil alega la construcción de un fuerte sobre el río Branco en 1752, el fuerte San Joaquín, ; posteriormente, establece un puesto militar sobre el Rupununi, enviando patrullas desde el fuerte San Joaquín, en 1781.

⁸⁹ Vid. Alegato presentado por los representantes..., op.cit., p.64.

⁹⁰ Vid. Alegato de Guatemala..., op.cit., p.456.

⁹¹ Vid. Memoria del Ministerio..., op.cit., p.666.

En 1786, Ferreira recorre varios ríos en la frontera con la Guyana holandesa (después británica), y reclama para ellos vigilancias regulares para defenderse de holandeses y españoles⁹².

■ Tras la ocupación brasileña de 1839, se intensifica la intervención de la policía británica en la zona, que ejerce su autoridad para mantener el orden: en 1894, al este de Cotingo para sofocar un conflicto entre indios y brasileños; en 1899, arrestando a un criminal en Tacutu...⁹³.

■ El alegato de Honduras recoge extractos de órdenes de nombramiento de cargos militares: despacho del Gobernador de Honduras que nombra a Pérez Brito Comandante de Cabo de Gracias a Dios (1789), nombramiento del Comandante de Puerto Trujillo en la persona del Coronel Salablanca (1790). Igualmente alude a órdenes de pago de sueldo y de abastecimiento de las tropas situadas en los establecimientos del Norte (1792)⁹⁴.

■ Varias son las referencias que presenta Guatemala respecto al despliegue de fuerzas militares guatemaltecas por la región fronteriza disputada: envío de soldados a La Manga, defensa frente a los piratas, envío de tropas a Omoa para defender la población de invasiones extranjeras, guarniciones militares en Izabal y San Felipe del Golfo; asimismo, recoge extractos de informes militares sobre el control en la zona⁹⁵.

⁹² Vid. Memoria de Brasil, pp.231 y ss, y p.316.

⁹³ Vid. Memoria de Gran Bretaña, pp.107-110.

⁹⁴ Vid. Alegato presentado por los representantes..., op.cit., pp.72-74.

⁹⁵ Vid. Alegato de Guatemala..., op.cit., pp.412-465-469-473 y 476.

■ Tanto India como Pakistán alegan el ejercicio de jurisdicción desplegado sobre todo el Rann, el primero por parte de la policía del Kutch, el segundo por la policía británica. La prueba presentada por India a este respecto se basa en un Informe de la Administración del Kutch de 1889-90; por su parte Pakistán presenta un intercambio de cartas, de 1898, entre el Juez de Distrito y el Comisionado de Sind⁹⁶.

F) SISTEMA ELECTORAL.

Unicamente Guatemala, en su controversia con Honduras, presenta como uno de los actos más visibles del ejercicio de la soberanía, la función electoral. Las autoridades de Guatemala han sido las encargadas de efectuar elecciones en varias poblaciones situadas en los territorios litigiosos: elección de alcaldes auxiliares en 1877, para alcaldes en El Cinchado en 1880...⁹⁷.

G) FISCALIDAD.

Encontramos referencia al establecimiento de un sistema de impuestos en el asunto del Rann de Kutch. Concretamente, por parte de Pakistán se alude, como manifestación de la extensión de su jurisdicción sobre el Rann, a la imposición, en 1903, de tasas para ejercer los derechos de pesca en los ríos existentes en la zona, y su consiguiente recaudación⁹⁸.

⁹⁶ Vid. U.N.R.I.A.A., vol.XVII, pp.378-380.

⁹⁷ Vid. Alegato de Guatemala..., op.cit., pp.440-444 y 445.

⁹⁸ Vid. U.N.R.I.A.A., vol.XVII, p.367.

H) EDUCACION PUBLICA.

El Gobierno de Guatemala se preocupó también de la instrucción pública en la región de Motagua: sostenía escuelas y las proveía de maestros y material escolar. Varios documentos lo corroboran: listas de asistencia de niños a la escuela, orden de provisión de vacantes (1875), orden de compra de libros (1876), acuse de recibo del pago de sueldo a los preceptores⁹⁹.

I) RELACIONES DIPLOMATICAS.

Como advertíamos en la sección anterior, nos referimos a actos estatales que buscan un reconocimiento exterior de su soberanía:

■ Gran Bretaña, argumenta que la población autóctona de la Guyana, a través del acuerdo de 1842, ha expresado su sometimiento al gobierno británico. Sus testimonios en este sentido son concordantes: en 1898, reunidos por MM.Turk, se declaran 'pueblos de su Majestad la Reina de Inglaterra'¹⁰⁰.

■ También Brasil presenta prueba del reconocimiento de la soberanía portuguesa sobre dicho territorio, a través de declaraciones unilaterales, cartas y tratados: España, por los Tratados de 1750 y 1777; Francia, por los Tratados de Badajoz de 1801 y Amiens de 1802; Holanda, a través de la 'carta' de 1674, de la primera Compañía de las Indias Occidentales¹⁰¹.

■ Según Honduras, las negociaciones diplomáticas entabladas con

⁹⁹ Vid. Alegato de Guatemala..., op.cit., pp.449-463.

¹⁰⁰ Vid. Memoria de Gran Bretaña, p.94.

¹⁰¹ Vid. Memoria de Brasil, pp.333 y ss.

Guatemala que dieron lugar al tratado de 1895, suponen un reconocimiento de ésta a la posesión hondureña del río Motagua¹⁰².

■ También se presenta como acto de reconocimiento de la soberanía de Pakistán sobre el Rann, las declaraciones británicas en ese sentido contenidas en Informes de la Administración de Bombay y en las Gacetas de la Presidencia de Bombay¹⁰³.

J) DISPOSICION ADMINISTRATIVA SOBRE BIENES INMUEBLES.

Incluimos en este apartado cualquier acto que suponga la actuación de las autoridades estatales sobre inmuebles situados en los territorios en conflicto:

■ Hungría invoca a su favor un contrato de venta, 8 octubre 1589, de un terreno situado en la región de l'Oeil de la Mer, entre A.Laski y G.Horvath de Palocsa, ratificado por el Emperador Rodolfo II, Rey de Hungría, el 1 mayo 1594¹⁰⁴.

■ Carácter similar tiene la alegación de Austria, en relación a la venta del terreno "cameral" de Neumarkt en 1824 por Homolacs¹⁰⁵.

■ En 1854, el Gobierno de Honduras hizo una propuesta de venta pública, a favor de A.Follin (actuando en nombre de la Compañía de Tierras de Honduras), de los terrenos baldíos, propiedad estatal, que comprende el territorio Mosquito y

¹⁰² Vid. Alegato de Honduras..., op.cit., pp.78-79.

¹⁰³ Vid. U.N.R.I.A.A., vol.XVII, pp.263-266.

¹⁰⁴ Vid. R.G.D.I.P., 1903, p.432.

¹⁰⁵ Vid. supra.

que termina en la desembocadura del río de Cabo de Gracias a Dios, así como de las tierras públicas que se encuentran en las islas del mismo Estado¹⁰⁶.

■ Honduras, esta vez en el conflicto fronterizo con Guatemala, otorga consideración especial a las **concesiones de tierras** del dominio de la Corona en cuanto ofrecen una de las modalidades de prueba más satisfactoria y concluyente para la fijación de la frontera. De esta manera, recoge hasta un total de cincuenta y un títulos de tierras, período que abarca de 1628 a 1891, que corroboran la posesión de Honduras sobre los territorios a que se refieren. A estos títulos añade trece documentos judiciales que confirman que los terrenos mencionados en dichos títulos pertenecen a la jurisdicción de Honduras¹⁰⁷.

■ También Guatemala cita un acto dispositivo, como es la venta a M.García Granados de doscientas caballerías de terreno en el valle de Motagua; nombrando el Gobierno guatemalteco a un ingeniero para que practicara la mensura de las mismas¹⁰⁸.

K) SISTEMA DE CONCESIONES A PARTICULARES.

■ Otorgamiento de la concesión para la extracción de caucho desde el río Patuca hasta la laguna de Caratasca, otorgada a un tal Vaughan por parte del

¹⁰⁶ Vid. Alegato presentado por los representantes..., op.cit., pp.79-80.

¹⁰⁷ Títulos tales como el de San Cayetano Sesecapa a favor de J.Meléndez (1677-1731), Barbasco titulado a A.Erazo (1702) o Peña Quemada a favor de C.Carranza (1877); vid. Alegato de Honduras..., op.cit., pp.46-54.

¹⁰⁸ Vid. Alegato de Guatemala..., op.cit., p.410.

Gobierno hondureño, para el período 1874-1875¹⁰⁹.

■ En el asunto de la controversia fronteriza entre Guatemala y Honduras, son muy numerosas las referencias por parte de Guatemala a concesiones de diverso tipo otorgadas por su Gobierno para la explotación de los recursos del terreno en disputa: en 1836, a I.Cienfuegos para talar madera en las márgenes del río Motagua y para establecer un sistema de navegación para cruzar dicho río; en 1874, para recoger cocos en Manabique, a favor de B.Cramer; explotación aurífera...¹¹⁰.

L) OBRAS PUBLICAS.

Como manifestación de funciones de estado se presenta el hecho de realizar diversas construcciones a cargo de fondos públicos:

■ Una orden del Gobernador de Honduras de 1752, a los funcionarios de la tesorería de Comayagua, establece el pago de la construcción de una embarcación en el río Motagua¹¹¹.

■ También Guatemala refiere, a través de documentos, diversas obras públicas, actos que, por su propia naturaleza, significan posesión: trabajos de reparación del camino que comunica el puerto de Sto.Tomás, el río Motagua y la Cordillera, en los meses de mayo a septiembre de 1869; en 1876, se construyó un nuevo camino entre el puerto de Sto.Tomás y El Cinchado, bajo vigilancia de

¹⁰⁹ Vid. Alegato presentado por los representantes..., op.cit., p.83.

¹¹⁰ Vid. Alegato de Guatemala..., op.cit., pp.408-448-449-451-512 y 516.

¹¹¹ Vid. Alegato de Honduras..., op.cit., p.75.

autoridades guatemaltecas¹¹².

■ Similares a los anteriores son los trabajos públicos que tanto Pakistán como India, refieren haber realizado sobre el Rann. Se presentan documentos, de los años 1850 a 1892, por ambas partes como prueba de la construcción, mantenimiento y trazado de carreteras en dicha región: en Rahim ki Bazar, a través de Pakar y Nara Bet, entre Pakar y Kutch...¹¹³.

M) ESTUDIOS CARTOGRAFICOS.

Los trabajos cartográficos, no como prueba de un trazado fronterizo sino del establecimiento de la soberanía de un Estado en una región concreta, creemos entreverlo en los siguientes:

■ Los principales mapas antiguos -cita un total de trece- favorecen los derechos de Honduras en el terreno que disputa a Nicaragua: atlas de Ortelio (1558), de Hondio (1611), de Robert (1757), de Cassinis (1772), de Tardieu (1835)...¹¹⁴.

■ Transactions and Collections of the American Antiquarian Society, vol.II, Cambridge, 1836, y Cartographical Report, de la Dra.Williams, confirman uniformemente la inclusión de la región de Copán en Honduras¹¹⁵.

■ Numerosos y de variado carácter y procedencia son los mapas

¹¹² Vid. Alegato de Guatemala..., op.cit., pp.433 y 453.

¹¹³ Vid. U.N.R.I.A.A., vol.XVII, pp.363-366.

¹¹⁴ Vid. Alegato presentado por los representantes..., op.cit., pp.92-94.

¹¹⁵ Vid. Alegato de Honduras..., op.cit., pp.73-74.

presentados por India y Pakistán en favor de sus reclamaciones respectivas a la región del Rann¹¹⁶.

2. Actos de particulares.

El apoyo que supone para un Estado el despliegue de actividad privada de sus nacionales en un territorio, a efectos de corroborar su soberanía, ha sido escasamente reivindicado en los conflictos que estamos examinando; pudiendo únicamente referir dos supuestos que hacen alusión a actos de particulares relacionados con la explotación del territorio:

- Los vecinos de Tenedores, El Cinchado y Barra del Motagua, solicitaron del Ministerio de Hacienda de Guatemala, en 1875, tierras para usos comunales; además, los habitantes de las aldeas del Valle de Motagua se dedicaban a la extracción de zarza¹¹⁷.

- La ocupación de Dhara Banni, Chhad Bet y Pirol Valo Kun, en el Rann, por Pakistán, viene confirmada por las actividades de individuos privados; fundamentalmente por la utilización de los campos para el cultivo y el pasto durante cientos de años, así como el ejercicio de la pesca en los ríos existentes¹¹⁸.

¹¹⁶ Vid. U.N.R.I.A.A., vol.XVII, pp.83-217.

¹¹⁷ Vid. Alegato de Guatemala..., op.cit., p.451.

¹¹⁸ Vid. U.N.R.I.A.A., vol.XVII, p.17.

3. Otros actos también invocados.

Si bien la prueba relativa a los actos desarrollados por particulares es deficiente, circunstancia que a nuestro parecer no resulta especialmente destacable dado el limitado valor de los mismos, lugar más importante ocupan las manifestaciones de autoridad procedentes de esos otros entes sociales más incardinados al Estado.

En lo concierne a las **Compañías de comercio y colonización**, la referencia a las mismas la localizamos en un único supuesto, la delimitación de la Guyana británica; constituyendo en este caso, el grueso principal del título posesorio de Gran Bretaña. Como sucesor de Países Bajos a dicho territorio, el apoyo del título británico no sólo comporta la prueba de su continuación en la soberanía sucedida - actos que han sido examinados en el lugar correspondiente de las páginas precedentes-, sino la prueba previa de la existencia de dicha soberanía holandesa en el momento de la sucesión; esta labor se reconduce a la exposición de la actividad desplegada por la Compañía holandesa de la Indias Occidentales, fundamento del título de Países Bajos.

■ **Monopolio del comercio:** los holandeses descubrieron las rutas de comercio a través del río Branco, el río Negro y el Amazonas, ejerciéndolo de forma exclusiva y esforzándose por organizar el tráfico. Una comunicación del comandante de la Compañía de las Indias Occidentales, 20 octubre 1679, acusa un comercio regular en la cuenca del Ruppuni; desde 1699 a 1704, el diario del fuerte holandés de Kijkoveral, en el Essequibo, indica a Ruppuni como centro del

comercio con los indios¹¹⁹.

■ **Establecimientos:** en 1731, un agente de la Compañía enviado al Essequibo recibe la orden de extender la posesión lo más lejos posible; tres años más tarde funda la población de Arinda, cerca de la desembocadura del Siparuni¹²⁰.

■ **Fuerza armada:** un documento de 1695 menciona la defensa que los holandeses ejercían para los indios del río Negro¹²¹.

En cuanto a la actividad manifestada por la Organización eclesiástica, las más importantes alegaciones en este sentido, pero no únicas, las conforman las efectuadas por los Estados hispanoamericanos ligados por el uti possidetis iuris, al solaparse los límites administrativos con los eclesiásticos y producirse un desdoblamiento de autoridad.

■ **Fundación de misiones y poblaciones:** hacia 1833, el reverendo Armstrong estableció una misión protestante en Pirara¹²².

- Según consta en un informe de 1864, el misionero español, D.Manuel de Subirana, emprendió sus trabajos apostólicos entre las selvas de Honduras y, en pocos años, logró fundar varios pueblos en los Departamentos de Yoro y Olancho,

¹¹⁹ Vid. ~~Memoria de Gran Bretaña~~, p.23.

¹²⁰ Vid. ~~ibidem~~, pp.27-29.

¹²¹ Vid. ~~Contra-memoria de Gran Bretaña~~, p.58.

¹²² Vid. ~~Contra-memoria de Gran Bretaña~~, p.119.

dependientes del Obispado de Comayagua¹²³.

■ **Nombramiento de capellanes:** el Obispo de Comayagua, al crearse nuevos pueblos en su jurisdicción, nombró capellanes para Roatán, Río Tinto y Cabo de Gracias a Dios, para organizar convenientemente el servicio espiritual de sus fieles¹²⁴.

■ **Celebración de matrimonios:** se recogen extractos de documentos referidos a dispensas matrimoniales otorgadas por el capellán de Cabo de Gracias a Dios, años 1791-1972, en nombre del Obispo de Honduras¹²⁵.

- En el otro conflicto fronterizo que dirimió Honduras (con Guatemala) también alega como actividad correspondiente a la autoridad eclesiástica, desarrollada en el período 1787-1885 por los Obispos y el Clero de Honduras, tanto el otorgamiento de dispensas matrimoniales, como el cumplimiento de las diligencias matrimoniales y el levantamiento de actas de matrimonio¹²⁶.

■ **Celebración de bautismos:** en 1859, el Cura párroco de Esquipulas bautiza a vecinos de varias aldeas del territorio fronterizo con Guatemala disputado¹²⁷.

■ **Recaudación de impuestos:** un documento de 20 marzo 1793, refiere la recaudación diezmal de las Parroquias de Omoa, Trujillo, Río Tinto y Cabo de

¹²³ Vid. ~~Alegato presentado por los representantes...~~, ~~op.cit.~~, pp.91-92.

¹²⁴ Vid. ibidem, p.86.

¹²⁵ Vid. ibidem, pp.86-88.

¹²⁶ Vid. ~~Alegato de Honduras...~~, ~~op.cit.~~, pp.57-60.

¹²⁷ Vid. ~~ibidem~~, p.59.

Gracias a Dios, adscritas al Obispado de Honduras¹²⁸.

- Semejante actividad se refiere respecto de las parroquias de dicha diócesis situadas en la frontera de Guatemala¹²⁹.

■ **Visitas pastorales:** como la de Fray Fernando Cadiñanos, Obispo de Comayagua, en 1791 a su diócesis; en el informe de la misma cita varios lugares en disputa con Guatemala. O la llevada a cabo por el Ilmo.Sr.Obispo de Honduras, D.Francisco Vélez, en los años 1890 y 1891¹³⁰.

B) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA EN LOS CONFLICTOS DE DELIMITACION REGULADOS POR EL DERECHO INTERNACIONAL.

Podemos localizar otros conflictos de delimitación territorial -planteados ante una instancia arbitral- en los que, en mayor o menor medida (más bien en el último sentido), se ha hecho no sólo alusión a la posesión efectiva del territorio que con el trazado se reivindica, sino que se han presentado pruebas del ejercicio de esa soberanía sobre el mismo. Nos estamos refiriendo a controversias en las que no hay reconocimiento expreso al árbitro del poder de dictar en equidad, lo cual supone, que la decisión de este último deberá basarse exclusivamente en derecho;

¹²⁸ Vid. Alegato presentado por los representantes, op.cit., pp.90-91.

¹²⁹ Vid. Alegato de Honduras, op.cit., p.59.

¹³⁰ Vid. ibidem, p.60.

es decir, que a diferencia de lo que ocurría en los conflictos anteriormente reseñados, el árbitro no puede rechazar la prueba presentada por las Partes como insuficiente, sino que ha adquirido la obligación de responder a los títulos invocados por éstas y decidir comparativamente cuál es la más fuerte. Afirmación que tiene una segunda lectura, igualmente interesante a los fines de nuestro estudio: la conciencia de las propias Partes, al afrontar la composición de la prueba de su título, de que el árbitro viene ineludiblemente vinculado por ella.

■ De los numerosos litigios de fronteras referibles, la ambigüedad de un tratado de límites - que provoca "reivindicaciones intransigentes"¹³¹ y falsa concurrencia de soberanía- constituye el móvil de muchos de ellos, no faltando en los mismos, como instrumento probatorio de interpretación, la referencia a la posesión. En este sentido, podemos citar el asunto de la frontera del Nordeste, EE.UU.- Gran Bretaña, especialmente sobre el reconocimiento de la fuente más al noroeste del Connecticut tal y como lo menciona el Tratado de París de 1783, resuelto por el laudo de 10 enero 1831¹³². Tal fue el objeto del posterior laudo de 1870, sobre la frontera del Este¹³³ entre Orange y la República de Sudáfrica, en el que el árbitro debía identificar la frontera contenida en el convenio de 1852; así como el asunto de Maroni, en el que el Emperador de Rusia debía determinar

¹³¹ Nos servimos de la elocuente expresión utilizada por LAPRADELLE et POLITIS, en "Affaire de la frontière de l'Est", R.S.A., vol.II, p.579.

¹³² Sentencia dictada por el Rey de Países Bajos, cfr. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.I, pp.371-377.

¹³³ Sentencia de 19 febrero 1870, en LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.II, pp.576-579.

el curso de dicho río, que separaba el territorio de la Guyana francesa y holandesa¹³⁴. Igualmente, el Rey Víctor Manuel III de Italia debió determinar los límites del Reino de Barotseland, según el tenor del tratado de 1891 entre Gran Bretaña y Portugal¹³⁵; en todos estos casos, el árbitro tuvo siempre en consideración el ejercicio de autoridad gubernamental sobre el territorio.

En el asunto de Walvis Bay¹³⁶, el árbitro designado por el Rey de España interpretó la delimitación contenida en el Acta de anexión de 1878, en el sector correspondiente a las posesiones británicas de Walvis Bay (descubierta por éstos) y la nueva colonia alemana del Sud-oeste africano, haciendo uso de la ocupación efectiva como criterio aplicable que da la razón a Gran Bretaña. Por su parte, el tribunal que conoció del asunto del Canal de Beagle, obligado a resolver en derecho la interpretación del tratado de límites de 1881 entre Argentina y Chile¹³⁷ (labor que -tal y como indicamos en el capítulo IV- ya había dado origen a dos arbitrajes, en los años 1902 y 1966 y que, posteriormente, ha motivado el último laudo de 1994 en relación a la zona de la Laguna del Desierto¹³⁸), invoca los cánones

¹³⁴ La sentencia correspondiente es de 13/25 mayo 1891, cuyo texto se recoge en MARTENS, N.R.G., 2^as., XVIII, pp.100-101.

¹³⁵ Laudo de 30 mayo 1905, en U.N.R.I.A.A., vol.XI, pp.59-69.

¹³⁶ Sentencia de 23 mayo 1911, en U.N.R.I.A.A., vol.XI, pp.267-308.

¹³⁷ El texto del laudo de 1977, que ya ha sido objeto de estudio en el capítulo IV (vid.supra, pp.223-225), se recoge en I.L.M., vol.XVII, 1978, pp.632-679.

¹³⁸ Más concretamente el objeto del litigio, en el caso de la Laguna del Desierto, radicaba en decidir el recorrido de la traza del límite en el sector comprendido entre el Hito 62 y el Monte Fitz Roy de la 3^a Región definida en el número 18 del Informe del Tribunal Arbitral de 1902 y analizada en el párrafo final del número 22 del citado Informe, para lo cual el Tribunal debería decidir interpretando y aplicando el Laudo de 1902 (laudo que tenía por objeto la interpretación del Tratado de Límites de 1881, como ya hemos advertido); vid. Compromiso arbitral de 31 octubre 1991, artículos I y II,

tradicionales de interpretación recogidos en el Convenio de Viena sobre derecho de los tratados, pero con el apoyo de los mapas y los actos de jurisdicción chilenos, que si bien no son título autónomo, constituyen un argumento de primer orden en la confirmación de su decisión.

Y, por supuesto, el caso de Taba¹³⁹, en el que un tribunal arbitral fue requerido, por primera vez, para decidir la correcta localización de los pilares fronterizos de la frontera internacional reconocida entre Egipto e Israel a través del Anexo I del tratado de 1979; pues, aun cuando el laudo no especifica cuál ha sido el principio aplicado en su decisión, la noción que parece haber influenciado el razonamiento de la mayoría es la del control efectivo y el ejercicio de poder estatal, por parte de Egipto, como constitutivo de una interpretación auténtica que prevalece sobre el título legal.

■ Junto a estos conflictos, centrados en la correcta interpretación de una frontera convencional, podemos referir otros, en los que, si bien se trata de litigios de delimitación territorial, no existe en sentido estricto un título jurídico aplicable; por lo que los argumentos de las partes oscilan entre los criterios naturales y geográficos, y el importante juego de la posesión efectiva. En el Alpe de Cravairola¹⁴⁰, controversia que prueba claramente la innecesaria distinción

Original mecanografiado, p.10.

¹³⁹ Vid. texto del laudo de 1988, en I.L.M., vol.XXVII, 1988, pp.1421-1538.

¹⁴⁰ Laudo de 19 agosto 1874, recogido en LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.III, pp.497-507.

delimitación-adquisición, pues al plantearse la delimitación de esta zona entre Italia y Suiza, el problema derivó en determinar la soberanía sobre el Alpe; para lo cual, frente al criterio geográfico suizo, Italia hizo valer la transferencia al Estado de la posesión privada. Gran Bretaña y Venezuela, decidieron someter al árbitro su controversia fronteriza bajo la consideración esencial de la posesión continuada, dando entrada, incluso, a la posesión de particulares. Criterio este último que tuvo su relevancia en el asunto de Grisbadarna, conflicto de delimitación marítima que contiene implícita la cuestión de la soberanía del banco de arena de Grisbadarna, para lo cual el tribunal arbitral funda la parte principal de su decisión en la doctrina de la ocupación efectiva sueca¹⁴¹. También resulta incluíble en este apartado el asunto de la delimitación fronteriza entre Costa Rica y Panamá, analizado en el capítulo IV, por su consideración de la posesión en su vertiente integradora del uti possidetis iuris¹⁴².

Por último, aun conscientes de que no se trata de un auténtico arbitraje internacional -pues su objeto es delimitar la frontera interna de dos miembros de una Federación-, no podemos dejar de referirnos al arbitraje entre los Emiratos de Dubai y Sharjah¹⁴³, por la importante relevancia internacional que comporta en la teoría de la efectividad de la ocupación. En efecto, el tribunal arbitral, considerando aplicable el derecho internacional al fondo del asunto, da entrada al

¹⁴¹ Laudo de 23 octubre 1909, en R.C.D.I.P., 1910, pp.181-187; el anteriormente mencionado es de 3 octubre 1899, y se recoge en MARTENS, N.R.G. 2^{as}, pp.581-587.

¹⁴² Vid. supra, pp.214-216.

¹⁴³ La fecha del laudo es de 19 octubre 1981 (original mecanografiado).

criterio del control efectivo de Dubai unido a la aquiescencia de Sharjah.

Trataremos de afrontar ahora la exposición de aquellos actos que han sido alegados por los Estados afectados, en los conflictos reseñados, como prueba de su ejercicio de soberanía sobre los territorios en disputa, haciendo notar, previamente, que partimos de un condicionante negativo: la imposibilidad de acceso a los documentos escritos de las Partes. Por ello, nuestra labor se va a ver limitada a la referencia que de los mismos se hace en los propios laudos arbitrales.

1. Actos de tipo estatal.

Las alegaciones principales de las Partes giran entorno a una afirmación general de ejercicio de autoridad gubernamental sobre el territorio objeto del litigio, que, sin embargo, podemos identificar a través de algunos actos concretos:

A) JURISDICCION PENAL.

Tan sólo reconocemos una alegación de este tipo de actividad en el arbitraje de Walvis Bay, siendo invocadas causas criminales por ambas partes:

- En efecto, Alemania alude al juicio celebrado por Mr.Simpson contra un tal Jan Junker Afrinkander, por el ahorcamiento de Berg Damara en el territorio alemán situada a 600 yardas de Rooibank. Como prueba de que el crimen fue cometido en territorio alemán presenta como testigo al propio Mr.Simpson, que declara en ese sentido.

- Por su parte, Gran Bretaña refiere la detención de un delincuente y posterior castigo del mismo, por comisión de un acto ilegal, por jueces británicos en Ururas¹⁴⁴.

B) JURISDICCION CIVIL.

Italia, en el asunto del Alpe de Cravairola, recoge como acto de jurisdicción civil, una sentencia de 1 julio 1367 dictada por el Vicario de Matterello, sobre el territorio de Domodossola; dicha sentencia revoca una venta de parte del Alpe, nula en razón de la minoría de edad del vendedor; probando así que el Alpe era territorio italiano y que el Crodo, Pontemaglio y Domodossola formaban parte del Ducado de Milán.

- Incluible como ejercicio de administración de justicia es el nombramiento de jueces, por parte, tanto de los príncipes que gobernaban el Ducado de Milán, como de los soberanos de Saboya, para conocer de los litigios civiles y de las causas penales que surgen en toda época en los límites del Alpe de Cravairola¹⁴⁵.

C) EJERCICIO DE LA ADMINISTRACION.

El hecho de administrar los asuntos concernientes a un territorio, de forma habitual y continuada, es una aseveración abstracta, que se presenta como manifestación de la soberanía sobre el mismo, efectuada por Sudáfrica respecto de

¹⁴⁴ Vid. U.N.R.I.A.A., vol.XI, pp.301-302 y 306, respectivamente.

¹⁴⁵ Vid. Memoria de Italia, 19 agosto 1874, en LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.III, pp.488-491.

los territorios situados en las riberas orientales de los afluentes del Vaal¹⁴⁶. Igualmente encontramos afirmado este ejercicio en otros casos, pero cristalizado en los siguientes actos:

■ El asentamiento en un territorio se materializa, en primer instancia, en la **creación de poblaciones y establecimientos**. La concesión para efectuar tales asentamientos en la región de Madawaska, fue otorgada por el gobernador francés de Canadá a los ingleses en 1683¹⁴⁷.

- Tanto Costa Rica como Panamá, en su calidad de sucesora de Colombia, alegan su respectiva ocupación de los territorios en conflicto, manifestada a través de la fundación de establecimientos¹⁴⁸.

- El decreto chileno de 1892, publicado en el Boletín Oficial, encomienda la colonización de la región del Beagle; como consecuencia, se estableció una oficina en Lenox¹⁴⁹.

■ La instauración de una **red de servicios públicos**, fue efectuada por Chile en la región del Beagle; concretamente, en 1905 se inauguró un servicio postal y se dieron los primeros pasos para la instalación del correspondiente servicio médico y de educación pública en Lenox¹⁵⁰.

¹⁴⁶ Vid. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.II, p.579.

¹⁴⁷ Vid. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.I, p.366.

¹⁴⁸ Vid. U.N. R.I.A.A., ~~vol.XI~~, p.533.

¹⁴⁹ Vid. Sentencia, p.101, pa.166(b) en I.L.R., nº52, p.221.

¹⁵⁰ Vid. supra.

- Un complejo cordón sanitario fue establecido en el Alpe de Cravairola por las autoridades italianas, ante las epidemias que habían asolado la región¹⁵¹.

■ El nombramiento de jefes subalternos, así como la investidura en sus cargos, suponen, teniendo en cuenta la organización interna de las tribus, el ejercicio de autoridad gubernamental por parte del Rey de Barotse. Este hecho viene, asimismo, corroborado por la prueba oral que constituye el testimonio del Rev. Adophe Jalla, que declara el sometimiento de la población a la administración de Barotse en 1892¹⁵².

■ Competencia de las autoridades locales es la investigación de cadáveres, como la efectuada por el Pretor de la comuna del Crodo respecto del cadáver hallado en el Alpe de Cravairola; sus restos fueron transportados a Crodo e inhumados en el cementerio comunal¹⁵³.

■ Asimismo, la regulación del sistema de aduanas respecto de los límites de un territorio supone un acto de dominio sobre el mismo; la aduana italiana incluye y ha incluido en su campo de operaciones, la vasta extensión que va desde la Tremelina al lago Gelato, comprendiendo en la misma toda Cravairola¹⁵⁴.

¹⁵¹ Vid. Memoria de Italia..., op.cit., p.495.

¹⁵² Vid. U.N.R.I.A.A, vol.XI, p.68.

¹⁵³ Vid. Memoria de Italia..., op.cit., p.495.

¹⁵⁴ Vid. supra.

■ Las alegaciones respecto de la conducta de Chile posterior a 1902, efectuadas en el asunto de la Laguna del Desierto, hacen referencia al ejercicio de funciones públicas en los territorios en disputa por parte de autoridades locales chilenas¹⁵⁵.

D) ACTIVIDAD LEGISLATIVA.

Clara manifestación de la soberanía sobre un territorio es la dotación al mismo de un ordenamiento legislativo. Tal es la alegación presentada por Italia, respecto del estatuto del Crodo, aprobado por los príncipes del Ducado de Milán y los soberanos de Saboya, publicado igualmente en Val Maggia. Dicho estatuto, en vigor desde 1650 hasta 1837, regulaba materias tales como la utilización de la hierba o la expulsión de extranjeros¹⁵⁶.

E) EJERCICIO DEL ORDEN PÚBLICO Y LA DEFENSA: FUERZAS ARMADAS Y DE POLICIA.

Nuevamente nos enfrentamos a la innegable realidad de que se trata de la actividad más comúnmente invocada como prueba del ejercicio de soberanía sobre un territorio.

■ El Gobierno de EE.UU. estableció ciertas fortificaciones en la frontera Noreste, como es el caso del Fuerte 'Rouse', en el convencimiento de que el

¹⁵⁵ Cfr. Laudo de 21 octubre 1994, Original mecanografiado, p.110, pa.168.

¹⁵⁶ Vid. ibidem, p.491.

territorio era suyo¹⁵⁷.

■ En el cumplimiento del orden, el cuerpo de carabineros reales del puesto de Crodo, se desplazó al lugar del Alpe de Cravairola donde había sido hallado un cadáver, para establecer el carácter accidental de la muerte y excluir toda posibilidad de que se tratara de la comisión de un delito¹⁵⁸.

■ El Gobierno holandés estableció varios puestos militares sobre la región del Awa, en su frontera con Francia¹⁵⁹.

■ El principal argumento posesorio tanto de Dubai como de Sharjah, descansa sobre el establecimiento de patrullas, así como de fuerzas de policía en el territorio disputado, para mantener el orden el mismo. Varios documentos son presentados por Sharjah en este sentido, como prueba del intensivo control policial de la zona en los años anteriores a 1970. Por su parte Dubai se refiere a varios incidentes concretos, acaecidos en 1970 y 1972 en Al Mamzer, sofocados por patrullas bajo su autoridad, según consta en los propios registros de la policía; además de la actividad habitual de patrullaje regular de la zona¹⁶⁰.

■ Israel refiere, a su favor, la colocación de puestos militares turcos, así como de tropas en la zona de Taba¹⁶¹.

¹⁵⁷ Vid. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.I, p.377.

¹⁵⁸ Vid. Memoria de Italia..., op.cit., p.496.

¹⁵⁹ Vid. MARTENS, N.R.G., 2^as., XVIII, p.101.

¹⁶⁰ Vid. Original mecanografiado, pp.121-122, 133-137, 140-141 y 144-146.

¹⁶¹ Vid. I.L.M., vol.XXVII, 1988, p.1485.

F) ACTIVIDAD REGISTRAL.

Actos de registro, concretamente relacionados con la elaboración del catastro, han sido invocados como prueba de soberanía tanto por parte de Italia como de Suiza. La primera refiere la revisión catastral de dos provincias de Turín y Novare ordenada por el Gobierno italiano, lo cual llevó a dos técnicos a Cravairola para revisar la superficie, medirla e incluirla en el catastro. Por su parte, Suiza, alude al envío de ingenieros a Cravairola en 1758 para realizar los planes del catastro¹⁶².

G) RELACIONES DIPLOMATICAS.

El reconocimiento por otros Estados, fundamentalmente por el que reivindica el territorio, como prueba de soberanía es alegado por Países Bajos; en este caso se trata de diversos documentos de autoridades francesas, en los que se contiene implícito el reconocimiento del sometimiento de la población de Maroni a la dominación holandesa¹⁶³.

H) DISPOSICION ADMINISTRATIVA SOBRE BIENES INMUEBLES.

■ Prueba de una actividad de tal carácter es el sistema de arrendamiento de tierras públicas situadas en Lenox, inaugurado por Chile en 1894, como consecuencia de una ley de 1893, que aparece publicada en el Diario Oficial¹⁶⁴.

¹⁶² Vid. Memoria de Italia..., op.cit., p.495, y Memoria de Suiza, 18 agosto 1874, en LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.III, p.481.

¹⁶³ Vid. MARTENS, N.R.G., 2^{as}, p.101.

¹⁶⁴ Vid. sentencia, p.101. pa.166(b) en I.L.R., n°52, p.221.

■ La parte más importante del volumen probatorio presentado por Chile, en relación a su ejercicio de administración sobre el territorio que entendió le otorgaba el laudo de 1902 -alegado como elemento útil para confirmar la interpretación del laudo en el estudio de sus componentes¹⁶⁵-, se centra en diversos actos de disposición sobre inmuebles situados en el territorio que entiende le otorgaba dicho laudo. Concretamente se refiere al **otorgamiento de títulos de propiedad** en la zona a Ismael Sepúlveda en 1937, y a Evangelista Gómez en 1934, según consta en el Informe y plano elaborados por el Ingeniero Fernández Correa, encargado de marcar en 1933 los lotes posteriormente otorgados¹⁶⁶.

Igualmente alega, como acto de administración, varias **concesiones de tierras** en esos lugares, tanto a pobladores chilenos como a extranjeros; es el caso de la llamada Concesión Freudenburg de 1904¹⁶⁷.

I) SISTEMA DE CONCESIONES.

■ En forma abstracta, sin especificar supuestos, se refiere que la República de Sudáfrica ha otorgado concesiones sobre los afluentes del norte y sur de Vaal¹⁶⁸.

■ Gran Bretaña presenta como prueba de su ocupación efectiva de la zona

¹⁶⁵ Idea que sustentamos y que parece igualmente retener Galindo Pohl, en su opinión disidente en este asunto de la Laguna del Desierto (cfr. Original mecanografiado, pp.174-175); contamos, además, con el apoyo que supone el precedente del asunto del Canal de Beagle, ya citado.

¹⁶⁶ Cfr. ibidem, p.110, pa.168, y p.176.

¹⁶⁷ Cfr. supra.

¹⁶⁸ Vid. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.II, p.579.

de Walvis, el otorgamiento de la concesión del establecimiento y mantenimiento de los jardines de los magistrados residentes de Walvis Bay, así como de las tierras en Rooibank y Ururas¹⁶⁹.

■ El descubrimiento de yacimientos auríferos en Lenox y Nueva, llevó a Chile a establecer un sistema de concesiones, tal y como la que en 1896 otorgó a un ciudadano británico, Thomas Bridges, sobre Picton¹⁷⁰.

J) OBRAS PUBLICAS.

■ El levantamiento de diversas construcciones por parte de las autoridades pertinentes, configura el grueso principal del título de Suecia sobre el banco de Grisbadârna, dado que son los únicos actos realizables habida cuenta de las peculiaridades geográficas del terreno. Tal actividad viene constituida por la instalación de un barco-faro, por las operaciones de balizaje de la zona, y de medición del mar¹⁷¹.

■ Tanto Sharjah como Dubai alegan la construcción de obras públicas como prueba de su posesión efectiva del territorio. El primero se refiere a la construcción de edificios en una zona industrial al sur de Nahada Amair y Hadhib Azana. Dubai, alega la construcción de siete u ocho pozos en el área disputada¹⁷².

¹⁶⁹ Vid. U.N.R.I.A.A., vol.XI, p.306.

¹⁷⁰ Vid. sentencia p.101, pa.166(b), en I.L.R., nº52, p.221.

¹⁷¹ Vid. R.G.D.I.P., 1910, p.186.

¹⁷² Vid. Original mecanografiado, pp.170 y 199, respectivamente.

K) ESTUDIOS CARTOGRAFICOS.

■ Como material confirmatorio de sus alegaciones interpretativas del tratado de 1881, Argentina y Chile presentan un volumen ingente de mapas de variado carácter, que asciende, en el caso del Canal del Beagle, a un total de cuatrocientos, siendo inferior en el de la Laguna del Desierto¹⁷³, entre los que se recogen los Mapas oficiales del Ministerio de Agricultura y la Dirección General de Tierras de Argentina, de 1911 y 1918.

■ En el mismo sentido, se presentan tanto los mapas (el mapa de 1935-38 de Sinai), por parte de Egipto, como las publicaciones técnicas (tales como el Statiscal Yearbook of Egypt de 1909) en el caso de Israel¹⁷⁴.

Como apunte final a la exposición de la prueba de la soberanía a través de actos estatales, creemos obligado referirnos de forma separada -por la innovación que supone en este ámbito- a la utilización por vez primera de un singular instrumento probatorio de tal actividad: el testimonio a través de video¹⁷⁵. En efecto, tal y como apuntábamos en el primer capítulo de nuestro trabajo, en el asunto de la Laguna del Desierto se recurrió, por parte de Chile, a la relegada figura

¹⁷³ El valor de la cartografía en el asunto del Canal de Beagle ha sido ampliamente abordado en el capítulo IV, por lo que nos remitimos a todas las observaciones entonces efectuadas (vid. supra, pp.260-261). Para el otro asunto de 1994, cfr. Original mecanografiado, pp.109-110, pa.165 a 167.

¹⁷⁴ Vid. I.L.M., vol.XXVII, 1988, pp.1473 y 1485, respectivamente.

¹⁷⁵ Vid. Memoria de la República de Chile, vol.2, 31 agosto 1992, Anexos documentales nº115 a 123 (citado en la Contramemoria Argentina, 1993, capítulo 7, pp.254-295); y Ultima sesión de las exposiciones orales, Acta de 13 abril 1994.

del testigo, siguiendo en este sentido la pauta marcada por El Salvador, en el asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima que lo enfrentaba con Honduras, al presentar en la fase oral a un ciudadano salvadoreño como prueba de su soberanía sobre Meanguera¹⁷⁶. Sin embargo, el recurso al testimonio en el citado arbitraje se convierte en algo novedoso al no venir prestado el mismo personalmente ante el Tribunal arbitral, sino al ser reproducido ante el órgano jurisdiccional a través de la técnica de un video que recoge el testimonio de un ciudadano chileno, Ismael Sepúlveda Rivas (chileno de nacimiento), que se había instalado con su familia al norte de la Laguna del Desierto; a través de dicho testimonio Chile pretende demostrar su presencia efectiva en el territorio objeto de la controversia.

2. Actos realizados por particulares.

Con el valor ya indicado de corroborar un control estatal, se alegan las siguientes actividades desplegadas por individuos:

- El título italiano al Alpe de Cravairola descansa, fundamentalmente en la posesión privada del mismo por particulares, posteriormente transferida al Estado que ha continuado en su soberanía.

En este sentido, se alega, en primera instancia la **posesión física** por particulares: varios documentos fechados entre los años 1345, 1367, 1406, 1454 y 1497, demuestran las adquisiciones del Alpe de Cravairola hechas por la Comuna

¹⁷⁶ cfr. supra, p.327.



del Crodo y las gentes de Pontemaglio en una época en que el cantón de Tessin, y, en consecuencia, Val Maggia, formaban parte de Milán¹⁷⁷.

■ Estos particulares han efectuado, también actos de **disposición sobre los inmuebles** de su propiedad: instrumento de venta, 24 febrero 1406, de una parte del Alpe; nueva venta efectuada por el Crodo en 1786¹⁷⁸.

■ La **explotación de recursos naturales**, concretada en el ejercicio de la pesca, ha sido presentada por Suecia; sus pescadores faenaban habitualmente por las aguas de Grisbadârna, explotando los bancos de bogavantes, para lo cual se ayudaban de las embarcaciones necesarias al efecto¹⁷⁹.

■ La última referencia a las actividades de individuos privados la localizamos en el arbitraje de Dubai y Sharjah, en el que ambas Partes recogen referencias a dichos actos, concretamente a sus **derechos de propiedad** en la zona, como prueba de su propio control efectivo¹⁸⁰.

A diferencia de todos los conflictos hasta ahora examinados, ya sean de adquisición, ya lo sean de delimitación territorial, en los últimos referidos no encontramos referencia alguna a otro tipo de prueba de soberanía: la que deriva de la actuación de las Compañías de Comercio y colonización bajo mandato del Estado, por un lado, y de la actividad eclesiástica, con carácter propio, por otro.

¹⁷⁷ Vid. Memoria de Italia..., op.cit., p.488.

¹⁷⁸ Vid. ibidem, p.494.

¹⁷⁹ Vid. R.G.D.I.P., 1910, p.186.

¹⁸⁰ Vid. Original mecanografiado, p.119.

Esta ausencia, que no podemos catalogar como laguna, es reseñable como indicativa del carácter de prueba supletoria de tal actividad frente a auténticos actos de autoridad estatal, no estrictamente necesaria cuando estos últimos resultan suficientes para probar el ejercicio de la soberanía.

SECCION 3ª: LOS RESULTADOS DE LA PRACTICA.

El árbitro o tribunal arbitral, en su caso, tiene la obligación ya indicada de comparar los títulos jurídicos invocados por las Partes, en atención a la prueba concerniente por ellos mismos presentada. En este sentido, como muy bien ha indicado el tribunal arbitral que conoció del asunto de Taba,

"the Parties agree that, if evidence of one Party is not conclusive in itself, the Tribunal has to weight the evidence of one Party against that of the other, and the decision will be in favour of the Party with the 'better claim'"¹⁸¹.

Obligación asumida de decidir el más fuerte, aun cuando se enfrente a dos títulos insuficientes. Situación que se mantiene siempre y cuando no nos encontremos en alguno de los supuestos reseñados de otorgamiento del recurso último a la equidad; pues en éstos, a diferencia de los regulados estrictamente por el derecho, tanto el árbitro como las Partes, son conscientes de la posibilidad de que aquél, tras el

¹⁸¹ Vid. I.L.M., vol.XXVII, 1988, p.1470.

pertinente examen de la prueba, no decida en favor del mejor título si éstos resultan ser imperfectos, y determine una delimitación equitativa que responda a aquellos cánones que mejor se ajusten a la justicia.

Teniendo presente esta realidad, corresponde ahora abordar la tarea última de exponer el resultado final de ese examen de la prueba de la posesión efectiva detallada en las páginas anteriores, llevado a cabo por el árbitro en consideración a las circunstancias pertinentes de cada caso.

A) EFECTIVIDADES QUE HAN SIDO RETENIDAS.

Para determinar cuáles de todas las actividades referidas, tanto estatales como privadas, han sido consideradas como prueba suficiente del ejercicio de soberanía sobre el territorio en el que se desarrollan, vamos a seguir el hilo de exposición marcado en el apartado correspondiente del capítulo anterior, analizando globalmente las correspondientes a los conflictos de adquisición y delimitación territorial.

1. Actos de carácter estatal admitidos como prueba.

Retomando los diversos actos alegados como prueba principal de soberanía, han sido considerados en ese sentido los siguientes:

- Las alegaciones de jurisdicción penal, presentadas por Gran Bretaña

respecto del territorio de Walvis Bay, son la mejor prueba de su efectiva ocupación¹⁸². A través de este tipo de actos, Guatemala ha mantenido también su autoridad sobre el territorio que se extiende entre el Valle de Motagua y Honduras británica¹⁸³; lo mismo sucede con Pakistán, respecto del territorio de Dhara Banni y Chhad Bet, pues para el resto del territorio fronterizo del Rann se consideran más consistentes los actos de jurisdicción penal referidos por India¹⁸⁴.

■ Los diferentes actos alegados como manifestación de **jurisdicción civil** sobre el Alpe de Cravairola, por parte de Italia, son retenidas como prueba de su ejercicio de soberanía¹⁸⁵. Las referencias de Honduras al despliegue de este tipo de actos en el Valle de Copán, así como de Guatemala respecto de Sto. Tomás, son igualmente consideradas como manifestación de administración judicial¹⁸⁶.

■ En cuanto a las referencias de **actividad administrativa**, tanto central como local, efectuadas por los distintos Estados, se han retenido como prueba válida:

- Las alegaciones de Portugal a los distintos establecimientos efectuados, tanto en la isla de Bulama como en la bahía de Delagoa, para hacer efectiva la

¹⁸² Cfr. U.N.R.I.A.A., vol.XI, pp.307-308.

¹⁸³ Cfr. U.N.R.I.A.A., vol.II, pp.1328-1329.

¹⁸⁴ Cfr. I.L.M., vol.VII, 1968, p.676.

¹⁸⁵ Cfr. LA PRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.III, p.505.

¹⁸⁶ Cfr. U.N.R.I.A.A., vol.II, pp.1344 y 1329, respectivamente.

ocupación del territorio previamente descubierto¹⁸⁷.

- Dentro de su ámbito competencial las autoridades italianas del Alpe han ejercido positivamente: la instauración de un servicio sanitario, inclusión en la organización aduanera italiana y el desarrollo de investigaciones sobre cadáveres encontrados en dicho territorio¹⁸⁸.

- La fundación de poblaciones, se ha considerado acto de ocupación, en el caso de Argentina respecto de la región del lago Lacar, y en el de Costa Rica y Panamá, respectivamente en la orilla oeste y este del río que les separa¹⁸⁹.

- Las visitas oficiales efectuadas por autoridades centrales y locales británicas al territorio de Guyana, se realizan en cumplimiento de sus funciones como soberanos del mismo¹⁹⁰.

- Se entiende claramente ejercida la autoridad gubernamental por el Rey de Barotse, a través de los nombramientos de Jefes subalternos efectuados por aquél¹⁹¹.

- Se considera probado por parte de Honduras, el ejercicio de administración en las materias de su competencia (fundación de poblaciones, nombramiento y destitución de cargos, visitas oficiales...), respecto de Trujillo, Río Tinto y Cabo de

¹⁸⁷ Cfr. respectivamente, LA PRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.II, p.613 y vol.III, p.637.

¹⁸⁸ Cfr. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.III, p.500.

¹⁸⁹ Cfr. U.N.R.I.A.A., vol.IX, p.37, respecto del caso de la Cordillera de los Andes; y vol.XI, pp.533-534, para Colombia y Panamá.

¹⁹⁰ Cfr. R.G.D.I.P., 1904, p.19.

¹⁹¹ Cfr. U.N.R.I.A.A., vol.XI, p.68.

Gracias a Dios¹⁹².

- Amplia acogida han tenido todos los actos relacionados con la administración de la Isla de Palmas, efectuados por autoridades holandesas; tales son, el nombramiento y destitución de cargos públicos, la concesión de ayudas a la población a cargo de fondos públicos, las visitas oficiales, o la realización de informes hidrográficos sobre los recursos de la zona¹⁹³.

- Han sido admitidos como prueba del ejercicio de soberanía sobre el primer sector (río Motagua y Honduras británica) los actos administrativos presentados por Guatemala en relación al mismo: nombramiento de cargos públicos, establecimiento de aduanas, visitas oficiales y elaboración del censo de la población activa, respecto de Sto.Tomás¹⁹⁴.

- La prueba de actividad aduanera presentada por Pakistán, corrobora su control sobre el sector de Dhara Banni. La elaboración de proyectos hidrográficos sobre la región del Rann, por parte de India, demuestra su autoridad sobre la misma¹⁹⁵.

- Por último, se aceptan como prueba los actos administrativos alegados por Chile respecto de la región del Beagle: colonización del territorio y levantamiento de poblaciones, e instauración de una compleja red de servicios públicos: postal,

¹⁹² Cfr. GROS ESPIELL, H., op.cit., p.39.

¹⁹³ Cfr. R.G.D.I.P., 1935, pp.195-196.

¹⁹⁴ Cfr. U.N.R.I.A.A., vol.II, pp.1329-1330.

¹⁹⁵ Cfr. I.L.M., vol.VII, 1968, p.676.

sanitario, educativo...¹⁹⁶.

■ Las escasas referencias al desarrollo de una concreta actividad legislativa, materializada en disposiciones legales, han sido admitidas como prueba de ejercicio de soberanía. Es el caso de la dotación de un Estatuto a la comuna del Crodo, poseedora del Alpe de Cravairola, aprobado por autoridades italianas; de la reglamentación organizativa otorgada por las autoridades coloniales españolas a los establecimientos de Río Tinto y Cabo de Gracias a Dios, en la provincia de Honduras; o, del decreto guatemalteco de 1878, que obligaba a la prestación obligatoria a los habitantes de Sto.Tomás¹⁹⁷.

■ Respecto de las abundantes alegaciones probatorias referidas al despliegue de fuerzas armadas y de policía, han sido varias las admitidas con tal valor: - las fortificaciones que EE.UU., estableció en la frontera noroeste con Gran Bretaña, como el caso del fuerte 'Rouse'; - la instalación de fuerzas armadas y artillería en la isla de Aves, por parte de Venezuela; - la construcción de varios cuarteles militares en la isla de Bulama, y de fortificaciones en la bahía de Delagoa, así como de una intensa actividad de defensa del territorio a cargo de Portugal; - la actividad policial desarrollada en el Alpe de Cravairola por los carabineros reales del Crodo; - los puestos militares holandeses establecidos sobre el Awa; - establecimiento

¹⁹⁶ Cfr. I.L.M., vol.XVII, 1978, p.674.

¹⁹⁷ Cfr. respectivamente, LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.III, p.500; GROS ESPIELL, H., op.cit., p.139; y, U.N.R.I.A.A., vol.II, p.1330.

militar y levantamiento de fortines en la región del Lago Lacar, por Argentina; - la intervención de la policía británica en la Guyana para el mantenimiento del orden público; - los nombramientos militares para la región de Cabo de Gracias a Dios por autoridades hondureñas; - las patrullas marítimas enviadas a Miangas por Países Bajos; - así como las francesas de la Isla de Clipperton; - la actividad policial de Sind, sobre Dhan Banni y Chad Bet, y de India sobre el resto del Rann; - y el establecimiento de patrullas y de fuerzas de policía por parte de Dubai, en el territorio disputado a Sharjah¹⁹⁸.

■ Sólo habíamos detectado una alegación de ejercicio soberano basada en la **celebración de elecciones**: la de Guatemala, respecto de los territorios de la jurisdicción de Sto.Tomás, que es admitida como prueba de su autoridad en ese sector¹⁹⁹.

■ Igualmente se recoge la prueba presentada por Guatemala en relación a la organización de la **enseñanza pública**, en ese mismo sector de Motagua²⁰⁰.

■ Los **actos de registro** que han sido admitidos son los referidos por Italia,

¹⁹⁸ La referencia a la admisión por parte del árbitro correspondiente, de estos actos, podemos localizarla, respectivamente en: LAPRADELLE et POLITIS, *R.S.A.*, vol.I, p.377; *ibidem*, vol.II, p.415; *ibidem*, p.613; *ibidem*, vol.III, p.637; *ibidem*, p.500; MARTENS, *N.R.G.*, 2^{as.}, vol.XVIII, p.101; U.N.R.I.A.A., vol.IX, p.37; *R.G.D.I.P.*, 1904, p.19; GROS ESPIELL, H., *op.cit.*, p.139; *R.G.D.I.P.*, 1935, p.196; *A.J.I.L.*, 1932, p.391; *I.L.M.*, vol.VII, 1968, p.676; Original mecanografiado, p.151.

¹⁹⁹ Cfr. U.N.*R.I.A.A.*, vol.II, p.1331.

²⁰⁰ Cfr. supra.

respecto de la inclusión en el catastro de las tierras situadas en el Alpe de Cravairola²⁰¹.

■ En el amplio marco de las relaciones diplomáticas, son varias las referencias a actos internacionales de reconocimiento por terceros a los que se reconoce eficacia jurídica. Las obtenidas por Portugal respecto de los territorios de isla de Bulama y bahía de Delagoa, tanto por las propias tribus que los habitan, como por potencias extranjeras; en el mismo sentido, el reconocimiento a favor de Países Bajos sobre Maroni; el sometimiento a la soberanía británica obtenido de los jefes que habitan la Guyana, a través de varias declaraciones; el propio reconocimiento guatemalteco a la posesión hondureña sobre Copán; o las declaraciones británicas reconociendo la soberanía de Pakistán sobre el Rann²⁰².

■ Los actos dispositivos sobre inmuebles que han tenido la consideración de prueba de soberanía son los títulos referentes a las concesiones de tierras del dominio de la Corona situadas en el valle de Copán, alegadas por Honduras y constitutivo de la mejor prueba de su título, así como la venta pública de un terreno del Motagua a que se refiere Guatemala. Igualmente tiene eficacia probatoria el sistema de arrendamiento de tierras públicas situadas en Lenox, inaugurado por

²⁰¹ Cfr. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.III, p.500.

²⁰² Cfr. respecto de cada uno de los reconocimientos admitidos, respectivamente, LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.II, p.613; ibidem, vol.III, p.637; MARTENS, N.R.G., 2ª s, vol.XVIII, p.101; R.G.D.I.P., 1904, p.19; U.N.R.I.A.A., vol.II, p.1361; e I.L.M., vol.VII, 1968, p.682.

Chile²⁰³.

■ Varias concesiones para la explotación de servicios y recursos, otorgadas a particulares por el Estado, han sido válidamente aceptadas. La conferida por Venezuela para la extracción del guano en Aves; - las concedidas por la República de Sudáfrica; - las referidas por Gran Bretaña respecto del territorio de Walvis; - la concesión francesa del guano de Clipperton previa a su ocupación; - las otorgadas por Guatemala para la explotación del río Motagua; y, - el sistema de concesiones auríferas instalado por Chile en el Beagle²⁰⁴.

Igualmente se ha admitido como prueba de la ocupación portuguesa de Delagoa, el ejercicio del monopolio del comercio y de la navegación en dicha zona²⁰⁵.

■ En relación a la construcción de obras públicas, se constituyen como acto de autoridad las siguientes levantadas en terreno litigioso: - todas las contrucciones efectuadas por Suecia en el banco de Grisbadârna, balizaje, faros..., en su convicción de soberano; - igualmente, los trazados de carreteras realizados por Pakistán respecto de Chhad Bet, y por India en otras zonas del Rann²⁰⁶.

²⁰³ Cfr. U.N.R.I.A.A., vol.II, pp.1349-1350 y 1330, respecto de Honduras y Guatemala; e, I.L.M., vol.XVII, 1978, p.674.

²⁰⁴ Cfr, respectivamente, LAPRADELLE et POLITIS, vol.II, p.415; ibidem, p.579; U.N.R.I.A.A., vol.XI, pp.307-308; A.J.I.L., 1932, pp.391-392; e, I.L.M., vol.XVII, 1978, p.664.

²⁰⁵ Cfr. LAPRADELLE et POLITIS, R.G.A., vol.III, p.637.

²⁰⁶ Cfr. R.G.D.I.P., 1910, pp.186-187, e I.L.M., vol.VII, 1968, p.689.

■ Por último, las consideraciones geográficas de contigüidad, han sido admitidas, aunque de forma subsidiaria, en la Isla de Aves, a favor de Venezuela, y en la isla de Bulama, para Portugal²⁰⁷. Mientras que los estudios cartográficos, lo han sido respecto de Honduras, en su frontera con Nicaragua; en Clipperton, a favor de Francia; los presentados por Honduras, en relación al valle de Copán; tan sólo uno de los presentados por Pakistán; y, en general, el material cartográfico que apoya la pretensión chilena sobre el Beagle²⁰⁸.

2. Actividad privada con valor probatorio.

De las variadas alegaciones de posesión efectiva, realizadas por las Partes, en las que se aportan como apoyo probatorio diversos actos realizados por sus nacionales, bien a título confirmativo, bien como base principal, se han retenido:

■ La extracción y explotación de recursos naturales: esta actividad ha sido admitida como prueba de posesión en el caso de la isla de Bulama, realizada por nacionales portugueses que talaban sus bosques; por pescadores suecos en Grisbadârna; en el caso de Guatemala y Honduras, en relación a la extracción de zarza por guatemaltecos; y, en el asunto de Rann de Kutch, en el que la utilización de las tierras de Dhra Banni y Chhad Bet por individuos privados confirma la

²⁰⁷ Cfr. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.II, p.415 y 613, respectivamente.

²⁰⁸ Cfr. GROS ESPIELL, H., op.cit., pp.142-144; A.J.I.L., 1932, p.391; U.N.R.I.A.A., vol.II, p.1330 y 1338; I.L.M., vol.VII, 1968, pp.671 y 684; e, I.L.M., vol.XVII, 1978, p.664.

posesión de Pakistán²⁰⁹.

■ Los actos relacionados con la posesión física del territorio, y la consiguiente **disposición de sus inmuebles**, constituyen la principal afirmación del título italiano al Alpe de Cravairola, en base a su sucesión en la propiedad; así lo ha entendido el árbitro al otorgar plena eficacia jurídica, como constitutivo de la prueba del título italiano, a los actos posesorios desarrollados por la Comuna del Crodo como precedente de la propia soberanía estatal²¹⁰.

3. Otros actos igualmente admitidos como prueba.

Retomando los actos que incluíamos en los apartados correspondientes, respecto de los conflictos de adquisición y los de delimitación equitativa, y que hacían referencia al despliegue de actividad no puramente estatal, pero sí imputable al Estado, la consideración que de los mismos se ha hecho en los diferentes laudos arbitrales es arduamente positiva; en términos generales, puede afirmarse la consideración de éstos como mecanismo apropiado para probar la soberanía territorial del Estado a que se adscriben tales 'entidades'.

■ La actividad desarrollada por las Compañías de Comercio y colonización, como primer ocupante que actúa en nombre de un Estado, se equipara plenamente a actividad estatal, tal ha sido la consideración obtenida en los casos en que se ha

²⁰⁹ Cfr. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.II, p.613; R.G.D.I.P., 1910, p.186; U.N.R.I.A.A., vol.II, p.1330 (en este caso entendemos implícita la aceptación, a pesar de su silencio, al tratarse de actos realizados sobre el territorio que se otorga a Guatemala); I.L.M., vol.VII, 1968, p.689.

²¹⁰ Cfr. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.II, p.505.

alegado.

- El título de Gran Bretaña al territorio de Guyana, fronterizo con Brasil, deriva, en primera instancia, del ejercicio de autoridad manifestado por la Compañía holandesa de las Indias Occidentales a través de los siguientes actos: **monopolio del comercio, fundación de establecimientos y despliegue de fuerza armada en dicho territorio**²¹¹.

- Más trascendencia ha conllevado la actuación de la Compañía holandesa de las Indias Orientales, al suponer el sustento principal del título posesorio de Países Bajos sobre la isla de Palmas, marcando un hito en este sentido; actividad que se materializa en auténticos actos estatales: **ejercicio de jurisdicción penal, actividad de defensa y mantenimiento de orden público a través del establecimiento de las fuerzas pertinentes, fiscalidad y conclusión de todo tipo de acuerdos y contratos con los jefes de las tribus indígenas que habitaban la isla**²¹².

■ Menor relevancia ha adquirido el ejercicio de autoridad por agentes de la Iglesia, aunque sus referencias no han dejado de adquirir alguna consideración, expresa o implícita. En este sentido, entendemos que las alegaciones realizadas por Gran Bretaña y Países Bajos a la **construcción de iglesias e impartición de la educación** por reverendos protestantes en los respectivos territorios, aunque no han sido referidas expresamente en los laudos, han tenido su incidencia en el otorgamiento a dichos Estados de los territorios reivindicados.

²¹¹ Cfr. R.G.D.I.P., 1905, p.19.

²¹² Cfr. R.G.D.I.P., 1935, pp.183-188 y 193-196.

- Las referencias de Honduras a diversos actos eclesiásticos efectuados en Trujillo, Río Tinto y Cabo de Gracias a Dios, por parte del Obispado de Comayagua, han adquirido la consideración de actos de jurisdicción en su disputa con Nicaragua: **nombramiento de capellanes, celebración de matrimonios, recaudación de impuestos y levantamiento de poblados**²¹³.

B) EFECTIVIDADES QUE NO HAN SIDO ADMITIDAS COMO PRUEBA.

En el lado opuesto a todos estos actos mencionados están aquellos otros que, referidos como prueba de posesión efectiva presentada por los Estados, no han alcanzado tal carácter; esta circunstancia no sólo se produce por su menor peso específico en comparación con el título al que se oponen (en los arbitrajes de delimitación examinados, a diferencia de la instancia judicial, no se produce esa oponibilidad general entre posesión/título legal, que hacía decaer a aquél), sino también por la desestimación general de ambos en recurso a la equidad.

1. Actos estatales rechazados.

Por las razones apuntadas, se considera que no prueban suficientemente el título de soberanía, los siguientes:

²¹³ Cfr. GROS ESPIELL, H., op.cit., p.140.

■ Tan sólo la alegación de jurisdicción criminal presentada por Alemania respecto del territorio de Walvis Bay ha sido rechazada, inclusive su prueba testifical, en favor de la mayor fuerza de la prueba británica²¹⁴.

■ Respecto de la actividad administrativa en general,

- La creación de establecimientos por parte de Gran Bretaña en la frontera con EE.UU., no es base suficiente de decisión²¹⁵.

- Las operaciones de agrimensura invocadas por Austria, aun constituyendo un auténtico acto de soberanía, resultan insuficientes para determinar la frontera a su favor²¹⁶.

- La referencia de EE.UU., a la visita oficial a la isla de Palmas por parte del general Wood, es ignorada por el árbitro²¹⁷.

- De modo global y absoluto, el tribunal arbitral que conoció del asunto de la Laguna del Desierto ha rechazado toda la prueba relativa a actos de administración presentada por Chile en el entendimiento de que "no se trataría de actos de jurisdicción que hayan tenido la consistencia, la no equivocidad y, en algunos casos, la efectividad requeridas para dotarlos de consecuencias relevantes

²¹⁴ Cfr. U.N.R.I.A.A., vol.XI, pp.301-302.

²¹⁵ Cfr. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.I, p.373.

²¹⁶ Cfr. R.G.D.I.P., 1903, p.432.

²¹⁷ Cfr. R.G.D.I.P., 1935, p.197.

en el presente caso"²¹⁸.

■ Unicamente, no han sido adoptadas las alegaciones de despliegue de **fuerzas armadas** presentadas por Brasil en relación a las fortificaciones levantadas por Portugal, la referencia de EE.UU. al envío de cañoneros españoles a Palmas, y el control policial invocado por Sharjah. En todos estos casos, porque la prueba de la parte contraria era superior; mientras que en el de Guatemala, las tropas enviadas al sector de Omoa, e Israel, el ejercicio de defensa por tropas turcas, resultan inconcluyentes, rechazándose en favor de la equidad²¹⁹.

■ La única alusión a ejercicio de soberanía en Palmas por autoridades españolas efectuada por EE.UU., relativa a recaudación de impuestos, es insuficiente frente al volumen probatorio holandés. Una actividad similar invocada por Pakistán es, igualmente, rechazada, pero en este caso por no ser practicada por auténticos agentes estatales²²⁰.

■ Los **actos registrales** relativos al catastro, realizados por Suiza respecto del

²¹⁸ Vid. Original mecanografiado, pp.110-111, pa.169. En apoyo de esta decisión recoge una cita del T.I.J. en el caso del Templo de Preah Vihear, cuando éste se refiere a los actos de administración presentados Tailandia, para rechazarlos igualmente, pues "it difficult to regard such local acts as overriding and negating the consistent and undeviating attitude of the Central Siamese authorities to the frontier line as mapped" (I.C.J.Reports, 1962, p.30).

²¹⁹ Cfr. R.G.D.I.P., 1904, p.19; R.G.D.I.P., 1935, p.197; Original mecanografiado, p.134; U.N.R.I.A.A., vol.IX, p.1332; e, I.L.M., vol.XXVII, p.1485, respectivamente.

²²⁰ Cfr. R.G.D.I.P., 1935, p.197, e I.L.M., vol.VII, 1968, pp.677-678.

Alpe de Cravairola son de una fuerza menor a los similares llevados a cabo por Italia²²¹.

■ De todos los actos de reconocimiento que hemos podido identificar, carece de valor el alegado por Brasil, respecto del reconocimiento de la soberanía portuguesa sobre la zona fronteriza de la Guyana, mediante tratados con varios países²²².

■ Se han desestimado varios actos de disposición de inmuebles: tanto la venta pública de un terreno situado en el Oeil de la Mer, alegado por Hungría, como la similar invocada por Austria, ambas en favor de una frontera equitativa; asimismo, tampoco tiene acogida la propuesta de venta presentada por Honduras respecto de terrenos baldíos ubicados en las islas de la desembocadura de Cabo de Gracias a Dios²²³.

La prueba presentada por Chile en relación al otorgamiento de títulos de propiedad y concesiones de tierras sobre el territorio de la Laguna del desierto ha sido, en el mismo sentido, rechazada por el tribunal arbitral²²⁴.

²²¹ Cfr. LAPRADELLE et POLITIS, R.G.A., vol.II, p.500.

²²² Entendemos implícito este rechazo, al hacerlo de todo el título brasileño en global en favor del británico (cfr. R.G.D.I.P., 1904, p.19).

²²³ Cfr. GROS ESPIELL, H., op.cit., p.146.

²²⁴ El rechazo global a toda la prueba de actos de soberanía posteriores a 1902, se funda en la idea de que "no es útil para arrojar luz sobre la voluntad del Arbitro en 1902" (vid. original mecanografiado, pp.108-109, pa.162). Opinión ésta, del tribunal arbitral, que, si bien cuenta con el apoyo de la sentencia de 1966 en el caso del Río Encuentros (cfr.U.N.R.I.A.A., vol.XVI, p.174), parece olvidar, no sólo el conjunto de la práctica jurisprudencial en relación a la consideración del valor de las efectividades,

■ Las construcciones públicas que Honduras invoca respecto de la orilla del río Motagua, los trabajos de reparación ordenados por autoridades guatemaltecas de varios caminos de Omoa, así como las presentadas tanto por Dubai como por Sharjah, en relación a la construcción pozos y de edificios en el área fronteriza, no pueden aceptarse como prueba consistente de un control efectivo del área²²⁵.

■ Los argumentos geográficos y cartográficos, presentados por Países Bajos en relación a la dependencia natural de la isla de Aves respecto de la de Saba, y los numerosos estudios de geógrafos aportados, no tienen la suficiente entidad para determinar la soberanía de la isla; igualmente, se entiende inadmisibile como método jurídico de atribución territorial, el principio de contigüidad que EE.UU. invoca respecto de Palmas y el grupo de Filipinas. Por otro lado, las publicaciones técnicas presentadas por Egipto en cuanto le adjudican el área de Taba, no constituyen actos administrativos por lo que no tienen autoridad suficiente para establecer una frontera. No cabe, tampoco, atribuir consecuencias decisivas a la cartografía presentada por Chile y Argentina para sustentar sus alegaciones respecto de la Laguna del Desierto²²⁶.

sino, más directamente aún, la opinión expresada en el asunto del Canal del Beagle -que se enfrentó a idéntica situación- en cuanto al valor confirmatorio que tienen los actos de jurisdicción posteriores de las Partes (cfr. I.L.M., vol.XVII, 1978, p.664). En este sentido, nos situamos más en la línea de la opinión disidente de Galindo Pohl (cfr.original mecanografiado, pp.175-176).

²²⁵ Cfr. respectivamente, U.N.R.I.A.A., vol.IX, pp.1348, 1351 y pp.1331, 1337; Original mecanografiado, pp.170 y 199-200.

²²⁶ Cfr. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.II, p.414; R.C.D.I.P., 1935, p.182; I.L.M., vol.XXVII, p.1485; y, Original mecanografiado, pp.109-110, pa.166-167, respectivamente.

2. Actos realizados por particulares no considerados.

Este examen jurisprudencial nos conduce a reseñar la existencia de dos alegaciones de actividad privada que han sido recusadas.

■ Por un lado, el título posesorio holandés a la isla de Aves ha sido rechazado en su totalidad, en favor del título jurídico venezolano corroborado por la efectividad de la fuerza armada. Dicha posesión holandesa se centraba exclusivamente en la **residencia temporal** de la isla por nacionales suyos, que además se dedicaban a **ejercer la pesca y recolectar huevos de ave**, lo que constituye claramente -y así lo establece el árbitro- una ocupación precaria, un título imperfecto²²⁷.

■ Por otro, las alegaciones presentadas tanto por Dubai como Sharjah en relación a actividades de individuos privados, no merecen consideración alguna a juicio del tribunal, pues no ofrecen prueba de control efectivo sobre el territorio²²⁸.

3. Otros actos rechazados como prueba.

Habida cuenta de que toda la actividad desarrollada por las Compañías de Colonización ha merecido la plena consideración de actividad estatal y, en consecuencia, su plena admisión como prueba de ejercicio de soberanía, debemos acudir a la actividad eclesiástica para encontrar cómo parte de ésta no ha logrado

²²⁷ Cfr. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.II, pp.414 y 415.

²²⁸ Cfr. Original mecanografiado, pp.119 y 209.

probar el título presentado.

■ Nos referimos al caso de la controversia fronteriza entre Guatemala y Honduras. En este asunto, a pesar del reconocimiento, por el tribunal arbitral, de la coincidencia de los límites administrativos y eclesiásticos (al tratarse de un conflicto regido por el uti possidetis iuris) -lo que implica la importancia probatoria que supone, a estos efectos, el ejercicio de jurisdicción eclesiástica-, dicho tribunal no ha retenido en ningún momento la voluminosa prueba presentada por las Partes al efecto. De esta manera, actos habituales de administración como la **celebración de matrimonios y bautismos**, la **extensión de dispensas**, la **recaudación de impuestos** o las **visitas pastorales**, que son referidos a través de documentos escritos no prueban convenientemente la línea del control administrativo²²⁹.

C) REFLEXIONES FINALES.

No se trata aquí de establecer las conclusiones, que a nuestro juicio merece esta amplia exposición de la prueba de las efectividades en la jurisprudencia internacional; pues, habida cuenta de la multiplicidad de observaciones que nos creemos en la obligación de efectuar, y teniendo presente que nos estamos refiriendo al objeto central de nuestro estudio, no estimamos que sea éste lugar oportuno para ello, postergándolo a la fase última del trabajo. Nuestra intención ahora es la exponer tan sólo algunas ideas que han ido surgiendo al hilo de esta

²²⁹ Vid. U.N.R.I.A.A., vol.II, pp.1342-1347.

ilustración.

De esta manera, actuando comparativamente con el capítulo anterior, se hace necesaria una primera reflexión, cual es la mayor incidencia que ha supuesto la prueba de ejercicio de funciones estatales en la práctica arbitral; pero, no sólo en los conflictos de adquisición, sino, más aún, en los de delimitación. En este sentido, parece confirmarse la afirmación que, en su tiempo, hiciera Max Huber y a la que la práctica judicial examinada no se ha ajustado plenamente, en el sentido de que el ejercicio continuo y pacífico de la soberanía territorial no sólo es un título válido de adquisición, sino que "forme encore l'un des éléments les plus importants à considérer pour l'établissement des frontières entre les Etats"²³⁰. Asuntos como el de la isla de Bulama, la bahía de Delagoa o el de isla de Palmas, en los que la prueba de la posesión efectiva ha prevalecido sobre un título legal como el de cesión, por un lado, y los de la cordillera de los Andes, Walvis Bay, o el canal de Beagle, casos en los que se impone la posesión sobre el título jurídico a interpretar, y, por supuesto, el Rann de Kutch, son las mejores pruebas de la eficacia de las efectividades en la instancia arbitral.

Manteniéndonos en este plano comparativo, creemos, igualmente, destacable la relevancia obtenida por la equidad en el plano arbitral, sobre todo en la delimitación, con las repercusiones reseñadas respecto a la prueba. Esta circunstancia ha dado origen a una realidad importante para nuestro estudio, pues,

²³⁰ Vid. Asunto de la isla de Palmas, R.G.D.I.P., 1935, p.164.

al entrar en juego la equidad, en los supuestos en que ésta se reconoce, en todos ellos el árbitro ha dado salida a la posesión efectiva, bien acompañando al título jurídico, bien sustituyéndolo; es decir, aplicando la equidad, el resultado práctico es la preferencia de la efectividad.

Por último, centrándonos en el plano concreto de los mecanismos de prueba, además de las observaciones vertidas en el transcurso de la exposición, y referidas a aspectos tales como: el reducido volumen de la prueba en los litigios de atribución (circunstancia que se justifica en razones temporales que tendremos ocasión de desarrollar en el próximo capítulo), la mayor entidad de ésta en los de delimitación equitativa, o el protagonismo, en términos generales, de la actividad policial y de defensa como instrumento de prueba de soberanía; estimamos que es posible advertir algunos datos dignos de mención.

Quizá la nota más destacable la conforma la eficacia de la prueba no estatal, y no tanto respecto de las Compañías de Comercio y colonización -por su vinculación estatal-, como por la derivada de los actos de particulares. Nos estamos refiriendo a aquellos casos en los que la actividad privada se presentaba, no como prueba supletoria, sino principal; los asuntos del Alpe de Cravairola, y el de Grisbadârna, constituyen el mejor testimonio. La parte fundamental del título italiano descansaba sobre la posesión de particulares que tenían la propiedad privada de ese territorio, en base a la cual se otorga la soberanía a Italia; de igual manera la posesión a través de la explotación privada, es la base del título sueco a Grisbadârna. Pero, en uno y otro caso, hay un leve respaldo de actividad estatal,

suficiente para ratificar dicha posesión. Además, se une otra circunstancia fundamental: la del título que se les opone, basado en ambos casos en un exiguo criterio geográfico, sin valor autónomo en derecho internacional. La fuerza del título contrario explica que en otro caso en que se alegó posesión privada, esta vez como prueba exclusiva, ésta fuera insuficiente: en el asunto de isla de Aves, al título posesorio holandés se contraponía, no sólo un criterio geográfico sino un título jurídico, que obtuvo la consideración arbitral de mejor título²³¹.

El principio de relatividad de la efectividad, claramente recogido en la práctica del T.I.J., obtiene también el respaldo arbitral. Las condiciones particulares del territorio, han sido comúnmente afirmadas, y sin dilación, por los árbitros para flexibilizar la prueba de la soberanía; tal ocurrió en relación al territorio de la isla de Aves (cubierta por el mar), Alpe de Cravairola (territorio especialmente inhóspito), o del Rann de Kutch (inundado en la época de lluvias), por citar algunos ejemplos. De ahí que sea posible afirmar la dependencia del valor de la prueba respecto de las circunstancias del caso en consideración.

Todo ello, sin olvidar nuestra excéptica posición respecto a la conveniencia de un mecanismo probatorio tan voluble -sobre todo en lo que a prueba de soberanía se refiere- como la prueba testifical, respecto de la cual la práctica

²³¹ Frente a esta decisión de la Reina de España, Isabel II, no han faltado posiciones críticas que creían ver en la exclusiva posesión de particulares un título de soberanía (cfr. entre otros, LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.II, pp.415-421), posiciones que no compartimos, y que no cuentan con respaldo jurisprudencial alguno.

arbitral ha dado un giro copernicano con el último caso de la Laguna del Desierto, pues tras una trayectoria de rechazo de dicha prueba por considerarla inconcluyente ha pasado a admitirla; y para mayor abundamiento lo ha hecho incluso reproduciéndose a través de un mecanismo tan sui generis como es el de la cinta de video. Circunstancia que, si bien constituye un punto loable de modernización, nos parece absolutamente improcedente sobre todo en el conflicto en cuestión.

Finalmente, debemos exponer una nueva afirmación del juez Huber, que la práctica posterior se ha encargado de consagrar, referida a que "no sólo un título definitivo basado en el continuo y pacífico ejercicio de soberanía prevalece sobre cualquier otro título imperfecto..., sino que **un título imperfecto basado en el ejercicio de autoridad estatal, prevalece sobre cualquier otro título incompleto**"²³². La derivación de esta aserción es doble: por un lado, que el valor de la prueba de un título es inversamente proporcional a la prueba del título contrario; por otro, que hay una prevalencia, a priori, a favor de la prueba relativa al ejercicio de funciones de Estado.

De estas reflexiones, sí podemos extraer una consecuencia: que no puede existir una *regla general*, sino *consideraciones parciales*, respecto de la prueba de la efectividad, tanto en el ámbito arbitral, como ante la instancia judicial.

²³² Vid. R.G.D.I.P., 1935, pp.199 y 201.

CAPITULO VII: PROYECCION EN EL TIEMPO DE LAS EFECTIVIDADES.

El factor tiempo, reseñable en todos los órdenes jurídicos, reviste una magnitud especialmente significativa en el ámbito de aplicación del derecho internacional¹. Al venir conformado este cuerpo jurídico por un volumen de reglas móviles, se inserta profundamente en el tiempo sufriendo, de este modo, la influencia de las modificaciones que intervienen en la vida y en las relaciones internacionales; así se justifican afirmaciones, como la efectuada por Tavernier², en relación a que el derecho internacional "déploie son action dans le temps, de même qu'il déploie dans l'espace".

El interés de un estudio del problema temporal surge ante la observación, por un lado, de la evolución propia de todo sistema jurídico, y en concreto del derecho internacional, lo que hace plantearse cuestiones relativas a la aplicación en el tiempo de los actos y reglas jurídicas; y, por otro, de las variadas situaciones en las cuales el factor tiempo juega un papel fundamental a fines jurídicos, tales como

¹ Es necesario constatar la importancia capital que, en el estudio del problema temporal en derecho internacional ocupa la obra de P.TAVERNIER, Recherches sur la application dans le temps des actes et des règles en droit international public, París, 1970 (lo que nos obligará a reiteradas alusiones a la misma).

Según este autor (pp.9-11), el factor tiempo reviste esencialmente tres formas en derecho internacional público:

1. El instante, que se toma en consideración para determinar el momento o la fecha en que un hecho produce ciertos efectos, entra en vigor, o deja de producirlos.

2. La duración, en cuanto la formación de las reglas de derecho implica normalmente un cierto desarrollo de tiempo.

3. El cambio, bien de circunstancias, bien del derecho mismo.

² Vid. ibidem, p.9.

la fecha crítica o la determinación del statu quo.

Este mismo somero análisis nos sitúa ante una innegable realidad, la de que son las controversias de atribución territorial, por su especial idiosincrasia, el ámbito material en el cual el tratamiento de los problemas temporales reseñados encuentra el máximo desarrollo y su auténtica razón de ser. Por ello, entendemos que no es extraño, sino frecuente, que ante las reclamaciones opuestas que surgen en este tipo de conflictos el tribunal internacional que es llamado a solucionarlas atiende de manera fundamental a determinar el tiempo en que se presume ha surgido la disputa. Y ello, tal y como advierte Y.Z.Blum³, por varias razones:

"(a) by fixing the date at which the dispute is presumed to have begun, the tribunal, in fact, determines what rules of law should govern the problems relating to the acquisition of the territorial title, in accordance with the rules of intertemporal law...

(b) by fixing this date, the tribunal automatically excludes any subsequent acts performed by either of the litigant parties with a view to upsetting the status quo existing at the time of the outbreak of the dispute, and taking advantage of such improvements in its position.

Thus, it is of the utmost importance in each of these territorial to fix the...'critical date'".

Esta triple problemática, derecho intertemporal-fecha crítica-statu quo, cuya interrelación ha sido válidamente reseñada en nuestra doctrina por el prof.Sánchez Rodríguez⁴, despliega plenamente su ámbito operacional sobre el derecho que rige

³ Vid. Historic Titles in International Law, La Haya, 1965, p.208 (el subrayado es nuestro).

⁴ El profesor Sánchez Rodríguez en su artículo "Fecha crítica, contenciosos territoriales y jurisprudencia internacional", en Hacia un nuevo orden internacional europeo. Estudios en homenaje al profesor D.Manuel Díez de Velasco, Madrid, 1993, pp.684-686, sigue, en términos generales, la orientación marcada en este sentido por Y.Z.Blum; de forma similar se manifiesta BARDONNET, si bien más preocupado por la identificación de fecha

la adquisición territorial, circunstancia que hace imprescindible la reconducción del tratamiento del problema desde el punto de vista de las técnicas o modos de adquisición del territorio, siendo el objetivo primario en este sentido, y a efectos de nuestro estudio, la efectividad de la ocupación.

SECCION 1ª: DESPLIEGUE EN EL TIEMPO Y PROBLEMAS INHERENTES DE CONTINUIDAD: AMBITO OPERATIVO DE LA REGLA DE DERECHO INTERTEMPORAL EN RELACION A LAS EFECTIVIDADES.

No hay duda que el derecho internacional se desarrolla y cambia con el correr del tiempo; que alguna de sus normas que eran válidas en una época anterior han dejado de serlo o han sido modificadas. Esta evolución natural da lugar, según señala Beckett⁵, a un problema general de derecho que consiste en plantearse cómo un tribunal contemporáneo debe apreciar las consecuencias de hechos o actos jurídicos sobrevenidos en una época anterior.

Refiriéndonos, pues, al problema concreto de la validez temporal de las

crítica y statu quo ("Les faits postérieurs à la date critique dans les différends territoriaux et frontaliers" en Mélanges Michel Virally. Le droit au service de la paix, de la justice et du développement, París, 1991, pp.56-57). Sobre este tema de la interrelación entre estos tres problemas que plantea el factor tiempo tendremos ocasión de referirnos más adelante, a medida que avance nuestro estudio.

⁵ Vid. "Les questions d'intérêt général au point de vue juridique dans la jurisprudence de la C.P.J.I. (juillet 1932-juillet 1934)", R.des C., n°50, 1934-IV, p.204.

normas jurídicas internacionales, es interesante resaltar que tanto la doctrina como la jurisprudencia han utilizado las expresiones más diversas para dar cuenta del mismo. Es así como encontramos términos tales como irretroactividad, aplicación ratione temporis⁶, derecho transitorio, conflictos de normas jurídicas en el tiempo⁷, sucesión en el tiempo de principios y reglas de derecho internacional⁸ o eficacia del derecho internacional en el tiempo⁹, entre otros. Esta variedad terminológica no es sino germen de posible confusión, de ahí que Tavernier¹⁰ se atreva a estimar que la expresión que mejor sintetiza este problema es la de derecho intertemporal, en cuanto derecho que resuelve los conflictos de reglas jurídicas en el tiempo; para ello, este autor retoma la definición recogida por Le dictionnaire de la terminologie du Droit international: "terme employé parfois pour désigner les principes de droit permettant de déterminer entre plusieurs règles de droit qui se sont succédées dans le temps celle qui doit être appliquée à un cas donné"¹¹.

Esta es la idea base desde la que vamos a abordar el estudio de este

⁶ Cfr. WALDOCK, H. Sir, "Tercer informe sobre el derecho de los tratados", Anuario de la C.D.I., 1964, vol.II, p.6.

⁷ Cfr. Las intervenciones de P.REUTER y M.YASSEEN, Anuario de la C.D.I., 1964, vol.I, pp.38 y 40.

⁸ Cfr. SERENI, A.P., Diritto Internazionale, Milán, 1956, vol.I, p.174.

⁹ Cfr. ANZILOTTI, D., Cours de droit international, 1929, p.93, y QUADRI, R., Diritto Internazionale Pubblico, Palermo, 1960, p.157.

¹⁰ Vid. ibidem, p.17.

¹¹ Vid. Le dictionnaire..., París, 1960. Esta misma definición ha sido recogida, posteriormente, por M.SORENSEN en su exposición sobre "le problème dit du droit intertemporel dans l'ordre international" en la Sesión de Roma (vid.Annuaire de l'Institut de droit international, nº55, 1973, p.10).

problema tanto en relación a los conflictos de adquisición territorial en general, como, de una forma más pormenorizada, a aquellos en los que el ejercicio continuo y pacífico de funciones estatales ha jugado algún papel en la atribución del territorio; analizando, en esta segunda parte, la propia evolución de las efectividades desde el ángulo temporal.

A) DELIMITACION DEL PROBLEMA INTERTEMPORAL: EL PRINCIPIO DE NO-RETROACTIVIDAD EN LOS CONTENCIOSOS DE ATRIBUCION DEL TERRITORIO.

Fue el Instituto de Derecho Internacional, en su sesión de Wiesbaden, el que determinó el cambio de la expresión 'derecho intertemporal' por la de 'problema intertemporal', bajo la justificación de colocar la cuestión en una perspectiva de metodología jurídica en vez de en un estudio de derecho positivo¹². Desde esta óptica, su Resolución de agosto de 1975 se manifiesta en los siguientes términos:

"1. A défaut d'une indication en sens contraire, le domaine d'application dans le temps d'une norme de droit international public est déterminé conformément au principe général de droit, d'après lequel tout fait, tout acte et toute situation doivent être appréciés à la lumière des règles de droit qui en sont contemporaines.

2. En application de ce principe:

- a) toute règle qui vise un fait instantané s'applique aux faits qui se produisent pendant que la règle est en vigueur;
- b) toute règle qui vise la répétition ou la succession de faits identiques

¹² Vid. Annuaire de l'Institut de Droit International, n°56, 1975, p.341; igualmente el relator prefiere la referencia al derecho internacional en detrimento de la de orden internacional, empleada en el Proyecto de Resolución resultante de la Sesión de Roma (ibidem, n°55, 1973, p.99).

- s'applique alors même que l'un ou certains d'entre eux seulement se produiraient après l'entrée en vigueur de la règle;
- c) toute règle qui vise une situation de fait s'applique aux situations existant pendant que la règle est en vigueur, même si elles ont été établis antérieurement;
- d) toute règle qui vise une certaine période, ou l'existence d'une situation pendant une certaine durée, s'applique aux seules périodes dont les dates initiales et terminales se situent dans le temps pendant lequel la règle est en vigueur;
- e) toute règle qui vise le terme d'une période s'applique aux cas où la période est arrivée à expiration à un moment où la règle est en vigueur;
- f) toute règle qui vise le caractère licite ou illicite d'un acte juridique ou les conditions de sa validité s'applique aux actes accomplis pendant que la règle est en vigueur;
- g) toute règle qui vise les effets continus d'un acte juridique s'applique aux effets produits pendant que la règle est en vigueur, alors même que l'acte aurait été accompli avant l'entrée en vigueur de la règle;
- h) toute règle qui vise le contenu d'un statut juridique s'applique alors même que le statut aurait été établi ou acquis avant l'entrée en vigueur de la règle"¹³.

Establece así, este texto, las reglas básicas a seguir respecto de la aplicación temporal de las normas.

Ateniéndonos al tenor literal de las reglas referidas, de éstas se desprende cómo respecto de los hechos y situaciones regidos por una norma de Derecho internacional, y a los fines de fijar los límites temporales de su aplicación, se hace necesaria una doble distinción. Podemos distinguir, en primera instancia, tres supuestos:

- los hechos o situaciones que se han consumado con anterioridad a la entrada en vigor de dicha norma; son los facta praeterita;

¹³ Vid. ibidem, pp. 536-538.

- los hechos aún pendientes o las situaciones todavía existentes en el momento en que se establece la norma; estos son los facta pendentia;
- por último, los hechos o situaciones que pueden tener lugar con posterioridad a la entrada en vigor de la norma; son los llamados facta futura.

A esta distinción se añade, y así lo hace la propia Resolución, el análisis de cada hecho o situación tanto en su creación como en sus efectos, lo que conduce a diferenciar su carácter 'instantáneo', 'sucesivo' o 'continuo'¹⁴. La importancia de hacer esta segunda diferenciación radica en el hecho de que permite determinar con exactitud si se está en presencia de una situación pasada, en curso o futura. Enfrentados a esta divergencia, la propia práctica nos demuestra, sin embargo, que el caso de hechos instantáneos es muy raro, siendo lo más normal que una norma se aplique a hechos sucesivos que se reproducen o se separan los unos de los otros por intervalos de tiempo más o menos largos. En este sentido, el ámbito de la adquisición territorial constituye el mejor ejemplo. En efecto, como modelo de un hecho instantáneo se suele citar el descubrimiento, al que el derecho de gentes le atribuyó, en una cierta época, el carácter de atribuidor de soberanía. Sin embargo, la propia evolución del derecho internacional ha convertido a la hipótesis del descubrimiento en un 'inchoate title', que no intervendrá más que si un segundo hecho, la toma de posesión efectiva, se añade al mismo; de esta manera, si el Estado debe completar el descubrimiento con ciertas formalidades, concretamente por la posesión, la creación de la situación de soberanía no será

¹⁴ Cfr. GONZALEZ CAMPOS, J.D., SANCHEZ RODRIGUEZ, L.I., y ANDRES SAENZ DE SANTA MARIA, M.P., Curso de Derecho internacional público, 5ªed., Madrid, 1992, pp.270-271; igualmente resaltan cómo estas distinciones ponen de relieve la complejidad de los problemas temporales.

instantánea sino sucesiva, pues comporta varios momentos. Por último, si el Estado debe probar la ocupación efectiva, será necesario demostrar la existencia, no sólo de hechos instantáneos o sucesivos, sino de un estado continuo de posesión¹⁵. Si pasamos del plano de la creación de actos al subsiguiente de los efectos, hemos de referirnos igualmente al ámbito de la atribución de territorio, pues, claramente, la soberanía no despliega sus efectos en un instante; sus efectos no son inmediatos sino continuos.

Volviendo al contenido material de la Resolución del I.D.I., creemos necesario hacer resaltar que ésta no hace sino consagrar una teoría que años antes había sido expuesta por Max Huber, en el asunto de la Isla de Palmas; y lo hace elevándolo a la categoría de principio general del derecho¹⁶.

Efectivamente, en el asunto de la Isla de Palmas (al que hemos tenido ocasión de referirnos en múltiples ocasiones) el árbitro único, Max Huber, se enfrentó a la alegación de EE.UU. basada en la aplicación del derecho en vigor en el momento del descubrimiento de la isla por parte de España en el siglo XVI, suficiente en aquella época para conferir soberanía¹⁷; por su parte, los Países

¹⁵ Cfr. TAVERNIER, P., op.cit., p.229.

¹⁶ Precedentes al I.D.I., en la conceptualización del derecho intertemporal como principio general del derecho, los localizamos en J.Basdevant, "Règles générales du Droit de la Paix", R.des C., 58, 1936, p.536; y también en R.Y.Jennings, The acquisition of territory in International Law, Manchester, 1963, p.28, quien además lo entiende como un mero 'aspecto de la regla contra las leyes retroactivas'.

¹⁷ Cfr. Contra memoria de EE.UU., p.102.

Bajos, si bien no rechazaban estas afirmaciones, sostenían que, independientemente de la primera adquisición, el título de EE.UU. había desaparecido, insistiendo sobre el carácter permanente que tiene una situación derivada de la soberanía¹⁸. Al intentar conciliar ambas pretensiones en una sentencia justa, Huber desarrolla la teoría de la soberanía enunciando dos reglas que son la máxima autoridad en el discurso del derecho intertemporal.

- Una primera regla, aplicable en caso de cambio de derecho: "Un acte juridique doit être apprécié à la lumière du droit de l'époque, et non à celle du droit en vigueur au moment où s'élève ou doit être réglé un différend relatif à cet acte". De esta regla es fácilmente deducible su carácter objetivo.

- La segunda regla completa la anterior: "En ce qui concerne la question de savoir lequel des différents systèmes juridiques en vigueur à des époques successives doit être appliqué dans un cas déterminé -question du droit dit intertemporel (the so-called intertemporal law)- il faut distinguer entre la création du droit en question et le maintien de ce droit. Le même principe qui soumet un acte créateur de droit au droit en vigueur au moment où naît le droit, exige que l'existence de ce droit, en d'autres termes sa manifestation continue, suive les conditions requises par l'évolution du droit"¹⁹. Frente al carácter objetivo de la primera, esta segunda regla reviste una óptica subjetiva.

Creemos que el tenor literal de estas dos reglas enunciadas constituye la expresión más simplificada del contenido del problema intertemporal, que luego el

¹⁸ Cfr. Memoria de Países Bajos, La Haya, 1925, pp.10-11.

¹⁹ Vid. R.G.D.I.P., 1935, p.172.

I.D.I. se encargaría, como hemos visto, de desarrollar (sobre todo en lo concerniente al primer aspecto de la cuestión). Sin embargo, el desarrollo y tratamiento posterior de las mismas no ha seguido una trayectoria idéntica, como tendremos ocasión de constatar, pues, mientras la primera ha sido generalmente aceptada, la segunda ha resultado ser muy controvertida, habiendo sido objeto de críticas y reticencias procedentes de ciertos comentaristas²⁰.

Cabe advertir igualmente que, en razón de los cambios acaecidos por el derecho internacional en materia de adquisición territorial -fundamentalmente referidos al papel atribuido a la ocupación y al descubrimiento-, es en este ámbito donde se plantea con mayor intensidad el problema del derecho intertemporal en su doble vertiente. Esta idea viene refrendada por el hecho de que su origen se localiza precisamente en un litigio de atribución de soberanía como es el de la isla de Palmas, lo cual no excluye su aplicación a otros ámbitos de la vida jurídica internacional²¹.

Intentaremos, pues, determinar a grandes rasgos cómo se desarrolla el problema intertemporal en esos conflictos de adquisición territorial, adoptando para

²⁰ Uno de los autores que critica el derecho intertemporal es Fauchille (cfr. "Le conflit de limites entre le Brésil et la Grande-Bretagne, et la sentence arbitrale du Roi d'Italie", R.G.D.I.P., 1905, p.55); en la misma línea se localizan Jessup (cfr. "The Palmas Island Arbitration", A.J.I.L., 1928, p.740) y Versfelt (cfr. The Miankas Arbitration, Utrecht, 1933, p.14-16).

²¹ Efectivamente, estas cuestiones pueden aplicarse también, por ejemplo, respecto de litigios de fronteras: cuando dos Estados han concluido un tratado de fronteras es necesario determinar si han tenido la intención de fijar en el mismo la frontera, en ese caso el trazado será definitivo (acto instantáneo) y el derecho nuevo no podrá influir en el trazado; si no hay tal intención, es decir, si las partes han querido completar el trazado con otras formalidades (actos sucesivos), el derecho nuevo se aplicará a los hechos que quedan por cumplimentar.

ello la técnica de análisis esbozada por Max Huber.

■ En lo que afecta a la primera regla, tal y como es formulada por Huber en 1928, no es totalmente innovadora pues, en cierta medida había sido proclamada anteriormente tanto por la doctrina²² como por la jurisprudencia. En este último ámbito es posible citar el asunto de la bahía de Delagoa, entre Portugal y Gran Bretaña, en el cual Portugal hace valer como primer argumento de su reclamación, basada en el descubrimiento a comienzos del s.XVI, que "le titre d'acquisition doit être apprécié d'après le droit en vigueur à l'époque à laquelle il se rapporte"²³.

Esta regla es considerada, en términos generales, como el corolario del principio de la no-retroactividad centrado éste en la idea de que un acto o una regla nueva no pueden remontar sus efectos respecto de actos consumados en el pasado, es decir, no puede ser aplicado antes de que el mismo tuviera existencia jurídica, entrara en vigor²⁴. El fundamento esencial de este principio de no-retroactividad reside en la necesidad de fomentar la seguridad de las relaciones jurídicas, garantizando la estabilidad del propio ordenamiento internacional. Los sujetos de derecho, que han conformado su actividad a las exigencias del orden jurídico existente en el momento, deben tener la seguridad de que la legalidad de

²² Entre otros autores podemos citar a BLUNTSCHLI, Droit International codifié, París, 1874, p.170; SALOMON, L'occupation des territoires sans maître, París, 1889, p.274; ó JEZE, Etude théorique et pratique sur l'occupation comme mode d'acquérir le territoire en droit international, París, 1896, p.40.

²³ Vid. Contra-memoria de Portugal, p.15, en LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.III, p.618.

²⁴ Cfr. TAVERNIER, P., op.cit., p.179.

su conducta y las consecuencias que se atribuyan a la misma no serán reconsideradas al seguirse una evolución del derecho; el caso de un Estado que ha adquirido un territorio conforme a las reglas del derecho de gentes antiguo, nos proporciona el mejor ejemplo.

La separación de los actos que pertenecen al pasado, de aquellos que no lo son, constituye el primer problema que tiene que afrontar el juez o árbitro al resolver un litigio territorial, una disputa relativa a la soberanía sobre el territorio. Lo más normal es que los orígenes del conflicto se remonten a una época en la que el derecho internacional en vigor era diferente al existente en el momento de decidir la controversia, y el juez o árbitro deberá situarse precisamente en esa época. Como ya hemos indicado, la evolución del derecho ha sido particularmente clara en lo que se refiere a las reglas sobre la adquisición del territorio; más concretamente, es fácilmente perceptible cómo el desarrollo del derecho de gentes ha tendido a exigir una efectividad cada vez más rigurosa en materia de adquisición territorial por vía de ocupación. Los trazos de este desarrollo, a los que habrá que atender en toda reclamación territorial, pueden sintetizarse en los siguientes²⁵:

- Hasta el s.XVI la idea religiosa juega un papel preponderante. El papa era considerado como soberano de todas las tierras, siendo las bulas papales la única forma de adquirir el territorio;
- el simple descubrimiento constituía a principios del siglo XVI un título suficiente de adquisición;

²⁵ Para un estudio en mayor profundidad sobre el tema de la evolución de la ocupación remitimos a lo expuesto en la sección primera del capítulo III (cfr. supra, pp.118-156).

- posteriormente se exige que el descubrimiento fuera acompañado de una cierta aprehensión material, por ejemplo, con el levantamiento de una cruz; esta situación de ocupación simbólica se mantiene desde mediados del XVI, durante el siglo XVII y principios del XVIII;
- paulatinamente se introduce la idea de que es necesaria una toma de posesión real, verdaderamente efectiva; cuya exigencia de efectividad variará en relación a la naturaleza del territorio ocupado. Esta es la nueva tesis jurídica que se desarrolla concurrentemente con la de la ocupación ficticia, y que finalmente la reemplaza completamente en el s.XIX.

Estas modificaciones del derecho son debidas al aumento en la concurrencia de Estados colonizadores, lo que motiva, a su vez, un incremento de los litigios de este tipo, fundamentalmente en el siglo XIX, época en que se consagra la regla de la ocupación efectiva por el Acta de Berlín de 1885.

Es posible percibir cómo este primer aspecto del derecho intertemporal ha sido plenamente admitido, recibiendo el beneplácito doctrinal²⁶; en efecto, los internacional-publicistas son unánimes en admitir que para determinar si las condiciones de una ocupación son suficientes para adquirir la soberanía sobre el territorio, hay que remitirse a las reglas en vigor en el momento en que el acto es consumado. La práctica internacional es, sobre este punto, no menos explícita

²⁶ Como mera referencia, citamos el caso de H.LAUTERPACHT, (cfr. The Function of Law in the International Community, Oxford, 1933, p.283); D.BINDSCHEDLER ("De la rétroactivité en Droit international public", en Recueil d'études de droit international en hommage à Paul Guggenheim, Ginebra, 1968, p.185); o de S.BASTID (cfr. "Les problèmes territoriaux dans la jurisprudence de la C.I.J.", R.des C., 107, 1962-II, p.448).

(sobre este aspecto incidiremos en el apartado siguiente). En este sentido, la primera aplicación se remonta, como hemos indicado, a la sentencia de 1875, en la bahía de Delagoa, a tenor de la reclamación portuguesa²⁷; igualmente se intuye en la mediación papal en el asunto de Carolinas²⁸, en 1885, al aceptar el Papa León XIII la validez del título español derivado del descubrimiento. En el asunto de Grisbadârna, entre Noruega y Suecia, el tribunal arbitral estimó que para determinar el trazado de la frontera entre ambos Estados era necesario recurrir a los principios delimitadores en vigor en el siglo XVII, fecha de cesión de Bohüslan a Suecia por el tratado de 1658²⁹.

Además de estos precedentes que se asientan finalmente en la sentencia de isla de Palmas, la práctica posterior ha consolidado esta regla. Así en el asunto de la isla de Clipperton el árbitro acogió la alegación francesa basada en su descubrimiento y ocupación simbólica de la isla en el siglo XIX, que iba acompañada de la remisión al derecho existente en el momento en que tuvieron lugar los mencionados actos³⁰. Son igualmente mencionables, pero ya en el ámbito judicial, los asuntos de Groenlandia oriental y Minquiers y Ecrehous. En el primero la dificultad central residía, claramente, en una cuestión de derecho

²⁷ Vid. supra, nota 22. Con anterioridad, en el asunto del Alpe de Cravairola, en 1874, el surárbitro Marsh estimó que había que refirirse al derecho de la época para resolver la cuestión de la interpretación del tratado de 1516 por el cual Val Maggia fue cedido a Suiza (cfr. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.III, p.129).

²⁸ De esta manera el Papa rechaza la alegación alemana de aplicar el derecho en vigor en el momento de la litis contestatio; cfr. GARCIA ARIAS, Corpus Iuris Gentium, p.342.

²⁹ Vid. R.G.D.I.P., 1910, p.185.

³⁰ Cfr. Memoria defensiva presentada por el Gobierno de la República francesa, París, 1912, p.185.

intertemporal: la apreciación de la condiciones de efectividad exigidas en el curso de los siglos en derecho internacional³¹. Por su parte, tanto Francia como Reino Unido están de acuerdo sobre la validez de las reglas desprendidas del asunto de Isla de Palmas, la primera de las cuales es la aplicación del principio de no-retroactividad; por lo que se trataría de examinar los títulos originarios sobre Ecrehous y Minquiers según el derecho en vigor en la época feudal³².

De todos estos asuntos resulta que la jurisprudencia internacional aplica la primera regla de Huber con el fin de determinar la validez y los efectos de un acto relativo a la adquisición de territorio.

■ Se trata ahora de precisar qué sucede con las normas jurídicas que aparecen después de haber surgido una situación, pero en un momento en que ésta no ha desaparecido y no puede decirse que pertenezca al pasado (son los facta pendentia o situaciones en curso); ¿cómo separar el campo de acción del derecho antiguo y del derecho nuevo? Estos problemas surgen precisamente en relación a la soberanía de un Estado sobre un territorio, porque ésta no puede ser reconocida como un derecho abstracto independientemente de su ejercicio. Supongamos que un Estado A adquiere un territorio por descubrimiento, en una época en la que el

³¹ En efecto, el Tribunal examinó el despliegue de soberanía danesa sobre Groenlandia a través de los siglos, atendiendo a los principios de efectividad exigidos en cada momento (cfr. P.C.I.J., serie A/B, nº53, 1933, pp.50-51).

³² Cfr. Intervención oral de Sir L.Heald, 18 septiembre 1953, e intervención oral del prof.Gros, 18 septiembre 1953, Minquiers y Ecrehous, Pleadings, vol.II, pp.51-53 y 191-276, respectivamente.

derecho reconoce como válido ese medio de adquisición, pero sin seguirlo de una toma de posesión efectiva. Posteriormente se instaura la regla según la cual el descubrimiento es un 'inchoate title', y es necesaria la efectividad de la ocupación para entender adquirido un territorio, apareciendo entonces en escena un Estado B que despliega su autoridad sobre dicho territorio. ¿Habrá que retomar la situación antigua?, ¿será aplicable el derecho nuevo de pleno derecho?, ¿podrá invocar el Estado A derechos adquiridos? La regla de la irretroactividad resulta insuficiente para resolver estas cuestiones; es entonces cuando entra en juego el segundo aspecto de la exposición de Huber: la distinción entre creación y mantenimiento del derecho. Esta rama del derecho intertemporal sólo se aplica a aquellos derechos que deben ser mantenidos, y que no se adquieren de una vez, en un todo, en un preciso momento; es el caso de la soberanía. Nosotros entendemos que no es posible sostener que la soberanía pueda ser adquirida de una vez, de forma instantánea a través de un único acto y en un solo momento; ésta debe ser continuamente mantenida a través de actos constitutivos de soberanía, y no puede decirse que sea un derecho adquirido si no hay actividad estatal que lo ratifique.

Esta segunda regla descansa sobre la idea de que la vida de un derecho comprende dos fases: la primera, en la que el derecho es creado; la segunda, cuando el derecho es ejercido, produce sus efectos y se mantiene. Es necesario, pues, distinguir la validez inicial de un acto jurídico y sus efectos continuos. Ambos fenómenos se rigen por el mismo principio intertemporal: el acto primero de creación debe evaluarse por el derecho en vigor en ese momento, la situación jurídica derivada de dicho acto (sus efectos) debe ser determinada en función de

la evolución del derecho³³. Las críticas a esta rama del derecho intertemporal no han sido dirigidas, realmente, contra las implicaciones teóricas de este principio que limita la validez de las normas internacionales en el tiempo, sino más bien por los problemas prácticos que resultarían de su estricta aplicación motivados por la continua puesta en práctica del ordenamiento que, según estos autores, conlleva. Según este sector doctrinal, los Estados se verían obligados a examinar constantemente sus títulos sobre el territorio, para determinar si un cambio en el derecho determina su re-adquisición³⁴. Frente a este tipo de observaciones, es posible aducir como hace A.G.Roche, "que es muy difícil que tales problemas surgan en la práctica en cuanto el derecho intertemporal no ha sido nunca aplicado cuando un cambio en el derecho ha sobrevenido en un corto período de tiempo"³⁵. Debemos tener en cuenta, además, que en términos generales esta figura se aplica en casos en los que el derecho consuetudinario internacional ha cambiado gradualmente con los años, como ocurre con el derecho relativo a la adquisición territorial, que se convierte, casi, en el único ámbito donde tiene aplicación esta distinción entre creación y mantenimiento.

Como precedente de esta distinción podemos citar el mencionado asunto de Carolinas, en el que el Papa León XII reconoce la validez del título derivado del

³³ Esta idea cuenta con el respaldo del I.D.I., en su sesión de Roma (cfr. Annuaire de ...op.cit., p.40).

³⁴ Esta es la idea proclamada por Jessup (cfr. op.cit., p.271) y que también parecen sustentar, en términos similares, Tavernier (op.cit., p.254), Fauchille (op.cit., p.55), y Versfelt (op.cit., p.14-16).

³⁵ Vid. The Minquiers and Ecrehous Case, Ginebra, 1959, p.83.

descubrimiento (acogiéndose así, como hemos indicado, a la primera regla de Huber), aunque sin descartar la regla nueva de la ocupación efectiva que España deberá satisfacer a posteriori³⁶; se esboza, en las proposiciones del mediador, una distinción entre la adquisición del derecho y su mantenimiento. El asunto de la frontera de la Guyana, entre Gran Bretaña y Venezuela, es también una confirmación de la distinción de Huber; en efecto, el compromiso arbitral de 2 febrero 1897 establecía en su artículo 3 que la controversia sería resuelta según el derecho de la época en que fue adquirida la Guyana por ambos Estados (1814), y el artículo 4 establece como criterio el de la posesión continuada por más de 50 años³⁷. Según Baade, esta disposición significa que un título adquirido según el derecho antiguo debe ser corroborado por el derecho actualmente en vigor³⁸.

En el asunto de Groenlandia Oriental también se entrevé la aplicación de esta distinción consagrada en la Isla de Palmas, al proceder el T.P.J.I. a evaluar toda la prueba de soberanía danesa sobre dicho territorio que se remontaba miles de años atrás³⁹. Por su parte, en Minquiers y Ecrehoux, el tribunal parece admitir la idea matriz de Huber (siguiendo las orientaciones de ambas partes en este sentido⁴⁰) al discutir ampliamente tanto sobre las cuestiones de derecho feudal como las del derecho contemporáneo que afectaban al caso (aunque finalmente se decidiera

³⁶ Cfr. GARCIA ARIAS, op.cit., p.342.

³⁷ Cfr. MARTENS, N.R.G., 2^as., vol.XXIX, p.583.

³⁸ Vid. BAADE, H.W., "Intertemporales Völkerrecht", Jahrbuch für internationale Recht, 1958, p.251.

³⁹ Cfr. P.C.I.J., serie A/B, n^o53, 1933, pp.46-74.

⁴⁰ Cfr. supra, nota 32.

sobre estas últimas)⁴¹; con esta postura confirma la proposición de que la soberanía debe ser continuamente mantenida, y que no es suficiente que un Estado que reclama la soberanía sobre un territorio, base ésta en un título remoto en el pasado.

Lo que quizá resulta de mayor interés de esta segunda regla del derecho intertemporal es la necesidad del mantenimiento de los títulos y que, aunque su consecuencia lógica parecería ser que los títulos antiguos y la prueba que conduce a probarlos resulta irrelevante en las disputas territoriales, no lo es en realidad, pues muestran la asociación entre un Estado y su territorio.

B) LA APLICACION DE LAS REGLAS RATIONE TEMPORIS COMO PRINCIPIO RECTOR EN LA VALORACION DE LAS EFECTIVIDADES.

La idea que rige la problemática del derecho intertemporal se centra en la aplicación ratione temporis de las reglas jurídicas. Traspolada al ámbito de la adquisición territorial, esta idea se traduce en la vinculación que tiene el juez o árbitro para examinar la prueba relativa a la soberanía sobre un territorio que le presentan los Estados en atención a la época a que esta prueba se refiera. De esta manera el órgano decisor valorará las efectividades alegadas teniendo en cuenta

⁴¹ Cfr. I.C.J.Reports, 1953, pp.56-57.

que el grado de efectividad exigido por el Derecho internacional para adquirir el territorio ha ido acrecentándose progresivamente; en una primera época ese nivel era mínimo, pasando al control estatal pleno en época más reciente. Asimismo, debemos tener en cuenta que corresponde al juez o árbitro hacer esa valoración partiendo de una doble distinción; por un lado, determinando las reglas de ocupación existentes en la época a que se remonta el origen del título; por otro, atendiendo a la evolución que han sufrido las mismas paralelamente al desarrollo posterior de dicho título.

Todos estos aspectos ya han sido tratados en el apartado anterior, trayendo a colación aquellos casos de la jurisprudencia arbitral y judicial que guardan relación con la adquisición del territorio. En efecto, al hilo de la exposición del problema intertemporal nos hemos referido a distintos asuntos en los que se hacía aplicación de los principios temporales expuestos; por ello, este apartado no es sino la ralentización de ese estudio en relación a aquellos en que ha tenido alguna incidencia el ejercicio continuo de funciones de Estado.

■ Hemos venido insistiendo en la idea de que el asunto de la bahía de Delagoa configura el precedente básico en el tratamiento del problema intertemporal, al atender el árbitro a la alegación portuguesa centrada en valorar el título a la luz del derecho de la época (s.XVI), circunstancia que otorga valor al descubrimiento como creador del título de soberanía y que va unida a la constatación de la posterior ocupación portuguesa (s.XVII y XVIII), cuyo valor es el de mantenimiento de aquél adecuándose plenamente a las exigencias impuestas

por la evolución del derecho en torno a la efectividad⁴². Pese a la veracidad de esta afirmación, creemos que existen indicios de aplicación de las reglas ratione temporis tanto en el asunto de la isla de Aves, como en el posterior de la isla de Bulama. En el primero, el árbitro otorgó el territorio a Venezuela dando plena eficacia al título basado en el descubrimiento español del s.XVI, al que posteriormente se acompañó de ocupación efectiva cuando ésta era exigida como requisito de adquisición⁴³; ocupación ésta que juega el papel de ejercitar la soberanía previamente adquirida. En la isla de Bulama, el árbitro valora igualmente el descubrimiento portugués del s.XV como origen del título adquisitivo que la progresiva efectividad posesoria se encarga de mantener, en consonancia con las exigencias de cada época⁴⁴.

■ Por el contrario, en el asunto de la delimitación fronteriza de la Guyana, los títulos invocados tanto por Brasil (descubrimiento y algún acto de posesión) como por Gran Bretaña (actividad de la Compañía de las Indias Occidentales) se remontaban al comienzo del siglo XIX, lo mismo que al XVII y XVIII, época en la que la efectividad de la ocupación resultaba aún incipiente y sin grandes exigencias; circunstancia ésta que hubiera motivado, en estricta aplicación del derecho intertemporal, la atribución del territorio a Brasil. Sin embargo, el árbitro, lejos de colocarse en la época en que los títulos invocados habían surgido, se sitúa

⁴² Cfr. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.III, p.637.

⁴³ Cfr. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.II, pp.414-415.

⁴⁴ Cfr. ibidem, p.613.

en su valoración en la época en que se plantea la controversia -finales del siglo XIX, comienzos del XX-, lo que conlleva rechazar el valor del descubrimiento, aplicar la doctrina moderna de la ocupación efectiva y otorgar plena eficacia al título británico⁴⁵. Nos encontramos, pues, ante un caso en el que se aplica retroactivamente una regla consuetudinaria nueva a hechos antiguos, en clara violación del principio intertemporal.

■ Sin duda alguna, el caso que constituye el mejor exponente de la doctrina intertemporal es el de la isla de Palmas, pues el árbitro no sólo diserta acerca del contenido de dicho principio -estableciendo, como hemos visto, los parámetros en la aplicación temporal de las normas jurídicas-, sino que ha hecho aplicación de las reglas que él mismo había enunciado. Por un lado, respecto de los efectos del descubrimiento de una isla en el siglo XVI, éste necesita venir seguido de una mera ocupación simbólica para crear un título de soberanía, sino se trataría de un título imperfecto; el descubrimiento español no se completa con dicha ocupación, de ahí el apelativo de 'inchoate title'. Por otro, en cuanto a la distinción entre creación y mantenimiento: aunque entendieramos que España hubiera adquirido la soberanía en un primer momento por descubrimiento, ésta necesita imperiosamente ser mantenida, y la evolución del derecho internacional en ese sentido exige una progresiva efectividad en la ocupación que aquélla no cumple. Por el contrario, el título holandés que arranca del siglo XVII se centra en sucesivos y continuos actos de autoridad estatal sobre la isla que, aunque son infrecuentes y existen

⁴⁵ Cfr. R.G.D.I.P., 1904, pp.18-19.

considerables lagunas en la prueba presentada, son considerados por el árbitro como suficientes para atribuir el título de soberanía, pues no sólo prueban su creación sino su mantenimiento, en consonancia con las exigencias de efectividad de cada período⁴⁶.

■ En la misma línea se sitúa el asunto de la isla de Clipperton, donde el árbitro invoca el principio de no-retroactividad para descartar el criterio de la ocupación efectiva consagrado en el Acta de Berlín. Aplicando, pues, la doctrina intertemporal el árbitro rechaza la alegación mexicana centrada en el descubrimiento español de la misma a finales del siglo XV al no ir seguido de ninguna manifestación de soberanía: situado en el derecho de la época la adquisición del título necesita no sólo del descubrimiento sino de la ocupación simbólica, y no hay ninguna manifestación en este sentido hasta finales del XIX por parte de México. Siguiendo esta misma línea de análisis respecto del título de Francia, el árbitro otorga plena eficacia a la toma de posesión francesa de mediados del siglo XIX y su posterior ocupación a través de unos pocos actos de soberanía, suficientes para cumplir los requisitos de efectividad de la época⁴⁷.

En nuestra opinión, la atribución de la isla de Clipperton a Francia no deriva tanto de la perfección de su título como de la insuficiencia del título que se le opone, pues en la época de la ocupación francesa hay carencia de soberanía mexicana. Efectivamente, si el árbitro hubiera aplicado estrictamente el derecho de

⁴⁶ Cfr. R.G.D.I.P., 1935, pp.172-173.

⁴⁷ Cfr. A.J.I.L., 1932, pp.391-393.

la época, siguiendo las pautas que marca el derecho intertemporal, las pruebas de posesión efectiva francesas hubieran resultado inconcluyentes para otorgarle plena validez a su título, viéndose obligado a retroceder a una época posterior en la que estuviera demostrada una ocupación efectiva⁴⁸. Sin embargo, el órgano jurisdiccional ha preferido ignorar la cuestión temporal decidiendo a favor del título más fuerte en el momento crítico.

■ La aplicación del problema intertemporal en el ámbito judicial se limita a dos casos concretos. El asunto del Estatuto jurídico de Groenlandia Oriental es un precedente de esta aplicación, pues aunque el T.P.J.I. no lo aplica directamente existen claros indicios en ese sentido. En efecto, al determinar el Tribunal la existencia de una fecha crítica afirma la necesidad de centrar su análisis en la valoración de la prueba de soberanía referente al período inmediatamente anterior a aquélla; pese a esta afirmación, el Tribunal procede a evaluar la prueba relativa al ejercicio de funciones estatales que se remonta cientos de años atrás. El método que adopta es el de examinar época por época, desde el descubrimiento de Groenlandia, las exigencias crecientes del Derecho internacional en relación a las condiciones de efectividad sobre el territorio, para concluir con el reconocimiento de la soberanía danesa⁴⁹. Además, el problema intertemporal había sido advertido

⁴⁸ Si realmente se hubiera aplicado la teoría de Huber, el resultado hubiera sido la consideración de la isla de Clipperton como nullius, a consecuencia de la insuficiente ocupación francesa, y, por consiguiente, a dar plena eficacia a la posterior ocupación mexicana y a atribuir la isla a México.

⁴⁹ Cfr. P.C.I.J., serie A/B, n°53, 1933, pp.45-64.

en la fase escrita

por K.Strupp, en los siguientes términos: "C'est un principe juridique incontesté que des situations de fait soumises à l'examen d'une Cour d'arbitrage ou d'une Cour judiciaire internationale doivent être appréciées juridiquement selon les règles de droit en vigueur au moment où se sont opérés les faits dont il s'agit"⁵⁰.

■ Muy similar es el tratamiento técnico del T.I.J. en el asunto de Minquiers y Ecrehous. En este caso, como hemos tenido ocasión constatar en las líneas precedentes, ambas Partes estaban de acuerdo sobre la validez de las reglas desprendidas del asunto de la Isla de Palmas⁵¹ que entendían plenamente aplicables los títulos que invocaban; éstos se fundamentaban en la existencia de un derecho antiguo de la Edad Media confirmado posteriormente por el ejercicio continuo y pacífico de soberanía, por lo que se trataría de examinar los títulos originarios según el derecho en vigor en la época feudal y ver si se han mantenido hasta el período moderno. Sin embargo, el Tribunal no hace referencia directa al derecho intertemporal, sino que, por el contrario, estima que no es necesario resolver controversias históricas siendo de la mayor importancia, no las presunciones derivadas de sucesos de la Edad Media, sino la prueba relativa a la posesión⁵². A pesar de esta proclamación de principio, es curioso constatar que el Tribunal ha realizado un arduo análisis de las pruebas de soberanía vinculadas al

⁵⁰ Vid. "Dictamen consultivo de K.Strupp", Anexo a la Réplica de Dinamarca, P.C.I.J., serie c, nº64, pp.1900-1901.

⁵¹ Cfr. supra, nota 32.

⁵² Cfr. I.C.J.Reports, 1953, pp.56-57.

derecho feudal: la concesión de Piers de Préaux de Ecrehous a la Abadía de Val Richer, los procedimientos de Quo Warranto de 1309..., lo cual puede interpretarse claramente, según nuestra opinión, como una aplicación del derecho intertemporal. Además, entendemos que al establecer el Tribunal, en relación al título francés, que "its alleged original feudal title was replaced by effective possession of the islets in dispute"⁵³, no está sino afirmando la necesidad de mantener un título a través del sometimiento a las exigencias de efectividad en la posesión propias de cada tiempo, lo cual es una clara consagración, implícita, del derecho intertemporal en su segunda regla.

El examen de la jurisprudencia practicado, tanto arbitral como judicial, nos pone de manifiesto la consagración del problema intertemporal⁵⁴ en relación a la adquisición del territorio, pudiendo incluso llegar a afirmarse que éste tiene, esencialmente, carácter jurisprudencial; el papel del juez o árbitro es fundamental en este contexto, pues ante ellos se presentan los casos que plantean estos problemas. No obstante esta realidad, el análisis abordado refleja que, si bien el órgano decisor remite al derecho de la época, el valor de esa remisión es puramente supletorio pues el criterio que determinará su decisión es el de la ocupación más

⁵³ Vid. ibidem, p.56.

⁵⁴ Aunque no faltan opiniones, como la del prof. Sánchez Rodríguez, para quien el problema del derecho intertemporal "constituye un falso problema", si las partes precisan al juez o árbitro, con exactitud, el derecho aplicable (vid. "El problema de la fecha crítica... op.cit., p.86).

efectiva -lo cual no debe interpretarse como un vaciamiento de contenido del título originario- .

SECCION 2ª: UN PROBLEMA PROCESAL EN LA VALORACION JURISPRUDENCIAL DE LAS EFECTIVIDADES: LA CUESTION DE LA FECHA CRITICA.

El principio del derecho intertemporal insiste acerca de que un acto debe valorarse de acuerdo con el derecho en vigor en el momento de su consecución y, también, sobre la importancia de un ejercicio continuado de soberanía; de esta manera, no sólo resulta importante un buen origen del título, sino que se requiere una vigorosa maquinaria actual respecto del mismo. La regla de la fecha crítica supone una cierta modificación en este planteamiento, al proveer, según Jennings⁵⁵, una técnica por la cual el centro de atención debe ser enfocado al momento en que tiene curso la continuidad en el ejercicio de la soberanía.

En Derecho internacional ha venido entendiéndose la fecha crítica "as the date after which the actions of the parties can no longer affect the issue. Such a date must obviously exist in all litigated disputes, if only for the reason that it can never be later than the date on wich legal proceedings are commenced. The

⁵⁵ Vid. The acquisition...op.cit., p.35.

actions of the parties after that date cannot affect their legal positions or rights as they then stood"⁵⁶.

Así concebida la fecha crítica, ésta cobra una importancia decisiva en todas las controversias territoriales, al estar caracterizadas por alegar las Partes títulos contrapuestos. Una mirada atenta a la práctica jurisprudencial, en este sentido, nos confirma esta afirmación. En efecto, partiendo del viejo laudo arbitral de mediados del siglo XIX en el asunto de la Isla de Aves, hasta llegar a la reciente sentencia del T.I.J. en el asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras, observamos cómo la jurisprudencia internacional -tanto por vía arbitral como judicial- ha utilizado en reiteradas ocasiones la noción de fecha crítica como categoría jurídica de indudable importancia, para indicar el período dentro del cual las Partes pueden demostrar la consolidación de su título, es decir,

⁵⁶ Vid. Fitzmaurice, G.Sir, "The Law and procedure of the I.C.J., 1951-4: Points of Substantive Law. Part II"; B.Y.B.I.L., 1955-56, p.20. No exageramos si decimos que ésta es la noción más descriptiva de la fecha crítica, tanto en su contenido como en sus efectos; además de ubicarse en uno de los mejores trabajos sobre el tema.

Encontramos igualmente otros autores que se han ocupado de examinar el concepto de la fecha crítica, en un línea similar: W.E.Beckett ("Des questions... op.cit., p.232), D.H.N.Johnson ("Acquisitive Prescription in International Law", B.Y.B.I.L., 1950, p.342, nota 4), L.F.E.Goldie ("The Critical Date", I.C.L.Q., 1963, p.1251), R.Y.Jennings (The Acquisition... op.cit., 32 y "General Course on Principles of International Law", R.des C., 121, 1967-III, p.424), S.Bastid ("Les problèmes...op.cit., p.446), Ch.Rousseau ("Chronique des faits internationaux", R.G.D.I.P., 1967, p.166), D.Bardonnet ("Les faits postérieurs à la date critique dans les différends territoriaux et frontaliers", Mélanges Michel Virally, París, 1991, p.54). En nuestra doctrina tan sólo el prof.Sánchez Rodríguez ha mostrado inquietud por el tema, y lo ha hecho a través de varios trabajos excelentes como "El problema de la fecha crítica en los litigios relativos a la atribución de la soberanía territorial del Estado", A.D.I., 1977-78, pp.53-88, o "Fecha crítica, contenciosos...op.cit., pp.661-687, estudios que se van a constituir en constante punto de referencia para esta sección, así como de remisión para un estudio en profundidad dado que los límites de nuestro estudio no permiten sino una alusión a los problemas más destacados en relación al tema.

la efectividad de su ocupación⁵⁷. Además, si tuviéramos que situar el origen de esta figura, su localización, al igual que ocurría con el problema intertemporal, la centraríamos precisamente en un conflicto de adquisición territorial, el de la Isla de Palmas. Es en este caso donde encontramos la primera referencia explícita al término "date décisive"⁵⁸ con el sentido de fecha crítica, aunque es posible citar asuntos anteriores en los que, de forma implícita, se ha hecho uso de esta regla; es el caso de la isla de Bulama, en el que el conflicto se centraba en determinar la soberanía del territorio en 1792, fecha del Tratado de cesión a G.B. por los indígenas, y del análogo de la Bahía de Delagoa (siendo en este último la fecha decisiva 1823).

Teniendo en cuenta estas apreciaciones, no es extraño que se haya caracterizado a la fecha crítica como un técnica instrumental, eminentemente procesal, vinculada, sobre todo, al ámbito de la prueba en cuanto excluye los actos posteriores a la misma⁵⁹; pero, aún siendo cierta tal catalogación, no es exclusiva

⁵⁷ El término 'fecha crítica' se utiliza en relación a conflictos puramente de adquisición territorial por vía de ocupación efectiva. Cuando se trata de conflictos de delimitación fronteriza el término de referencia es el de 'tratado crítico de fronteras', término acuñado por A.O.Cukwurah al referirse a "los supuestos en los cuales, ante una pluralidad de tratados de fronteras entre los Estados litigantes, el tribunal debe decidir cuál de ellos ha fijado definitivamente la frontera" (vid. The settlement of boundary disputes in International Law, Manchester, 1959, p.227).

Partiendo de esta diferenciación, nuestro estudio en este sector va a venir referido exclusivamente a los litigios en que se aluda a la fecha crítica, relacionando este concepto con la problemática de las efectividades; quedan, pues, excluidos aquellos casos en los que, o bien no hay referencia al problema de la fecha crítica, o la alusión a ésta no hace relación con la ocupación efectiva.

⁵⁸ El árbitro, Max Huber, sitúa la fecha crítica en el momento de la conclusión y entrada en vigor del Tratado de París, 1898, en cuanto la cuestión principal es la de determinar la existencia de soberanía en ese momento. Vid. R.G.D.I.P., 1935, p.172

⁵⁹ Esta es la postura mantenida tanto por Tavernier (cfr. op.cit., pp.97-98) como por Jennings (cfr. The Acquisition... op.cit., p.33).

pues olvida que la fecha crítica permite igualmente precisar la consolidación de un título hasta entonces provisional, constituyéndose en este sentido como una regla funcional, de carácter sustantivo⁶⁰. En nuestra opinión, y seguimos así la línea de pensamiento iniciada por el prof. Sánchez Rodríguez y continuada por otros autores⁶¹, la fecha crítica "constituye una categoría jurídica de naturaleza mixta, sustantiva y procesal", que abarcaría de esta manera los dos aspectos arriba indicados.

En los casos en que juega la fecha crítica, la exacta determinación de ésta ocupa una importancia de primer orden, y ello porque en torno a la misma se suscitan dos cuestiones de interés que creemos interesante abordar:

- 1ª. a efectos de valorar la prueba concerniente a la soberanía inmediatamente anterior a la misma;
- 2ª. para establecer qué relevancia pueden tener los elementos de prueba posteriores a dicha fecha.

Dada la relevancia de tal selección, creemos que resulta del mayor interés tener presente cuáles son los criterios que, en términos generales, determinan la elección de una fecha crítica u otra. De acuerdo con Fitzmaurice⁶² son varias las hipótesis:

⁶⁰ Goldie (cfr. op.cit., pp.1267 y ss) es, sin duda, el mayor defensor del carácter sustantivo de la fecha crítica, aunque en su planteamiento parece olvidar a los litigios de delimitación de territorios respecto de los cuales no puede afirmarse que tenga tal naturaleza.

⁶¹ vid. "La fecha crítica...op.cit., p.88. Entre los autores que sostienen la doble naturaleza de la fecha crítica podemos citar a D.Bardonnnet, quien en su trabajo "Les faits... op.cit., p.78, la cataloga como "correspond à la fois à une règle de procédure et à une règle de fond".

⁶² Cfr. "The Law and Procedure... op.cit., pp.22-26.

- a) fecha de comienzo de la disputa⁶³;
- b) fecha en que el Estado demandante hubiera planteado por primera vez una reclamación definitiva sobre el territorio en cuestión;
- c) fecha en que cristaliza la controversia de forma definitiva entre las partes respecto de la soberanía sobre el territorio⁶⁴;
- d) fecha en que una de las partes propone y toma las medidas necesarias para iniciar un procedimiento de arreglo de controversias, tal como la negociación, conciliación, mediación o cualquier otro medio al margen del arbitraje o la solución judicial;
- e) fecha en que alguno de esos procedimientos es válidamente utilizado y puesto en práctica;
- f) por último, la fecha en la que se propone formalmente someter la cuestión al arbitraje o al arreglo judicial, comúnmente considerada como '*residual critical date*'.

En torno a la problemática de elección de la fecha crítica este mismo autor se refiere a otras dos figuras que pueden entrar en juego y que, por tanto, debemos

⁶³ Este supuesto es rechazado por el propio autor en base a cuatro razones:

1. por la dificultad inherente para determinar en ciertos casos el momento real de comienzo de la controversia;
2. por el hecho de que una controversia sobre un determinado territorio no se traduce necesariamente en un litigio;
3. porque en las controversias que afectan a períodos de tiempo muy largos supondría excluir como pruebas actos y comportamientos que pueden ser determinantes para la decisión sobre el supuesto;
4. porque contribuiría a la creación o al mantenimiento de controversias territoriales por razones políticas surgidas ulteriormente.

⁶⁴ La noción de cristalización había sido ya analizada en este mismo contexto por el propio Fitzmaurice en su intervención oral, 18 septiembre 1953, en el asunto de Minquiers y Ecrehoux (cfr. I.C.J. Pleadings, vol. II, pp. 68-69).

tener presentes:

- La 'fecha crítica artificialmente creada', cuya existencia y los peligros inherentes a la misma fueron puestos de manifiesto por vez primera en la fase oral del asunto de Minquiers y Ecrehous⁶⁵. La finalidad que se persigue es la de favorecer la pretensión del Estado que la propone introduciendo elementos de artificiosidad; sin embargo, al tratarse de un elemento de engaño la consecuencia inherente a la misma es su seguro rechazo por el órgano jurisdiccional.
- Las fechas críticas 'self-evident'. Surgen en aquellos supuestos en los que no se suscita duda alguna respecto a la determinación de la fecha crítica⁶⁶, y llevan aparejado el interés de las Partes en intensificar sus elementos de prueba durante el período inmediatamente anterior. La mayoría de los casos en que figura la fecha crítica son, como veremos a continuación, supuestos de 'self-evident critical dates'; es el caso de 1898 respecto de la Isla de Palmas, o de 1931 en el asunto de Groenlandia oriental.

Tomando como punto de referencia esta aproximación conceptual a la fecha crítica, corresponde ahora abordar las dos cuestiones que hacen incidencia directa al objeto de nuestro estudio: el análisis de la prueba relativa al ejercicio de

⁶⁵ Efectivamente la representación de Reino Unido se expresaba al respecto afirmando que "...it cannot be open to a State artificially to create a 'critical date' by the mere process of making claims which are only pressed up to a certain point..." (vid. Réplica del Reino Unido, Asunto de Minquiers y Ecrehous, I.C.J.Pleadings, vol.I, pp.551-552).

⁶⁶ Cfr. ibidem, pp.25-26 y p.22, respectivamente para cada concepto. En relación a las 'self-evident critical dates', Fitzmaurice las vincula al principio del focus: "Often, the choice of the critical date is obvious, because there figures in the case some treaty or event which, by 'focusing' the precise issues, must govern the legal position".

funciones de Estado, antes y después de la fecha crítica.

A) LA VALORACION DE LAS EFECTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CRITICO.

Ya hemos advertido cómo la noción de fecha crítica presenta una importancia procesal evidente, en cuanto el tribunal llamado a resolver la controversia relativa a la soberanía sobre un territorio determinado concederá especial relevancia a una fecha determinada con el objeto de evaluar los hechos y las pruebas ofrecidas por las Partes para demostrar el ejercicio continuo y pacífico de funciones estatales. Se trata, en consecuencia, de una fecha decisiva en materia de recepción de pruebas que permite determinar la base fáctica de una decisión jurisdiccional, y por tanto, clarificar el proceso internacional. Por consiguiente, la fecha crítica, en cuanto término de referencia, debe ser tenida muy en cuenta por cada una de Partes, no sólo para probar su título y el ejercicio continuo y pacífico de sus competencias, sino para evitar que la otra parte intente mejorar su propia posición jurídica -creando una fecha crítica artificialmente- a través de la realización de actos posteriores jurídicamente relevantes para la adjudicación de la soberanía territorial.

En este contexto surge el concepto de período crítico, en íntima conexión

con la fecha crítica, como el período de tiempo inmediatamente anterior a ésta⁶⁷, y que será tenido en cuenta especialmente para valorar los títulos y pruebas alegadas por las Partes para decidir sobre el fondo de la controversia⁶⁸. De ahí el interés que nos suscita esta figura, pues es patente que la prueba se presenta singularmente sensible a esas fechas. No hay duda de que cada caso constituye un unicum, de ahí que nuestra labor ahora será la de establecer la valoración efectuada de cada volumen probatorio del ejercicio de soberanía relativo a la época precedente a la fecha crítica, obviamente en aquellos contenciosos en los que ésta aparece determinada por el órgano jurisdiccional de forma expresa⁶⁹.

■ El primero de éstos es el de la Isla de Palmas, sometido al arbitraje por vía del compromiso arbitral de 25 enero 1925. En esta controversia, cuyo origen se

⁶⁷ El concepto de período crítico tiene también su origen en el asunto de la isla de Palmas, al referirse Max Huber a la época inmediatamente anterior al Tratado de Múnster como el 'período decisivo' (vid. R.G.D.I.P., 1935, p.175 y 196). Por su parte Bardonnet lo entiende como la expansión en el tiempo de la fecha crítica (vid. "Les faits... op.cit.", p.55).

⁶⁸ En este sentido se manifiesta el prof.Sánchez Rodríguez, en su artículo "Fecha crítica... op.cit.", p.671, reseñado claramente la importancia de este concepto.

⁶⁹ A este respecto hay que referir la existencia de dos supuestos en los que expresamente el árbitro ha rechazado la aplicación de la figura de la fecha crítica. Es el caso del Río Encuentros (cfr. U.N.R.I.A.A., vol.XVI, pp.166-167) y el del Canal de Beagle (I.L.R., 1979, n°52, pp.213-219, pa.156-160) decididos por la Reina de Inglaterra.

Por otra parte, un supuesto en el que sí hay acogida de la fecha crítica pero no vamos a analizarlo en cuanto no hace relación al problema de la prueba de las efectividades, es el asunto de Taba. Este caso tiene la particularidad, por un lado, de que las partes propusieron varias posibles fechas críticas para que decidiera el tribunal arbitral (ej. Egipto, propuso primero 1922, posteriormente 1944; Israel, 1906), por otro, que el tribunal arbitral se refiere expresamente al período crítico, que lo hace comprender entre 29 septiembre 1923, fecha de entrada en vigor del mandato palestino, y 14 mayo 1948, fecha de expiración del mandato (cfr. I.L.M., 1988, vol.XVII, pp.1456-1457, pa.111; p.1463, pa.142; y p.1469, pa.171, respectivamente para cada una de las cuestiones aludidas).

remonta a 1906 (fecha en la que por primera vez se planteron divergencias entre ambos Estados respecto de la isla), EE.UU. hacía valer su condición de sucesor de España a la soberanía sobre la isla, a través del Tratado de Paz de París de 1898, por el que España le cedía la isla que había descubierto en el siglo XVI; frente a esta alegación los Países Bajos argumentaban, por un lado, el carácter de título incoado que le corresponde al descubrimiento, por lo que España no tenía la soberanía sobre la isla cuando fue ocupada por la Compañía de la Indias Orientales en 1677, y por otro, su ejercicio continuo y pacífico de autoridad estatal sobre dicho territorio. Ante estos planteamientos opuestos, el árbitro afirmó que había tres fechas a retener: 1898, 1906 y 1925; de estas tres fechas posibles, Huber elige como crítica la de 1898. La cuestión central era la de determinar quien poseía el título de soberanía en esa época, para lo cual examinó las alegaciones de ambas Partes. El resultado fue el rechazo del título estadounidense como consecuencia de la aplicación del principio nemo dare potest quod non habet, en cuanto España no poseía la soberanía sobre Palmas en el momento de la cesión, pues no había ningún acto de soberanía realizado por ésta que lo probase; por otra parte, el examen de la prueba de actos de Estado realizados por Países Bajos desde 1677, a lo largo del siglo XVIII y fundamentalmente "dans les années précédant immédiatement 1898"⁷⁰, conlleva la atribución de la soberanía a éste.

■ En una línea similar se encuadra el asunto de la Isla de Clipperton, aunque no encontremos referencia explícita al problema de la fecha crítica. El título de

⁷⁰ Vid. R.G.D.I.P., 1935, p.198.

México se centraba en la sucesión a la soberanía española (1836) adquirida por descubrimiento en el siglo XV, y su posterior ocupación formal en 1897. Por su parte, Francia, entendía que su toma de posesión de la isla en 1858 le confería la soberanía sobre ésta, al tratarse de territorio nullius. Según estos argumentos, A.G.Roche⁷¹ entiende que hay más de una fecha crítica posible: para Méjico sería 1858, pues según su alegación en ese momento la isla estaba bajo su soberanía por el descubrimiento español; la posición francesa sería favorable a 1897, ya que desde 1857 el ejercicio de soberanía sobre la isla provenía de su lado. El árbitro, Victor Manuel III, no refiere una particular fecha crítica pero se entiende implícita la de 1897, al analizar en su laudo únicamente la prueba de posesión anterior a dicha fecha, fundamentalmente el período comprendido entre 1858-1897⁷², lo que supondría, en definitiva, la atribución del territorio a Francia.

■ Posteriormente, ya situados en el plano judicial, encontramos un nuevo supuesto de 'self-evident critical date'; nos estamos refiriendo al asunto del Estatuto jurídico de Groenlandia oriental. En este caso, el T.P.J.I. no tuvo duda alguna en reconocer como fecha crítica el 10 julio 1931, fecha de promulgación del decreto noruego de ocupación formal de Groenlandia. Fecha que coincidía, además, con la de cristalización de la controversia y que marca el punto de cambio de las reclamaciones respectivas de las Partes, centradas éstas, por un lado, en el continuo y pacífico ejercicio de funciones estatales desde el siglo XVII sobre

⁷¹ Cfr. The Minquiers and Ecrehous... op.cit., p.93.

⁷² Cfr. A.J.I.L., 1932, pp.391-394.

Groenlandia por parte de Dinamarca, que se mantenía aún en el momento de la ocupación noruega; acto de ocupación que conforma, por otro lado, la base del título noruego. De esta forma, el proceso de valoración de las pruebas de posesión danesa por parte del Tribunal, aún abarcando el amplio período alegado por Dinamarca -ajustándose así, como hemos visto, a las exigencias del derecho intertemporal-, se centró en el período inmediatamente anterior a la fecha crítica, pues a juicio del tribunal "it is not necessary that sovereignty over Greenland should have existed throughout the period during which the Danish Government maintains that, it was being... it is sufficient to establish a valid title in the period immediately preceding the occupation"⁷³. El resultado de ese examen de las efectividades, condicionado por las circunstancias particulares del territorio, creó en el tribunal la convicción jurídica del título danés, cuya autoridad parecía intensificarse en el período crítico.

■ En los casos visto hasta el momento el volumen de la prueba relativa a actos de soberanía inmediatamente anteriores a la fecha crítica correspondía exclusivamente a una de las Partes, por lo que la función del órgano jurisdiccional se centraba en valorar si esa prueba era suficiente para entender que había adquirido la soberanía en esa fecha, o, por el contrario, resultaba insuficiente por lo que el título de la otra Parte primaba. Sin embargo, este planteamiento se trunca en el asunto de Minguiers y Ecrehous pues aquí las alegaciones relativas al ejercicio de funciones estatales como base del título territorial y anteriores a la fecha crítica,

⁷³ Vid. P.C.I.J. serie A/B, n°53, 1933, p.45.

se sitúan a ambos lados de las reclamaciones, por lo que la valoración del Tribunal se dirigirá a las pruebas de ambas partes. Además, en este caso encontramos como en ningún otro, densas discusiones por los dos Estados en torno a la doctrina de la fecha crítica, su concepto e implicaciones⁷⁴, entendiendo que ésta es, para el caso concreto, según Francia 1839 -fecha del Convenio de pesquerías entre ambos Estados- que sería además, en su opinión, una 'self-evident critical date' en cuanto su objeto era el de excluir cualquier soberanía exclusiva sobre el grupo; por su parte, Reino Unido reivindica como crítica la de 1950 -fecha del compromiso-, pues hasta entonces la disputa no se había 'cristalizado' entre ambas Partes.

La postura del T.I.J. se separa de estas alegaciones, rechazando tanto la propuesta francesa, al considerar que en 1839 no había surgido ningún conflicto aún sobre los Minquiers y Ecrehous entre estos Estados, como la inglesa, aunque a esta última no se refiera de forma expresa. A juicio del Tribunal, hay que retener el criterio de 'cristalización' de la controversia para fijar la fecha crítica, y ésta no es 1950 (como sostenía Reino Unido), sino 1886 para Ecrehous y 1888 para Minquiers, cuando Francia hace por primera vez una reclamación formal sobre cada una de las islas⁷⁵. De esta manera, y al igual que ocurría en el caso de Groenlandia Oriental, el estudio del Tribunal va a hacer una mayor reflexión sobre la prueba de actos de soberanía efectuados a lo largo del siglo XIX, dado que " what is the decisive importance, in the opinion of the Court, is not indirect

⁷⁴ Cfr. Intervención oral de Sir L.Heald, Mr.Fitzmaurice, por Reino Unido y Prof.Gross, por Francia, I.C.J.Pleadings, vol.II, pp.48, 61-95, y 229-248.

⁷⁵ Sobre toda la argumentación del T.I.J. en torno a la fecha crítica en este caso, cfr. I.C.J.Reports, 1953, pp.59-60.

presumptions deduced from events in the Middle Ages, but the evidence which relates directly to the posesion of the Ecrehos and Minquiers groups"⁷⁶; lo cual no le impide analizar igualmente, tanto los actos relacionados con la época feudal como origen de un título histórico (aplicación implícita, como indicamos en la sección precedente, del derecho intertemporal en su segunda regla) que los actos de soberanía inmediatamente anteriores a 1886 consolidan en favor de Reino Unido, como los actos posteriores a dicha fecha, en el sentido confirmatorio que veremos en el próximo apartado.

■ La sentencia de 19 febrero 1968, en el asunto del Rann de Kutch, resulta especialmente interesante en lo que se refiere a la cuestión de la fecha crítica, en cuanto el tribunal arbitral no determinó con precisión una fecha única, sino que consideró que había dos fechas con 'particular relevancia'. Efectivamente, al observar que "the Parties have not expressly joined in accepting a precise critical date, their pleadings and arguments embody a wide measure of agreement on certain dates or years as having particular relevance"⁷⁷, el tribunal entendió que eran fechas relevantes, y las aplicó con el efecto de fecha crítica, la fecha de conclusión del último tratado firmado por la Compañía de las Indias Orientales con los indígenas del Kutch, 13 octubre 1819, y el período comprendido entre la fecha de promulgación del Acta de Independencia de India, 18 julio 1947, y la fecha de accesoión de India y Pakistán (partes de la controversia) a la independencia, 15

⁷⁶ Vid. ibidem, p.57.

⁷⁷ Vid. I.L.M., 1968, vol.VII, p.656.

agosto 1947. Decimos que las aplicó con ese sentido en cuanto el tribunal sólo hizo referencia a los actos de jurisdicción anteriores a 1947, pues su objetivo era el de "define and delimit with the greast possible accuracy which of the two contending sovereigns, being before Independence..." ; esta determinación la efectuó a partir del análisis de dos tipos de pruebas de soberanía, unas referentes a la época colonial -actos del s.XIX-, otras las correspondientes al período inmediatamente anterior a la accesión a la independencia. Y el resultado, sabemos, determinó un reparto del territorio entre ambos Estados sin ajustarse plenamente a las reclamaciones de ninguno de los dos.

■ Como último supuesto en el que encontramos aplicación de la figura de la fecha crítica, podemos referirnos al asunto de la controversia fronteriza entre los Emiratos de Dubai y Shariah (aunque no se trate de un auténtico arbitraje internacional, no podemos dejar de aludir a él, como ya hemos hecho en páginas anteriores). Este caso, junto con el de Taba⁷⁸, son ejemplos recogidos por Bardonnet⁷⁹ de cómo las partes pueden indicar en sus escritos varias fechas críticas posibles y modificar su posición inicial en el curso del procedimiento. Así, Sharjah plantea en un primer momento como fecha crítica la de 1955, cuando ambos Emiratos reconocen la existencia de una controversia entre ellos al confiar a las autoridades británicas su solución; pero, posteriormente admite que podría corresponderse con la fecha de creación de la Federación de Emiratos Arabes

⁷⁸ Cfr. supra, nota 68.

⁷⁹ Vid. "Les faits...op.cit.", p.60.

Unidos, 2 diciembre 1971. Por su parte, Dubai sostiene que la fecha crítica debe ser la del Compromiso de arbitraje, 30 noviembre 1976. Finalmente, el tribunal rechaza el planteamiento de Sharjah, pues en esa fecha no había cristalizado la controversia, y acoge la tesis de Dubai, estableciendo que "if a critical date exists, that date can only be that of the date of the signature of the Arbitration Agreement on 30 november, 1976"⁸⁰. Conscientes las Partes de que la determinación de una fecha crítica les obliga a ser coherentes con la misma, en cuanto a la presentación de pruebas de ejercicio de soberanía en los años inmediatamente anteriores, el tribunal se ha encontrado en este caso con un volumen probatorio de efectividades referido a un período que abarca desde 1930 hasta el próximo 1973, por lo en su examen no se ha visto en la obligación de excluir ninguna categoría de evidencia. El resultado de esta valoración concluye con la determinación del control efectivo de Dubai en la fecha decisiva, en base a las pruebas de efectividades presentadas.

B) IMPORTANCIA DE LAS EFECTIVIDADES EN EL PERIODO INMEDIATAMENTE POSTERIOR A LA FECHA CRÍTICA.

Pese a la definición de fecha crítica dada por el Dictionnaire de la

⁸⁰ Finalmente, el tribunal admite la figura de la fecha crítica que en un primer momento había rechazado para esta controversia, aunque no sin dejar de mostrar sus reticencias (que no compartimos), al afirmar que "the concept of critical date... has not played a major rule in territorial disputes" (vid. Original mecanografiado, p.8, pp.88-89, y p.94, respectivamente para cada cuestión aludida).

terminologie du Droit International⁸¹, al referirse a la misma como

"expression employée en procédure arbitrale ou judiciaire pour désigner la date à partir de laquelle les données du litige doivent être considérées comme définitivement fixées de telle manière que les faits postérieurs doivent être tenus pour sans pertinence pour la solution du différend",

-definición que excluye por principio los sucesos que sobrevienen con posterioridad a la fecha crítica-, la propia práctica jurisprudencial referida nos muestra cómo esta afirmación debe ser matizada. Efectivamente, así como los hechos que ocurren antes de la fecha crítica tienen valor sustantivo en cuanto creadores del título, los sucesos ocurridos después de esa fecha pueden ser retenidos como prueba, pero sólo como categoría dependiente; son admisibles únicamente de forma subordinada para explicar y corroborar los hechos probatorios ocurridos con anterioridad a la fecha crítica.

Un examen atento de la jurisprudencia anteriormente aludida demuestra, en efecto, que bajo ciertas condiciones y con ciertos límites, los elementos de prueba de posesión efectiva, posteriores a la fecha crítica, pueden ser objeto de valoración. El prof.BARDONNET⁸² ha realizado una exhaustiva labor de análisis en este sentido, sistematizando en las siguientes las estrictas condiciones en que la práctica ha encasillado la posibilidad de recurrir a elementos de prueba

⁸¹ Vid. Dictionnaire...op.cit., París, 1960, p.186 (el subrayado es nuestro).

⁸² Vid. "Les faits postérieurs...op.cit.", pp.63-71 (creemos obligado referir que este estudio del prof.Bardonnnet constituye, sin duda, la aportación más importante sobre el tema, lo que justifica nuestra remisión continua al mismo).

posteriores a la fecha crítica:

1ª. La primera es negativa, en el sentido de que no debe haber diferencias esenciales en las relaciones entre las Partes y el territorio disputado, antes y después de la fecha crítica. Esta primera condición se extrae de la sentencia de Max Huber en la Isla de Palmas⁸³.

2ª. A esta primera condición, la jurisprudencia posterior⁸⁴ ha añadido una exigencia suplementaria de naturaleza positiva: conviene que esas actividades posteriores a la fecha crítica aparezcan como el desarrollo continuo de las actividades anteriores a la misma y prolongen de alguna manera sus raíces en el pasado. Es decir, debe existir continuidad entre la práctica anterior y la posterior a la fecha crítica, una cierta homogeneidad en el comportamiento de las partes durante el período que precede y el que sigue a dicha fecha.

3ª. La tercera condición se desprende, según Bardonnnet, de los principios generales del procedimiento internacional: de la misma manera que un juez internacional no se puede acoger a reclamaciones tendentes a crear una ficción de soberanía ("paper claims"), no se puede admitir el recurso de una de las partes a hechos posteriores a la fecha crítica que respondan exclusivamente a una finalidad de táctica judicial para reforzar su posición post litem motam.

Si observamos atentamente estas tres condiciones reseñadas por Bardonnnet podemos concluir que se encuentran interrelacionadas entre sí. El criterio del

⁸³ Cfr. R.G.D.I.P., 1935, p.196.

⁸⁴ Aunque podría entenderse implícita en la falta de 'diferencia esencial' requerida por Huber, la alusión expresa a esta segunda condición la localizamos en el asunto de Minquiers y Ecrehoug (cfr. I.C.J.Reports, 1953, pp.59-60).

desarrollo continuo se halla implícito en el requisito de falta de diferencia esencial, son en cierta medida indisociables. Por otro lado, la exigencia de no mejora se encuentra, en gran medida, cubierta por el criterio del desarrollo continuo, pues ambos postulan una necesaria homogeneidad en las actividades de las partes en relación al territorio disputado antes y después de la fecha crítica.

A estas exigencias, a cuyo cumplimiento parece condicionar la propia jurisprudencia su admisibilidad, se añade la limitación que supone el hecho de que las pruebas posteriores a la fecha crítica sólo pueden ser retenidas con el fin de elucidar y clarificar la situación de las partes en relación al territorio litigioso; lo cual excluye su invocación con el fin de determinar un cambio en la situación existente con anterioridad a la fecha crítica. La justificación de este límite reside necesariamente en la exigencia indicada de homogeneidad y coherencia entre la práctica anterior y la posterior al momento decisivo⁸⁵.

Sin embargo, pese a la exactitud de esta construcción, es el juez o árbitro el que decidirá en cada caso, en atención a las circunstancias particulares, la procedencia o no de las pruebas posteriores a la fecha crítica determinando, igualmente, la conformidad o no de las mismas a las condiciones señaladas.

■ De esta manera, de los casos mencionados en el apartado anterior en los cuales ha sido retenida la figura de la fecha crítica, podemos referir los siguientes

⁸⁵ Cfr. Bardonnnet, D., Les faits... *op.cit.*, p.70.

como supuestos de rechazo de la prueba de efectividades desarrolladas en el período posterior a dicha fecha:

- El asunto de la isla de Clipperton, aunque la idea de fecha crítica está tan sólo implícitamente recogida en el planteamiento del árbitro, resulta especialmente interesante en lo que se refiere al material posterior a 1897, fecha decisiva de este caso. En efecto, con posterioridad a dicha fecha México tomó gran interés en la isla realizando varios actos de autoridad estatal sobre la misma (envío de tropas, construcción de un faro en 1906...), los cuales fueron calificados por Francia como habiéndose realizado con la clara intención de mejorar su posición en la controversia⁸⁶; según esta objeción la reclamación mexicana no sería sino "paper-claim", con lo cual estaría vulnerando la tercera de las condiciones anteriormente mencionadas⁸⁷. Es interesante resaltar cómo el árbitro no ha tenido en cuenta en ningún momento ese cuerpo probatorio posterior a 1897⁸⁸, con lo que implícitamente ha admitido la tesis francesa de rechazo de la actividad posterior a la fecha decisiva cuando ésta tiende a modificar la situación existente en ese momento.

- El hecho de que el T.P.J.I. no hiciera ninguna consideración respecto a la prueba

⁸⁶ Cfr. Memoria defensiva presentada por el Gobierno de la República francesa, París, 1912, p.236.

⁸⁷ Precisamente es en este asunto donde encuentra Bardonnet la primera referencia a esa tercera exigencia suplementaria que permite eliminar toda práctica posterior a la fecha crítica, motivada por la intención de mejorar la posición jurídica de una de las Partes (op.cit., p.66).

⁸⁸ Cfr. A.J.I.L., 1932, pp.390-394.

de soberanía noruega sobre Groenlandia oriental, desplegada tras su ocupación formal de 1931, es explicable desde dos ángulos distintos⁸⁹: en primer lugar, porque al quedar fijada la fecha crítica en 1931, la prueba de posesión efectiva del territorio disputado anterior a dicha fecha procedía exclusivamente de parte de Dinamarca, la cual resultaba suficiente para entender que en la fecha decisiva queda claramente demostrada la soberanía danesa sobre Groenlandia; además, si atendemos a las dos exigencias de falta de diferencia esencial y desarrollo continuo, éstas no se cumplen en ningún caso respecto de la prueba noruega cuya aceptación supondría, claramente, un cambio en las relaciones entre las Partes y el territorio disputado anteriores a la fecha crítica.

- Más recientemente, en el asunto de la controversia fronteriza entre los Emiratos de Dubai y Sharjah, este último había argumentado, en relación a la fecha crítica (que él situaba en 1971), que los actos de ambas Partes en las zonas objeto de la controversia posteriores a dicha fecha no debían ser tomados en consideración por el tribunal arbitral, excepto si proporcionaban prueba de la soberanía existente al tiempo de la fecha crítica, en cuanto tales actos constituyan "attempts to improve the legal position of the Parties"⁹⁰. Entendió el tribunal arbitral que Sharjah se estaba refiriendo a la construcción de obras públicas en Al Mamzer por parte de Dubai en 1971, por lo que al fijar aquél la fecha crítica en 1976, en nuestra

⁸⁹ Cfr. Asunto de Groenlandia Oriental, P.C.I.J., serie A/B, n°53, 1933, pp.45-65

⁹⁰ Vid. Original mecanografiado, p.89.

opinión, esta alegación carecía de sentido (pues la prueba sometida por Dubai es anterior a dicha fecha); sin embargo, a juicio del tribunal tal actividad "could not be interpreted as acts of sovereign authority"⁹¹.

■ La toma en consideración, a título confirmativo, de las actividades y actitudes posteriores a la fecha crítica, resulta evidente en el asunto de la Isla de Palmas. En este caso el árbitro, Max Huber, divide los elementos de prueba en tres categorías⁹²: los anteriores a la fecha crítica de 1898, plenamente aceptados como hemos tenido oportunidad de comprobar en el apartado precedente; los posteriores al nacimiento de la controversia en 1906, los cuales deben ser descartados de conformidad con los principios generales del procedimiento arbitral; y los sucesos sobrevenidos entre la fecha crítica y el nacimiento del conflicto (1898-1906), los cuales pueden ser tenidos en consideración para aclarar la situación jurídica existente en el momento decisivo.

No hay duda alguna de la posición de Max Huber en relación a los hechos posteriores a la fecha crítica: "presentan un cierto interés merced a la luz que pueden proyectar sobre el período inmediatamente anterior a dicha fecha"⁹³. Analizando la prueba presentada por Países Bajos relativa al ejercicio de soberanía en ese período, el árbitro observa cómo se ajusta a la exigencia de falta de diferencia esencial en las relaciones de las autoridades holandesas con la isla antes

⁹¹ Vid. supra.

⁹² Cfr. R.G.D.I.P., 1935, p.196.

⁹³ Vid. supra.

de la fecha crítica, y de desarrollo continuo, por lo que los toma en consideración a título confirmativo para corroborar su afirmación de existencia de soberanía holandesa sobre Palmas en 1898. El sistema impositivo de los años 1904 y 1905, o la asistencia médica proporcionada a la isla en 1903, son prueba del mantenimiento de una soberanía plenamente asentada en 1898.

- La jurisprudencia establecida a través del asunto de la isla de Palmas, fue retomada por el T.I.J. en el caso de Minquiers y Ecrehous, para quien no existe causa que justifique la exclusión de los hechos posteriores a las fechas críticas de 1886 y 1888, cuando éstos "had developed gradually long before the dispute as to sovereignty arose, and it has since continued without interruption and in a similar manner"⁹⁴. Es decir, está confirmando la opinión expresada por Huber de que el material posterior a la fecha crítica no puede servir para cambiar la situación existente con anterioridad a dicha fecha.

La prueba de actos de administración realizados sobre Ecrehous y Minquiers, tanto por autoridades británicas como por autoridades de Jersey, con posterioridad a 1886 y 1888, respectivamente, no sólo no ha sido descartada sino que dichos actos han sido tenidos muy en cuenta por el tribunal como prueba adicional de la situación existente en el momento crítico. Varios actos de jurisdicción civil y criminal, el despliegue de autoridad policial, así como un común ejercicio de administración desarrollado por autoridades británicas a lo largo de los siglos XIX y XX han sido retenidos por el Tribunal en cuanto constituyen una prolongación del

⁹⁴ Vid. I.C.J. Reports, 1953, pp.59-60.

ejercicio de soberanía por parte de Reino Unido sobre tales islas⁹⁵. Queda claro que la sentencia de 1953 atribuye el mismo papel corroborativo a los hechos posteriores que ya otorgara el laudo de 1928.

- Por último, creemos necesario referirnos a dos asuntos en los cuales, si bien se ha obviado la referencia probatoria posterior a la fecha crítica por las Partes, la posición del correspondiente tribunal arbitral era favorable a la misma. En efecto, en el asunto del Rann de Kutch no se ha descartado a priori el recurso a los actos de jurisdicción posteriores a la última fecha relevante de 1947 según se desprende de las palabras del tribunal al referirse a que su función era precisamente el de definir y delimitar, con la mayor exactitud posible, "which of the two contending sovereigns, being before Independence... and which of them carried out the burden of discharging the duties inherent in sovereignty in that territory at each relevant period of time"⁹⁶.

Con mayor claridad se expresa el tribunal arbitral que conoció del asunto de Taba respecto del valor confirmativo de los hechos posteriores a la fecha crítica, pues al establecer cuáles van a ser los criterios sobre los que va a basar su decisión se refiere, no sólo al material probatorio anterior a la fecha crítica, sino que entiende incluida entre éstos la conducta de las Partes posterior a dicha fecha "to the extent that such conduct confirms the understanding reached of what the

⁹⁵ Cfr. ibidem, p.70.

⁹⁶ Vid. I.L.M., vol.VII, 1968, p.656 (el subrayado es nuestro).

situation was on the critical date"⁹⁷. Resulta igualmente descatable de esta sentencia la consagración que hace de la función que cumplen los hechos posteriores a la fecha crítica, función que actúa como límite en el recurso a los mismos: "events subsequents to the critical period can in principle also be relevant, not in terms of a change of the situation, but only to the extent that may reveal or illustrate the understanding of the situation as it was during the critical period"⁹⁸.

No hay duda alguna según se desprende del análisis realizado, pese a que las definiciones dadas por la doctrina sobre la fecha crítica parecen excluirlo, que la prueba de efectividades correspondientes al período inmediatamente posterior a la fecha crítica no siempre resulta excluida, sino que, por el contrario, suele ser tomada en consideración, no como creadora del título, sino únicamente para corroborar el mantenimiento del título existente sobre el territorio disputado en el momento decisivo, es decir, para confirmar la existencia de soberanía. En cualquier caso, no hay regla general, son las circunstancias propias de cada controversia las que determinan su admisibilidad.

⁹⁷ Vid. I.L.M., vol.XXVII, 1988, p.1457, pa.112.

⁹⁸ Vid. ibidem, p.1469, pa.175.

C) INCIDENCIA DE LAS EFECTIVIDADES, ANTERIORES Y POSTERIORES A LA DESCOLONIZACIÓN, EN EL CASO DEL 'UTI POSSIDETIS IURIS'.

A diferencia de las controversias de adquisición de soberanía territorial, los conflictos de delimitación de dos soberanías pre-existentes, en los cuales el objeto de disputa lo constituye la interpretación de un título jurídico para trazar una línea fronteriza, no plantean las mismas dificultades en relación a la fecha crítica, especialmente si nos referimos a un litigio de delimitación regido por el principio del uti possidetis iuris. Efectivamente, como hemos tenido ocasión de comprobar la figura de la fecha crítica opera habitualmente en los contenciosos de adquisición territorial -en los que las alegaciones se basan fundamentalmente en la posesión efectiva del territorio-, de ahí que su transposición al ámbito de la delimitación fronteriza⁹⁹ suponga una erradicación de su contexto habitual, con las 'particularidades' que ello pueda suponer.

Sin embargo, para un cierto sector de la doctrina, un ejemplo típico de adopción de una fecha crítica pre-establecida de aplicación general puede encontrarse en la doctrina del uti possidetis iuris, opinión que no ha dejado de encontrar voces adversas¹⁰⁰. En el mismo sentido parecen manifestarse algunos

⁹⁹ Ya hemos aludido, igualmente, a que en los contenciosos de delimitación territorial la figura paralela que opera es la de 'tratado crítico de fronteras'.

¹⁰⁰ Esta es la postura mantenida por A.L.W.Munkman, para quien "uti possidetis could be described as a form of 'critical date' with a general application" (vid. "Adjudication and Adjustment. International Judicial Decision and the Settlement of Territorial and Boundary Disputes", B.Y.B.I.L., 1972-73, p.93); en el mismo sentido se manifiestan A.O.Cukwurah (op.cit.,

Estados, afectados por este tipo de conflictos, afirmando que en relación al uti possidetis "le seule date critique concevable de l'attribution de souveraineté est la date de l'accession des deux Etats à l'indépendance"¹⁰¹.

Cuando tal fecha es adoptada, la prueba posterior a la fecha de independencia de los Estados partes -que marca el uti possidetis- es automáticamente excluida de afectar a la situación legal establecida; este constituye, precisamente, el principal argumento para afirmar la identificación de fecha crítica y uti possidetis: la exclusión de los hechos posteriores. Sin embargo y pese a la coincidencia, los actos o hechos posteriores a la fecha de Independencia se excluirían por la propia razón de ser del uti possidetis, y no en virtud de la fecha crítica¹⁰²; pues, como muy bien ha expresado el T.I.J en el asunto de la controversia fronteriza entre Burkina Faso y Mali, refiriéndose al efecto que produce la aplicación del principio del uti possidetis, éste "applies to the State as it is, i.e., to the 'photograph' of the territorial situation then existing. It freezes

pp.112-113), A.G.Roche (op.cit., p.89) y J.Dutheil de la Rochère ("Les procédures de règlement des différends frontaliers", en La frontière. Colloque de Poitiers, París, 1980, p.142).

No faltan, sin embargo, voces opuestas como la de J.A.Barberis que entiende que "si se acepta como regla entre dos Estados el uti possidetis, la idea de fecha crítica pierde valor y todo se reduce a saber cuáles eran los límites en el primer momento de acceso a la independencia" (vid. "La regla del uti possidetis iuris en las controversias limítrofes entre países hispanoamericanos", en Liber amicorum. Colección de estudios jurídicos en homenaje al Prof.Dr.D.José Pérez Montero, vol.I, Oviedo, 1986, p.142); o la del prof.Sánchez Rodríguez, que se acoge plenamente a la opinión de Barberis (cfr."Fecha crítica... op.cit., p.682).

¹⁰¹ Vid. Memoria del Gobierno de la República de Honduras, 1 junio 1988, en el asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras, p.156. Podríamos decir que se trata de una identificación no strictu sensu, sino de mera explicación analógica.

¹⁰² En este sentido ha sido muy clara la exposición del prof.Sánchez Rodríguez, explicando las exclusiones mutuas de ambas figuras ("Fecha crítica... op.cit., pp.681-684).

the territorial title; it stops the clock"¹⁰³. Por ello, creemos más correcto hablar de **similitud**, en cuanto a los efectos temporales, y no de identidad entre ambos conceptos.

Precisamente, partiendo de esa semejanza, aunque al quedar regido un conflicto por el uti possidetis esto suponga que los comportamientos de las partes posteriores a la fecha de independencia, y más concretamente la prueba de ocupaciones efectivas, deben en principio considerarse como indiferentes para determinar el título de soberanía, esto es, quedan automáticamente excluidas para afectar a la situación legal existente en ese momento; sin embargo, existen pruebas en la propia jurisprudencia judicial y arbitral que modelan esta afirmación, como ya ocurriera con la propia fecha crítica. En término generales, ya se hable de uti possidetis iuris, ya sea uti possidetis de facto, en ambos casos la posesión efectiva posterior a la fecha de independencia no puede crear una nueva línea fronteriza contraria al título colonial. Sin embargo, como ya advertíamos en el capítulo IV de este trabajo, los títulos legales que sirven para determinar el uti possidetis iuris adolecen con frecuencia de imprecisiones, ambigüedades y carencias que hacen necesario el recurso suplementario a otro tipo de pruebas. Es entonces, como vimos, cuando entran en juego las efectividades, para interaccionarse con el título

¹⁰³ Vid. I.C.J. Reports, 1986, p.568, pa.30. Es igualmente interesante la catalogación que hace, unas líneas más abajo, del uti possidetis como "la fotografía del territorio en la fecha crítica", pareciendo intuir la similitud existente entre ambos.

jurídico¹⁰⁴, bien corroborándolo, bien supliéndolo o completándolo; y no sólo las llamadas 'efectividades coloniales', definidas por el T.I.J. en el asunto de Burkina Faso/Mali, como "the conduct of the administrative authorities as proof of the effective exercise of territorial jurisdiction in the region during the colonial period"¹⁰⁵, sino incluso las 'efectividades post-coloniales', es decir, el ejercicio de funciones estatales posteriores a la independencia. En este sentido, el T.I.J. en el asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras establece, precisamente, la posibilidad de recurrir "to documentary evidence of post-independence 'effectivités' when it considers that they afford indications in respect of the 1821 uti possidetis iuris boundary, providing a relationship exists between the 'effectivités' concerned and the determination of that boundary"¹⁰⁶, que ya se entendía implícita en el espíritu de la sentencia de 1986.

Puesto que el tema de la dialéctica planteada entre efectividades y uti possidetis iuris ya ha sido abordado en el capítulo IV, nos remitimos al análisis entonces practicado, limitándonos ahora a referir los asuntos en que ha jugado la

¹⁰⁴ Recordamos, igualmente, en este punto los cuatro supuestos de interacción 'efectividades/uti possidetis iuris', asentados por la jurisprudencia del asunto de Burkina Faso/Mali: 1. confirman el título jurídico cuando coinciden con él; 2. se excluyen si no coinciden con el título legal; 3. lo sustituyen cuando éste no existe; 4. lo completan e interpretan cuando resulta ser insuficiente (I.C.J.Reports, 1986, pp.586-587, pa.63).

¹⁰⁵ Vid. I.C.J.Reports, 1986, p.586, pa.63.

¹⁰⁶ Vid. I.C.J.Reports, 1992, p.399, pa.62. El T.I.J., efectivamente, entiende implícito el recurso a las efectividades post-coloniales en las palabras de la Sala que conoció del asunto de Burkina Faso/Mali, en las que establecía el juego de interacciones entre efectividades y uti possidetis iuris (vid.supra).

interacción efectividades/uti possidetis, haciendo especial mención a la consideración que han obtenido las efectividades post-coloniales.

■ Ya entonces aludíamos a la importancia fundamental que ocupaban dos casos de la práctica jurisprudencial, en relación al papel determinante de las efectividades en la concrección del título jurídico: uno solucionado por vía arbitral, el asunto de la controversia fronteriza entre Guatemala y Honduras; otro por un órgano judicial, la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras. En ambos casos, no sólo fue admitida la prueba de efectividades coloniales, sino que ocuparon lugar de primer orden los actos de las Partes posteriores a la Independencia, con la finalidad de ayudar a establecer la línea del uti possidetis iuris de 1821; y ello motivado tanto por las deficiencias y lagunas de los documentos de la época colonial, como por la consideración de que suponían una continuación en el ejercicio de soberanía iniciado en esa época.

Dividiendo el tribunal arbitral la frontera objeto de disputa entre Guatemala y Honduras en cuatro secciones, procede aquél a valorar en todos ellos la prueba de ejercicio de soberanía presentada por las Partes; como consecuencia de ese análisis, tan sólo es rechazada esa prueba en un sector, obteniendo una consideración positiva para el resto. De esta manera, se retiene, por un lado, la prueba de efectividad post-colonial guatemalteca en el primer y cuarto sector, basada tanto en el ejercicio de autoridad y jurisdicción civil, como en los actos de administración local y central; y por otro, la remisión a efectividades coloniales presentadas por Honduras en relación al tercer sector, que se basaban en el

ejercicio de administración por autoridades estatales, fundamentalmente de jurisdicción civil y penal y de disposición sobre bienes inmuebles, completado por una intensa actividad eclesiástica en la zona¹⁰⁷.

Por su parte, el T.I.J. pese a su posición de principio favorable a la consideración de todo tipo de efectividades y a la profusión de pruebas presentadas tanto por Honduras como por El Salvador, éstas no tuvieron valoración positiva en la determinación de la línea del uti possidetis que habría de delimitar lo seis sectores de la frontera terrestre¹⁰⁸. Situación ésta que cambia radicalmente al abordar la controversia insular; en ésta, la imprecisión y contradicción de los documentos de la época colonial, así como la escasez de actos de soberanía anteriores a la fecha de la Independencia, obligan al Tribunal a retener como única fórmula probatoria del título jurídico las efectividades post-coloniales presentadas por las Partes (respecto de las cuales ya no cabría plantearse la exigencia, anteriormente señalada por el Tribunal, de continuidad con la situación legal anterior al venir ésta indeterminada), unidas al correspondiente consentimiento de la otra Parte, esto es, al comportamiento de las Partes como modo de extinguir o modificar derechos y obligaciones¹⁰⁹. El resultado del examen de la prueba

¹⁰⁷ Cfr. U.N.R.I.A.A., vol.II, pp.1328-1330, 1345-1350 y 1344-1347, respectivamente. Dado que el estudio particular de estas efectividades ha sido realizado en el capítulo V, remitimos al mismo para el análisis en detalle.

¹⁰⁸ Como hemos reiterado en varias partes de nuestro trabajo, todo el volumen de actos de Estado, anteriores y posteriores a 1821, presentado por ambas partes no entró en juego respecto del título jurídico (cfr. I.C.J. Reports, 1992, pp.442-443, pa.102; pp.435-436, pa.123; p.470, pa.177 y 178; pp.470-471, pa.179; pp.471-472, pa.180; p.515-516, pa.264; p.516, pa.265; p.542, pa.304; y pp.551-552, pa.319, respectivamente).

¹⁰⁹ Cfr. ibidem, p.566, pa.347.

abordado por la Sala, supuso la atribución de la soberanía de la isla del Tigre a Honduras -que había probado el ejercicio de autoridad a través del despliegue de actividad legislativa y la disposición sobre bienes inmuebles- y de Meanguera y Meanguerita a El Salvador -cuyo efectivo control sobre las mismas vino corroborado por una profusa actividad estatal probada mediante actos de jurisdicción civil y criminal, de administración central y local, implantación de un sistema impositivo, construcción de obras públicas, actos de registro e instauración de varios servicios públicos, entre otros-¹¹⁰, unido a la actitud aquiescente por silencio y ausencia de reacción de Honduras.

■ La reflexión en torno a la interacción entre efectividades y uti possidetis iuris ha sido igualmente abordada, aunque en menor medida, en otros supuestos jurisprudenciales:

- En el asunto de la Isla de Aves (conflicto que demuestra como ningún otro la particularidad que suponen los litigios de islas dentro del conjunto de controversias regidas por el uti possidetis), donde el árbitro hace primar al título jurídico sobre la ocupación efectiva del territorio, representada ésta por la efectividad post-colonial que supone el establecimiento de fuerzas armadas sobre la isla en 1854¹¹¹. Aquí la prueba de efectividad actúa en su faceta confirmatoria del uti possidetis iuris, cuya aplicación conlleva la atribución del territorio a Venezuela en calidad de

¹¹⁰ Cfr. ibidem, pp.567-570, pa.352 a 354 (respecto de El Tigre) y pp.572-574, pa.359 (en relación a Meanguera y Meanguerita).

¹¹¹ Cfr. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.II, pp.414-415.

sucesora de España.

- Ese mismo papel corroborador jugaron las efectividades coloniales alegadas por Honduras en su disputa fronteriza con Nicaragua, y los establecimientos coloniales que tanto Costa Rica como Panamá habían fundado en la frontera litigiosa¹¹². Efectivamente, en su laudo de 1906 el Rey de España delimitó la frontera entre ambos Estados atendiendo básicamente a los documentos de la época colonial, pero se sirvió de la prueba de posesión efectiva que constitúan diversos actos de administración, legislativos y de policía, así como abundantes referencias a la actividad eclesiástica desplegada en la zona por el Obispado de Honduras, para afianzar el trazado establecido¹¹³.

- Sin embargo, no faltan tampoco referencias negativas en cuanto a la consideración de las efectividades coloniales en este contexto. La primera podemos localizarla claramente en el laudo del Presidente Alcorta¹¹⁴, que delimitó la frontera entre Bolivia y Perú en atención, exclusivamente, a principios de equidad excluyendo por inconcluyentes los documentos coloniales, y por inoperantes las correspondientes pruebas de posesión efectiva presentadas sobre todo del lado de Bolivia.

Posteriormente, fue la Sala del T.I.J. que conoció de la controversia

¹¹² Respecto de este segundo caso, cfr. U.N.R.I.A.A., vol.XI, pp.533-534.

¹¹³ Cfr. GROS ESPIELL, H. España y la solución... op.cit., pp.139-143.

¹¹⁴ Cfr. U.N.R.I.A.A., vol.II, pp.1308-1366.

fronteriza entre Burkina Faso y Mali la que, pese a ser la pionera en la especificación del juego dialéctico efectividades/uti possidetis, estableció el trazado fundándose específicamente en los documentos y tratados coloniales sin aludir expresamente a las efectividades coloniales que pudieran presentarle las Partes¹¹⁵.

Al igual que concluíamos al hablar del derecho intertemporal, es posible referirse a la fecha crítica como una construcción absolutamente jurisprudencial. Su razón de ser queda plenamente insertada en la labor de análisis previo a la decisión que tiene que realizar el órgano jurisdiccional, pues no es sino el punto de referencia temporal en la determinación del título de soberanía y de su prueba.

SECCION 3ª: VALORACION DE LAS EFECTIVIDADES EN LOS SUPUESTOS DE FIJACION DE 'STATU QUO'.

Existe otra forma más en la que actúa igualmente el factor tiempo sobre la valoración de la prueba de ejercicio continuo y pacífico de funciones estatales: la fijación del statu quo por vía convencional. A través de esta figura dos Estados que tienen planteada una controversia, acuerdan mantener la situación tal y como

¹¹⁵ Cfr. I.C.J.Reports, 1986, pp.554-651.

estaba en un particular momento, pendiente la sumisión de la disputa a alguna forma de solución, la cual, en algunos casos se prolonga varios años en su llegada. A esta construcción, al igual que veíamos con el uti possidetis, se la ha venido considerando como una forma de fecha crítica pre-establecida¹¹⁶, al comprometerse las Partes a no prevalerse de actos de soberanía posteriores al acuerdo, esto es, se obligan a abstenerse de tales actos que de esta forma resultan inoponibles al otro Estado.

Sin embargo, como la propia práctica nos va a demostrar, pese a la similitud no hay identidad, sino interrelación por los efectos que ambas figuras producen en la consideración de los actos de soberanía de los Estados en conflicto respecto de un territorio determinado¹¹⁷. Mientras el establecimiento de una concreta fecha de statu quo, viene determinada convencionalmente por dos Estados en conflicto antes de un contencioso, la fecha crítica aparece una vez que surge éste, fijada por el Tribunal llamado a resolver dicho contencioso para examinar éste. Incluso, no es extraño que habiendo fijado previamente un determinado statu quo, al someter posteriormente la controversia a un órgano jurisdiccional los Estados en litigio establezcan, respecto del procedimiento, la fijación de una fecha crítica ulterior,

¹¹⁶ Esta es la opinión, por ejemplo, de A.G.Roche (cfr.op.cit., p.90), y de D.Bardonnet (cfr. "Les faits... op.cit., p.57); para este último es clara la relación entre las nociones de fecha crítica, de statu quo y de territorio disputado, relación que nosotros también entendemos existe pero sin llegar a la confusión de términos.

¹¹⁷ Esa misma interrelación que afirmamos existe entre statu quo y fecha crítica, podemos extenderla de forma analógica entre aquél y el principio del uti possidetis, por las mismas razones apuntadas. No en vano ha afirmado el T.I.J. en el asunto de la controversia fronteriza entre Burkina Faso y Mali (vid. I.C.J.Reports, 1986, pp.564, pa.19 y p.565, pa.20), que "el uti possidetis consagra el statu quo fronterizo", en relación a la fecha de la independencia.

entonces habrá que ver qué hace el juez o árbitro con los status quo anteriores a la fecha crítica.

Independientemente de esta apreciación, es obvia la influencia que va a ejercer respecto de la valoración de la prueba de las efectividades la fijación temporal de las mismas a través del statu quo, de ahí que entendamos necesario un mínimo bosquejo del problema.

A) APROXIMACION CONCEPTUAL A LA FIGURA JURIDICA DEL 'STATU QUO'.

Una primera cuestión, pues, a abordar es la relativa a la conceptualización del statu quo en el marco de los conflictos de atribución territorial¹¹⁸, término éste que no siempre ha sido acogido como tal según se desprende de un análisis de la práctica convencional¹¹⁹; en efecto, los Estados han utilizado expresiones

¹¹⁸ El recurso al statu quo ha sido comúnmente mantenido en conexión con los efectos legales de la guerra, concretamente en relación a la cuestión de si debe mantenerse el statu quo ante bellum después de finalizado el estado de guerra, o si por el contrario debe permanecer el estado de posesión de los beligerantes al tiempo del cese de las hostilidades, el llamado nuevo statu quo post bellum (sobre el tema, cfr. entre otros, Fischer-Williams, J., International Change and International Peace, Nueva York, 1932; Lauterpacht, H. "Règles générales du droit de la paix. Chapter XII, L'organisation de la paix et la revision du statu quo", R.des C., 62, 1937-IV, pp.371-416; o Grewe, W.G., "Status quo", en Encyclopedia of Public International Law, Bernhardt (ed), vol.7, Amsterdam, 1984, pp.438-442).

Frente a un abundante tratamiento del problema de la fijación del statu quo bélico, es necesario constatar el nulo tratamiento del mismo en relación a los conflictos territoriales por parte de la doctrina; y ello a pesar de la importancia del tema. Tan sólo encontramos una breve referencia en A.G.Roche, op.cit., p.90; S.Bastid, op.cit., p.466; y D.Bardonnet, "Les faits... op.cit., pp.56-57. De ahí la dificultad a la que nos enfrentamos.

¹¹⁹ Sobre esta práctica, aconsejamos una lectura del estudio de D.Bardonnet, "Les faits...op.cit., pp.47 y ss.

análogas tales como 'mantenimiento en el estado de la zona disputada' y otras fórmulas del mismo tipo. Precisamente, la utilización de la locución 'zona disputada' como término de referencia en la determinación de lo que es el statu quo, pone de manifiesto la vinculación entre ambos conceptos así como la necesidad de concretizar en qué consiste cada uno de ellos.

Si se entiende la expresión ZONA O SECTOR CONTROVERTIDO en un sentido amplio, éste no es sino el territorio que es objeto de una disputa. Pero esta definición aparentemente sencilla, no está aquejada sino de una supuesta simplicidad, pues las disputas no se hallan bien definidas sino llegado un punto de madurez tal en el cual su existencia es reconocida por ambos Estados en presencia y el objeto de la misma está perfectamente determinado. Y esto sucede muy tardíamente en el tiempo, pues es tendencia general de los Estados el rehusar reconocer que ha surgido un litigio con otro -considerando que las reclamaciones que éste último efectúa sobre el territorio son fútiles-, y cuando ya se acepta la existencia de un litigio no suele haber coincidencia en la fijación de su objeto, lo cual, obviamente, retarda el proceso de solución.

Una vez que el Estado contra el cual se reclama la soberanía sobre un territorio acepta reconocer que existe realmente una controversia entre ambos, surge para éstos la obligación jurídica de resolverla pacíficamente y comienza la negociación a este fin. Una nueva cuestión se plantea: el Estado que ocupa una parte del territorio disputado deberá abstenerse de realizar actos radicalmente contrarios al objeto y fin de la negociación, tal y como pueden ser diversos actos

de soberanía sobre el territorio que generen confusión sobre la situación existente en el momento anterior al inicio de la misma¹²⁰.

Si fracasa la negociación, se encadena un procedimiento más formalista y apremiante como puede ser la vía arbitral o la judicial. En ambos supuestos, la buena fe de los Estados vincula a éstos a no emprender ninguna acción susceptible de agravar la controversia, así como a evitar cualquier ataque dirigido al propio objeto del conflicto.

Estas observaciones generales válidas para controversias de atribución territorial, encuentran una mayor acogida cuando se trata de un conflicto de delimitación, pues éste presenta importantes analogías tanto con la negociación de un tratado como con el procedimiento jurisdiccional; se trata en todo caso de la búsqueda de un acuerdo en el seno de una Comisión de delimitación y de la aplicación de toda una serie de principios para determinar la descripción más correcta de la línea fronteriza. Es normal, entonces, que en virtud del principio de la buena fe las Partes estén obligadas, mientras dure el procedimiento de delimitación, a abstenerse de cualquier acción que ponga en peligro dicho proceso, así como a respetar las acciones encaminadas a la buena consecución del mismo.

Si se toma en consideración el aspecto de las obligaciones generales de los Estados partes en una controversia de delimitación territorial, es necesario constatar una distinción importante entre dos grupos de obligaciones:

¹²⁰ Por ejemplo, ceder el territorio en conflicto a un Estado tercero, o efectuar cualquier otro acto dispositivo sobre dicho territorio.

1. Las obligaciones generales derivadas de la buena fe, que han sido ya referidas, y que afectan a todo tipo de litigios entre Estados en cuanto principios generales del procedimiento internacional: abstención de actos que perjudiquen la solución de la controversia...

2. Un segundo grupo lo constituyen las obligaciones específicas de una operación de delimitación, es decir, las que surgen una vez que las Partes han reconocido que existe entre ellas un conflicto territorial y deciden resolverlo. Nos estamos refiriendo a las obligaciones que son inherentes al proceso de delimitación territorial mismo. Podríamos aludir, en primer lugar, al mantenimiento del orden público y de una administración normal¹²¹; una segunda obligación se refiere a la responsabilidad de no efectuar actos cuyo objeto sea el de mejorar su posición jurídica en el proceso de delimitación, una vez iniciado éste. Tales actos, bien sean jurídicos o materiales, son germen de confusión y absolutamente contrarios al objeto y fin del proceso mismo¹²².

Si tales actos tendentes a mejorar la posición jurídica de las partes con

¹²¹ Una obligación de este tipo se recoge en el artículo 37 del Tratado General de Paz de 30 octubre 1980, entre Honduras y El Salvador (cfr. Asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras, Anexo a la Memoria del Gobierno de la República de Honduras, 1 junio 1988, vol.II, p.818). La razón que justifica esta obligación se centra en la idea de que la delimitación no sólo va a fijar un territorio, sino que afecta a la población que en ella habita o lo explota.

¹²² Piénsese, por ejemplo, en el caso de un Estado A que quiere mejorar su reivindicación sobre una parte del territorio en disputa que es actualmente administrada por el Estado B, y para ello realiza un acto de autoridad adoptando la decisión de conferir su nacionalidad a los habitantes de esta parte del territorio, con los derechos y deberes que ello conlleva. Tal medida, si se ha efectuado una vez que ambos Estados han tomado la iniciativa de resolver su controversia, es absolutamente contraria a las obligaciones asumidas por el Estado A, pues lejos de introducir claridad y estabilidad en el proceso produce confusión.

posterioridad al surgimiento del litigio son llevados a cabo, entrañarán responsabilidad internacional al suponer la violación de una obligación internacional. Además, su perpetración conlleva una consecuencia mucho más práctica e importante: tales actos realizados en violación de una obligación internacional son inoponibles al otro Estado, no pueden ser tomados en consideración para atribuir el territorio. Es en este sentido en el que únicamente se puede afirmar la analogía con la fecha crítica a la que anteriormente hacíamos referencia. Por tanto, el Estado que realiza actos de soberanía sobre el territorio en disputa, después del sometimiento de ésta a un mecanismo de solución, no tiene ninguna posibilidad alguna de argumentar sobre la base de dichos actos, a no ser, excepcionalmente, a efectos corroborativos de la situación legal anterior¹²³.

Este análisis conceptual de lo que es y de lo que implica hablar de 'zona disputada', así como de las obligaciones resultantes del inicio de un proceso de delimitación, conforman lo que podríamos denominar el statu quo derivado del propio derecho internacional, del derecho consuetudinario. Junto a éste existe la otra modalidad de statu quo que sería el de origen convencional, fijado por la voluntad de las Partes; su valor jurídico es el mismo, de ahí que hagamos una remisión, por analogía, a lo expuesto. Efectivamente, no sólo los Estados están obligados al congelamiento de su actuación una vez que surge la disputa, sino que

¹²³ Este es el caso de lo ocurrido en el Canal del Beagle, en el que el árbitro concedió valor a la prueba de actos de soberanía chilenos posteriores al Tratado de 1881 que debía interpretar, pero como instrumento corroborador de su interpretación y no con valor autónomo (cfr. I.L.M., vol.XVII, 1978, pp.632-679).

por vía convencional pueden adquirir igualmente esa obligación jurídica en relación a una fecha por ellos mismos determinada -que suele ser normalmente la del surgimiento de la disputa-. Esa misma práctica convencional confirma el análisis precedente relativo a los efectos de un proceso de atribución territorial, en cuanto a las obligaciones de los Estados en conflicto respecto de la zona disputada.

Al determinar de esa manera un statu quo convencional, los Estados están sosteniendo, por una lado, la obligación que adquieren de abstenerse de realizar cualquier acto que perturbe la solución de la disputa, y por otro, la imposibilidad de prevalerse de actos de soberanía posteriores a dicho acuerdo como elemento que deba ser tenido en consideración a la hora de decidir la controversia, actos que han sido cumplimentados con la intención de modificar la situación legal existente.

Pero, independientemente de que en un tratado entre dos Estados que se disputan un territorio, relativo a la solución del conflicto, se haga referencia o no a la cuestión del statu quo, creemos necesario señalar que los actos posteriores a dicho acuerdo no pueden ser tomados en consideración para solucionar la controversia¹²⁴. La razón de ser de esta obligación no es una disposición contenida en el mismo, sino la naturaleza misma de todo proceso de delimitación y adquisición territorial al que los Estados han reconocido la necesidad de recurrir y los efectos que el derecho internacional general le hace derivar.

¹²⁴ Seguimos, en este sentido, la opinión del prof. Sánchez Rodríguez expuesta en su Intervención oral de 24 abril 1991, en el asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras (cfr. C 4/CR 91/8, p.37).

La conclusión que se extrae de las observaciones efectuadas la ha expuesto muy acertadamente el prof. Sánchez Rodríguez en su intervención oral en el asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras -en la que entraba en juego la fijación convencional del statu quo como tendremos ocasión de ver más adelante-, distinguiendo las obligaciones generales derivadas del comienzo del proceso de solución de una disputa de atribución territorial, o, lo que viene a ser lo mismo, del statu quo, según el tipo de conflicto:

" - Pour les conflits territoriaux de toute nature, les obligations d'un Etat portant sur un espace terrestre dont la souveraineté lui est contestée prennent naissance quand cet Etat s'est engagé dans un processus (négociation, arbitrage, etc.) qui entraîne pour lui des obligations découlant de la nature même de ce processus. En règle générale ces obligations ne portent que sur l'interdiction d'actes nettement abusifs en contradiction avec l'objet même du processus poursuivi.

- En matière de conflits de délimitation, quand deux Etats ont établi les règles qui déterminent les frontières, s'ils ont reconnu la nécessité de recourir à une procédure de délimitation, ils ont, outre les obligations spécifiées ci-dessus, celle de s'abstenir de tout acte, juridique ou matériel, qui perturberait cette procédure ou aurait pour intention ou pour résultat de modifier à leur profit l'application des principes retenus pour la détermination de la frontière. De tels actes sont inopposables à l'autre Etat¹²⁵.

¹²⁵ Vid. ibidem, pp.37-38.

B) LAS EFECTIVIDADES Y EL 'STATU QUO' EN LOS CONFLICTOS DE ATRIBUCION TERRITORIAL.

Cuando hablamos de statu quo convencional nos estamos refiriendo al supuesto de que dos Estados, partes de una controversia, consiguen llegar a un acuerdo para mantener en el mismo estado la zona en disputa, es decir, para asegurar el statu quo territorial existente en un momento dado, hasta que la controversia sea resuelta de una forma u otra¹²⁶. Varios ejemplos de la práctica convencional, así como de la jurisprudencial, pueden ilustrarnos de tal modus vivendi, algunos de los cuales sirven a nuestro estudio al entrar en juego por una o ambas Partes el elemento de la efectividad de la posesión, que se entenderá excluida en relación a la situación posterior al mismo.

■ Remontándonos en el tiempo, encontramos en 1700 un primer acuerdo entre Francia y Portugal (4 marzo 1700), relativo al conflicto surgido entre ambas potencias coloniales por sus posesiones en América, por el que establece la fijación del modus vivendi a tal fecha. Dicho acuerdo tuvo continuación en el posterior de 1841 entre Francia y Brasil, que sucedía a Portugal en sus posesiones americanas, respecto del conflicto planteado entre dichos Estados por los territorios respectivos de la Guyana¹²⁷.

¹²⁶ Adoptamos así el punto de vista mantenido tanto por Roche (cfr. op.cit., p.90) como por Bardonnnet ("Les faits... op.cit., p.56).

¹²⁷ Esta última controversia tuvo que ser resuelta, finalmente, por el laudo arbitral del Consejo federal suizo de 1 diciembre 1900, basado en principios de equidad (cfr. R.G.D.I.P., 1901, pp.52-53).

■ Acuerdos similares fueron concluidos entre EE.UU. y Gran Bretaña, tanto en 1818 como en 1827, respecto al mantenimiento del modus vivendi en el territorio de Oregón que se disputaban, y que dieron lugar a su solución pacífica¹²⁸. Así como, entre Gran Bretaña y Portugal respecto de sus posesiones africanas el 14 de noviembre de 1890, renovado el 14 de mayo 1891¹²⁹.

■ En 1850, Gran Bretaña y Venezuela firmaron sendas Declaraciones de junio y diciembre, por las cuales se comprometían a no penetrar en el territorio en disputa entonces desocupado. Se trata claramente de Convenios que establecen el statu quo a esa fecha, 1850, en relación al territorio de la Guyana. Sin embargo, este acuerdo no fue respetado lo que originó una reclamación por parte de Venezuela, ante la toma de posesión británica del puente de Barima y el establecimiento de fortificaciones en Avracura en 1886 que suponía una clara violación de la obligación internacional establecida por el statu quo. Como consecuencia, ante las presiones venezolanas ambas partes decidieron, por el compromiso de 2 febrero 1897, el sometimiento de la controversia a la vía arbitral dando entrada, como criterio de valoración, a la efectividad de la jurisdicción en dicho territorio y desconociendo completamente la anterior situación de

¹²⁸ Cfr. ALVAREZ, A., "Des occupations de territoires contestés. A propos de la question de limites entre le Chili et la République Argentine", R.G.D.I.P., 1903, p.654.

¹²⁹ Cfr. WESTLAKE, J., "Le conflit anglo-portuguais", R.D.I.L.C., XXIV, 1890, p.172. Finalmente, ambos Estados acudieron al arbitraje para solucionar su disputa en relación a la Isla de Bulama (cfr. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.II, p.613) y a la Bahía de Delagoa (cfr. ibidem, vol.III, pp.637-638).

mantenimiento de la zona disputada¹³⁰.

■ Igualmente, Ecuador y Perú -en una disputa fronteriza ubicada bajo la órbita del principio del uti possidetis que se remonta a la primera mitad del s.XIX- convinieron por vía convencional, concretamente por el Protocolo de 6 de julio de 1936 en su artículo 3, mantener "el statu quo de sus actuales posiciones territoriales hasta el término de las negociaciones en Washington y del proceso, sin que ello implique reconocimiento por una de las partes del derecho de la otra a los territorios actualmente poseídos"¹³¹. Bajo el mantenimiento del modus vivendi, el curso de las negociaciones llegó a buen término con la conclusión del Protocolo de Río de Janeiro, 29 enero 1942¹³², que parece haber puesto la primera piedra en la construcción de la solución de su conflicto.

■ Más recientemente, en un Canje de cartas de 30 de julio de 1954, Arabia Saudí y Reino Unido fijaron el establecimiento del statu quo en relación al territorio del Oasis de Buraimi, que ambos se disputaban, mientras transcurriera el desarrollo del procedimiento. Este canje de cartas suponía la instauración de una verdadera neutralización provisional de la zona disputada, política y administrativa, y una

¹³⁰ Cfr. R.G.D.I.P., 1901, pp.71-80 y especialmente p.74.

¹³¹ Vid. S.D.N. Recueil des Traités, vol.CLXXIII, nº4026, pp.361-362.

¹³² Frente a una aceptación total por parte del Perú, Ecuador no está conforme con la viabilidad de este Protocolo que le hace ceder parte del territorio bajo su actual posesión. Para un estudio en profundidad de este conflicto, y en concreto de los precedentes del Protocolo, recomendamos la lectura, entre otros, de la obra de G.Maier, "The boundary dispute between Ecuador and Peru", A.J.I.L., 1969, pp.28-46; y la posterior de R.B.St.John, "The boundary dispute between Peru and Ecuador", A.J.I.L., 1977, pp.322-330.

auténtica explicitación del contenido jurídico de la figura del statu quo. Efectivamente, la cláusula II del mismo establecía la abstención de las partes de ejercer funciones de Estado sobre dicho territorio, así como la retirada de sus fuerzas armadas y sus agentes; por su parte, la cláusula IV determinaba la prohibición de introducir nuevas fuerzas o agentes en la zona, y la obligación de abstenerse de toda acción que pudiera perjudicar la celebración de un arbitraje justo e imparcial¹³³. Sin embargo, el modus vivendi fijado convencionalmente quedó totalmente violado cuando el 26 de octubre 1955 el territorio disputado fue objeto de ocupación por parte del Reino Unido¹³⁴; esta re-ocupación británica, en un momento en que la controversia fronteriza planteada ante el tribunal ad hoc de Ginebra no había sido aún objeto de decisión, ha supuesto la entrada en punto muerto de la misma.

En todos estos casos referidos que nos ofrece la práctica convencional, únicamente en la disputa entre Gran Bretaña y EE.UU., respecto del territorio de Oregón y en la controversia fronteriza entre Perú y Ecuador parece haber tenido éxito la negociación celebrada bajo el mantenimiento del modus vivendi con la conclusión del acuerdo correspondiente en el que se fijan las respectivas fronteras (si bien la solución alcanzada entre Ecuador y Perú ha sido objeto, recientemente, de discrepancias y disconformidades). En el resto, las negociaciones no han llegado

¹³³ Cfr. GOY, R., "L'affaire de l'oasis de Buraimi", A.F.D.I., 1957, pp.193-194.

¹³⁴ Cfr. sobre este incidente concreto, ROYAL INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS, Survey of International Affairs, 1955-1956, Londres, 1960, pp.81-82.

a buen término viéndose las Partes obligadas a acudir a un mecanismo de arreglo jurisdiccional. Creemos necesario constatar, además, que en ninguno de los arbitrajes que han puesto fin a las controversias mencionadas se ha hecho alusión alguna a la previa fijación convencional del statu quo; en efecto, ni en el momento de presentación de la prueba de actos de soberanía por las propias Partes, ni en el proceso de valoración de la misma por el árbitro o tribunal arbitral, se ha tenido en consideración la vinculación y limitación que les suponía en dicha tarea la existencia de un previo statu quo -en cuanto los actos estatales llevados a cabo en dicho período ni pueden ser alegados ni pueden ser objeto de consideración-. En los asuntos de la isla de Bulama, de la Bahía de Delagoa, de la delimitación fronteriza de la Guyana británica y de la Guyana entre Francia y Brasil¹³⁵, se ha ignorado, a efectos de presentación y valoración de la prueba, la vinculación procedente de un previo statu quo convencional.

Es posible, sin embargo, citar otros ejemplos en los que, pese a la fijación de un statu quo convencional, las partes no han conseguido arreglar por ellas mismas su controversia acudiendo a un órgano jurisdiccional, frente al cual sí se ha invocado por una de las Partes la existencia de ese previo modus vivendi, en el sentido de excluir como prueba ciertos actos de soberanía llevados a cabo en dicho período por la otra; circunstancia que ha motivado la consideración, de alguna

¹³⁵ Cfr. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.II, p.613, y vol.III, pp.637-638; R.G.D.I.P., 1901, pp.52-53 y pp.71-80, respectivamente para cada uno de los casos mencionados.

forma, de esta figura por el correspondiente órgano jurisdiccional. En este sentido, la práctica judicial es mucho más explícita y reflexiva que la arbitral.

■ Según indica la Memoria del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile¹³⁶, los actos de ocupación militar realizados por Argentina sobre la zona del lago Lacar en 1883 alteran la situación creada por el Tratado de límites de 1881. Efectivamente, a través del artículo 6 de dicho tratado ambos Estados estaban de acuerdo en mantener el statu quo, permaneciendo cada Estado en la jurisdicción del territorio que poseyera hasta entonces con abstención de efectuar ningún acto de soberanía que sobrepasara tales límites, en espera de la fijación definitiva de la frontera¹³⁷. En atención a dicho precepto convencional, los actos de soberanía argentinos que suponen la instauración de fuerzas armadas en la zona en 1883 y, posterior y definitivamente, en 1898 debían haber sido considerados -y seguimos en este sentido la tesis sustentada por el Gobierno chileno¹³⁸- como nulos y sin efecto al llevarse a cabo en clara vulneración de la obligación internacional contenida en el Tratado de 1881, en relación a la fijación del statu quo del territorio en disputa a dicha fecha.

¹³⁶ Vid. Memoria ..., 1888, p.30.

¹³⁷ Concretamente establece el artículo 6 del tratado de 1881: "The Governments of the Argentine Republic and of Chili shall exercise full dominion for perpetuity over the territories which respectively belong to them according to the present arrangement. Any question which might unfortunately arise between the two countries, whether it be on account of this transaction, or owing to any other cause, shall be submitted to the decision of a friendly power, the boundary established in the present arrangement to remain at all events immovable between the two republics"(el subrayado es nuestro), (vid. U.N.R.I.A.A., vol.IX, p.46).

¹³⁸ Cfr. Memoria del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, 1898, pp.36-38.



No obstante, presentes estos presupuestos básicos, el árbitro que conoció de dicha controversia (sobre la base del compromiso arbitral de 17 abril 1896) otorgó el territorio del valle del lago Lacar a Argentina en consideración, precisamente, a la prueba de posesión efectiva presentada, posterior a 1881¹³⁹; actuando, de esta manera, en clara vulneración y desconocimiento de los principios esenciales del ordenamiento internacional, centrados en este sentido -como hemos indicado en las líneas precedentes- en el rechazo a los actos posteriores al surgimiento del litigio, idea que se refuerza, además, por lo establecido convencionalmente por las propias Partes. Entendemos, pues que este laudo de 1902 resulta plenamente criticable, entre otras cosas y siguiendo la línea de razonamiento de Alvarez¹⁴⁰, por el grave defecto, el más importante, de estar basado en pruebas de soberanía por su propia naturaleza rechazables.

El contenido ambigüo de esta sentencia arbitral de 1902 ha sido fruto de posteriores diferencias entre Argentina y Chile en cuanto a su correcta interpretación, diferencias que han llevado a estos Estados a acudir nuevamente al arbitraje, teniendo presente el statu quo fronterizo marcado por el laudo de 1902. Nos atreveríamos a catalogarlo como una fijación 'jurisprudencial' de statu quo, que responde claramente a los principios internacionales que rigen la delimitación del territorio en zonas disputadas, y que avanzabamos en el apartado anterior. En este sentido, los laudos de 1966, 1977 (con posterior mediación) y

¹³⁹ Cfr. U.N.R.I.A.A., vol.IX, p.37.

¹⁴⁰ Cfr. ALVAREZ, "Des occupations de territoires contestés. A propós de la question de limites entre le Chili et la République Argentine", R.G.D.I.P., 1903, pp.682-687.

1994¹⁴¹ -que parecen haber puesto finalmente término a esta disputa centenaria- han interpretado los distintos sectores de la frontera atendiendo al modus vivendi marcado por las Partes en atención al contenido de la sentencia de 1902. Precisamente, el juez Galindo Pohl, en su opinión disidente en la última sentencia de 21 octubre 1994 (que resuelve el tramo fronterizo correspondiente al sector del trazado llamado de la Laguna del Desierto), analiza cómo en esta zona el statu quo se ha visto inafectado durante años¹⁴².

■ Podríamos igualmente referirnos, como supuesto de fijación de statu quo 'jurisprudencial', y además respetado, al laudo Loubet de 1891, que resolvió la controversia fronteriza entre Costa Rica y Colombia, respecto de la frontera entre Costa Rica y Panamá, en cuanto fija el modus vivendi de las Partes hasta que se establezca definitivamente su frontera. Esta parece ser también la opinión de Cukwurah¹⁴³, para quien esta idea viene avalada por la propia jurisprudencia interna panameña¹⁴⁴, y por el hecho de que tales Estados se mantuvieran inamovibles en la posesión de los territorios otorgados en 1891 hasta la resolución final de su controversia, tal y como se recoge en la sentencia de 12 septiembre de

¹⁴¹ Cfr. respectivamente, U.N.R.I.A.A., vol.XVI, pp.109-182; I.L.M., vol.XVII, 1978, pp.632-679; y Original mecanografiado.

¹⁴² Cfr. Original mecanografiado, pp.178-179.

¹⁴³ Cfr. The settlement of boundary disputes, Manchester, 1967, p.33.

¹⁴⁴ En este sentido recoge una cita de una sentencia de 1936 del Tribunal Supremo de Panamá que afirma, en relación al laudo de 1891, que "the status quo was maintained meanwhile and jurisdiction was exercised in accordance with it" (vid.supra).

1914¹⁴⁵.

■ En el asunto de Minquiers y Ecrehous, resulta destacable el dato de que Francia alegara la existencia de un statu quo fronterizo convencional resultante de la correcta interpretación del Convenio de pesquerías de 2 agosto 1839. Según la interpretación francesa, "une modification du statut actuel ne pourrait dès lors résulter que d'un nouvel accord des parties"¹⁴⁶. Atendiendo al modus vivendi que establece según Francia dicho convenio, los territorios disputados no pueden ser susceptibles de apropiación privativa por uno u otro Estado, por lo que quedaría excluida toda la prueba de soberanía presentada por Reino Unido a través de actos posteriores a dicha fecha.

Sin embargo, esta no parece ser la opinión del T.I.J. para quien la interpretación francesa del Convenio de 1839, en el sentido de descartar los actos de soberanía posteriores a 1839 y determinar la situación legal existente a esa fecha, "nor can be considered as consistent with the Special Agreement of 1950, by which the Court is requested to determine to which Party sovereignty belongs at present"¹⁴⁷, por lo que queda totalmente rechazada.

■ De modo similar se manifiesta Países Bajos en su controversia con Bélgica sobre ciertas parcelas fronterizas, al hacer valer como argumento el

¹⁴⁵ Cfr. U.N.R.I.A.A., vol.XI, pp.533-534.

¹⁴⁶ Vid. Contra memoria del gobierno francés, 26 junio 1952, Pleadings, vol.I, p.371.

¹⁴⁷ Vid. I.C.J.Reports, 1953, p.59.

establecimiento del statu quo a través del Convenio de límites de 1843, cuyo artículo 1º reenvía a la situación de marcada por el artículo 14 del Tratado de 5 noviembre 1842. Concretamente, establece este artículo 14:

"The duty of the Mixed Boundary Commission was to determine and fix the limits of the possessions of the two States. So far as the two communes were concerned, the essence of its was to determine the status quo"¹⁴⁸,

lo que, en opinión de Países Bajos, obliga a remitirse únicamente a todos los actos de soberanía anteriores a la fecha de 1842¹⁴⁹.

Al analizar esta alegación holandesa, el T.I.J. observa cómo este precepto lo único que hace es reconocer la existencia del statu quo, fijado por el tratado de 1842, pero sin llegar a determinar en el mismo la soberanía sobre las parcelas disputadas. En consecuencia, señala el Tribunal que la Comisión mixta de delimitación no estaba obligada al reenvío a dicho statu quo, sino que su misión era la de proceder a la determinación de la frontera de la manera que creyera más oportuna¹⁵⁰. Por ello, al no entender fijado convencionalmente el statu quo en toda su eficacia, el Tribunal considera al Convenio fronterizo de 8 agosto 1843 como un perfecto título jurídico en favor de Bélgica, y valora todos los actos de soberanía presentados por ésta aunque fueran posteriores a 1842.

¹⁴⁸ Vid. I.C.J.Reports, 1959, p.222.

¹⁴⁹ Cfr. Contra-memoria de Países Bajos, 30 junio 1958, I.C.J.Pleadings, pp.67-69.

¹⁵⁰ Cfr. I.C.J.Reports, 1959, pp.217 y 220-222.

■ Pero, sin duda, el supuesto más paradigmático de entrada en juego de un statu quo convencional en la esfera judicial, es el de la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras. Estos dos Estados concluyeron el 28 septiembre 1886 un Convenio de límites, conocido como el Convenio Zelaya-Castellanos, que establecía en su artículo 5 que "...les autorités et les villages frontaliers garderont et respecteront la ligne de démarcation qui était valable en 1884 et qui fut ratifiée par le statu quo convenu entre les Gouvernements des deux Républiques"¹⁵¹ (Convenio Cruz-Letona).

Como válidamente señala la representación de Honduras¹⁵², los actos de soberanía realizados entre 1884 y 1886 y con posterioridad a esta fecha no pueden servir de fundamento al Estado, en este caso a El Salvador que es quien los invoca, porque son actos contrarios a un statu quo convencionalmente establecido y son, igualmente, incompatibles con las obligaciones que surgen de todo proceso de delimitación según el derecho internacional.

No obstante la veracidad de esta afirmación, en este caso se plantea una dificultad sobrevenida. Tras los convenios de delimitación aludidos, ambos Estados no logran llegar a una solución de su controversia por lo que se suceden otros tratados con idéntica finalidad -Bonilla-Velasco de 1895, Barahona-Gallegos de 1906, Laínez-Peccorini de 1918-, en ninguno de los cuales aparece ya recogida la fijación de statu quo. Habrá que esperar al Tratado General de Paz, 30 octubre

¹⁵¹ Vid. Memoria del Gobierno de la República de Honduras, 1 junio 1988, p.513.

¹⁵² El prof. Sánchez Rodríguez efectuó en su intervención oral de 24 abril 1991, una exhaustiva y brillante exposición de la problemática del statu quo que afectaba a este contencioso, y cuyos resultados conducirían a rechazar gran parte de la prueba de soberanía presentada por El Salvador (cfr. C 4/CR 91/8, pp.37-47).

1980, para encontrar en su artículo 37 una nueva referencia explícita a la fijación del statu quo con fecha de 14 julio 1969¹⁵³, lo que supone la clara exclusión de los actos posteriores a dicha fecha con la intención de perturbar o modificar el estado de cosas existente. Pero este último tratado no se refiere a la situación anterior a 1969 lo que hace plantearse la cuestión de si tales circunstancias deben interpretarse como desaparición de la obligación de mantenimiento del modus vivendi de 1884. Mientras El Salvador guardó absoluto silencio sobre el tema, Honduras¹⁵⁴ sostuvo que los actos posteriores a dicha fecha son inoponibles a la otra Parte en cuanto no ha desaparecido en ningún momento por los convenios posteriores la obligación internacional asumida por el Tratado de 1886, al no existir incompatibilidad entre ellos (en aplicación de los artículos 30.3 y 59.1 de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados).

Frente a esta alegación hondureña, que creemos correcta y plenamente

¹⁵³ Dice literalmente este artículo:

"En attendant que la totalité de la frontière soit délimitée conformément aux dispositions du présent traité, les deux Etats s'engagent à ne provoquer aucun fait, acte ou situation nouvelle risquant de perturber ou modifier l'état des choses existant dans les zones avant le 14 juillet 1969 et s'oblignent à rétablir cet état de choses dans la mesure où il aurait été modifié, ainsi qu'à adopter d'un commun accord des mesures adéquates pour qu'il soit respecté, cela en vue de maintenir à tout moment la tranquillité dans les dites zones. Les accords d'ordre politique ou militaire conclus à partir de 1969 et qui ont abouti à des situations transitoires à la frontière ne préjudicient pas au droit éventuel d'aucun des deux Etats sur les zones en litige ni les diminuent" (vid. *ibidem*, p.44).

Para un estudio de los antecedentes históricos de esta controversia recomendamos la obra de G.MARTINEZ BLANCO Enfoque histórico y jurídico de la controversia limítrofe entre Honduras y El Salvador, Tegucigalpa, 1991; especialmente pp.17-153.

¹⁵⁴ Cfr. *ibidem*, pp.41-46. Entiende, además, el prof. Sánchez Rodríguez que la idea de mantenimiento del statu quo de 1884 está en clara coordinación con el uti possidetis de 1821 al que se han sometido las Partes, al establecer el mismo resultado: inoponibilidad a la otra Parte de todo acto de posesión efectiva posterior (cfr. *ibidem*, p.47).

ajustada a derecho, el T.I.J. parece eludir la cuestión del statu quo. Este se limita a fijar como fecha crítica la del Tratado General de Paz de 1980¹⁵⁵, excluyendo así los actos posteriores a esa fecha que tiendan a modificar la situación legal existente, pero valorando plenamente las efectividades presentadas por ambas Partes con anterioridad a 1980 -tanto en relación a los distintos sectores de la frontera terrestre como a la controversia insular-. Efectivamente, en ese proceso de examen y valoración de la prueba de soberanía el Tribunal no ha distinguido en ningún momento la existencia de períodos de statu quo, a efectos de excluir la prueba de actos estatales verificados en los mismos, sino que se ha limitado a contrastar todo el volumen probatorio con la misma intensidad cualquiera que fuere su fecha de realización¹⁵⁶, lo que a nuestro juicio supone una clara transgresión de la obligación convencional que impone el statu quo.

■ Por último, cabría referirse a una controversia pendiente de decisión por parte del T.I.J. en la que las Partes han insistido sobre la idea del statu quo. Se trata del asunto de la delimitación marítima y cuestiones territoriales entre Qatar y Bahrein. Efectivamente, tanto en los Principios establecidos en la reunión tripartita, celebrada con el Rey de Arabia Saudí, de marzo de 1983 (principios 2º y 3º), como en el Cambio de cartas de 21 y 26 diciembre 1987 (punto 2º) resultante de una nueva mediación del Rey de Arabia Saudí, ante el fracaso de la

¹⁵⁵ Cfr. I.C.J.Reports, 1992, p.401, pa.67.

¹⁵⁶ En el capítulo V de este trabajo se ha abordado esa tarea de presentación de prueba de efectividades y de valoración de la misma por el órgano judicial, por lo que remitimos al análisis entonces efectuado en relación a este asunto (cfr. supra, pp.300-330).

anterior, estos dos Estados se refieren al mantenimiento del statu quo existente en ese momento hasta la solución definitiva de su controversia¹⁵⁷. Habrá que esperar la sentencia definitiva que resuelva la disputa para determinar, tanto la aceptación de este principio por las propias Partes a la hora de presentar la prueba relativa a sus actos de soberanía sobre el territorio disputado, como el seguimiento que hace el Tribunal del mismo al abordar su tarea de valoración de la prueba.

Tal y como el precedente análisis convencional y jurisprudencial nos demuestra, el significado temporal de la fijación de un concreto statu quo se traduce en la voluntaria limitación de los Estados en su despliegue de actividad estatal, así como en la valoración de la misma.

Si una idea parece extraerse claramente de la exposición efectuada, es la de que, pese a la libertad de apreciación del volumen de prueba de que disfruta el órgano jurisdiccional a priori, ésta puede verse afectada por una limitación temporal que le viene impuesta, en gran medida, por las propias Partes a través de las figuras de la fecha crítica, el uti possidetis o el statu quo, aunque en esta última los resultados que nos proporciona la práctica no son los más deseables para un orden internacional respetuoso del derecho, como acabamos de constatar. Tal restricción se traduce en la imposibilidad jurídica de atender a la prueba de

¹⁵⁷ Cfr. La sentencia del T.I.J. de 1 julio 1994 sobre jurisdicción y admisibilidad, I.C.J.Reports, 1994, pp.116-117.

soberanía posterior a la fecha marcada; vinculación que atañe, igualmente, a las Partes en el sentido de no prevalerse de actos de ejercicio de soberanía sobre el territorio en controversia realizados después de esa fecha, con el objeto de modificar las consecuencias derivadas de los principios jurídicos aplicables. A esta limitación se añade otra más que condiciona la anterior, la propia del derecho internacional a través del principio del derecho intertemporal, que obliga al árbitro o juez a llevar a cabo ese proceso de valoración de la prueba de acuerdo con las exigencias de efectividad del derecho de cada época.

No es de extrañar, pues, la vinculación existente entre todas estas reglas tal y como la experiencia judicial nos enseña.

CONCLUSIONES

I. Como afirmación de principio entendemos que la expresión "adquisición del territorio", utilizada tradicionalmente por la doctrina internacional, está hoy totalmente superada. Desde esta óptica mantenemos una posición de reticencia respecto de tal formulación que nos parece impropia, ambigua y cargada de imprecisiones, pues lo que un Estado adquiere no es realmente el territorio en sí, sino la exclusividad en el ejercicio de su soberanía sobre el mismo. Por ello, nos situamos en la línea que sustituye dicha fórmula por la de "adquisición del título territorial" que resulta mucho más depurada y más acorde con la realidad que pretende describir. Idéntico razonamiento nos lleva a encuadrar bajo la expresión genérica de "adquisición -y por ende de atribución- del título territorial" a los conflictos de "delimitación", pues al delimitar un territorio lo que se está haciendo, realmente, es atribuir la soberanía del mismo a uno u otro Estado; eso fue lo que hizo el T.I.J. en el asunto de la soberanía sobre ciertas parcelas fronterizas, en el del Templo de Preah Vihear o en el más reciente de la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras, siguiendo, en ese sentido, una línea de actuación que tiempo atrás se había iniciado en el plano arbitral con asuntos como los del Alpe de Cravairola, la delimitación fronteriza de la Guyana británica, Walvis Bay, Grisbadârna, o el Rann de Kutch.

De igual forma, del análisis de la práctica jurisdiccional que hemos efectuado

en nuestro trabajo y más concretamente de las memorias, contramemorias y exposiciones orales que acompañan a tales asuntos, se desprende que los Estados que han sido Parte en cada uno de los conflictos examinados hablan de y presentan en consecuencia, hipotéticos títulos -de hecho o de derecho- sobre el territorio en disputa reconduciéndose tal conflicto a una controversia sobre el mejor de los títulos territoriales que determina la soberanía sobre dicho territorio. Esta realidad nos lleva a concluir la oportunidad de la utilización de la locución "adquisición del título de soberanía territorial" cuando se haga referencia a conflictos que versen sobre la determinación de la soberanía sobre un territorio, ya sea bajo el enunciado de adquisición del territorio, ya lo sea bajo el de delimitación de éste, aunque mantengamos la conveniencia de la distinción a efectos puramente didácticos.

II. Del análisis efectuado en relación a las controversias que llamamos estrictamente de adquisición territorial, se desprende la clara evolución que ha sufrido el derecho internacional en esta materia, fundamentalmente en lo relativo a los distintos modos de adquisición del territorio, y que nos lleva a concluir que actualmente el ejercicio continuo y pacífico de funciones de Estado es el único modo válido de adquisición del título de soberanía territorial. Dicha evolución arranca de un incipiente derecho territorial que hace del descubrimiento y la toma de posesión ficticia un modo adquisitivo válido, como hemos comprobado en los asuntos de la isla de Aves, o en la mediación del Papa León XIII en el caso de Carolinas y Palaos; pasa por una incipiente intensificación del requisito de la efectividad en la posesión en casos como los de la isla Bulama y la bahía de

Delagoa, hasta llegar, con la isla de Palmas, al encumbramiento de las efectividades como monopolístico modo adquisitivo -superior a títulos jurídicos como la cesión in abstracto, esto es, sin acompañamiento de posesión efectiva-, y transformando en obsoleto el derecho territorial hasta entonces vigente.

En este sentido, el laudo de la isla de Palmas, el menos ambicioso pero incluso más autoritario juicio del T.P.J.I. en el caso de Groenlandia Oriental, y el unánime y decisivo juicio del T.I.J. en el asunto de Minquiers y Ecrehous, son la mejor muestra de esta posición que sostenemos y la base más firme del derecho relativo al título territorial, pudiendo llegar a afirmarse que han contribuido grandemente a dar claridad a este derecho.

III. Sucede, en cambio, que en los conflictos de delimitación territorial tal afirmación no es sostenible en idénticos términos, esto es, que las efectividades no ostentan el monopolio como única vía de adquisición del título territorial. Son los títulos jurídicos, ya sea bajo la forma de tratados de fronteras, ya lo sea bajo la de uti possidetis iuris, los que ocupan el primer puesto en el orden de consideración de los órganos jurisdiccionales llamados a decidir tal tipo de controversias.

Al llevar a cabo el análisis de los distintos asuntos que componían el objeto de nuestro trabajo, hemos constatado que mientras en los conflictos de adquisición las alegaciones de los Estados se basan casi exclusivamente en argumentos de posesión efectiva, ocupando los títulos jurídicos un valor secundario, en las

controversias de delimitación el orden se invierte, pasando las efectividades a ostentar un puesto subsidiario. En casi todos los casos examinados bajo el enunciado de conflictos de delimitación, los correspondientes órganos jurisdiccionales llamados a resolver la controversia han atendido prioritariamente a las alegaciones basadas en un título jurídico, acudiendo a las efectividades únicamente cuando éste era imperfecto o inexistente, o bien para ratificarlo. Así ha sucedido tanto el plano judicial, en asuntos como los de la soberanía sobre ciertas parcelas fronterizas, el Templo de Preah Vihear o la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras, como en el arbitral, a través de laudos tan significativos como el de la controversia fronteriza entre Guatemala y Honduras o el de la Laguna del Desierto. Si bien en aquellos casos en que no hay título jurídico alguno -que son los menos-, ambas Partes centran su reclamación en el ejercicio continuo y pacífico de funciones estatales y el órgano jurisdiccional basa su decisión en la mejor prueba de soberanía presentada, como ocurrió en el asunto del Alpe de Cravairola, en la cuestión Moerauge o en el Rann de Kutch.

Esto nos lleva a concluir que el ejercicio continuo y pacífico de funciones de Estado atribuye el título territorial en los conflictos de delimitación, únicamente en defecto o en ausencia de título jurídico, siendo entonces superior a cualquier otro tipo de alegación.

IV. En conexión con la afirmación anterior, sostenemos que tal circunstancia

se da prioritariamente en los conflictos decididos en aplicación del principio del uti possidetis iuris; pues, mientras en los basados en un tratado fronterizo o en mapas que figuran anejo a este tipo de tratados, estos instrumentos jurídicos son de ordinario lo suficientemente precisos como para otorgar el título territorial (como demuestra el caso de la controversia territorial entre Libia y Chad), el título legal que es el uti possidetis iuris suele resultar deficiente como elemento decisor. Esta circunstancia que afirmamos ha llevado a que, de los once casos examinados por darse la confluencia de alegaciones basadas tanto en uti possidetis iuris como en posesión efectiva, tan sólo dos de ellos se basan exclusivamente y para todo el trazado de la frontera en el título jurídico con exclusión de cualquier referencia a la efectividades; en uno se excluyen tanto los argumentos de posesión efectiva como de uti possidetis decidiéndose en "equidad"; resultando que en los nueve restantes la decisión ha necesitado del apoyo del ejercicio continuo y pacífico de funciones estatales, llegando éstas a ser el único elemento decisor -en algunos casos- en ciertos sectores o tramos del trazado de la frontera.

V. Cuando la posesión efectiva o el título jurídico no resultan por sí mismos suficientemente claros o acreditativos de la soberanía de un Estado sobre el territorio disputado, el juez o árbitro recurren a un tercer elemento que va a inclinar la balanza en favor de una u otra de las Partes, el de su conducta.

Sostenemos, pues, que junto a los títulos jurídicos y las situaciones de hecho, existe un tercer factor que debe ser considerado para determinar la atribución del título territorial: la conducta que los Estados en disputa hayan

mantenido respecto del territorio controvertido. Este tercer elemento juega, no sólo en caso de incertidumbre respecto de los dos primeros para favorecer a uno de ellos, esto es, en un papel confirmatorio -tal y como sucedió en el caso del Templo de Preah Vihear o en el último sector del trazado fronterizo entre Honduras y El Salvador-, sino que puede llegar incluso a desplazar el principio decisor (el statu quo colonial) si el órgano jurisdiccional entiende que el comportamiento de una de las Partes lo deroga, en favor de la otra Parte -como entendió el T.I.J. que ocurría con la conducta de Honduras en el primer sector de su frontera con El Salvador-.

Cualquier otra consideración, como son las relativas a criterios naturales y geográficos o material cartográfico, carecen de valor decisorio autónomo y sólo deben ser retenidas por el órgano decisor -y, por tanto, presentadas por los Estados- si apoyan una pretensión superior basada, bien en posesión efectiva, bien en un título jurídico.

VI. El principio procesal de "reparto de la carga de la prueba", excepción al principio de que la carga de la prueba recae sobre el Estado demandante, es el principio aplicable a los conflictos relativos a la adquisición del título territorial.

La propia naturaleza de este tipo de controversias, en las ambas Partes alegan hechos que tienen la obligación de probar y en las que la función del órgano jurisdiccional se reconduce a determinar cuál de los dos títulos es el más fuerte para atribuir la soberanía del territorio, implica dicho principio. Por ello, en todos los casos examinados hemos comprobado como ambas Partes se esfuerzan por

fundamentar sus alegaciones con un variado y profuso elenco de pruebas tendentes a demostrar que su pretensión es la mejor y la más fundada.

VII. Los actos de soberanía realizados por un Estado son constitutivos de un título territorial y prueba del mismo. En este sentido, como prueba del ejercicio continuo y pacífico de funciones de Estado, se puede recurrir a cualquier actividad desplegada por un órgano estatal. Entendemos que no sólo las clásicas funciones legislativas, judiciales y ejecutivas desarrolladas por órganos de la Administración central sirven de prueba, sino que igualmente son "actos de Estado" los realizados por las entidades territoriales sean del carácter que sean (locales, provinciales...), sin que se advierta ninguna jerarquía entre ellos. Lo que importa es el **carácter indiscutible o prioritario de la prueba**.

Refiriéndonos a los actos desplegados por cualquiera de estos órganos, encontramos que en los treinta y cuatro asuntos examinados* no hay ninguna actividad que se repita en todos ellos como prueba del ejercicio de funciones estatales, siendo el despliegue de fuerzas armadas y de policía la prueba a la que más frecuentemente recurren los Estados (y la que ha sido mayormente aceptada como prueba de soberanía por los órganos jurisdiccionales) localizándose en veintitrés casos, mientras en veintiuno se ha recurrido a actos administrativos, tanto de Administración central como local. En menor medida se ha acudido al establecimiento de un sistema impositivo (nueve), al otorgamiento de concesiones y monopolios (diez), a la actividad judicial (siendo más frecuentes las referencias a la jurisdicción penal que a la civil, presentadas en siete y cinco asuntos,

respectivamente), a los actos de disposición sobre bienes inmuebles (ocho) y a la construcción de obras públicas (ocho). Siendo los actos de registro, los de celebración de elecciones y los de desarrollo de planes educativos, los presentados en menor medida (se citan en tres casos) como prueba del ejercicio continuo y pacífico de funciones de Estado.

VIII. Incluimos como funciones estatales las realizadas por las Compañías de Comercio y Colonización cuando están acreditadas por un Estado*. La imputación de dicha actividad al Estado hace responsable a éste de los mismos, con las consecuencias jurídicas que de ellos se deriven (en este caso las de soberanía). En los tres asuntos en que se ha invocado dicha actividad como prueba de ejercicio de soberanía ha sido positivamente valorada, otorgando en los tres el título territorial al Estado que la presentaba.

IX. La actividad desplegada por agentes de la Iglesia sobre un territorio, no constituye, en sí misma, auténticos actos de Estado, pero puede resultar asimilable a los mismos y como tal presentarse y constituir prueba de una posesión efectiva*. Consideramos que en aquellos casos en que las misiones eclesiásticas son enviadas por el propio Estado (situación muy frecuente en la época colonial, sobre todo entre Estados confesionales), bien con el fin de evangelizar acompañando a misiones civiles estatales, bien aisladamente ante la ausencia de recursos del propio Estado, los actos que éstas realicen sobre el territorio pueden ser utilizados como si de actos estatales se tratara y, por tanto, como prueba de su soberanía sobre el

territorio en que se sitúan. Con tal significado y motivo fueron presentados distintos actos realizados por agentes de la iglesia como prueba de actividad estatal en tres asuntos, y todos ellos fueron positivamente valorados.

Desde un punto de vista análogo, la actividad eclesiástica puede ser utilizada igualmente como prueba de un título jurídico, concretamente del uti possidetis iuris, en cuanto los límites administrativos resultan coincidentes con las antiguas circunscripciones eclesiásticas. Así fueron considerados en el laudo del Rey de España, donde encontramos una alegación expresa en ese sentido por parte de Honduras.

X. Los actos que realizan los particulares en el plano internacional sólo son imputables a un Estado cuando actúen en su nombre y por cuenta de él. De esta forma, sostenemos que la actividad privada que se desarrolla en un territorio en disputa sólo es atribuible a un Estado y, en consecuencia, considerada como prueba de ejercicio de funciones estatales cuando tales personas privadas estén actuando como representantes del Estado; en caso contrario, esos actos son tan sólo prueba secundaria de soberanía que sólo tendrá valor acompañando a otros actos realizados por agentes estatales. De los treinta y cuatro asuntos en que se han presentado prueba de efectividades, sólo en once se ha acudido a la actividad privada*: ha sido positivamente retenida en seis para corroborar un profuso despliegue de actividad estatal, rechazada plenamente en cuatro y tan sólo en un caso ha adquirido valor autónomo como título territorial, en el asunto de Grisbådarna, pero porque la parte contraria carecía de prueba alguna de posesión.

* ESQUEMA ORIENTATIVO

TIPO DE ACTIVIDAD ALEGADA	ASUNTOS EN QUE HA SIDO ADMITIDA	ASUNTOS EN QUE NO HA SIDO ADMITIDA
Jurisdicción penal	<u>Walvis Bay, Guatemala/Honduras, Minquiers y Ecrehous, D° de paso por territorio indio, Rann de Kutch, Controversia fronteriza terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras.</u>	<u>Nulidad del laudo del Rey de España, Controversia fronteriza terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras.</u>
Jurisdicción civil	<u>Alpe de Cravairola, Guatemala/Honduras, Minquiers y Ecrehous, Controversia fronteriza terrestre, insular...</u>	<u>Nulidad del laudo del Rey de España.</u>
Administración central y local	<u>Isla de Bulama, Bahía de Delagoa, Alpe de Cravairola, Cordillera de los Andes, Guyana británica, Reino de Barotse, Laudo del Rey de España, Isla de Palmas, Groenlandia Oriental, Guatemala/Honduras, Minquiers y Ecrehous, D° de paso, Templo de Preah Vihear, Rann de Kutch, Canal de Beagle, Controversia fronteriza terrestre, insular...</u>	<u>Frontera del Este, Cuestión Moeraque, Isla de Palmas, Minquiers y Ecrehous, Nulidad del laudo del Rey de España, Templo de Preah Vihear, Sahara Occidental, Controversia fronteriza terrestre, insular..., Laguna del Desierto.</u>
Legislación	<u>Alpe de Cravairola, Laudo del Rey de España, Groenlandia Oriental, Guatemala/Honduras, Minquiers y Ecrehous, Controversia fronteriza terrestre, insular...</u>	<u>Soberanía sobre ciertas parcelas fronterizas.</u>

Actividad policial y de defensa armada	<u>Frontera del Este, Isla de Aves, Isla de Bulama, Bahía de Delagoa, Alpe de Cravairola, Maroni, Cordillera de los Andes, Guyana británica, Laudo del Rey de España, Isla de Palmas, Isla de Clipperton, Groenlandia Oriental, Minguiers y Ecrehous, D° de paso, Rann de Kutch, Dubai y Shariah, Controversia fronteriza terrestre, insular...</u>	<u>Guyana británica, Isla de Palmas, Guatemala/Honduras, Nulidad del laudo del Rey de España, Templo de Preah Vihear, Sahara Occidental, Dubai/Shariah, Taba, Controversia fronteriza terrestre, insular..., Libia/Chad.</u>
Fiscalidad	<u>Isla de Palmas, D° de paso, Controversia fronteriza terrestre, insular...</u>	<u>Isla de Palmas, Soberanía sobre ciertas parcelas, Nulidad del Laudo del Rey de España, Templo de Preah Vihear, Rann de Kutch, Sahara occidental, Libia/Chad.</u>
Actos de registro	<u>Alpe de Cravairola, D° de paso, Controversia fronteriza terrestre, insular...</u>	<u>Alpe de Cravairola.</u>
Educación	<u>Groenlandia Oriental, Guatemala/Honduras, Controversia fronteriza terrestre, insular...</u>	<u>Controversia fronteriza terrestre.</u>
Relaciones diplomáticas	<u>Isla de Bulama, Bahía de Delagoa, Maroni, Guyana británica, Guatemala/Honduras, Groenlandia Oriental, Minguiers y Ecrehous, Rann de Kutch.</u>	<u>Guyana británica.</u>
Disposición administrativa sobre bienes inmuebles	<u>Guatemala/Honduras, Minguiers y Ecrehous, Canal de Beagle, Controversia fronteriza terrestre, insular...</u>	<u>Cuestión Moerague, Laudo del Rey de España, Soberanía sobre ciertas parcelas fronterizas, Controversia fronteriza terrestre..., Laguna del Desierto.</u>
Otorgamiento de concesiones y monopolios	<u>Isla de Aves, Reino de Barotse, Walvis Bay, Isla de Clipperton, Groenlandia Oriental, Guatemala/Honduras, Canal de Beagle.</u>	<u>Soberanía sobre ciertas parcelas fronterizas, Controversia fronteriza terrestre...</u>

Obras públicas	<u>Grisbadârna, Minquiers y Ecrehous, Rann de Kutch, Burkina Faso/Mali, Controversia fronteriza terrestre, insular...</u>	<u>Guatemala/Honduras, Templo de Preah Vihear, Dubai/Shariah.</u>
Sistema electoral	<u>Guatemala/Honduras, Controversia fronteriza terrestre, insular...</u>	<u>Nulidad del laudo del Rey de España, Controversia fronteriza terrestre...</u>
Compañías de Comercio y Colonización	<u>Guyana británica, Isla de Palmas, Groenlandia Oriental.</u>	
Actividad eclesiástica	<u>Guyana británica, Laudo del Rey de España, Isla de Palmas, Minquiers y Ecrehous.</u>	<u>Guatemala/Honduras, Controversia fronteriza terrestre, insular...</u>
Actividad privada	<u>Isla de Bulama, Alpe de Cravairola, Grisbadârna, Groenlandia Oriental, Guatemala/Honduras, Minquiers y Ecrehous, Rann de Kutch.</u>	<u>Isla de Aves, Groenlandia Oriental, Templo de Preah Vihear, Dubai/Shariah, Controversia fronteriza terrestre, insular...</u>

XI. No consideramos que la prueba testifical sea un instrumento probatorio idóneo para demostrar el ejercicio continuo y pacífico de funciones estatales. A nuestro juicio este tipo de prueba no resulta concluyente y puede ser fácilmente moldeable en beneficio de la Parte que haga uso del mismo y de sus pretensiones. Si bien ha sido admitido a trámite en tres ocasiones (en lo que se refiere a conflictos de adquisición del título territorial), no ha obtenido una valoración positiva determinante como prueba de posesión efectiva en ninguno de los tres asuntos que la hemos detectado.

XII. Está plenamente consagrado en la jurisprudencia el principio de "relatividad de la efectividad" en el ámbito del derecho territorial. Este principio supone una importante reducción en la exigencia de prueba de soberanía sobre un territorio en atención a las circunstancias del mismo, lo que conlleva que en territorios de difícil acceso o habitabilidad, como pueden ser los montañosos, desérticos, helados o los que sufren frecuentes inundaciones, por un lado, los Estados no necesitan presentar tantos actos de despliegue de autoridad estatal como prueba de su posesión efectiva de los mismos, y por otro, el juez o árbitro a la hora de valorar la prueba de ejercicio de funciones estatales que se le presenta flexibiliza sus criterios de valoración en atención a la dificultad de posesión efectiva que presenta el territorio.

XIII. Frente al principio de libertad de valoración de la prueba por el órgano

jurisdiccional que rige en el derecho procesal internacional, sostenemos que en el ámbito de las controversias relativas a la adquisición del título territorial existe un límite a dicho principio general. Se trata de un límite temporal que se despliega de tres formas distintas: fecha crítica, statu quo y derecho intertemporal, y que afecta tanto a las Partes a la hora de presentar la prueba, como al juez o árbitro en el momento de valorarlas.

Por un lado, el establecimiento de una fecha crítica limita a los Estados a presentar sus pruebas de ejercicio de funciones estatales respecto de actos que hayan tenido lugar únicamente antes de dicha fecha, y al juez o árbitro a recibir y valorar sólo éstas y especialmente las inmediatamente anteriores a tal fecha crítica, considerando las posteriores en cuanto corroboren su decisión. En sentido análogo, la fijación convencional de un statu quo va a obligar a los Estados a excluir en la presentación de su prueba los actos de soberanía realizados en ese período de mantenimiento del modus vivendi, y en caso de ser presentados, el órgano jurisdiccional estará obligado a rechazarlos. Finalmente, el juez o árbitro deberá ajustar sus criterios de valoración de la prueba de las efectividades al derecho de la época en que tales pruebas se sitúan. En aplicación del derecho intertemporal, en su doble vertiente, el órgano jurisdiccional, por un lado, debe apreciar los actos de posesión efectiva que le presenten los Estados aplicando las exigencias de efectividad propias de cada época; por otro, debe tener en cuenta que la soberanía no es un acto instantáneo que se adquiera en un sólo momento, por lo que no sólo debe adquirirse sino que además debe ser continuamente mantenida. Por ello, el juez o árbitro tienen que apreciar, no sólo la adquisición del título territorial, sino

su mantenimiento, cuestiones ambas que deben valorarse a la luz del derecho vigente en la época en que se han ido produciendo.

XIV. El valor que debe darse a las distintas pruebas de ejercicio continuo y pacífico de funciones estatales dependerá de la complejidad de cada caso. No existe un criterio de evaluación que, aplicado a los distintos actos de soberanía, establezca cuál o cuáles de ellos son la mejor prueba del título territorial. Hemos constatado, no obstante, que dicha exigencia se minimiza cuando las efectividades no aparecen como título autónomo, sino como complemento de un título jurídico en los conflictos de delimitación territorial; de igual forma, hemos comprobado también que la actividad policial, la legislativa, la judicial y administrativa han tenido siempre una consideración altamente positiva por los órganos jurisdiccionales.

Es ésta, pues, una cuestión particular a resolver en cada conflicto, y que *resultará de la comparación equitativa del volumen de prueba presentado por cada una de las Partes*; resultando así que actos que, en principio, pudieran parecer insuficientes para demostrar una posesión efectiva lleguen a ser considerados por el órgano jurisdiccional como prueba válida de la soberanía de un Estado sobre un territorio, porque al ser comparadas las alegaciones de ambas Partes han resultado ser superiores a los del otro Estado, esto es, *constituyen mejor prueba*.

Es obvio que cuántos más actos estatales se desplieguen sobre un territorio probarán mejor el ejercicio de soberanía sobre el mismo; no en vano el ejercicio de soberanía sobre un territorio es equiparable a una melodía que necesita de todas sus notas -efectividades- para ser perfecta, cuántas más notas falten peor sonará su música.

ANEXOS

I. ANEXO DE BIBLIOGRAFIA

1. OBRAS GENERALES

- ABAD SANTOS, Cases on International Law, Nueva York. 1966.
- AKEHURST, M., A Modern Introduction to International Law, Londres, 1982.
- ANZILOTTI, D., Curso de Derecho internacional (traducción del italiano), Madrid, 1935.
- BASDEVANT, J., "Règles générales du droit de la paix", R. des C., nº58, 1936-IV, pp.470-692.
- BEDJAOUI, M. (Rédacteur général), Droit international. Bilan et perspectives, varios autores, 2 vols., París, 1991.
- BISHOP, J., International Law. Cases and Materials, Boston, 1971.
- BISHOP, W.W., "General Course of Public International Law", R. des C., nº115, 1965-II, pp.147-470.
- BLUNTSCHLI, Droit International Codifié, París, 1874.
- BOURQUIN, M., "Règles du droit de la paix", R. des C., nº35, 1931-I, pp.5-229.
- BRIERLY, J.L., "Règles du Droit de la paix", R. des C., nº58, 1936-IV, pp.1-242.
- BRIERLY, J.L., The Law of Nations, Oxford, 1963.
- BRIGGS, H.W., The Law of Nations Cases, Documents and Notes, Nueva York, 1952.
- BROWNLIE, I., Principles of Public International Law, Oxford, 1990.
- CARRILLO SALCEDO, J.A., El Derecho internacional en un mundo en cambio, Madrid, 1984.
- CAVAGLIERI, A., "Règles du droit de la Paix", R. des C., nº26, 1929-I, pp.311-586.
- CAVARE, L., Le Droit International Public Positif, vol.I, París, 1967, y vol.II, París, 1970.

- CHENG, B., General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals, Londres, 1953.
- CONFORTI, B., Diritto internazionale, Milán, 1982.
- CORBETT, P.E., Law in Diplomacy, Nueva Jersey, 1959.
- COUSSIRAT-COUSTERE, V, et EISEMANN, P.M., Répertoire de la jurisprudence arbitrale internationale, varios vols., Dordrecht, 1989.
- DIEZ DE VELASCO, M., Instituciones de Derecho internacional público, vol.I, Madrid, 1994.
- DUPUY, R.J., Droit international public, París, 1992.
- FONTES HISTORIAE IURIS GENTIUM, varios vols., Nueva York, 1988.
- FRANCK, Th.M, "Fairness in the International Legal and Institutional System. General Course on Public International Law", R. des C., nº240, 1993-III, pp.1-498.
- FRANÇOISE, J.P.A., "Règles générales du droit de la paix", R. des C., nº66, 1938-IV, pp.1-294.
- GARCIA ARIAS, L., Corpus Iuris Gentium, Zaragoza, 1968.
- GONZALEZ CAMPOS, J.D., SANCHEZ RODRIGUEZ, L.I., y ANDRES SAENZ DE SANTA MARIA, M.P., Curso de Derecho internacional público, Madrid, 1992.
- GUGGENHEIM, P., Traité de Droit international public, vol.I, Ginebra, 1953.
- GUGGENHEIM, P., "Principles of Public International Law", R. des C., nº136, 1972-II, pp.1-202.
- HACKWORTH, G.H., Digest of International Law, varios volúmenes, Washington, 1940.
- HALL, W.E., International Law, Oxford, 1880.
- HYDE, Ch., International Law, Chiefly as applied by the United States, Boston, 1947.
- JENNINGS, R.Y., "General Course on Principles of International Law", R. des C., nº121, 1967-II, pp.323-605.
- JIMENEZ DE ARECHAGA, E., El Derecho internacional contemporáneo, Madrid, 1980.
- JIMENEZ DE ARECHAGA, E., "International Law in the Past Third of a Century", R. des C., nº159, 1978-I, pp.1-344.
- LA FONTAINE, Pasicrisie Internationale, Berna, 1902.

- LAUTERPACHT, H., International Law Reports, Londres, 1954.
- MARTENS, G.F.R., Nouveau Recueil Général de Traités et autres actes relatifs aux rapports de Droit international, 2ª serie, varios vols., Leipzig, 1876-1908; 3ª serie, varios vols., Leipzig, 1909-1913.
- MONACO, R., "Cours général de Droit international public", R. des C., nº125, 1968-III, pp.93-335.
- MOORE, J.B., A Digest of International Law, varios vols., Washington, 1906.
- NIBOYET, J.P., Traité de Droit international public, 1951.
- OPPENHEIM, International Law. A Treatise, varios vols., Londres, 1955.
- PASTOR RIDRUEJO, J.A., Curso de Derecho internacional público y Organizaciones internacionales, Madrid, 1994.
- PHILLIMORE, Sir R., International Law, varios vols., Londres, 1879.
- QUADRI, R., Diritto Internazionale Pubblico, Palermo, 1960.
- QUOC DIHN, N., DAILLIER, P., et PELLET, A., Droit international public, París, 1980.
- REMIRO BROTONS, A., Derecho internacional público. 1.Principios fundamentales, Madrid, 1982.
- REUTER, P., Derecho intenacional público (traducción de J.Puente Egidio), Barcelona, 1962.
- REUTER, P., Droit international public, París, 1976.
- REUTER, P., "Principes de Droit international public", R. des C., nº103, 1961-II, pp.425-656.
- RODRIGUEZ CARRION, A., Lecciones de Derecho internacional público, Madrid, 1987.
- ROUSSEAU, Ch., "Principes de Droit International Public", R. des C., nº93, 1958-I, pp.369-550.
- ROUSSEAU, Ch., Droit international public, varios vols., París, 1983.
- SALVIOLY, G., "Règles générales de la paix", R. des C., nº46, 1933-II, pp.1-163.
- SANCHEZ RODRIGUEZ. L.I., Derecho internacional público: Problemas actuales, Madrid, 1993.

- SCELLE, G., "Règles générales de droit de la paix", R. des C., n°46, 1933-IV, pp.331-697.
- SCHACHTER, O., "General Course in Public International Law", R. des C., n°178, 1982-V, pp.1-395.
- SCHWARZENBERGER, G., A Manual of International Law, Abingdon, 1976.
- SCHWARZENBERGER, G., The Inductive Approach to International Law, Nueva York, 1965.
- SERENI, A.P., Diritto Internazionale, varios vols., Milán, 1956.
- SORENSEN, M., Manual de Derecho internacional público, México, 1973.
- SORENSEN, M., "General Principles of International Law", R. des C., n°101, 1960-III, pp.1-251.
- THESAURUS ACROASIMUM, vol.XIV, Tesalonica, 1985.
- THIERRY, H., COMBACAU, J., SUR, S., et VALEE, Ch., Droit international public, París, 1981.
- TORRES UGENA, N., Textos normativos de Derecho internacional público, Madrid, 1994.
- TRAVERS TWISS, D.C.L., The Law of Nations, Londres, 1891.
- ULLOA, A., Derecho internacional público, Madrid, 1957.
- VERZJIL, J.H.W., International Law in Historical Perspective, varios vols., Leiden, 1969-1976.
- VISSCHER, Ch. de, Théories et réalités en Droit international public, París, 1970.
- VISSCHER, Ch. de, "Principes de Droit international public", R. des C., n°86, 1954-II, pp.449-553.
- VISSCHER, Ch. de, "Cours général de Droit international public", R. des C., n°136, 1972-II, pp.1-202.
- WALDOCK, Sir H., "General Course on Public International Law", R. des C., n°106, 1962-II, pp.1-251.
- WETTER, J., The International Arbitral Process, varios vols., Nueva York, 1979.
- WITEMAN, M.M., Digest of International Law, varios vols., Nueva York, 1972.

2. OBRAS Y ESTUDIOS MONOGRAFICOS

- ADAMI, V., National Frontiers in Relation to International Law, Londres, 1927.
- AGO, R., Il requisito dell'effectivita dell'occupazione in diritto internazionale, Roma, 1934.
- ALAMO YBARRA, C., Nuestras fronteras occidentales, Caracas, 1927.
- ALEXANDER, E.P., Reply to the argument of the Nicaraguan boundary Comission, 1897.
- AMARILLA FRETES, E., El Paraguay en el primer cincuentenario del fallo arbitral del presidente Hayes, Asunción, 1932.
- AMUCHASTEGUI ASTRADA, A., Argentina-Chile: Controversia y mediación, Buenos Aires, 1980.
- ANCEL, J., Géographie politique des frontières de l'Europe Centrale, París, 1933.
- ANCEL, J., "Les frontières", R. des C., nº55, 1936-I, pp.207-297.
- ANDERSON, L., El laudo Loubet, San José, 1911.
- ANDERSON, L., Validez y fuerza obligatoria del Laudo, Tegucigalpa, 1938.
- AYCENA SALAZAR, L., El procedimiento 'ex aequo et bono' y la controversia angloguatemalteca sobre Belice, Guatemala C.A., 1949.
- BAEZ, C., The Paraguayan Chaco, Nueva York, 1904.
- BANNON, J., The Spanish Borderlands Frontiers: 1513-1821, Nueva York, 1970.
- BARBAGELETA, H., Les frontières. Contribution a l'étude de l'histoire du Droit international Americain, París, 1911.
- BARBIER, M., Le conflit du Sahara Occidental, París, 1982.
- BARDONNET, D., "Les frontières terrestres et la relativité de leur tracé", R. des C., nº153, 1976-V, pp.9-166.
- BARRA, E. de la, El problema de los Andes, Buenos Aires, 1895.

- BARROS ARANDA, D., Exposición de los derechos de Chile en el litigio de límites sometido al fallo arbitral de Su Majestad Británica, Santiago, 1899.
- BASTID, S., "Les problèmes territoriaux dans la jurisprudence de la C.I.J.", R. des C., nº107, 1962-III, pp.363-495.
- BECKER, J., La cuestión de límites en la América española, Madrid, 1902.
- BECKETT, W.E., "Les questions d'intérêt général au point de vue juridique dans la jurisprudence de la C.P.J.I. (juillet 1932-juillet 1934)", R. des C., nº50, 1934-IV, pp.189-310.
- BEDJAOUI, M., 'Terra nullius', droit historiques et autodétermination, La Haya, 1975.
- BELGRAD, E., The Theory and Practice of Prescriptive Acquisition in International Law, Londres, 1969.
- BELLO CODESIDO, E., El arbitraje y la equidad, Santiago, 1939.
- BENMESSAOUD TREDANO, A., Intangibilité des frontières coloniales et espace étatique en Afrique, París, 1989.
- BERLIN, K., Denmark's Right to Greenland, Londres, 1932.
- BERSTEIN, I., Delimitation of International Boundaries, Tel Aviv, 1974.
- BETANCOURT, J., Límites entre Colombia y Costa Rica, Madrid, 1927.
- BETTS, R.F., Assimilation and Association in French Colonial Theory, 1890-1914, Londres, 1961.
- BIGNARDI, 'Controversiae agrorum' e arbitrati internazionali. Alle origini dell'interdetto 'uti possidetis', Milán, 1984.
- BLOOMFIELD, The British Honduras-Guatemala Dispute, Toronto, 1953.
- BLUM, Y.Z., Historic Titles in International Law, La Haya, 1965.
- BOGGS, S.W., International Boundaries. A Study of Boundary Functions and Problems, Nueva York, 1940.
- BOGGS, S.W., The polar regions (geographical and historical data for consideration in a study of claims to sovereignty in the Arctic and Antarctic regions), Nueva York, 1990.
- BONO, S., Le frontiere in Africa, Milán, 1972.
- BOUTROS-GHALI, B., Les conflits de frontières en Afrique, París, 1972.

- BOWMAN, I., The New World: Problems in Political Geography, Londres, 1928.
- BRAVEBOY WAGNER, J.A., The Venezuela-Guyana Border Dispute: Britains colonial legacy in Latin America, Londres, 1984.
- BRIEBA, E., Memoria sobre los límites entre Chile y Perú de acuerdo con el Tratado de 3 junio 1929, Santiago, 1931.
- BROWN, P.G. and SHUE, H. (ed), Boundaries, National Autonomy and its Limits, Totowa, 1981.
- BROWNLIE, I., African Boundaries. A Legal and Diplomatic Encyclopediae, Londres, 1979.
- BUSTAMANTE, J.A., Mexico-EE.UU. Bibliografía general sobre estudios fronterizos, México, 1980.
- CARL, G.E., Orígenes del conflicto de límites entre Venezuela y la Guyana británica, Londres, 1966.
- CARRASCO, G., Argentina y el laudo arbitral del Canal Beagle, Santiago, 1978.
- CASADOS VILLANUEVA, B.E., Tiempo, efectividad y prescripción en el Derecho internacional, México, 1952.
- CASTBERG, F., "Excés de pouvoir en justice internationale", R. des C., n35, 1931-III, pp.357-470.
- CASTRO RAMIREZ, M., El laudo de Alfonso XIII frente al Derecho internacional, Tegucigalpa, 1938.
- CAVAGLIERI, A., Frontière, Milán, 1905.
- CHAILLEY, M., La nature juridique des traités internationaux, París, 1932.
- CHAMORRO, D.M., La controversia territorial entre Nicaragua y Honduras, Managua, 1938.
- CHECA DROUET, B., La doctrina americana del 'uti possidetis' de 1810, Lima, 1946.
- CHEN, L.F., State succession relating to unequal treaties, Hamden, 1974.
- CLEVELAND, G., The Venezuelan Boundary Controversy, Londres, 1913.
- CORDERO TORRES, J.M., Estudio de los medios de solución pacífica de los conflictos internacionales en América, Almería, 1930.
- COSTA, J., Alemania contra España, Madrid, 1915.

- COSTA RICA-PANAMA ARBITRATION, Diagrams annexed to the argument of Costa Rica, Washington, 1913.
- COSTA RICA-PANAMA ARBITRATION, Answer of the Costa Rica to the argument of Panama, Washington, 1914.
- CUKWURAH, A.O., The Settlement of Boundary Disputes in International Law, Manchester, 1967.
- CURZON OF KEDLESTON, Lord, Frontiers, Oxford, 1907.
- DAY, A.J. (ed), Border an Territorial Disputes, Keesing's Reference Publications, Essex, 1982.
- DEGAN, V.D., L'équité et le droit international, La Haya, 1970.
- DEHERPE, L., Essai sur le developpement de l'occupation en droit international. Etablissement et deformation de l'oeuvre de la Conference de Berlin de 1885, París, 1903.
- DENNIS, W.J., Tacna and Arica, New Haven, 1931.
- DIAZ CISNEROS, C., Límites de la República Argentina. Fundamentos históricos y jurídicos, Buenos Aires, 1944.
- DIEZ DE MEDINA, E., El Laudo argentino, La Paz, 1909.
- DIEZ-PICAZO PONCE DE LEON, L., La doctrina de los propios actos, Barcelona, 1963.
- DION, R., Les frontières de la France, París, 1947.
- DONATI, D., Stato e Territorio, Roma, 1923.
- DURAN BACHLER, S., 'Uti possidetis'. Doctrina latinoamericana, Santiago, 1977.
- ENCINA, F.A., La cuestión de límites entre Chile y la Argentina desde la Independencia hasta el tratado de 1881, Santiago, 1959.
- ESCOBARI CUSICANQUI, J., Política de Fronteras, La Paz, 1978.
- EYZAGUIRRE, J., Breve historia de las fronteras de Chile, Santiago, 1967.
- FARIA, P., L'affaire des Minquiers et des Ecréhous. Arrêt de la Cour Internationale de Justice du 17 novembre 1953, París, 1956.
- FAWCETT, C.B., Frontières. A Study in Political Geography, Oxford, 1918.
- FIGLIORE, P., Bolivie et Perou. Conflit de limites entre la Bolivie et le Perou, París, 1910.

- FISCHER-WILLIAMS, J., International Change and International Peace, Nueva York, 1932.
- FOUCHER, M., L'invention des frontières, París, 1987.
- FOUCHER, M., Fronts et frontières, un tour du monde géopolitique, París, 1988.
- GALINDO QUIROGA, E., Litoral andino, Buenos Aires, 1977.
- GALTIER, Ch., Des conditions de l'occupation des territoires dans le droit international contemporaine, Toulouse, 1901.
- GANDIA, E. de, Los derechos del Paraguay sobre el Chaco Boreal y las doctrinas del 'uti possidetis' en el siglo XVI, Asunción, 1935.
- GARAGLIA, F.A.R., As fronteiras do Brasil, Río de Janeiro, 1916.
- GARCIA CASTELLANOS, T., Geología de fronteras. Bases geológicas para la determinación de límites internacionales, Córdoba, 1954.
- GHISOLFO ARAYA, F., Origen y desarrollo del diferendo limítrofe austral, Buenos Aires, 1983.
- GIL, S.J.R., Los conflictos de soberanía sobre la Isla de Aves, Caracas, 1983.
- GOMEZ ROBLEDO, A., México y el arbitraje internacional. El fondo piadoso de las Californias. La Isla de la Pasión. El Chamizal, México, 1965.
- GONCALVES PEREIRA, A., La sucession d'étati en matière de traité, París, 1969.
- GONZALES, M., El límite oriental del territorio de Misiones, Montevideo, 1883.
- GOTTMANN, J., The Signification of Territory, Charlottesville, 1973.
- GOYCOECHEA, C., Fronteiras e fronteros, Sao Paulo, 1943.
- GREZ PEREZ, C.E., La agresión de Bolivia en el Chaco y el 'uti possidetis', Santiago, 1932.
- GROS ESPIELL, H., España y la solución pacífica de los conflictos limítrofes en Hispanoamérica, Madrid, 1984.
- GRUNDY-WARR, C.(ed), International Boundaries and Boundary Conflict Resolution, Durham, 1990.
- GUANI, A., "La Solidarité internationale dans l'Amérique Latine", R. des C., nº8, 1925-VIII, pp.207-337.

- GUGLIAMELLI, J.E., El conflicto del Beagle, Buenos Aires, 1980.
- GUICHONNET, P., et RAFFESTIN, C., Géographie des frontières, Ginebra, 1974.
- GUZMAN, S.V., El derecho de conquista y la teoría del equilibrio en la América Latina, Buenos Aires, 1882.
- HENNESSY, A., The Frontiers in Latin American History, Alburquerque, 1978.
- HERTSLET, E., The Map of Africa by Treaty, varios vols., Londres, 1896.
- HILL, Ch.E., Claims to Territory in International Law and Relations, Oxford, 1944.
- HOLDICH, T.H., Political Frontiers and Boundary Making, Londres, 1916.
- HUESA VINAIXA, R., El nuevo alcance de la 'opinio iuris' en el Derecho internacional contemporáneo, Valencia, 1991.
- HUIJN DE VERNEVILLE, L., De l'occupation comme mode de acquisition de la propriété en droit de gens, París, 1906.
- I.C.I., Conflictos territoriales en Iberoamérica y solución pacífica de controversias, Madrid, 1986.
- INFANTE DIAZ, F., Límites de Chile; 1535-1985, Santiago, 1986.
- IRELAND, G., Boundaries, Possessions and Conflicts in South America, Cambridge, 1938.
- IRELAND, G., Boundaries, Possessions and Conflicts in Central and North America and the Caribbean, Cambridge, 1941.
- JACQUE, J.P., Eléments pour une théorie de l'acte juridique en droit international public, París, 1972.
- JAYARAMAN, K., Legal Regime of islands, Nueva Delhi, 1982.
- JENNINGS, R.Y., The Acquisition of Territory in International Law, Manchester, 1963.
- JEZE, G., Etude théorique et pratique sur l'occupation comme mode d'acquérir les territoires en droit international, París, 1896.
- JONES, S.B., Boundary-Making, Nueva York, 1971.
- KELLER, A.S., LISSITZYON, O.J., and MANN, F.J., Creation of Rights of Sovereignty through Symbolic Acts: 1400-1800, Nueva York, 1938.

- KRATOCHWIL, F., ROHRLICH, P., and MAHAJAN, H., Peace and Disputed Sovereignty: Reflections on Conflict over Territory, Londres, 1985.
- L'HARMATTAN, Problèmes de frontières dans le Tiers-Monde, Paris, 1982.
- LAGOS CARMONA, G., Historia de las fronteras de Chile, Santiago, 1980.
- LAMEIRE, J., Memoire et pratique de la conquête dans l'ancien droit, Paris, 1902.
- LAPRADELLE, P. de, La frontière. Etude de Droit international, Paris, 1928.
- LAPRADELLE, P., "Notions du territoire et d'espace dans l'aménagement des rapports internationaux contemporains", R. des C., n°157, 1977-IV, pp.415-484.
- LAPRADELLE et POLITIS, L'arbitrage anglo-brésilien de 1904, Paris, 1905.
- LATORRE, C., Intervención tutelar de España en los problemas de límites de Hispano-América, Sevilla, 1921.
- LAUTERPACHT, H., The Function of Law in International Community, Oxford, 1933.
- LINDLEY, M.F., Acquisition and Governement of Backward Territory in International Law, Londres, 1926.
- LOPEZ CONTRERAS, Proceso de límites entre Venezuela y Colombia, Nueva York, 1953.
- LOZA, L.M., El laudo Hayes. Su ineficacia en el litigio boliviano-paraguayo, La Paz, 1940.
- LUARD, E., The International Regulation of Frontier Disputes, Nueva York, 1970.
- MAEDER, E.J.A., Los problemas de límites entre España y Portugal en el río de La Plata, Madrid, 1986.
- MAHINGA, J.G., L'affaire du Canal de Beagle, Limoges, 1986.
- MAKONNEN, International Law and the New States of Africa: A Study of the International Legal Problems of State Succession in the Newly Independent States of Eastern Africa, Malta, 1983.
- MARCHANT, A., Boundaries of the Latin-American Republics. Annotated list of the documents, Washington, 1944.

- MARIATEGUI OLIVA, R., Nuestra patria y sus fronteras. Historia de los límites de Perú, Lima, 1964.
- MARTIN, A., L'Estoppel en Droit international, París, 1979.
- MARTINEZ BLANCO, G., Enfrique histórico y jurídico de la controversia limítrofe entre Honduras y El Salvador, Tegucigalpa, 1991.
- MARTINS JUNIOR, F.I., Soberanía e Acre pelo, Río de Janeiro, 1903.
- MATAMOROS, L., Costa Rica-Panama Arbitration. Report submitted to the representative of Costa Rica, Washington, 1913.
- MAURTUA, A., Arbitraje internacional entre el Perú y el Brasil, Lima, 1960.
- MCEWEN, A.C., International Boundaries of East Africa, Oxford, 1971.
- MCMAHON, M.M., Conquest and Modern International Law, Washington, 1940.
- MELO, A.L., La cuestión internacional del Canal de Beagle, Buenos Aires, 1979.
- MELO, A.L., y STURBBIA, M., La mediación papal y el conflicto austral, Buenos Aires, 1981.
- MIAJA DE LA MUELA, A., El principio de efectividad en Derecho internacional, Valladolid, 1958.
- MIELE, M., L'aggiudicazione di territori nel Diritto Internazionali, Milán, 1940.
- MONTES DE OCA, M.A., Límites argentino-chilenos. El divortium aquarum continental ante el tratado de 1893, Buenos Aires, 1899.
- MOORE, J.B., Costa Rica-Panama arbitration. Memorandum on 'uti possidetis', Rosslyn, 1913.
- MORENO, F.R., El problema de las fronteras, Buenos Aires, 1927.
- MORO MILLA, L., La 'opinio iuris' en el derecho internacional contemporáneo, Madrid, 1990
- MORZONE, L.A., Cuestiones de límites con la República de Chile. El laudo arbitral en la región del Río Encuentros, Buenos Aires, 1982.
- MOULIN, H.A., Le litige chilo-argentino et la delimitation politique des frontières naturelles, París, 1902.

- MUJIA, R., El Chaco. Monografía histórico-geográfica y los alegatos paraguayos en la cuestión de límites con Bolivia, Asunción, 1933.
- NIELSEN F.K., The Island of Palmas Arbitration, La Haya, 1928.
- NIETO PENA, J., El conflicto del Chaco a la luz de la Historia, Madrid, 1933.
- NIKITOVITCH, Tch.M., L'affaire du Monastère de Saint Naum, París, 1927.
- OBERTI, G.D., Les litiges frontaliers franco-italiens dans le departement des Alpes maritimes, Foureime, 1939.
- OJER, P., Sumario fronteriza entre Venezuela y Colombia, Caracas, 1983.
- OROZCO, W.L., Legislación sobre terrenos baldíos, tomo II, México, 1895.
- ORTEGA, M.R., Título de adquisición de soberanía en la doctrina y la jurisprudencia internacional, Tegucigalpa, 1977.
- PARISET, G., L'Arbitrage Anglo-Venezuelen de Guyane, París, 1900.
- PEIRANO BASSO, J., Buenos Oficios y Mediación, Montevideo, 1983.
- PEÑARANDA, A., La función de la efectividad en el Derecho internacional, Madrid, 1973.
- PERALTA, M., Exposé des droits territoriaux de la République de Costa Rica, París, 1898.
- PERALTA, M., Jurisdiction territoriale de la République de Costa Rica. Réplique a l'exposé de la République de Colombia, París, 1899.
- PHIPSON, S.L., The Law of Evidence, Londres, 1952.
- PINTO, R., "La prescription en Droit international", R. des C., nº87, 1955-I, pp.391-456.
- POINCARIE, R., Cuestión de límites entre Colombia y Costa Rica. Arbitraje de S.E. el Presidente de la República Francesa, Sevilla, 1901.
- PONDAVEN, Ph., Les lacs-frontière, París, 1972.
- PRESCOTT, J.R.V., The Geography of Frontiers and Boundaries, Londres, 1967.
- PRESCOTT, J.R.V., Boundaries and Frontiers, Londres, 1978.
- PUENTE ARNAO, J.A., Historia de los límites del Perú, Lima, 1927.

- PUIG AROSEMENA, A., Nuevos aspectos de nulidad del Protocolo de Río de Janeiro, Guayaquil, 1964.
- QUESADA, A., Derecho internacional latino-americano, Buenos Aires, 1918.
- QUINTERO MONTAÑO, R., El territorio del Estado, México, 1971.
- RAMIREZ FONTECHA, A.A., El arbitraje entre Honduras y Nicaragua, Nueva York, 1938.
- RAMOS GIMENEZ, L., Chaco a través de los siglos en los Mapas de la Colección Río Branco, Río de Janeiro, 1933.
- REMIRO BROTONS, A., Territorio nacional y Constitución, Madrid, 1978.
- REYES THEVENET, A., Misiones Diplomáticas sobre límites, Montevideo, 1959.
- REZETTE, R., The Western Sahara and the Frontiers of Morocco, París, 1975.
- RISOPATRON, L., La línea de frontera en la Puna de Atacama, Santiago, 1906.
- RIVAS, P., Historia cartográfica documentada, Tegucigalpa, 1938.
- ROCHE, A.G., The Minquiers and Ecreho Case, Ginebra, 1959.
- ROUSSEAU, Ch., Les frontières de la France, París, 1954.
- SAAVEDRA NOGALES, A., Aspectos jurídicos y lógicos en el problema del río Lauca, 1962.
- SADIK EL-KOSHERI, A., The Taba Arbitral Award (An Analytical Documented Study of Certain Important Aspects), El Cairo, 1990.
- SALOMON, Ch., L'occupation de territoires sans maître, París, 1889.
- SANDIFER, D.V., Evidence before International Tribunals, Chicago, 1939.
- SANSON TERAN, J., El arbitraje internacional y la controversia de límites entre Nicaragua y Honduras, Barcelona, 1959.
- SANTOS, E., A questao do Barotze, Río de Janeiro, 1986.
- SCHOENBORN, W., "La nature juridique du territoire", R. des C., nº30, 1929-V, pp.85-189.
- SCHWARZENBERGER, G., The Frontiers of International Law, Londres, 1962.

- SHARMA, S.P., International Boundary Disputes and International Law, Nueva Delhi, 1976.
- SHARMA, S.P., Delimitation of Land and Sea Boundaries between Neighbouring Countries, Nueva Delhi, 1989.
- SHAW, M.N., Title to Territory in Africa, Oxford, 1986.
- SIMPSON J.L., and FOX, H., International Arbitration. Law and Practice, Londres, 1959.
- SINAGRA, A., Controversie territoriali tra stati e decolonizzazione, Milán, 1983.
- SKEIE, J., La question du Groenland, Oslo, 1932.
- SMEDAL, G., Acquisition of sovereignty over polar areas, Oslo, 1931.
- SMUTKO, G., La Mosquita: Historia y cultura de la Costa Atlántica, Managua, 1988.
- SOARES, J.C.M., Fronteiras do Brasil no regimen colonial, Río de Janeiro, 1939.
- SOSA, J.B., Límites de Panamá, Madrid, 1914.
- SPATAFORA, E., Le frontiere dell'Italia, Milán, 1979.
- STRUPP, K., "Le droit du juge international de statuer selon l'équité", R. des C., n33, 1930-III, pp.355-481.
- STUYT, A.M., Survey of International Arbitrations, 1794-1989, Leiden, 1990.
- SUAREZ, J.L. El 'uti possidetis' y los límites americanos, Buenos Aires, 1909.
- SUY, E., Les acte juridiques unilatéraux en Droit international public, París, 1962.
- TABLE RONDE organisie en l'honneur de Pierre Monbeig, Les phenomenes de 'frontiere' dans les pays tropicaux, París, 1979.
- TAGIL, S., y otros, Studying Boundary Conflicts, Lund, 1977.
- TARTARIN, E., Traité de l'occupation suivant le droit naturel, le droit civil et le droit international, París, 1873.
- TAVERNIER, P., Recherches sur l'application dans le temps des actes et des règles en Droit international public, París, 1970.

- TOUSCOZ, J., Le principe d'effectivité dans l'ordre international, París, 1964.
- TURNER, F.J., The Frontier in American History, Nueva York, 1921.
- ULLOA, A., El Fallo Arbitral del Presidente de los EE.UU. de América en la cuestión de Tacna y Arica, Lima, 1925.
- UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, International Boundary Cases, Cambridge, 1992.
- URIBE, A.J., Colombia y Costa Rica, las cuestiones de límites, Bogotá, 1931.
- URQUIDI, J.M., EL 'uti possidetis iuris' y el 'de facto', Cochamba, 1946.
- VALLEJO, A.R., Historia documentada de los límites entre la República de Honduras y las de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, Nueva York, 1938.
- VARELA, L.V., La República Argentina y Chile. Historia de la demarcación de sus fronteras (1843-1899), Buenos Aires, 1899.
- VAUGHAN WILLIAMS, R.E.L., "Les méthodes de travail de la Diplomatie", R. des C., nº4, 1924-IV, pp.227-287.
- VAZQUEZ CARRIZOSA, A., Colombia y los problemas del Mar, Bogotá, 1971.
- VENTURINI, G., "La portée et les effets juridiques des attitudes et des actes unilatéraux des Etats", R. des C., nº112, 1964-II, pp.365-467.
- VERYKIOS, P.A., La Prescription en droit international public, París, 1934.
- VERSFELT, W.J.B., The Miangas Arbitration, Utrecht, 1933.
- VILLARAN, M.V., El arbitraje de Washington en la cuestión peruano-chilena, Lima, 1926.
- VIO VALDIVIESO, F., La mediación de SS. el Papa Juan Pablo II en el conflicto chileno-argentino sobre la delimitación de jurisdicciones marítimas en la zona austral, Buenos Aires, 1984.
- VISSCHER, Ch. de, Les effectivités du Droit international public, París, 1967.
- VISSCHER, Ch. de, Problèmes de confins en Droit international public, París, 1969.

VISSCHER, Ch. de, De l'équité dans le règlement arbitral ou judiciaire des litiges de droit international public, París, 1972.

WAART, P.J.I.M. de, The element of disputes between States: An analysis of provisions made and/or applied since 1918 in the pacific settlement of International Disputes, La Haya, 1973.

WIDSTRAND (ed), African Boundary Problems, Uppsala, 1969.

WITENBERG, J.C., "La théorie des preuves devant les juridictions internationales", R. des C., nº56, 1936-II, pp.1-105.

WYMAN, W.D. and KROEBER, C.B., The Frontier in Perspective, Wisconsin, 1957.

ZAMBRANO VELASCO, J.A., Protección y desarrollo de las fronteras venezolanas, Caracas, 1979.

ZEBALLOS, E.S., Arbitration on Misiones: Argentine Evidence, Nueva York, 1893.

ZICCARDI CAPALDO, G., Le situazione territoriale illegitime nel Diritto Internazionale, Nápoles, 1977.

3. ARTICULOS DE REVISTAS ESPECIALIZADAS Y TRABAJOS EN OBRAS COLECTIVAS

ACCIOLY, H., "Le Brésil et la doctrine de l'uti possidetis", R.D.I., 1935, pp.36-45.

AGO, R., "962ª sesión sobre sucesión de Estados y de gobiernos. Sucesión en lo que respecta a los derechos y obligaciones derivados de fuentes distintas de los tratados", Anuario de la C.D.I., 1968, vol.I., pp.30-31.

ALVAREZ, A., "La theorie de l'Arbitrage Permanent et le conflit de limites entre le Chili et la République Argentine", R.G.D.I.P., 1898, pp.422-444.

ALVAREZ, A., "Des occupations de territoires contestés á propos de la question de limites entre le Chili et la République Argentine", R.G.D.I.P., 1903, pp.651-690.

- ALVAREZ, A., "Latin America and International Law", A.J.I.L., 1909, pp.269-353.
- ANAND, R.P., "The Kutch Award", India Quarterly, 1968, pp.183-212.
- ANDERSON, Ch.P., "The Costa Rica-Panamá Boundary Dispute", A.J.I.L., 1921, pp.236-240.
- ANDREWS, J.A., "The concept of statehood and the acquisition of territory in the nineteenth century", L.Q.R., 1978, pp.408-427.
- ANGEL, D.N., "Some reflections on Privity Consideration, Estoppel and Good Faith", Australian L.J., 1992, pp.484-494.
- ANZILOTI, D., "Territorio 'Chamizal'", Riv.Dir.Int., 1914, pp.67-83.
- ARCHDALE, H.E., "Claims to the Antarctic", Yearbook of World Affairs, 1958, pp.242-263.
- AUDINET, E., "De la prescription acquisitive en Droit international public", R.G.D.I.P., 1896, pp.313-325.
- AYALA, E., "Le principe de l'uti possidetis et le règlement des questions territoriales en America", R.D.I., 1931, pp.441-455.
- AYALA, E., "El uti possidetis en América", R.D.C.S., 1933, pp.5-35.
- BAADE, H.W., "Intertemporales Völkerrecht", Jahrbuch für Internationales Recht, 1958, pp.249 y ss.
- BALCH, T.W., "L'adjudication de la question de la frontière entre l'Alaska et le Canada", R.D.I.L.C., 1904, pp.38 y ss.
- BARBERIS, J.A., "La regla del 'uti possidetis' en las controversias limítrofes entre Estados hispanoamericanos", en Liber Amicorum. Colección de estudios jurídicos en homenaje al Prof.Dr.José Pérez Montero, vol.I, Oviedo, 1986, pp.125 y ss.
- BARBIER, M., "L'avis consultatif de la Cour de la Haye sur le Sahara occidental", R.J.P.I.C., 1976, pp.67-103.
- BARDONNET, D., "Equité et frontières terrestres", en Mélanges offerts à Paul Reuter. Le droit international: unité et diversité, París, 1981, pp.35-74.
- BARDONNET, D., "De la 'densification' des frontières terrestres en Amérique Latine", en Droit et libertés à la fin du XXème siècle. Etudes offerts à Albert Colliard, París, 1984.

- BARDONNET, D., "Frontières terrestres et frontières maritimes", A.F.D.I., 1989, pp.1-64.
- BARDONNET, D., "Les faits posterieurs à la date critique dans les différends territoriaux et frontaliers", en Mélanges Michel Virally. Le droit au service de la paix, de la justice et du développement, parís, 1991, pp.53-78.
- BEDARD, Ch., "Les grands-lacs de l'Amérique du Nord et le fleuve Saint-Laurent: frontière, voie de navigation commerciale, nature juridique", Annu. de Droit Marit. et Aér., 1976, pp.139-150.
- BEDJAOU, M., "Le règlement pacifique des differendes africains", A.F.D.I., 1972, pp.85-99.
- BENEDEK, W., "Monastery of Saint-Naoum (Advisory Opinion)", en R.BERNHARDT (ed), Encyclopediae of Public International Law, vol.2, Amsterdam, 1981, pp.194-195.
- BENNOUNA, M., "L'affaire du 'Sahara Occidental' devant la CIJ", R.J.P.E.M., 1976-1977, pp.81-106.
- BENTIVOGLIO, L., "La 'debellatio' nel Diritto internazionale", Studi Giuridici e Sociali dell'Università de Pavia, 1948, pp.31 y ss.
- BERG, A., "Antarctic Cases (U.K. v. Argentina; U.K. v. Chile)", en R.BERNHARDT (ed), Encyclopediae of Public International Law, vol.2, Amsterdam, 1981, pp.17-18.
- BERNARDINI, A., "Affare della controversia de frontiera (Burkina Faso-Mali)", Comunità Internazionale, 1987, pp.429-435.
- BINDSCHEDLER, D., "De la rétroactivité en droit international public", en Recueil d'études de droit international en hommage à Paul Guggenheim, Ginebra, 1968, pp.186-200.
- BISHOP, W.W., "Minquiers and Ecrehos Case", A.J.I.L., 1954, pp.316-326.
- BISHOP, W.W., "Case concerning Sovereignty over Certain Frontier Lands", A.J.I.L., 1959, pp.937 y ss.
- BLAYDES, L.E., "I.C.J. does not find 'legal ties' of such a nature to affect self-determination in the Decolonization Process of Western Sahara", Texas I.L.J., 1976, pp.354-368.
- BLUMANN, C., "Frontières et limites", en S.F.D.I., La frontière, París, 1980, pp.3-33.
- BOLLECKER-STERN, B., "L'arbitrage dans l'affaire du Canal Beagle entre l'Argentine et le Chili", R.G.D.I.P., 1979, pp.7-52.

- BOTHA, N.J., "Walvis Bay: Miscellany", C.I.L.S.A., 1979, pp.255-271.
- BOTHE, M., "Boundaries", en R.BERNHARDT (ed), Encyclopediae of Public International Law, vol.10, Amsterdam, 1987, pp.17 y ss.
- BOUCHEZ, L.J., "The concept of effectiveness as applied to territorial sovereignty", N.I.L.R., 1962, pp.151-182.
- BOUCHEZ, L.J., "The fixing of Boundaries in International Boundary Rivers", I.C.L.O., 1963, PP.789-817.
- BOURJOL-FLECHER, D., "Heurs et malheurs de l'uti possidetis. L'intangibilité des frontières africaines", R.J.P.I.C., 1981, pp.811-835.
- BOWETT, D.W., "Estoppel before International Tribunals and its Relation to Acquiescence", B.Y.B.I.L., 1957, pp.175-202.
- BOWETT, D.W., "The Taba Award of 29 september 1988", Israel L.R., 1989, pp.429-442.
- BRADEN, S., "A Resume of the Role played by Arbitration in the Chaco Dispute", Arbitration Journal, 1938, pp.387-395.
- BRIGHAM, A.P., "Principles in the Determination of Boundaries", Geo.Rev., 1919, pp.201 y ss.
- BROOKS, M., "The Legal Status of Walvis Bay", S.A.Y.I.L., 1976, pp.187 y ss.
- BROUILLET, A., "La médiation du Saint-Siège dans le différend entre l'Argentine et le Chili sur la zone australe", A.F.D.I., 1979, pp.47-73.
- BROWNLIE, I., "Boundary Disputes in Africa", en R.BERNHARDT (ed), Encyclopediae of Public International Law, vol.6, Amsterdam, 1983, pp.56 y ss.
- BULL, J., "La question de la souveraineté sur le Groenland Oriental", R.D.I.L.C., 1929, pp.572-602.
- BURDEAU, G., "L'épilogue de l'affaire de Taba: la sentence arbitrale du 29 septembre entre Israël et l'Egypte", A.F.D.I., 1988, pp.195-208.
- CABONAT, J., "Des annexions de territoire et de leurs principales conséquences", R.D.I.L.C., 1883, pp.104 y ss.
- CAHIER, Ph., "Le comportement des Etats comme source de droits et d'obligations", en Recueil d'études de droit international en hommage à Paul Guggenheim, Ginebra, 1968, pp.237-266.

- CALVERT, "Boundary Disputes in Latin America", Conflict Studies, 1983, pp.3-31.
- CANSACCHI, "Sovranità e diritto sovrani. Il diritto internazionale al tempo della sua codificazione", en Studi in onore di Roberto Ago, Milán, vol.I, pp.187 y ss.
- CARINGTON SMITH, H., "On the Frontier of British Guiana and Brazil", Geo.Journ., 1938, pp.40-54.
- CARRILLO SALCEDO, J.A., "Caso del Templo de Preah Vihear", R.E.D.I., 1962, pp.189-206.
- CAVAGLIERI, A., "Effets juridiques des changements de souveraineté territoriale", R.D.I.L.C., 1934, pp.219-248.
- CAVARE. L., "L'arrêt de la C.I.J. du 18 novembre 1960 et les moyens d'assurer l'exécution des sentences arbitrales", en Mélanges offerts à Henri Rolin, Paris, 1964, pp.39-54.
- CHAO, K.T., "East-China Sea: boundary problems relating to the Tiao-yu-t'ai islands", Chin. Yb. of Int. L. and Aff., 1982, pp.45-97.
- CHAO, K.T., "Legal nature of international boundaries", Chin. Yb. of L. and Aff., 1985, pp.29-89.
- CHAPPEZ, J., "L'avis consultatif de la C.I.J. du 16 octobre 1976 dans l'affaire du Sahara occidental", R.G.D.I.P., 1976, pp.1132-1187.
- CHEMILLIER-GENDREAU, M., "A propos de l'effectivité en droit international", R.B.D.I., 1975, pp.38-46.
- CHENG, B., "Burden of Proof Before the I.C.J.", I.C.L.Q., 1953, pp.595 y ss.
- CHILD, C.J., "The Venezuela-British Guiana Boundary Arbitration of 1899", A.J.I.L., 1950, pp.682-693.
- COCATRE-ZILGIEN, A., "Affaire relative à la souveraineté sur certains parcelles frontaliers", A.F.D.I., 1959, pp.284-291.
- COHN, G., "Statut juridique du Groenland oriental", R.D.I.L.C., 1933, pp.557-571.
- CONRAD, D., "Rann of Kutch Arbitration (Indo-Pakistan Western Boundary)", en R.BERNHARDT (ed), Encyclopaedia of Public International Law, vol.2, Amsterdam, 1981, pp.240-242.
- COT, J.P., "Affaire du temple de Préah Vihear (Cambodge c. Thaïlande)", A.F.D.I., 1962, pp.217-247.

- COT, J.P., "L'Affaire de la frontière des Andes", A.F.D.I., 1968, pp.237-259.
- CRABB, J., "New Tendencies in the Settlement of Territorial Disputes", A.J.C.L., 1982, pp.349-363.
- D'ECA, R., "The Amicable Settlement of the Brazilian Boundary Disputes", Bulletin of the Pan American Union, 1935, pp.155 y ss.
- DAUVILLIER, J., "Aux origines des notions d'Etat et de souveraineté sur un territoire", en Mélanges en l'honneur de Paul Couzinet, Toulouse, 1974, pp.153-221.
- DECAUX, E., "L'arrêt de la Chambre de la C.I.J. dans l'affaire du différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali) (Arrêt du 22 décembre 1986)", A.F.D.I., 1986, pp.215-237.
- DECAUX, E., "La sentence arbitrale du tribunal arbitral dans le différend frontalier concernant l'enclave de Taba (Egypte-Israël), 29 septembre 1988", R.G.D.I.P., 1989, pp.599-622.
- DELBEZ, L., "Du territoire dans ses rapports avec l'Etat", R.G.D.I.P., 1932, pp.705-738.
- DEMBINSKI, L., "Le territoire et le development du droit international", A.S.D.I., 1975, pp.121-152.
- DENNIS, W.C., "The Venezuela-Bristish Guiana Boundary Arbitration", A.J.I.L., 1950, pp.720-727.
- DESPAGNET, F., "Les occupations de territoires et le procedé de l'hinterland", R.G.D.I.P., 1894, pp.103-126.
- DEVEZE, A., "L'annexion de territoires", J.D.I., 1950, pp.788-797.
- DIAZ BARRADO, C.M., "La nulidad de las sentencias arbitrales al hilo del asunto del canal Beagle", en ASOCIACION ESPAÑOLA DE PROFESORES DE DERECHO INTERNACIONAL Y RELACIONES INTERNACIONALES, El arbitraje internacional, Zaragoza, 1989, pp.135-155.
- DICKINSON, E.D., "The Clipperton Island Case", A.J.I.L., 1933, pp.130-133.
- DIPLA, H., "Le tracé de la limite sur les lacs internationaux", A.S.D.I., 1980, pp.9-74.
- DIPLA, H., "Les règles de droit international en matière de délimitation fluviale: remise en question?", R.G.D.I.P., 1985, pp.589-624.

- DOEHRING, K., "Effectiviness", en R.BERNHARDT (ed), Encyclopediae of Public International Law, vol.7, Amsterdam, 1984, pp.70-74.
- DOMINICÉ, Ch., "A propós du principe de l'estoppel en droit des gens", en Recueil d'études de droit international en hommage à Paul Guggenheim, Ginebra, 1968, pp.327-365.
- DREKONJA KORNAT, G., "El diferendo entre Colombia y Nicaragua", Foro Internacional, 1982, pp.133-145.
- DURAN BACHLER, S., "Resurrección del uti possidetis", Revista Chilena de Derecho, 1989, pp.489-491.
- DUTHEIL DE LA ROCHERE, J., "L'affaire du Canal de Beagle (sentence rendue par la reine d'Angleterre le 24 avril 1977)", A.F.D.I., 1977, pp.408-435.
- DUTHEIL DE LA ROCHERE, J., "Les procédure de règlement des différends frontaliers", en S.F.D.I., La frontière, París, 1980, pp.112-150.
- EDITORIAL COMMENT, "The Chamizal Arbitration Award", A.J.I.L., 1911, pp.709 y ss.
- EL KADIRI, A., "Le role de l'équité dans le règlement des différends de limites (terrestres et maritimes)", R.J.P.E.M., 1982, pp.83-109.
- EL OUALI, A., "L'uti possidetis ou le non-sens du 'principe de base' de la 'OUA pour le reglement des differends territoriaux", Les Mois en Afrique, 1984, pp.3 y ss; y R.M.D.E.D., 1985, P.95-115.
- ENCHLEARDT, M.E.D., "Etude sur la declaration de la Conference de Berlin relative aux occupatios", R.D.I.L.C., 1886, pp.573-586.
- EVANS, M., "Case concerning the land, island and maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras) - The Nicaraguan Intervention", I.C.L.Q., 1992, pp.896-906.
- EVENSEN, J., "Evidence before International Courts", Acta Scandinavica iuris gentium, 1955, pp.44-62.
- FACHIN, A.D., "Advisory Opinion nº12 delivered november 21, 1925. Frontier between Turkey and Iraq", B.Y.B.I.L., 1920, pp.203-205.
- FACHIRI, P., "Judgmet delivered April 5, 1933", B.Y.B.I.L., 1933, pp.174-180.
- FAUCHILLE, P., "Le conflit de limites entre le Brésil et la Grande-Bretagne", R.G.D.I.P., 1905, pp.25-142.

- FAUCHILLE, P., "Le conflit de limites entre la Colombie et le Venezuela et la sentence arbitrale de la Couronne d'Espagne du 16 mars 1891", R.G.D.I.P., 1920, pp.181-216.
- FENWICK, C.G., "Honduras-Nicaragua Boundary Dispute", A.J.I.L., 1957, pp.761 y ss.
- FERRIER, J.P., "Le conflit des Iles Parecels et le problème de la souveraineté sur les îles inhabitées", A.F.D.I., 1975, pp.175-196.
- FIORE, P., "Observazioni sulla sentenza arbitrale pronunciata del Presidente della Repubblica Argentina nella vertenza per regolamento di confini tra la Bolivia e il Peru", Riv.Dir.Int., 1909, p.425 y ss.
- FIORE, P., "La sentence arbitrale du Presidente de la République Argentine dans le conflit de limites entre la Bolivie et le Pérou", R.G.D.I.P., 1910, pp.225-256.
- FISHER, F.C., "Arbitration of the Guatemalan-Honduran Boundary Dispute", A.J.I.L., 1933, pp.403-427.
- FITZMAURICE, G.Sir, "The Law and the Procedure of the I.C.J., 1951-54: General principles and Sources of Law", B.Y.B.I.L., 1953, pp.1-70.
- FITZMAURICE, G.Sir, "The Law and Procedure of the I.C.J., 1951-54: Points of Substantive Law. Part II", B.Y.B.I.L., 1955-56, pp.20 y ss.
- FLEISCHHAUER, C.A., "Prescription", en R.BERNHARDT (ed), Encyclopaediae of Public International Law, vol.10, Amsterdam, 1987, pp.327-330.
- FLORY, M., "La notion de territoire arabe et son application au problème du Sahara", A.F.D.I., 1957, pp.73-91.
- FLORY, M., "L'avis de la C.I.J. sur le Sahara occidental", A.F.D.I., 1975, pp.253-277.
- FRANÇOISE, J.P.A., "Réflexions sur l'occupation", en Recueil d'études de droit international en hommage à Paul Guggenheim, Ginebra, pp.793-805.
- GALVAO TELES, I., "A sentença do Tribunal da Haia e a soberania portuguesa", Anuario I.H.L.A.D.I., 1963, pp.149-152.
- GARNER, J.W., "The International Binding Force of Unilateral Oral Declarations", A.J.I.L., 1933, pp.493-497.
- GENET, R., "Notes sur l'acquisition par occupation et le droit des gens traditionnel", R.D.I.L.C., 1934, pp.285-324.

- GILLIS WETTER, J., "The Rann of Kutch Arbitration", A.J.I.L., 1971, pp.340 y ss.
- GIULANO, M., "Lo Stato, il territorio e la sovranità territoriale", Comunicazioni e Studi, vol.VI, pp.19 y ss.
- GOLDIE, L.F.E., "The Critical Date", I.C.L.Q., 1963, pp.1251-1284.
- GONZALES, F., "Los límites de las Repúblicas Hispánicas y el principio del uti possidetis", La Revista de Buenos Aires, 1869, pp.35 y ss.
- GONZALEZ CAMPOS, J.D., "Algunas consideraciones sobre los problemas de la sucesión de Estados", R.E.D.I., 19663, pp.564 y ss.
- GOY, R., "L'affaire de l'oasis de Buraimi", A.F.D.I., 1957, pp.188-205.
- GREIG, D.W., "The Beagle Channel Arbitration", A.Y.I.L., 1976/77, pp.332-385.
- GREÑO VELASCO, J.E., "La lucha por las fronteras", R.P.I., 1975, pp.147-164.
- GREWE, W.G., "Status quo", en R.BERNHARDT (ed), Encyclopaediae of Public International Law, vol.7, Amsterdam, 1984, pp.438-442.
- GROS ESPIELL, H., "Un episodio de Historia Diplomática: Gil Fortoul y el Laudo Suizo de 1922", Revista Internacional y Diplomática, 1979, pp.17-19.
- GROS ESPIELL, H., "El derecho intertemporal y las formas de adquisición del territorio en el Derecho internacional contemporáneo", Jurídica, 1982, pp.150 y ss.
- GUESALAGA, A., "Le litige des Missions", Rev. d'Hist.Dipl., 1894, pp.74-80.
- GUTIERREZ ALFARO, T., "Isla de Aves, un arbitraje favorable a Venezuela", B.A.C.P.S., 1973, pp.255-259.
- GUYOMAR, G., "Affaire de la sentence arbitral rendue par le Roi d'Espagne le 23 décembre 1906. Arrêt du 18 novembre 1960", A.F.D.I., 1960, pp.362-371.
- HALL, H.D., "The International Frontier", A.J.I.L., 1948, pp.42-65.
- HAMMER, W., "Boundary Disputes in Latin America", en R.BERNHARDT (ed), Encyclopaediae of Public International Law, vol.6, Amsterdam, 1983, pp.60-66.

- HERNDL, K., "Minquiers and Ecrehos Case", en R.BERNHARDT (ed), Encyclopaediae of Public International Law, vol.2, Amsterdam, 1981, pp.192-194.
- HEYDTE, F. von Der, "Discovery, symbolic annexation and virtual effectiveness in International Law", A.J.I.L., 1935, pp.448 y ss.
- HIMMELREICH, D.M., "The Beagle Channel affair: A Failure in judicial persuasion", Vand.J.Transnat'l L., 1979, pp.971-998.
- HINKS, A.R., "Notes on the Technique of Boundary Delimitation", Geo.Journ., 1921, pp.417-443.
- HOLDICH, Th., "Political Boundaries", Scottish Geographical Magazine, 1916, pp.500 y ss.
- HÖPFNER, M., "Delagoa Bay Arbitration", en R.BERNHARDT (ed), Encyclopaediae of Public International Law, vol.2, Amsterdam, 1981, pp.73-75.
- HUARAKA, T., "Walvis Bay and International Law", Indian Y.I.L., 1978, pp.160-174.
- HUDSON, M.O., "The Minquiers and Ecrehos Case", A.J.I.L., 1954, pp.6-12.
- HUMMER, W., "Boundary Disputes in Latin America", en R.BERNHARDT (ed), Encyclopaediae of Public International Law, vol.6, Amsterdam, 1984, pp.60 y ss.
- HYDE, C.C., "Notes on Rivers as Boundary", A.J.I.L., 1912, p.901-909.
- HYDE, C.C., "The Case concerning the Legal Status of Eastern Groenland", A.J.I.L., 1933, pp.732-738.
- HYDE, C.C., "Maps as Evidence in International Boundary Disputes", A.J.I.L., 1933, pp.311-316.
- HYDE, C.C., "Conquest Today", A.J.I.L., 1936, pp.471 y ss.
- JANNIS, M.W., "The I.C.J.: Advisory Opinion on the Western Sahara", Harvard I.L.J., 1976, pp.609-621.
- JANNIS, M.W., "Equity in International Law", en R.BERNHARDT (ed), Encyclopaediae of Public International Law, vol.7, Amsterdam, 1984, pp.74-78.
- JASUDOWICZ, T., "The prohibition to apply the 'rebus sic stantibus' norm with respect to treaties establishing national frontiers", P.Y.I.L., 1976, pp.155-181.

- JENNINGS, R.Y., "Equity and Equitable Principles", A.S.D.I., 1986, pp.27 y ss.
- JESSUP, P.C., "The Palmas Island Arbitration", A.J.I.L., 1928, pp.735 y ss.
- JIMENEZ DE ARECHAGA, E., "The Work and the Jurisprudence of the I.C.J., 1947-1986", B.Y.B.I.L., pp.1 y ss.
- JIMENEZ DE ARECHAGA, E., "Boundaries in Latin America: Uti possidetis Doctrine", en R.BERNHARDT (ed), Encyclopediae of Public International Law, vol.6, Amsterdam, 1983, pp.45-49.
- JOHNSON, D.H.W., "The Role of Political Boundaries", Geo.Rev., 1917, pp.208 y ss.
- JOHNSON, D.H.W., "Acquisitive Prescription in International Law", B.Y.B.I.L., 1950, pp.322 y ss.
- JOHNSON, D.H.W., "The Miquiers and Ecrehos Case", I.C.L.Q., 1954, pp.189-216.
- JOHNSON, D.H.W., "Consolidation as a Root of Title in International Law", Camb.L.J., 1955, pp.214 y ss.
- JOHNSON, D.H.W., "Case concerning the Arbitral Award made by the King of Spain on December 23, 1906", I.C.L.Q., 1961, pp.328-337.
- JOHNSON, D.H.W., "Judgments of May 26, 1961, and June 15, 1962. The Case concerning the Temple of Preah Vihear", I.C.L.Q., 1962, pp.1183-1204.
- JOORIS, J., "De l'occupation des territoires sans maître sur la côté d'Afrique. La question d'Angra-Pequena", R.D.I.L.C., 1886, pp.236-243.
- JUSTE RUIZ, J., "La equidad en Derecho internacional público: aspectos actuales", Anuario I.H.L.A.D.I., 1991, pp.85-139.
- KAIKOBAD, K.H., "Some observations on the doctrine of continuity and finality of boundaries", B.Y.B.I.L., 1983, pp.119-141.
- KAISER, J.H., "Grisbadarna Case", en R.BERNHARDT (ed), Encyclopediae of Public International Law, vol.2, Amsterdam, 1981, pp.124-125.
- KAISER, J.H., "Timor Island Arbitration", en R.BERNHARDT (ed), Encyclopediae of Public International Law, vol.2, Amsterdam, 1981, pp.274-275.
- KELLY, G.M., "The Temple Case in Historical Perspective", B.Y.B.I.L., 1963, pp.462-472.

- KELSEN, H., "Continuity as a title to territorial sovereignty", en Festschrift für Hans Wehberg, Frankfurt, 1956, pp.200 y ss.
- KHAN, R., "Relinquishment of Title to Territory, the Rann of Kutch Award. A Case Study", Indian J.I.L., 1969, pp.157-176.
- KOHEN, M.G., "L'uti possidetis revisite: l'arrêt du 11 septembre 1992 dans l'affaire El Salvador/Honduras", R.G.D.I.P., 1993, pp.939-973.
- LAGERGREN, G., "The Taba Tribunal 1986-89", R.A.D.I.C., 1989, pp.525-532.
- LAGONI, R., "Palmas Island Arbitration", en R.BERNHARDT (ed), Encyclopediae of Public International Law, vol.2, Amsterdam, 1981, pp.223-224.
- LALIVE, J.F., "Quelques remarques sur la preuve devant la Cour Permanente et la Cour Internationale de Justice", A.S.D.I., 1950, pp.77-103.
- LAPIDOTH, R., "Some Reflections on the Taba Award", G.Y.B.I.L., 1992, pp.224-248.
- LAPRADELLE, A., et POLITIS, N., "L'arbitrage anglo-brésilien de 1904", R.D.P.S.P., pp.326 y ss.
- LAPRADELLE, A., et POLITIS, N., "L'indivisibilité de la frontière et le conflit Colombo-Vénézuélien", R.G.D.I.P., 1921, pp.107-121.
- LAUTERPACHT, H., "Restrictive interpretation and the principle of effectiveness in the interpretation of treaties", B.Y.B.I.L., 1949, pp.48-85.
- LAUTERPACHT, H., "Sovereignty over Submarine Areas", B.Y.B.I.L., 1950, pp.376-436.
- LAUTERPACHT, E., "The Taba Case: some Recollections and Reflections", Israel L.R., 1989, pp.443-468.
- LAVELEYE, M.M. de, "La neutralité du Congo", R.D.I., 1883, pp.257 y ss.
- LOUIS, J.V., "L'estoppel devant la C.I.J.", R.D.I.L.C., 1965, pp.219 y ss.
- Mac GIBBON, I.C., "The Scope of Acquiescence in International Law", B.Y.B.I.L., 1954, pp.143 y ss.
- Mac GIBBON, I.C., "Customary International Law at Acquiescence", B.Y.B.I.L., 1957, pp.115 y ss.

- Mac GIBBON, I.C., "Estoppel in International Law", I.C.L.Q., 1958, pp.468-513.
- MAIER, G., "The Boundary Dispute between Ecuador and Peru", A.J.I.L., 1969, pp.28-46.
- MARTENS, E.K., "Sovereignty over certain frontier land Case (Belgium-Netherlands)", en R.BERNHARDT (ed), Encyclopediae of Public International Law, vol.2, Amsterdam, 1981, pp.270-271.
- MARTITZ, M., "Occupations des territoires. Rapport et projet de resolutions présentés à l'Institut de Droit international", R.D.I.L.C., 1887, pp.371-376.
- MASAHIRO, M., "Equity in International Arbitration with particular reference to Arbitrations of Territorial and Boundary Disputes", K.G.Z., 1978, pp.1-39.
- MATHIAS, H.K.H., "The Value of Maps as Evidence in International Boundary Disputes", The National Chengchi University Journal, 1971, pp.53 y ss.
- McNAIR, A., "Aspects of State Sovereignty", B.Y.B.I.L., 1949, pp.6-47.
- MELO, A.L., "Análisis jurídico de las consencuencias de la declaración de nulidad en el caso del Canal de Beagle", Revista de Dº Internacional y Ciencias Diplomáticas, 1977/78, pp.57-69.
- MENGEL, H.J., "Der entscheidungsrelevante Zeitpunkt für die völkerrechtliche Beurteilung von Streitigkeiten territorialer souveränität", G.Y.I.L., 1981, pp.92 y ss.
- MENON, P.K., "The Guyana-Venezuela Boundary Dispute", R.D.I.S.C., 1979, pp.166-187.
- MENON. P.K., "Guyana-Venezuela Boundary Dispute", en R.BERNHARDT (ed), Encyclopediae of Public International Law, vol.6, Amsterdam, 1984, pp.212 y ss.
- MENON, P.K., "Settlement of International Boundaries Disputes", Anglo-American L.R., 1979, pp.24-35; y R.D.I.S.D., 1979, pp.139-152..
- MENON, P.K., "Title to Territory: Traditional Modes of Acquisition by States", R.D.I.S.D.P., 1994, pp.1-54.
- MERIBOUTE, Z., "L'annexion en droit international contemporain", R.D.I., 1986, pp.37-57.
- MESA. R., "Las fronteras de la descolonización, reflexiones en torno al conflicto argelino-marroquí", R.E.D.I., 1966, pp.51 y ss.

- MEYER-LINDENBERG, H., "Gran Chaco Conflit", en R.BERNHARDT (ed), Encyclopediae of Public International Law, vol.2, Amsterdam, 1981, pp.120-122.
- MILANESI, E., "Controversie di confine e accordi di delimitazione", Comunità Internazionale, 1978, pp.550-572.
- MONTIEL ARGUELLO, A.L., "Frontières et lignes de delimitation", R.G.D.I.P., 1971, pp.461 y ss.
- MONTLUC, A., "Le droit de conquête", R.D.I.L.C., 1873, pp.581-588.
- MORALES PAUL, I., "Las nuevas tendencias del Derecho internacional para la solución de controversias relativas a zonas fronterizas", Anuario I.H.L.A.D.I., 1984, pp.173-214.
- MORENO, A., "Sahara Español: Una descolonización controvertida", R.P.I., 1975, pp.73-91.
- MOULIN, H.D., "L'affaire du territoire d'Acre et la colonization interne des continents occupés en droit", R.G.D.I.P., 1904, pp.150-191.
- MÜLLER, J.P., et COTTIER, Th., "Acquiescence", en R.BERNHARDT (ed), Encyclopediae of Public International Law, vol.7, Amsterdam, 1984, pp.5-7.
- MÜLLER, J.P., et COTTIER, Th., "Estoppel", en R.BERNHARDT (ed), Encyclopediae of Public International Law, vol.7, Amsterdam, 1984, pp.78-81.
- MÜNCH, F., "Walvis Bay, un arbitrage peu connu", Comunicazioni e Studi, 1975, pp.607-625.
- MÜNCH, F., "Maps", en R.BERNHARDT (ed), Encyclopediae of Public International Law, vol.10, Amsterdam, 1987, pp.295-297.
- MUNKMAN, A.L.W., "Adjudication and Adjustment - International Judicial Decision and the Settlement of Territorial and Boundary Disputes", B.Y.B.I.L., 1972/73, pp.1-116.
- MUNSHI, A.A., "The Background and Basis of the Rann of Kutch Award", Pakistan Horizon, 1970, pp.37-50.
- MURTY, T.S., "Boundaries and Maps", Indian J.I.L., 1964, pp.367-388.
- NALDI, G.J., "The Case concerning the Frontier Dispute (Burkina Fasso/Republic of Mali): Uti possidetis in African Perspective", I.C.L.Q., 1987, pp.893-903.
- NELSON, L.D.M., "The Arbitration of Boundary Disputes in Latin

- America", N.I.L.R., 1973, pp.267 y ss.
- NESI, G., "Uti possidetis iuris e delimitazioni maritime", Riv.Dir.Int., 1991, pp.534-570.
- NYS, E., "L'acquisition de territoire", R.D.I.L.C., 1899, pp.180 y ss; 1904, pp.365 y ss, y pp.604 y ss; 1905, pp.53 y ss.
- NYS, E., "Rivières et fluvies frontières. La ligne médiane et le thalweg. Un aperçu historique", R.D.I.L.C., 1901, pp.75 y ss.
- OELLER-FRAHN, K., "Argentina-Chile Frontier Case", en R.BERNHARDT (ed), Encyclopediae of Public International Law, vol.2, Amsterdam, 1981, pp.24-26.
- OELLER-FRANH, K., "Western Sahara (Advisory Opinion)", en R.BERNHARDT (ed), Encyclopediae of Public International Law, vol.2, Amsterdam, 1981, pp.291-293.
- OEKERE, B.O., "The Western Sahara Case", I.C.L.Q., 1979, pp.296-312.
- ORCASITAS LLORENTE, L., "Sentencia del T.I.J. de La Haya sobre soberanía de las islas Minquiers y Ecrehous en el Canal de la Mancha", R.E.D.I., 1954, pp.531-549.
- ORCASITAS LLORENTE, L., "Sentencia del T.I.J. de La Haya de 20 junio 1959, recaída en pleito surgido entre Bélgica y Holanda, sobre la soberanía sobre ciertas parcelas fronterizas", R.E.D.I., 1960, pp.519-529.
- ORENT, B., and REINSCH, D., "Sovereignty over Islands in the Pacific", A.J.I.L., 1941, pp.443-461.
- ORTIZ GARCIA, A., "Sentencia del T.I.J. sobre un arbitraje del Rey de España", R.E.D.I., 1961, pp.197-203.
- PANELLA, L., "Controversia tra Chili e Argentina sul canale di Beagle. Pai procedenti di tentativi di soluzione alla mediazione della S.Sede", Comunità Internazionale, 1980, pp.664-685.
- PECOURT GARCIA, E., "El principio del 'estoppel' en derecho internacional público", R.E.D.I., 1962, pp.97-139.
- PECOURT GARCIA, E., "El principio del estoppel y la sentencia del T.I.J. en el caso del Templo de Preah Vihear", R.E.D.I., 1963, pp.153-166.
- PEPIN, E., "Valeur des cartes géographiques comme preuve du tracé des frontières", Affaires étrangères, 1938, pp.216-221.
- PEREZ SARMIENTO, J.M., "Acción tutelar de España en las

- cuestiones de límites de la América Española. El *uti possidetis iuris* de 1810", Boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores, 1931, pp.731-747.
- PINTO, R., "La delimitation de la frontière entre l'Egypte et Israël dans la zone de Taba", R.D.I., 1989, pp.569-585.
- PHILLIPS, P., "The value of Maps in Boundary Disputes", A.H.A.A.R., 1896, pp.123-129.
- PLATT, R.R., "Present Status of International Boundaries in South America", Geo.Rev., 1926, pp.622-638.
- PREVOST, J.F., "Observations sur l'avis consultatif de la C.I.J. relatif au Sahara occidental ('terra nullius' et autodétermination)", R.D.I., 1976, pp.813-862.
- PUIG, J.C., "Estado y territorio", Revista de D^o internacional y Ciencias Diplomáticas, 1952, pp.6 y ss.
- QUENEUEDEC, J.D., "Remarques sur le règlement des conflits frontaliers en Afrique", R.G.D.I.P., 1970, pp.69-77.
- QUENEUEDEC, J.D., "La règlement du différend frontalier Burkina Faso/Mali par la C.I.J.", R.J.P.I.C., 1988, pp.29-41.
- QUINTANA, J.J., "The Latin American Contribution to International Adjudication. The Case of the I.C.J.", N.I.L.R., 1992, pp.127-154.
- RAMARAO, T.S., "An Appraisal of the Kutch Award", Indian J.I.L., 1969, pp.143-156.
- REEVES, J.S., "International Boundaries", A.J.I.L., 1944, pp.533-545.
- REMIRO BROTONS, A., "El territorio, la frontera y las comunidades fronterizas: reflexiones sobre la cooperación transfronteriza", en I Semana de cuestiones internacionales (cátedra Alonso V de Aragón), Zaragoza, 1981, pp.103 y ss.
- RENAULT, L., "Le différend entre la Bolivie et le Perou et l'arbitrage international", R.G.D.I.P., 1909, pp.368-372.
- RENAULT, L., "Une nouvelle mission donnée aux arbitres dans les litiges internationaux", R.G.D.I.P., 1984, pp.44 y ss.
- REUTER, P., "La motivation et la révision des sentences arbitrales à la Conference de la Paix de La Haye (1899) et le conflit frontalier entre le Royaume Uni et le Venezuela", en Mélanges offerts à Junay Andrassy, La Haya, 1968, pp.237-247.
- REY CARO, E., "Las reservas de la República Argentina a la

- Convención sobre el derecho de los tratados. El estoppel y la cláusula rebus sic stantibus", A.D.I., 1975, pp.229-251.
- REY CARO, E.J., "La cuestión del Beagle. La solución a un conflicto centenario", A.A.D.I., 1984/86, pp.133-172.
- RIEDEL, E.H., "Confrontation in Western Sahara in the light of the Advisory Opinion of the I.C.J. of the 16 october 1975", G.Y.I.L., 1976, pp.405-442.
- ROLIN JAEQUEMYS, G., "Note sur le droit de conquête", R.D.I.L.C., 1871, pp.536-539.
- ROUARD DE CARD, E., "Le différend Franco-Brésilien", R.G.D.I.P., 1897, pp.277-296.
- ROUSSEAU, Ch., "Chronique des faits internationaux: Etats Unis d'Amérique et Grande Bretagne (dominion du Canada)", R.G.D.I.P., 1904, pp.210-219.
- ROUSSEAU, Ch., "Achèvement de la delimitation de la frontière établie par la convention de Maestricht du 8 août 1843 dans la région de Baarle-Nassau en exécution de l'arrêt rendu le 20 juin 1959 par la CIJ", R.G.D.I.P., 1975, pp.166-168.
- RUIZ MORENO, I., "El fallo del Canal de Beagle. Conferencia en el Colegio de Abogados de la C. de Bs.As. de 2-11-77", Rev.Colegio de Abogados de B.A., 1977, pp.9-27.
- RUSTEMEYER, A., "Temple of Preah Vihear Case", en R.BERNHARDT (ed), Encyclopaediae of Public International Law, vol.2, Amsterdam, 1981, pp.273-274.
- SALMON, J.J.A., "La sentence du 19 février 1968 du Tribunal d'arbitrage dans l'affaire de la frontière occidentale entre l'Inde et le Pakistan (Affaire du Rann de Kutch)", A.F.D.I., 1968, pp.217-237.
- SANCHEZ RODRIGUEZ, L.I., "El problema de la fecha crítica en los litigios relativos a la atribución de la soberanía territorial del Estado", A.D.I., 1977-78, pp.53 y ss.
- SANCHEZ RODRIGUEZ, L.I., "'Uti possidetis': La reactualización jurisprudencial de un viejo principio (a propósito de la sentencia del TIJ (Sala) en el asunto Burkina Faso/República de Mali)", R.E.D.I., 1988, pp.121-151.
- SANCHEZ RODRIGUEZ, L.I., "Fecha crítica, contenciosos territoriales y jurisprudencia internacional", en Hacia un nuevo orden internacional europeo. Homenaje al Prof.M.Díez de Velasco, Madrid, 1993, pp.661-680.
- SANCHEZ RODRIGUEZ, L.I., "Problemas de fronteras en América: las

- fronteras terrestres entre países iberoamericanos", en JORNADAS IBEROMERICANAS DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE PROFESORES DE DERECHO INTERNACIONAL Y RELACIONES INTERNACIONALES, La Escuela de Salamanca y el Derecho internacional en América. Del pasado al futuro, Salamanca, 1993, pp.93-115.
- SCHOENRICH, O., "The Venezuela-British Guiana Boundary Dispute", A.J.I.L., 1949, pp.523-530.
- SCHOU, A., "Le role du territoire dans le Droit international", Acta Scandinavica Iuris Gentium, 1939, pp.47 y ss.
- SCHWARZENBERGER, G., "Title to Territory", A.J.I.L., 1957, pp.308-324.
- SCHWARZENBERGER, G., "Title to Territory: Response to a Challenge", en International Law in the Twentieth Century, Nueva York, 1969, pp.287 y ss.
- SCOTT, J.B., "Swiss Decision in the Boundary Disputes between Colombia and Venezuela", A.J.I.L., 1922, pp.428 y ss.
- SERBIN, A., "Les conflits interétatiques dans les Amériques", Etudes Internationales., 1986, pp.367-382.
- SHAW, M.N., "The Beagle Channel Arbitration Award", International Relations, 1978, pp.415-445.
- SHAW, M.N., "Territory in International Law", N.Y.B.I.L., 1982, pp.61-91.
- SHAW, M.N., "Dispute Settlement in Africa", Yearbook of World Affairs, 1983, pp.149 y ss.
- SILVA CASTRO, P. da, "O Direito internacional americano e o uti possidetis", Boletín da Sociedade Brasileira de Direito Internacional, 1948, pp.68-81.
- SIMSARIAN, J., "The Acquisition of Legal Title to 'terra nullius'", P.S.Q., 1938, pp.111-128.
- SKUBISZEWSKI, K., "Administration of Territory and Sovereignty: a Comment on the Postdam Agreement", ArchVR, 1985, pp.31-41.
- SMITH, H.C., "On the Frontier of Bristish Guiana and Brazil", Geo.Journ., 1938, pp.40 y ss.
- SMITH, M.A.J., "Sovereignty over unoccupied territoires -The Western Sahara Decision", Case W.R.J.I.L., 1977, pp.135-159.
- SORENSEN, M., "Le problème dit du droit intertemporel dans

- l'ordre international", Annuaire de l'I.D.I., 1973, pp.1-116; 1975, pp.339-374 y 536-540.
- SPERDUTI, G., "Prescrizione consuetudine e acquiescenza in Diritto internazionale", Riv.Dir.Int., 1961, pp.3-15.
- ST.JOHN, R.B., "The Boundary Dispute between Ecuador and Peru", A.J.I.L., 1977, pp.322-330.
- STARKE, A., "The Acquisition of Title to Territory by Newly Emerged states", B.Y.B.I.L., 1965-66, pp.411 y ss.
- STEINBERGER, H., "Sovereignty", en R.BERNHARDT (ed), Encyclopediae of Public International Law, vol.10, Amsterdam, 1987, pp.397 y ss.
- STONE, J., "What Price of Effectiviness?", en International Law in the Twentieth Century, Nueva York, 1969, pp.160 y ss.
- THIRLWAY, H.W.A., "Evidence before International Courts and Tribunals", en R.BERNHARDT (ed), Encyclopediae of Public International Law, vol.1, Amsterdam, 1981, pp.58-60.
- THORNBERRY, C., "The Temple of Preah Vihear Case (Cambodia v. Thailand)", Modern L.Rev., 1963, pp.448-451.
- TOMAS ORTIZ DE LA TORRE, J.A., "Sahara occidental 'Terra nullius'? Algunas bases jurídicas de investigación", R.G.L.J., 1975, pp.563-605.
- TORRES BERNALDEZ, S., "Territorial Sovereignty", en R.BERNHARDT (ed), Encyclopediae of Public International Law, vol.10, Amsterdam, 1987, pp.487 y ss.
- TRAN VAN MINH, "Les frontières du Cambodge et du Vietnam", R.J.P.I.C., 1979, pp.37-66.
- TRAVERS TWISS, "La libre navigation du Congo", R.D.I., 1883, pp.550 y ss.
- TREVES, T., "La continuità dei trattati ed i nuovi stati indipendenti", Comunicazioni e Studi, 1969, pp.333 y ss.
- TREVIRANUS, H.D., "Vienna Convention on succession of States in respect of treaties", en R.BERNHARDT (ed), Encyclopediae of Public International Law, vol.10, pp.523-524.
- TRUYOL SERRA, A., "Las fronteras y las marcas", R.E.D.I., 1957, pp.105 y ss.
- TYRANOWSKI, J., "Boundary treaties between Poland and the two German States and the problem of the State succession", Pol.W.Aff., 1979, pp.112-132.
- TYRANOWSKI, J., "State Succession Boundaries and Boundary

- Treaties", P.Y.I.L., 1980, pp.115-135.
- UNTAWALE, M.G., "The Kutch-Sind Dispute. A Case Study in International Arbitration", I.C.L.Q., 1974, pp.818-839.
- VALLEE, Ch., "Quelques observations sur l'estoppel en droit des gens", R.G.D.I.P., 1973, pp.949-999.
- VEGA VERA, D., "La Isla de Clipperton: Un caso olvidado por los juristas mexicanos", A.M.R.I., 1981, pp.420 y ss.
- VERZJIL, J.H.W., "Territorial Controversies before the I.C.J.", N.I.L.R., 1953-54, pp.234-258, y pp.356-364.
- VERZJIL, J.H.W., "L'affaire de la sentence arbitrale rendue par le Roi d'Espagne", N.Y.I.L., 1961, pp.113-128.
- VINUESA, R.E., "Le reglement des conflits de limites entre Etats membres d'un Etat federa: l'experience argentine, utilisation du droit international et apports à celui-ci", A.F.D.I., 1988, p.283 y ss.
- VISMARA, M., "Affare dei Minquiers e degli Ecréhous", Comunità Internazionale, 1955, pp.306-309.
- VISSCHER, F. de, "Le litige Colombo-Vénézuélien", R.D.I.L.C., 1922, pp.463-479.
- VISSCHER, F. de, "L'arbitrage de Tacna et Arica", R.G.D.I.P., 1925, pp.443-470.
- VISSCHER, F. de, "L'arbitrage de l'Ile de Palmas (Miangas)", R.D.I.L.C., 1929, pp.735-762.
- VISSCHER, Ch. de., "La recherche de l'effectivité dans les principales orientations de la jurisprudence internationale", en Recueil d'études de droit international en hommage à Paul Guggenheim, Ginebra, 1968, pp.766-770.
- VON MÜNCH, I., "Clipperton Island Arbitration", en R.BERNHARDT (ed), Encyclopaediae of Public International Law, vol.2, Amsterdam, 1981, pp.53-54.
- VON MÜNCH, I., "Estern Greenland Case", en R.BERNHARDT (ed), Encyclopaediae of Public International Law, vol.2, Amsterdam, 1981, pp.81-84.
- WADE, E.C., "The Minquiers and Ecrehos Case", Transactions of the Grotius Society for the year 1954, 1955, pp.97-109.
- WAELEBROECK, M., "L'Acquiescement en droit des gens (commentaire de l'arrêt de la C.I.J. du 18 novembre 1960)", Riv.Dir.Int., 1961, pp.38-53.

- WAHEEDRAAFA, T., "The Taba Case", R. Egyptienne D.I., 1983, pp.1 y ss.
- WALDOCK, C.H.W., "Disputed Sovereignty in Falkand Island Dependencies", B.Y.B.I.L., 1948, pp.311-353.
- WALDOCK, H. Sir, "Tercer Informe sobre el Derecho de los Tratados", Anuario de la C.D.I., 1964, vol.II, pp. 1 y ss.
- WALLACE-BRUCE, N.I., "Two hundred years on: a reexamination of the acquisition of Australia", Ga.J.I.C.L., 1989, pp.87-116.
- WAUTERS, "Lettre du 27 mai 1883", Revue de Geographie, 1883, pp.59 y ss.
- WEISS, A., "L'arbitrage de 1909 entre la Bolivie et le Pérou", R.G.D.I.P., 1910, pp.105-136.
- WEISSBERG, G., "Maps as evidence in International Boundary Disputes: A Reappraisal", A.J.I.L., 1963, pp.781-803.
- WESTLAKE, J., "Le conflit anglo-portuguais", R.D.I.L.C., 1890, pp.170 y ss.
- WETTER. J.G., "The Rann of Kutch Arbitration", A.J.I.L., 1971, pp.346-357.
- WILSON LARMAN, C., "The Settlement of Boundary Disputes: Mexico, the U.S., and the International Boundary Commission", I.C.L.Q., 1980, pp.38-53.
- WITENBERG, J.C., "Onus probandi devant les juridictions arbitrales", R.G.D.I.P., 1951, pp.321-342.
- WOOLDRIDGE, F., "The Advisory Opinion of the I.C.J. in the Western Sahara Case", Anglo-American L.R., 1979, pp.86-122.
- WOOLDRIDGE, F., "Uti Possidetis Doctrine", en R.BERNHARDT (ed), Encyclopediae of Public International Law, vol.10, Amsterdam, 1987, pp.519 y ss.
- WOOLSEY, L.H., "The Tacna-Arica Settlement", A.J.I.L., 1929, pp.605-610.
- WOOLSEY. L.H., "Boundary Disputes in Latin America", A.J.I.L., 1931, pp.324-333.
- WOOLSEY, L.H., "The Settlement of the Chaco Dispute", A.J.I.L., 1939, pp.126-129.
- WRIGHT, Q., "Territorial Propinquity", A.J.I.L., 1918, pp.519 y ss.

- WRIGHT, Q., "L'arbitrage de Tacna-Arica", R.D.I.L.C., 1925, pp.45 y ss.
- WÜHLER, N., "Arbitral Award of 1906 Case (Honduras v.Nicaragua)", en R.BERNHARDT (ed), Encyclopediae of Public International Law, vol.2, Amsterdam, 1981, pp.22-23 y pp.130-132.
- YAKOMTCHOUK, R., "Les frontières africaines", R.G.D.I.P., 1970, pp.26-68.
- ZAMBRANO VELASCO, J.A., "Examen de algunas cuestiones relacionadas con el territorio del Estado y, en particular, del criterio para la determinación de los límites territoriales de Venezuela: el 'uti possidetis iuris' de 1810 (artículo 7 de la Constitución)", en Estudios sobre la Constitución. Libro Homenaje a Rafael Caldera, vol.I, Caracas, 1979, pp.287 y ss.
- ZAYAS, A.M.de, "Territory, Abandonment", en R.BERNHARDT (ed), Encyclopediae of Public International Law, vol.10, Amsterdam, 1987, pp.493 y ss.
- ZAYAS, A.M.de, "Territory, Discovery", en R.BERNHARDT (ed), Encyclopediae of Public International Law, vol.10, Amsterdam, 1987, pp.504 y ss.
- ZICCARDI CAPALDO, G., "Il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia sul Sahara occidentale: Un'occasione per un riesame della nature e degli effetti della funzione consultiva", Comunicazione e Studi, 1978, pp.529-564.

II. ANEXO DE JURISPRUDENCIA

1. JURISPRUDENCIA DEL T.P.J.I.

- Dictamen consultivo sobre la cuestión de la frontera de la Jawarzina, 6 diciembre 1923. P.I.C.J., serie B, nº 8.
- Asunto de las Concesiones Mavrommatis en Palestina (Grecia / Gran Bretaña), 30 agosto 1924. P.I.C.J., serie A, nº2.
- Dictamen consultivo sobre el Monasterio de St.Naoum, 4 septiembre 1924. P.I.C.J., serie B, nº9.
- Asunto de las Concesiones Mavrommatis en Jerusalem (Grecia / Gran Bretaña), 26 marzo 1925. P.I.C.J., serie A, nº 5.
- Dictamen consultivo sobre la interpretación del artículo 3 del Tratado de Lausanne, 21 noviembre 1925. P.I.C.J., serie B, nº12.
- Asunto de ciertos intereses alemanes sobre la Alta Silesia Polaca, 25 mayo 1926. P.I.C.J., serie A, nº7.
- Asunto de la Fábrica de Chorzow, 13 septiembre 1928. P.I.C.J., serie A, nº17.
- Asunto del pago en oro de los empréstitos federales brasileños emitidos en Francia, 12 julio 1929. P.I.C.J., serie A, nº20-21.
- Asunto de las Zonas francas de Alta Saboya y el Distrito de Gex, 7 junio 1932. P.I.C.J., serie A/B, nº46.
- Asunto del Estatuto jurídico de Groenlandia Oriental (Dinamarca / Noruega), 5 abril 1933. P.I.C.J., serie A/B, nº 53.

2. JURISPRUDENCIA DEL T.I.J.

- Asunto del Estrecho de Corfú (Reino Unido e Irlanda del Norte / Albania), 9 abril 1949. I.C.J.Reports, 1949, pp.1-220.
- Dictamen consultivo sobre la interpretación de los tratados de paz con Bulgaria, Hungría y Rumania, 30 marzo 1950. I.C.J.Reports, 1950, pp.65-119.
- Asunto relativo al derecho de asilo (Colombia / Perú), 20 noviembre 1950. I.C.J.Reports, 1950, pp.265-389.
- Asunto de las Pesquerías anglo-noruegas (Reino Unido / Noruega), 18 diciembre 1951. I.C.J.Reports, 1951, pp.1-9.
- Asunto relativo a los derechos de los súbditos de EE.UU. de América en Marruecos (EE.UU. / Marruecos), 27 agosto 1952. I.C.J.Reports, 1952, pp.20-26.
- Asunto de las Islas de Minquiers y Ecrehous (Reino Unido / Francia), 29 enero 1953. I.C.J.Reports, 1953, pp.47-66.
- Asuntos de la Antártida (Reino Unido / Argentina; Reino Unido / Chile), 16 marzo 1956. I.C.J.Reports, 1956, pp.12-14 y pp.15-17.
- Asunto relativo a la soberanía sobre ciertas parcelas fronterizas (Bélgica / Países Bajos), 20 junio 1959. I.C.J.Reports, 1959, pp.114-132.
- Asunto del derecho de paso por territorio indio (Portugal / India), 12 abril 1960. I.C.J.Reports, 1960, pp.5-144.
- Asunto relativo al laudo arbitral del Rey de España de 23 diciembre 1906 (Honduras / Nicaragua), 18 noviembre 1960. I.C.J.Reports, 1960, pp.192-239.
- Asunto relativo al Templo de Preah Vihear (Camboya / Tailandia), 15 junio 1962. I.C.J. Reports, 1962, pp.6-146.
- Asunto del Sudoeste Africano (Etiopía / Sudáfrica; Liberia / Sudáfrica), 18 julio 1966. I.C.J.Reports, 1966, pp.3-505.

- Asuntos de la delimitación de la Plataforma continental del Mar del Norte (R.F. de Alemania / Dinamarca; R.F. de Alemania / Países Bajos), 20 febrero 1969). I.C.J.Reports, 1969, pp.2-257.
- Dictamen consultivo del Sahara Occidental, 16 octubre 1975. I.C.J.Reports, 1975, pp.1-176.
- Asunto de la delimitación de la frontera marítima en la región del Golfo de Maine (Canadá / EE.UU.), 12 octubre 1984, I.C.J.Reports, pp.300-475.
- Asunto de la plataforma continental de la Jamahiriya Arabe Libia y Malta (Libia / Malta), 3 junio 1985. I.C.J.Reports, 1985, pp.12-187.
- Asunto de las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra ésta (Nicaragua / EE.UU.), 27 junio 1986. I.C.J.Reports, 1986, pp.13-549.
- Asunto de la controversia fronteriza (Burkina Faso / República de Mali), 22 diciembre 1986. I.C.J.Reports, 1986, pp.551-663.
- Asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima (El Salvador / Honduras), 11 septiembre 1992. I.C.J.Reports, 1992, pp.351-761.
- Asunto de la controversia territorial (Jamahiriya Arabe Libia / Chad), 3 febrero 1994. I.C.J.Reports, pp.4-103.

3. JURISPRUDENCIA ARBITRAL.

- Arbitraje del Río St. Croix (Gran Bretaña / EE.UU.), 25 octubre 1798. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.I., pp.5-11.
- Asunto relativo al título de las Islas en la Bahía de Passamaquoddy y en la Bahía de Fundy (Gran Bretaña / EE.UU.), 24 noviembre 1817. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.I., pp.298-306.

- Asunto relativo a la frontera a través del Río San Lorenzo y los Lagos Ontario, Erie y Huron (Gran Bretaña / EE.UU.), 18 junio 1822. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.I, pp.311-317.
- Asunto de la frontera del Lago Huron y el Lago Bois (Gran Bretaña / EE.UU.), 24 diciembre 1827. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.I., pp.318-323.
- Asunto de la frontera del noreste (Gran Bretaña / EE.UU.), 10 enero 1831. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.I, pp.255-391.
- Asunto de la Isla de Aves (Países Bajos / Venezuela), 30 junio 1864. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.II, pp.404-421.
- Asunto de la Isla de Bulama (Gran Bretaña / Portugal), 21 abril 1870. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.II, pp.604-614.
- Asunto de la frontera del Este (Orange / República de Sudáfrica), 19 febrero 1870. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.II, pp.574-579.
- Asunto de la frontera de San Juan, (EE.UU. / Gran Bretaña), 21 octubre 1872. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.III, pp.1-29.
- Asunto relativo a la frontera del Alpe de Cravairola (Italia / Suiza), 23 septiembre 1874. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.III, pp.464-508.
- Asunto de la Bahía de Delagoa (Gran Bretaña / Portugal), 24 julio 1875. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.III., pp.596-650.
- Asunto del Montijo (Colombia / EE.UU.), 1875. MOORE, International Arbitrations, vol.2, p.1345.
- Asunto del Chaco Central (Argentina / Paraguay), 12 noviembre 1878. MOORE, International Arbitrations, vol.2, pp.1923-1924.
- Asunto de la Mosquitia (Nicaragua / Gran Bretaña), 2 julio 1881. MARTENS, N.R.G.T., 2ª ser., X, pp.609-610.
- Arbitraje de la República de Sudáfrica (Gran Bretaña / República de Sudáfrica), 5 agosto 1885. MOORE, International Arbitrations, vol.5, pp.5015-5016.
- Laudo del Presidente Cleveland (Costa Rica / Nicaragua), 22 marzo 1888. MOORE, International Arbitrations, vol.2, pp.1945-1967.

- Laudo arbitral de la Reina Regente M^aCristina (Colombia / Venezuela), 16 marzo 1891. MOORE, International Arbitrations, vol.5, pp.4858-4862.
- Asunto de Maroni (Francia / Países Bajos), 25 mayo 1891. MARTENS, N.R.G.T., 2^a ser., XVIII, pp.100-101.
- Asunto de la frontera de Misiones (Argentina / Brasil), 5 febrero 1895. MOORE, International Arbitrations, vol.2, pp.1969-2026.
- Asunto de la plataforma de Manica (Gran Bretaña / Portugal), 30 enero 1897. MOORE, International Arbitrations, vol.5, pp.832-865.
- Asunto relativo a la localización del punto inicial de la línea fronteriza acordada en el tratado de 1858 (Costa Rica / Nicaragua), 30 septiembre y 30 diciembre 1897; 22 marzo 1898; 26 julio 1899 y 10 marzo 1900. MOORE, International Arbitrations, vol.2, p.1967 y vol.5, p.5074.
- Asunto de la Puna de Atacama (Argentina / Bolivia), 24 marzo 1899). B.F.S.P., vol.96, pp.379-383.
- Asunto de la Guyana Británica (Gran Bretaña / Venezuela), 3 octubre 1899. R.G.D.I.P., 1901, pp.71-80.
- Asunto de la frontera de Amapá (Brasil / Francia), 1 diciembre 1900. MARTENS, N.R.G.T., 3^a ser., X, pp.153-179.
- Asunto de la delimitación fronteriza entre Colombia y Costa Rica, 11 septiembre 1900. MARTENS, N.R.G.T., 2^a ser., XXXII, p.411.
- Asunto relativo a la cuestión Moerauge (Austria / Hungría), 13 septiembre 1902. MARTENS, N.R.G.T., 3^a ser., III, pp.71-84.
- Asunto relativo a la frontera de la Cordillera de los Andes (Argentina / Chile), 20 noviembre 1902. U.N.R.I.A.A., vol.IX, pp.29 y ss.
- Asunto de la frontera de Alaska (Gran Bretaña / EE.UU.), 20 octubre 1903. U.N.R.I.A.A., vol.XV, pp.481 y ss.
- Laudo arbitral del Rey de Italia Víctor Manuel III, (Gran Bretaña / Brasil), 6 junio 1904. R.G.D.I.P., 1904, pp.18-20.
- Asunto de la frontera del Reino de Barotse (Gran Bretaña / Portugal), 30 mayo 1905. U.N.R.I.A.A., vol.XI, pp.59 y ss.
- Laudo arbitral del Rey de España (Honduras / Nicaragua), 23 diciembre 1906. U.N.R.I.A.A., vol.XI, pp.101 y ss.

- Laudo arbitral del Presidente Alcorta (Bolivia / Perú), 9 julio 1909. U.N.R.I.A.A., vol.XI, pp.133-146.
- Asunto de Grisbadárna (Noruega / Suecia), 23 octubre 1909. R.G.D.I.P., 1910, pp.177-189.
- Asunto de las Pesquerías del Atlántico Norte (Gran Bretaña / EE.UU.), 7 septiembre 1910. U.N.R.I.A.A., vol.XI, pp.173-211.
- Asunto de Walvis Bay (Alemania / Gran Bretaña), 23 mayo 1911. U.N.R.I.A.A., vol.XI, pp.263-308.
- Asunto del Chamizal (México / EE.UU.), 15 junio 1911. U.N.R.I.A.A., vol.XI, pp.309-347.
- Asunto relativo a la delimitación de la Isla de Timor (Países Bajos / Portugal), 25 junio 1914. R.G.D.I.P., 1915, pp.89-112.
- Asunto de la delimitación fronteriza entre Costa Rica y Panamá, 12 septiembre 1914. U.N.R.I.A.A., vol.XI, pp.519-547.
- Asunto del Golfo de Fonseca (Honduras / El Salvador / Nicaragua), 9 marzo 1917. A.J.I.L., 1917, pp.674.730.
- Sentencia arbitral del Consejo Federal suizo sobre la validez del laudo de la Reina Regente M^a Cristina (Colombia / Venezuela), 24 marzo 1922. U.N.R.I.A.A., vol.I., pp.223 y ss.
- W.A. Parker v. México, 1923. A.J.I.L., 1927, pp.170 y ss.
- Comisión de reparación / Gobierno Alemán. Annual Digest of International Law Cases (1923-1924), n^o199.
- Asunto de Tacna y Arica (Chile / Perú), 4 marzo 1925. A.J.I.L., 1925, pp.393-432.
- Asunto de la Isla de Palmas (EE.UU. / Países Bajos), 4 abril 1928. R.G.D.I.P., 1935, pp.156-202.
- Asunto Cameron (Gran Bretaña / México), 8 noviembre 1929. A.J.I.L., 1931, pp.757 y ss.
- Asunto Solís (Gran Bretaña / México), 15 febrero 1930. A.J.I.L., 1931, p.765.
- Caso Salem (EE.UU. / Egipto), 1932. U.N.R.I.A.A., vol.II, pp.1707 y ss.
- Asunto de la frontera de la Montaña de Aaroo (Arabia Saudí / Yemen), 3 diciembre 1931. A.J.I.L., 1939, p.356.

- Asunto de la delimitación fronteriza entre Guatemala y Honduras, 23 enero 1933. U.N.R.I.A.A., vol.II, pp.1307-1366.
- Asunto relativo al Chaco Boreal (Bolivia / Paraguay), 10 octubre 1938. A.J.I.L., 1939, pp.180 y ss.
- Interpretación del acuerdo franco-americano (EE.UU. / Francia), 28 junio 1964. R.G.D.I.P., 1965, pp.189-260.
- Asunto del Río Encuentros (Argentina / Chile), 9 diciembre 1966. U.N.R.I.A.A., vol.XVI, pp.109-182.
- Asunto del Rann de Kutch (India / Pakistán), 19 febrero 1968. U.N.R.I.A.A., vol.XVII, pp.1-575.
- Asunto del Canal de Beagle (Argentina / Chile), 18 febrero 1977. I.L.M., vol.XVII, 1978, pp.632-679.
- Asunto de la delimitación de la frontera entre los Emiratos de Dubai y Sharjah, 19 octubre 1981. Original mecanografiado.
- Asunto relativo a la delimitación fronteriza en el área de Taba (Egipto / Israel), 29 septiembre 1988. I.L.M., vol.XXVII, 1988, pp.1421-1538.
- Asunto de la Laguna del Desierto (Argentina / Chile), 21 octubre 1994. Original mecanografiado.

III. ANEXO DE TRATADOS INTERNACIONALES

- Tratado de Tordesillas, España y Portugal, 1494. MARTENS, N.R.G.T., 1ªed., supl.I, p.372.
- Tratado de Madrid, España y Gran Bretaña, 1630. Fontes Historiae Iuris Gentium, vol.II, pp.59-61.
- Tratado de límites entre Francia y Portugal, 4 marzo 1700 (sustituido por el posterior de 1841 entre Francia y Brasil). R.G.D.I.P., 1901, pp.52-53.
- Tratado de Utrecht, Francia y Portugal, 11 abril 1713. B.F.S.P., nº4, p.818.
- Tratado de Utrecht, Países Bajos y España, 17 junio 1714. Fontes Historiae Iuris Gentium, vol.II, pp.342-354.
- Tratado de San Ildefonso, España y Portugal, 1777. B.F.S.P., nº6, p.706.
- Tratado de Poona, Gran Bretaña y Portugal, 1779. I.C.J.Reports, 1960, p.37.
- Tratado de París, Gran Bretaña y EE.UU., 3 septiembre 1783. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.I, pp.371-372.
- Tratado Jay, Gran Bretaña y EE.UU., 19 noviembre 1794. American State Papers, vol.I, pp.472 y ss.
- Tratado de límites anglo-ruso, 16/28 febrero 1825. B.F.S.P., nº12, p.110.
- Compromiso arbitral entre Colombia y Costa Rica, 5 marzo 1825. ANDERSON, L., El laudo Loubet. Contribución al estudio de la cuestión de límites entre Costa Rica y Panamá, San José, 1911, pp.67-68.
- Convenio de pesquerías entre Reino Unido y Francia, 2 agosto 1839. I.C.J.Pleadings, vol.I, pp.368-369.
- Convenio fronterizo entre Bélgica y Países Bajos, 8 agosto 1843. B.F.S.P., nº35, p.360.
- Convenio de límites entre Orange y República de Sudáfrica, 1852. LAPRADELLE et POLITIS, R.S.A., vol.II, p.576.
- Tratado de paz, amistad, comercio y navegación entre Argentina y Chile, 20 agosto 1855. A.F.D.I., 1971, p.416.

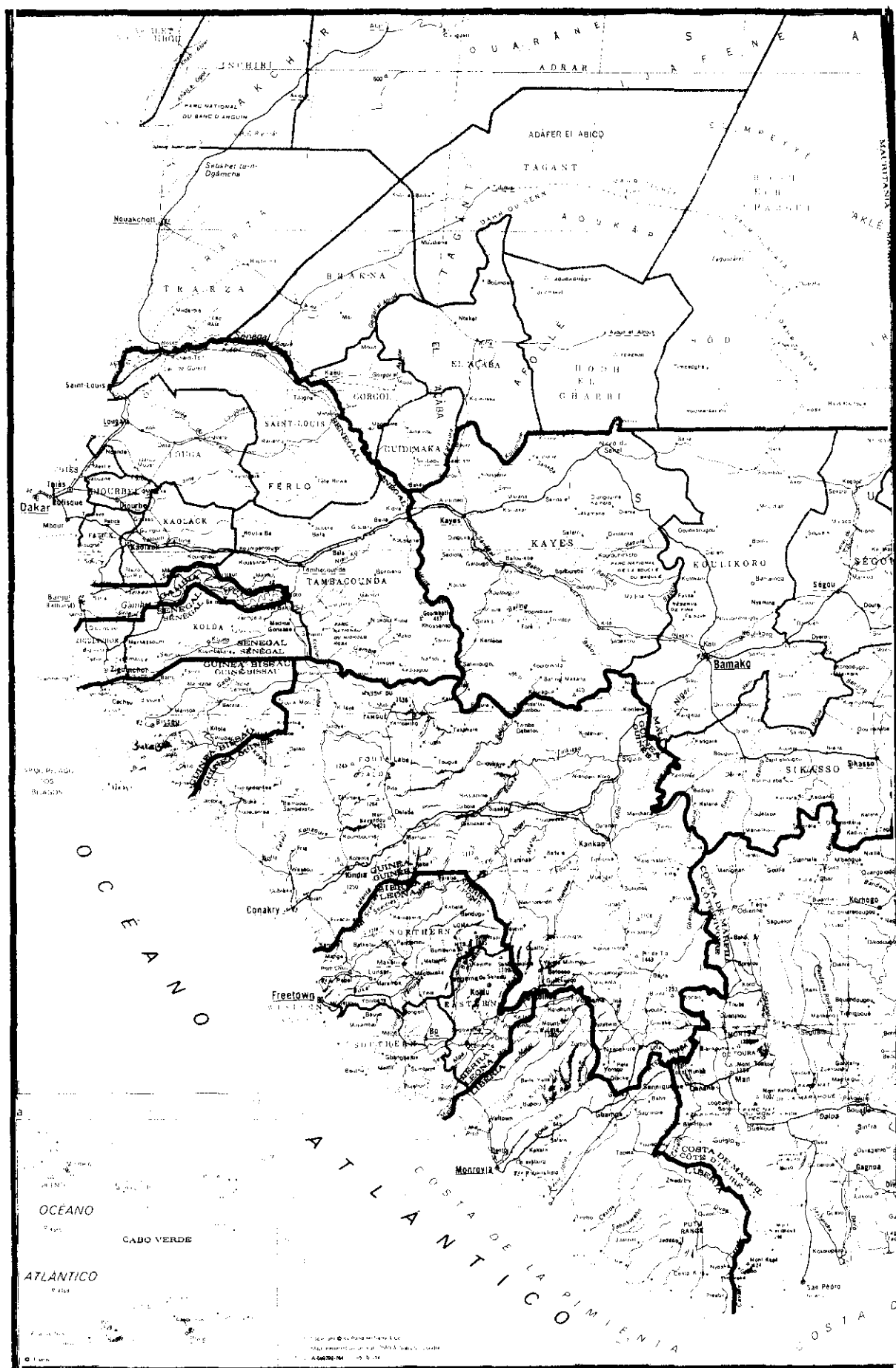
- Tratado de límites entre Argentina y Chile, 1881. U.N.R.I.A.A., vol.IX, pp.29-30.
- Compromiso arbitral entre Colombia y Venezuela, 15 febrero 1886. MARTENS, N.R.G.T., 2ªser., XXIV, p.111.
- Convenio Zelaya-Castellanos, Honduras y El Salvador, 28 septiembre 1886. Memoria de Honduras, 1 junio 1988, p.51.
- Tratado fronterizo entre Gran Bretaña y Portugal, 14 noviembre 1890. R.D.I.L.C., 1890, p.172.
- Tratado de límites entre Gran Bretaña y Portugal, 11 junio 1891. B.F.S.P., nº83, p.27.
- Declaración de sometimiento al arbitraje de Colombia y Venezuela, 4 abril 1894. U.S. Foreign Relations, 1894, pp.200-201.
- Tratado Gámez-Bonilla, Honduras y Nicaragua, 7 octubre 1894. Límites entre Honduras y Nicaragua. Alegato de la República de Honduras, Madrid, 1905, pp.17-18.
- Tratado de límites entre Gran Bretaña y Colombia, 1896. LA FONTAINE, Pasicrisie Internationale, p.545.
- Compromiso arbitral entre Argentina y Chile, 17 abril 1896. U.N.R.I.A.A., vol.IX, pp.29-30.
- Tratado de arbitraje entre Gran Bretaña y Venezuela, 2 febrero 1897. MARTENS, N.R.G.T., 2ªser., XIX, p.581.
- Tratado de arbitraje entre Gran Bretaña y Brasil, 6 noviembre 1901. DESCAMPS et RENAULT, Recueil international des traités du XXe siècle, vol.I.
- Tratado de arbitraje entre Bolivia y Perú, 30 diciembre 1902. U.N.R.I.A.A., vol.X, pp.139-140.
- Compromiso arbitral entre Portugal y Gran Bretaña, 12 julio 1903. U.N.R.I.A.A., vol.XI, pp.67 y ss.
- Tratado de límites entre Francia y Siam, 13 febrero 1904. I.C.J.Reports, 1962, p.6.
- Acuerdo de arbitraje entre Francia y México, 2 marzo 1909. A.J.I.L., 1932, pp.390-391.
- Convenio de arbitraje entre Costa Rica y Panamá, 17 marzo 1910. U.N.R.I.A.A., vol.XI, pp.525-527.
- Compromiso arbitral entre EE.UU. y Países Bajos, 23 enero 1925. R.G.D.I.P., 1935, pp.157-159.

- Compromiso de arbitraje entre Guatemala y Honduras, 16 julio 1930, U.N.R.I.A.A., vol.II, pp.1314-1316.
- Acuerdo entre Ecuador y Perú relativo a la ejecución del Protocolo fronterizo de 21 junio 1924, 6 julio 1936. S.D.N., Recueil des Traités, vol.CLXVIII, nº4026, pp.361-362.
- Tratado de paz, amistad y fronteras entre Bolivia y Paragua, 21 julio 1938. A.J.I.L., 1939, pp.180-181.
- Tratado compromisorio entre Reino Unido y Francia, 29 diciembre 1950. I.C.J.Reports, 1953, pp.49-50.
- Cambio de notas entre Reino Unido y Arabia Saudí, 30 julio 1954. A.F.D.I., 1957, pp.193-194.
- Tratado de amistad y buena vecindad entre Libia y Chad, 10 agosto 1955. I.C.J.Reports, 1994, p.14.
- Acuerdo compromisorio de arbitraje entre India y Pakistán, 30 junio 1965. I.L.M., vol.VII, 1968, pp.637-638.
- Convenio de Washington, Honduras y El Salvador, 6 octubre 1976. PEIRANO BASSO, J., Buenos Oficios y Mediación, Montevideo, 1983, pp.54-56.
- Acuerdo compromisorio de arbitraje entre Dubai y Sharjah, 30 noviembre 1976. Original mecanografiado, pp.1-3.
- Tratado de paz entre Egipto e Israel, 26 marzo 1979. I.L.M., vol.XXVII, 1988, p.1430.
- Tratado General de Paz entre Honduras y El Salvador, 30 octubre 1980. Memorial of the Republic of El Salvador, vol.I, 3.3.
- Compromiso arbitral entre Guinea y Guinea Bissau, 18 febrero 1983. R.G.D.I.P., 1986, pp.487-491.
- Acuerdo compromisorio de arreglo judicial entre la República de Alto Volta y la República de Mali, 16 septiembre 1983. I.C.J.Reports, 1986, pp.557-558.
- Acuerdo de compromiso de arbitraje entre Guinea Bissau y Senegal, 12 marzo 1985. R.G.D.I.P., 1990, pp.206-209.
- Acuerdo compromisorio de arreglo judicial entre Honduras y El Salvador, 24 mayo 1986. I.C.J.Reports, 1992, pp.352-353.
- Cambio de notas entre Qatar y Bahrein, 21 y 26 diciembre 1987. I.C.J.Reports, 1994, pp.116-117.
- Compromiso arbitral entre Argentina y Chile, 31 octubre 1991. Original mecanografiado, pp.9-15.

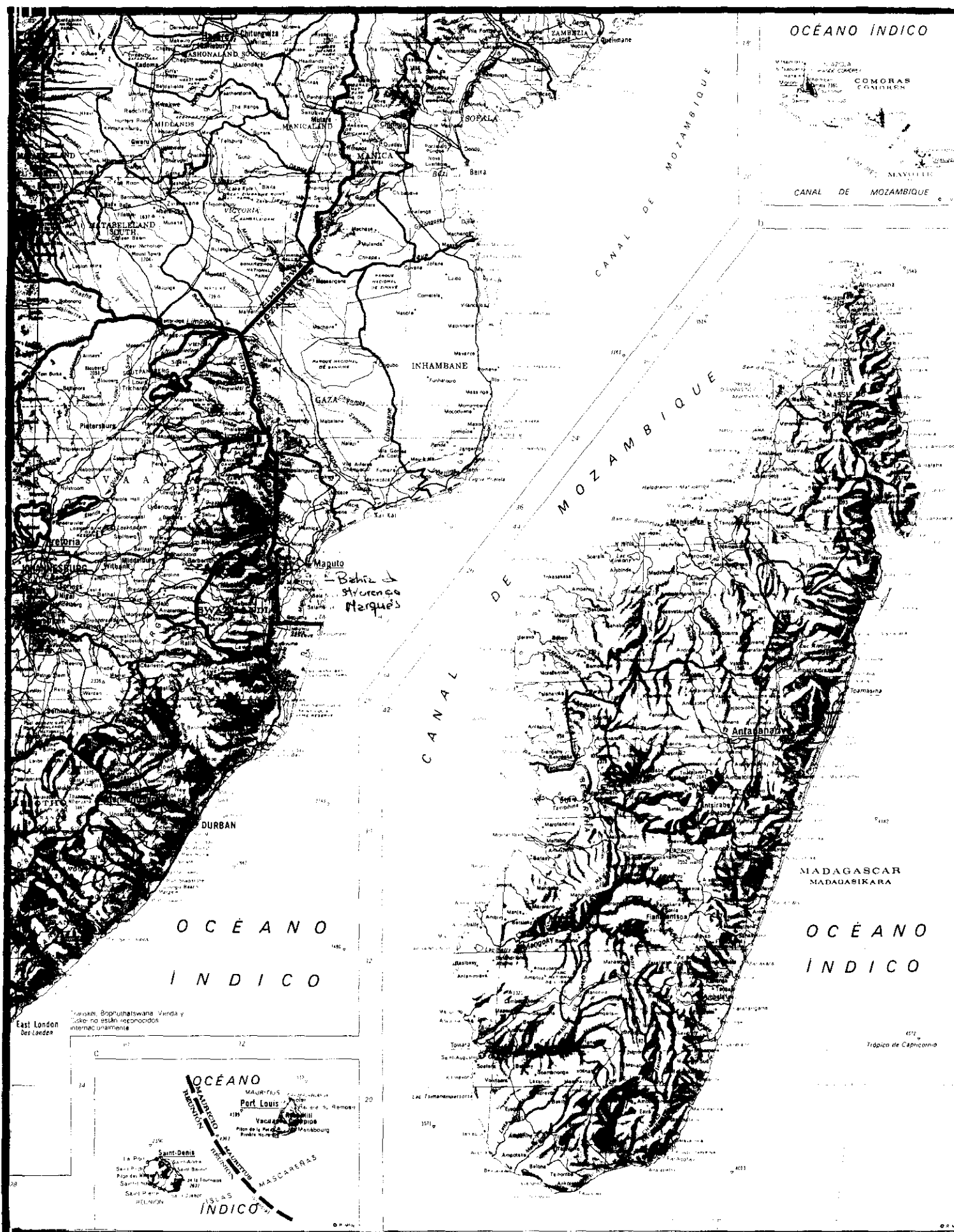
IV. ANEXO CARTOGRAFICO

MAPA 1: ISLA DE AVES
(Países Bajos/Venezuela), laudo de 30 junio 1865.
(Atlas del Mundo, 1492-1992, Barcelona, 1991, p.239)



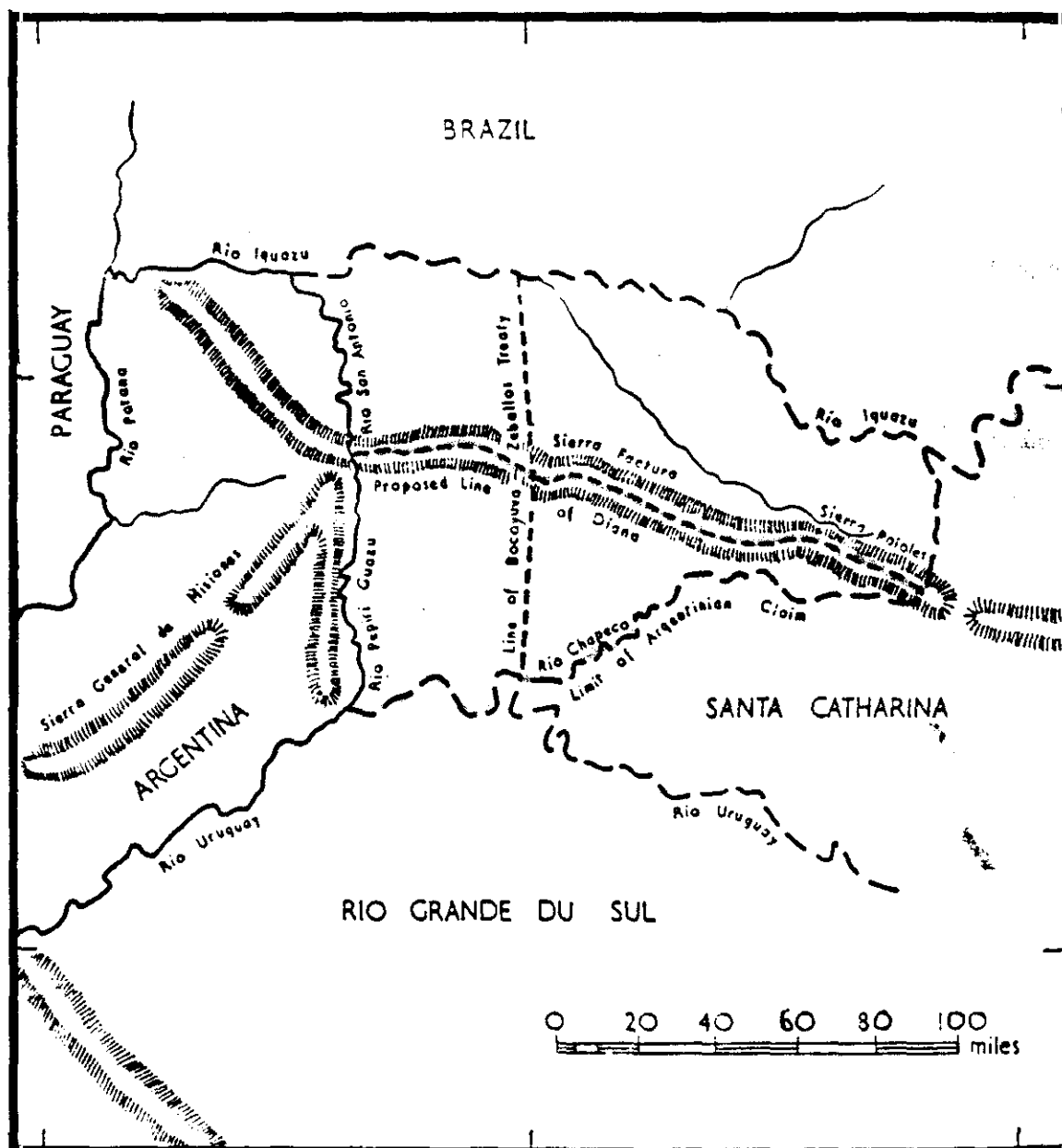


(Atlas del Mundo, 1492-1992, Barcelona, 1991, p.211)



CC T: Z: 341 FIESTAS T.: C
ENTRADA CD S P OK T E A
2139123843
TERR PR CS --LLAMADA-- AP PE SO R --OBJETIVO- ENVIO DE TECNICOS RET--
4981 27 09 17 48 TEC:
FEC:
DATOS OPERATIVOS SIN PLAN *** N1 FOTOCOPIAS GAROA, S.L.
TECN ULT.VI CO.2VI CO.MAN CO.VIS %D *CRU-IN* N2
3090 130900 D1 PORTAL DE GAMARRA, N1-PL.1, OF
STATUS VENTA D2
PO VITORIA
MODI.C: PR 837686 280600 BD: OSG
DATOS COB: SALDO EX. 0 CA A11 Z 1401 FST S40S MD CP340 EST 09709576
ACTUALIZACION DE TECNICOS HORARIOS ---MANANA-- ---TARDE--- ---SABADO--
MAQUINA TERRITORIO CELDA INVIERNO 09 30 13 30 16 00 19 00
VERANO 09 30 13 30 09 00
TL 260008 945 OP: GASPAR
COMENTARIOS..... CEN ENCUESTO GASPAR 25.9.00 T 124952 945
C0 CCR T
C1 *** P A S E D E L A P A L A B R A ***
C2 V LLAMAR ANTES DE IR. D. TECNICO PRODUCTO
C3 OBS.
C4 PIEZAS:

MAPA 5: FRONTERA DE MISIONES
 (Argentina/Brasil), laudo de 5 febrero 1895.
 (IRELAND, G., Boundaries, Possessions and Conflicts in South America, Cambridge, 1938, p.11)



MAPA 6:

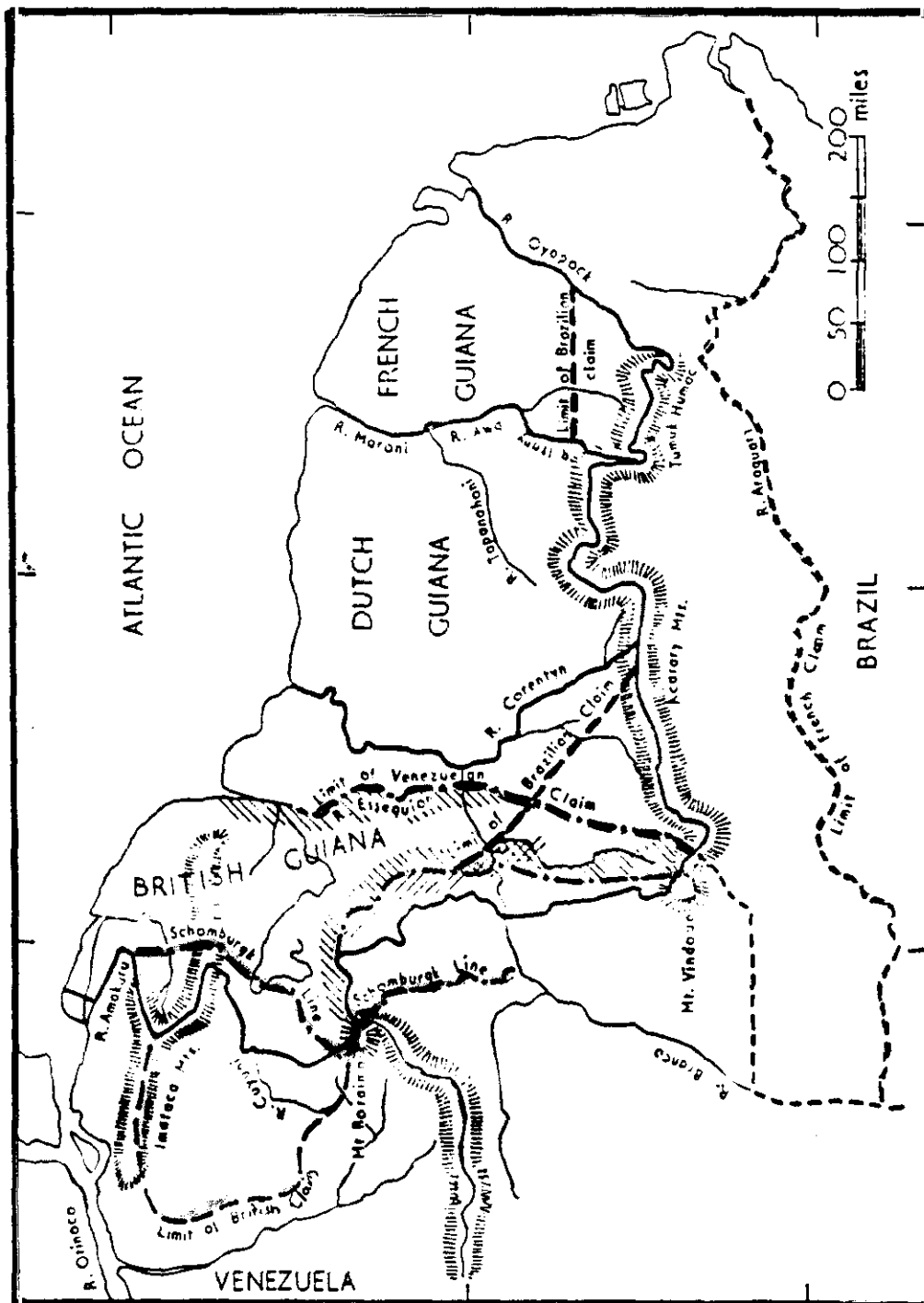
FRONTERAS DE LAS DISTINTAS GUYANAS

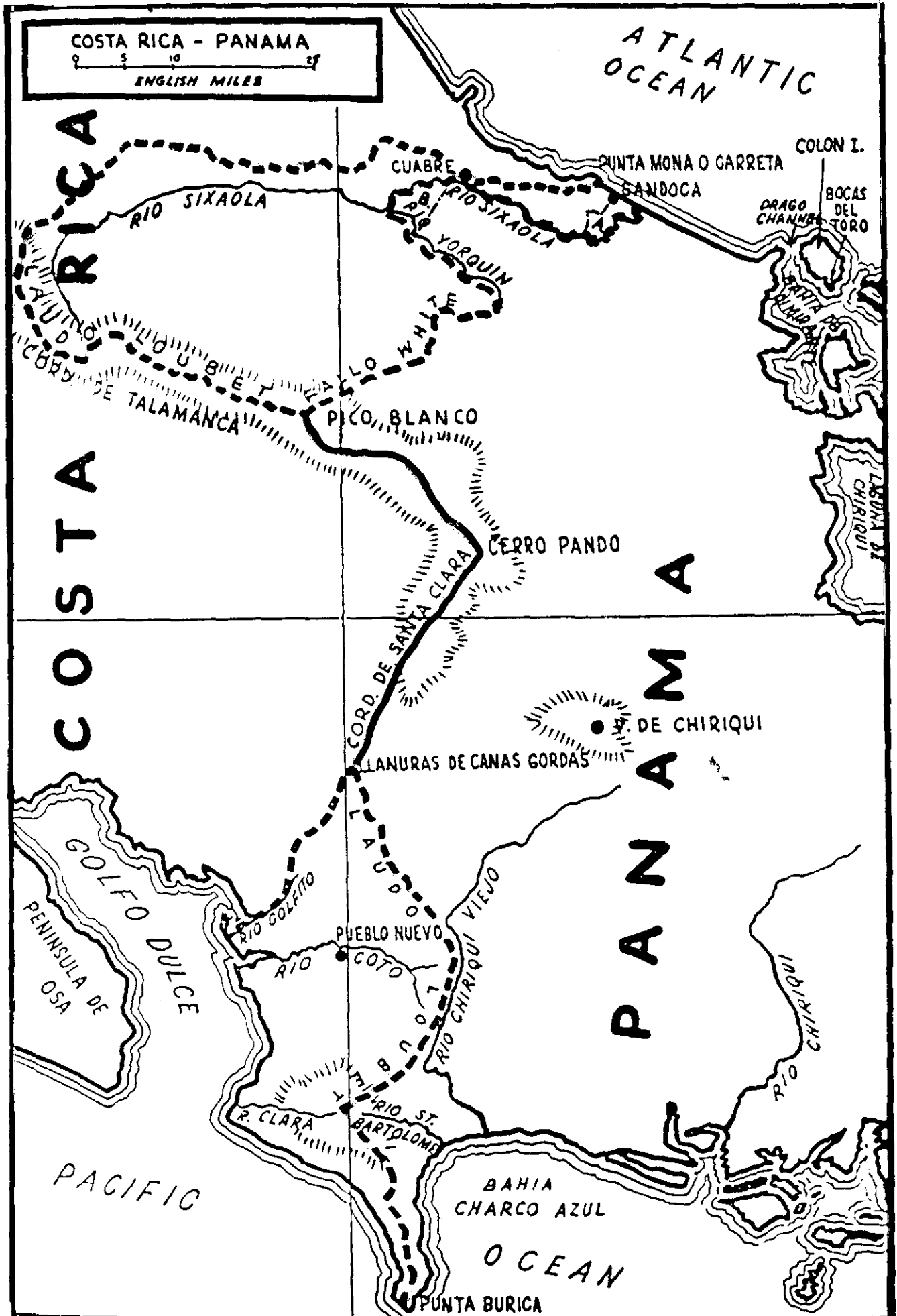
(Francia/Países Bajos), laudo de 25 mayo 1891.

(Gran Bretaña/Venezuela), laudo de 3 octubre 1899.

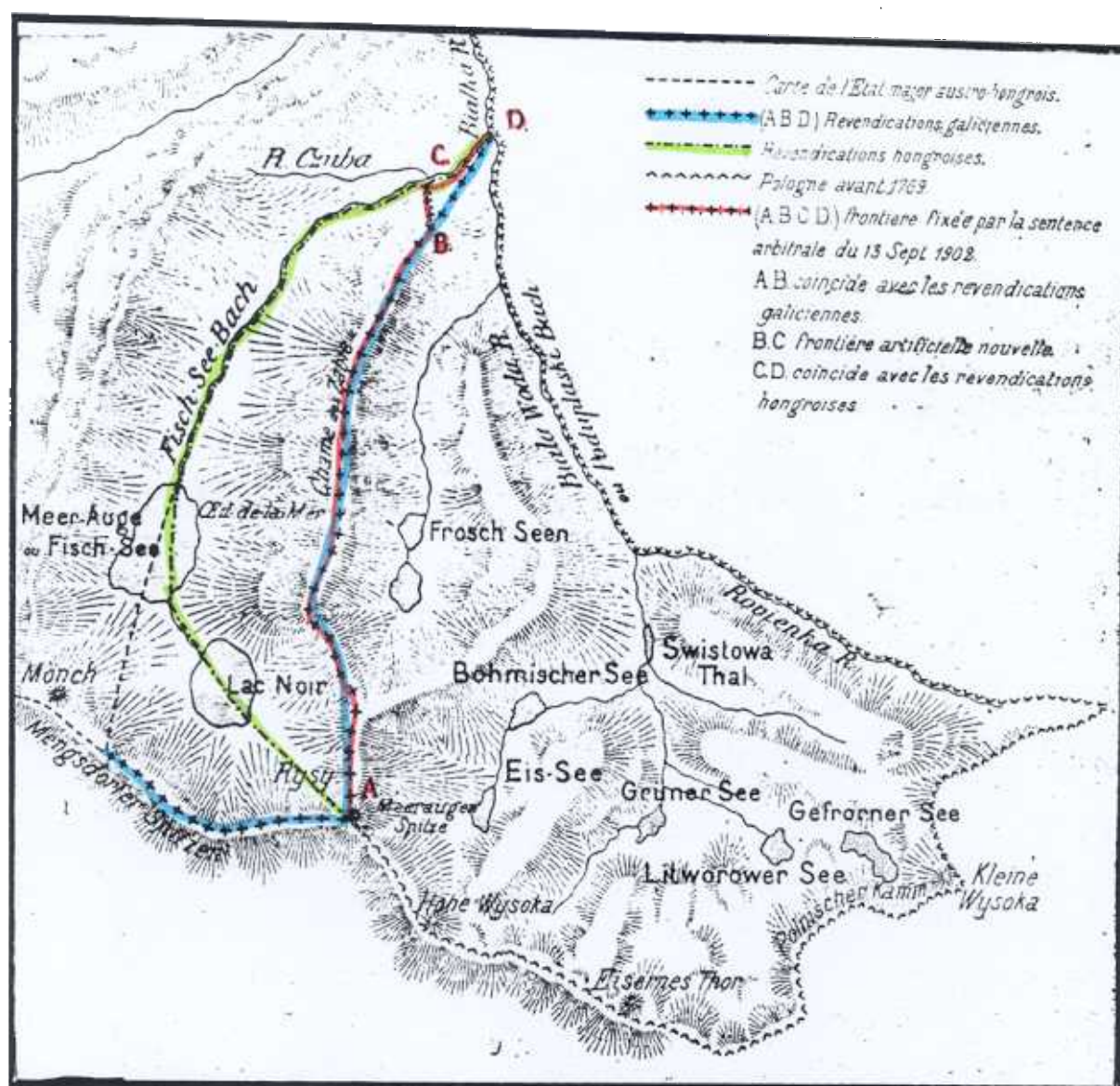
(Brasil/Francia), laudo de 1 diciembre 1900.

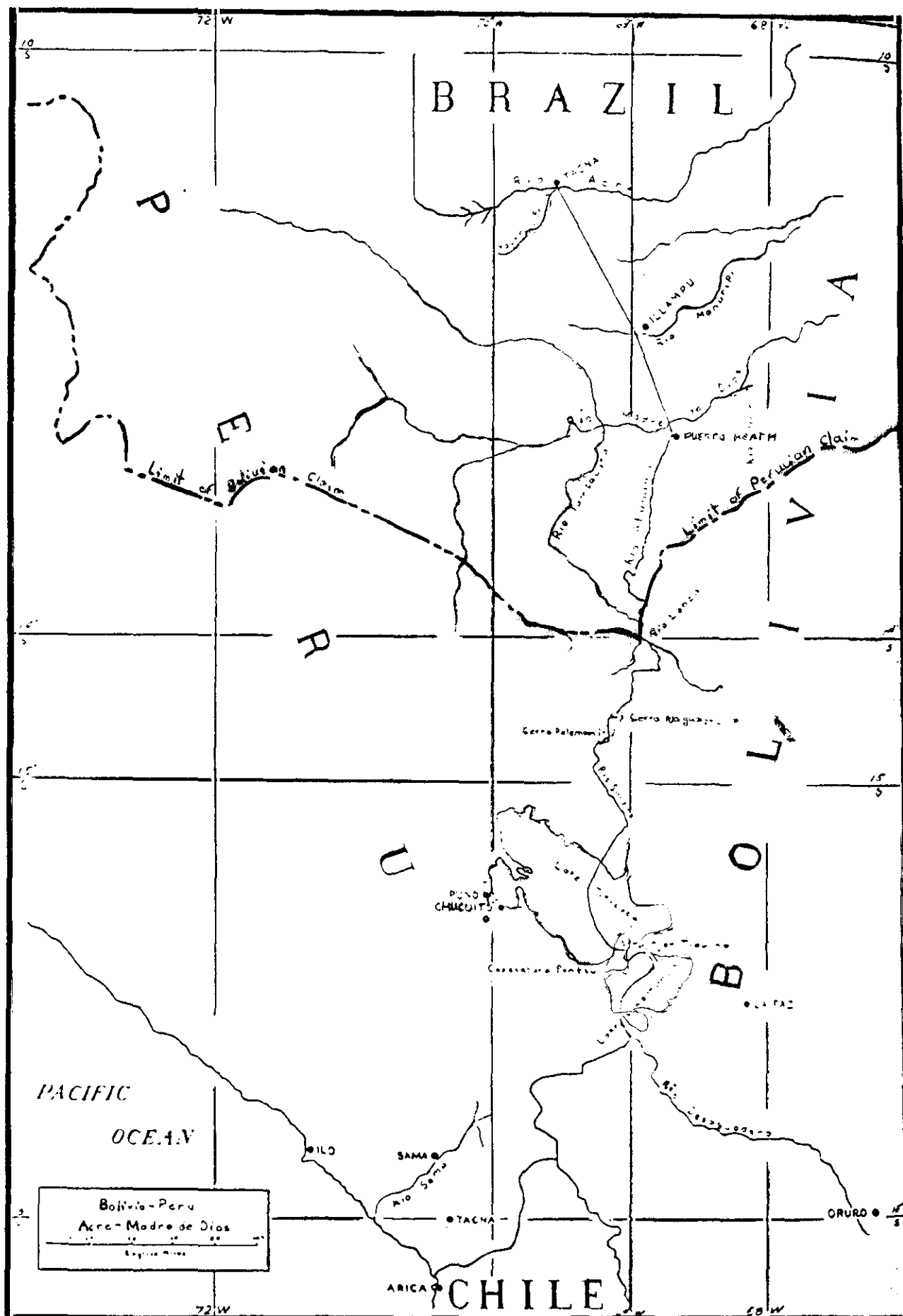
(Gran Bretaña/Brasil), laudo de 6 junio 1904.

(IRELAND, G., Boundaries, Possessions and Conflicts in South America, Cambridge, 1938, p.145)



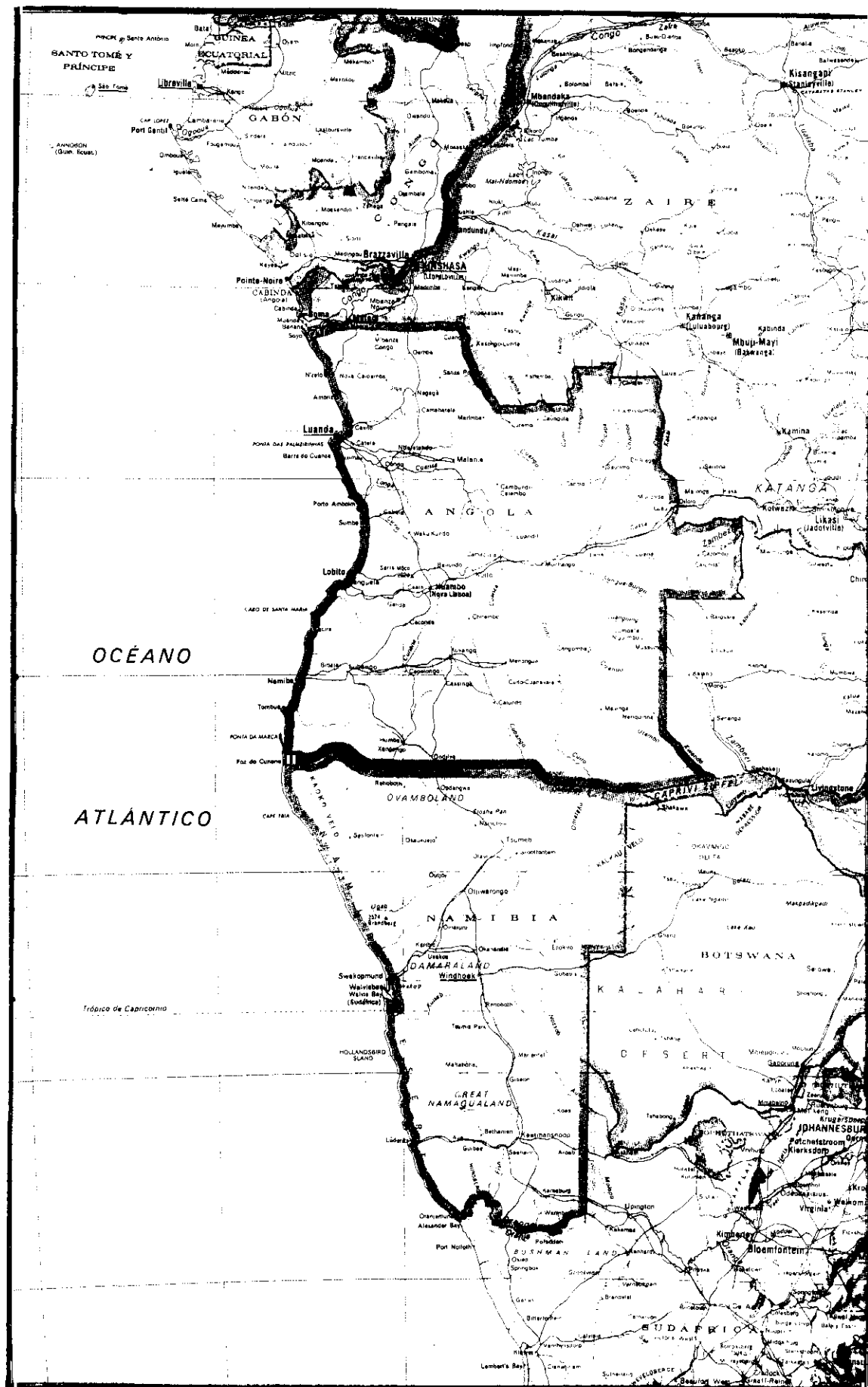
MAPA 8: DELIMITACION FRONTERIZA EN LA ZONA DE OEIL DE LA MER (Austria/Hungria), laudo de 13 septiembre 1902. (R.G.D.I.P., 1903, p.421)



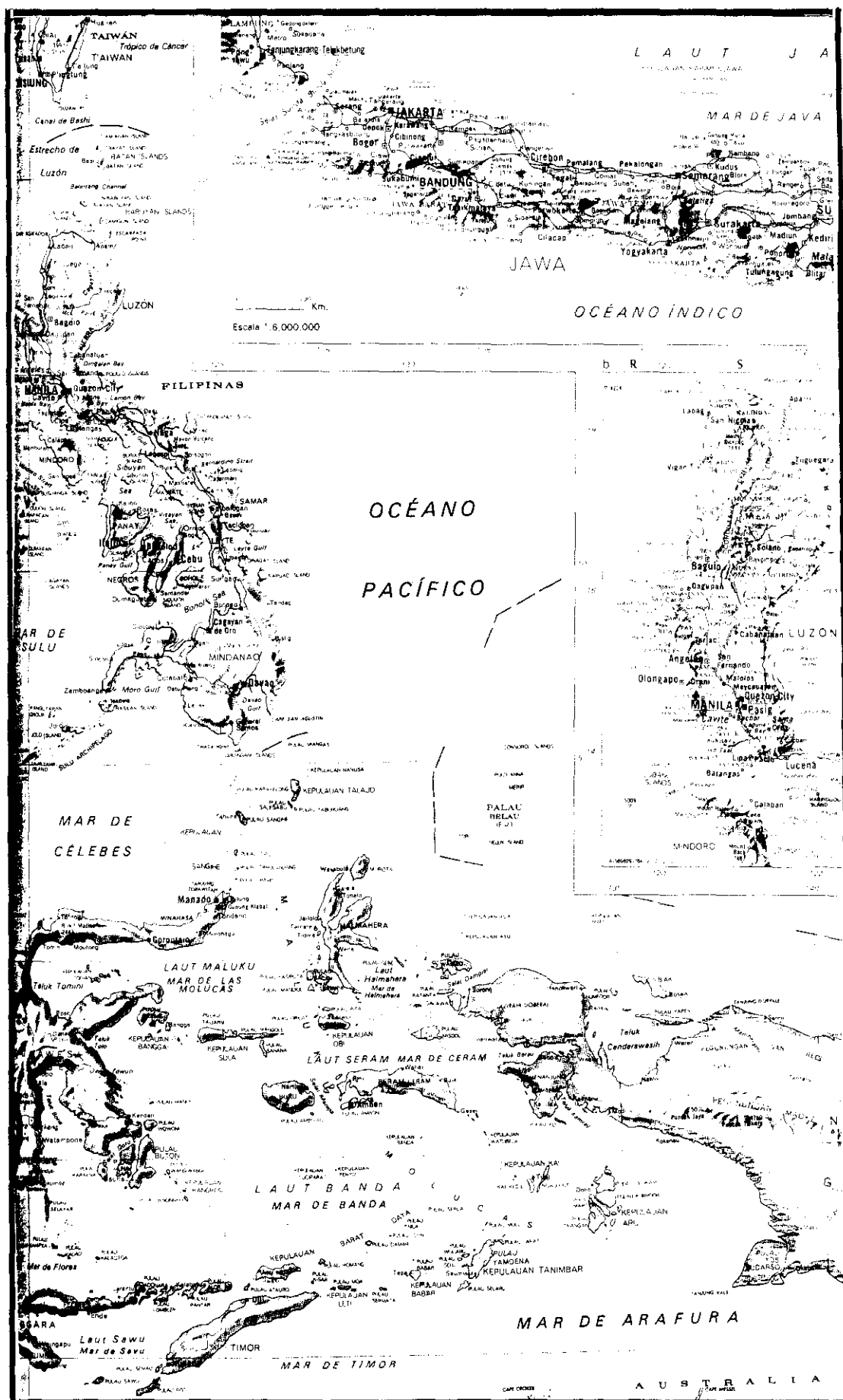


(Alemania/Gran Bretaña), laudo de 23 mayo 1911.

(Atlas del Mundo, 1492-1992, Barcelona, 1991, p.194)



MAPA 13: ISLA DE PALMAS O MIANGAS
 (EE.UU./Países Bajos), laudo de 4 abril 1928.
 (Atlas del Mundo, 1492-1992, Barcelona, 1991, p.175)

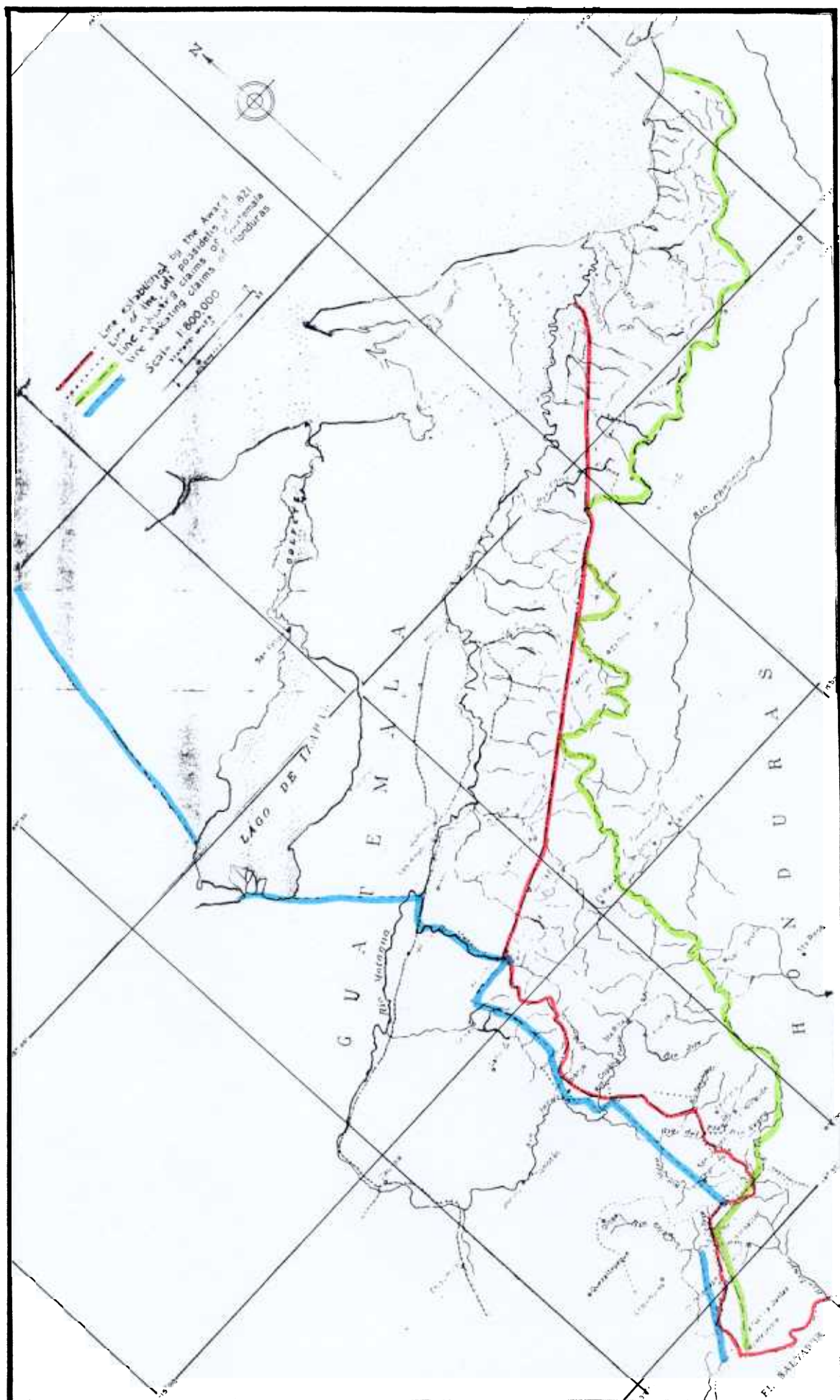


MAPA 14: ISLA DE CLIPPERTON

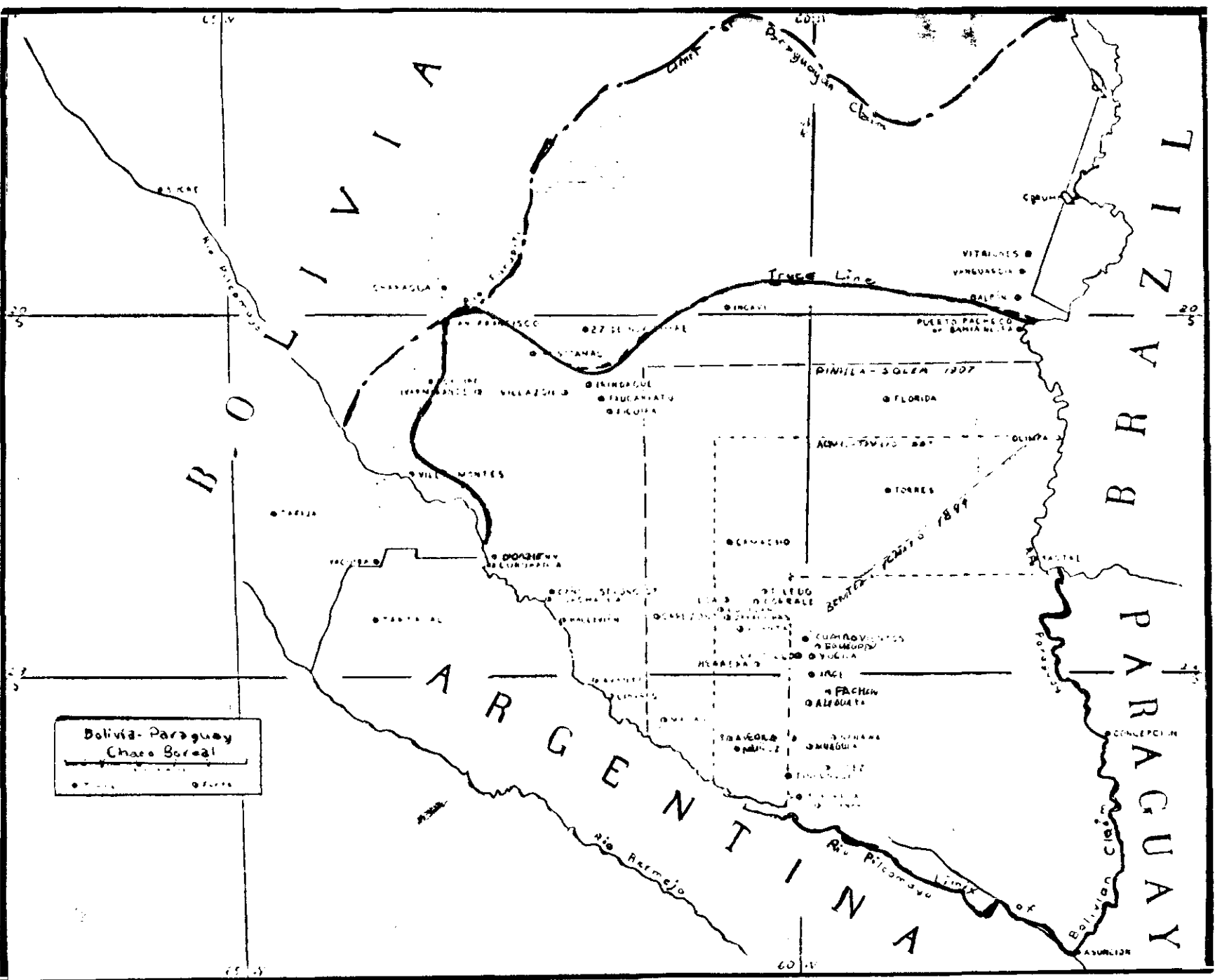
(Francia/México), laudo de 28 enero 1931.

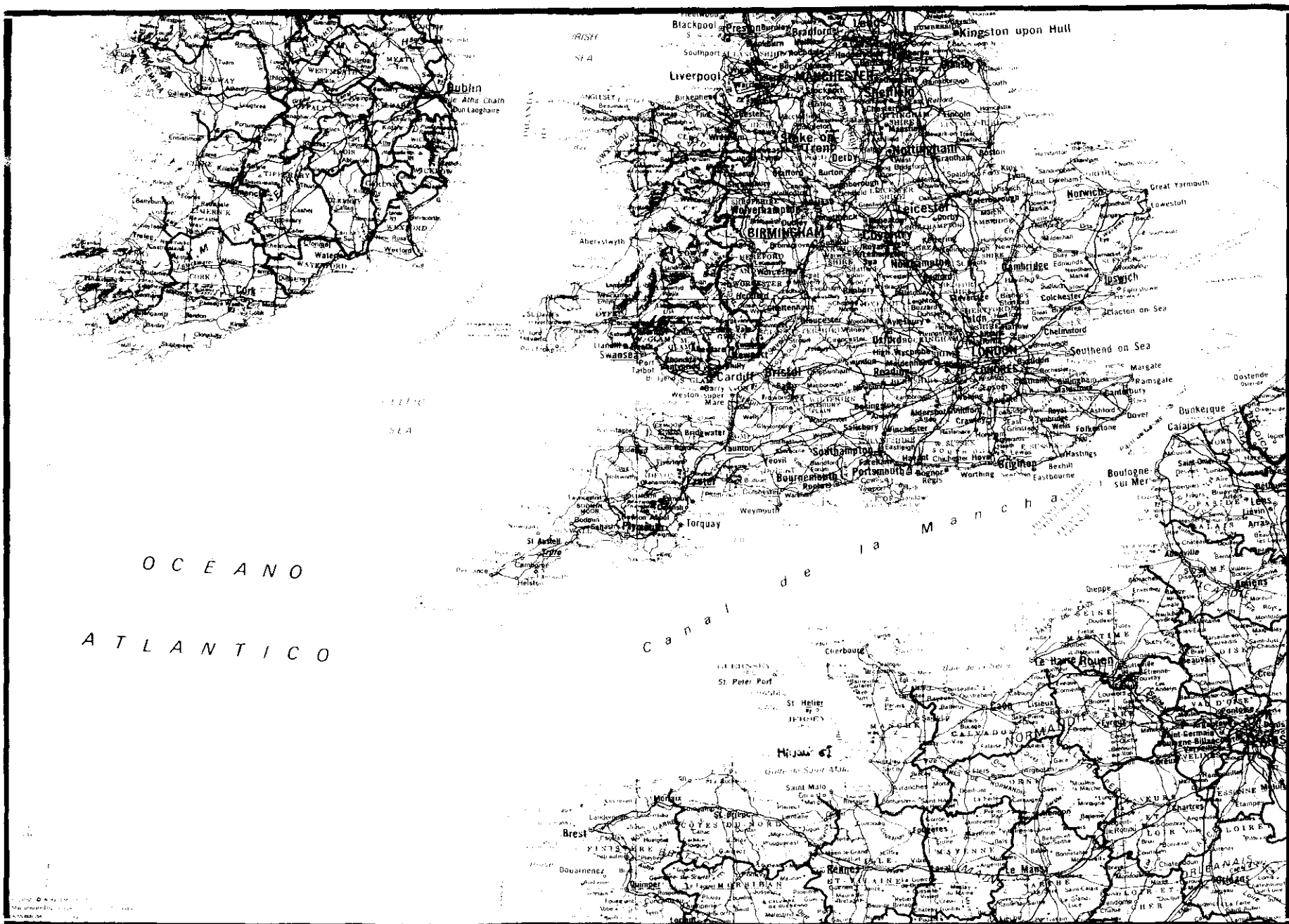
(Atlas del Mundo, 1492-1992, Barcelona, 1991, p.238)



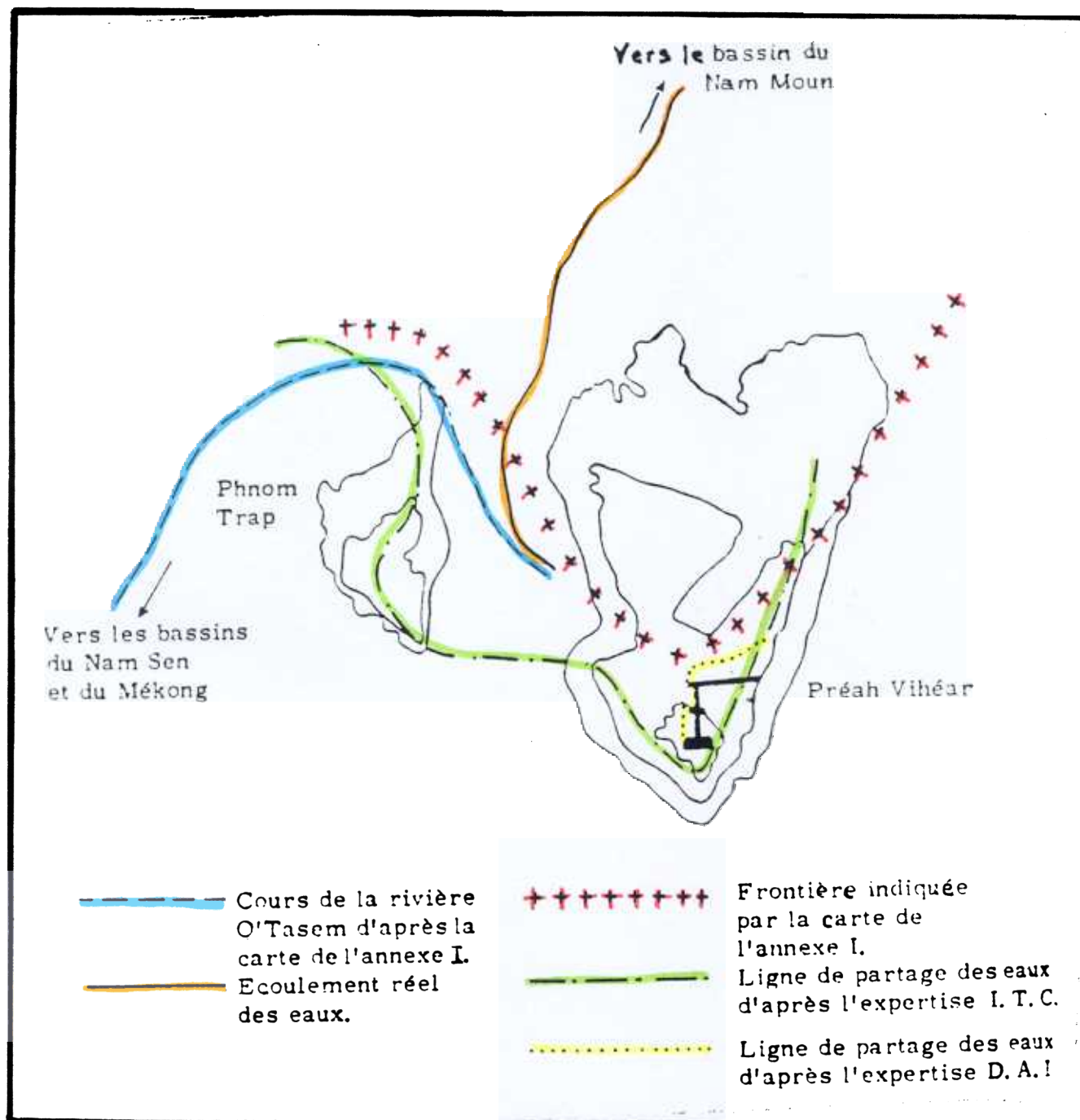


DELIMITACION FRONTERIZA DEL CHACO BOREAL
(Bolivia/Paraguay), laudo de 10 octubre
(IRELAND, G., Boundaries, Possessions and
South America, Cambridge, 1938, p.67)

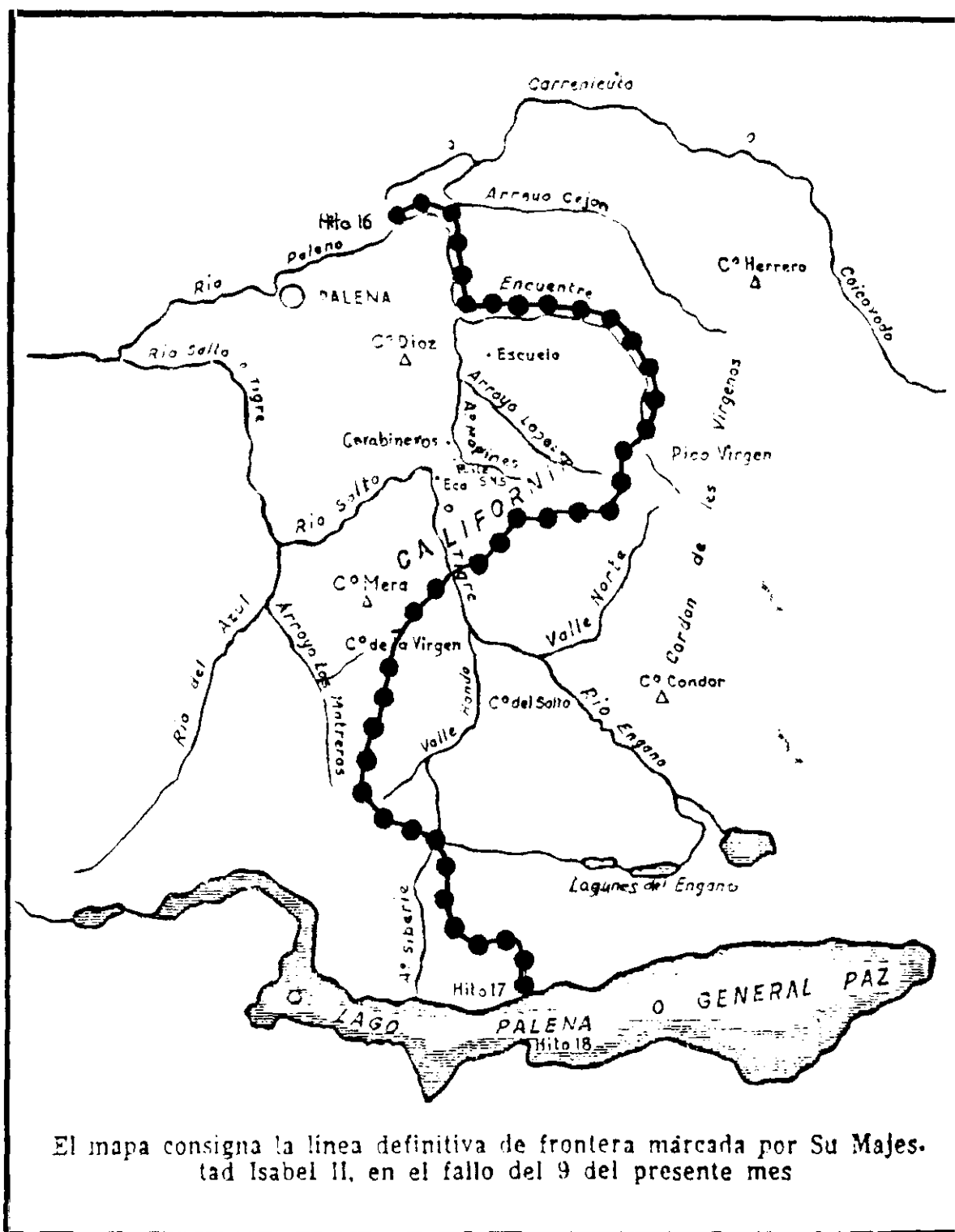


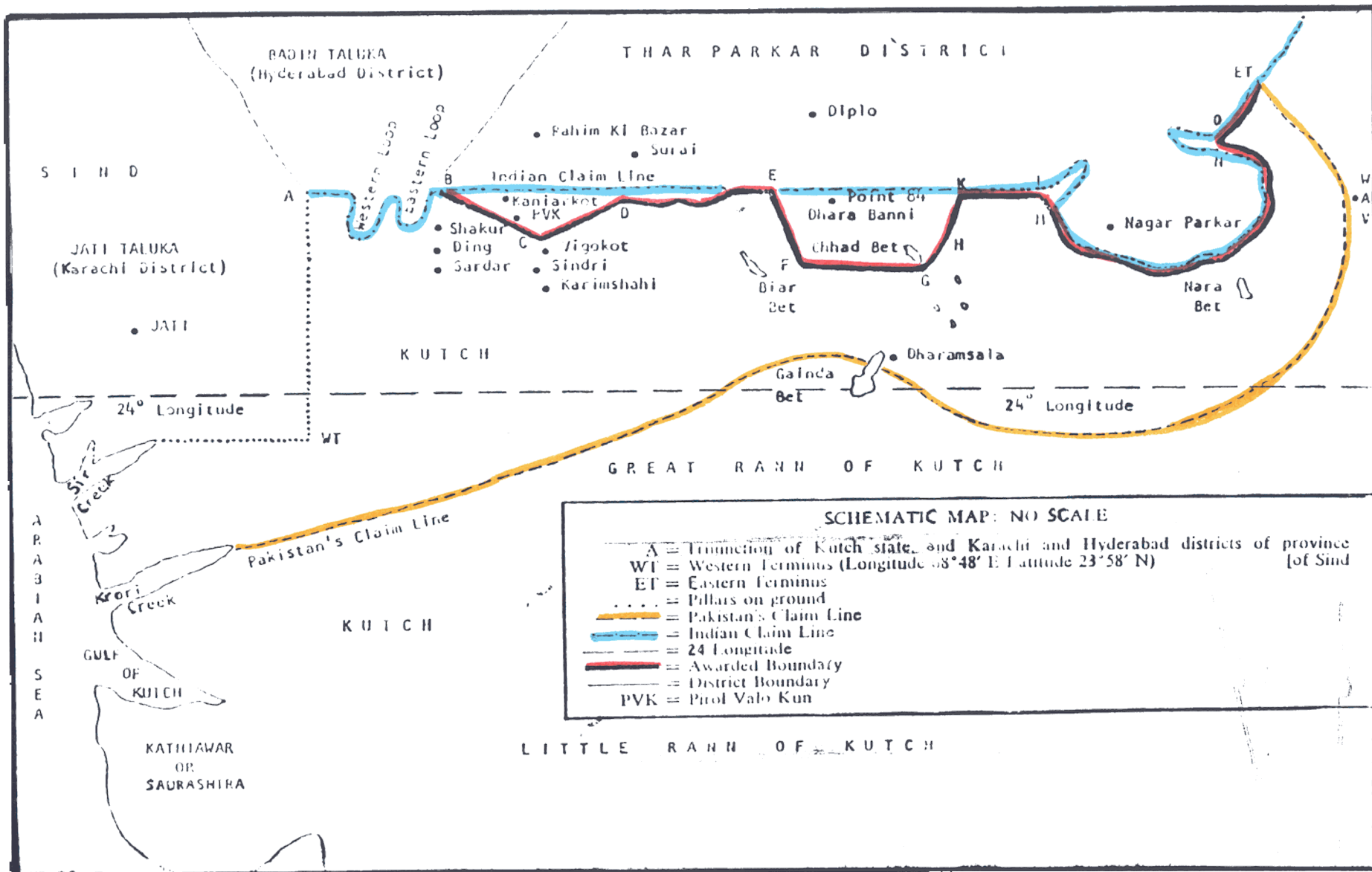


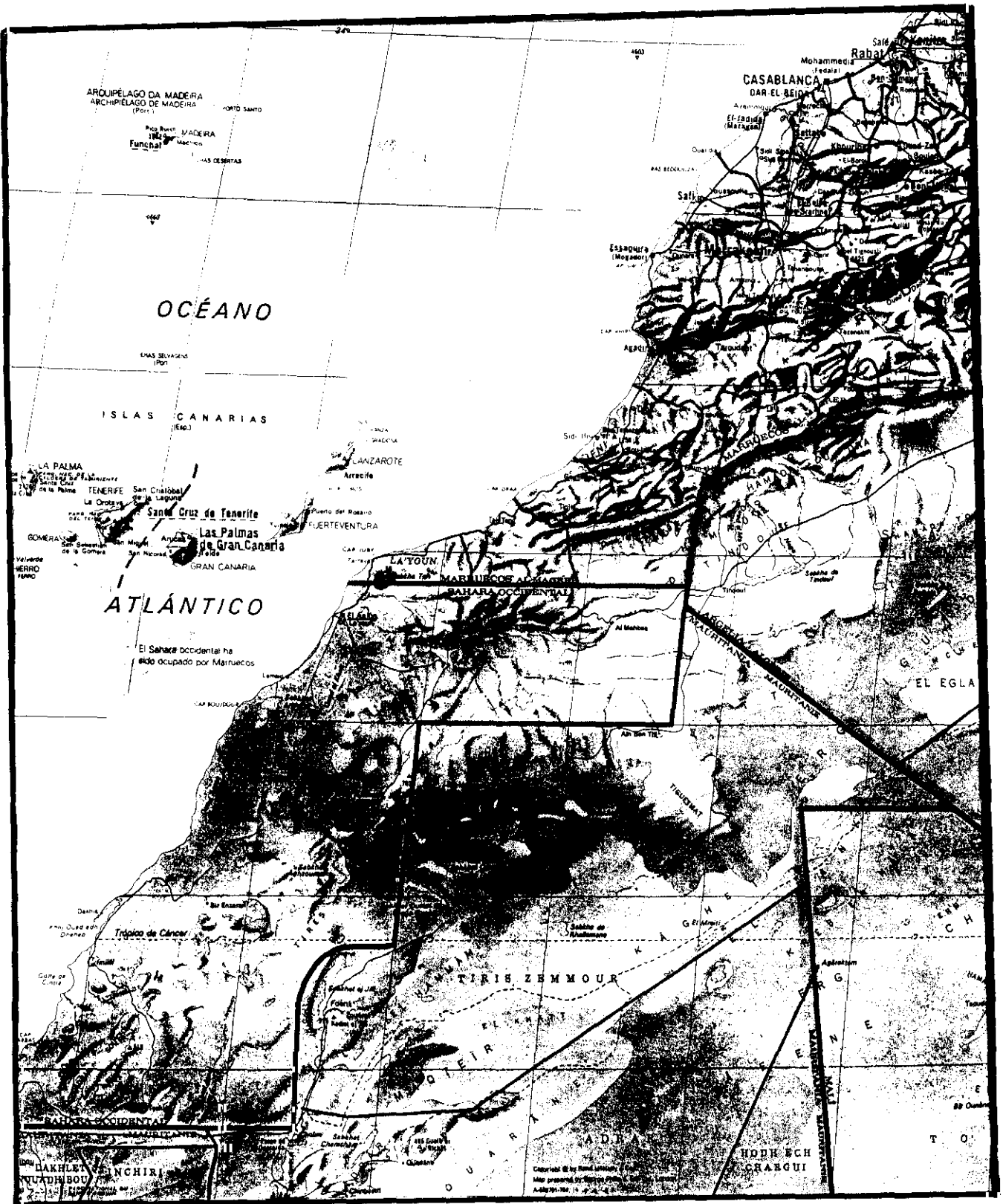
MAPA 19: TEMPLO DE PREAH VIHEAR
 (Camboya/Tailandia), sentencia de 15 junio 1962.
 (A.F.D.I., 1962, p.218)



MAPA 20: *DELIMITACION FRONTERIZA EN EL RIO ENCUENTROS*
(Argentina/Chile), laudo de 9 diciembre 1966.
(R.G.D.I.P., 1967, p.257)

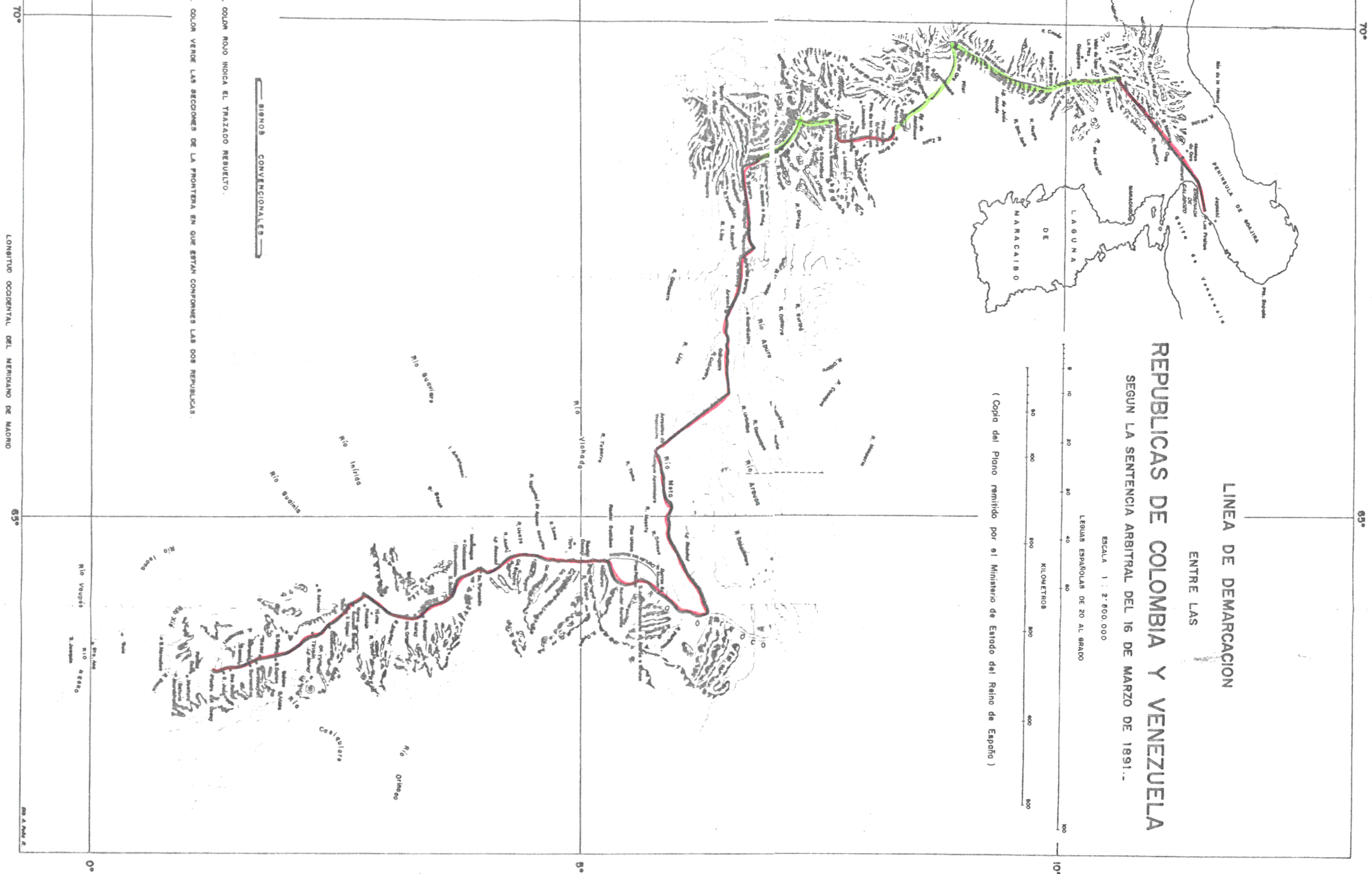




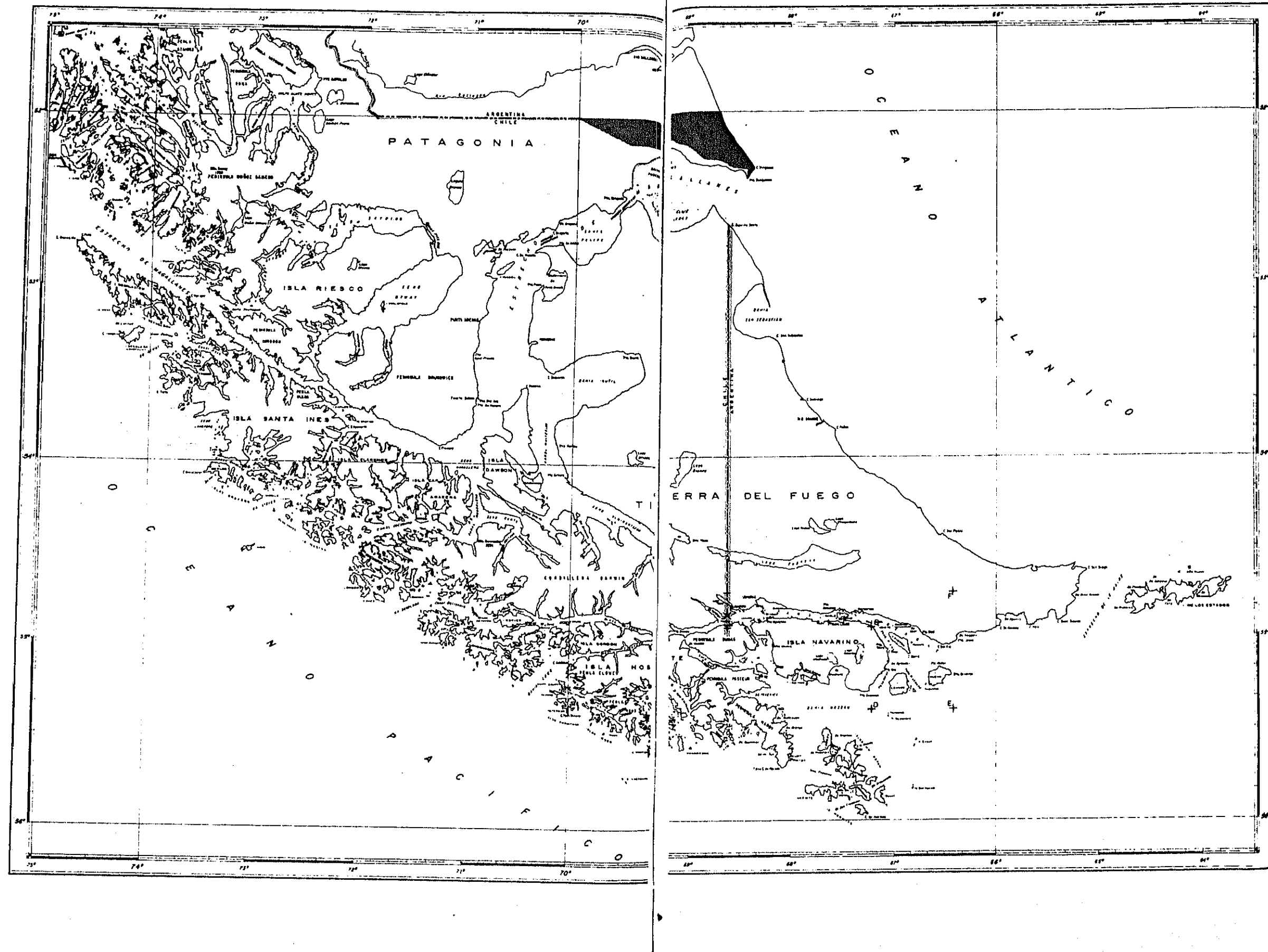


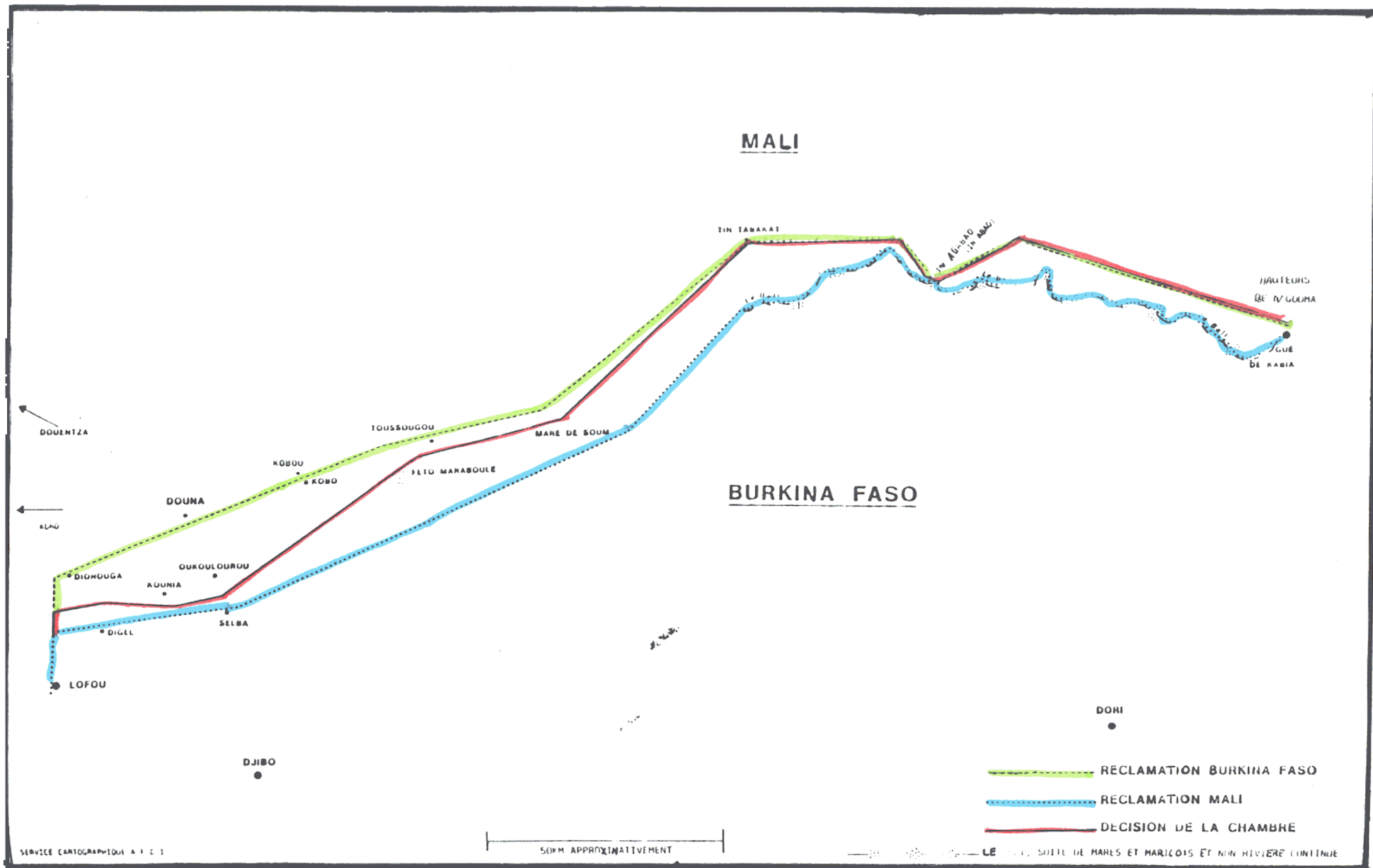
EL COLOR ROJO INDICA EL TIAZADO RESUELTO

EL COLOR VERDE LAS SECCIONES DE LA FRONTERA EN QUE ESTAN CONFORMES LAS DOS REPUBLICAS

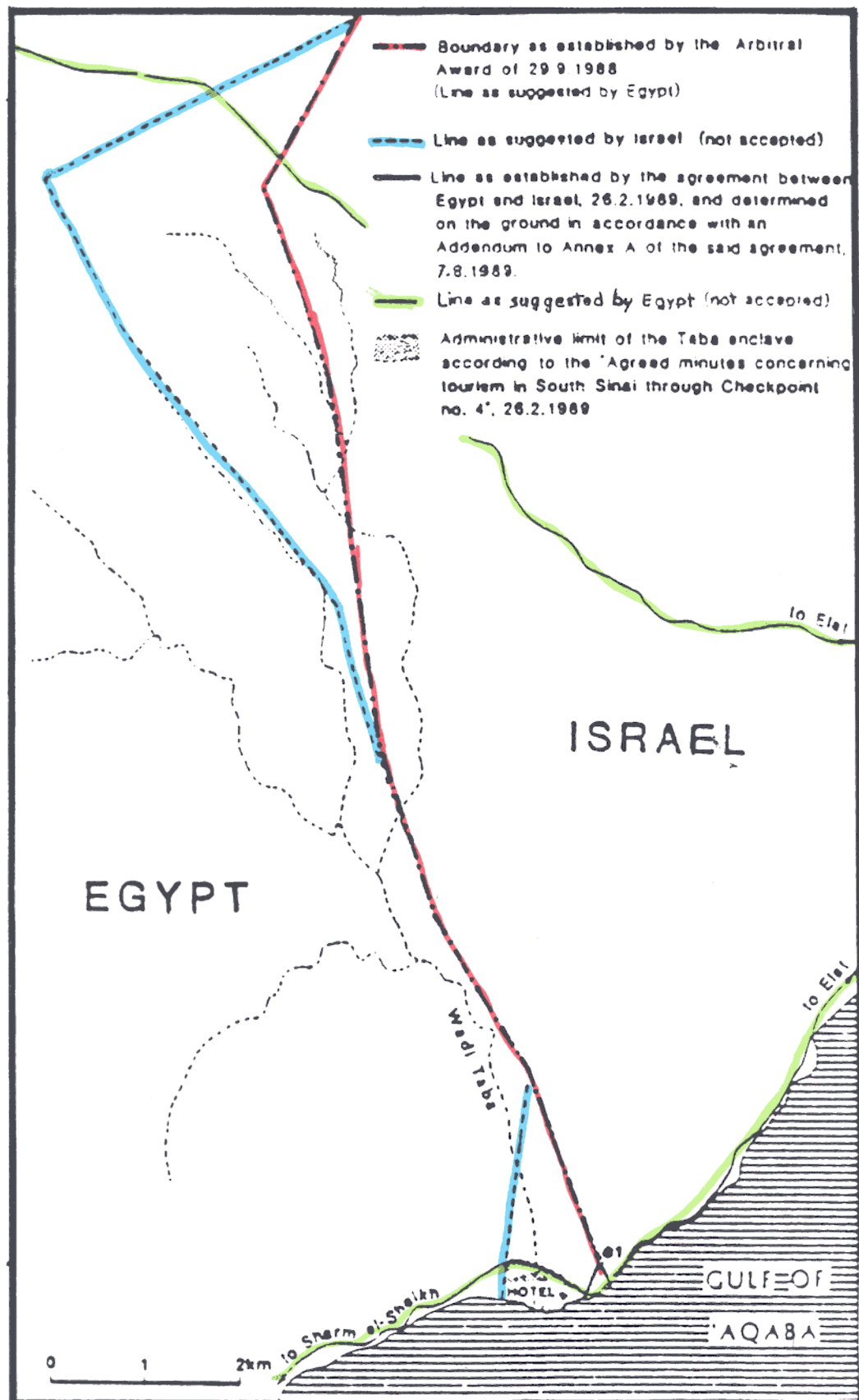


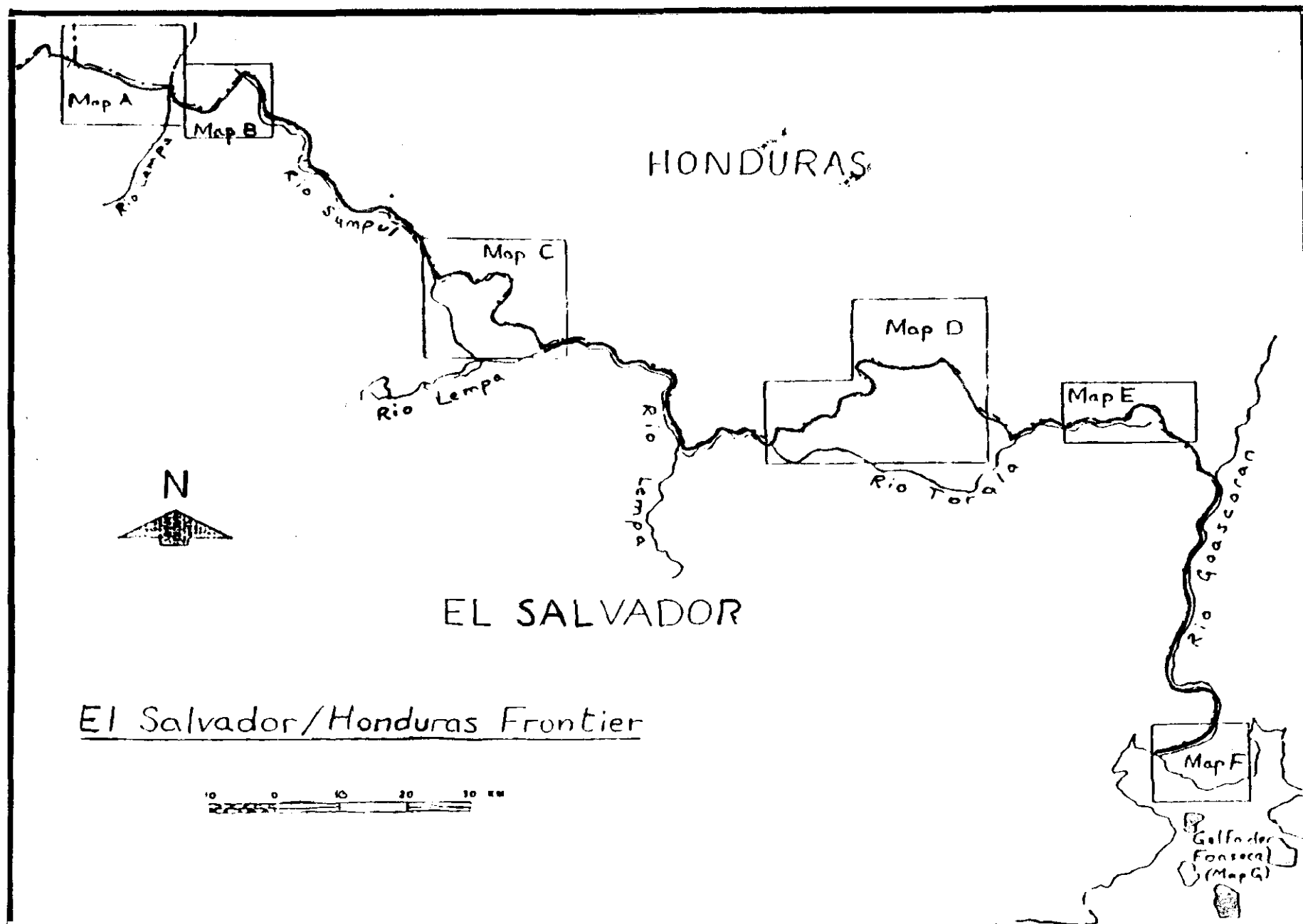
B





MAPA 26: FRONTERA EN EL AREA DE TABA
 (Egipto/Israel), laudo de 29 septiembre 1988
 (G.Y.I.L., 1992, p.226)





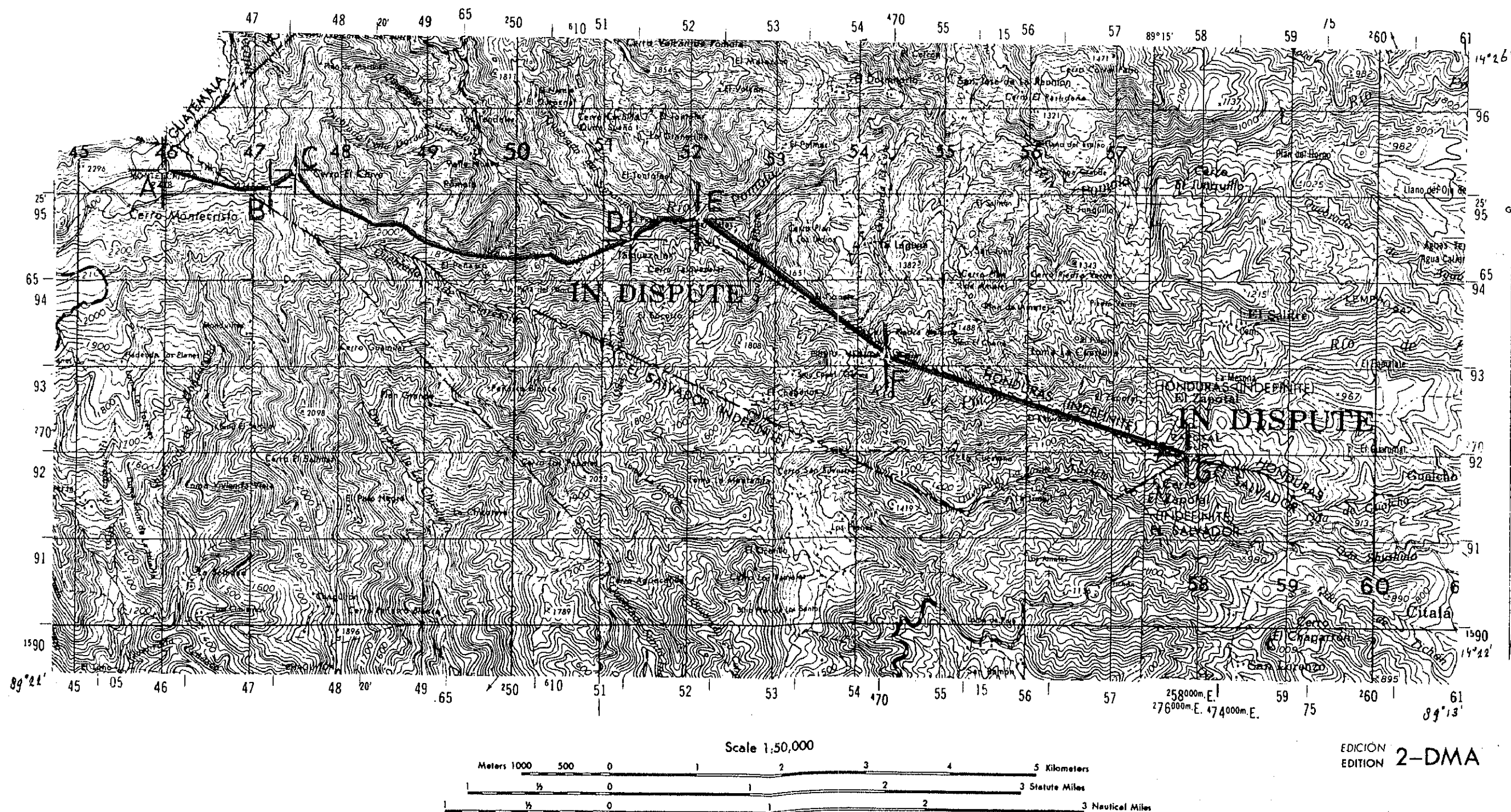
I. SECTOR DE TEPANGUISIR
(I.C.J. Reports, 1992, anexo cartográfico)

Le président de la Chambre,

President of the Chamber.

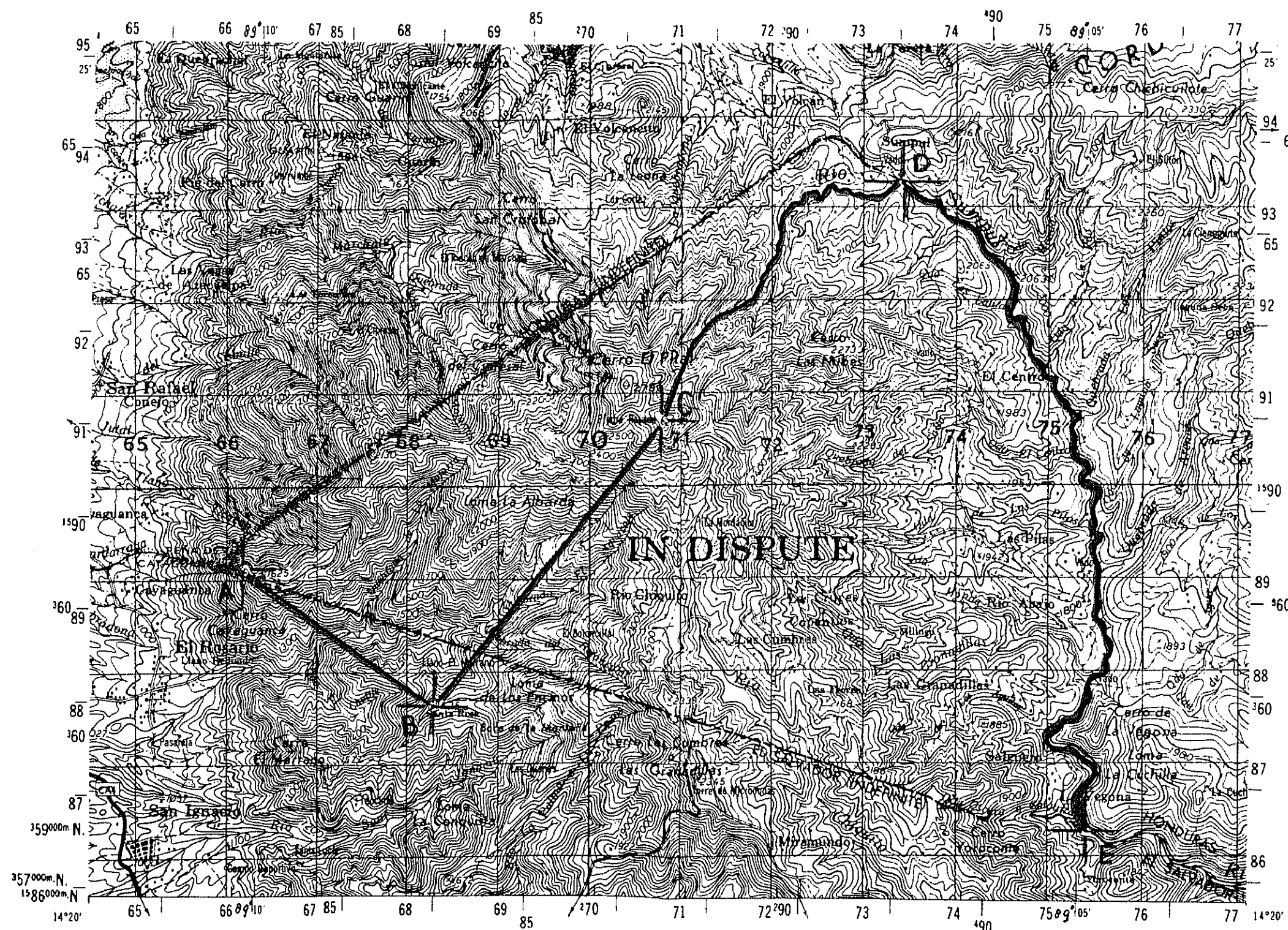
Le Greffier,

Registrar.



[Signature]
President of the Chamber.

Le Greffier,
[Signature]
Registrar.

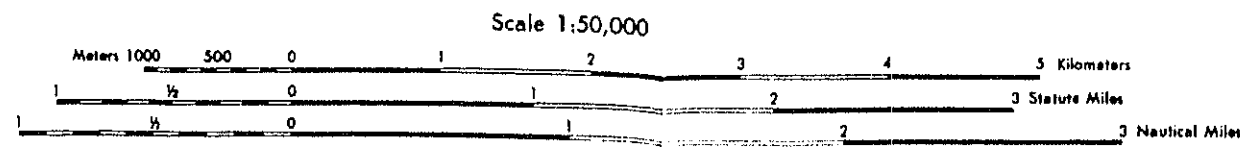


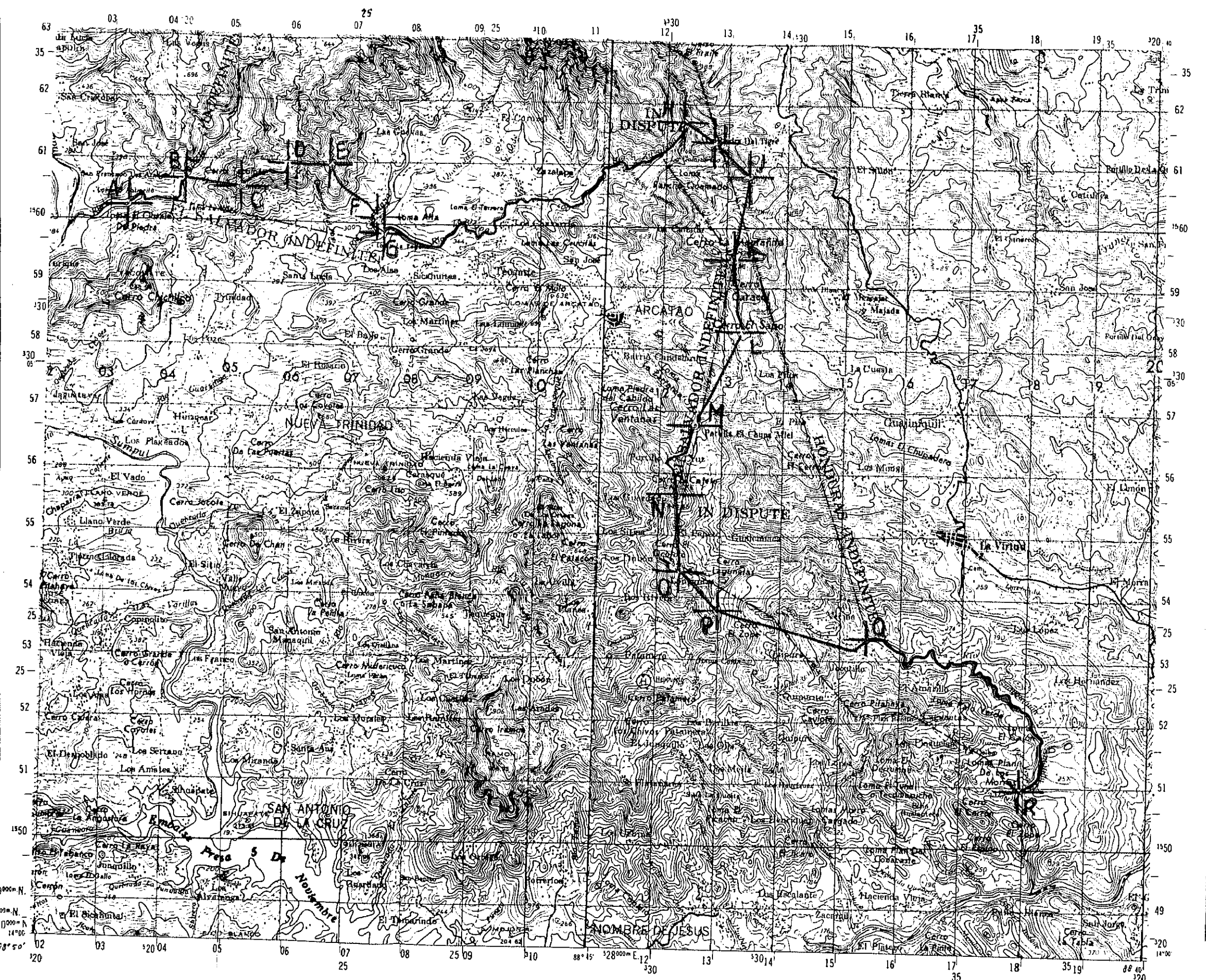
1980
G.M. ANGLE
5 1/2" (100 MILS)
ANGULO C.M. DE 1980
5 1/2" = 100 MILESIMAS.

PARA CONVERTIR UN
ACIMUT MAGNETICO A
UN ACIMUT DE CUADRICULA
SUMESE EL ANGULO C.M.

PARA CONVERTIR UN
ACIMUT DE CUADRICULA
A UN ACIMUT MAGNETICO
RESTESE EL ANGULO C.M.

EDITION 1-DMA SERIES E752 SHEET 2359 II Map II Series E752 Sheet 2359 II Edition 1-DMA





IV. SECTOR DE NAGUATERIQUE
(I.C.J. Reports, 1992, anexo cartográfico)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

*Affaire du Différend frontalier terrestre,
insulaire et maritime (El Salvador/Honduras)*

MAP / CARTE No. IV

Carte No. IV

illustrant le tracé (ligne rouge) de la frontière terrestre entre El Salvador et le Honduras, tel que défini par l'arrêt de la Chambre, dans le quatrième des "zones ou secteurs non décrits à l'article 16 du traité général de paix du 30 octobre 1980".

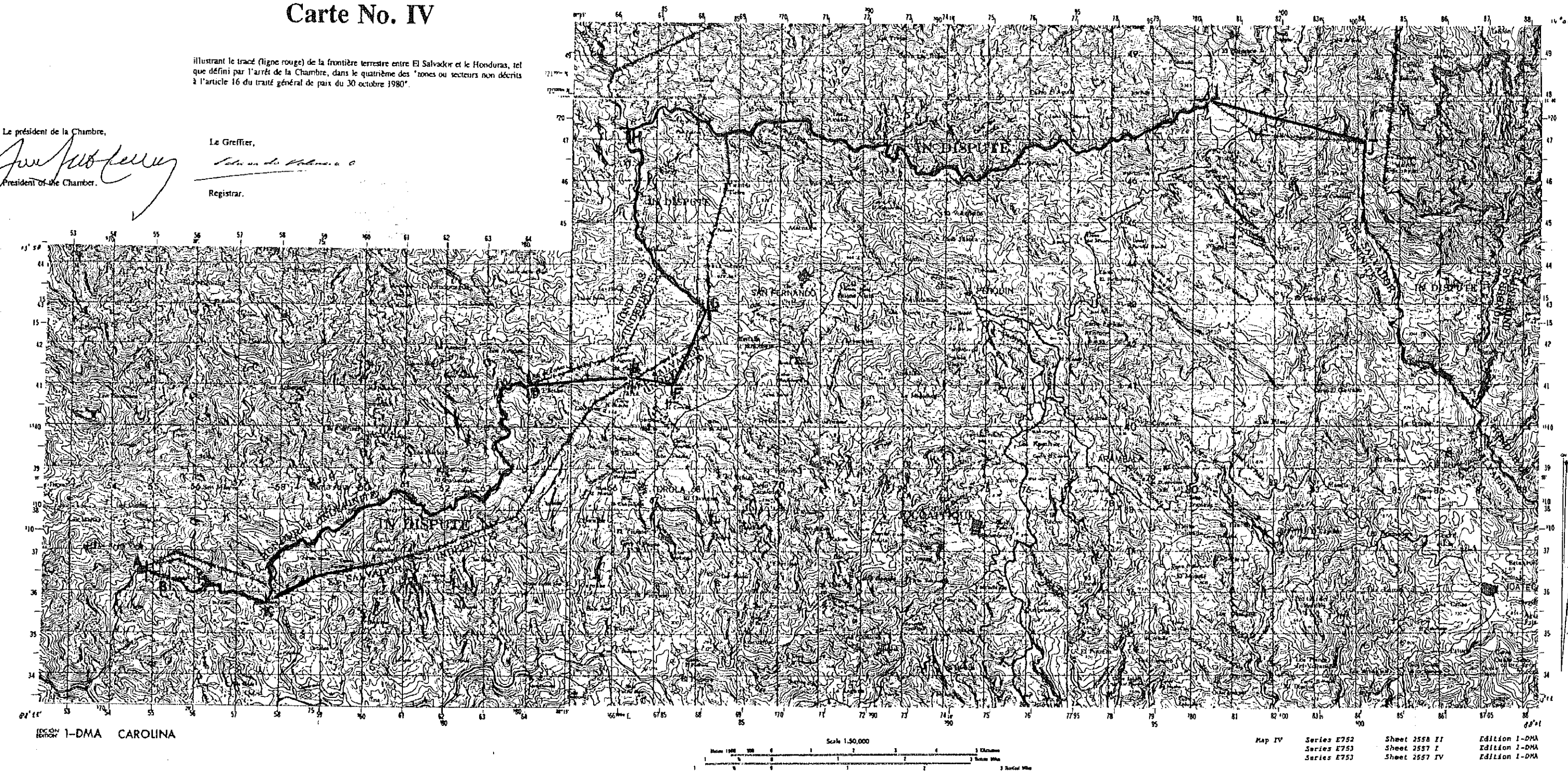
Le président de la Chambre,

President of the Chamber.

Le Greffier,

Registrar.

Registrar.



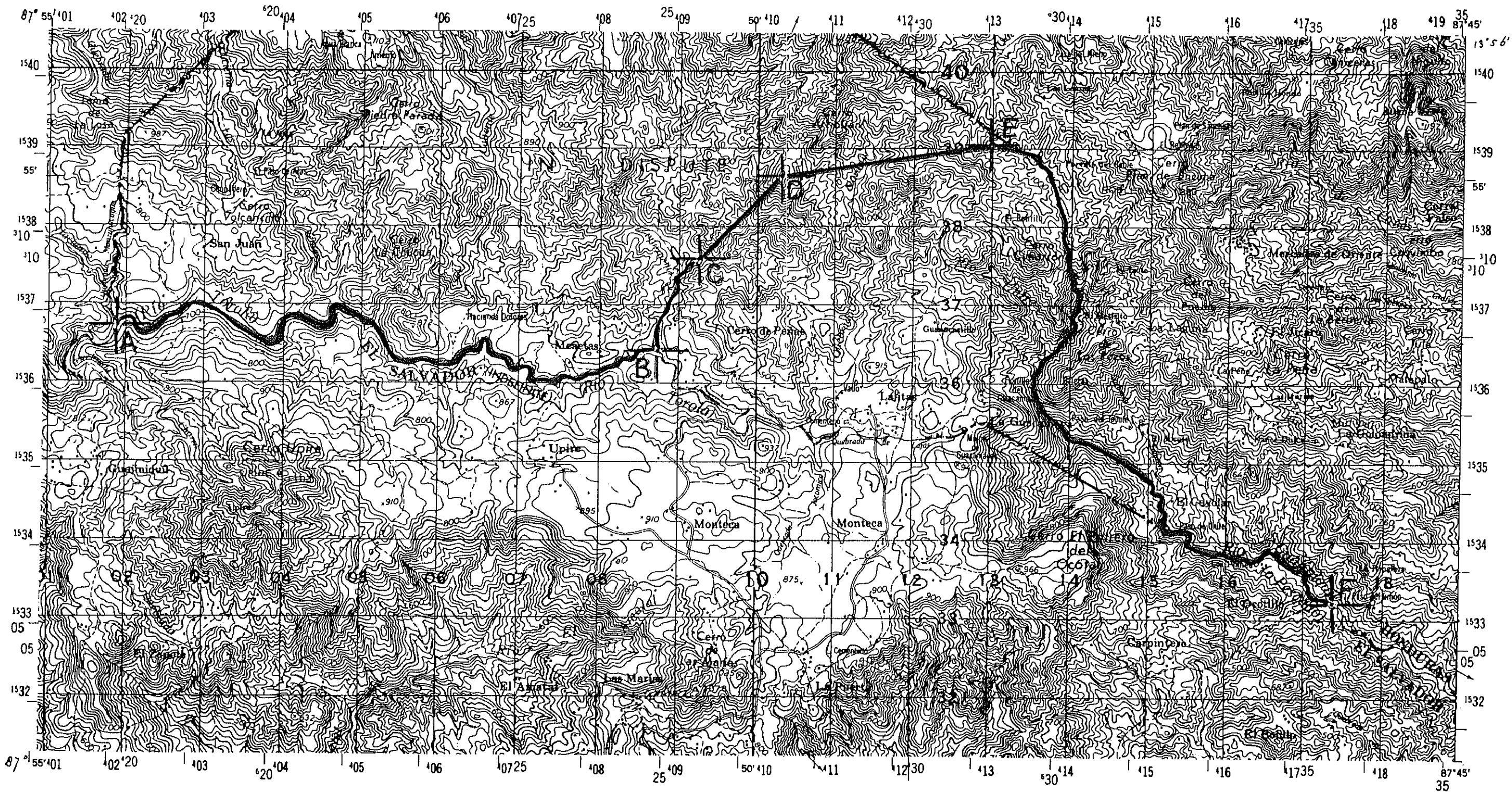
EDITION 1-DMA CAROLINA

Scale 1:50,000
1 Kilometre
1 Mile

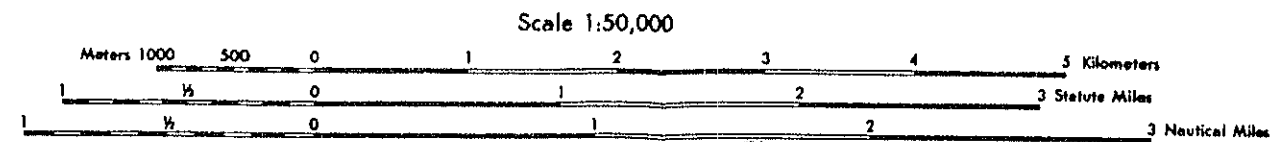
Map IV Series E752 Sheet 2558 II Edition 1-DMA
Series E753 Sheet 2557 I Edition 1-DMA
Series E754 Sheet 2557 IV Edition 1-DMA

President of the Chamber

Registrar.



EDITION 1-DMA
EDICIÓN



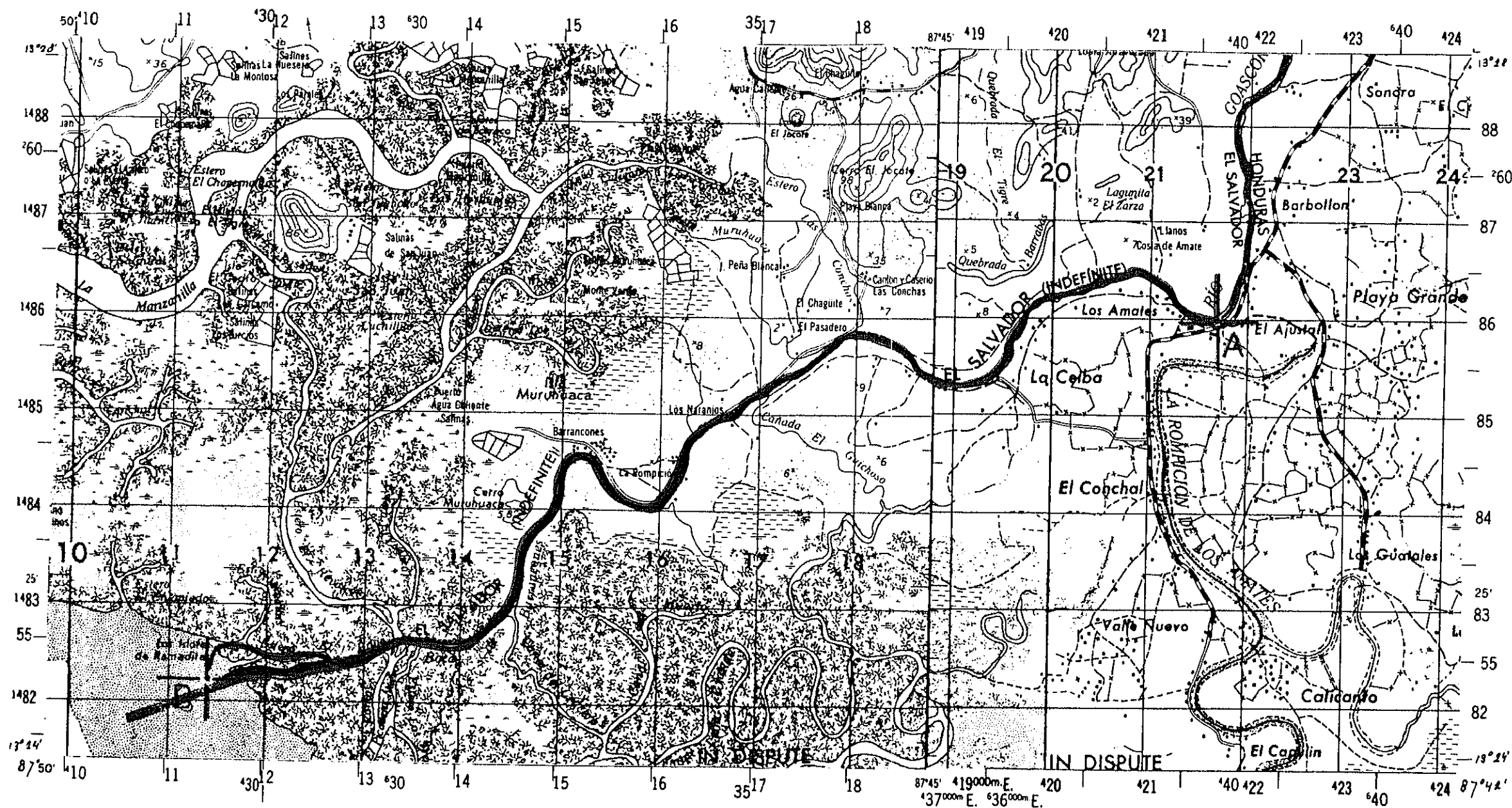
Le président de la Chambre,

Jun Filo Leary
President of the Chamber.

Le Greffier,

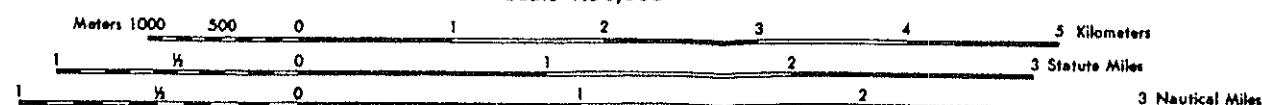
Edoardo Valencia O

Registrar.



EDICIÓN
EDITION 2-DMA

Scale 1:50,000

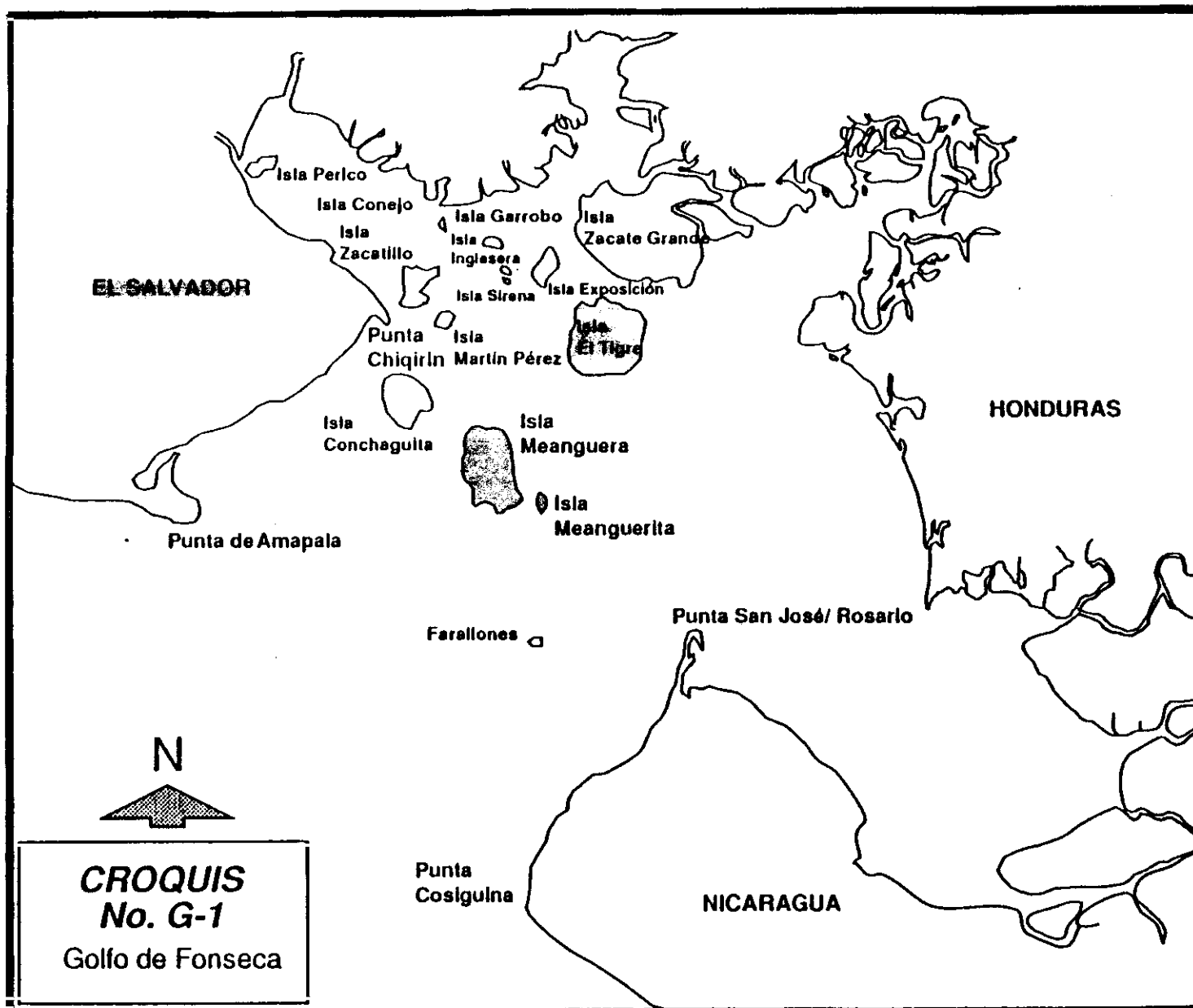


Map VI

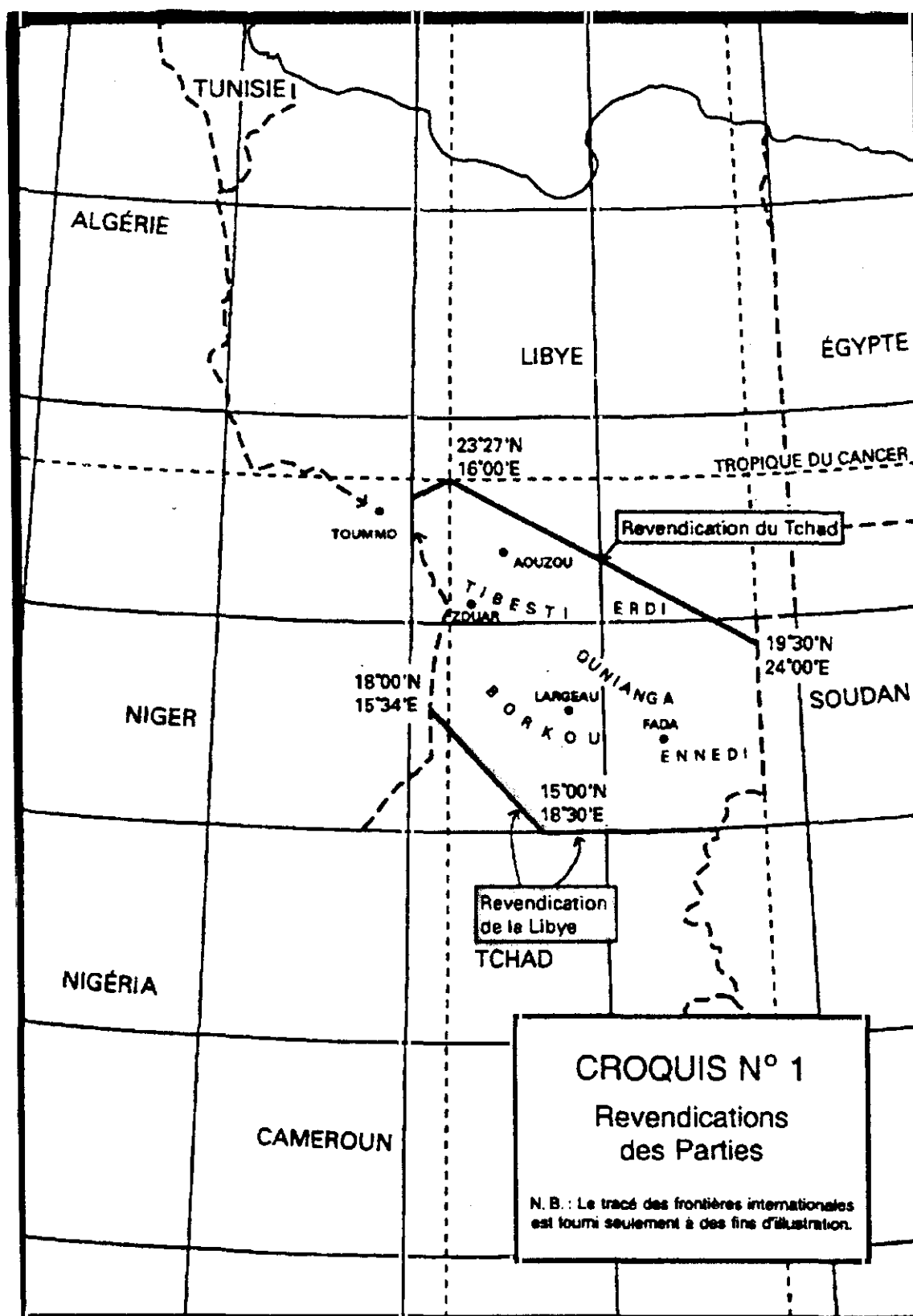
Series E752
Series E753

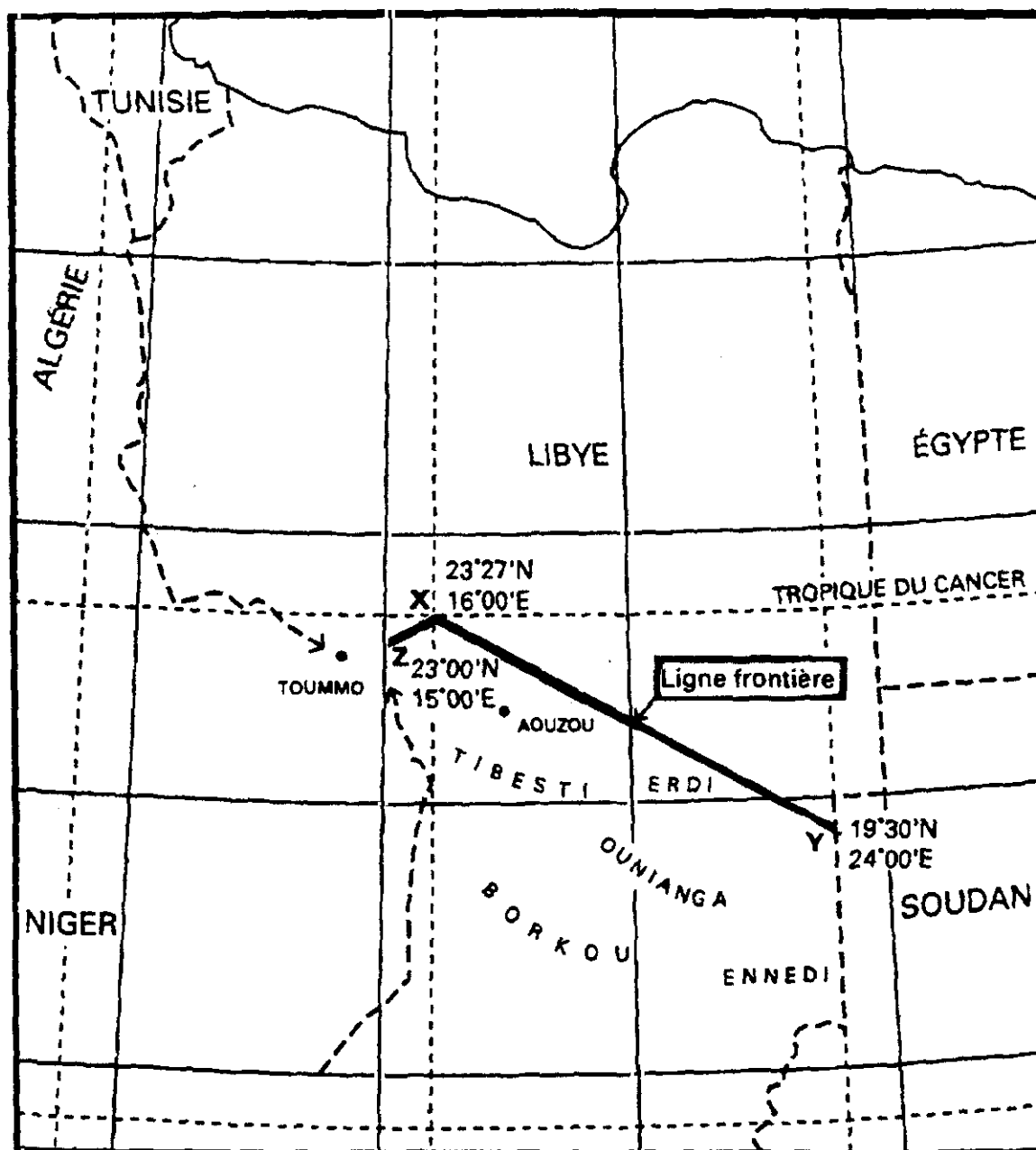
Sheet 2656 II
Sheet 2656 III

Edition 2-DMA
Edition 2-DMA



MAPA 28: FRONTERA ENTRE LIBIA Y CHAD. Reivindicaciones de las Partes.
(I.C.J. Reports, 1994, p.19)



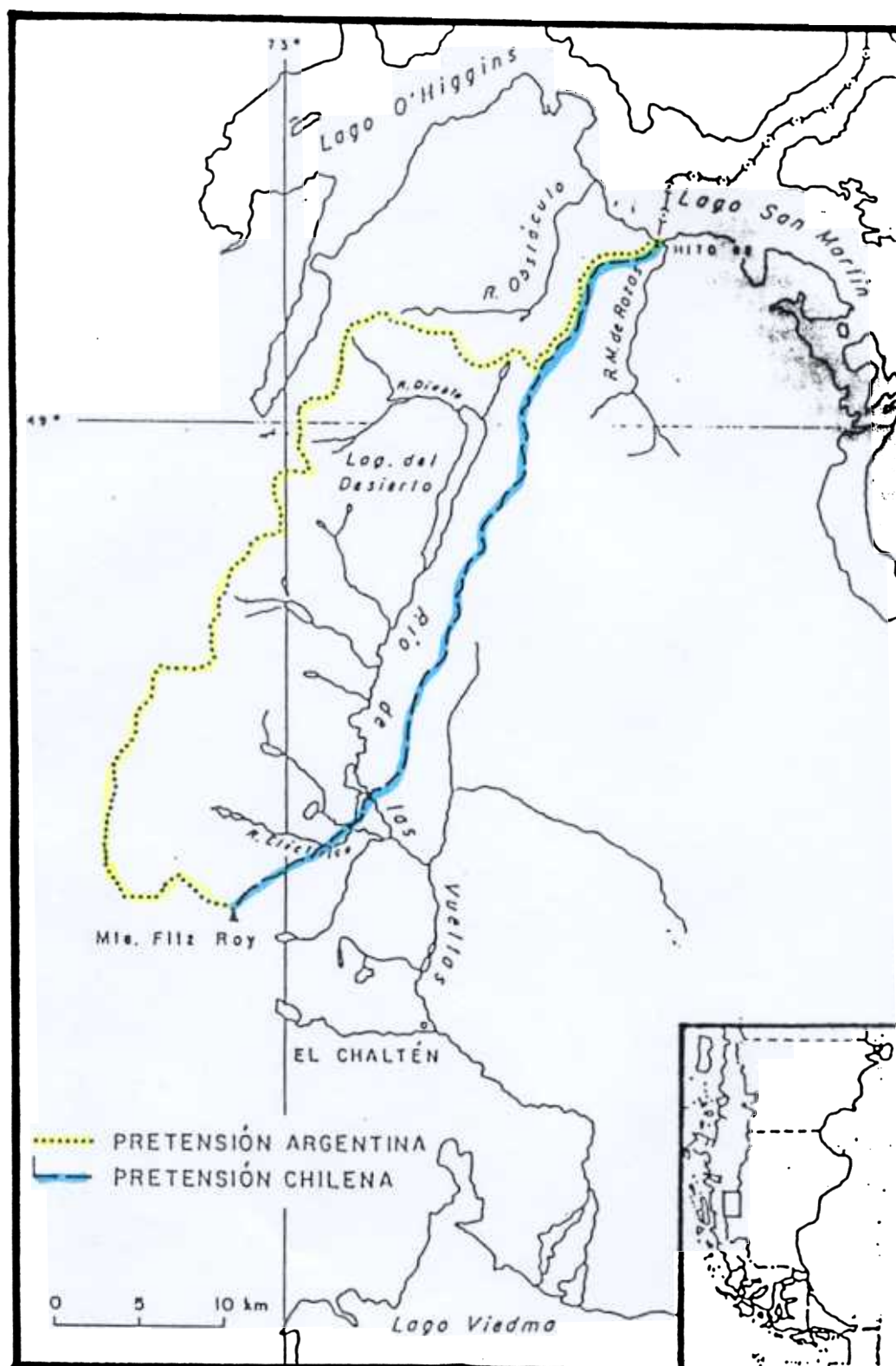


CROQUIS N° 4

Ligne frontière
déterminée par la Cour
dans son arrêt

N.B.: Le tracé en pointillé des frontières
internationales est fourni seulement
à des fins d'illustration.

- Pretensiones de las Partes



- Línea fronteriza decidida por el Laudo de 1994

